



Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
POSGRADO EN CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS**

**Configuración regional y lucha social:
Caminar y conversar con la gente del Magdalena Medio
y el Suroccidente colombianos**

CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA

Tesis de Doctorado en Ciencias Antropológicas

Director: Dr. Luis Bernanrdo Reygadas Robles Gíl

Asesores: Dra. Margarita Zárate Vidal

Dr. Ernesto Montenegro Pérez

México, D.F.

Julio, 2015



Aurita, esta semana he recorrido las calles de México D.F. y visitado las casas y los edificios a los que hubiéramos ido juntos, en el añorado viaje a la disertación de la tesis doctoral. Bueno la verdad, las recorrí contigo sintiendo con la imaginación tus palabras. Cuántas historias del Túquerres de tu infancia y juventud. Las tapias recorridas cual laberinto entre casa y casa con Luciano, Humberto y Luis Eduardo, la presencia de los Mora, de los Osejo, de Rosendo y Virgilio, los cariños de Efrén, Hernán, la Inesita y Marco Tulio. Luego siguiendo murales, nos iríamos de paseo entre los trigales, los cebadales y los viejos caminos, y en algún punto nos encontraríamos en las Cuatro Esquinas bordeando el camino al guaico del Cid: -“Será mijo que sí llega?, ¿será capaz?”- ... y caminando iniciaría nuestra charla sobre los paisajes, sobre el maíz, sobre el frijol y su precio, sobre el agua de la quebrada, sobre las yuntas de bueyes, sobre el mundo en donde te hiciste campesina justo cuando yo crecía a tu lado. Y esa vida campesina “ilustrada” es la traza de nuestras conversiones y caminatas, ahora y siempre. Entonces Aurita estas páginas están dedicadas a ti como parte de ese camino, que se inició con aquella pregunta... Vamos llegando, la gente lo ha sido, su lucha es vida.

... Mi Martica este texto es testimonio de nuestros caminares amorosos, sin ellos, no existiría.

A mi padre Luis Benavides, presencia campesina y trabajadora en mi vida.

A mis hermanas Lucy, Victoria y Doris, y a mi hermanos Luis Eduardo y Jaime, con quienes sigo creciendo.

A Alfonso Martínez, mi paisano, su inteligencia y beligerancia, por la comuna universitaria siempre presente.

A Edgar Quiroga, “Cuco” quien me enseñó los caminos, los ríos y las ciénagas del Magdalena Medio en cuatro años de recorridos entre esperanzas, luchas, marchas.

A mi Emiliano, cuya vitalidad me asombra cada amanecer.

Agradecimientos

A los amigos y amigas del Suroccidente y del Magdalena Medio, por las jornadas compartidas, por las movilizaciones vividas, por las conversadas, a esa minga que nos reunió a unos y a otros, todos mis compromisos.

Esta tesis no estaría en este punto sin la paciencia, afectividad, bondad y conversas con mi director Luis Reygadas. Sin la preocupación, la diligencia y la calurosa comunicación de Soco, sin la consecuencia y existencia de una universidad pública como la UAM. Todos los agradecimientos y reconocimientos.

A Alhena quien ayudó a darle punto final y asumir las intensidades y las paradojas que suscita la antropología.

A Pacho, Dianita y Pipe por su apoyo y solidaridad.

A mis amigos y amigas desde el sur que nos asiste, la fuerza de vida que nos hace posible y la permanente búsqueda de lo común, siguiendo las trazas de la riqueza de la diversidad. Cada uno, cada una en mi corazón, fueron impulsores, propiciadores, ejemplos, apoyos, hermanos, hermanas. Que las luchas sigan siendo rumbo y traza de vitalidades compartidas.

A la banda mexicana (Mary, Jorge, Mateo, Iván, Héctor, Jonathan, Jair en su versión mariachi loco...) con quienes compartimos la amistad del viejo Oswaldo, soñamos en las montañas de San Isidro, y con quienes seguimos aprendiendo la relación de la ética y la lucha.

Tabla de Contenido

Introducción	8
I. Trazas y recorridos para problematizar la lucha y la configuración regional	10
II. Conversaciones con el pensamiento social colombiano	13
III. Preámbulo para pensar la nación en ciernes y la región imaginada	18
IV. Pensamiento propio, vida digna, región y lucha.	23
V. La lucha social y la movilización regional	26
VI. Organización de esta tesis	27
Capítulo 1 . Nación, luchas sociales y configuración regional: Planteamiento de un problema de investigación	29
1.1. Caminar y conversar: método y emergencias conceptuales	29
1.2. Aproximaciones a “lo regional”	32
1.2.1. La región como cuestión del desarrollo o lo regional como propósito	32
1.2.2. Entre lo nacional y lo regional: cultura y poder	38
1.3. De movilización social y lucha social.	49
1.3.1. Movimiento social y movimiento popular.	49
1.3.2. El movimiento social, repertorios, motivaciones: “el poder en movimiento”	55
1.3.3. Lucha social: los años 80 y 90 en Colombia	62
1.4. Región-vida: lugar, identidad cultural, acción política colectiva y movimiento social	68
1.4.1. De lugares e identidades: la región como práctica social	73
Capítulo 2. Prácticas y experiencias de vida de la gente: los pobladores del Sur de Bolívar y del Suroccidente colombiano	87
2.1. La gente del Sur de Bolívar: De colono, campesino y minero a “poblador”	92

2.1.1. Recorrer: entre ríos, trochas y carreteras	95
2.1.2. Trabajar: encontrar la veta, cultivar y pescar	100
2.1.3. Habitar: cuencas, minas, caseríos y campamentos	107
2.1.4. Organizar: es resistir, es moverse, es liderar, es “no dejarse”	111
2.1.5. Identificaciones: entre sabaneros, laderanos y ribereños	116
2.2. Las gentes del Sur Occidente	122
2.2.1. Habitar: entre fogones, shagras y fincas	124
2.2.2. Trabajar: “voltear la tierra”, minear, tejer y criar	130
2.2.3. Recorrer: caminos y trochas entre cercas y predios	142
2.2.4. Identificaciones: originarios y venideros, autoridades y comuneros	145
2.2.5. Organizar: la vida entre encuentros, mingas, reuniones y viajes	152
Capítulo 3. Magdalena Medio y Suroccidente colombiano: La configuración regional como escenario de disputa	163
3.1. El Sur de Bolívar: entre el Magdalena Medio y las vidas de sus pobladores	165
3.1.1. El Magdalena Medio y la ductilidad regional	165
3.1.2. El Sur de Bolívar	182
3.1.3. El Valle del Río Cimitarra	195
3.2. El Suroccidente : Entre departamentos, pueblos, resguardos y veredas	203
3.2.1. El Suroccidente andino y del sur: entre nudos y macizos	203
3.2.2. Al sur: la vida campesina, la explosión de la diversidad y los monocultivos	216
3.2.3. El norte del Cauca como límite regional: modelo de desarrollo regional y procesos de modernización en el siglo XX	224
Capítulo 4. Comunidades y organizaciones en lucha social por la configuración regional	241
4.1. El marco de la lucha	241
4.1.1. La vida campesina: movilización y los ordenes de propiedad y ordenamiento territorial.	243
4.1.2. Caracterización del problema agrario, de la economía, sus contextos y sus leyes.	249
4.1.3. Conflicto político – militar	259
4.1.4. Políticas multiculturales y derechos étnicos	261
4.2. “Pobladores” construyendo “comunidades”, “comunidades” construyendo región	264
4.2.1. La comunidad como lugar social	264
4.2.2. Los pobladores	268
4.3. Las organizaciones	272

4.3.1. Federación Agrominera del Sur de Bolívar –FEDEAGROMISBOL	272
4.3.2. La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra ACVC	276
4.3.3. Campesinos: familias campesinas, maciceños y pueblos	278
4.3.4. Procesos organizativos de mujeres en el Suroccidente	283
4.3.5. Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA	287
4.3.6. Pueblos Misak y Pastos	292
4.3.7. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC	296
4.3.8. Procesos Organizativos en el norte del Cauca	300
4.4. Organizaciones y procesos campesinos nacionales	301
 Capítulo 5: Tiempos, espacios y espesores de la lucha social	 306
5.1. Lucha social y vitalidad local. Las marchas de 1985 a 1994	310
5.2. Las luchas sociales y la emergencia de lo regional 1994-1998	315
5.3. Defender la vida: de sujeto de derechos a sujeto de poder	325
5.4. Defender la vida: No estamos solos, 1999-2005	338
5.5. Sujetos campesinos, vida campesina, derechos humanos e interculturalidad: Propuestas regionales y articulaciones sociales.	351
5.6. De la Minga Social y Comunitaria: en busca de una articulación nacional para las luchas	365
Conclusiones. Construcción de nación: luchas y vitalidades regionales	372
 Bibliografía	 388
 Tabla de Mapas y Tabla de Cuadros	 407
 Album de fotos: Suroccidente y Magdalena Medio	 408

Introducción

Esta tesis analiza la configuración de dos procesos regionales, en la dinámica de la formación social Colombia, desde la perspectiva, el pensamiento y las prácticas sociales de la gente que se ha organizado y movilizado para defender y asumir su carácter de pobladores y constructores de región. Los procesos de configuración regional son el Suroccidente colombiano y el Magdalena Medio. El análisis apunta a enriquecer la problematización antropológica de dichos procesos y destacar una etnografía prolongada como método para su comprensión.

Los dos nombres con lo cuales se nomina las regiones estudiadas son reivindicados por los pobladores de diferentes maneras y en distintos escenarios -pero son nominaciones también utilizadas por instituciones del Estado, Ong`s, Iglesia y empresas privadas. Los pobladores los asumen como procedencia, como lugar de llegada, como espacio de encuentro, como lugar (es) de morada y trabajo, entre otros. En las experiencias de vida relatadas, sean por escrito o conversadas por la gente, esta forma de asumir, sentir y pensar lo regional, “es porque en la región y por la región se lucha”. En esta indagación, la configuración regional y la lucha se van haciendo y trabajando, “al decir las”, “al caminar las”.

El propósito de esta tesis es seguir sus rastros, experiencias, resultados y efectos, teniendo como contexto etnográfico una serie de episodios de movilización social que se han producido entre 1996 y 2014. Dicho contexto de movilización social es el que estimuló la elaboración de esta tesis. El que permitió encontrar las claves de configuración y lucha, la manera de caminar y conversar en los lugares cotidianos de la gente, asumir una comprensión de la economía política para el análisis de la configuración regional, entender las disputas y formas organizativas que se construyen desde la lucha. Si bien se presentan cada uno de estos episodios, en el último capítulo de este texto, serán sus ritmos y escenarios donde se trazan los contenidos de los capítulos precedentes.

Así las cosas en esta tesis se presentan: (1) los largos y difíciles caminos recorridos con los más diversos rostros y con las manos de quienes hacen del trabajo con la tierra y el agua su arte y vida. (2) Es una investigación que se propone desde una perspectiva antropológica

indagar en el conocimiento y las prácticas de quienes asumen la vida como un “estar y hacer en lucha” y desde su relación con la configuración regional en el contexto colombiano. (3) Me propongo a la manera de un ensayo articular caminos y conversaciones emprendidos desde hace aproximadamente veinte años con sujetos subalternos, con el propósito de hacer inteligibles los lazos que unen los dos conceptos que titulan este trabajo: la configuración regional y la lucha social.

Por una parte, la configuración regional alude a las tramas que, como “heterogeneidades históricamente estructuradas” –parafraseando a Quijano (2000), toman forma y contorno en una suerte de dialéctica permanente para fijarse y tornarse flexibles, desde la perspectiva de quienes han identificado lo regional como una noción que les permite situarse espacialmente desde la articulación de dimensiones territoriales, culturales, productivas y políticas. Por otro lado, la lucha social como vitalidad permanente que permite a la gente dar la cara a los intereses, necesidades y deseos que se ciñen y proponen sobre y desde sus vidas, relacionando espacios políticos, herramientas culturales, defensas territoriales, y labores económicas. Y en esta intersección determinante, los pobladores (desde sus realidades subalternas) tornándose sujetos y vociferando de muchas maneras que “ninguna decisión sobre nosotros sin nosotros” se constituyen como tales.

Tanto la perspectiva antropológica que busca producir conocimiento compartiendo la vida, las experiencias y las prácticas sociales de la gente en movilización y el método etnográfico que asumo, los denomino “caminar y conversar”. Esta última denominación busca definir un campo de indagación antropológica que permite encontrar una trama para entender las relaciones culturales en el tejido de otras dimensiones sociales. Tal entramado complejo requiere introducir algunos elementos de partida, para seguir con el recorrido que se propone en distintos tiempos y con diversos ritmos y tonos.

I. Trazas y recorridos para problematizar la lucha y la configuración regional

Este trabajo tiene tres tiempos. El primero es la experiencia de lucha y movilización caminada entre 1996 y 2002 con la dinámica de movilización en el Sur Occidente y el Magdalena Medio, cuando la potencia de las movilizaciones regionales cobró todo su significado. En ellas tuve la posibilidad de participar activamente, bien como parte de los procesos organizativos, bien como parte de dinámicas específicas de movilización, o como miembro de los equipos técnicos de apoyo para la elaboración de documentos, planes y textos coyunturales. Durante estos años, lo regional se fue dando como una dinámica misma dentro de los procesos de lucha; las regiones aparecían como especializaciones y espesores de “el estar dándose” forma y contenido a las contradicciones establecidas desde la vida de los pobladores, comunidades y pueblos con los poderes establecidos, las formas de distribución de la riqueza producida, las exclusiones culturales y las formas de asumir en disputa el territorio.

Aquí cobró importancia la necesidad de dar cuenta de una experiencia de lucha que para entonces se entendía y se sentía en vilo, por el ataque tanto de fuerzas paramilitares, como de la imposición económica, el despojo territorial y el desprecio como sujetos. Era necesario dejar huella, hacer testimonio de lo vivido, volverlo parte de la experiencia para ser retoñado cuando las cosas cambiaran, sembrarlo “bien enterradito”, para que cuando fuera tiempo de germinar las raíces no se olvidaran, los trabajos y esfuerzos de hombres y mujeres hechos líderes a fuerza de lucha pudieran quedar, ya no en la memoria, sino en la insistencia de lucha entendida como horizonte.

El segundo momento tiene que ver con los años en resistencia, en trashumancias, en denuncias, un momento de espera peleando y recordando a los amigos y amigas asesinados o despojados. Personalmente, es el momento de la necesidad, no tan voluntaria, de viajar fuera de Colombia. Durante ese tiempo escribí un primer texto reflexivo, intentando dar cuenta de la relación entre movilización social y configuración regional (Benavides, 2006). Fue la posibilidad de problematizar lo vivido y de conversarlo con los líderes, buscando formas, participando en tribunales, rebuscando contactos, entrevistándonos en escenarios nacionales como el Congreso Agrario de 2003 o en la Cumbre Social de 2004, o bien en el Parlamento Indígena y Popular celebrado en 2007. Una época para conversar sobre las

experiencias de configuración regional en disputa y su relación con la “cuestión nacional” tanto como proceso histórico asumido por el Estado como por las movilizaciones de diversos sectores populares.

El tercer momento, entre 2008 y 2010 y sus prolongaciones hasta 2014, tiene que ver con la consolidación de una dinámica nacional de articulación de la movilización regional, conocida como la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. Allí se encontraron procesos y líderes de distintas regiones. En la Minga he tenido la oportunidad de asistir a la que sería la clave de muchas indagaciones y propuestas: el encuentro entre colonos, mineros, pescadores del Magdalena Medio y los campesinos, sean indígenas, afro o de comunidades veredales campesinas del Sur Occidente colombiano. Fue un encuentro multiplicador, porque si bien las experiencias eran diversas, tanto en términos locales como intraregionales, así como entre las dos regiones, se dibujaba en el escenario una propuesta de país que permitiría no sólo resistir, sino construir autonomía, poder social y popular, con perspectiva y agenda nacional. Para ese momento la experiencia de movilización y configuración regional cobraba nuevos sentidos y posibilidades. Todo indicaba que había llegado el momento de germinar y de replantear preguntas para que luchas, regiones, gentes, sujetos plurales e interétnicos y ordenamientos territoriales, cobraran un vigor renovado.

Hoy, cuando estoy terminando este texto, el proceso de paz con las FARC y sus posibilidades con el ELN, parecen reclamar un nuevo escenario de participación y construcción social, quizá por ello los rumbos iniciados en esas épocas y travesías nos permiten también encontrar la forma de poner un punto final a un trabajo que sabemos que, paradójicamente, continuará.

En el recorrido, se van delineando los tres temas-problemáticas que constituyen esta tesis, teniendo como contexto y pretexto la cuestión nacional, en tanto posibilidad de ser sujeto de formación y liberación. De tal suerte, estos temas-problemáticas también se presentan como elaboración y quehacer metodológico. Vuelvo a nombrarlos para mayor claridad: el primero es la configuración regional y el segundo es la lucha social. La pregunta implícita que recorre el escrito los entrelaza, para abordar ¿cuál ha sido y qué efectos produce la relación que existe entre los dos? El tercer tema indaga por la gente y su emergencia como

sujetos sociales, para lo cual se plantean dos núcleos de preguntas: (a) las relacionadas con la emergencia de un sujeto que, desde su pluralidad étnica, local y regional, puede ser comprendido como campesino, a partir de sus formas de “hacer” y de “estar” ; y (b) la condición y la posición en lucha, que los convierte en sujetos políticos en tanto se afirman como constructores sociales de región desde su pluralidad, y desde allí mismo se asumen en conflicto, desde sus particularidades y posibilidades. La relación entre estos temas-problemáticas lleva a cuestionarse, nuevamente por la cuestión nacional en clave de ordenamiento territorial y “propuestas de nación”.

Los tres tiempos mencionados y los tres temas-problemáticas presentadas dan a este trabajo ritmos y formas particulares. Mi llegada a los procesos de lucha no partió de un *a priori* identificador, más bien fueron las prácticas sociales las que develaron las potencias sociales que estaban en juego. Así existen análisis de datos etnográficos, históricos, estadísticos o de diversas fuentes primarias y secundarias, que se trenzan con afirmaciones de “deber ser” que son las expresiones de dicha potencia. De allí que la reflexión sobre las identidades es especular y espectral, trama de posiciones y situaciones: región/nación; lo popular/lo elitista; pueblo/etnia/clase; profesión/trabajo/ actividad/oficio. Algunas se resaltan en determinados momentos y se refuerzan en determinadas trayectorias vitales. Estas identidades se presentan como prácticas e imágenes entendidas como formas de “estar” y “hacer”. La búsqueda se estableció más en términos de los nombres con los cuales se va reconociendo la gente en esa relación entre lucha y región. Lo mismo frente a “lo regional” como proceso de configuración. Para algunos, el Magdalena Medio, para otros el Sur de Bolívar; para unos el Suroccidente, para otros el Macizo; para unos Sur de Bolívar, Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, para otros Cauca y Nariño. Esta condición permite ir y venir entre lugares y tiempos, entre reuniones, marchas, recorridos, cartografías sociales, sin impostar regularidades ni presumir secuencias completas.

Finalmente este ensayo propone dos perspectivas elaboradas en la vitalidad compartida de las movilizaciones sociales: (1) existen propuestas y procesos de configuración regional populares que se disputan ordenamientos territoriales, regulaciones productivas, limitaciones políticas, dominios culturales, con los que se despliegan desde el régimen político colombiano y los modelos de acumulación capitalista, una disputa que se da en

múltiples campos y se presenta en diversas contradicciones. (2) Dichas propuestas y procesos son producto de capacidades y potencias producidas y aprendidas, trabajadas y pensadas en la lucha social, de allí que el “caminar y conversar” nos permite asumir una perspectiva antropológica que combina aproximaciones metodológicas, analíticas y políticas.

II. Conversaciones con el pensamiento social colombiano

A lo largo de los últimos cincuenta años, diversos trabajos intelectuales han logrado establecer reflexiones sobre las luchas sociales y sus contextos regionales y nacionales. A lo largo del capitulado se presenta un diálogo con sus búsquedas y preguntas, algunas veces de manera implícita, otras en conversación citada. Dicho transcurrir se convierte en fuente de inspiración de este trabajo, por la forma como se constituyeron problemáticas que marcaron época y que siguen vigentes.

Las preguntas de las generaciones de mediados del siglo XX parten de la problematización decimonónica del ¿quiénes somos?, cuestionada por la inquietante: ¿por qué no podemos ser? Tal exploración se debate en la detección de voluntades y estructuras, que han truncado unas historias y han hecho posibles otras más. La soberanía nacional, la composición de clases, la “violencia” y la definición de posibles rumbos de la transformación revolucionaria, son caminos de esta primera generación de pensadores. En tal entramado, el intelectual orgánico, se configura como parte actuante de la praxis social, al tiempo que alimenta una discusión entre vertientes organizativas y partidistas diversas.

El economista Antonio García (1912-1982) propone desde obras como *Las estructuras del atraso en América Latina* y *La dialéctica de la democracia*, una lectura de la teoría de la dependencia a partir de su reflexión sobre el problema agrario en la historia de Colombia y América Latina. Camilo Torres (1929-1966), sacerdote inspirador de la Teología de Liberación, señaló a la “clase popular” como sujeto emancipatorio y generó una reflexión novedosa sobre los procesos de formación social en América Latina. Creador del Frente Unido, una de las más importantes iniciativas de unidad política para confrontar a la

oligarquía, y cofundador en 1959 del primer departamento de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional de Colombia, muere, como guerrillero del ELN, en combate en 1966. Sus planteamientos sobre la “incapacidad” de la oligarquía para orientar un proyecto histórico en Colombia, serán también motivo de reflexión histórica para Fernando Guillén (1925-1975). En la prensa y en las aulas universitarias este historiador desarrolló su reflexión sobre la formación social y política colombiana en la larga duración. “El poder político en Colombia” es una referencia obligada para abordar el estudio de las élites. En “Raíz y futuro de la revolución”, Guillén advierte temprano el no futuro de la lucha armada en el país por la inexistencia de lucha de clases. Pero quizá sea “La regeneración, primer frente nacional. Un estudio de un caso” (1986), el que mejor articule su pensamiento en torno a la identificación del modelo de alianzas entre las élites colombianas, legitimado como “pacto nacional”, y perpetuado en ciclos de 60 años.

El siguiente momento histórico remite a una generación cuyas preguntas apuntan a una comprensión más exhaustiva de los sujetos de la formación social y a sus diversidades regionales, en diálogo con las capacidades desarrolladas por la movilización campesina, indígena y después, urbano-popular. Se disponen, frente al frenesí desarrollado por la diversidad de luchas con sus múltiples voces, experiencias y sensibilidades, a encontrar formas de abordar y crear “lo participativo” y “lo solidario” como acción epistémica.

Estas preguntas se recrean con los desarrollos de las luchas sociales, las expresiones de la diversidad, la movilización social, la afirmación de la autonomía como posibilidad. Con ellas se redescubren lenguajes, grafías, escenarios y formas heterogéneas de nombrar lo común y lo diverso. Se abre campo, en términos de Orlando Fals Borda, que alude a lo profundo de las identidades históricas y la búsqueda articuladora, autonomista pero convergente desde posibilidades renovadas de ordenamientos sociales y culturales con expresiones en la producción social, en el trabajo desalienado y vivo.

El trabajo que se introduce de muchas maneras podría inscribirse en el marco de los estudios regionales en Colombia, que no son novedad en el ámbito académico y que forman parte de este segundo momento. Desde los años treinta se realizaron trabajos que abrieron nuevas líneas de investigación, como: *Indios y blancos en la Guajira*, del geógrafo Ernesto Guhl (1963), *Geografía económica de Caldas*, del economista Antonio García (1978),

Campesinos de los Andes, del sociólogo Orlando Fals Borda (1961), o *Barrancabermeja*, realizado por Eugene Havens y Michelle Romieux (1966). Durante los años setenta los trabajos generales primaron sobre los trabajos regionales y locales, lo cual significó un quiebre sobre la continuidad de estos estudios. Pero hacia los años ochenta renace la preocupación por comprender el proceso de construcción nacional desde una mirada centrada en lo local y lo cívico, lo cual tuvo por consecuencia el desarrollo del concepto de región como un concepto histórico, político y cultural, como será abordado en el primer capítulo. En los años sesenta y setenta otro conjunto de investigadores provenientes de diversas disciplinas establecen una serie de denuncias y de propuestas analíticas entre las cuales quisiera enfatizar en tres de ellos. Víctor Daniel Bonilla (1933 -), ha sido referente del indianismo en Colombia. *Siervos de Dios y amos de indios* (1969) develó, por primera vez, la continuidad de la dominación ejercida por la Iglesia sobre los pueblos indígenas del país, específicamente el contubernio entre la empresa cauchera, el Estado colombiano y los capuchinos que arribaron al país en el siglo XIX. El Putumayo aparece allí como parte de una región que incluye también al vecino departamento de Nariño, cuya historia está marcada por una historia signada por la servidumbre auspiciada por la religión católica en la relación antes anotada. Bonilla en compañía de otros, dio vida al movimiento solidario con las luchas de los pueblos indígenas, que durante años trabajó en aportar contenidos a los derechos de los pueblos, descifrar su pensamiento profundo y encontrar potencialidades emancipatorias, que han sido invisibilizadas por el orden oligárquico y centralista colombiano; de dicha relación y cuestionamiento surge entre otros el movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente colombiano (AISO). En términos metodológicos, el cómo hacerlo será una preocupación central: los mapas parlantes y la cartografía social en tanto metodologías de recuperación/creación del pensamiento de la gente, transformaron las formas de generación de pensamiento social colombiano.

Un tercer momento está relacionado con el impacto del modelo neoliberal, el impacto de la guerra sucia como escalonamiento frenético de “las violencias” y la incidencia cada vez más profunda de la economía política del narcotráfico, así como las diversas formas de entender la globalización. Los cambios constitucionales de 1991 serán el contexto y telón sobre el cual se desarrollarán reflexiones en tal sentido. Con ellos se abre el escenario para problematizar el campo académico (experto) y en tal ejercicio, constituirlo, reinventando

sus diversas relaciones con las poblaciones. Esto implica críticas al capital, marca una ruta de incidencia de la política pública y de las diversidades que se expresan con distintos vigos. El antropólogo y uno de los mayores exponentes del “movimiento de la solidaridad”, Luis Guillermo Vasco, será decisivo. En sus obras logra establecer una forma de saber hacer etnografía en directa relación con las luchas de las comunidades y en coautoría con sus líderes y pensadores. *Los hijos del agua y del arcoiris* (1998), que reconstruye la historia propia del pueblo misak en conjunto con el importante pensador guambiano, taita Abelino Dagua y el educador taita Misael Aranda; una obra escrita en la lógica y el lenguaje del pueblo misak. Su trabajo le permitió abrir una discusión inédita en Colombia, sustentando que la condición indígena pasa por entender el problema “nacionalitario” que la caracteriza, dado que su definición como minorías frente a la sociedad nacional debe reconocer los proyectos de vida que interpelan la construcción nacional y la lucha de clases que se desarrolla en su interior.

Otros pensadores, como Darío Fajardo y Alfredo Molano, recorrerán las zonas rurales de Colombia, buscando al campesinado y explicaciones frente al conflicto armado. Darío Fajardo dedicará su obra a estudiar la formación del campesinado, en diversas regiones de Colombia. Las Zonas de Reserva Campesina, como figura de protección territorial, será alimentada con su trabajo, al que articulará una férrea defensa por la soberanía alimentaria, así como al cuestionamiento de la formación social colombiana, desde la perspectiva territorial rural y las configuraciones regionales que articula (Fajardo, 2002). Por su parte, Alfredo Molano se ha convertido en uno de los principales analistas y cronistas del mundo campesino, especialmente de su historia reciente marcada por los procesos paralelos de despojo, conflicto armado y colonización campesina. Ha sido uno de los pioneros en el uso sistemático de la historia oral como medio para destacar voces e historias usualmente excluidas, resaltando las experiencias de la gente en la construcción de subjetividades campesinas (Molano, 2009).

El novelista y ensayista tolimense William Ospina, quien en obras como *América mestiza* (Ospina, 2001) se ha preocupado por descifrar las aristas de la matriz cultural latinoamericana, también inspira reflexiones profundas sobre lo que somos. Como parte del mismo esfuerzo, se pregunta por las bases de la identidades a partir de dicha matriz

histórica que pone en cuestión los órdenes establecidos por las elites en los procesos de construcción nacional.

En los últimos años, encontramos algunas aproximaciones que parten de la producción de pensamiento social crítico sin fronteras, en redes, flujos, relaciones cambiantes, sin garantías, para inscribir un proyecto histórico que reconfigure sujetos políticos emancipatorios. Parten de una noción de la democracia representativa y participativa, para explorar una orgánica e integradora, y desde la reivindicación de la diversidad, se confronta la desigualdad.

Desde la historia, este replanteamiento metodológico llevó de manera análoga al reconocimiento de la microhistoria y de las historias cotidianas como alternativas para dar cuenta de relaciones entre seres humanos, entre éstos y su entorno, como “un procedimiento que toma lo particular como punto de partida y procede a identificar su significado a la luz de un contexto específico” (Levi, 1993, cap.5).

En todos estos momentos, lo regional aparece como parte estructurante de las reflexiones académicas. Se desdobra como noción, enfoque, metodología de análisis o método de planeación, y su problematización hace parte de un pensamiento interdisciplinar. Esto ya lo han señalado para América Latina, Sergio Boissier y José Luis Coraggio; la región ha sido definida por la planificación y el ordenamiento territorial con dos enfoques: uno que mira la región como objeto definido por los planificadores desde afuera como intervención de las instituciones públicas sobre el territorio; y otro, que se dirige a entrever a la región sujeto desde las dimensiones subjetivas; se trata de “la región vivida, deseada e imaginada de quienes residen en ella” (Uribe, 1988).

En la últimas dos décadas, junto al protagonismo desarrollado por procesos de movilización social que asumen sus reivindicaciones y propuestas como de carácter regional y que inscriben parte de su identidad como movimientos u organizaciones sociales, a determinadas regiones, se han venido proponiendo espacios de reflexión académica. En 1993 el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle realizó el V Coloquio Colombiano de Sociología con la temática: “Territorio, Regiones, Sociedades”. En esta ocasión, la reflexión acerca de los acelerados procesos de re-territorialización y

refundación de la sociedad, dieron lugar para pensar las nuevas realidades como múltiples, con la aparición de nuevos grupos sociales y nuevas demandas, así como de distinguibles transformaciones. En la actualidad, el Congreso de antropología que se celebrará en el mes de junio de 2015 en la ciudad de Santa Marta, tiene como tema la “Región y el Postconflicto”. Lo anterior como un esfuerzo desde la disciplina para incorporar desde lo regional, la discusión sobre la diversidad, que compromete a la antropología con los problemas de la nación. Entre uno y otro evento, se sitúan también las preocupaciones de esta tesis.

III. Preámbulo para pensar la nación en ciernes y la región imaginada

Los procesos nacionalitarios que se recrearon a partir de la invasión española se redefinen en el marco de la construcción del Estado colombiano, una vez lograda la independencia de la Nueva Granada con respecto a España y del colapso de la integración bolivariana que le sucedió. Como en la mayoría de los estados latinoamericanos, se postulan los patrones decimonónicos del liberalismo, transferidos por diversas versiones y filtros a partir de la influencia inglesa, francesa y estadounidense: un solo dios, una sola lengua, una sola cultura, la república y la democracia; todo al interior y entrelazado en un territorio definido por una serie de coordenadas geográficas para diferenciarse administrativa y políticamente de los otros estados, para el caso: Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y la Confederación Centroamericana.

Como acto fundante del estado-nación se establece el orden constitucional, en tanto garantía de su realización y legitimidad. La Constitución establece una configuración territorial definida por un orden político-administrativo y una forma de construcción de subjetividad que la recrea el ciudadano. Justamente, el trasegar de la historia colombiana se funda en la disputa de dos modelos de gobierno que buscan organizar de manera distinta los patrones de definición territorial: el uno apunta hacia la centralización y el otro al federalismo. Así mismo, se funda sobre la promoción de libertades civiles que son reguladas de manera autoritaria por medio de mecanismos de discriminación de ciertas

identidades colectivas, tanto del orden regional como étnico; que son el marco en el cual se realizan las formas de ciudadanía limitadas por diversas versiones emanadas de una filosofía del derecho que defiende el estatus social y las condiciones de renta y capital como marcadores definitorios de los derechos y obligaciones ciudadanas.

A la vez, esta carta magna transformada más de diez veces en la primera centuria republicana, buscará establecer las bases para un proyecto económico capitalista, anclado en el *continuum* “encomienda-hacienda” (Guillén, 2008). Para hacerlo tendrá que generar una serie de valores sociales y económicos: entre conflictos permanentes de los núcleos en el poder se irá haciendo de la propiedad privada una medida de “progreso”, en medio de los esfuerzos seculares por parcelar tierras de la Iglesia y tierras comunitarias; atraer la inversión extranjera para continuar con un proyecto de extracción de riquezas de tierras tropicales.

Un siglo de inestabilidad política marcado por las disputas entre los partidos políticos que se van formando entre divisiones y alianzas de clase, se sella con el triunfo de los “nacionalistas” y su proyecto de Regeneración, con la Constitución Política de 1886. En ella el modelo centralista se impone y con él, una forma de ordenamiento territorial que hace de departamentos y municipios las figuras político-administrativas más representativas. Lo político se resuelve creando una correa de transmisión entre elites locales, en la cual adquiere forma lo que se conoce como “caciques regionales” y las elites políticas de los partidos Liberal y Conservador con sede en Bogotá. Tal cordón constituye un híbrido entre la noción de ciudadano y lo que algunos expertos han denominado la “subculturas partidistas en Colombia” (Pécaut, 1987).

Los rastros de lo nacional se pueden reconocer de múltiples maneras, su cuestionamiento es recurrente en trabajos de las más diversas formas de problematización. Quiero, a modo de guisa, sugerir algunos elementos que me parecen claves. El primero de ellos se refiere a que la impronta o clave señorial marcó una forma de estado que ha logrado mantenerse como patrón a lo largo del tiempo, logrando reproducirse en los más diversos contextos históricos, modelos de acumulación económica, ordenamientos territoriales, formas de establecer legalidades y legitimidades. El segundo, alude a que el proceso de la independencia generó una suerte de “unidad nacional” en términos institucionales, que

heredó la estructura administrativo-territorial de la Colonia dominante, de tal suerte que ningún lugar quedó por fuera de la forma administrativa formada en la dinámica de dominación española.

El tercer punto que quiero anotar, señala que en Colombia, la República llegó a su concepción más estructurada haciendo del centralismo su proyecto político (sancionado en la Constitución de 1886). Si bien el conflicto entre los partidos políticos -fundados por expresiones divergentes de las elites- se mantuvo hasta mediados del siglo XX, encontró en la forma de “frente nacional” la manera de dirimir conflictos y repartirse la administración e institucionalización estatal (Guillen, 2008).

Estos ejes de caracterización definen una situación paradójica en la relación entre lo nacional y lo regional. Por un lado, a lo largo del siglo XIX, siguiendo a Jorge Orlando Melo: “Entre exaltaciones regionales, crónicas foráneas y ensayos locales” se va hablando “de antioqueños, caucano, costeño, a pesar de que Mompox, y Cartagena o Santa Marta rivalicen. Ser el ciudadano pero sobre todo miembro de una suerte de complejo cultural regional con marcado carácter étnico” (Melo, 1992b, s.p.), es determinante en la historia de Colombia. Un ejemplo inicial para este tipo de esfuerzo, por demás ampliamente citado, está en la obra de José María Samper. En su *Ensayo sobre las Revoluciones* de 1861, se presentan bien configurados los estereotipos regionales, que ya había introducido en una versión temprana en 1857. Samper hace un esfuerzo por generar una tipología sustentada en criterios fisionómicos, como culturales y de carácter; niveles que en la ciencia de la época, se presumen estrechamente relacionados y se constituye en base de un pensamiento racalista generalizado. Al criollo bogotano lo caracteriza por la discordancia entre su origen español y la sociedad democrática, y lo describe como bello y distinguido, robusto, “el ojo expresivo, al mismo tiempo afable y burlón”, “el pie pequeño, el andar fácil y elegante, la voz suave y de fluido timbre, la expresión general plácida, cordial y franca: en una palabra, un tipo hermoso, particularmente en la mujer y muy simpático.(...) Predomina en él el espíritu aristocrático, aunque se casa por amor, y es puntilloso en honor, vanidoso, respetuoso de las tradiciones religiosas, pero formal en sus compromisos” (Melo, 1992b, s.p.).

Aún así la construcción regional no está sólo determinada por un orden político-administrativo dibujado desde el modelo de estado centralista, sino por la relación entre espacios geográficos e implementación de modelos económicos. La especialización económica se constituye a partir de procesos productivos anclados a relaciones geográficas determinadas. La constitución del Estado-nación desde lo político/territorial, y la constitución de lo regional a partir de lo económico/territorial marcan dos lógicas que se contraponen y complementan. Dentro de ellas se realiza toda una gama de sentidos y significados culturales que se traslapan, comenzando por la homogeneidad del concepto de “ciudadano mestizo”, hasta la diversidad poblacional característica de cada región e incluso en su interior.

Las experiencias de lucha en contextos de configuración regional permiten comprender cómo en las dinámicas locales, laborales y organizativas, la gente movilizada se asume como sujeto político y elabora sendas proyecciones sobre sus entramados sociales y sus apuestas colectivas, no solo para sus contextos, sino para las sociedades nacionales en las cuales discurre su vida. Dicha constatación no es novedosa, en formatos disímiles como ensayos, crónicas y editoriales de opinión podemos encontrar huellas, rastros, alegorías, relatos y experiencias sobre la capacidad constituyente popular.

Tal tentativa tipológica o clasificatoria como ruta para abordar la cuestión regional en Colombia sería posteriormente explorada en las ciencias humanas, con variados tintes. Orlando Fals Borda y Virginia Gutiérrez de Pineda, el primero sociólogo y la segunda antropóloga, irrumpieron con reflexiones sobre la relación entre la nación y la región. Virginia Gutiérrez trata de identificar la base empírica de las identidades regionales, definiendo los principales complejos culturales del país y de determinar ante todo las estructuras familiares y los sistemas de valores ligados a ellas (Gutiérrez de Pineda, 1975). Se trató de una tentativa por detectar marcos culturales que permitieran abordar la variación de las pautas culturales y de comportamiento de diversas regiones del país, en un momento en el cual no sería interpretado como asunto de “identidad regional”. Este último enfoque supondría la contemplación de las formas de autodefinición como miembros de un grupo a partir de la percepción sobre aquellas pautas y formas de comportamiento, descritas por la

antropóloga. Sin duda una cuestión que aún no estaba en el horizonte analítico de las ciencias humanas en Colombia.

Orlando Fals Borda (1925-2008), creador de la Investigación-Acción-Participación (IAP), logró transformar las metodologías de investigación social, con su propuesta de relación entre epistemología y metodología en las ciencias sociales. Durante cincuenta años fue uno de los referentes del pensamiento crítico y emancipatorio en Colombia, e impulsor de movimientos sociales y políticos reconocidos por sus apuestas de ampliación de la democracia. Obras como “Ciencia propia y colonialismo intelectual” son un llamamiento al pensamiento propio y raizal (1981). Su obra está ligada con la comprensión de la formación social de las regiones colombianas y con el reconocimiento de los pobladores como sujeto pleno y activo del proceso de investigación. Entre estos trabajos se destaca la *Historia doble de la Costa* (1979), a la cual seguiría el llamado a un nuevo ordenamiento territorial para Colombia.

El filósofo Dumer Mamián dedicará su obra a la defensa de los pueblos indígenas, concentrado sobre todo en el pueblo de los Pastos. Como cabeza del Instituto Andino de Artes Populares (IADAP) buscará las trazas y lógicas que caracterizan el pensamiento profundo y propio del pueblo de los Pastos, buscando en el pensamiento propio aquellas articulaciones regionales, no sólo andinas, sino también transversales y panamazónicas.

En este recorrido esbozo el contexto desde el cual surgen las preguntas que son la base de indagación de esta investigación. En primer lugar problematizo el papel de lucha social en Colombia, interrogando en los saberes y prácticas de la gente, en cómo se ha definido la noción de lucha, preguntando por qué dicha definición es más precisa para entender procesos sociales que nociones como movimiento social y acción social, indagando los usos cotidianos de la palabra, así como los alcances que dicho término logra en los episodios de movilización.

En segundo lugar, cuestiono sobre el uso de la noción regional, tanto en términos sociológicos y antropológicos como en sus indagaciones históricas, mostrando cómo la persistencia de identidades que aluden a ella, siguen siendo pautas para entender los actuales procesos de movilización.

En tercer lugar pregunto sobre la relación entre lucha social, configuración regional y construcción nacional, asumiendo la interpelación a modelos de acumulación económica y regímenes políticos establecidos a lo largo del tiempo, y preguntando sobre el papel que cumple para lo uno y lo otro, el proceso denominado como globalización y sobre cómo se afectan y enriquecen los repertorios y oportunidades en donde se desenvuelven los episodios de movilización (que se destacan como hitos de la lucha social por parte los pobladores regionales).

IV. Pensamiento propio, vida digna, región y lucha

Para quienes reivindican la existencia regional del Magdalena Medio y del Suroccidente Colombiano, la lucha social aparece entre su deseo de constituirse como los constructores de un proyecto regional teniendo como horizonte la “vida digna” de los pobladores y las comunidades, frente a los intereses que defienden modelos de desarrollo basados en la agro-exportación, la explotación extensiva, el extractivismo y la comercialización de coca. Es lugar común afirmar que muchas de las condiciones de vida de la gente en estas regiones son producto del abandono por parte de las instituciones del Estado y de organizaciones y gremios económicos que las influyen directamente. A unos y otros, y en sinergia, no les interesaría el afianzamiento de un sentido de pertenencia e identidad regional. Son ellos quienes seguirían reproduciendo la desarticulación físico-espacial del territorio, al carecer de vías de comunicación y servicios básicos. Son ellos quienes evitarían la conformación de mercados internos y de redes técnico-económicas. Y son ellos los que estarían promoviendo la salida militarista, consolidada en el proyecto paramilitar. Para las pobladores en movilización, todos estos elementos en conjunto evidencian la intención del Estado colombiano hacia la desintegración regional.

Así describe territorialmente a la región don Gabriel, un dirigente vocero del Sur de Bolívar:

Los intereses económicos en el Sur de Bolívar son muchos. Es un territorio que hídricamente es muy rico, hay muy buenas aguas; forestalmente hay un territorio que son maderables, las tierras son muy fértiles, hay minas de oro, hay petróleo, hay

intereses de cultivar la palma africana. Y uno va viendo que al paso que van reprimiendo a la población, que al paso que van sacando gente, van quedando las tierras de otras personas y también van avanzando los proyectos, los megaproyectos [...] que piden concesión al Estado [de] unos territorios que han sido de los mineros (Testimonio recopilado en el video documental “Sur de Bolívar”, 2005).

Frente a esta presencia del Estado, una parte de los pobladores ha respondido con la movilización y la construcción de región. Estos dos procesos se recrean el uno al otro y están determinados por la formación social y la configuración regional. Emerge desde la movilización de los pobladores la necesidad de sobrepasar las reivindicaciones definidas desde el aislamiento de los municipios para empezar a señalar, desde una definición más programática, la importancia geoestratégica de la región. La lucha, conversada y caminada, nos mostrará cómo de la necesidad de escuelas y puentes para los municipios, se pasó a reivindicar el valor regional de los yacimientos minerales de petróleo, oro, platino y calizas; además de apuntar la presencia de tierras aptas para la siembra de palma africana y de otros cultivos comerciales mecanizados. Este posicionamiento de los pobladores de la región hizo que el conflicto por el territorio fuera el centro de su movilización y que la construcción territorial sea uno de los principales ejes de su propuesta de configuración regional.

Pero el conflicto territorial no sólo debate sobre quién es el propietario, sino en quién expresa y tiene capacidad de control sobre los intereses de la población. Esto redundaba en un conflicto político que ha tenido distintas expresiones, una de las más importantes es el conflicto armado. El conflicto político ha puesto sobre el tapete el problema de la distribución espacial del poder, haciendo de primer orden temas vinculados con la participación y el ordenamiento territorial. Estas relaciones conforman un marco de identidades, diferencias y contradicciones, que desde la experiencia relatada por los pobladores se fue haciendo más “entendible”, cuanto más claros se hacían los intereses por el poder y el territorio.

Tanto en el Suroccidente Colombiano como en el Magdalena Medio, en las últimas décadas se profundizan las diferencias entre la ribera o “lo plano” y la montaña: de una parte, “lo plano” se convierte en un lugar estratégico para proyectos agroexportadores, como por

ejemplo, la palma africana o la caña de azúcar; y por otra parte, las montañas atraen a los interesados en las minas de oro, el agua, la biodiversidad y el control de los cultivos de coca. En medio de estos intereses en juego, se van posicionando distintos sujetos y actores sociales, a partir de las representaciones y las prácticas que se construyen frente y dentro de las regiones.

Pero la contradicción y las alianzas entre diferentes intereses económicos no explica en sí misma las relaciones que han construido los pobladores en el proceso de configuración regional. Daniel Pécault (1999) llama la atención sobre los distintos procesos que se dan en las “zonas pioneras” en donde se intensifica la Violencia. Al decir de Pécault, ni las condiciones de miseria, ni las transformaciones económicas en los polos de riqueza, dejan de ser explicaciones vagas para explicar procesos que como la violencia definen a regiones como el Sur de Bolívar. Pero, desde nuestro punto de vista, tampoco se puede limitar la configuración regional a la expansión del conflicto político y militar, y a la generalización de la violencia. El campo de relaciones es más complejo y diverso, y se puede explicar desentramando y relativizando afirmaciones como la “desorganización social”.¹ Esto es, comprendiendo que las características de la configuración regional están trazadas por las contradicciones que se suscitan en las diversas relaciones sociales que se establecen en los ámbitos regionales, así como su imbricación dentro de la dinámica de la formación social colombiana y el contexto de internacionalización y globalización en el cual está inmersa. La “desorganización social”, si así debe ser llamada, en la lectura que propone esta tesis, sería producto entre otras, de la relación entre la rapacidad del modo de producción, el desarrollo de un estado diferenciado, que es muy distinto a decir ausente, y una polarización infraestructural ligada a intereses privados.

¹ “La brutalidad de los booms locales conduce a inversiones anárquicas. Como otras zonas pioneras, ellas escapan ampliamente a las instituciones estatales y padecen a menudo de infraestructuras insuficientes. Más que la “riqueza”, la desorganización social que resulta de estos tres rasgos explica la intensidad de *La Violencia*”. (Pécault, 1999: 12)

V. La lucha social y la movilización regional

Durante las últimas tres décadas, tanto en el Magdalena Medio como en el Sur de Bolívar se han realizado una serie de acciones colectivas que han logrado constituir procesos de movilización social para exigir inicialmente un mayor compromiso del Estado con la infraestructura de algunas localidades, y para que las políticas de descentralización en boga, sean consecuentes con las realidades locales; luego, a mediados de los 90, para promover una inversión no sólo local, sino también para el desarrollo regional. A finales de la década del 90 y durante todos los 2000 la defensa de la vida y la consolidación de una propuesta integral de desarrollo y “buen vivir”, en la cual se exige también el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de su territorio y su identificación como los “pobladores legítimos” del mismo. Al mismo tiempo, reclaman su voz autónoma para definir sus destinos, así como mayor participación en las decisiones del Estado sobre la región.

Desde este planteamiento se articulan dos maneras de nominar e incidir en la vida regional, que se construyen paralelamente: por un lado, alrededor de los derechos humanos y defensa de la vida (campesina, étnica, pequeña minería, y pesca artesanal) frente a la agudización del conflicto político-militar; y por el otro, sobre el manejo del medio ambiente y el “desarrollo social” y su implementación en proyectos agroindustriales, extractivistas, o incidencia de Tratados de Libre Comercio.

Desde la lucha, expresada en distintos episodios de movilización “se va dando” una configuración regional que da sentido a estas acciones y prácticas colectivas. Pero esta configuración regional no es inmanente a su espacialidad particular. Ella es también, producto de las relaciones históricas que se han establecido desde el proceso de la formación social colombiana. Tampoco podemos reducir su existencia a una comprensión estructural. En los procesos de configuración regional se manifiestan diversas fuerzas, a partir de las cuales, se ha ido estableciendo un “campo” de conflictos. Estos conflictos están determinados por las formas específicas como sus habitantes han asumido un papel “de pobladores constructores de la región” en sintonía con sus sentidos de vida. Es aquí donde la configuración regional, cobra toda su magnitud cuando sujetos sociales

determinados, la recrean y justifican desde ella sus procesos, sus relaciones, sus sueños... su “illusio” (Bourdieu, 1998).

Desde esta perspectiva resulta oportuno subrayar el campo de preguntas que se desarrollan en esta tesis: (1) La configuración regional constituye un campo de tensiones entre diversos proyectos de “región”, frente a lo cual es necesario indagar sobre la forma como en esta diversidad las posiciones de los pobladores en movilización no actúan como simples receptores y como actores reactivos impulsados sólo por decisiones de costo/beneficio, para plantear que juegan en diversos campos y con distintos discursos, convirtiéndose en protagonistas de la construcción de un campo político particular. (2) En un espacio tan diverso, es necesario considerar que la lucha social no se da en un escenario de negro y blanco o de buenos y malos, sino que parte de la complejidad social propia de las realidades regionales.

VI. Organización de esta tesis

La tesis se organiza en cinco capítulos. El primer capítulo está escrito en clave teórico-metodológica a partir del “caminar y conversar”, con el cual se propone un diálogo con distintas formas de entender la lucha social a partir de procesos de movilización y la configuración regional desde distintas perspectivas de análisis de lo regional. Tal abordaje teórico plantea el campo de discusión que hace posible afirmar las concepciones que emanan del trabajo etnográfico y social realizado: la región-vida y la lucha social.

En el segundo capítulo se realiza una relación etnográfica, para conversar y caminar por la vida regional a partir de las concepciones, experiencias y prácticas que constituyen la vida de la gente, hasta donde logró ser abordada. En estas páginas se presentan una serie de relatos y reconstrucciones etnográficas, complementadas con recolecciones testimoniales propias y de otros investigadores, con el fin de presentar los recorridos, las formas de habitar, de trabajar, organizar e identificar en cada una de las dos regiones. En la primera parte del capítulo se transita por el Magdalena Medio y en la segunda por el Sur Occidente

Colombiano, presentando las formas, modos, seres y estares de las gentes, que permiten ponernos a caminar por sus condiciones, situaciones y posiciones de lucha.

En el tercer capítulo se adelanta una conversación sobre las formaciones regionales. Se propone aquí una lectura en clave de economía política con la cual se plantea la configuración regional en disputa. Con la ayuda de información de fuentes institucionales y fuentes producidas de las organizaciones sociales o elaboradas en los episodios de movilización, se busca dibujar las disputas principales y los sujetos en ellas involucradas, con quienes se define el campo de disputa de las configuraciones regionales. Detectar las disputas es una tarea que se emprende también, en una conversación con los recientes estudios sobre los múltiples deseos, necesidades e intereses que se ciñen sobre estos territorios.

En el cuarto capítulo se presenta una reconstrucción de los procesos de organización y de construcción de “comunidad”, con los cuales es posible abordar las disputas por el poder en lucha. Se explora el contexto en el que se desarrolla la lucha, desde el itinerario nacional de las movilizaciones campesinas, la interculturalidad, el ordenamiento territorial y la forma como se constituyen los sujetos en movilización, destacándose la noción de “poblador”.

En el quinto capítulo, finalmente se recorren las movilizaciones en su historicidad. Se propone una lectura de la cronología de los procesos de lucha social y de las acciones políticas concretas en tres tiempos. Quiénes, cómo, cuándo, dónde se movilizan estas comunidades y organizaciones, son las preguntas centrales que estructuran esta reconstrucción. Así mismo, se exploran los efectos y las potencialidades que se ponen en juego en el campo de disputas definidos por esas luchas. En ellos se articulan los órdenes temporales a nivel regional y nacional desde los noventa, hasta llegar a la dinámica de la Minga Social y Comunitaria de inicios del siglo XXI.

Capítulo 1 . Nación, luchas sociales y configuración regional: Planteamiento del problema de investigación

El trabajo de investigación que se reúne en estas páginas forma parte de una labor de sistematización y reflexión de un largo trabajo de campo que, como se introdujo anteriormente, fue realizado en varios momentos a lo largo de casi veinte años. Este largo camino fue dando forma al planteamiento de esta tesis, que emerge en la relación entre las luchas sociales y las formas de significar la vida en los territorios. Este engranaje fue adquiriendo formas específicas a medida que se caminaba y se conversaba con los pobladores, llámense éstos: campesinos, indígenas, negros o afros, mujeres, agricultores, pescadores o mineros. Entre unos y otros se develaron trazas comunes y también divergencias, no como puntos de partida teóricos, sino como emergencias en el propio proceso de investigación. “Lo regional” nace en el proceso de reflexión como “potencia social en conflicto”, vuelta concreta en las luchas.

Así, este apartado se propone la comprensión teórica de lo regional. El itinerario implica: (1) realizar una contextualización histórica de la tensión entre “lo nacional” y “lo regional” en Colombia, (2) situar y rastrear la trama de las fuerzas y luchas sociales desde los ochenta, y (3) introducir los contornos paradójicos de las dinámicas regionales que se intentan comprender.

1.1. Caminar y conversar: método y emergencias conceptuales

El proceso de investigación inició entre los caminos de agua dulce y de tierra caliente en el Sur de Bolívar, mientras campesinos y mineros luchaban contra la desigualdad y los “olvidos” o silencios del Estado. Una pelea que acució articulaciones entre sectores, pueblos y organizaciones de la región que permitieron activar la noción de “construcción social de región”, que se constituye en concepto central de esta tesis. Luego, de una manera más continua, se participó en la Minga Social y Comunitaria que inició su trasegar en el Suroccidente del país en el 2004, y se fueron constituyendo relaciones de amistad con

comuneros, taitas² y mayores de pueblos indígenas, líderes y lideresas campesinas y habitantes urbanos del Suroccidente.

A partir de la participación en reuniones, asambleas, comisiones, comités, foros, tribunales y conversatorios se ha desarrollado esta etnografía buscando acercarse a las diversas formas de ver y asumir los procesos de movilización, las complejidades de su construcción que busca reconocimientos en medio de disensos, y la difícil tarea de poner en relación los encuentros e ir construyendo un “lenguaje común” (otro concepto central en esta investigación). La participación directa y activa en estos escenarios me ha permitido cuestionar y contrarrestar las miradas sobre movilización social recurrentes en la mayoría de análisis actuales sobre el tema (que giran en torno a estadísticas de protesta o listados de reivindicaciones, o la búsqueda de “repertorios”), así como enriquecer a quienes analizan los procesos de movilización desde nociones como “movimiento social”, “acciones de protesta” u otras similares.³

El concepto más apropiado para comprender las dinámicas sociales en movimiento, en un contexto de permanente despojo y de fragmentación sistemática de los sujetos sociales – como en el caso de Colombia- es “la lucha” (tercer concepto central de esta investigación). Esta noción se ha expresado y se asume por distintos procesos en reuniones, comités y asambleas, desplegándose en el desarrollo de los procesos de movilización social, tanto en términos históricos como con referencia a sus memorias; así también, en la construcción de sentidos de procesos sociales, cuya emergencia connota “la contradicción con”, y cuyos resultados se trazan en términos de “vida”; esto es, la forma para asumir la pregunta sobre “¿qué tanto se sigue vivo y se está vivo?”, en contextos de confrontación armada o bien, de empobrecimiento generalizado.

Estos actos, gestos y hechos colectivos sólo pueden ser contrastados, enriquecidos y ampliados a partir de conversaciones constantes y de permanentes recorridos por los

² *Taita* es un término de uso común en los pueblos indígenas del Suroccidente colombiano para designar a los sujetos masculinos que han pasado por algún cargo comunitario (el cabildo) y quienes son valorados política y socialmente en la vida comunitaria.

³ Se hace referencia a una serie de trabajos, de importancia medular para la historia social colombiana y latinoamericana, con quienes se conversa en esta tesis: Fernán González (2006), Mauricio Archila (2005), Ingrid Bolívar (2006), entre otros.

territorios. Construir una relación de trabajo que ha tenido como principio la relación entre el *caminar* y el *conversar* con los diversos pobladores de las regiones en movilización y en el territorio, ha sido el procedimiento de investigación: *caminar* y *conversar* en el método del pensamiento en movimiento, de la historia en movimiento, de la imaginación en movimiento. Un método enfatizado en los procesos de movilización de los que trata esta investigación y que es asumido como metodología etnográfica en esta tesis.

La etnografía comprendida como método que permite relacionar diversos sentidos sociales en la construcción de mundos posibles, desde su compromiso metodológico y epistemológico con la antropología, posibilita interrelacionar análisis históricos, variables sociológicas, definiciones de la economía política, acercamientos geográficos y reflexiones jurídicas. La etnografía como método es una herramienta que abre el escenario de relaciones, de conversaciones y vivencias múltiples, permitiendo un “indisciplinamiento” académico necesario para investigar nuestras realidades sociales⁴. Indisciplinamiento que estimula la comprensión de la totalidad social, sus convergencias y contradicciones, así se destaquen ciertas perspectivas, posiciones o temáticas analíticas.⁵

A su vez, la etnografía como relación y producción de conocimiento situado, permite abrir las posibilidades de comprensión de otras epistemes. El ponerlas en contacto, casi siempre de forma conflictiva, permite vislumbrar otras matrices de pensamiento, entendimiento y sensibilidad. Estas dos posibilidades la convierten en herramienta que enriquece búsquedas conceptuales desarrolladas en estas latitudes, que buscan ser retomadas y actualizadas: la teoría de la dependencia, la investigación acción participativa, la teología de la liberación, la pedagogía del oprimido, entre otras. Todas ellas llaman a relacionar la investigación social con la construcción de sujetos⁶. Esta investigación sugiere ir más allá de las

⁴ Va más allá de la “reflexividad” propuesta por Rosana Guber, 2001, y se dirige más hacia las exploraciones realizadas en términos del *Oficio del antropólogo*, propuestas por Sánchez-Parga, 2005.

⁵ Esta propuesta metodológica ha sido desarrollada inicialmente en la tesis de Maestría como parte de una matriz de análisis que articula las relaciones sociales que surgen de la interacción de las dimensiones que configuran lo social: territorio, producción, poder y cultura (Benavides Mora, 2006). Así mismo, se alimenta de la noción de “indisciplina” propuesta por Wallerstein, 1996 y Gonzalez Casanova, 2004.

⁶ Estas fuentes de pensamiento latinoamericano fueron trabajadas con base en las siguientes referencias básicas: Fals Borda, 2008; Dussel 1996 y 2009; Cardoso y Faletto, 1969; Furtado, 1964.

concepciones de la investigación comprometida y solidaria⁷, hacia la investigación realizada por el académico situado y políticamente activo, como parte de las potencias sociales que se expresan en los procesos que estudiamos. Por “pensamiento situado” se entiende la urgencia de una epistemología que se realiza a partir del reconocimiento del contexto en el cual el investigador realiza su trabajo y de su capacidad de “situarse” (léase, “ponerse en situación”) dentro del mismo (Caicedo y Restrepo, 2012).⁸ Es aquí donde el *caminar* y *conversar* se traducen en procedimientos etnográficos para comprender en dimensiones sociales interrelacionadas las vidas y transursos regionales.

1.2. Aproximaciones a “lo regional”

1.2.1. La región como cuestión del desarrollo o lo regional como propósito

La noción de región se utiliza frecuentemente en distintas disciplinas, pero quienes más han contribuido a su caracterización teórica han sido geógrafos y economistas. Las cartografías de reconocimientos geográficos y de propuestas económicas han también signado proyecciones y tensiones en las regiones que se estudian.

Desde una perspectiva económica, las disparidades que se generan en la apropiación de excedentes económicos, producto de distintos modelos de acumulación se reflejan en la aparición de territorios beneficiados y territorios rezagados. Los modelos se van mostrando ineficientes por lo que se buscan explicaciones y/o estrategias que permitan equiparar los niveles de crecimiento y desarrollo. La preocupación por los desequilibrios en el crecimiento de diferentes regiones impulsa la búsqueda de explicaciones teóricas para

⁷ La relación entre comunidades y académicos ha sido una relación ampliamente debatida en la sociología y la antropología colombianas. La búsqueda de un camino de retribución o devolución de los aprendizajes y réditos académicos generados por las investigaciones, fue la preocupación del Grupo Golconda, con quienes Fals Borda desarrollaría su reconocida propuesta de la IAP o Investigación-Acción-Participación. En los años 70 del siglo XX un grupo de intelectuales conformarían, inspirados en los aprendizajes de la “lucha prolongada” un grupo de movilización que discutía con las vanguardias de izquierda, para sostener que era necesaria una acción permanente de “solidaridad” con los procesos de movilización indígenas en varias regiones del país (para un intento de reconstrucción de esta propuesta, véase: Caviedes, 2002). O bien otros esfuerzos posteriores, como por ejemplo, el desarrollado por Johanne Rappaport y la investigación “colaborativa” (véase: Rappaport y Raños Pacho, 2005). Véase también: Benavides Mora, 2006.

⁸ Caicedo y Restrepo 2012.

entender por qué las actividades productivas de un país se concentran en determinadas regiones o sectores.

Las teorías explicativas del desarrollo regional más sobresalientes que permiten abordar el problema del desequilibrio territorial pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Desde la escuela alemana, con el trabajo realizado por Von Thunen en 1826 (1829), se planteó un modelo basado en los precios de la tierra, la calidad de los terrenos y los costos de transporte, para intentar explicar la división del trabajo entre los centros urbanos y las áreas rurales dedicadas a la agricultura. Se trataba de dar respuesta a las maneras en que la economía organiza el espacio para aprovechar sus recursos y lograr procesos de acumulación de la competencia no planificada, así como asignar las cosechas a la tierra para que se minimice el costo total combinado de la producción y el transporte de las cosechas, sin incluir el alquiler de la tierra. En los años sesenta se reinterpretó este modelo introduciendo el concepto de las “economías externas” desarrollado por Marshall en 1920, en el cual se daban tres razones para explicar los conglomerados: la necesidad de mantener a los proveedores, la consecución de un fondo común de mano de obra y la propagación de la información (Benko y Lipietz, 1994).

Posteriormente, la teoría locacional integra la dimensión espacial con la teoría económica clásica, para explicar las decisiones geográficas resultantes del agregado de decisiones individuales. La idea es mostrar que lo real es una estructura espacial abstracta y ordenada, cuyo orden es posible representar a partir de teorías, leyes y modelos como elementos constitutivos de la nueva ciencia espacial. Este principio de la localización se basa en la creación de un centro de gravedad, es decir la industria se ubica en el punto en el que los costos de transporte sean medios para la empresa de acuerdo a los diferentes puntos de distribución, ahí es donde se crea la tendencia hacia la concentración (*Ibíd.*)

En los años cincuenta del siglo XX, Friedmann y Harris elaboraron otras teorías, como el multiplicador base-exportación y el potencial de mercado, que tiene como rasgo común un énfasis keynesiano en el papel de la demanda externa sobre la determinación del nivel de actividad económica en una región determinada. Dentro de la política proteccionista las regiones podrían incrementar su actividad económica al establecer vínculos directos con el

mercado externo; por esta vía las exportaciones tenderían a generar *superávit* en la balanza comercial. Esto implicaría un estímulo en la demanda, el consumo y por lo tanto, traería consigo crecimiento económico (Téllez Sánchez 2011).

En el terreno de la teoría del crecimiento y el desarrollo económico, se formularon en los años cincuenta varias conceptualizaciones. Por una parte, están los enfoques según los cuales el nivel de desarrollo de una región es el resultado del lugar que ella ocupa en un sistema de naturaleza jerarquizada y de relaciones asimétricas. Estas últimas son definidas por el comportamiento determinista de flujos y fuerzas externas a la propia región. En este planteamiento se sitúan las teorías del centro-periferia y de la dependencia.

A partir de la noción general, según la cual el sistema social no se mueve espontáneamente hacia ningún equilibrio de fuerzas, Myrdal en 1957 sostuvo en su planteamiento teórico que a partir de una aglomeración inicial en una región, la existencia de economías de escala y externalidades económicas, se atraen nuevos recursos que refuerzan circularmente la expansión del mercado. Tal definición implicaba asumir que lo contrario ocurre en las regiones rezagadas (Myrdal, 1964).

La teoría de los polos de crecimiento, de Francois Perroux y Boudeville se basa en los procesos acumulativos y de localización, que pueden ser generados por las interdependencias del tipo *input - output* en torno a una industria líder e innovadora. La idea fue trasladada al espacio geográfico con el argumento de que las industrias y proyectos dinámicos se aglomeran en un área determinada y tienen efectos sobre el espacio adyacente y no sobre el conjunto de la economía (Salguero Cubides, 2006, pp. 13-16)⁹.

Un segundo grupo de teorías centran el análisis en las condiciones internas de las regiones para explicar su posición en el sistema económico y su evolución a largo plazo. Su descripción en etapas de crecimiento, les permite situar al “desarrollo” como el paso decisivo de los sectores primarios a los terciarios, pasando por la fase industrial. En tal argumentación, el “subdesarrollo” se describe como la permanencia de una economía en las primeras fases de crecimiento, forzada por circunstancias propias de su división interna de

⁹ La obra de Perroux fue reeditada en 1993 (*François Perroux, œuvres complètes*, 6 tomes, Presse universitaires de Grenoble).

trabajo. Posteriormente se identificaron las condiciones para el despegue, que desencadenarían la transición hacia las fases avanzadas del desarrollo, que no serían sólo económicas sino también, culturales y sociales (Moncayo, 2001).

En los años ochenta Romer (1994) y Lucas (2002) formularon la teoría del crecimiento endógeno, cuyo principal propósito era construir modelos en los que la tasa de crecimiento a largo plazo dependa, además de la tecnología y de las funciones de producción y utilidad, de la acumulación de conocimiento, del capital físico y humano y de las políticas macroeconómicas. Al asumir la existencia de externalidades positivas, asociadas con la producción de conocimiento y tecnología, estos modelos sustituyen los supuestos neoclásicos ortodoxos sobre rendimientos constantes a escala y competencia perfecta, por los de rendimientos crecientes y competencia imperfecta.

De forma paralela, a partir de los años 70 surge la Nueva Geografía Económica (NGE) en el marco de la construcción de modelos de competencia manejables en presencia de rendimientos crecientes, como los desarrollados por Dixit y Stiglitz en 1977. La cuestión que define a la NGE es la necesidad de explicar las concentraciones de la población y la actividad económica, para entender la diferencia entre la industria y el agro, las ciudades y los pueblos; su análisis busca responder a cuándo se puede decir que la concentración espacial de una actividad económica es sostenible (véase: García, 2007).

La construcción teórica de la NGE se basa en una triple interacción, entre los rendimientos crecientes, los costes de transporte y el movimiento de los factores productivos; la aglomeración o concentración económica tiene lugar en muchos niveles, y la distribución de la población y de las actividades es desigual. La relación de los rendimientos crecientes con la aglomeración espacial representa la interacción de fuerzas que promueven la concentración geográfica de las actividades económicas. Para Paul Krugman (1991) la gran desigualdad espacial de la economía real se debe a un conjunto de procesos acumulativos que forzosamente producen algún tipo de rendimientos crecientes.

El aporte de la NGE es que, dado que tanto los rendimientos crecientes como los costos de transportes son importantes, los encadenamientos hacia atrás y hacia delante pueden generar una lógica circular de aglomeración, es decir *ceteris paribus*: los proveedores

quieren situarse cerca de los productores y de sus clientes, lo cual explica que estén cerca los unos de los otros.

La inmovilidad de algunos recursos, como la tierra y la fuerza laboral, actúa como una fuerza que se opone a la fuerza de la aglomeración, la tensión entre estas dos fuerzas moldea la evolución de la estructura espacial de la economía. Esta teoría -fuertemente criticada por tener “muchas matemáticas y poco espacio”¹⁰- deja sin resolver el problema de la aglomeración originaria, de responder por qué la especialización y la concentración se producen en determinada localidad y no en otra (García, 2007).

Los geógrafos económicos afines a la teoría de la acumulación flexible, sostienen que la nueva economía de la aglomeración espacial se basa en el intento de incorporar soluciones maximizadoras de equilibrio a las teorías de localización, mediante complejos modelos matemáticos. Estos modelos, al intentar comprender los desequilibrios regionales, dejan de lado los aspectos históricos y particulares; tal omisión, los hace abstractos e irreales para aplicaciones prácticas.

Hacia finales de los años ochenta se dio una nueva fase en las teorías del desarrollo, en la cual se comprendería que la idea del crecimiento de las regiones se debe a sus condiciones y dinámicas internas. Esto implicó situar el origen de la crisis en el agotamiento del modelo de desarrollo industrial basado en la producción en serie. Se propone una estrategia de reconversión industrial para los países avanzados basada en la producción flexible asociada con tecnologías artesanales. La producción flexible se propagó rápidamente anunciando un nuevo horizonte de posibilidades productivas, innovaciones tecnológicas y organizaciones empresariales productivas que tendrían vastas consecuencias en la configuración espacial de las economías.

Para los regulacionistas franceses este paradigma de desarrollo regional es insuficiente, pues desde su perspectiva, un modelo de desarrollo no es sólo un sistema de producción, sino una construcción coherente que incluye: (a) un paradigma tecnológico relacionado con los principios que rigen la organización del trabajo; (b) un régimen de acumulación y (c) un

¹⁰ Asevera Ron Martín, refiriéndose al empleo de soluciones maximizadoras de equilibrio en la teoría de la localización desarrollada por Paúl Krugman (Moncayo, 2001, p. 27).

modo de regulación referido al conjunto de normas e instituciones que regulan las condiciones salariales, los vínculos entre capitales y la inserción internacional. Utilizando estas categorías, pero con diversas variantes, autores como Alain Lipietz (1979) desarrollaron un modelo que no sólo compromete los sistemas de producción, sino también las políticas macroeconómicas y las instituciones sociales. Es un modelo de desarrollo regional basado en las fuerzas endógenas, que revisa el modelo postfordista, el cual se torna ineficiente para explicar arreglos económicos-espaciales actuales. Esta perspectiva brinda un marco de análisis útil en la comprensión de la reconfiguración regional, con el cual es posible abordar el estudio de las relaciones sociales en sus distintas dimensiones, sustentado en la concepción de territorio como concepto flexible, retroalimentado por la dinámica de esta interacción.

Ahora bien, en contraste están algunos aportes desde la geografía humana, socioeconómica y regional, relacionada con las teorías de acumulación flexible. Desde estas perspectivas el espacio no es un plano homogéneo de la economía neoclásica, en el cual se inscribe una actividad económica que a partir del azar se aglomera o fragmenta, siguiendo sólo las reglas del mercado. Al contrario, para ellos el espacio es la dimensión material de las relaciones sociales. Es la actividad humana, las relaciones de todas las clases, las que constituyen la sustancia misma del espacio, el cual es un campo de fuerzas donde interactúan los factores históricos y físicos con la acción múltiple de los agentes sociales (Moncayo, 2000).

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone asumir que la dimensión económica y geográfica del espacio permite comprender la relación entre las dimensiones productiva y territorial como escenarios de configuración histórica y de transformación social, necesarios para abordar un primer momento de los procesos de configuración regional. En tal sentido, se articula a ellas la dimensión de la cultura para urdir los sentidos de región y nación allí asociados.

1.2.2. Entre lo nacional y lo regional: cultura y poder

El concepto de región adquirió relieve técnico cuando lo adoptaron los geógrafos del siglo XIX para indicar el espacio físico o nicho ecológico en el cual el ser humano habita. Se alude entonces a criterios topográficos para definir territorios y delimitar regiones, de tal suerte que la idea de territorialidad se simplifica a la división del territorio nacional, a porciones de tierra aisladas unas de otras, basadas en factores como las “diferencias biológicas”, el tipo de desarrollo tecnológico, las costumbres y las creencias.

Además de las diferencias geográficas, la precariedad de las comunicaciones lentamente fue alimentando la conformación de particularidades regionales – propiciadas desde los diferentes tipos de cultura– pautas de poblamiento, modos y relaciones de producción, y formas desiguales de desarrollo. Todas ellas, enriquecidas con procesos de resistencia, de diversidad étnica y sincretismo religioso.

La Nación supone la tradición de raíces profundas en una sociedad integrada o en trance de hacerlo, que se autoreconoce como agrupamiento distinto frente a otros, como pueblo histórico, como comunidad imaginada, que logra una hegemonía sobre otras, al decir de Anderson (1993). Se trata entonces de un valor socio-cultural con el que se identifican a través de la imaginación y el deseo pueblos determinados que ocupan espacios específicos. Debido a esto, la idea de Nación propia de finales del siglo XVIII y fortalecida en el siglo XIX (Hobsbawm, 2000) apela a la noción de unidad territorial fundamentada en una unidad étnica (por lo menos de la mayoría de la población), idiomática (salvo algunas lenguas y dialectos), religiosa y cultural bajo el amparo homogenizante del concepto de ciudadano. Tal “unidad cultural” al establecerse en correspondencia con una “unidad política”, el Estado, daría propiamente forma a la figura moderna del estado-nación (Gellner, 1985). Sobre estas definiciones Giddens enfatiza en el contrato y en las relaciones estatales implicadas en la noción de nación, para definirla como “una colectividad” que existen en un territorio delimitado, que está sujeta a una administración “unitaria”, “supervisada” tanto por el aparato del Estado como por parte del de otros Estados (Giddens, 1985).

Para el caso de Colombia, la nación sería entonces una construcción política que atraviesa tanto las diferencias e identidades que son de carácter cultural, como las contradicciones

sociales que son de tipo político. La identidad nacional se constituye con base en una historia, lengua, territorio y creencias compartidas, conceptos que en nuestro caso se vuelven difusos y en otros se tornan bastante ambiguos.

Para Hobsbawn está claro que la conciencia de pertenecer o haber pertenecido a una entidad política duradera es el más decisivo criterio para fundamentar una idea primaria de lo nacional. Es decir, que la memoria de un pasado glorioso reciente (Historia) se constituye como el primer elemento para la formulación de lo nacional. Esto resulta más claro para los casos de México y Perú (Funes, 2006; Saade, 2010; Stern, 1999); pero para el caso colombiano la memoria ha tenido un tratamiento desde la historia oficial que ha excluido de manera sistemática y de manera particularmente autoritaria, como en otros contextos de América Latina) las diferentes historias populares que fundamentan las identidades regionales, como lo denunciaría repetidamente Fals Borda (véase también para el caso del Caribe colombiano: Múnera, 1998).

Las relaciones culturales se han ido constituyendo en una serie de prácticas sociales, de relaciones cotidianas, de parentesco y compadrazgo, así como limitado el espectro de rituales, fiestas y celebraciones que articulan pueblos y comunidades en calendarios anuales. En la cultura como dimensión de la vida social, las gentes se piensan y se reconocen distintos y similares, garantizando lugares sociales de confluencia, en una serie de restricciones convenidas socialmente que han permitido su convivencia, en fin, la cultura se concreta en una serie de prácticas y de sentidos de vida que son también motor de la configuración regional.

A la vez, se constituyen en espacios creativos de disputa social, especialmente a partir de las décadas de los ochenta y noventa, cuando para algunos las grandes ideologías que habían animado y dado contenido político a una serie de disputas locales y regionales, sufren una crisis. En Colombia, tal fenómeno coincide con una serie de eventos políticos que veremos más adelante, para signar a la cultura como centro de una reivindicación política, inicialmente unida con la lucha campesina por la tierra. En este contexto, los sentidos y las prácticas culturales de las comunidades, los pueblos y los grupos sociales, permiten entender tres asuntos, centrales para comprender la profundidad de las configuraciones regionales.

En primer lugar, permite indagar sobre los sentidos y las prácticas comunes a los pobladores, cuya convergencia hace posible comprender a la región también en términos de una configuración cultural. Es sobre tal sentido “común” que se establecen y reconocen las diferencias que serán acentuadas, marcadas y designadas como reivindicaciones. La configuración “intercultural” comprendida como entramado complejo de relaciones culturales de diverso orden aparece hoy en día como posibilidad de reconocerse similares y distintos, en medio de los conflictos locales y regionales. Conflictos que se expresan como lucha por los sentidos de vida, como lucha por las formas de relacionamiento con la naturaleza (Boisier, 1993 y 1997; Fals Borda, 1979).

En segundo término, es posible dar cuenta de las luchas por el reconocimiento protagonizadas por los sujetos colectivos que han sido históricamente excluidos como protagonistas de la historia regional y nacional, así como negados en tanto sujetos. Luchar por el reconocimiento en tal contexto, implica una disputa por las formas de enunciarse y nombrarse, una disputa por los lugares que permiten tal o cual designación. A su vez, va implicando que un tipo de designaciones se superpongan sobre otras, o bien que excluyan o se disputen su lugar con otras. En tal sentido, las luchas por el reconocimiento se convierten en parte de las reivindicaciones de los procesos de lucha social y adquieren formas específicas que describen niveles importantes de los procesos de configuración regional (véase, por ejemplo Escobar, 2010).

Por último, se alude a lo cultural en términos del lugar que tiene en la actualidad en la constitución del estado-nación. Esto es, en su importancia en el marco de construcción pluriétnica y multicultural de la nación, que se desglosa en términos prácticos en: por un lado, un cuerpo de garantías legales sancionadas en la Constitución de 1991 y en las reglamentaciones y omisiones ejecutivas que le siguieron al reconocimiento de los derechos diferenciales étnicos; y por otra parte, en las exigencias populares y en las aplicaciones de consulta previa frente a la implementación de los planes de desarrollo nacional y departamental sobre los territorios reconocidos en términos étnicos.

En las configuraciones regionales la cultura permite entender los sentidos, los significados y las prácticas que están juego.

La investigación se sitúa en el marco de la formación social colombiana, dentro de las tensiones que han dado forma a un país centralista, cuyo sostenimiento ha dependido del control ejercido sobre las demás zonas del país. Tanto al norte como al sur, estas tensiones han marcado los derroteros históricos, truncado iniciativas regionales y, en una parte importante, definiendo las vidas colectivas de sus pobladores. Aquí se incluye el autor de estas páginas, quien nació y se crió al sur del país, en la ciudad de Pasto, estudió la universidad en la capital del país e inició sus investigaciones antropológicas en las sierras y riberas del norte del país. Comprender el carácter estructural de esta tensión, es el inicio del camino de esta tesis.

La representación de la construcción de nación en Colombia está determinada por el eje norte sur - sur norte, en relación con el eje que recorre el río Magdalena, que a su vez fue definido por la conquista española. El río grande de la Magdalena, como se le llamará para denotar su importancia, fue el camino de penetración de la conquista española desde la costa Caribe rumbo al sur. Desde el sur, lo fue también la ruta de Sebastián de Belalcázar en su recorrido desde Guayaquil, siguiendo rumbo norte por las altiplanicies, sierras, páramos y mesetas andinas hacia el norte. Desde Pasto y Popayán, antiguo centro de cacicazgos federativos como la ciudad del cacique Payan, continuaron sus expediciones por el cauce del río Cauca para “fundar” a la que entonces se llamó Santiago de Cali en 1536. El río Cauca corre paralelo al Magdalena, entre la cordillera Occidental y Central, y es su afluente principal, que se une al Magdalena en la depresión de Mompo. Otra expedición bordeó el Magdalena para fundar Neiva y dirigirse finalmente a la que sería nombrada como Santa Fe de Bogotá. Desde la Conquista, la historia del país se ha urdido sobre dicho eje y sobre los valles interandinos de estos dos ríos, las sabanas costeras y sus ciénagas antes de que sus aguas abrumen el mar Caribe¹¹.

El país “histórico” nace en Popayán y se dirige entre meandros de los ríos Cauca y Magdalena y las cordilleras y altiplanos hasta las sabanas y la línea costera que une a Santa Marta con Cartagena. En dicho eje quedaron a la saga diversos contextos sociales, sólo incorporados por fuerza de intereses económicos de coyuntura, pensados como frontera y

¹¹ Así ha sido subrayado por las historias generales de Colombia, como: Tirado Mejía, 1989; Bushnell, 1996; Palacios y Safford, 2002.

enclave, como la Costa Pacífica, los Llanos Orientales y la Amazonía¹². Incluso en los propios intersticios del recorrido andino, la representatividad de dicho eje y los valores con los cuales fue sostenido, repetían sus patrones, incluyendo y excluyendo poblaciones, sus territorios, culturas, formas de producción y sus dinámicas políticas (Colmenares, 1973). No es la cuenca en sí misma la que delineó el paisaje colonial y republicano después, sino la persistencia de practicar y señalar por maniobra de despojo o de exclusión, los lugares enunciados como “civilizados”, “de bien”, “prósperos” o “modernos”. Aquellos lugares dejados de lado son escenario de renovadas historias, de otras historias, estigmas, “atrasos”; pero también guardan la memoria de otros ejes, de otros rumbos posibles, aunque las más de las veces son testimonio de potencias abandonadas, de caminos dejados al tiempo, de secuencias olvidadas en el espacio. Iniciamos este recorrido pensándonos y viviendo en dos de estos lugares, que azares e intereses determinados los han colocado en múltiples ocasiones como posibilidad de hacer sustantivos tanto a los procesos sociales como a quienes los han forjado.

La dinámica de configuración regional en Colombia durante las últimas dos décadas se ha desarrollado en el entramado de una diversidad de procesos que trazan orientaciones disímiles pero correlacionadas. Entre estos procesos podemos mencionar los que devienen del conflicto social armado que se ha prolongado por más de 40 años, la reorganización político-institucional orientada por la Constitución de 1991, la imposición del modelo de acumulación neoliberal y su relación con la economía política producto del narcotráfico, y la interrelación acelerada de patrones culturales; así como la conflictividad propia de diversas propuestas y acciones de ordenamiento territorial.

Los procesos de configuración regional están imbricados, por una parte, en la débil sedimentación social producto al menos de una larga historia de despojo ejecutada sobre los sujetos populares en general, de precarización de la vida del común de la población, así como de la negación frecuente de sus capacidades políticas y de sus posibilidades concretas de generar riqueza. Por otra parte, los procesos de reconfiguración regional están

¹² Véase sobre la Amazonía en relación con la historia de Colombia, la reciente publicación de la memoria del genocidio generado por la empresa esclavista cauchera por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014.

entreverados en un continuo “estar haciéndose” (como un proceso constante de iniciativa y acción social) que caracteriza lo que hemos denominado como “nación en ciernes”¹³. Basta recorrer rápidamente la historia de Colombia para advertir los procesos inconclusos y los periodos históricos que no logran cerrarse: Colonia, República, soberanía, modernización, desarrollismo, globalización, han marcado distintas fronteras internas, desde las cuales se ha ido haciendo y concibiendo “lo nacional”; incluso, como en la actualidad, tales fronteras han marcado su porosidad; o más bien, su “desarticulación-despojo”¹⁴. Esta caracterización con distintos adjetivos, es compartida por diferentes investigaciones en las que se atribuye a la conformación de la nación características como: la escasa institucionalidad, la débil cohesión social, la ruptura continua de los tejidos sociales, la escasa consolidación económica, la utilización cíclica de la violencia y la imposición de ordenamientos territoriales desde arriba o de facto (Palacios, 2002; Pécaut, 1987).

Quienes han ostentado la orientación hegemónica y la orientación histórica de la vida republicana han utilizado dicha situación para conservar su poder. Aún así, a lo largo de la historia colombiana y de manera singular en los últimos veinte años, la “gente del común” ha disputado de diversas maneras dicha hegemonía. Una de las formas de esta disputa son los procesos de movilización social, como resultantes de la puesta en práctica de capacidades para superar necesidades, promulgar intereses e incentivar deseos sociales que se contraponen a los ordenamientos, regulaciones, limitaciones y restricciones surgidas de las dinámicas de dominación, explotación y exclusión social.

Dumer Mamián es enfático en sustentar que la región es la “unidad de análisis” más adecuada para estudiar la historia latinoamericana y, en particular, la historia andina del siglo XIX, por encima de otras nociones como “localidad”, “nación”, “provincia” o “totalidad latinoamericana o andina”. Ha sido argumentado con frecuencia que la noción de región es una noción vacía, que adquiere su contenido de acuerdo a los intereses

¹³ Con esta noción se retoman también algunos de los enunciados realizados por Fernando Guillén Martínez (2008) en el *Poder Político en Colombia*.

¹⁴ A partir de los escándalos relacionados con Agroingresoseguro (una política de apoyo crediticio para los productores agrarios del gobierno de Uribe Vélez, denunciada por su clientelismo y corrupción; así como por el debate abierto por el acaparamiento de tierras por parte de terratenientes en Colombia y los más recientes procesos de Memoria Histórica, Paz y Reconciliación) se ha abierto en Colombia un capítulo de debates sobre las formas específicas del despojo de tierras en Colombia (véase: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013)

particulares de quien la utiliza y que, en consecuencia, no emerge del acontecer social propio de la sociedad o comunidad que es estudiada. En este sentido, se afirma que el criterio de homogenización que se utiliza para hablar de un territorio como región varía enormemente: bien puede ser económico, si se enfatiza en la homogeneidad de las formas que adquiere la producción y el intercambio de bienes; socio-cultural, si se hace hincapié en las formas de vida, tradiciones, usos y costumbres de los habitantes del territorio; natural, si se quiere resaltar la homogeneidad geográfica del hábitat; político, cuando el análisis se centra en las estructuras de poder y administrativas que norman la vida de un lugar; o histórico, si se hace énfasis en la trayectoria de los habitantes en el territorio. Esa “arbitrariedad” con la que se define el criterio de homogenización, en cualquier caso, parecería sumar a la idea de que, en efecto, el concepto de región es un mero constructo teórico que no guarda necesariamente un correlato con la realidad social que es objeto de estudio (Mamián Guzmán, s.a.).

Esta tesis considera que todas las facetas de lo regional enunciadas (lo geográfico, lo socio-cultural, lo económico, lo político) deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar la construcción dinámica de lo regional, pues la región es un área de actividades interrelacionadas en la que todos estos factores y elementos confluyen en la determinación de la significación del territorio. Esto no implica que aquellos principios de homogenización sean caprichosos, sino que todos son relevantes y ninguno debe ser soslayado. Resulta esclarecedor, por tanto, perfilar las distintas dimensiones de lo regional y su interacción mutua.

Primero, se encuentra la dimensión geográfica, a la que alude la frecuente definición de las regiones en virtud de sus características naturales o geográficas, sustentada sobre su *ubicación*, aún cuando la delimitación geográfica y ecológica de la unidad del espacio pueda ser difícil y esté sometida a constantes modificaciones. Por demás, es evidente que las condiciones naturales del espacio determinan las formas de vida colectiva de sus pobladores. Por ejemplo, la "fragilidad" de los suelos de la selva amazónica da lugar a formas de vida "dispersas", claniles, aestatales y trashumantes; a diferencia de la Sierra, donde los condicionamientos geográficos hacen imposible un cacicazgo, un principio de sucesión automático unilineal o grupos estables y sedentarios. En líneas generales, es

admitido que sobre la base de estructuraciones geo-ecológicas se modelan, recrean y reproducen la cosmovisión y la estructuración sociológica y política de sus pobladores. Sin embargo, las condiciones naturales y geográficas de una región no tienen siempre la misma relevancia para las formas de vida de sus pobladores:

A manera de ejemplo, como lo describe Dolfus y lo desarrolla Palacios, en el Virreinato de la Nueva Granada, en Santa Fe de Bogotá, el nivel tibio y húmedo entre los 1,000 y 2,000 m.s.n.m. no tenía importancia estratégica; además, estaba muy poco poblado y casi completamente cubierto de selva. Pero a mediados del siglo XIX, empieza a jugar un rol central en la economía y la vida colombiana y en el siglo XX el nivel de sus cafetales aseguraba la mayor parte de las exportaciones colombianas. Actualmente es allí donde viven varios millones de colombianos. (Mamián, s.a., p. 13)

Más aún, a pesar de que las características naturales del espacio condicionan la vida en él de sus habitantes, no son esas características las que explican la riqueza de una sociedad o su organización social. En el mundo contemporáneo, es posible sostener que las sociedades con sus sistemas políticos, culturales y económicos definen la naturaleza y la geografía. Esto significa que la naturaleza y la sociedad están inter-relacionadas determinándose y configurándose de manera mutua en una red de interacciones continua. En palabras de Mamián, la región “es el conjunto de 'espacios producidos' a partir de los diferentes medios naturales, de cómo son utilizados y percibidos por las poblaciones, de cómo son enfrentados o evitados en los retos y dificultades que presentan” (*Ibíd.*, p. 43).

En segundo término, se encuentra la dimensión política, usualmente entendida “como la autonomía de poder que posee un grupo socialmente asentado en un lugar, independiente o subalterno dentro de un poder y territorio político mayor, en el siglo XIX, el poder y territorio político del Estado republicano o del Estado "nacional”” (*Ibíd.*, p. 50). Esto quiere decir que la dimensión política de la región estaría definida por la capacidad de una dirección local de tomar determinaciones particulares en relación con el poder político general del Estado. Sin omitir, por supuesto, que esa capacidad tiene limitaciones impuestas por éste. En este sentido, la dicotomía región-Estado será determinante, por cuanto el Estado implica a la región y la región es parte e instrumento de aquél. Lo regional, en otras palabras, es un elemento estructural en la articulación de lo nacional, lo estatal y lo central. Dicha dicotomía, a su vez, explica la abundancia de análisis sobre la relación conflictiva

entre los proyectos políticos de integración nacional provenientes de lo central y la autonomía de los proyectos y poderes regionales y locales, a la que aludimos.

En la tensión entre los órdenes regionales y nacionales, se establecen dos tipos de acercamientos también en disputa: por un lado, la hegemonía de los análisis enfocados “desde arriba”, desde lo central hacia lo regional; y por otro lado, los análisis que intentan confrontarlo, con análisis “desde abajo”. Estos últimos enfatizan el rol de la cultura política popular y en la descentralización del Estado, en coherencia con los estudios postcoloniales. La política de integración o de unificación estatal monárquica, republicana o nacional, definida por la articulación de un sistema de dominación y administración centralizado, tropezó con las fuerzas centrífugas de las configuraciones locales y regionales, en las que sobresalen estructuras mentales ligadas con estructuras jurídico-políticas y sociales tradicionales como la familia y la religión, la etnicidad y la cultura; entrevistas como resistencia al poder nacional que supuso una tremenda inestabilidad institucional. Por lo mismo, es insuficiente acercarse a lo regional desde el marco de referencia del Estado, buscando en cambio articularlas con una perspectiva que estudie las culturas y formas de vida locales, como las maneras en que se habita el territorio.

La dimensión económica de lo regional, en tercer lugar, está ligada, con la facultad autónoma de producir y controlar sus propios recursos, de subsistir ante los vaivenes de las fuerzas externas, o la capacidad de articular un sistema económico y social regional, frente a las disposiciones estatales y nacionales, a las fuerzas de ocupación territorial o al mercado nacional e internacional. Esto alude al desarrollo de intereses que resultan de la integración y de la diferenciación de la actividad económica en un territorio definido. Las diferencias con respecto al peso de esta dimensión, aluden al criterio de homogenización que hace de una región una “región económica”. La hegemonía centralista, librecambista y estatista, ligada a las teorías de la modernización en sus diferentes matices, fue imponiendo el Estado y la nación a la región y estableciendo, desde esos mismos parámetros económicos y político-ideales, una dicotomía entre la nación y el Estado –ligados al desarrollo, a la modernidad, la apertura al exterior, al ideal o utopía, por un lado, y la región –vinculada al atraso, a la tradición, a la economía de subsistencia, etc., por otro lado.

Cuestionar la dicotomía *nación-desarrollo/región-atraso* es centro de este acercamiento. Permite acercarse a la dinámica económica desde la vida local y regional, sin reducirla a la influencia del Estado y de lo global, aunque sin olvidarlas. De nuevo, la idea aquí es recuperar el lugar del espacio y de la cultura, determinante del primero, en las maneras de producción e intercambio en un territorio.

La dimensión histórica, que remite a la advertencia de continuidades y rupturas, es la cuarta dimensión que se recuerda. Ella está indefectiblemente entrelazada a las trayectorias socioculturales de los pobladores de un territorio, como ya se ha anunciado. Aquí de nuevo es necesario centrarse en la interacción mutuamente determinante entre lo nacional sobre lo regional y las dinámicas locales culturales y sociales propias del territorio, en la definición de la configuración regional. En síntesis, la región se conceptúa como un espacio históricamente constituido que es producto de las relaciones sociales y de patrones de dominación imperantes en las sucesivas etapas históricas de su desarrollo.

Los análisis regionales se han incrementado en la última década. Los debates sobre las limitaciones del concepto o sobre sus abundantes e inconexas definiciones hacen parte de las discusiones entre académicos, planeadores y expertos en el tema. Una de dichas limitaciones es la comprensión de lo regional como un “enfoque” y un “escenario”, que han implicado dejar de lado la práctica y la vitalidad que están relacionadas con su construcción social. A la vez, este último acercamiento redundante en una incapacidad para delimitar el campo de estudio de lo regional, creándose un problema, también presente y común a otros conceptos de las ciencias sociales que, en su ánimo comprensivo, definen “todo” y “nada” al mismo tiempo.

La región como un enfoque está ligada al campo de análisis de variables económicas y geográficas. La región como método está ligada a las propuestas de construcción de modelos especialmente dirigidos a los planes de ordenamiento territorial. La región como propuesta social de las poblaciones está relacionada con su concreción en prácticas y discursos, así como con intervenciones organizadas que definen y adscriben a “lo regional” concreto-vivido.

En el desarrollo de esta investigación se reconoce la limitación de comprender lo regional como un “enfoque” restringido a una comprensión estadística y de división espacial, tan caro a los funcionarios estatales de planeación (como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- o el Instituto Colombiano de desarrollo Rural - INCODER); o su definición como “escenario”, previamente delimitado por una serie de características geográfico-económicas, pregonada en las investigaciones positivistas y funcionalistas. Se busca aportar a una definición de región que la comprenda como expresión de la movilización social; esto es, por la forma como sujetos y actores sociales disponen de un repertorio de pensamiento y de una práctica social en los cuales “lo regional” pretende ser entendido como delimitación de sus posibilidades de organización y de relaciones sociales; entendiendo a estas últimas, como los procesos inter-generativos de relaciones productivas, construcciones territoriales, ejercicios de poder, y sentidos y significados culturales.

Los trabajos realizados por Germán Colmenares (1973) estuvieron dedicados en buena parte a resaltar el papel de la historia regional en el análisis de las formaciones sociales. A enfatizar en que la autonomía relativa de determinados espacios sociales es suficiente sustento para proceder a su respectivo estudio (Almario, 1972). Lo que realmente define y determina la región son las actividades que el hombre realice y la manera como las lleve a cabo en y frente a un espacio geográfico. Se trata de actividades de orden económico, sociológico, étnico y cuya abstracción, en sus manifestaciones específicas, podrá dar lugar a la construcción conceptual de regiones (Zuluaga, 1993). Pero no es un agregado, vale la pena añadir, sino una síntesis de tales prácticas sociales, dado que es un campo en juego, un escenario de confrontación, una matriz social en disputa.

Trasegar de la concepción de “región”, como una realidad naturalizada y terminada, hacia una noción de “lo regional” como un proceso vivo e inacabado que se va conformando desde la práctica social en un campo de tensiones, es búsqueda de este trabajo. Este reconocimiento obliga a comprender “lo regional” desde múltiples perspectivas y dimensiones que ya han sido descritas. Una concepción relacional de las emergencias regionales puede ayudar a comprender sus dinámicas regionales, así como a aportar en la formulación de propuestas que apunten hacia la recreación de un proyecto histórico distinto

de “construcción de nación” en Colombia. La formulación de las particularidades y singularidades regionales es determinante para lograr una formulación más rigurosa de la formación social y de los entramados que acarrearán los proyectos de globalización actuales; y para el caso colombiano, permite aportar herramientas para interpretar el devenir del conflicto político y militar, también.

1.3. De movilización social y lucha social

1.3.1. Movimiento social y movimiento popular

Es posible iniciar el recorrido por las teorías y acercamientos a los movimientos sociales con su aparición en los Estados Unidos desde los años 60, cuando se presentan las teorías de las “conductas colectivas” y de la “movilización de recursos”. Continuar con un análisis sobre la manera como fueron redefinidas estas aproximaciones en Europa, durante la siguiente década, bajo el nombre genérico de “nuevos movimientos sociales”, en el interior de la sociología de la acción. Y concluir con la noción de lucha social con la cual se trabaja en esta investigación.

La noción de “conductas colectivas”, desarrollada en la obra de Smelser (1989), presenta a los actores colectivos “no institucionales” desde una visión negativa. Categorías como “irracional”, “espontáneo”, “marginal” y “primitivamente organizado” son utilizadas para caracterizar las conductas colectivas en comparación con las formas institucionales de regulación social. Su utilización limitada a las explicaciones de naturaleza psicológica y a la noción de “sociedad de masas”, en donde se propone la disfuncionalidad de la acción colectiva, deja por fuera del análisis de los movimientos sociales las preguntas sobre las identidades de los actores colectivos cuya respuesta es necesaria para comprender el paso de una acción individual a una acción colectiva.

La segunda escuela revisada es la que sugiere estudiar la acción colectiva desde la movilización de recursos. Esta corriente surgió en Estados Unidos de Norte América durante los años 60 cuando se demostraron los límites de la democracia participativa. Nuevas formulaciones surgen, como los trabajos de Oberschall (1973) y Olson (1992), los

cuales dieron pauta para pensar los movimientos sociales desde la óptica de la acción colectiva y no desde el balcón de un sistema social autorregulado. Esta propuesta ofreció la posibilidad de comprender, a partir de investigaciones empíricas, que las organizaciones colectivas tenían en su base grupos con altos niveles de organización y autonomía. De tal manera, la relación “institucionalidad-racionalidad” y “no institucionalidad-irracionalidad”, perdería su valor analítico. Para Olson, las prácticas sociales tenían en su raíz el mismo tipo de racionalidad de corte económico que permitiría calibrar la acción en un balance de costos y beneficios. Al mismo tiempo, los recursos serían entendidos como bienes utilizables e intercambiables dentro de los procesos de integración y participación en el sistema político. En este análisis se incluyen factores políticos, organizacionales y estratégicos (Olson, 1992).

Aunque la teoría de la movilización de recursos partía de elaborar una “concepción positiva de los movimientos sociales”, en relación con su papel en la democracia, presentando mayor atención en el conflicto, “la noción de orden y de equilibrio es desplazada por la imagen de una telaraña de acciones racionales, implementadas por individuos y grupos que buscan objetivos precisos y que para conseguirlos movilizan recursos sociales” (Múnica, 1993, p. 58). Estos objetivos, tendrían como mira la integración al sistema político y la ampliación de la influencia sobre las decisiones que determinan la vida social. Así el movimiento social aparece como un instrumento que “utilizan” los actores para satisfacer sus intereses individuales y participar en el sistema político con la finalidad de controlarlo y utilizarlo para sus intereses particulares.

Entre una y otra concepción, los movimientos sociales son considerados como las acciones colectivas de los excluidos de un sistema social al que pretenden incorporarse. Para los primeros, son obstáculos a la modernidad y para los segundos, son agentes de cambio obstaculizados por intereses conservadores. El hecho de que ambas posiciones encuentren en las exclusiones e integraciones el motivo mismo de las movilizaciones, lleva a que en estas teorías el sistema quede fuera del conflicto, y a que el cambio social repose sobre una “capacidad sistémica de adaptación” que es independiente del campo de acción de los movimientos sociales. Así, se renuncia explícita e implícitamente a afrontar la pregunta sobre el significado de las orientaciones culturales que definen la acción y sobre el efecto

que la confrontación, la integración o la contradicción entre ellas, tiene sobre el sistema de relaciones sociales.

Por otra parte, en las teorías europeas, la identidad de los actores colectivos y la orientación cultural de sus acciones juegan un papel preponderante. La obra de Alain Touraine constituye el esfuerzo más sistemático de la sociología de la acción y es el punto de referencia para comprender a otros autores como Melucci, Pizzorno, Cohen y Habermas. La comprensión de la sociedad como un sistema de acción, le permite a Touraine obviar la discusión que suponía la concepción de un orden social fundamentado en valores compartidos. Desde esta posición, los movimientos sociales son “acciones colectivas organizadas y normativamente dirigidas”, en virtud de las cuales los actores de clase luchan por la dirección de la historicidad o por el control del sistema de acción histórico. La historicidad es el trabajo que la sociedad cumple sobre ella misma guiada por grandes orientaciones culturales, representadas en tres modelos: (1) de acumulación o inversión, (2) de conocimiento, y (3) cultural. El sistema de acción histórico es un elemento de la historicidad, al lado de las relaciones entre clases y está caracterizado por el modo en que los tres modelos se imponen sobre las prácticas sociales (Touraine, 1997) .

En esta aproximación, los movimientos sociales se transforman en los actores privilegiados del conflicto por el control y la orientación de los modelos que constituyen el “sentido societal” (“el sentido del conjunto de lo social”). Como actores de clase, pasan a ser los principales agentes de la producción de la sociedad. Por este camino la acción entra a ser parte de lo estructural, un espacio que para los funcionalistas está reservado al orden y a los recursos del contexto social. Los movimientos sociales son vistos como sistemas organizados complejos, conformados por individuos que orientan y otorgan significado a sus actos, de acuerdo con sus prácticas sociales y con la representación que hacen de ellas. Para Touraine sería indispensable la existencia de un conflicto para que una acción organizada sea entendida como movimiento social. Pero aquí el conflicto debe tener una “centralidad social”, es decir, enfrentar a actores de clase por el control y la orientación del sentido societal, lo cual no impide la pluralidad de manifestaciones y de campos conflictuales. Al contrario, implica pensar que el conflicto se desarrolla en una

multiplicidad de escenarios sociales y con intensidades que varían en el conjunto de la acción colectiva.

En términos metodológicos, Touraine establece tres principios básicos: (1) la identidad o la definición del actor por sí mismo, (2) la oposición que caracteriza al adversario, y (3) la totalidad o la elevación de las reivindicaciones particulares al sistema de acción histórico (*Ibíd.*). A partir de esta aproximación el movimiento social pasa a ser un fin para los actores individuales y deja de ser sólo un medio como en el paradigma de la movilización de recursos. Es también, un replanteamiento de la relación entre la acción colectiva y las clases sociales. Siguiendo a Mouffe y Laclau (1987 y Laclau, 2011), se presenta como una ruptura frente al determinismo que pretendía convertir a las clases en agentes pasivos de las estructuras y a la acción política, en la aplicación del conocimiento objetivo de los políticos profesionales; al tiempo que es una propuesta que da proyección cultural al análisis de clase marxista. Estas teorías plantean que la acción colectiva no puede ser deducida de las estructuras. En consecuencia, el estudio de las clases sociales no resuelve el de las prácticas sociales y la sociedad no puede ser reducida a un principio fundamental e independiente de los actores. Así, los movimientos sociales, pasan a ser el núcleo de las ciencias sociales y el actor social entendido como un “sujeto social no constituido”, que solo puede ser entendido en sus diferentes posiciones. Dentro de esta concepción, las clases serían una de ellas, sin ser la principal.

Vale la pena traer a colación que el concepto de “historicidad” de Touraine supone la existencia de un sentido social compartido por las clases, que solo da cabida al conflicto negociable. Vale la pena recordar aquí la noción de contradicción de Marx para entender los conflictos en los cuales se disputan los sentidos históricos de la sociedad, según la cual los actores se excluyen mutuamente ante la imposibilidad material de conciliación de sus intereses. En cambio, Touraine sólo hablaría del conflicto como expresión de la oposición dentro de los límites estructurales de la sociedad, no de su transformación. A lo cual habría que agregar

Leopoldo Múnera, en Colombia, plantea tres incongruencias en Touraine, sobre las cuales sustenta su propuesta: (1) al convertir a los movimientos sociales en las conductas de clase que producen y transforman la sociedad, no logra responder a su fragmentación y

heterogeneidad; (2) mediante este mismo proceso, hace de los movimientos sociales un actor colectivo como sujeto privilegiado de producción y de transformación de la sociedad, recayendo en la misma crítica que le hacía al marxismo frente a la noción de “proletariado”; y (3) para Múnera, Touraine confunde un tipo “ideal-lógico” con un tipo “ideal-práctico” al definir en su análisis más el deber ser de un movimiento social que lo que es o representa su práctica (Múnera, 1988). Convierte desde allí al movimiento popular en una categoría analítica, en un instrumento de investigación de la acción colectiva de las clases populares. En sus palabras unas pautas como “guías para reconstruir, interpretar y explicar” (Múnera, 1993, p. 58). Su punto de partida es la noción de articulación, que implica que el movimiento social sea cualitativamente distinto de las acciones colectivas que lo componen. Propone comprenderlo en tres dimensiones: (1) el proceso de articulación entre actores individuales y colectivos, (2) el ámbito concreto de relaciones sociales y la acción colectiva en la que coexisten el sentido de acuerdo con valores y (3) la racionalidad instrumental y lo simbólico afectivo (Múnera, 1988).

La articulación de individuos colectivos como actores diferencia a los movimientos sociales de otras formas de acción colectiva, es entendida como un proceso social y no simplemente como un hecho institucional. Así mismo, la permanencia en el tiempo de los movimientos sociales depende de la integración cambiante de los actores en relación con los intereses, los símbolos y las orientaciones de sentido heterogéneas, que son convertidas en objetivos comunes entre una pluralidad de actores. Por lo tanto, no implican la realización continua de un objetivo predeterminado. La permanencia de los movimientos sociales viene dada por la continuidad de la dinámica de integración que define su articulación y no por la acción interrumpida de una acción colectiva común. No es por tanto, “un encuentro de actores, sino de diferentes cauces comunes seguidos por esos actores, cauces que confluyen o no”. Aquí, será la “dinámica de la integración”, la que definirá la especialidad de la articulación. Así, podrá ser: local, regional o nacional. Con esta idea, Múnera critica el principio de “totalidad” de Touraine y enfatizando en tres tipos de relaciones: las de articulación, oposición y exclusión. Los movimientos sociales son ámbitos concretos de relaciones sociales, en torno a los cuales son construidas las identidades de los actores que los conforman. A partir de estas nociones Múnera establece su definición de movimiento popular como “un particular movimiento social generado por el proceso de articulación de

acciones y actores, colectivos e individuales, pertenecientes a las clases populares o reunidos en función de ellas, dirigido a controlar y orientar uno o varios campos sociales en conflicto con las clases y los sectores dominantes, o con una parte de ellos.” (*Ibíd.*, p. 65)

Para desarrollar esta definición en términos analíticos, Múnera establece una diferenciación entre las nociones de clase y sector. Los diferentes intereses que constituyen a los actores, así como las diversas formas en que estos mismos se ligan a los movimientos sociales, hacen que la noción de “clase popular” no pueda ser unívoca. Por esto mismo, Múnera propone un camino metodológico que vaya de la “clase” a los actores y movimientos sociales, para reconstruir el nexo que existe entre la posición que ocupan los actores populares en los sistemas de relaciones sociales y la acción que lleva al movimiento popular. Para el caso del movimiento popular, la posición de los agentes como clases, determina el tipo de actores que lo componen, pero no el sentido de su acción, el cual es definido en el conjunto de interrelaciones internas y externas que le dan forma. Recuerda Múnera la diversidad y complejidad de los actores y de la composición misma de los movimientos populares, para afirmar que los movimientos populares no sólo están integrados por agentes populares y que los agentes populares están en otros movimientos sociales distintos al movimiento popular. Por ende exige el estudio de las relaciones de poder que están en su base, así como las relaciones al interior del movimiento popular no escapan a la reproducción de las orientaciones culturales, los valores, las prácticas y las jerarquizaciones de los modelos de “sentido societal” dominante. Finalmente, Múnera establece que es necesario comprender tres niveles de articulación: (1) las relaciones entre las clases dominantes y las clases populares; (2) la relación entre actores de una misma clase o entre actores definidos por diferentes posiciones y (3) la relación entre actores de un mismo movimiento. Con esta propuesta se podrá establecer una relación entre la acción social, las motivaciones individuales, las construcciones de sentido y culturales, y las distintas dinámicas sociales; entre ellas son claves: el conflicto, la contradicción y la transformación social.

1.3.2 El movimiento social, repertorios, motivaciones: “el poder en movimiento”

Es importante para la perspectiva del análisis de los movimientos sociales acercarnos a la escuela particularista desarrollada principalmente por Charles Tilly, el enfoque de Riechmann y las definiciones de Melucci (1994), así como la perspectiva de análisis de Arturo Escobar. Charles Tilly se centra en las motivaciones individuales que llevan a las personas a participar en los movimientos sociales, introduciendo el elemento de “las oportunidades específicas”. Para Tilly las oportunidades varían dependiendo de las circunstancias históricas y culturales, por lo que añade la dimensión del contexto histórico en sus estudios (Tilly, 1978).

Un enfoque brindado por la conjunción de los elementos no excluyentes de distintas teorías como el propuesto por Reichmann es de enorme utilidad para el estudio de las relaciones de poder que se generan al interior de estos movimientos (Riechmann y Fernández, 1994, p. 30). Según este autor, los rasgos o características comunes de los nuevos movimientos son su carácter emancipatorio y su orientación antimodernista. La primera característica surgiría en la medida en que estos nuevos movimientos sociales se constituyen como reacción frente a los problemas derivados de un proyecto “deshumanizante”, “una reacción defensiva contra las intrusiones y distorsiones que le son impuestas por los procesos de racionalización sistemática derivados del sistema capitalista” (Dalton y Kuechler, 1992, p. 285). Y la segunda porque “no comparten la concepción lineal de la historia, la creencia en el progreso entendido como desarrollo material y moral interminable” (Riechmann y Fernández, 1994, p. 63). Esta característica, estrechamente relacionada con la anterior, hace referencia a las rupturas que representan muchas de las propuestas de los nuevos movimientos sociales frente a la inoperancia de los imperativos que tradicionalmente han determinado el pensamiento social de la modernidad.

Por su parte Melucci destaca que estos movimientos funcionan bajo la lógica de un “funcionamiento a dos polos: la fase de latencia o el momento de construcción de significados y códigos diferentes a los que prevalecen en una sociedad, y la de emergencia, cuando los grupos se enfrentan a la autoridad política, fase que tiene como función simbólica indicar al resto de la sociedad un problema específico y la

lógica dominante del sistema” (Melucci , 1994, p. 147).

Desde otra perspectiva, Arturo Escobar afirma que los movimientos sociales como movilización colectiva, surgen en la intención de reconfigurar las relaciones sociales que han sido marcadas por los proyectos dominantes de desarrollo y construcción de nación. Éstos se convierten en una nueva forma de pensar lo político no sólo como ejercicio de poder sino como cuestionamiento a las desigualdades sociales (Escobar, 2001 y 2010b). En el fluir entre la movilización social al movimiento y a la acción social, se establece una lectura de lo político, creando discursos, dinámicas y tensiones relacionadas con la construcción de identidad, el poder y la autonomía local. En tal sentido, las experiencias organizativas y de movilización de una comunidad son una construcción social, enmarcada en debates sobre los procesos de construcción de nación, regionalización y desarrollo.

El reconocimiento de la capacidad de agencia social, de protagonismo de grandes capas de la sociedad en las vidas locales, regionales, nacionales e internacionales, concretado en procesos de movilización como resultados de la acción social, es hoy en día un punto de encuentro a nivel teórico y político (Agnew y Duncan, 1989; Escobar 2001 y 2010b; Harvey 2005; Oslender, 1999 y 2004; Offe, 1988). Olzak (2006), intenta caracterizar las formas generales que los procesos de movilización adquieren a nivel global en cuatro grandes cuerpos, que se constituyen en un punto de partida para la discusión que se quiere presentar: (1) movimientos regionales que incluyen movimientos separatistas, nacionalistas, por las autonomías regionales y por el control de territorios ancestrales; (2) movimientos por los derechos civiles, que demandan la expansión de los derechos civiles y económicos de un grupo; (3) movimientos antagonistas en contra de oponentes étnicos que incluyen ataques colectivos que comprenden el genocidio y las limpiezas étnicas, entre otras; y (4) el nacionalismo que intenta unificar diversas culturas.

En el abordaje de tales procesos, Tarrow (2009) plantea que un movimiento social se produce con el despliegue de acciones y estrategias apoyadas en redes sociales y símbolos culturales, que deben darse de manera sostenida. El movimiento se define desde aquí como secuencias de acción política, basadas en redes sociales internas y marcos de acción, que desarrollan la capacidad de desafiar a oponentes poderosos, como las elites y las autoridades. Frente a estos últimos se definen los intereses de sus adversarios como

denominador común, que permite el reconocimiento de una comunidad de intereses, que traduce la acción en movimiento. Esto es lo que Tarrow denominará como “el poder en movimiento”. Para mantener la acción a través de redes, los líderes adaptan, inventan y combinan distintas formas de acción con el propósito de estimular el apoyo de la gente. En tal camino, se renuevan formas de acción heredadas o bien poco frecuentes, habituales o poco familiares, aisladas o que son parte de campañas concertadas. En tal sentido, Tarrow argumenta que cada grupo tiene una historia y una memoria de la acción colectiva, que despliega y renueva en los momentos que lo requiere.

En síntesis, un movimiento implica desde aquella posición un conjunto de “desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades” (Tarrow 2009, pag. 26). Por su parte, Melucci sostendrá que es posible describir la existencia de un “movimiento” cuando la acción que está basada en la solidaridad desarrolla un conflicto, es decir, rompe los límites normativos del sistema (Melucci, 1985).

Tal composición múltiple y diversa de motivaciones, vuelven importante la pregunta sobre el sujeto de la movilización. El sujeto estratégico es comprendido en términos generales como aquel configurado por un proyecto motivado, que busca unos objetivos delimitados, cuenta con una organización y con recursos de diverso tipo que le permiten desarrollar la acción colectiva. Para lograr sus objetivos evalúa las circunstancias políticas en términos de costos y beneficios (Mcadam, Tarrow y Tilly, 2005; Touraine 1981, 1997, 2005). En este proceso, jugarán un papel importante los procesos de construcción de identidad, como agregará a nivel global Olzak (2006) y para el caso de las comunidades negras, Arturo Escobar (1997a, 1997b, 1999, 2008).

Con frecuencia, la durabilidad de los movimientos se conceptúa a través de la comprensión de los ciclos de protesta, al decir de Tilly; los que serán entendidos como series de tiempo asociadas con factores estructurales, que para algunos tendrán un “comportamiento político”. Estos ciclos se relacionan con la estructura de “oportunidad política” (Eisinger, 1973), la que a su vez será definida como la “función de probabilidad que tienen los grupos de acceder al poder y de manipular el sistema político”. Se refiere entonces a la apertura y cierre del sistema político generadas con las crisis de las alianzas en los sectores de poder y

con los factores favorables a nivel internacional, para las demandas de los movimientos sociales. Tal concepción implica que la gente actúa cuando tiene la oportunidad de hacerlo (Tilly, 2005).

Los movimientos sociales en estos autores se convierten en una forma de ampliar las nociones de lo político, en términos de que el ejercicio del poder se puede entender como cuestionamiento activo por parte de quienes sienten o sufren condiciones de desigualdad y exclusión, en un marco concreto de oportunidades en donde pueden poner a jugar sus intereses, necesidades y deseos. Estos últimos se pueden plantear como repertorios de acción y en tal sentido, hacen parte de procesos de construcción social sobre identificaciones que no son necesariamente estáticas. A esto último alude la afirmación de “poder en movimiento”.

En *El poder en movimiento*, Tarrow busca aportar un marco teórico general para la comprensión de los movimientos sociales dentro de la categoría general de acción política colectiva. Ese marco teórico permite relacionar la acción política colectiva, la movilización social y la construcción social de lo regional. En términos generales, restringe el término de movimiento social para “aquellas secuencias de acción política basadas en redes sociales internas y marcos de acción colectiva, que desarrollan la capacidad para mantener desafíos frente a oponentes poderosos” (Tarrow, 2009, p. 24). El rasgo esencial e irreductible de los movimientos sociales reside en su carácter *contencioso*, independientemente de las formas concretas que adopten. El carácter contencioso emerge “cuando [la acción colectiva] es utilizada por gente que carece de acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se conduce de un modo que constituye una amenaza fundamental para otros o las autoridades” (*Ibid*). Tal carácter no deriva de que sean inherentemente violentos o extremistas, sino del hecho de que la acción política colectiva es el medio con el que cuentan los desposeídos y excluidos del poder político. De hecho, los movimientos sociales no se limitan a protestar: construyen organizaciones, elaboran ideologías, crean identidades. En líneas generales, los movimientos sociales son “desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades” (*Ibid*, p. 26). Veamos lo que entraña esta definición.

El tipo de acción colectiva que define a los movimientos sociales está dado, en primer lugar, por el desafío que plantean a las élites, las autoridades, los códigos y roles culturales y sociales, a través de la interrupción, la obstrucción o la introducción de incertidumbre en las actividades de los otros, como anota Tarrow. Generalmente, este desafío es de orden público, pero puede expresarse a través de símbolos como la vestimenta, la música y, en general, por medio de pautas de comportamiento privado que representan un objetivo colectivo. (*Ibíd.*, p. 26). En cualquier caso, más allá de la forma concreta que adopta el desafío, los movimientos sociales recurren a la acción política colectiva, organizándola y orientándola, por ser el recurso del que disponen para enfrentar adversarios más poderosos. El desafío les permite convertirse en punto de referencia para sus seguidores, creando un colectivo del que se convierten en portavoz, así como para llamar la atención de sus oponentes.

Otro rasgo, que explica por qué las personas se agrupan en movimientos sociales, y que es esencial a ellos, es que en la base de las acciones políticas colectivas se encuentran intereses, objetivos y valores comunes, que se solapan, suplementan o complementan entre sí. Esta consideración tan elemental nos libera de perspectivas que encuentran los motivos básicos de la movilización social, como señala Tarrow, en el espíritu lúdico o festivo de “desafiar a la autoridad” o en el “sombrio frenesí de la turba”. Sin embargo, la mera comunidad de intereses o valores no repercute en la emergencia de movimientos sociales, y esto nos lleva a otro rasgo prominente para descifrarlos. En efecto, “los líderes sólo pueden crear un movimiento social cuando explotan sentimientos más enraizados y profundos de solidaridad o identidad”. Sin dichos sentimientos los movimientos sociales no pueden prolongarse y mantener su desafío a las autoridades contra las que se movilizan, y, de hecho, recordemos que la capacidad de mantener esos desafíos es crucial para pasar de las meras secuencias de acción colectiva a la formación de un movimiento social propiamente dicho: “un episodio de confrontación sólo se convierte en movimiento social merced al mantenimiento de la acción colectiva frente a los antagonistas” (*Ibíd.*, p. 27-28). Si no permanecen los movimientos sociales se diluyen, perdiendo la capacidad de plantear desafíos efectivos de resistencia.

Estos tres rasgos de la definición de movimiento social: el desafío, la comunidad de intereses, y la solidaridad e identidad que generan y que les permite prolongarse y mantener su oposición a quienes ostentan la autoridad y el poder, son esenciales para situar analíticamente el movimiento social. Ahora bien, ¿cómo cristalizan secuencias o episodios de acción colectiva en movimientos sociales? Tarrow contesta a esta pregunta, con la tesis –central a su libro:

la gente participa en acciones colectivas como respuesta a un cambio en la pauta de las oportunidades y restricciones políticas y, mediante el uso de la acción colectiva, genera nuevas oportunidades, que serán aprovechadas por otros en ciclos de protesta cada vez mayores. (*Ibíd*, p. 45)

Cuando Tarrow habla de “oportunidades políticas” hace referencia a las dimensiones y coyunturas de un entorno político que incentivan o fomentan la acción colectiva entre la gente. De la misma manera, habla de restricciones políticas refiriéndose a aquellos factores que desincentivan dicha acción. Siguiendo esta línea de pensamiento Tarrow acuña el término de “estructura de oportunidades políticas” para referirse al conjunto de restricciones u oportunidades que desincentivan o fomentan la acción colectiva. Pero este término no hace alusión a un “modelo fijo que produce inevitablemente movimientos sociales, sino [que alude a] una serie de claves para prever cuándo surgirá la acción colectiva, poniendo en marcha una cadena causal que pueda finalmente conducir a una relación mantenida con las autoridades y, por tanto, a los movimientos sociales” (*Ibíd*, p. 46). De esta forma, dicho concepto alude al conjunto de recursos exteriores al grupo que pueden ser explotados en el surgimiento de los movimientos sociales. Estos emergen, precisamente –de acuerdo con nuestro autor– cuando la gente, muchas veces alentada por líderes políticos, responde a cambios en la estructura de oportunidades políticas, descubriendo sus fortalezas y capacidades, así como las deficiencias y vulnerabilidades de quienes enfrentan.

Traigo a colación el concepto de estructura de oportunidades políticas y su relevancia para la comprensión de la aparición y consolidación de los movimientos sociales porque nos permite resaltar un aspecto central de esos procesos de mucha importancia para esta investigación: “Lo mismo que sucede con los ritos religiosos o las celebraciones cívicas, la acción política colectiva no se origina en las cabezas de sus organizadores, sino que se

inscribe culturalmente y se comunica socialmente”. (*Ibíd.*, p. 46) Dicho concepto pone de manifiesto que las condiciones que ponen en marcha los movimientos sociales no son monológicas: es decir, originadas en los individuos de manera aislada, sino que emergen en un contexto social. Otro tanto puede afirmarse del repertorio de acciones colectivas con el que cuenta un movimiento social, es decir, el conjunto de acciones disponibles o realizables, dentro del margen de lo posible –en un sentido material, pero también ideológico y lógico– de un grupo social: “Las convenciones aprendidas de la acción colectiva forman parte de la cultura pública de una sociedad. Los movimientos sociales son depositarios del conocimiento de secuencias específicas de la historia de una sociedad” (*Ibíd.*).

Interesa resaltar cómo la historia, las costumbres y en general las prácticas y los usos sociales de una comunidad de personas, así como la estructura política de la sociedad en que está inscrita, determinan las formas que adopta la movilización:

Cada grupo tiene una historia –y una memoria– propia de la acción colectiva. Los trabajadores saben cómo hacer huelga porque generaciones de trabajadores la han hecho antes que ellos; los parisienses construyen barricadas porque las barricadas están inscritas en la historia de las revueltas de esta ciudad; los campesinos se apropian de la tierra enarbolando los símbolos que sus padres y abuelos usaron antes que ellos (*Ibíd.*).

Pero si es cierto que la historia, forma de vida e imagen del mundo de un grupo determina su repertorio de acción política y las formas de su movilización, de la misma manera es posible afirmar dicha relación en la dirección opuesta: es decir, que la movilización social surca e informa la historia, la forma de vida y la imagen del mundo de un grupo.

Es por esta doble relación de dependencia e inteligibilidad entre las formas de vida y prácticas sociales de un grupo, por un lado, y sus formas de acción política colectiva y de movilización, por otro, lo que permite hacer hincapié en la adecuación de la noción de “lucha” para conceptualizar las dinámicas de movilización social y de construcción social de lo regional. Pues lo que se pone de manifiesto es que la lucha, entendida como la pugna por salir adelante y sobrevivir día a día, es parte de los procesos de configuración regional, y viceversa. El recorrido etnográfico que se realiza en el capítulo 2 contribuye a aprehender las relaciones recíprocas entre movilización social y cultura que, en buena medida, dan

sentido a lo regional. Para ello esta tesis se concentra en una serie de episodios de movilización social surgidos desde mediados de la década de los ochenta, que en la siguiente década expresan sus contenidos regionales; así mismo, en la primera década del siglo XXI generan una serie de efectos sobre la vida de los pobladores y constituyen propuestas de resistencia, autonomía y de ordenamiento territorial. Estos últimos se sustentan en sus capacidades y oportunidades de constituirse en constructores de configuración regional.

Al mismo tiempo, lo anteriormente enunciado, permite avanzar con la noción de acciones colectivas y sus respectivas motivaciones e identificaciones, en general integradas a marcos de ciudadanía y de búsqueda de reconocimiento y derechos. Se propone entender también las implicaciones que tiene el proceso histórico que sitúa la relación entre clase social y lucha social dentro del proceso de configuración regional. Las concreciones de una estructura de desigualdad y de exclusión de la diversidad cultural, son advertidas en sus engranajes por los sujetos de la vida regional, para constituirse en demanda, pliego o programa. Dicha relación constituye el despliegue de prácticas, formas de hacer y formas de estar que en este tesis se denomina como lucha social.

1.3.3. Lucha social: los años 80 y 90 en Colombia

Describir los años ochenta de América Latina como la década perdida es usual en la mayoría de los análisis. El rezago económico, la crisis de los modelos desarrollistas, los altos niveles de vulnerabilidad social, junto a la presencia social, política y económica de actividades señaladas como ilegales, constituyen un telón argumentativo que pesa negativamente sobre este decenio (Leal y León, 1990). En contraste, para las organizaciones y expresiones de los sectores populares que han impugnado el orden social colombiano, esta década, y sobre todo los últimos años, son el culmen de una movilización generalizada (Múnera, 1988). La importancia de esta década se comprende, en primer lugar, a partir de los esfuerzos concretos por construir propuestas sociales convergentes y con capacidad de movilización. Dentro de ellas resaltamos la formación de la Coordinadora del Movimiento Cívico Nacional, el proceso de unidad sindical de la Central Unitaria de

Trabajadores, la reorganización de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y la propuesta de la Coordinadora Nacional Estudiantil. En segundo lugar, se encuentran los proyectos políticos que buscaron consolidar alternativas de participación popular como la Unión Patriótica, A Luchar y el Frente Popular. En tercer lugar, se presentan la consolidación de organizaciones indígenas de carácter nacional como Autoridades Indígenas de Colombia –AICO- y la Organización Nacional Indígena de Colombia. –ONIC. Y en cuarto lugar, se distingue el avance de un proceso de unidad guerrillera a través de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Con todas estas propuestas y concreciones, el calificativo dado a la década podría ser afirmado, en este caso, por el genocidio y la represión cometidos en contra de todas estas organizaciones populares y movimientos sociales.

Para la década de los noventa, la crisis es manifiesta y se profundiza con el aniquilamiento de formas de expresión política de izquierda, el colapso de la unidad guerrillera y la fragmentación de las organizaciones gremiales y sociales. La situación de genocidio y persecución política se expresa con el dilema generado por la firma de los acuerdos de paz por parte de organizaciones político-militares como el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Quintín Lame y el Ejército Popular de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y la Corriente de Renovación Socialista. El momento se dibuja también en medio de la proliferación de movilizaciones populares, la búsqueda de la “apertura democrática”; así como la incursión del neoliberalismo y de espacios de reconocimiento étnico a nivel internacional, que marcaron la nueva carta constitucional de 1991.

Finalmente, allí serían reconocidos los derechos y las obligaciones de los ciudadanos con identificación étnica, específicamente a las comunidades indígenas; y fue abierto el camino con un artículo transitorio para el reconocimiento posterior de las comunidades negras en la Ley 70 de 1994. Un giro sin precedentes en la historia colombiana transformaría la postulación de un estado-nación monolítico a una nacionalidad cuyo fundamento se enunció en términos de diversidad étnica y multicultural. A raíz de los derechos allí conquistados, la Corte Constitucional (creada en 1991 como máximo estamento judicial, encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución), sanciona múltiples sentencias, con las cuales crea una doctrina favorable a las demandas étnicas. Este escenario ha sido y

es aprovechado de diversa manera por las comunidades, específicamente en lo que se refiere a los procesos de defensa territorial y el derecho a las autonomías (Véase: Zambrano, 2011).

La desarticulación de los movimientos que propugnan por transformaciones radicales, el escepticismo social frente a las posibilidades construidas en los esfuerzos populares, el ahogo de las luchas locales y el agotamiento teórico y organizativo, producen que la crisis se traduzca en incertidumbre popular. Desde estas condiciones, situaciones y posiciones los sectores populares se enfrentan a una dinámica económica alimentada por las propuestas del consenso de Washington, un nuevo ordenamiento internacional y la profundización de los procesos de globalización. Estos últimos elementos confluyen con el interés del Estado colombiano por renovar sus formas de regulación política y económica, para lo cual incentiva la descentralización político-administrativa, el ajuste fiscal, un cambio en la política monetaria y la promulgación de una nueva constitución política.¹⁵

Con la nueva Constitución se genera una práctica discursiva que manifiesta un nuevo contrato social, soportado sobre la ampliación de la participación ciudadana, lo que se denomina el paso de una “democracia representativa” a una “democracia participativa”; también desde el reconocimiento de la “multiculturalidad” y “plurietnicidad” de la sociedad colombiana, alejándose de los postulados decimonónicos verticales y homogenizadores, con los cuales se construyó el “Estado nación” colombiano (véase: Rappaport, 2008).

La participación ciudadana y el reconocimiento de la multiculturalidad y la plurietnicidad, dotarían a la población de capacidad de fiscalización, control y gestión sobre las políticas y los recursos públicos¹⁶. Pero el mismo gobierno, al que se reconoce el logro constitucional, es el que impone el modelo neoliberal que conlleva una serie de medidas, como la reducción de la institucionalidad estatal vía privatización y una política de disminución del gasto social. En el mismo tenor, los mecanismos de participación social se restringen por

¹⁵ La eficacia administrativa y la modernización del Estado son partes fundamentales del modelo de desarrollo de tipo neoliberal que es acogido en Colombia, principalmente durante la administración del presidente Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994). Este último convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, conformada por 70 constituyentes, representantes de muy diversos sectores locales, indígenas, poderes económicos y partidos políticos.

¹⁶ En otro trabajo se exploraron algunas de las discusiones generadas al interior de los pueblos indígenas con respecto al manejo de los recursos de transferencia por parte del Estado. Véase: Benavides Mora, et. al. 2010.

medio de una serie de prácticas institucionales, que más allá de la retórica, siguen siendo ejecutadas con las lógicas institucionales del Estado señorial.

Al mismo tiempo, se cocinan a fuego lento una serie de propuestas populares que propiciarán un nuevo ritmo a la movilización y a la organización popular, confrontando un modelo de Estado en donde la modernización y el neoliberalismo se combinan con el auge de organizaciones de autodefensa privadas y paramilitares. En medio de este contexto, va a emerger una movilización popular que es centro de esta investigación, y que se reclama más allá de lo local y más acá de lo nacional, definiéndose como regional (Fals Borda, 1999).

Los conflictos, marchas, negociaciones y enfrentamientos, tienen un orden distinto al de las décadas pasadas, tanto por las nuevas características de la formación social, como por los desarrollos y la capacidad de los sujetos sociales de constituirse en esta nueva situación. En el desarrollo de una serie de episodios de protesta y acción social desde lo regional, la disputa por la nación, parece cobrar mayor sentido que las disputas por el Estado, desde su dimensión institucional. Todas ellas, son luchas por desarrollar formas de identidad colectiva, que reivindican la soberanía e independencia, desde la consolidación de una mayor autonomía frente a las iniciativas que propenden por una mayor articulación con la globalización del mercado.

Entre 1995 y el 2003 se desarrollan acciones en sus más diversas formas: reivindicativas, programáticas, con modelos de construcción orientados por una serie de vertientes políticas, culturales, productivas y territoriales. Estos procesos se van a dar en el interior de una creciente polarización de la confrontación armada, en la cual el paramilitarismo cobra una gran importancia, no sólo como proyecto contrainsurgente, sino como expresión de determinados sectores y clases sociales, que en el contexto del narcotráfico, la contrarreforma agraria y la implementación de autoritarismos regionales, buscan situarse en el interior de bloque dominante colombiano (Romero, 2003). Esta situación está marcada también por una creciente influencia de los EEUU en la regulación de los cultivos de coca por medio de la fumigación y en el desenvolvimiento de la confrontación político-militar con la guerrilla, al argumentar que dichas organizaciones son terroristas.

Al mismo tiempo, los distintos procesos organizativos lograron poner sobre la agenda nacional problemáticas regionales, que más allá de las denuncias por la incidencia paramilitar y de las consecuencias de las fumigaciones, señalan los patrones que han guiado la consolidación del Estado colombiano. Con el reconocimiento de la vitalidad regional se devela un proceso que se ha precipitado sobre los territorios desde la lógica rapaz de la sobreexplotación de recursos, dejando de lado a las poblaciones y a los ambientes naturales en que viven. La singularidad de estas movilizaciones está en enfatizar que tanto los cultivos ilícitos como la violencia, son resultado de un modelo de construcción determinado por los intereses económicos, que por lo menos en los últimos 100 años, no ha tenido en cuenta a las poblaciones que los habitan (Ramírez, 2001). A la vez, estas movilizaciones regionales han mostrado, desde la diversidad propia de cada región, nuevas posibilidades de acción social colectiva interclasista e intercultural.

La singularidad regional de estas movilizaciones establece un cambio fundamental con respecto a los procesos de movilización anteriores. Del carácter sectorial de las luchas sociales de los años 80, se van estableciendo las bases de un proceso de organización popular que articula intereses, necesidades y deseos que parten de la conjunción de reivindicaciones territoriales, productivas, políticas y culturales, como ejes constructores de su propuesta social. Entre las movilizaciones que van avanzando en este proceso distinguimos la del Suroccidente, la del norte del Tolima, Arauca, Magdalena Medio, Caquetá, Putumayo y Chocó¹⁷. En todas ellas se organizaron mesas, comisiones, comités de negociación con el gobierno nacional, se presentaron pliegos y propuestas, y se constituyeron formas de gestión colectiva. A todas ellas el Estado ha incumplido en lo pactado. Aún así, los procesos organizativos no se han detenido, las movilizaciones regionales han posibilitado que se vuelvan a construir o reconfigurar organismos nacionales como el Consejo Nacional Campesino y el Coordinador Agrario Nacional, pasando por una serie de eventos como el Congreso Campesino, las asambleas indígenas, y los encuentros populares. A la par, se han reivindicado diversas formas de participación en las

¹⁷ Entre los principales estudios sobre tales procesos de movilización podemos destacar: Losonczy, Mauricio Pardo, Arturo Escobar. Para el Tolima: John Jairo Rincón., Magdalena Medio: Archila, De Roux, Margarita, Caquetá: Margarita Serje y Margarita Chávez.

cuales, la participación electoral ha cobrado mayor importancia y las redes de ONGs ligadas a las movilizaciones han jugado un papel cada vez más importante.

Como ya advertimos, en el desarrollo de estos procesos de organización regional se van dando emergencias que vuelven sobre la nación.¹⁸ Pero, en este panorama lo nacional ya no es el único articulador, pues la agudización del conflicto, la movilidad del mercado y la creciente migración han hecho que el escenario internacional cobre importancia, como un espacio de apoyo para los procesos regionales. Este proceso ha colocado a las regiones en un escenario mundial, incluso como posibilidad de desarrollar diversos programas sin la actuación del estado o de impugnar su política “desde afuera”, como ha sucedido con el Programa de Seguridad Democrática desarrollado por el gobierno de Uribe Vélez.

En Colombia, es uno de los argumentos de esta tesis, “la lucha” es el concepto utilizado por los sectores sociales movilizados para referirse a los procesos de resistencia organizada y de disputa de los sentidos y prácticas de vida colectivos. La lucha, remite al menos a dos sentidos simultáneos: el primero alude a una continuidad histórica de procesos de resistencia y de disputa por formas de poder popular, se nombra en sustantivo como “la lucha”; y la segunda, alude a un sentimiento común ante la dificultad de lograr una vida en condiciones de dignidad, y podría expresarse como un “estar en lucha”. Tal categoría se irá trabajando a lo largo de esta tesis, por ahora interesaba situar el contexto en el que adquiere todo su peso.

¹⁸ La respuesta frente al incumplimiento del Estado ha sido una mayor movilización. El ejemplo más destacado de esta respuesta se encuentra en el sur occidente del país. Aquí, durante los últimos años se han promovido diversos actos para interpelar al Estado, pero frente al continuo incumplimiento se han ido constituyendo como espacios para convocar una movilización que trasciende la negociación para presentarse como las bases constituyentes de un nuevo orden social. En esta vía uno de los espacios de movilización es la Maria en el departamento del Cauca.

1.4. Región-vida: lugar, identidad cultural, acción política colectiva y movimiento social

Las movilizaciones sociales que se expresan, disputan y/o negocian en el contexto de procesos de configuración regional, son protagonizadas por una multiplicidad de sujetos sociales, que se constituyen por medio de novedosos procesos organizativos y a partir de renovadas propuestas de relaciones sociales¹⁹. La configuración regional definida desde las dinámicas de movilización social, permite trascender comprensiones que sólo unas décadas atrás definían “lo regional” a partir de variables de caracterización que indican “lo homogéneo” y que se reducían al análisis sectorial de sus problemáticas; como lo apuntan críticamente Montañez y Delgado (1998). En la perspectiva de esta investigación, lo regional va cobrando importancia al situarse como una “práctica social” en la que juegan diversas identidades, espacios geográficos, distintos caminos e historias, que en su conjunto muestran cómo se van transformando los intereses y las perspectivas sociales, que circunscriben la formación y transformación de sujetos sociales.

La movilización social también permite entender “lo regional” como un proceso en emergencia en y por la lucha. Un “estar dándose” de diversas “potencias sociales” que relacionan lo humano con diversas dimensiones naturales y espirituales, relaciones que suponen un análisis de lo regional como un proceso vital. La concepción de “región-vida” es la forma y el contenido para sentir y comprender la emergencia de lo regional desde la movilización social, buscando apropiarse de una estela histórica que ha sido invisibilizada, amenazada y reducida. La región-vida es un proceso articulador y convergente que se desenvuelve entre identidades, diferencias y contradicciones internas, y en el contexto nacional e internacional de su actuación vital.

Lo regional “va dándose”, no es un momento ni una realidad posible de fotografiar en un instante dado, solo es perceptible en proceso y dinámica, como “potencia social”. Por lo tanto, sólo puede comprenderse desde una disposición en movimiento, en continua transformación. Esta transformación hace evidente, al mismo tiempo, distintas

¹⁹ Estas emergencias han sido estudiadas en las últimas dos décadas, especialmente por: Novoa, 2009; Archila 2005; Ramírez, 2001.

contradicciones, dado que existen diversos proyectos de configuración regional. Entre ellos distinguimos, los que se orientan desde la globalización capitalista y buscan la privatización y la mercantilización, los que se definen por medio de la violencia que usurpa y desplaza, y los de quienes de forma clientelar o autoritaria imponen sus intereses.

Los sujetos sociales con quienes nos ponemos en relación en el transcurso de esta investigación son las comunidades y pobladores que se movilizan para transformar sus condiciones, situaciones y posiciones de vida, y quienes trazan como proyecto la construcción de “vida digna” en las diversas espacialidades regionales. Esta movilización conjuga historia y prospectiva. De allí que intente comprender las prácticas y los pensamientos resguardados que “alumbran en estos momentos de tensiones”, al decir de Walter Benjamin. Pero también las que articulan futuros que se despliegan en nuevas posibilidades de acción y conocimientos, pasando por los efectos concretos que trazan huellas, sea como logros o frustraciones.

Los pobladores y las comunidades se han movilizadado en diversos momentos e instancias. Primero a partir de sus espacios más próximos; luego, se definen por medio de la constitución de organizaciones que reivindican los lazos comunes, por medio de problemáticas e intereses compartidos. Esos lazos van conformando los escenarios desde los cuales se define lo regional, bien sea desde la perspectiva de ciudad-región, de la relación urbano-rural (Machado, 2011), o por medio de la reivindicación socio-espacial como Magdalena Medio, Suroccidente, etc.²⁰ De esta forma, “se va dando” su expresión como movilización social, en la cual se han interrelacionado los diversos intereses, deseos y necesidades de las gentes. Estos momentos, tienen una historia, un tiempo en el cual se va conformando una estratigrafía, como la huella de diversos proyectos regionales reconstituidos en el tiempo. Sus emergencias actuales son provocadas por fisuras y fallas que permiten emerger antiguas posibilidades, por reacomodos sociales que acompañan tectónicas ancestrales, como en el caso de poblaciones indígenas y negras; y que en la

²⁰ Como ha sido desarrollado ampliamente por Fals Borda, como ya se ha anotado, retomado en documentos de la política pública y en programas no gubernamentales como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que analizaremos más adelante.

convergencia con nuevas sedimentaciones y erupciones, confluyen en nuevas dinámicas, como ha sucedido con poblaciones campesinas, de pescadores.

Por todo lo anterior, la configuración regional no es inmanente a su espacialidad particular. Ella es también, producto de las relaciones históricas que se han establecido desde el proceso de la formación social colombiana. Tampoco, podemos reducir su existencia a una comprensión estructural. En los procesos de configuración regional se manifiestan diversas fuerzas a partir de las cuales se ha ido estableciendo un “campo” de conflictos. Estos conflictos están determinados por las formas específicas como sus pobladores han asumido un papel “de pobladores constructores de la región”, en sintonía con sus sentidos de vida.

Los sujetos sociales constructores de región por medio de la movilización social han logrado definir en su trayecto una “potencia social” que interpela a la construcción definida por el Estado-nación desde lo político-administrativo y lo geográfico-económico. Con este concepto se alude al entramado de tensiones y contradicciones que posibilitan una disposición colectiva para la acción política y social en contextos determinados. La misma lógica de la movilización y las variadas respuestas en su contra o en solidaridad con ella, hacen que los pobladores transiten por un proceso en el cual definen su capacidad de “autonomía y resistencia”. De esta forma se constituye una relación entre “lo regional” como referente de la movilización social y la producción de “pensamiento propio”. Este último es entendido como la forma como los pobladores que participan en la movilización social van construyendo, articulando, enriqueciendo y transformando saberes a partir de las identidades asumidas, reproducidas, construidas e incorporadas en la dinámica de configuración regional²¹.

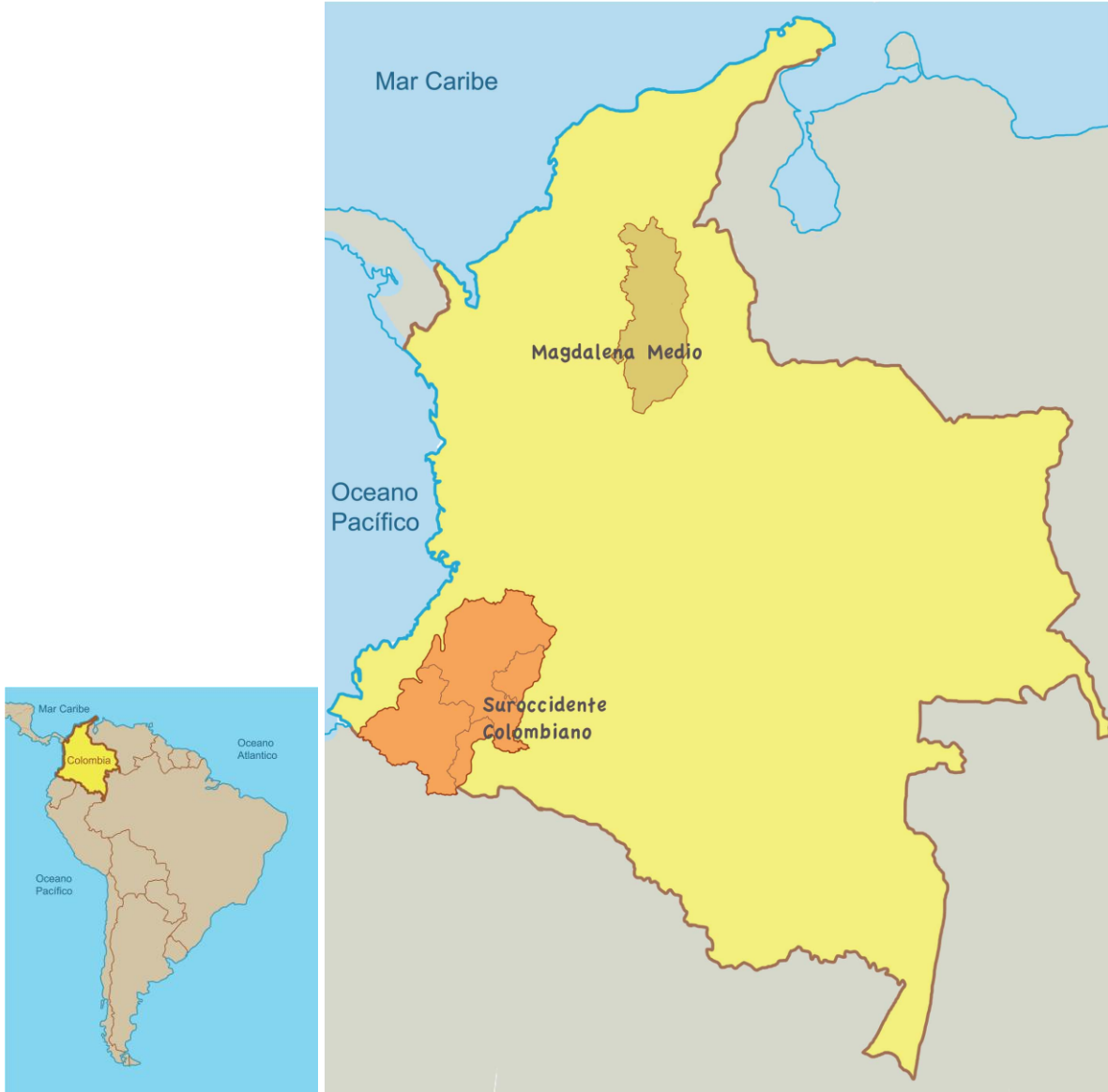
Las dinámicas regionales que analizamos son paradójicas: más cerca del sarcasmo histórico, denotan una suerte de ironía geográfica. Tanto el Sur-occidente colombiano como el Magdalena Medio aluden a procesos de configuración regional que muestran su compleja trama por contraste y complemento. Sobre todo porque han sido escenarios de

²¹ La noción de pensamiento propio ha sido centro de reivindicación de diversos procesos sociales, sobre todo de aquellos que reivindican su etnicidad. Con el transcurrir de los años, el protagonismo que ciertos movimientos étnicos han logrado han abierto el concepto a una lucha epistemológica que aboga por la generación de un pensamiento situado, en clara crítica anticolonial. (Véase las memorias del seminario permanente del Centro de Pensamiento Latinoamericano RaizAL, 2012. Documento de trabajo)

contradicciones en la construcción, el sentido, los usos e intereses que sintetizan muchas de las problemáticas nacionales. Por ello más que configuración regional en singular podemos hablar de “configuraciones regionales en disputa”. El devenir de estas contradicciones no es lineal, ni mecánico. Más bien asistimos a una interrelación de procesos con diversos ritmos, sujetos, dinámicas y experiencias, de la praxis social. Todas ellas se encuentran en campos en disputa que lejos de determinar direcciones fijas y únicas, trazan devenires confrontados, cambios de posición y situación, resultados difusos y posibilidades en tensión (Véanse mapas 1,2 y3).

Mapa 1. Ubicación de Colombia en América del Sur

Mapa 2. Ubicación de las regiones del Magdalena Medio y el Suroccidente Colombiano



Mapa realizado por Carlos Alberto Benavides

1.4.1. De lugares e identidades: la región como práctica social

La exploración de estas dos regiones es realizada a partir de dos ideas que constituyen el marco de referencia teórico transversal a este texto: por una parte, en la concepción de lo regional como “práctica y potencia social”, y por la otra, en la tesis de que la mejor noción para interpretar las dinámicas sociales en movimiento, en el contexto colombiano, es la de “lucha”, son las dos tesis.

En primer lugar, los conceptos de lugar e identidad cultural, permiten aclarar la relación de constitución recíproca entre la producción del lugar y la producción de la identidad cultural. Esta discusión conduce a un acercamiento y énfasis en algunos factores (particularmente, el lugar-habitado) que intervienen en la formación de la identidad cultural, mediante lo cual es posible dar cuenta de elementos para salir de la idea que señala a “lo local” como producto exclusivo de los procesos globales; recuperando y enfatizando en la vitalidad del lugar y de la producción del lugar, al decir de Arturo Escobar, para la cultura, el conocimiento, la naturaleza, la economía, la política, etc.

Por otro lado, en relación más estrecha con la noción de identidad cultural, destacamos algunos rasgos del marco en el que aparece el anhelo mismo, entre los habitantes de una región, de plantearse el problema y definir su identidad. En efecto, no es posible dar por sentado, como si fuera algo *natural*, que los grupos sociales despiertan el interés y el anhelo de definir cuál es su identidad, ni mucho menos podemos presuponer la *naturalidad* de los medios y las formas en que lo hacen, ni de los referentes a los que apelan.

En general, partiendo de las nociones de lugar e identidad cultural y de algunas discusiones teóricas relacionadas, controvertimos la comprensión de lo regional –subyacente a las interpretaciones que lo conciben como “enfoque” o “escenario”–, como si fuese una cosa fija, estática, cuyos significado y contornos son anteriores a lo social, i.e. como si fuese una realidad que pudiera ser definida con independencia de las prácticas sociales, costumbres, usos, historia, tradiciones, procesos de resistencia, etc. de los pobladores que habitan la región. Se defiende justamente, que lo que configura los sentidos de lo regional son las prácticas y las potencias sociales imbricadas en las formas de vida de sus habitantes. Por

eso hablo de lucha, en los dos sentidos en que se entiende la expresión: (1) como término que nombra los procesos históricos de resistencia política de los pobladores y, (2) en un sentido más general, como expresión de su combate por sobrevivir día a día.

Luego, la noción de acción política colectiva y de movimiento social, permite señalar algunos de los aspectos más relevantes de algunas teorizaciones sobre ellas, así como algunas de sus limitaciones.

El marco conceptual que elaboramos en esta sección, valiéndonos de las nociones mencionadas, es útil más adelante cuando nos lancemos a la búsqueda de los múltiples proyectos de nación contra-hegemónicos, en ciernes en las configuraciones de construcción social regional, que intento describir en esta etnografía. Pero, sobre todo, espero que las nociones y discusiones presentadas posibiliten asir la indefectible relación que hay entre las configuraciones de sentido que adquiere lo regional, por un lado, y los procesos de movilización social y resistencia política de sus pobladores, por otro.

En un breve artículo, Eduardo Restrepo propone una revisión crítica sobre las nociones comprendidas en el concepto de “identidad”, que parten de su carácter “relacional”²². La idea central de que las identidades se producen en la diferencia y no al margen de ella; por tanto, su estudio implica la detección de “prácticas de diferenciación” y de “marcación” de un “nosotros” frente a otros, es una guía metodológica de la etnografía realizada. Esto implica que son “históricamente situadas”; que se presentan socialmente como “múltiples” en “amalgamas concretas”, que a su vez se activan en distintas escalas; como constituidas en términos discursivos, pero nunca se limitan a este campo. Las identidades se refieren a la diferencia pero también a la desigualdad; pues éstas son taxonomías sociales inmanentes a los “ensamblajes históricos de desigual distribución y acceso a recursos y riquezas”. En relación con esto, son tanto atribuidas como afirmadas; por lo mismo, se sitúan en el “provisional, contingente e inestable punto de sutura” entre las subjetivaciones y las posiciones de sujeto. Lo que no pretende decir que los sujetos son anteriores a ellas, por el contrario se reconoce el “carácter preformativo” de las identidades. (Restrepo, 2007)

²² Noción asociada con la idea señalada por Bajtin, al señalar que la identidad debía comprenderse en relación con la “alteridad” como fenómeno constitutivo; y postulada como “intersubjetividad”, pues parte de la relación concreta entre “yo” y “otro”. (Restrepo, 2007 en Revista Jangwa Pana)

Restrepo termina planteando que las identidades son formas dominantes de conceptualización que tienden a reproducir narrativas modernas²³. En este punto es posible entablar un diálogo con Susan Wright quien realiza una breve reflexión sobre las discusiones contemporáneas a la noción de cultura, localizando cuatro ideas centrales: (1) la cultura retomada como proceso activo de construcción de significado y en disputa; (2) ésta se produce históricamente de manera específica; (3) las ideas que la constituyen no son un todo coherente y cerrado; (4) en su forma hegemónica, la cultura aparece como “un todo coherente y cerrado”. Tal concepción, permite postular la “politización de la cultura” en campos como el racismo cultural y las políticas del multiculturalismo; las cultura corporativa; y las apropiaciones que se harán desde las políticas y agentes del desarrollo (Wright 1998).

En Colombia, tal apropiación política de la cultura resulta una clave de lectura de los efectos sociales y culturales de las políticas de reconocimiento, cuya máxima expresión podría plantearse que es la Constitución de 1991 y sobre todo las resoluciones de la Corte Constitucional que le han seguido. Los procesos de lucha social que se disputan los sentidos de lo colectivo, de los fundamentos y enraizamientos culturales e históricos de la vida social, desencadenan tras su reconocimiento legal, un efecto de afirmación y de búsqueda de autonomía (en sentido holístico). Esta última va apareciendo como deber ser y derecho legitimado en términos culturales.

A su vez, en el marco de las políticas neoliberales, de apropiación de la cultura por parte de programas sociales de multinacionales, así como por una política cada vez más amplia de patrimonialización, resulta necesario mencionar que la cultura aparece como campo importante de disputa. Una disputa entre sectores sociales y el Estado, entre las vitalidades de las prácticas culturales y los esfuerzos de distinto orden de convertirla en patrón, objeto y tradición estática. A la vez, se expresan las potencias organizativas de la gente, que usa lo ganado para fortalecer y renovar procesos identitarios de distinto orden. La relación tierra-

²³ Restrepo retoma con respecto a estas narrativas modernas, la caracterización de Lawrence Grossberg, quien las caracteriza en asociación con tres ejes: (1) la diferencia que opera como “negatividad”; (2) la individualidad según la cual el individuo es una posición que define la experiencia, la acción y el reconocimiento de sí mismo; y (3) la temporalidad que supone posible la separación entre el tiempo y el espacio, en una relación que subsume el segundo ante el tiempo (Restrepo 2007, pp. 31-32).

cultura se desdobra en una disputa territorial que reconoce y aboga por los derechos profundos que otorga las historias profundas de ocupación y vida en los lugares.

Es posible decir, que la lucha se expresa a nivel regional para disputarse los sentidos de la región, para traslapar identificaciones regionales, definir fronteras y urdir articulaciones entre gentes, pueblos y caminos. Esto, en medio de una serie de ejercicios de dominación marcados por los intereses económicos y de perpetuación de poderes que se desarrollan en los lugares que habitan. En esta medida, el lugar y la concatenación de lugares que conforma lo regional son, ante todo, prácticas sociales.

Esta breve exposición sobre el problema del lugar, a la luz del texto mencionado, alumbrará la relación entre la producción social del lugar, la construcción cultural del lugar y la identidad colectiva de sus pobladores. De manera que será importante para que luego introduzcamos la noción de identidad y algunas inquietudes a ella relacionada

El “borramiento del lugar” al que alude Escobar, se hace palpable en los discursos de la globalización en los que, si bien se acierta al señalar la significativa alteración de las dinámicas de la cultura y la economía a nivel local por el influjo de los procesos globales, también se omite la relevancia del lugar para la cultura, la política, el conocimiento y la economía (Escobar, 2010, p. 104). La identificación del “borramiento” resulta fundamental para enfatizar en la condición “vinculada” de las identidades personal y colectiva culturales al lugar. El juego está en exhibir una asimetría entre lo global que es “usualmente equivalente al espacio, al capital, a la historia y a la agencia”, mientras lo local se equipara al lugar, al trabajo y a la tradición. De tal manera, el lugar no es visibilizado en medio de “la locura de la globalización” quedando relegado del análisis de la cultura. En esta medida, es fundamental restaurar esta asimetría recalcando la “continua vitalidad del lugar y de la producción del lugar” para aquella (*Ibíd.*).

Considerar “los modelos de naturaleza, cultura, y política basados-en-lugar” (*Ibíd.*, p. 105) resulta central para comprender las configuraciones regionales; reconociendo que estas últimas, no son producto exclusivo de los procesos globales, el capital y la modernidad.

La concepción en Escobar de que el lugar tiene prioridad en la generación de la vida y de lo real, es compartida plenamente en esta investigación y es fundamento del método que propone caminar y conversar para conocer los procesos y vitalidades regionales:

Ciertamente, es así en las concepciones y prácticas de la mayoría de las culturas, haciendo eco de la afirmación fenomenológica de que, dada la primacía de la percepción corporal, siempre nos encontramos en lugares. Somos, en suma, seres de lugares (*Ibíd.*, p. 108).

De ahí que Escobar exhorte a “volver al lugar”, es decir, a revertir el desempoderamiento del lugar, tanto en la teoría como en la práctica:

Esto significa reconocer que el lugar, el cuerpo y el ambiente se integran unos con otros; que los lugares recogen cosas, pensamientos y memorias en configuraciones particulares; y que el lugar, un evento más que una cosa, es caracterizado por su apertura y no por una identidad unitaria. Desde una perspectiva antropológica, es importante llamar la atención sobre el emplazamiento de todas las prácticas culturales, algo que se desprende del hecho de que la cultura es llevada a los lugares por cuerpos. Así, los cuerpos son enculturalizados, y a la inversa, establecen prácticas culturales (*Ibíd.*, p. 108).

Lo que esto pone de manifiesto es la reciprocidad entre la constitución del lugar y de la identidad de sus habitantes, en cuanto ambos, lugar e identidad, cobran su sentido y se expresan en el marco de las prácticas sociales y comunes de un grupo social, informándose y configurándose mutuamente.

Lo regional, consideramos, puede ser entendido como una concatenación de lugares, pues un rasgo esencial del lugar es la porosidad de sus fronteras, razón por la que no somos sólo determinados por los lugares “locales”, sino también por los extra-locales. Es decir, estamos atados, a través de redes, a otros lugares diferentes a los que conforman nuestro entorno más inmediato. Esta perspectiva permite superar, por cierto, la dicotomía entre lo global y lo local en cuanto a la formación de la cultura. Pero lo que interesa subrayar es que lo regional, como concatenación de lugares, en virtud de la porosidad del lugar, debe ser entendida también, como práctica social dinámica, construida y significada por sus pobladores.

La necesidad de “volver nosotros mismos al lugar”, si se decide comprender lo regional y su relación de significación con la movilización social, es el método de este trabajo.

La noción de Región se encuentra directamente asociada con la idea de diversidad cultural. Si se tiene en cuenta que esta última se manifiesta en numerosas expresiones entre las diferentes regiones y al interior de éstas, entonces dentro de las dimensiones problemáticas del proyecto histórico de Nación es importante tener en cuenta la formación de identidades culturales diversas. Sin embargo, no se permite confundir la diversidad cultural con la desigualdad social, expresada justamente en un inequitativo desarrollo regional provocado por un desequilibrio en la distribución y gestión de los recursos y los ingresos.

Bajo este panorama aparece planteada la cuestión regional, que desde el Estado ha tenido vital importancia a partir de la descentralización administrativa, la privatización y la apertura económica, legisladas en 1991, en compromiso con la necesidad de un nuevo ordenamiento territorial. En resumen, su propuesta territorial está basada en la construcción y consolidación de un orden sin mediaciones, descentralizado y eficiente. Es debido a esto que Fals Borda (1993, 1999) anota que las regiones han sufrido del facilismo descriptivo que lleva a interpretarlas indistintamente como grandes provincias, como departamentos o suma de departamentos; es decir, como porciones considerables de territorio. Ahora bien, el territorio no puede ser entendido únicamente como espacios geográficos, desconociendo el trabajo humano en dichos espacios (producción y cultura), porque es justamente la forma como los seres humanos establecen esa relación con su entorno lo que le da sentido al territorio.

Para que una región sea considerada como tal, además de cumplir con ciertos requisitos de tipo jurídico, debe existir hacia afuera y para esto sus actores deben convertirse en interlocutores válidos para otras regiones. Lo anterior solamente puede ser resultado de la capacidad de las organizaciones sociales para reconstruir el tejido social y establecer una conducta colectiva que lleve al crecimiento económico y al desarrollo equitativo de las regiones.

La comprensión de lo regional como proceso de configuración constituido de manera importante por las capacidades e itinerarios organizativos de sus pobladores, dirige la atención hacia la detección de movilizaciones internas, desplegadas en programas y proyectos. La noción práctica de “mecanismos de construcción social de región” alude a este conjunto de estrategias practicadas en las vidas regionales. La contienda por el sentido

de la construcción regional es un terreno en permanente disputa que se nombra como “defensa del territorio”, en relación con el trabajo y la producción. En tal medida, resulta oportuno recordar la definición de región de Milton Santos, en la cual propone que es un resultante “de la división social territorial del trabajo”, por esta razón, las relaciones sociales tienen lugar en un espacio determinado, forman parte del proceso mismo de constitución de una región concreta. En tal sentido, una región difiere de otra, por: (1) presenta un territorio concreto, (2) un tipo de población con rasgos distintivos, (3) casi siempre muestra una producción característica, (4) así como un gobierno y una administración precisa; (5) y una topografía específica. En tal medida, argumenta Santos que las regiones actuales pueden ser comprendidas como “sistemas territoriales abiertos”, que constituyen su identidad en relación con otras regiones (Santos, 1986 y 2000).

Tanto los programas como los proyectos se disputan el territorio con los derroteros gestionados y afirmados por lógicas de apropiación territorial que comprenden intereses de multinacionales y consorcios nacionales para la explotación minera, maderera, del agua y, desde otra dinámica, el avance de la fumigación de cultivos ilícitos como la amapola y la coca.

Pensar la configuración de región desde formas de construcción social, implica dos aspectos fundamentales: por un lado debe existir una construcción política y por el otro, una social. La primera está relacionada con el establecimiento político y administrativo de la región; la segunda en cambio se refiere a que construir socialmente una región significa potenciar la capacidad de auto-organización, allí donde exista una sociedad cohesionada, consciente de la identidad Sociedad-Región, la cual tenga la capacidad de movilizarse tras proyectos políticos colectivos, es decir, de convertirse en sujeto de su propio desarrollo (Boisier, 1988).

Tanto Boisier como Fals Borda parten del hecho de que deben existir dos condiciones para que este proceso de construcción de región se materialice, la descentralización y un desarrollo regional donde la distribución del poder se de entre el Estado y las organizaciones regionales. En el caso de Colombia este proceso de descentralización se consolida con la Constitución del 91, con la cual la propuesta de Fals Borda en defensa de la necesidad de un reordenamiento territorial logra tener un lugar en la carta constitucional.

La regionalización debía por lo tanto quedar consagrada en la Constitución del 1991, bajo el mandato del ordenamiento territorial. Este último, tendrá dos soportes centrales: (1) la descentralización administrativa y (2) la autonomía decisoria de las entidades territoriales. En este marco, la región se reconoce como una de estas entidades.

Para Fals Borda la propuesta de una reorganización del territorio significa una mejor distribución del poder y de la riqueza que éste genera. La influencia de las tendencias europeas con respecto a lo regional y la importancia del gobierno local se hacen evidentes, al afirmar que si Colombia logra este reordenamiento podrá ponerse al día con las tendencias mundiales del momento, que llevan a superar la insularidad con la integración de regiones, de grupos y círculos, como lo demuestran los europeos (Fals Borda, 1999).

Retomar esta visión de la región es importante en esta investigación por dos razones principales. Por un lado, porque permite mirar la región como un camino o una propuesta para la transformación de las condiciones preexistentes. Condiciones relacionadas específicamente con la baja calidad de vida de una parte importante de sus pobladores, por lo que se hace necesario hacer de la región una entidad territorial autónoma, que tenga la capacidad de gestionar los recursos de una manera coherente con las necesidades políticas, culturales, ambientales y sociales concretas de la región. Por otro lado, analizar la región a través de la materialización de la Constitución del 91 es fundamental, porque éste es el contexto político en el que se inician o bien fortalecen los procesos de movilización que estudiamos y su influencia en el proceso de integración y construcción de región. En este trabajo, se busca adelantar una reflexión de la relación entre la presencia y la ausencia para seguir las pistas de las relaciones de la gente y el estado, y de las representaciones sobre y desde la gente misma. La lectura histórica inicial permite situar el trabajo justo en ese dilema, en donde parece cuestionarse la presencia del estado, pero en los relatos éste se va haciendo evidente, y se hace patente la ausencia de la gente hecha presencia por medio de una serie de narrativas que la naturalizan de una forma particular. De allí el interés por comprender cómo la región va emergiendo no como una suerte de escala que comprende una bisagra entre lo local y lo nacional sino como un producto, un proceso con vectores propios.

La noción de lo regional como “potencia social” forma parte de su concepción como “práctica social”, que fue desarrollado unas páginas atrás, e implica volver a explorar la noción de identidad cultural. Las identidades se producen, actualizan y dinamizan de manera conflictiva, debido a que estos procesos se inscriben en un marco de relaciones dispares de poder. Y, precisamente, en su carácter conflictivo reside su “potencialidad”. En consecuencia, será importante señalar algunos de los aspectos que influyen en la manera en que los pobladores de una región piensan sobre la identidad y la forma en que la configuran.

Ingrid Bolívar elabora una investigación sobre las transformaciones de las identidades en relación con el estado, en tres regiones del país: Montenegro, Quindío, en Vistahermosa y en el Bajo Atrato. En su investigación Bolívar sigue los pasos de los pobladores de esas regiones en sus “conceptualizaciones” sobre sí mismos y sus identidades. No es posible recoger, por supuesto, los detalles de lo que encontró. Para los efectos de esta investigación, interesa recuperar las nociones teóricas y metodológicas concernientes a la noción de identidad que despliega en su estudio (Bolívar, 2006).

El primer rasgo que Bolívar destaca a propósito de las identidades, es que la identidad no puede ser asumida como un rasgo esencial o natural de los grupos, sino que debe entenderse como una “relación social producida en el marco de las relaciones de poder que sostienen y dan vida al Estado” (*Ibíd*). Concebidas como relaciones sociales, se entiende que las identidades están inscritas en la lógica práctica, en las maneras y formas de actuar, comportarse, pensar y entender de los grupos. Es decir, las identidades se manifiestan a través del *cómo*: de la relación entre “cómo se hace” y “lo otro” (en cuya relación la gente hace práctica su identidad). De ahí que las identidades no están enteramente explícitas en un discurso o en una conceptualización (de hecho, el proyecto mismo de explicitarlas por completo, de articular enteramente el trasfondo en el que adquieren sentido, se antoja irrealizable). Sólo al preguntarse por la identidad de forma explícita, aparece la inquietud de definirla, conceptualizarla, formularla, mediante la articulación del sentido que incorporan y exhiben las prácticas.

Esta línea de pensamiento conduce a una consideración metodológica, a saber: la observación de que, para el investigador, no es posible detectar las identidades —o mejor,

las conceptualizaciones de un grupo acerca de su identidad–, sino mediante una interrupción en el curso de la cotidianidad que “cree” un terreno nuevo para que las identidades sean escenificadas, mostradas, narradas (*Ibíd*). Es así que aflora como una cuestión metodológica imprescindible la de evitar que la introducción, por parte del investigador, en la cuestión de la identidad entre un grupo genere una *distorsión* en la manera en que sus integrantes apelan a ella. Por ahora no diré más sobre este tema, pero le pido al lector que lo mantenga presente.

El segundo rasgo de las identidades que quiero destacar, recurriendo al escrito de Bolívar, es que éstas son relaciones sociales producidas “activa y conflictivamente por los distintos actores sociales, en condiciones jerarquizadas de interacción” (*Ibíd.*). Bolívar, además, menciona algunos de los múltiples referentes de autorreconocimiento que intervienen en la producción de identidades, también inmersos en relaciones de poder: la relación que un grupo guarda con su pasado, su relación con el estado, la producción de conocimiento experto sobre él, su economía, entre otros. Antes de decir algo más sobre ellos es necesario advertir un par de cosas respecto a este segundo rasgo de la formación de identidades. Debemos ser precavidos para evitar posibles malentendidos respecto a lo que implica que las identidades sean producidas activa y conflictivamente.

Aunque se afirma que los integrantes de un grupo social intervienen en la producción de sus identidades y, más aún, a pesar de que esa producción no escapa al cálculo estratégico y político, estos aspectos no socavan la significatividad de las identidades ni las reducen al plano de lo instrumental. Lo que esas características de las identidades subrayan es que ellas se despliegan dentro de un margen de posibilidades que, aunque sin duda limitado por distintos factores, admite múltiples pasados y futuros para un actor. Esto no quiere decir que cada actor social pueda decidir y seleccionar “racionalmente” entre distintas opciones cuál identidad desea forjar. Sin lugar a dudas la producción de la identidad está constreñida por un conjunto de condicionamientos objetivos, definidos por la historia, el Estado, etc. Pero de ahí no se sigue que los grupos no tengan un margen de apropiación de esos condicionamientos dentro del que pueden intervenir en la manera en que se definen y buscan ser definidos.

Justamente, la “tensión”, a falta de una mejor expresión, entre los condicionamientos objetivos que determinan la producción de identidades y el margen de apropiación de esos condicionamientos del que disponen los grupos, lo mismo que los individuos, hace del campo en el que se forma la identidad un campo de confrontación. En palabras de Bolívar, “en contra de algunos hábitos de pensamiento y de algunas estrategias de disputa política, las identidades no anteceden a la interacción y a los conflictos, sino que se labran precisamente en ese marco” (2006: 252). Aquí cabe señalar que la idea de que los sujetos políticos se definen con anterioridad a su inmersión en la esfera política es un idea heredada de las teorías contractualistas de la modernidad, las cuales suponían la negociación precisamente de un pacto entre el súbdito y el soberano que marcaba el paso de un “estado de naturaleza” a un “estado social” o de derecho.

Esta tesis comprende que los actores políticos y sus identidades se sitúan y definen ineludiblemente en un ámbito social surcado por relaciones de poder, de ninguna manera se definen por fuera del ámbito social o antes del contrato social. Es por esta razón que lo regional se comprende, dado el carácter conflictivo de las identidades que lo conforman, como una potencia social, dinámica, que siempre *está siendo* dentro de un marco de relaciones de opresión, coerción, represión, pero igualmente de manifestaciones de resistencia, en un marco de ineludible confrontación.

Finalmente parece necesario insistir en la observación de que no podemos dar por sentado el anhelo de forjar una identidad, ni mucho menos las formas y contenidos asociados a ella. Por ejemplo, se suele pensar que la identidad está dada en virtud de cosas como un traje típico, una comida típica, música típica, etc. Ésta, de ninguna manera es una forma *natural* de concebir la identidad, pues bien podían ser otras las formas que asociemos a ella. De manera que sería una omisión grave para una investigación como esta, no reflexionar sobre las vías por las que llegamos, o llegan los integrantes de un grupo, a contornear la noción de identidad. He mencionado algunas de esas vías y factores involucrados en las identidades: el pasado de un grupo, sus relaciones con el estado, los saberes, imágenes e imaginarios, muchos derivados del conocimientos producido en las facultades de ciencias humanas y sociales, asociadas a los grupos y a las regiones. No es posible detenerse en todos, pero si enfatizar en uno de esos factores: la movilización social y acción política

colectiva; más aún cuando uno de los propósitos centrales de esta investigación es rastrear los vínculos entre las dinámicas de movilización social y las formas de significación de lo regional. Subrayando que en esta investigación la lucha y los sentidos de lo regional son prácticas y potencia social.

A lo largo de este apartado he tratado de recoger, muy brevemente, algunas nociones con relevantes implicaciones teóricas y metodológicas para la investigación. Principalmente, se ha insistido en la necesidad de comprender lo regional como una práctica y potencia social y también en que la noción más apropiada para conceptualizar esa práctica y potencia social que configura la construcción de los sentidos que incorpora lo regional es la de “lucha”. Se ha realizado ese recorrido partiendo de los conceptos de lugar, identidad cultural, acción política colectiva y movilización social. En todos los casos, se ha enfatizado en que esas nociones, tanto en el plano teórico como en el práctico, adquieren sus significados en relación indisociable con las formas de vida y la imagen del mundo del grupo social en que se inscriben.

Por último, se quisiera anotar que en las configuraciones regionales se expresan y se constituyen ejercicios de democracia y, allí también se evidencia su condición actual. Tal consideración resulta importante en la tarea de trazar los vínculos específicos y concretos entre las luchas sociales y las formas en que los grupos sociales significan sus territorios, con miras a la reflexión sobre los proyectos de nación y de estado que, en ciernes, encontramos en esas intersecciones.

Es bien conocido, como señalan los Comaroff, que “durante los años noventa fue un lugar común, especialmente en Europa y Norteamérica, adscribir a la necesidad de empujar a distintas partes del mundo hacia la democracia tras el fin de la guerra fría y el triunfo del libre mercado sobre el comunismo” (2013: 174). Ese lugar común se popularizó, sobre todo, con las así llamadas teorías del final de la historia que presagiaban que, con la derrota del comunismo, la humanidad había llegado, ideológicamente, al mejor de los modelos económica y políticamente hablando. A pesar de que eventos como el 9/11 o la crisis financiera del 2008 nos han bajado de esa ensoñación, aún cuesta enormes cantidades imaginar un sistema político y económico distinto a la democracia liberal y al libre mercado.

Varias cosas llaman la atención. Por un lado, la continua asociación entre democracia liberal y libre mercado, pues el capitalismo ha demostrado, con creces, poder funcionar en sistemas antidemocráticos y autoritarios. El mejor ejemplo, en nuestros días, lo ofrece China, que exhibe la implantación de un capitalismo feroz y mucho más efectivo y eficiente que el que podemos encontrar en cualquier otra parte del mundo, sin que ese proceso haya conllevado ninguna clase de democratización.

Por otro lado, llama la atención que, a pesar de que la “democratización” de otras regiones del mundo distintas al Atlántico norte (Europa y Norteamérica) ha sido alentada supeditando las ayudas que conceden a los estados-nación del mundo las agencias internacionales y las potencias globales al establecimiento de “instituciones democráticas”, dicha democratización no ha significado otra cosa distinta a la implantación de elecciones periódicas; es decir, no ha significado otra cosa que la reificación de una democracia meramente procedimental en la que sus aspectos sustantivos, como la garantía y el respeto de los derechos humanos y civiles, han sido soslayados.

En efecto, la preocupación contemporánea de Occidente por la democratización del sur global proviene, en parte, como señalan los Comaroff,

en la asociación hegemónica, ontológica de hecho, entre libertad, autoexpresión y la posibilidad de elegir ampliamente extendida por todo el norte global. La democracia en hoy para el *homo politicus* lo mismo que el shopping para el *homo economicus*: una fusión sagrada y cósmica entre el libre albedrío y la recta satisfacción humana. Una y otro son, por así decirlo, las dos caras de una misma moneda, dos regímenes de consumo apuntalados por el mismo modo ideológico, material y productivo (*Ibid.*, pp. 176-177).

La democracia cada vez más se reduce al mero ejercicio electoral, a la escogencia de una preferencia. Un ejercicio tan democrático como escoger si comprar zapatillas *Adidas* o *Nike*. Esta condición trivializada de la democracia, tan palpable además en Colombia –en cuyo sistema político y electoral escasean las ideas y proyectos políticos serios y coherentes, mientras proliferan la politiquería, las prebendas, las dádivas, los intereses privados y cicateros y el clientelismo –, suscita enormes e inaplazables interrogantes por otros proyectos y comprensiones de lo que puede ser la democracia y, en general, sobre las formas que puede adoptar la gobernanza y la economía. Esos interrogantes motivan

también este proyecto: ¿qué puede significar hoy la democracia para grupos desempoderados, subalternos excluidos tradicionalmente del poder y de los beneficios de vivir en sociedad? ¿Qué alternativas políticas brotan de los procesos de lucha política en las regiones y territorios de nuestro país?

Capítulo 2. Prácticas y experiencias de vida de la gente: los pobladores del Sur de Bolívar y del Suroccidente colombiano

Siguiendo los pasos y las voces de la configuración y la lucha social regionales, nos disponemos a conversar y reflexionar sobre “la gente” que les ha dado vida. La noción “gente”, tiene que ver con una serie de alusiones realizadas en varias ocasiones y formatos, entre ellas, expresiones usadas en el Sur de Bolívar como: “vamos a convocar a la gente”, “la gente dice”; tan presente en aseveraciones comunes en las regiones y en procesos de movilización social, cuando casi se arenga: “la gente decide”, “lo que la gente diga”; o en construcciones más formales como el título de la auto-biografía del constituyente indígena Taita Lorenzo Muelas en el suroccidente: *La fuerza de la gente* (Muelas y Urdaneta, 2005). Resalto esta expresión por su capacidad genérica, pero al mismo tiempo, como lo expresaron muchos al preguntar sobre su significado, porque así se entiende al “común”, a “los de a pie”, a “los del pueblo”, a los que son “así como nosotros”, “los runas”, en fin, con esta palabra se alude a “lo colectivo” situado socialmente.

El poder de este concepto se fue expresando en las etnografías realizadas hasta evidenciarse como concepción social profundamente anclada en las vidas regionales, en las vidas urdidas dentro de los territorios en los cuales se ha trabajado. “La gente de...” es una forma común de vincular a un sector social con un territorio y aquí está una de sus potencialidades. Pero al mismo tiempo, “la gente” sin apellidos, ni cualidades agregadas se expresa una y mil veces con rostros indígenas, campesinos, negros, de mujeres y varones, jóvenes y ancianos, para urdir denominaciones más allá de las particularidades locales, hacia una alusión que tiene más que ver con una situación común dentro de la estructura socioeconómica colombiana, claramente asociada con “nosotros”, “los de abajo”.

La lucha social y la construcción social de región son un “propósito de la gente”, está “conformada por gente” y “depende de la gente”. En ese mismo camino, se trata de ir descubriendo: ¿quién es la gente?, ¿quienes somos?, ¿qué hemos sido?, ¿cómo queremos ser?, ¿qué hemos sido - siendo?. Éstas son las preguntas que se repiten las personas en los encuentros, talleres y recorridos, en los diálogos que se emprenden mientras se realizan las

labores, en el conjunto de conversas que se han ido produciendo. Su presencia continua es importante, aunque vale la pena resaltar que su contundencia ha sido más evidente y ha propiciado un ejercicio colectivo de reflexión, por una parte en la elaboración de cartografías sociales, y por la otra en la elaboración de planes de vida. Los primeros son ejercicios colectivos para dibujar el territorio vivido, a partir de la reconstrucción conjunta de las relaciones con la naturaleza, con el poder, la producción y la cultura. Estos problemas trazados y superpuestos buscan de forma evidente trabajar con las preguntas planteadas. Por otra parte, se han hecho visibles en la elaboración conjunta de planes de vida en los cuales he tenido la oportunidad de participar. Planes de vida que aluden a los ejercicios de las colectividades reconocidas en un territorio, para “planear” y “decidir” sobre el conjunto de aspectos que constituyen su diario vivir, más allá de los planes de desarrollo y muchas veces, enfrentándolos. Allí, las preguntas ontológicas sobre las existencias colectivas, planteadas en perspectiva y proyección histórica, son de primera importancia.

Es posible afirmar que “la gente” aparece con la región y la lucha. Esta afirmación alude a que sólo es posible la acepción común de “la gente” cuando se dice para convocar, para consensuar, para marchar, para trabajar. Se dice, pero no es como se identifica, que es el segundo momento, cuando se pone nombre se deja lo genérico y se denomina por ejemplo: “Poblador”.

En este capítulo se propone un viaje etnográfico orientado por estas preguntas y en dos territorios: en el Sur occidente y el Sur de Bolívar. Cada uno de estos recorridos es realizado a su vez en dos tiempos: en el primer momento se avanza en una descripción de los “marcadores de adscripción” de la gente que vive en la regiones; estos marcadores se distinguen en la relación entre “lo que la gente hace” y aquello que “la gente dice” sobre sí misma y sobre los demás. En el segundo momento del capítulo, se propone un análisis de las “prácticas y experiencias de vida” compartidas por la gente en cada territorio.

Para trabajar los “marcadores de adscripción” se realizan tres tipos de acercamiento, que se distinguen con fines analíticos, no necesariamente organizan la exposición etnográfica propuesta:

(1) Procesos de localización de elementos, lugares y de sus mutuas relaciones, otorgando importancia a las distintas escalas, como son: la casa o vivienda, el barrio o vereda, los cascos urbanos o ciudades, la región, la nación; así como los cambios asociados en los procesos de localización de la gente. Todo ello permite comprender la relación entre los usos espaciales y las formas de identificación. Su dinamismo es comprendido como expresión de la inestabilidad de las identificaciones o de la pluralidad de situaciones en las cuales se ejercen subjetividades diversas.

(2) Las estructuraciones poblacionales, en las cuales se describen las diferencias sexuales, de género, de edad, de organización social del trabajo y otros conjuntos de relación social básicos que definen formas de la familia, cambios en las prácticas reproductivas, condiciones sociales y la movilidad de la población.

(3) Usos espaciales y formas de trabajo. Se incluyen aquí las divisiones de la población y la disposición de infraestructura, así como la localización de unidades productivas y la definición de corredores de intercambio; también las maneras de valoración del paisaje usado y habitado, el conjunto de usos y prácticas que se simbolizan y semantizan, mientras se lucha y se trabaja.

La aproximación propuesta a lo que llamamos las “prácticas y experiencias de vida” se realiza, entendiendo por ellas: (1) las formas como la gente expresa “prácticamente” sus relaciones de vida, sosteniendo que éstas son partes de una realidad “observable”; y (2) las maneras como éstas se traducen en diversos discursos o “expresiones de la vida”. La “experiencia de vida” se sitúa en una suerte de liminalidad o en una situación fronteriza, en el contraste entre las relaciones cotidianas y las relaciones producto de transformaciones sociales, que se disponen productiva y simbólicamente para generar patrones distinguibles en términos estructurales (Turner, 1988 y 2002; Hall, 2010; y Taussig 2012).

En la comprensión de estas prácticas y experiencias, se enfatiza en dos tipos de espacios sociales: por una parte, se trazan aquellos espacios en donde se fortalecen la coordinación de prácticas sociales y la elaboración de palabras y gestos, formas de nombrarse y generar solidaridad social; los cuales manifiestan campos que divergen y convergen con los trazados por las lógicas historizadas de las instituciones o las impugnaciones naturalizadas

por los agentes, que tienen una relación adversa con respecto a los intereses, necesidades y deseos de los habitantes. Por otra parte, se buscan espacios de participación, acción, decisión, gestión y ejecución política, que permitan discernir la relación práctica entre las dimensiones de poder y cultura. En el abordaje de esta última relación, se comprenden las políticas culturales de acuerdo con Escobar, Álvarez y Dagnino (2001), como los significados y las prácticas sociales a través de las cuales se buscan desafiar dinámicas, sentidos e instituciones que históricamente llegaron a ser consideradas como apropiadamente políticas y con las cuales se intenta dar nuevas definiciones del poder social. En relación con ello, las culturas políticas se refieren a ese conjunto de prácticas y significados reconocidos y naturalizados como los más adecuados para “hacer política”, los cuales también implican las apuestas colectivas de las organizaciones y los movimientos sociales. Asumir esta definición implica reflexionar sobre la construcción del poder social y/o poder popular, pues los conceptos en movimiento desestabilizan los significados culturales. Por ello, las definiciones conceptuales que implican cambios culturales y que están unidas a procesos políticos concretos, exigen una transformación de la cultura política dominante.

El territorio no es sólo un espacio de la tierra donde se desenvuelve la vida humana, como tampoco es sólo la organización político-administrativa derivada de la aparición del estado-nación, como se ha venido planteando. La dimensión material del territorio es el “paisaje” y su dimensión social es el “uso”, cruzado por relaciones de poder, por la producción de significados y por las formas de producción. El territorio, más allá de ser una ubicación espacial, permite posicionar y situar socialmente, de allí que se despliegue en distintos procesos y en algunos de ellos se expresen escalas como imágenes territoriales que permiten a la gente actuar en dichos procesos. Las escalas son una de las maneras del construir aquel “nosotros”.

En la territorialidad se expresa lo heredado y lo inculcado en términos políticos, culturales y productivos. Por ello mismo existen distintos tipos de territorialidad que se expresan en el conjunto de relaciones que constituyen la vida social. El territorio es una noción y como tal, facilita identificaciones sociales que emparentan a la historia con el lugar, con la memoria y la tradición. En tal sentido, Castells (1995 y 2001) hablará de la “producción

social de formas espaciales” o Ardila (2003 y 2006) se referirá al paisaje como la cara visible del territorio en las luchas políticas por el acceso a la naturaleza. El territorio, estará en tal sentido constituido por una serie de componentes aprendidos a través de los sentidos y el afecto; por lo mismo, está compuesto por memoria, pertenencia y lugar, por sentimientos de protección y seguridad, por olores, sabores, sonidos y luminosidades diferenciables. El territorio se traduce en aquellas evocaciones comunes de los habitantes que comparten lugares, con quienes se comparten sensaciones, apreciaciones estéticas, gustos y ciertas experiencias: potreros, pájaros, ríos, lluvias, calles, carreteras y kilometrajes, son nombrados y descritos por la gente entre muchos otros más, poniendo en práctica formas de clasificación y recuerdos, que se constituyen a su vez en marcas de una pertenencia compartida, de una vida e historia comunes. Incluso se constituyen en una “prueba” de esa historia.

En una concepción de espacio vivido, los cambios del paisaje generan hondas transformaciones sociales, lazos sociales, con la consecuente trasmutación de sentidos y significados, que también son reflejo de unas relaciones de poder, determinadas por ciertas pugnas y soluciones. El territorio es también, mosaico de procesos en lucha, de imposiciones o victorias.

En un primer momento el poder se entiende como la capacidad de convocatoria para la cooperación, como una creación social que genera la lógica de participación y de la aceptación de la convocatoria a consensos sobre autoridad, legitimidad, disciplinamiento y prácticas políticas. Dicha capacidad está enmarcada dentro del campo del poder, que también es dinámico y cambia si también lo hacen las circunstancias en las cuales se producen las relaciones de poder. En segundo lugar, el poder tiene capacidad de escenificación, de símbolos y enunciados de detención y resistencia al poder, lo cual permite producir marcas de signos y gestos que reproducen o contestan relaciones de poder y permiten situarlo. En tal sentido, la falta de coherencia simbólica podría implicar una pérdida de la capacidad de convocatoria, que a su vez disminuye la gobernabilidad.

Los procesos culturales remiten a la producción social de sentidos y significados de vida (Turner, 1988). Las relaciones sociales mantenidas a lo largo del tiempo, permiten un manejo común de la memoria social, en términos de lo que se informa, enseña, divulga y

busca ser naturalizado. Alude a una forma de hacer historia que se marca en el territorio, como cartografías de imaginarios sociales, situando lugares socialmente relevantes.

Quisiera retomar las tres discusiones centrales que permiten a Alejandro Grimson proponer la noción de “configuración cultural”: (1) problematizar el anclaje en el concepto de cultura de la homogeneidad y la territorialidad, para enfatizar en las prácticas y los significados; (2) reintroduce el poder en el centro de la cuestión de la cultura, en medio de una serie de prácticas orientadas por las formas como los agentes se sitúan en una serie de relaciones que muestran la constancia del “hacer sentido” que presenta a la cultura como una “combinación” particular; y (3) no sólo se trata de incluir el problema de la lucha cultural, sino de asumir que la cultura se encuentra en la base del conflicto político también. En tal engranaje propone retomar el problema de la diversidad como “diversidad situada”, desde la cual, la “configuración cultural” es resultado dialéctico de la negociación de los actores involucrados para tener una “lógica compartida” (Grimson, 2011). En la región, implica aperturas y prolongaciones, una negociación de sentidos que no es comprensible sin una trayectoria histórica. Es posible afirmar que la cultura de la región no puede ser descrita como compendio de contenidos, lo cual no significa que no se marquen sus límites. Estas transculturalidades, suerte de contrapuntos y yuxtaposiciones, donde se pulveriza y consolida dependiendo de micro-jerarquías, define los linderos de sus campos de configuración.

Con estas herramientas, relaciones y nociones se expresan los recorridos realizados en una serie de escenarios y prácticas llamados metodológicamente “caminar y conversar con la gente”.

2.1. La gente del Sur de Bolívar: De colono, campesino y minero a “poblador”

Barrancabermeja tiene que ver con el color rojo de los barrancos que se asoman a la orilla del río del Yuma como le dicen algunos, y el rojo es el color del barro hecho de arcilla, ¡no ve que éste si se deja meter los dedos a la boca! Barrancabermeja es el color de esta tierra por tanta matanza que nos ha tocado sufrir, ¡no ve que de tanta sangre se pintó todito! Después de la marcha por los caminos, por las carreteras, por donde usted se meta, se encontraba es un lodazal

de esos bien bravos. Es que cuando la gente camina como que lo acompañan las lluvias, como para que queden las huellas de tantas pisadas, así como entre la montaña se sabe del paso de las mulas por los canjilones que va dejando su paso y luego se sabe que por allí baja la madera o sube la merca. Barro y polvo, sol y lluvia, así caminamos nosotros también.” (Palabras de una lideresa, taller para el PIDPDH, Barrancabermeja, 1999)

Caminar, andar y recorrer es la forma como se anclan las vidas de las gentes que a través del trabajo deciden donde vivir, o bien de los transcurso permanentes también motivados por fuerzas que atentan en contra de sus vidas. Entre trasegares colonos aventureros y buscadores de buena fortuna, y terruños que se arman a prueba de machete, picas y atarrayas, se constituyen los pobladores de estos territorios. En estas páginas comenzamos por los recorridos para llegar a las adscripciones y prácticas cotidianas del organizar, en un esfuerzo por seguir los rumbos de las gentes.

Mapa 3. Relieve e Hidrografía del Magdalena Medio



Mapa elaborado por Carlos Alberto Benavides

2.1.1. Recorrer: entre ríos, trochas y carreteras

Los atardeceres entre amarillo y rojizo, le dan un ambiente especial al paisaje. Desde la chalupa se van distinguiendo los meandros del río, un verde esparcido de tanto en tanto, un encuentro con un mundo que palpita de vida. Entre las casas de pescadores que aparecen y desaparecen en cada viaje y la cadencia de un río que se nota cansado de tanto andar con las aguas negras de ciudades que él no alcanza a atravesar, cansado de ser andado con tantas historias a cuestas. A lo lejos se ven las serranías de Santo Domingo y más allá, casi como una revelación de la imaginación está San Lucas, y entre ellas un inmenso valle. Del otro lado la sabana parece recorrer todo el horizonte (Diario de campo, Barrancabermeja, 1999).

Al recorrer los planes se va acortando la distancia, el polvo y el barro acompañan y acompañan el ritmo del campero que está totalmente copado por personas y mercados. Recorrer permite comprender las distintas posibilidades como se vive en estos territorios calurosos y húmedos, entre el río y la serranía, en poblados y carreteras, entre puntos de encuentro y pequeños asentamientos metidos entre las montañas. Cómo no describir la mirada taciturna de los pescadores ribereños, quienes miran como telón de fondo la sierra que alimenta ciénagas y al río mismo, como presintiendo que los cambios de esas aguas tienen la capacidad de apagar sus vidas; sin embargo, mientras tanto el ritmo de “subienda tras subienda” hay que aprovecharlo, para sacarle coplas, cantos y cuentos a la vida. Y esto no es una metáfora, ni un truco para amenizar el relato, es literal. En la región, abundan las coplas cotidianas, a través de ellas se cuentan esas historias que de otra manera no podrían escribirse.

Estos ojos contrastan con la mirada recorrida de los mineros en las laderas de la sierra, quienes con sus ojos profundos de socavón miran abajo las aguas grises del Magdalena como una autopista que traza las rutas de sus hallazgos. Ellos miran con el brillo de quien sabe ubicar la veta y disfrutar la luz, con la sensibilidad propia de quien ha nombrado lugar a lugar, siguiendo las alegrías de los encuentros y las desesperanzas de las pérdidas, o muchas veces los maleficios de la vida. La mirada taciturna de los pescadores se mueve sobre una gran capacidad de trazar trayectorias al ritmo del río, mientras la mirada recorrida reposa sobre la actividad lenta del minero, picando y lavando, picando y lavando, una y otra vez y cuantas veces sea necesario; entre ellos mismos haciéndose también cultivadores de café, arroz, frijol, elaboradores de panela y cuando las circunstancias lo obligan, diestros raspachines de coca.

Desde los primeros viajes fui aprendiendo a conocer la región con las historias de los conductores. Uno de ellos, con uno de esos nombres que se pierden y son múltiples, es Alveiro. Con Alveiro conocí los secretos de las carreteras, con él aprendí la diferencia del polvo y del barro. Cuando me enteré que lo habían matado, me lo imaginé en algún punto de esa carretera que fue su vida nueve años atrás. Quedaría un recorrido de saludos y encuentros, de sonrisas y gritería, de recados de amor, de noticias de ciudades perdidas y de encantamientos de carretera. Él sería el primero en decirme: “porque la tierra es la que nos identifica”, y en su auto fui recorriendo mil relatos entre chismes y versos improvisados de la región que tanta “alegría escondida, tantas desdichas, que solo saben los vallenatos”-diría con su voz. Hacía referencia a esos vallenatos que siempre nos acompañaron en todos los recorridos. Me contó también que “a una marcha la definen los baños, eso sí que es definitivo. Y después de los baños, la cantidad de carne que llegue. Con eso y lo demás va saliendo.” (Diario de Campo, San Pablo, 2008).

Alveiro respira antes de frenar, es una respiración sincronizada con el carburador del viejo *jeep* que conduce como si fuera parte de su cuerpo. Justo cuando el resuello terminó, la algarabía de la gente al subirse al campero parece venir en sentido contrario, despacito, como susurro al principio, fuerte y carnavalesca después. El susurro se entiende a lo lejos bien, luego entre las vociferaciones, ya prácticamente encima de uno, el lenguaje se pierde y toca es entender a partir de los gestos y las entonaciones (*Ibid.*).

Alveiro conduce el *jeep* hace años, tantos que por varias razones ha olvidado cómo fue que pasó, cómo llegó a dedicarse al transporte. Él se convierte rápidamente en una persona importante en mi introducción y estancia en la región, en un amigo. Sus viajes conectan estos lugares día a día en una rutina que se va haciendo en los caminos, caminos que se tornan cada vez más difíciles a medida que se entre más a la montaña; mirando cómo las aguas bajan a medida que se descende, cómo se tornan cada vez más turbias. Alveiro conversa “paisa”, un acento que originalmente pertenece a la zona antioqueña y al eje cafetero que ha logrado una expansión importante. Él también habla paisa aunque dice venir de Boyacá y aspira algún día a tener un negocio en Santander.

En los primeros viajes, aunque sonriente, me miraba con desconfianza. Con el disimulo del conoedor reparaba el tiempo preciso en mi maleta para medir el peso, encontrar las formas internas, percibir los olores o escuchar al dejarla sobre el platón. La maleta y los bolsillos

de los pantalones, eran examinados por Alveiro, quien así expresaba su desconfianza. Pero su desconfianza era muy bien disimulada por su sonrisa y porque de un momento a otro entre bienvenidas y chistes uno se encontraba en un agradable interrogatorio sobre la vida, el viaje por el río, las cosas de la ciudad, los partidos de futbol, y de repente -: “¿cómo me dijo que se llama?, ¿y sus apellidos?, ¿y eso de dónde es? Y, ¿qué lo trae por acá?, pero usted es como la primera vez. Y, ¿cómo se enteró de estos lugares? ¿Dónde va a llegar?”. Era un mago de las preguntas, éstas aparecían una y cuantas veces fuera necesario y me indicaron desde el principio dónde estaba: la tensión era evidente. Justamente las habilidades de Alveiro fueron la mejor manera de comprenderlo, él tenía la perspicacia del psicólogo y del etnógrafo, de quien literalmente da la vida para transportar a la gente.

Con el tiempo nos fuimos haciendo cómplices y amigos de carretera, hasta que escucharía de su propia voz lo que ya había intuido -: “uno aprende a mirar la gente y como en los aeropuertos, que existen los aparatos para revisar lo que la gente trae, uno en este oficio tiene que aprender a detectar para no tener lío con la gente. Aquí se da la bienvenida porque mucha gente llega y se va” (Reconstrucción de conversación, diario de campo, 1999).

En medio de múltiples conversaciones, la vida de la región fue apareciendo entre cada recogida y cada desembarque. “Aquí en esta finca hay búfalos, tienen buena carne” – fue mi introducción a la sabana entre San Pablo y Simití. “Aquí en este caserío vive la gente que viene de Boyacá, son bien trabajadores, casi no van al pueblo”- me dijo Alveiro cuando llegamos a Monterrey. “El dueño de esa tienda también es el enfermero de la vereda” – fue una de las muchas descripciones de los lugareños que me posibilitaron comprender las múltiples facetas que cumplían los pobladores en Aguas Lindas. Y de la mejor manera, fui entendiendo que también se constituye socialmente el territorio, recorriéndolo, reconociendo las limitaciones humanas frente a las inclemencias del clima o frente a la precaria infraestructura vial. Las mismas circunstancias que obligaron a Alveiro a decirme sin titubeos -: “Ahora está lloviendo mucho y sólo podemos llegar a Patio Bonito. De allí para allá hay que coger trocha hasta Aguas Lindas”. En los recorridos aprendí que en este territorio, los trazos de la carretera siguen los rumbos que fueron trazando la limpia de las fincas (Anotaciones en diario de campo, Sur de Bolívar, 2000).

Es posible decir que el *jeep* era un lugar de encuentro para la gente de todos lados y los recorridos se convertían también en una pequeña reunión que duraba las dos o tres horas del trayecto. Mientras que el carro traqueteaba, la gente conversaba sobre los precios del mercado -: “ahora San Pablo está caro, pero se consiguen más cosas que en Simití” – increpaban algunos. “¿Dónde consiguió esos machetes?”, “hace seis meses que no va el profesor a la escuela”, “hay una epidemia de gripa bien fuerte” – decían unos y otros comentando los eventos más importantes de la vida cotidiana relacionados de manera destacada con el trabajo y la familia. Aquella reunión se iba desenvolviendo a medida que se quedaba con menos participantes, parada tras parada, hasta acabarse con el final del recorrido entre los barriales del camino, entre las bajadas y las subidas para empujar el carro que se sostenía de milagro entre las laderas lisas del barro. El viaje mismo se convertía en una experiencia de las cercanías y lejanías que existían entre la gente. Una sensación extraña que mostraba lo cerca y lo lejos que estaba todo en estas tierras.

Como hemos recorrido, al Sur de Bolívar se llega por los caminos y los caminos de río y carretera son el inicio de nuevas llegadas. Así se podrían describir los tránsitos continuos de la gente en la región. La migración desde otras zonas del país pobló estas tierras y seguiría constituyéndose en el determinante de los procesos poblacionales a nivel intra-regional. En el Sur de Bolívar, los caminos se dividen como siguiendo a contravía las cuencas de los ríos. Si viene de la montaña para los planes, se inicia en un riachuelo que se va haciendo quebrada y ésta va creciendo a medida que otras se le unen hasta formar el río, que su a vez llega al río Magdalena. De regreso el camino parte de San Pablo o de cerro de Burgos y va llegando a la “Y”, donde empieza a repartirse. Los caminos se reparten y los ríos se llenan.

Las dinámicas sociales de la región rompen el *continuum* trazado por su geografía esculpida durante siglos por el cincel del río Cauca y del río Magdalena y sus afluentes, un perfil reconocible y diferenciado entre planicies, montañas y ciénegas. Pero son las personas, quienes trabajando y viajando, la han cargado de “olor a gente” que se mueve longitudinal, transversal y concéntricamente.

Los ríos y las ciénegas son los primeros ejes de comunicación, difundiendo las vidas de la gente. Las recreaciones de viajes y procedencias disímiles se encuentran en sus travesías, las fiestas se hacen calendarios de encuentros, los bailes y las mojigangas de antaño todavía

persisten en los ecos. La fiesta del río, que no requiere una fecha precisa sino que se realiza cuando las familias y amigos logren reunirse a “fiestear” en el río; sigue siendo una búsqueda para socializar como amortiguando la vida, los desechos de una “civilización” que descarga todas sus impotencias. De allí que también su papel de comunicador se vaya perdiendo y las actividades que le dieron vida tiendan a decaer. Porque así se mantenga una disposición para disfrutar la vida, también hay que decir que las tamboras suenan menos y las épocas de carnaval parecen no volver.

Cómo olvidar el Festival del Río Grande de la Magdalena bailado y cantado en mayo de 2012 en el municipio de San Pablo. Comparsas de niños con el fondo de las mujeres cantadoras se suman a los concursos de trova al ritmo de lo que se conoce actualmente como vallenato; todos ellos alimentan y dan cuerpo a esta fiesta renovada. Cada comparsa, entre disfraces, ritmos, movimientos corporales y letras cantadas, expresan las relaciones entre los habitantes de las riveras y cada uno de los seres y movimientos que constituyen al río. La “danza del pescadito” nunca se hace esperar. La celebración de este festival forma parte de un esfuerzo por recuperar al río como eje de la vida cultural regional en los noventa, suspendiéndose en 1996. Será retomado en el 2008 por la Federación de Agromineros del Sur de Bolívar en Barrancabermeja, como parte de sus acciones.

Las montañas esconden tesoros: la caza, la madera y el oro, tras su huella se despliegan, y desde los puertos para arriba viven gentes de las más disímiles procedencias. La montaña se defiende, pero los claros muestran sus heridas, entre sus pliegues, carreteras, caminos y trechos. La Serranía se esconde arriba cobijando lazos de un día y convites de semana, sus caseríos diseminados le dan sabor a gente. Allí se encuentran la bandeja paisa, el cuchuco de trigo, el sombrero voltia’o con el poncho: la montaña es como un palimpsesto de emociones y afectos.

Los caminos respiran humedad, las nubes bajas muestran en su espesura su lluviosa carga. Uno termina por no saber, si lo mojado es por las gotas atraídas por la gravedad o por el vapor y el barro que se levantan en el suelo. La tierra rojiza y blanca es completamente jabonosa, mantener la firmeza física y emocional es siempre una prueba. Es necesario saber dónde se va a pisar, así dar el siguiente paso, el próximo pensamiento y palabra. A lo mejor una ranchera entona la noche, cuántas historias de hombres despechados (Diario de campo, recorrido entre la ciénaga de San Lorenzo y la quebrada de Yanacue, 2001).

El carro que nos debía recoger no pasó, en medio de la incertidumbre de la distancia que nos separa y el desasosiego por lo que nos depara el camino, decidimos avanzar. El caminar impulsa, expande el alma, se viven las montañas y sus perfiles. Al paso pasan las gentes, las casas, los árboles. La gente entre curiosa y desconfiada nos clava la mirada y encaramado en una rama un pájaro encopetado de rojo sepia les remeda (Diario de campo, recorrido entre Aguas Lindas y Vallecito, 1998).

La planicie se ondula, la huella del río da paso a las presiones que forjaron la serranía. El camino signado por el color rojo resalta sobre el blanco, en la poca firmeza del piso el verde que nos salpica desde todas partes. La noche cae allí en medio del pliegue montañoso, de los nubarrones empapados, no es permitido transitar de 6 a 6 (Diario de campo, recorrido de Micoahumado hacia las Minas, 2000).

Los mosquitos levantan la piel, la gente dice que así la naturaleza se defiende. ¿Quién dijo que no hay resistencia integral? Los árboles pierden las hojas, las aguas inundan. En medio del lugar dos niñas brincan y brincan riéndose con frescura y tranquilidad en medio de los moscos. Al calor de la ranchera de la resistencia integral, ellas brincan como lo hace la vida misma de mujeres amadas y amores compartidos (Diario de campo, Simití, 1998).

2.1.2. Trabajar: encontrar la veta, cultivar y pescar

La explotación del oro, el cultivo de coca, la agricultura y la ganadería, los cultivos de palma africana y la explotación petrolífera, principales renglones de la vida económica regional, también definen lógicas subregionales: el sur-sur de Bolívar, el centro, el norte, el valle del Cimitarra y la Barranca Petrolera. Sin duda, una diferenciación importante que comparte los objetivos trazados desde afuera y las intensiones construidas por las vidas de los pobladores.

Cuando se habla del Sur de Bolívar se alude a municipios alejados, aislados tanto de los departamentos como del territorio del Magdalena Medio, del bajo índice de población, así como del difícil acceso por la sinuosidad del relieve, del mal estado de las carreteras y de la escasez de transporte, de las entre 30 y 45 mil hectáreas sembradas de coca. Amparo

Cadavid (1996) reconoce una cultura de la depredación como característica de sus generaciones. Frente a lo cual se denuncia a la explotación artesanal minera como poco tecnificada e “irracional”, descrita como una práctica inconsciente con el medio ambiente y parte de la poca educación ciudadana que se asigna desde esta posición a la región. Así lo caracteriza el mismo Estado con respecto al desenvolvimiento de múltiples economías ilegales que tienen lugar en la región:

Economías ilícitas entre las que sobresalen los cultivos, la transformación y comercialización de coca, de un lado, y la extracción y comercialización ilegal de gasolina, del otro; la compra de tierra por parte de narcotraficantes; la extracción del oro y su uso en el lavado de recursos ilegales provenientes del narcotráfico; la extracción de excedentes de las economías ganadera, agroindustrial y del petróleo a través de la extorsión y el secuestro; el valor estratégico de determinadas zonas por el paso del río Magdalena, la carretera y los oleoductos entre otros factores” (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH 2001)

El desarrollo llega, se aplica desde la cabeza de los funcionarios y se queda allí. Los caseríos, el más destacado en Simití, dibujan el paisaje del sincretismo un tanto trágico entre el extractivismo español y los restos de los mundos indígena y negro, que se fue cocinando en las riberas. Las dinámicas productivas de la región están marcadas por contrastes que vuelven y aparecen, desmanes de autoritarismos y de jerarquías que se gozan las expoliaciones despreciando lo que se señala como “salvaje” y “diferente”, con legalismos jurídicos que arrancan frases dispersas, soliloquios sobre derechos humanos y naturales, y el oscurantismo religioso provocado por las rudezas de la desesperanza, junto al pragmatismo aventurero aprendido de algún explorador de la compañía petrolera estadounidense con sede en Barrancabermeja.

Mineros procedentes de diferentes zonas se asentaron en la serranía huyendo de la violencia, a explotar de manera artesanal los yacimientos de oro, desde hace aproximadamente treinta y cinco o cuarenta años. Doña Francisca en el corregimiento Las Ahuyamas, cuenta que “primero fue la marihuana, luego el oro y ahora la coca”. Don Manuel en el corregimiento de Arrayanes en Santa Rosa, sostiene que allí se presentó una continuidad similar: “primero fue el arroz, luego marihuana, luego oro y coca” (diario de campo, Santa Rosa 2000). Desde la memoria de la gente, la producción marimbera o de marihuana tuvo picos importantes en 1976, 1978 y 1982. Don Pacho recuerda que eran “los

tiempos de la horqueta para sostener las ml”. Cuando en sus palabras “se andaba con el oro para arriba y para abajo” (testimonio de don Pacho, Mina Mochila, 2003).

Con dolor los habitantes recordarán lo que han significado las bonanzas en su vida: “el guayabo económico, comprar hasta la comida de afuera. Hasta los tomates comprábamos. Claro como había oro pa’ comprarlo todo, entonces se descuidó la agricultura y la gente no sembraba ni la yuca”- rememora la señora Carmen en el corregimiento de Las Ahuyamas. Incluso se traerá a la memoria que la draga canadiense se fue en 1995, luego de transformar las profundidades del río (diario de campo, Santa Rosa y San Pablo, 2000).

Las consecuencias medio ambientales de las fuertes explotaciones en el Sur de Bolívar se reconocen a través de las huellas que deja la erosión en las zonas de colonización maderera. Las cuencas de los ríos comienzan a verse peladas y se vuelve homogéneo el paisaje: arriba se desprenden cultivos de frijol y abajo siguen los mismos cultivos de frijol. Las evidencias del monocultivo dejan poco espacio para la agro-ecología. De manera similar, las ciénagas viven un proceso de sedimentación, cuya gravedad radica en que éstas son los pulmones de los ríos. Su afectación bloquea la capacidad de regular los flujos de agua y de evitar las inundaciones. Las amenazas al sábalo, las tortugas y a los manatíes, han sido ya denunciados por los pobladores como verdaderos crímenes ecológicos.

Es importante recordar que en el Sur de Bolívar, es relativamente general que el lugar de origen de la gente no corresponda con su lugar de trabajo, lo que remite a altos niveles de adaptabilidad social, expresados en la imbricación “trabajo-poblador-territorio”, que hace posible entender aquel “orgullo de ser pioneros” en el poblamiento de ciertas zonas. Diciendo claramente que se puebla mediante el inicio del trabajo. En muchos casos, la gente cuenta entre 8 y 10 años de permanencia, siempre móvil: “hasta ahora no he pensado en salir de la región, aquí se vive demasiado bien”- dirá de forma contundente un minero de la región (entrevista a Javier, Mina Gallo 1999)

Una mina puede ser muchas cosas. Puede ser el centro del trabajo familiar como en Caño Rico, hasta toda una red de trabajos subterráneos adyacentes a un caserío y organizados bajo la figura de un Comité Minero o Junta de Acción Comunal. Esto es lo que sucede en

Mina Mocha. También puede ser una forma de organizarse a partir de las redes familiares, como ocurre en Mina Pista, bajo la organización comunitaria.

Los nombres de los asentamientos mineros, algunos de los cuales ya se han enunciado, son trazos de las historias que han sucedido en cada lugar, muchos de los cuales se refieren al mismo proceso de “abrir monte” para encontrar la mina: Mina Avión se denomina de esta manera porque allí se estrelló un avión hace aproximadamente 10 años, la Mina Avena Fría porque fue lo único que llevaron para tomar durante el cateo de la mina, o Mina Acordeón porque el minero que la encontró tocaba este instrumento musical. San Luquitas es de las minas más viejas de la serranía, es una mina de aluvión cuya vida ha estado marcada por sus consecuentes bonanzas y abandonos desde el siglo XIX.

El mecanismo para trabajar una mina de forma artesanal está imbricado con los procesos de organización de asentamientos mineros. Alguien descubre la veta y trae consigo a su familia, en seguida se le da nombre. El rumor se expande y otras familias aparecen, luego vienen los comerciantes con los insumos y los mercados para las familias. Este flujo renovado hará que el caserío vuelva a tomar fuerza. En el caso de Mina Gallo, por ejemplo, sería fundada en 1990 luego de que apareciera la veta. Tenía 61 casas para el año 2000 y su nombre está asociado con el hermano de las cinco mujeres que se aventuraron a catear, a quien le gustaban los gallos. Los trabajos de mina que allí se desarrollan ofrecen el sustento a 50 familias quienes viven en sus casas de madera con techos de zinc o palma; también se encuentran restaurantes, tiendas, droguerías, tabernas y billares, que hablan de una vida movida como corregimiento. Es un caserío que fue elevado como corregimiento del municipio de Morales y que después de muchos años de su fundación, logró conformar su comité minero.

A estos parajes, hechos a mano de hombres, mujeres y niños que abrían monte para hacer su casa, sembrar y buscar madera, o “si la gracia acompaña” encontrar oro, se le fueron reduciendo las opciones. Sus vidas concretas en términos productivos se han visto seriamente marcadas y reducidas por las tecnocracias agroindustriales, las crecientes intervenciones de ingenieros, agrónomos y abogados, que tecnifican y se apropian dando consejos y definiendo querellas, junto con las ONG que han desarrollado avanzados dispositivos internacionales sobre el eje de progreso, desarrollo e inversión. Desde aquí

también, la política sigue siendo excluyente, pues devora a las contrapartes y las sujeta a sus modos particulares, es rentista sin poder generar legitimidad, regulación ni control institucional real.

Las huellas de las trayectorias de la gente trazan el recorrido producto de la reacción del mundo rentista y autoritario contra las reformas modernizantes de finales del siglo XIX y principios del XX; sobre todo contra las reformas de los años treinta del siglo pasado. Aquel freno a las políticas liberales en la Colombia de la primera mitad del siglo XX, acarrearía una férrea y definitiva amalgama de clases (entre hacendados, comerciantes y burguesía emergente), que desde el centro hacia las regiones se mantuvo provocando violencias y clientelismos (véase: Guillén, 1979).

Las concesiones petroleras y los desplazamientos internos de la población y los programas de colonización han sido los motores que le dan vida a Yondó y Cantagallo . Yondó ha sido afectada por distintos ciclos de poblamiento, el primero protagonizado por familias de la élite nacional y, el segundo marcado por la temprana presencia de la multinacional petrolera Shell. Cantagallo, que fue primero corregimiento de San Pablo, sería nombrado municipio en 1998 para manejar las regalías del petróleo. En los dos es perceptible el aumento progresivo de colonos y el autoritarismo de los administradores petroleros. Cuentan los colonos las desesperanzas de llegar a la región en donde tienen que cambiar el azadón y el rastrillo por el hacha y el machete, a la par que se van asentando en las riberas y las laderas del río Cimitarra.

En esta región, la vida económica ha sido marcada por dos dinámicas distinguibles, en cierta medida paradójicas y en otro tanto, contradictorias y en conflicto. Por una parte, por las iniciativas y dinamismos de la gente que abre monte, cuyas dinámicas poblacionales y productivas hicieron evidentes las riquezas contenidas en sus suelos. Con ellas se signarían múltiples intereses de agentes poderosos, que terminarían también por causar nuevos movimientos migratorios; de ahí su paradoja. “Los mineros vamos a ser diezmados por las multinacionales como diezmaron a los indígenas” – se afirma en Mina Mochila (2003) y con ello se evidencian las presiones que también motivan ese continuo caminar. “Hay que movilizarse donde está la virgen” –agregan en Mina Mocha, en un sentido similar: “Las multinacionales nos sacaron de allá (el bagre) pero aquí no queremos que pase lo mismo.

Necesitamos ser empresarios también, tenemos los conocimientos pero no las herramientas. La idea es quedarse para organizarse con las herramientas y los títulos de las minas” (Testimonio de Rafael, mina Mocha, 2003).

Por otra parte, el impulso de proyectos puntualmente dirigidos, que no son socialmente equilibrados ni ecológicamente sostenibles, ni tampoco consistentes en términos macroeconómicos, ha marcado las relaciones productivas. Sin inversión pública, la iniciativa privada fue devorando y despojando, y al disminuirse la producción se redujeron los cultivos y se degradaron las condiciones de vida de las gentes. Décadas de desarrollo y de modernización trazadas en las manos, los cuerpos y las miradas de la gente, gestos y cuerpos que se fueron haciendo a fuerza de ser arrojados en montón de otras zonas rurales, por ciudades y pueblos, para ir y venir dependiendo de los momentos, de las presiones, de las promesas. Así se van haciendo geografías de “lo inhóspito” y “lo improvisado”. Así se reproducen ciclos de precariedad, de destrucción natural, depredación en esa llave que se cierra entre el latifundio y la violencia.

En términos productivos, es muy importante referir el trabajo cotidiano y ocasional de la pesca, también artesanal. Los pescadores son los hombres y las mujeres, las familias de pescadores, que se caracterizan porque su vida transcurre al ritmo del río y de las ciénegas, entre sus crecientes, mitacas y subiendas. A pesar de tal generalidad, es posible hablar de la existencia de tres tipos de pescadores que desarrollan sus vidas en relación con el río: los permanentes que son quienes devengan su subsistencia de una actividad pesquera constante; los temporales son aquellos que la practican en épocas de subienda, cuando se presenta una buena temporada para la pesca; y los de subsistencia, que son muchos más, quienes pescan para el autoconsumo.

El ribereño vive el día y representa su espacio a través de su trashumancia: “la tierra aparece y desaparece por la acción de las corrientes de agua.” Para realizar su trabajo se organizan colectivamente a través del “corral”, una forma de efectuar la pesca por grupos de pescadores, de tal manera que formen un círculo con sus canoas para lanzar las atarrayas al centro. En esta estructura organizativa: “el papel femenino resulta definitivo en un grupo que depende de la pesca, pues su participación en los campos económico, educativo y social resulta de gran importancia en la cohesión [...] además es en las mujeres en donde

recae el mantenimiento de las normas sociales y su permanente control”, así ellas no sean quienes desarrollan el trabajo directo pesquero (Montenegro, 1997).

También en estas regiones resulta importante el trabajo agrícola, que no sólo es desarrollado por quienes centran sus labores en éste, sino también por pescadores y mineros. Tales labores se desarrollan de forma intensiva como parte de los procesos de extensión de la agricultura y la ganadería.

La vida cotidiana de los laderanos está marcada por una alta explotación de los recursos naturales, especialmente del oro y la madera, y por una tendencia a un cambio rápido de uso agrario intensivo, dentro del cual se destaca la coca combinada con cultivos de pan coger, cooperativas productoras de café y panela, entre otras. Las relaciones cotidianas que se generan en las labores asociadas con el cultivo, generan en los campesinos unas perspectivas de bienestar, de “ambición” y esperanza, así como también implican sufrir las malas temporadas, algunas plagas que causan la pérdida de las cosechas. Un líder campesino expresa con mucha claridad la emotividad culturalmente anclada relacionada con el trabajo propiamente campesino:

La ambición de uno como campesino es sembrar una mata, verla crecer y que le dé el fruto y así, si tiene un animal quiere completar dos, y así sucesivamente, y por qué no también, cuando uno empieza de joven lo primero que uno tiene es esa esperanza grande de que va a formar un hogar, y que va a tener una compañera y que ahí va a ver el fruto que son los hijos que lo van a acompañar para la vejez. Entonces, empieza uno a trabajar con ese amor, entonces, con ese mismo amor uno empieza a defender y a reclamar (Carlos Martínez, líder campesino, ACVC, Entrevista con Silvia Becerra, 2003)

En las veredas dedicadas a la agricultura, la vida transcurre a partir de dinámicas del trabajar mancomunadamente entre las envidias y el valorar los servicios de los chismes, las comunidades se fueron haciendo por sus propios propósitos laborales, dedicándose a la tala y a la agricultura. Después de las actividades productivas, quizás sean las fiestas de los santos y las celebraciones decembrinas (de fin de año) las que más congregan a los pobladores. El dos de febrero se celebra cada año la fiesta de la virgen del Carmen, “la original” como se dirá comúnmente en la región, una festividad central. Durante el carnaval, el río servía de eje de comunicación y de expansión de las fiestas entre las poblaciones vecinas. La mojiganga, la danza, el sonido de las tamboras, el baile de las

mujeres agitando un pañuelo rojo durante la guacherna, en medio de un derroche de tamboras. Es posible considerar que estas fiestas con sus máscaras, disfraces, juegos y comparsas de carnaval fueron en el Magdalena Medio una posibilidad de inversión ritual del orden social.

2.1.3. Habitar: cuencas, minas, caseríos y campamentos

La doble imagen de “selvas vírgenes” debido a la violencia desencadenada en torno al control territorial y el control sobre los recursos, y la actualidad de abandono por parte del Estado, están signando permanentemente los procesos de habitar el Sur de Bolívar. Las cuencas y los caminos que luego se tornan carreteras, van haciendo en el Sur de Bolívar, una cartografía de lugares, de viviendas, de corregimientos, veredas y caminos. Los poblamientos son tan disímiles como las procedencias. Recorrer para quedarse es resultado de múltiples experiencias y encuentros, como lo expresará Tito, un líder de la región: “Estamos en continua llegada, pero no es que seamos de aquí, es que somos de gente que anda, andamos, abrimos caminos. Si usted piensa, lo nuestro para permanecer es recorrer” (reconstrucción de una conversación, Micoahumado, 1999).

Aguas Lindas es un caserío a las orillas del río Santo Domingo, corregimiento de Simití. A esta altura el río ya tiene mucha fuerza; apenas un kilómetro adelante del caserío su corriente tiene la capacidad de romper roca y formar un cañón muypreciado por la gente. Esta ubicación a media montaña hace de Aguas Lindas un lugar de paso, pero al mismo tiempo es el sitio donde desarrollan su vida al menos unas 25 a 30 familias. En aquel lugar de paso y conexión se encuentra un puente colgante de madera que divide Aguas Lindas de La Virgencita, caserío de San Pablo. El parteaguas es el río, en cuyos dos lados se encuentran cada municipio. El “otro lado” –como le dice la gente- es donde llegan los carros, pues en este punto termina la carretera. Este es un referente territorial importante como suerte de frontera comunicativa e inicio de un mundo intrincado de comunidades, comúnmente sólo recorrido por los lugareños, quienes “saben andar”.

De allí en adelante la gente debe caminar, aunque del otro lado también se encuentra la carretera para subir al Paraíso. Aguas Lindas es un pueblo donde la gente llega, desembarca como en un terminal de transportes, sin que exista esta infraestructura, y sale con sus cosas: el mercado, la ropa, las canastas de cerveza. En este puente no deja de estar presente cierta sensación de liminalidad. Aguas Lindas tiene dos calles largas y tres calles que atraviesan las otras dos, incluso tres, pues una de ellas se despliega frente a la cancha de fútbol. Allí decíamos, vivían de 20 a 30 familias, provenientes algunas del Chocó a través de Pereira, otros de Boyacá o Santander. Pero la memoria sobre estas procedencias está disipada en las múltiples “llegadas” que le siguieron a los grandes viajes y que después se siguieron desplegando dentro de la región. La mayoría de los de Aguas Lindas llegaron de otros lados de la región, y allí de otros lados de la región y quizá el recrudescimiento del conflicto, haga que lleguen después a otros lados.

Hoy, casi veinte años después de mis primeros viajes a la región, tengo la imagen vívida de aquella mujer negra que vivía en “la esquina”. Una mujer inolvidable, María, cuya importancia en la vida de Aguas Lindas permite en parte comprender la naturaleza del lugar. Su casa, ella, es un centro del lugar. Allí la gente se reúne a conversar, a “echar chisme”- como se le dice localmente al arte cotidiano de enterarse de lo que ocurre. Si alguien sabe de “llegadas” es ella. Por su casa pasa la gente cuando llega, pregunta de posibles trabajos, solicita indicaciones para poder llegar a un lugar; allí se pregunta si hay comida. Ella responde con su reconocido mal genio combinado -no sin cierta ironía- con fuertes sonrisas. No da mucha información, pero sí responde. Su casa se encuentra rodeada de otras más; varios vecinos que cumplen un papel similar: son centros de noticias y consultas. Todas ellas están ubicadas en las calles centrales donde se encuentran también algunas pequeñas tiendas, donde se expende cerveza. La gente llega allí de todas partes, para disponerse después de uno o dos días de descanso a salir a otro lado.

Aguas Lindas, es un caserío similar a Vallecito -aunque éste sea más grande- que queda a una hora y media caminando río arriba, y a El Paraíso, situado a dos horas ascendiendo por la montaña. La gente llega a estos pueblos para seguir camino hacia la montaña, o bien, para seguir en contravía hacia los cascos urbanos de San Pablo o Simití. En Colombia, los caseríos se pueden entender como pequeños asentamientos con una población menor a

aproximadamente 100 habitantes, conocidos también como “corregimientos” en relación con su pertenencia municipal.

Estos lugares, son puntos de encuentro de multiplicidades, nodos de encuentro o cruces de los diversos recorridos de la región. Algunos que trabajan como raspachines, se cruzan allí con gente que va en busca de oro al Diamante, otro caserío; gente que va a comprar las cosechas se cruza con los viajeros que venden ropa. De cuando en cuando, incluso llegan indios otavalos del Ecuador, uno de los pueblos comerciantes y trashumantes que suelen encontrarse en diversos lugares del país con su usual indumentaria de alpargatas, vestuario blanco y cabellos trenzados, siempre cargados con sus voluminosos paquetes de textiles.

El caserío es un lugar que se llena y se vacía como los ritmos de las bonanzas, de las cosechas, de las fiestas. Quizá estas mismas trashumancias que constituyen el diario vivir de estos caseríos, han hecho que la gente que permanece por temporadas no tan cortas sean personajes singulares. Uno de ellos, sin duda, fue aquel médico cirujano con muchas especialidades que se quedó por años y se convirtió en formador de parteras. Sus orígenes y destinos eran muchos, pero se sabía que sus artes las aprendió en Medellín.

Como se ha descrito, Aguas Lindas se nos presenta como un lugar de múltiples llegadas y como traza de los más diversos recorridos, unos y otros son producto de confluencias y encuentros de cosas y gentes diferentes y con profundos contrastes. Si bien el ambiente festivo del lugar puede engañar, la sordidez de sus mañanas habla también de los cruces de las diversas marcas que se trazan. Se hace referencia a una línea delgada que entrecruza lo ilegal con las ciudadanías y con las distintas maneras de “poblar”. Por allí puede pasar tanto la carga de frijol como la pasta de coca, puede subir el mercado o la acetona para los laboratorios de coca.

Desde el lavado de ropa, la cocina y las ventas, las mujeres ejercen una suerte de dominio territorial que describo como un “estar aquí” que se va afirmando en la casa y en cada uno de los objetos que en ellas se disponen: fotos, recordatorios de encuentros sociales, imágenes religiosas, cosas que se traen de los viajes y lo que se tiene del lugar, una suerte de fusión que parece poner en situación de habitar el mundo (Diario de campo, Mina Gallo, 2001).

Los relatos de los hombres se traducen en varias anécdotas y metáforas de la suerte y la fortuna. “Estamos apostando con la vida”-se traduce en expresión común que aparece y reaparece en el diario de campo para advertir una constante espera para que las cosas mejoren, dadas las dificultades de la vida, las limitaciones tecnológicas o las precariedades de la producción.

Uno de los lugares en donde se expresa esa noción de la fortuna es la consecución de dinero rápido en las loterías locales. Son realmente un evento social que convoca a los pobladores. Se trata de un evento que genera expectativa y que congrega a la gente, que se reparten entre jugadores y curiosos. En Mina Mocha se encuentra “La Consentida”, en Mina Gallo está “Apuestas el Relámpago” y en Mina Vieja está “La Original”. Todas cuentan con un promotor quien regula los flujos de “fortuna” concretada en dinero en efectivo y en todo tipo de objetos preciados, como electrodomésticos, cámaras y otras tecnologías valoradas, o ropa.

“Sacar plante” (o endeudarse para estar al día), disminuir gastos al máximo y volver de donde se vino o irse para la ciudad, son algunas de las lógicas que regulan las relaciones productivas en la cotidianidad. En la práctica no hay ahorro, la plata se va en lo del día: comida y otros gastos familiares.

Mina Vieja en Santa Rosa, es el nombre de San Pedro Frío, donde una cancha de fútbol cumple el papel de parque central. La cancha se convierte así en un centro social y espacial, delimitado por diferentes negocios que también hablan de la vida local, como restaurantes, graneros, carnicerías, billares y tabernas. En Mina Mocha, un panorama similar se completa con aproximadamente 38 casas de habitación, y con la disposición de una escuela. Y como en otras zonas mineras, con una o dos casas de Bienestar Familiar (donde se atienden 35 niños en promedio). En 1991 en Mina Lista el ejército construyó un helipuerto, que hoy en día es un caserío donde viven los miembros de una sola familia. Se advierte un paisaje compuesto por casas dispuestas alrededor de la planada que terminan rodeando la mejor cancha de fútbol del sector.

La vida cotidiana en cada localidad gira en torno a espacios de socialización que a su vez se constituyen a través de la centralidad de ciertos personajes. En Montecristo por ejemplo se

encuentra Don Agustín, propietario de la televisión; donde por sólo \$1.000 se podía ver el noticiero o ver en señal de DirecTV algunos partidos de futbol importantes en los años noventa. En Paraíso, esta función la cumple la Junta de Acción Comunal quien regula el centro audiovisual que es comunitario y que se mantiene con los aportes de los pobladores. En Montecristo, el acceso a esta preciada información tenía que pasar por el pago del combustible para el arreglo de la antena parabólica.

son siete años que tengo de estar aquí en el Paraíso trabajando como minero. Me ha gustado aquí por el clima, por el trabajo y porque aquí se vive en una zona muy tranquila, apartado de tanto mal en las ciudades: sin trabajo, a veces sin qué comer, ni quién le preste ni les dé nada. Pero uno aquí en el Sur de Bolívar, trabajando en las minas, cuando nosotros no tenemos con qué comprar una libra de arroz o una de yuca, vamos donde el vecino y él le presta la yuca, o se va donde el dueño de la mina, le regala un pucho de mina y ahí tiene uno para comer ya (testimonio de don Gabriel, La Humeadera, 1999).

Para el año 2000 Mina Paraíso tenía 86 casas donde vivían 250 personas, la mitad de los cuales eran niños (120 en total). Allí practican minería artesanal de socavón y de aluvión en el río Ariza, complementados con los cultivos de yuca, maíz y arroz.

Las presiones sobre los territorios por el control sobre la explotación de recursos, como los minerales, llevarán a sucesivos desplazamientos que constituyen formas particulares de “habitar”. Recuerdo muy bien las palabras de Rubiela en una de las minas del Sur de Bolívar: “Como están ahora las cosas no vale la pena quedarse acá. Porque por ejemplo uno está acá en esta zona y afuera ya lo están catalogando de guerrillero o que trabaja con la guerrilla”. (Mina Paraíso, Mina Pista, Mina para Cuidar a los Pelados).

2.1.4 Organizar: es resistir, es moverse, es liderar, es “no dejarse”

Las múltiples “llegadas” en estas tierras de serranías y planicies atadas con el río, también remiten a los recorridos vitales y personales de quienes les gusta “lo comunal”. En las vidas cotidianas de quienes así se asumen, se buscan esos espacios y a partir de allí mismo se establecen y renuevan los vínculos con las familias, se activan los esfuerzos laborales, se

constituyen lealtades y también se establecen peleas, desconfianzas y conflictos; y con todo ello, se constituyen redes, solidaridades y formas específicas de vivir en la región.

Como decía, llegué a trabajar a la región, y unos amigos me hablaron de la iniciativa del campesinado de querer organizarse, por el desamparo en el que se encontraba y que porque veían que las juntas de acción comunal no bastaban para lograr unos propósitos, unos proyectos de vida que favorecieran a estas comunidades. Y como a mí ese asunto de lo comunal siempre me ha llamado la atención, empecé a involucrarme. Cuando fui estudiante pertenezco al consejo estudiantil tanto en la escuela como en el colegio; hice parte de acciones comunales en Barrancabermeja, y sí, me gusta desempeñarme como líder comunitario. Llegué, hice mi aporte, la comunidad reconoció eso, me nombraron secretario de las comisiones, y me he desempeñado en ese cargo hasta ahora. (Líder de la Asociación de las Familias Campesinas del Sur de Bolívar y Antioquia, entrevista de octubre de 2011: Medina et. al., 2013, p. 239)

En los encuentros organizativos se va generando un espacio de reconocimiento, de establecimiento de distinciones diversas que afirman puntos comunes en juego de identidad, diversidad y oposición. Es posible advertir que las prácticas y conocimientos organizativos funcionan como una suerte de horizontalidad que permite la construcción de comunidades interpretativas.

Aquel organizar anunciado en el título de este apartado, ha sido motivado en muchos casos por la advertencia acerca de la precariedad de las vidas locales frente a un intenso trabajo y las notables ganancias de las empresas extractivas, en el caso de muchos mineros. En 1980 los mineros denuncian la participación del sector de minas y energía en el producto interno bruto (pasó del 1,27 al 4,37 en 1990). Tal situación los llevará a formular la pregunta directa en relación con sus propias vidas, enunciando la pregunta contundente de “¿por qué esa riqueza no genera bienestar al interior de las comunidades mineras?” (Marcha por el derecho a la vida Cantagallo 1998).

El otro motivo claramente identificado en los recorridos realizados es la amenaza permanente de desplazamiento, frente a la cual, se afirma un doble sentimiento que termina haciendo parte central del organizar como parte de la vida del común. “Ay mire señor que la cosa es dura. Estamos cansados de tanto andar. Mire que mi abuelo venía de lejos, huyendo de la pobreza y de la violencia. Y es que a estas alturas uno no sabe cuál es cuál.

No sabemos cuánto se debe resistir” (reconstrucción de una conversación con un poblador, Diario de campo, 1998). Frente a la llegada del paramilitarismo a la zona, se escuchan expresiones como: “Cada vez que había bombardeo teníamos que internarnos en el monte uno o dos meses. Salíamos con toda la familia, en manada, nos alojábamos en plena montaña y allá nos organizábamos (...) nos llevábamos hasta las gallinas (...) no les dejábamos nada de comida; si ellos subían nosotros también. En la parte alta los mineros nos colaboraban para comprar lo más necesario” (Arenas, 1999, p. 112) La CVC como organización volverá tales ejercicios cotidianos y comunes de resistencia en epicentro de su accionar con programas de derechos humanos: “Para prevenir desplazamientos y masacres en la región, la CVC ha formulado diversos proyectos de defensa y protección de los derechos humanos, como por ejemplo la “propuesta de establecimiento de seis campamentos de refugio temporal interno” como mecanismo de prevención de las masacres y el desplazamiento de los campesinos a las ciudades (Becerra, 2004, p. 106).

Conversando sobre la región, se resaltan varias afirmaciones que dan vida a aquel organizar como práctica de la vida cotidiana:

(1) Quisiera recordar las paradojas de las situaciones regionales planteadas por sus pobladores en términos de la riqueza vs. la pobreza de la gente -: “Aquí estamos en un territorio estratégico por sus riquezas naturales y ubicación, pero habitados por poblaciones con altos niveles de empobrecimiento”- como sostienen los pobladores. Aquí se conjugan los legados organizativos de lucha reivindicativa, poblacional, gremial y sectorial con las consecuencias perversas del miedo y el terror implantados en la población desde mediados del siglo XX, y que será agudizado por el paramilitarismo.

La paradoja también se expresa en la actuación de distintos organismos e instituciones internacionales como El laboratorio de Paz de la Unión Europea, que reivindican “la identidad, la cultura y la región”; frente al desconocimiento nacional de sus pobladores. Así mismo, se muestra por un lado, en la capacidad de sus pobladores para expresar sus concepciones sobre su historia y sus deseos, para definir una política desde ellos mismos; y por otro lado, las territorialidades se han visto afectadas por las disputas por el poder y reconocimiento local protagonizadas por actores políticos., los actores armados para

garantizar sus recursos, las instituciones regionales de desarrollo y las instancias administrativas de intervención estatal y no gubernamental.

(2) Las diversidades en movimiento: Es posible examinar desde diferentes ángulos la disputa por la hegemonía de unos órdenes económicos, sociales y culturales en el contexto de la globalización: la creciente capacidad organizativa de su población alrededor de proyectos productivos; la presencia de instancias de desarrollo regionales, nacionales e internacionales, al lado de la vigencia de acciones de guerra, de la presencia de sus protagonistas y su economía; las transformaciones de sus percepciones sobre los escenarios que alguna vez motivaron la radicación de su población actual y la forma como la proyectan en el futuro, se suman (y en algunos casos se explican unos a otros) como ingredientes sustanciales del devenir reciente de estos municipios.

En primer lugar, la experiencia de vida se constituye como la vida en común con otros, vida en común que no significa armonía y equilibrio sino que destaca tensiones, negociaciones, parentescos, conflictos contruidos por la expresión de distintas adscripciones y por la construcción de diversas subjetividades. En segundo lugar, la experiencia está relacionada con la posibilidad de construir lo común desde su capacidad de situarse frente a poderes diversos para persuadir, negociar y sobrevivir allí donde se resiste, se propone y también se disiente o se camufla. En tercer lugar, la elasticidad misma en la comprensión de la experiencia de vida obliga a entender el movimiento continuo, no solo en términos físicos, sino de representaciones y narraciones que logran ir haciendo referentes organizativos que a su vez están enriquecidos y transformados por las características de las experiencias de vida. Una suerte de escenario relacional que hace de la distinción y la elasticidad formas de realizar la vida.

(3) Oposiciones y contradicciones: En este punto quisiera plantear cuatro componentes del orden social, histórico, cultural y económico: (a) la búsqueda de acceso a bienes y servicios identificados como los símbolos del desarrollo anhelado en sus territorios. Mas allá del carácter hegemónico que subyace en la implantación de nuevas necesidades (casas de material y techos de zinc, carreteras, centros educativos profesionales o técnicos, o plantas eléctricas), vimos que la sospecha sobre los beneficios que ello reportaría no está ausente. En efecto, se reconoce en algunos relatos que el arribo de estas “mejoras” está asociado con

el individualismo y con la fractura de los lazos comunitarios ante el advenimiento de la prosperidad personal. El “desarrollo” en esta dirección es unívoco y público en términos de petición, pero su cuestionamiento se somete al silencio y a la experiencia individual cuando es dibujado como la única “alternativa” general frente al abandono y la pobreza.

(b) La conciencia de la valía que tienen, en el contexto nacional e internacional, las riquezas naturales de sus territorios. Este elemento transversal, cohabita no sólo como potenciador de su proyección económica, sino además como cohesionador de la importancia estratégica que tiene el continuar habitando estos territorios: se espera que algún día logren cosechar los beneficios pospuestos ante la contundencia del control territorial y la explotación impuestos por los actores armados. Sin embargo, reconocen que esa presencia sancionada públicamente, ha generado alternativas reales y locales; por ejemplo con el cultivo y el procesamiento de pasta de hoja de coca en la mayoría de las zonas rurales de sus municipios. La ilegalidad que este oficio reporta ha sido re-semantizada para convertirse en una especie de justificación y reclamo ante la injusticia que significa ser dueños de ricos territorios sin posibilidades rentables (y legales) de explotación.

(c) La memoria de la gesta colonizadora como motivo y resultado de la unión y la solidaridad de sus protagonistas y su descendencia. La importancia que tiene el hecho de que “otros” (el estado, los analistas, las organizaciones sociales, las instituciones de intervención) reconozcan que nada de ello, incluido el territorio, existiría hoy si no fuera por su tesón y empeño, está presente en los ejercicios de narración de sus pobladores. Así fue plasmado en los ejercicios de cartografía social que fueron realizados con motivo de la elaboración del Plan de Desarrollo del Magdalena Medio en los noventa. El valor personal, familiar y colectivo de los procesos de colonización, se invoca a partir de la fuerza colectiva emanada ante las adversidades del terreno, pero también como demostración de la capacidad de los nuevos pobladores de negociación y de forma local de tramitar el conflicto de cuño partidista o cultural (ser liberales conservadores en Río Viejo, ser santandereanos, boyacenses o costeños en Santa Rosa del sur o Barrancabermeja). Aunque ser mezclados no les permite identificarse con un único perfil cultural o identitario, sí les posibilita

presentarse ante el resto del mundo como personas solidarias humildes, inteligentes y trabajadoras.

(d) Lo que es posible denominar como “el estado suspendido” y que Serna denomina como “zonas grises” (en Arias Vanegas et. al., 2006, p. 127). Se trata de franjas poblacionales enteras deshumanizadas al ser victimizadas, por el solo hecho de ser o de estar en un paraje catastrófico de masacres y de atentados. Se definen por la conjugación entre la escasa soberanía del estado sobre las riquezas, la presencia de conflictos armados, la regulación social a través de códigos morales conservadores sustentados en medidas policivas y militaristas, en fin, por una vida regulada por menos derechos y por más leyes de excepción. En estas “zonas grises” las fuerzas que definen las vidas locales usufructúan el carácter particularizado de los conflictos, sustentando que lo importante es la seguridad e inútil pensar en cualquier otro derecho. En estos lugares, la seguridad armada resulta propicia para devastar económicamente y para generar estructuras jerárquicas profundamente autoritarias, así como morales restrictivas y flexibles al mismo tiempo. Esta paradoja del enclave, permite usufructuar la marginalidad y exclusión como valores creados de la deshumanización, de tal manera que la precariedad logra naturalizar la violencia.

2.1.5. Identificaciones: entre sabaneros, laderanos y ribereños

Los procesos de consolidación de la zona están determinados por una estructura de larga duración que se va configurando desde la Conquista, la Colonia y la República. Un proceso transcultural marcado por la desaparición de los pueblos indígenas, los palenques negros y la reducción del mundo ribereño. Un proceso heterogéneo que consolida la centralidad de algunos cascos urbanos como Simití. Los procesos de mediana duración están caracterizados por una escasa consolidación dada la fragmentación, la multiplicidad voluntariosa de las pautas de poblamiento, la variedad de formas de producción y la agudización de confrontaciones político-militares. Desde allí las gentes vienen reconfigurándose y resignificándose.

Por una parte, es posible advertir la desintegración de adscripciones construidas previamente debido a los traslados de una zona a otra, con los cuales se generan también nuevas relaciones de vecindad y parentesco. La desaparición de los carares, yariguies, pantágoras y guamocoes, de los palenques de Norosí, Arenal y Tiquisio, así como la expansión de latifundios que siguen el patrón de la Costa Atlántica, determinan la llegada de colonos afectados por las guerras civiles, por la extensión del ferrocarril a lugares definidos como importantes desde afuera: desde Santander, Bogotá o Antioquia, desde las empresas petroleras que buscan el valioso punto de empalme entre el ferrocarril y la navegación.

Las adscripciones se ven también afectadas por las irrupciones de autoritarismos que orientan determinados tipos de relaciones, así como por los procesos de masificación producto de la desterritorialización y estandarización de las prácticas. Estos procesos alimentan las diferencias entre pobladores “cachacos” (o del interior del país) y “costeños”, pescadores y agricultores; entre territorios del sur de Bolívar, del valle del río Cimitarra; entre ámbitos urbanos y rurales. Los mineros, por ejemplo recorrieron en los años setenta del siglo XX dos caminos: uno por el sur-orienté por Santa Rosa y otro por el nor-occidente por Montecristo. Los colonos que vienen de Santa Rosa provienen de Boyacá, Santander y Antioquia; los que vienen de Montecristo son costeños.

Lo anterior implica que las diversas formas de adscripción social en el Sur de Bolívar se “van dando” a partir de la recreación de los sentidos de vida heredados de los lugares de procedencia de la gente, de los lugares de asentamiento, de las filiaciones políticas y las actividades económicas que desarrollan. Entre una serie de identificaciones a partir de los nombres de los departamentos de procedencia, se señalan otras, por la pertenencia a un municipio (Santa Rosa, Simití, San Pablo) o a un corregimiento (como en el caso de las minas aledañas a la Teta de San Lucas). Éstos se conjugan con los reconocimientos que dependen de la relación con la rivera del río, las planicies y la montaña: ribereños, sabaneros, laderanos. También se detectan las identificaciones que se producen en la distinción entre los habitantes de los cascos municipales y los de las áreas rurales; o bien al

identificarse con las formas de producción como pescadores, agricultores, mineros y obreros²⁴.

Otra de las formas de identificación generalizadas es la que marca una diferencia entre la “gente ribereña” y la “gente de montaña”. Los ribereños tienen una larga historia marcada por los asentamientos antiguos de “idiosincrasia costeña” y cuyas actividades económicas están directamente influenciadas por el río. Las vidas de los ribereños corren al ritmo del río, entre sus crecientes, en medio de las ciénagas. Entre mitacas y subiendas, se vive al día. El dinamismo que entremezcla el agua y la tierra, conduce a una representación espacial marcada por la trashumancia de la tierra, que literalmente aparece y desaparece por acción de las corrientes de agua. Los ribereños saben vivir la región longitudinalmente, en la lógica de la cultura anfibia anunciada por Fals Borda (1979).

Entre tanto, la “gente de la montaña” o los “laderanos” que habitan en las serranías de San Lucas y de Santo Domingo, tienen una historia de oleadas de poblamiento de origen andino. Los laderanos son hijos de procesos migratorios más recientes dispuestos en asentamientos dispersos donde prima el interés por el acceso a la tierra. Su vida recorre en una lógica concéntrica determinada por la lejanía o cercanía con respecto a los cascos urbanos y las ciudades. Deciden sus lugares de ubicación dependiendo de donde se encuentren sus parientes o amigos, bajo lazos de cohesión desde aquí marcados, y signados por la inestabilidad de las dificultades de sobrevivencia. Las transiciones de sus vidas, hacen que en ellos la vida se descifre como un problema individual, parte importante de las lógicas propias de los procesos de ocupación territorial colona, marcados por una alta explotación de los recursos naturales.

Las diferencias entre ambos resultan evidentes. Sin embargo, es importante decir que en los dos mundos se destaca la constitución de “comunidades” como uno de los referentes colectivos más importantes. Las comunidades son un escenario de socialización y de organización, el espacio en donde se recrean las identidades y en donde se toman las decisiones.

²⁴ Para otra descripción de las múltiples identidades que entran en juego, véase: Montenegro, 1997.

Se encuentran también “los sabaneros” quienes son hijos de los procesos de extensión de la agricultura y ganadería, quienes han podido desarrollar amplias dinámicas productivas. Desde las sabanas se detenta el poder político y económico de la región. “Los pueblerinos”, es otra de las acepciones para nombrar a quienes habitan los cascos urbanos y se dedican fundamentalmente al comercio con los ribereños o con los colonos asentados y migrantes que han llegado a estas tierras atraídos por el lucro.

Otra de las adscripciones generales que se resalta es la de “colono”, como una definición de los grupos que pueblan y se apropian de los recursos de las zonas a las que llegan. Una noción que ha sido centro además de las políticas del Estado, para incorporar los “territorios de frontera” a la producción y al mercado de tierras. Darío Fajardo recuerda en tal sentido: “la colonización dirigida es una estrategia de exclusión o resultado del carácter exclusivo del régimen político colombiano, que expulsa hacia tierras de frontera a sus excedentes laborales, sociales y políticos” (Fajardo, s.a., p. 195).

Cuando hablo de “zona de colonización” me refiero a un espacio de asentamiento de familias hijas del proceso migratorio, que se dirige a “tumbar monte” para la agricultura o a abrir un socavón para “minear”. Pero “el colono”, lejos de aparecer como una definición ontológica de los sujetos sociales, designa una condición y una situación de actor en un momento particular. La procedencia, como las condiciones en las cuales se vaya estableciendo su diario vivir, van dando forma a las prácticas colonas: tumbando monte, mineando, cultivando, raspando coca, o dedicándose al oficio que sea necesario para vivir y habitar los espacios.

Con el tiempo la situación de colono se puede transformar para posicionarse a sí mismo como “poblador”. Los pobladores se caracterizan por su sentido de pertenencia al territorio que habitan y se diferencian entre sí por la definición de las características y de la magnitud con la que designan ese territorio. Así pueden ser permanentes, dueños de fincas, o vivir en continuo tránsito, suerte de trashumancia que se enriquece continuamente dependiendo de las “oportunidades”. Por ello en la región se dice que hay pobladores en continuo movimiento.

Así como para los pobladores unas actividades son “mejores que otras”, evidenciando la existencia de un prejuicio socialmente activo e interno de distinción social; también se documenta una valoración diferenciada de los territorios de acuerdo con sus capacidades productivas en términos de explotación económica. Una valoración claramente relacionada por sus formas de trabajar y poblar. Se percibe como parte del mismo eje de valoraciones, una distinción local entre ámbitos, al establecer los criterios de desarrollo en lo urbano en una relación de desequilibrio con respecto a lo rural.

Entre sabaneros, ribereños y laderanos se constituye la base del entramado cultural de la región. Tal afirmación implica que no existe una cultura en común compartida por los habitantes. La forma como se establece la que podríamos tentativamente denominar como una “colonización de aluvión”, no permite la convivencia lo suficientemente extendida como para producir un sincretismo cultural, que conforme valores, prácticas y costumbres compartidas.

Los ribereños y los cachacos muestran maneras propias de ganarse la vida, desarrollan oficios, prácticas de producción y usos del dinero particulares que son importantes en la conformación de diversos imaginarios como el asociado con la prosperidad ofrecida por el cultivo de coca, el trabajo minero, la explotación maderera. Esto hace posible hablar de la generación de grupos de pertenencia de acuerdo con ciertos circuitos económicos; asociados en ocasiones también con la guerra.

La noción de “poblador” y la de “comunidad” que le es consustancial, ha obedecido a la dinámica de movilización social y su construcción es a la que nos queremos referir principalmente en el capítulo 4. Estas identidades y diferencias así como las oposiciones sociales que las contrastan, han dado lugar a construcciones genéricas como la de “pobladores del Sur de Bolívar” y “comunidades organizadas”.

Las identidades y diferencias perfilan a la región como un paisaje en continuo movimiento, al mismo tiempo estas identidades-diferencias se ponen a jugar en procesos de oposición como la pugna partidista o alrededor de credos religiosos. Cuando se potencian estas oposiciones se generan conflictos intra e inter comunidades. Pero los conflictos más intensos se gestan cuando las identidades-diferencias son profundizadas por

contradicciones sociales, como las que se dan con los comerciantes, latifundistas, empresas extranjeras frente a los campesinos y mineros. Entre ellas se ha ido generando una distinción entre quienes se reconocen como “pobladores” y “comunidades del Sur de Bolívar” en tanto referente de movilización, y quienes ponen a jugar intereses particulares más relacionados con modelos productivos agroexportadores y formas de organización política tradicional. Las contradicciones se manifiestan, por ejemplo, en los conflictos suscitados entre la decisión de las “comunidades” organizadas de declararse en resistencia civil, espacios humanitarios, frente a la movilización en contra del despeje convocada por alcaldes, comerciantes y latifundistas en el año 2000.

“¿Con qué cultura nos vamos a identificar?” –es una pregunta que sale a relucir, especialmente en el escenario abierto por los derechos diferenciales garantizados en la Constitución de 1991, en términos culturales. La dificultad para abordarla resulta evidente, en un escenario de colonización marcado por las diversas proveniencias y por una configuración campesina, más que indígena o negra (de tipo étnico). Una dificultad que se enfrenta a su importancia en términos de la defensa territorial, que en Colombia suele enfrentarse socialmente a partir de la década de los noventa con el argumento político del reconocimiento y la defensa cultural. Se traza entonces como un camino de búsqueda de los intersticios comunes: “asumirnos desde las costumbres de la región”, “volvemos autónomos desde las mezclas de tantas identidades”. Acudiendo más bien a la comunicación y no al aislamiento como ruta de reconocimiento cultural. Entonces se afirmará en diversos escenarios organizativos, atando cultura y poder, que “sin comunicación no hay cultura” y “sin participación no hay democracia”. En la junta entre ambos enunciados se sitúa el papel central de la educación.

El abordaje de las formas y las relaciones dentro de las cuales se constituyen las pertenencias sociales, ha implicado un ejercicio práctico realizado por la gente de re-contextualizar y re-particularizar identidades y prácticas; lo que a su vez conduce a reformular las interrelaciones entre los diferentes vínculos poblacionales, culturales, productivos, territoriales y políticos. Es posible entonces argumentar que la construcción de las identidades sociales tiene lugar en el interior de las relaciones sociales antagónicas. La multiplicación y sobreposición de identidades particulariza las relaciones y con eso hace

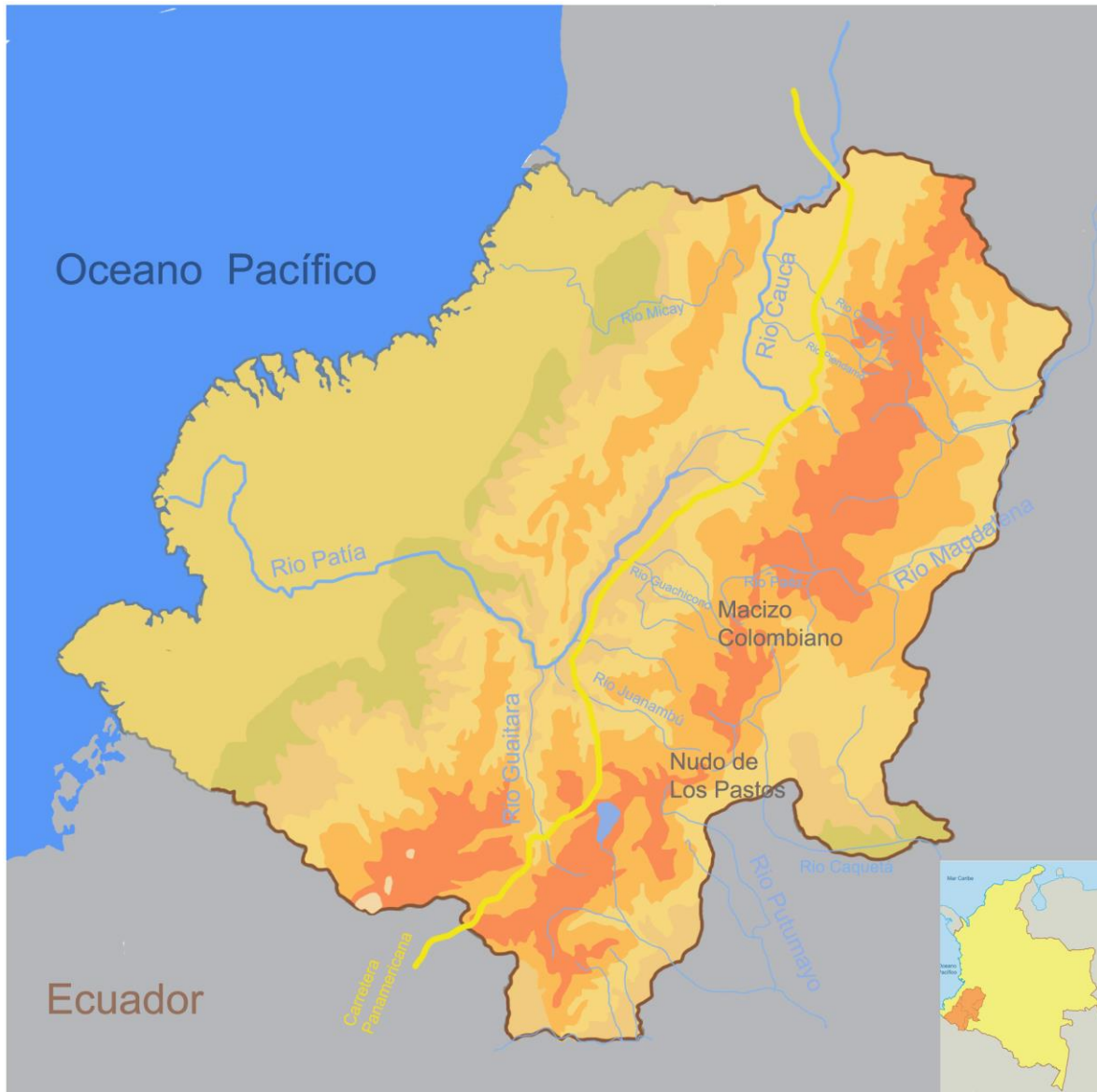
proliferar a los enemigos y de algún modo los trivializa a la vez. La re-contextualización de identidades exige el esfuerzo por dilucidar las especificidades de los campos de enfrentamiento y negociación en que las identidades se forman y en la localización de esas especificidades en el panorama de la globalización.

La configuración cultural en la región se refiere más a los sentidos y significados asociados con la posición que se ocupa en las relaciones sociales regionales, que en relación con las raíces u orígenes culturales. En tal sentido es posible advertir que la cultura se expresa como artefacto concreto de una capacidad de “nativización” de lo ajeno. Tal estrategia cultural se alimenta de los flujos permanentes que la atraviesan a la manera de una bisagra entreabierta.

2.2. Las Gentes del Sur Occidente

Las gentes múltiples del Suroccidente colombiano enseñan que para trabajar y vivir allí es necesario disponerse a “estar”. Los tiempos en sus zonas rurales se alargan, en ocasiones parece que aquel transcurrir social fuera despacio. Por estas razones, invertimos el orden de exposición con respecto a las gentes del Sur de Bolívar, porque en esta región las vidas se estructuran de forma marcada desde el “hacer casa” o “hacer / mantener comunidad”. Esto no significa que no existan interacciones ni interconexiones históricas, más bien buscamos con ello enfatizar en que se trata de una zona que en términos poblacionales está menos estructurada por un movimiento o migración constante y más por procesos de marcada “permanencia” con profundidades históricas diferenciadas. Las nociones de “pueblo”, “comunidad” y “vereda” adquieren aquí todo su peso y se sustentan, bien sea por dinámicas sociales y culturales de larga duración ancladas en tiempos pre-coloniales, o que se trazan con las rutas de esclavitud y liberación de la gente negra en tiempos coloniales; o bien, con más recientes arribos de colonos ya anclados en relaciones incluso parentales con las poblaciones nativas.

Mapa 4. Relieve e Hidrografia del Suroccidente Colombiano



Mapa elaborado por Carlos Alberto Benavides

2.2.1. Habitar: entre fogones, shagras y fincas

En las comunidades rurales con quienes se trabajó durante estos años fue posible advertir dos formas contundentes de habitar los espacios: “haciendo y manteniendo la candela” y “picando y *voltiando* la tierra”. Dos trabajos asociados con las constancias de las labores del cuidado permanente en relación con los ritmos del clima, de la reproducción de las grandes familias ampliadas, de las jornadas que se delimitan en estas tierras aún con el rigor del movimiento del sol y de la luna. Quisiera detenerme en cada una de ellas para trasegar entre comunidades precisas y recorrer los espacios en los cuales se hacen y viven las gentes de estos rumbos.

Cuando volví al Cid, la vereda de mi madre y hasta cierta edad mi propia vereda, parte del municipio de Guaitarilla en Nariño, las acciones cotidianas de mi crianza se fueron transmutando en claves para comprender las relaciones que constituyen la vida campesina. Una vez se llega a las Cuatro Esquinas se inicia un recorrido que articula las más fértiles tierras de la media montaña con el *guaico* (como se designa regionalmente a las partes bajas de los ejes cordilleranos por donde se trazan mesetas aluviales) constituido con las aguas férricas del río Guáitara. Antes, era un paisaje dominado por el monocultivo de trigo, desde la Colonia hasta aproximadamente la primera mitad del siglo XX, y ahora se presenta completamente cultivado de frijol y maíz con semillas foráneas, fungicidas y abonos que hacen posible explotar hasta el terreno más empinado. Las huellas de la erosión comienzan a hacer su más clara aparición. Ahora, hijo de la revolución verde y sus artilugios de agilidad productiva e impregnado con las valoraciones monetarias de los jóvenes y adultos que han ido por temporadas a raspar coca en el vecino Putumayo, el territorio del Cid y Guaitarilla en general, parecen bisagras entre la vida campesina (aunque no tan “cerrada” como la comunidad campesina corporativa cerrada de Eric Wolf (1970) y su, al parecer inevitable, conversión en una suerte de mixtura entre los rezagos de “otros tiempos” también anclados en relaciones rurales coloniales y la monetarización de la vida.

La vida de la vereda está constituida por las dinámicas de dos grandes familias antagónicas, alrededor de las cuales se han ido formando otras más entre lealtades y riñas. Por una parte, están los Meneses descendientes de familias nativas de estos territorios; y por otra parte están los Ordoñez descendientes de una migración de españoles pobres. Unos y otros

fueron trabajadores de las antiguas grandes haciendas que llegaron a nombrar a la vereda en homenaje al Cid Campeador, y han construido allí sus casas de habitación con sus sementeras y con cada vez más tierras dedicadas a cultivos productivos y comercializables, como el frijol o ciertas variedades de maíz. Esto no los hace campesinos “ricos”, pues se habla de un ingreso anual para una familia que consta de aproximadamente 8 a 10 miembros que fluctúa, dependiendo del precio en el mercado, entre 5 y 7 millones de pesos (entre 2.000 y 2.500 Usd.), con dos cosechas de frijol al año.

En el Cid las gentes han ido construyendo sus casas a la manera campesina: paredes de adobe, tejas de barro cocido y piso de tierra pisada o cemento. Son casas que desde principios del siglo XX y finales del XIX han sido construidas en “L” frente a la cual se dispone alguna banca de cemento, madera o algún tronco largo para recibir a la gente. Alrededor de ella y en sus inmediaciones más cercanas los hijos van construyendo sus casas con los mismos materiales, bien sea en forma rectangular o recordando la forma de aquella de sus padres. La vida comienza temprano a las 4:30 o 5 de la mañana, con el sonido de los gallos y las gentes colocándose la ropa de trabajo para cocinar, o bien para alistar la pala y ensillar las “bestias” para salir a trabajar la tierra. Los hombres y algunas mujeres se van a las tierras de cultivo, dependiendo del momento del año. Las mujeres cocinan el avío, que luego llevará la más joven para la merienda.

La vida se regula por ciclos: preparar la tierra durante febrero y marzo, septiembre y octubre; cultivar, paliando, abonando, arreglando cercas, regando, entre abril y mayo, noviembre y diciembre; y se cosecha en junio y enero. En el Cid la gente camina “ligerito”, sus pies están dispuestos a andar de aquí para allá. De lunes a sábado la gente porta sus ropas de trabajo hasta las 5 p.m., momento en el que luego de tomar un baño refrescante y comer algo, se cambian de atuendo. Los más jóvenes varones se reúnen a jugar *chaza* a esta hora. Un juego tradicional de estas tierras, que también practican los pastos²⁵. Este espacio masculino es a veces acompañado por algunas jóvenes, también arregladas, que van a encontrarse con las chicas, a coquetear y conversar.

²⁵ La chaza es un juego tradicional de origen indígena que consiste en ganar terreno en un campo de juego de distancias variables, que se divide en dos, una parte para cada equipo. Se avanza lanzando con mucha fuerza una pelota de caucho. Se juega al aire libre en espacios preparados por los pobladores para tal fin.

Estas tardes también son momentos para hacer algunas visitas a la gente cercana, tomar café y conversar. También son momentos para que las jovencitas laven la ropa en los lavaderos que se disponen a los lados de las casas, mientras suena la radio acompañada con las tonadas de la viva voz de su escucha. Entre sinfonías populares de amor y despecho transcurren las tardes quedas en el Cid, hasta que cae la noche y es tiempo de tomar algo, si se tiene televisión ver las noticias y alguna novela, mientras se mueve constantemente la antena de la televisión para menguar el ruido causado por la mala señal. A veces, muy pocas veces, suena el celular que cuelga de algún poste de la entrada, porque sólo allí coge la señal. De resto, no hay otro ruido que interrumpa la taciturna velada.

Ahora, más al norte, entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, se despliega la vida del pueblo misak que habita en Guambía, marcado por el frío y el fluir de la lluvia constante. En su mayoría viven en la vertiente occidental de la cordillera central, en las inmediaciones del páramo de las Delicias y de Moras, en el resguardo de Guambía (municipio de Silvia), donde entre tierras de páramo y las lagunas de origen Ñimbe y Piendamó, nace el río del mismo nombre que recorre su territorio y que se vuelve tejido en forma de zigzag. Con el transcurrir del tiempo se han organizado nuevos resguardos ubicados en Bonanza, municipio de Morales y La María, municipio de Piendamó, en el Cauca; y los resguardos Nam Misak, La Reforma, Nuevo Amanecer y la Gaitana, en el Huila. También se han establecido nuevos asentamientos que cuentan con autoridades tradicionales, en: Munchique, Tambo; Kurakchak, Cajibío; Piscitao, Piendamó; San Antonio, Morales; Ovejas y Siberia, Caldono. Otras familias viven en los municipios de Santander de Quilichao, Jambaló, Totoró, Inzá, Páez, Pueblo Nuevo–Caldono, en el departamento del Cauca; Ginebra en el departamento del Valle y en las ciudades de Popayán, Cali, Medellín y Bogotá (Cabildo de Guambía, 2009, p. 31).

Lo primero que se advierte mientras se llega de Piendamó (un tradicional poblado que se constituye en punto de encuentro para partir hacia muchas direcciones) a Silvia y ya se está en las inmediaciones del resguardo de Guambía, una vez se ha andado aproximadamente 30 minutos cuesta arriba, son los retazos de telas verdes y amarillas donde reposan los cultivos y el humo que sale quedo por las chimeneas de pequeñas casas con techos de teja de barro y paredes de adobe. Son los primeros indicios de habitación que se advierten desde lejos. Si

el humo no hace presencia es la mejor manera de saber que la casa está vacía. Y es que el fuego debe arder siempre, sólo se apaga en las noches cuando ya es hora de dormir.

De manera similar sucede en tierras pastusas, donde las montañas andinas se inclinan aún más, hasta advertirse una verdadera y ya reconocida colcha de retazos en una zona donde “el verde es de todos los colores” -como diría el célebre poeta nariñense Aurelio Arturo. Y es de todos los colores porque se trata de tierras muy fértiles, de tierras negras, producidas por las familias campesinas e indígenas en pequeñas porciones que permiten contrastes entre cultivos. Entre uno y otro tono, también allá se asoman las pequeñas casas vociferando con bocanadas de humo que el fogón está prendido. Entonces la señal se torna clara: se puede entrar, hay café para abrigarse y charlar.

Prender la candela es el primer aprendizaje de los niños y también de los foráneos. Hacer el fuego es condición para “enseñarse” a estar en estas tierras andinas. Y enseñarse no es otra cosa distinta a aprender y disfrutar de las formas convenidas culturalmente de habitar unos espacios, paisajes y geografías, para estar con todo lo que allí existe. “Enseñarse” es un término nariñense particularmente expresivo del arraigo territorial que caracteriza a las gentes andinas, aún más contundente en las tierras de la media montaña y alturas paramunas, donde las gentes han aprendido a vivir con bajas temperaturas y climas húmedos. En los guaicos o partes más bajas ancladas en las riberas de los ríos, como el Guáitara en Nariño, se sabe estar desde allí mismo, pero también en múltiples relaciones articuladas con los flujos de los ríos.

En climas templados, fríos y paramunos apenas se llega a una casa la gente invita a “abrigarse” que significa muchas cosas a la vez, en una suerte de sentido compartido en la región. Es literalmente “calentarse”, una práctica fundamental en los climas paramunos o en las noches frías; pero calentarse también es aquí “acomodarse”, “sentarse”, “ponerse cómodo”, “descansar”; ambas condiciones relacionadas con la generación de un espacio de conversa, de relato, de cuento, de noticia. Éstas nunca llegan antes de haberse dispuesto en la candela. Y a la vez es sinónimo de “café”, aunque muchas veces éste no sea propiamente café, sino aguadepanela (bebida de panela o piloncillo reducida en agua). Un “cafecito” que suele acompañarse con panes redondos y de consumo individual, a veces aderezados con un trazo de queso fresco, o con tortillas hechas a mano con diversas preparaciones que

mezclan harina de trigo y/o harina de maíz, huevos y agua, hasta ser freídas o asadas en *cayana* (última preparación menos frecuente que aún se encuentra en algunas familias, realizada sobre una plataforma de barro cocido). Incluso el “café” puede traducirse en la práctica en una sopa de papas, habas y maíz tierno, en Nariño y Cauca podría ser una mazamorra de maíz, quinua o *mexicano* (calabaza nativa) con leche y panela, o cualquier otra preparación “caliente” que invite al abrigo-conversa-intercambio. Esta es la que podríamos denominar como la “práctica de bienvenida” tanto para los que vienen de visita, como para los hombres cuando llegan de sus jornadas de trabajo agrario, o para recibir a los niños que vienen de estudiar.

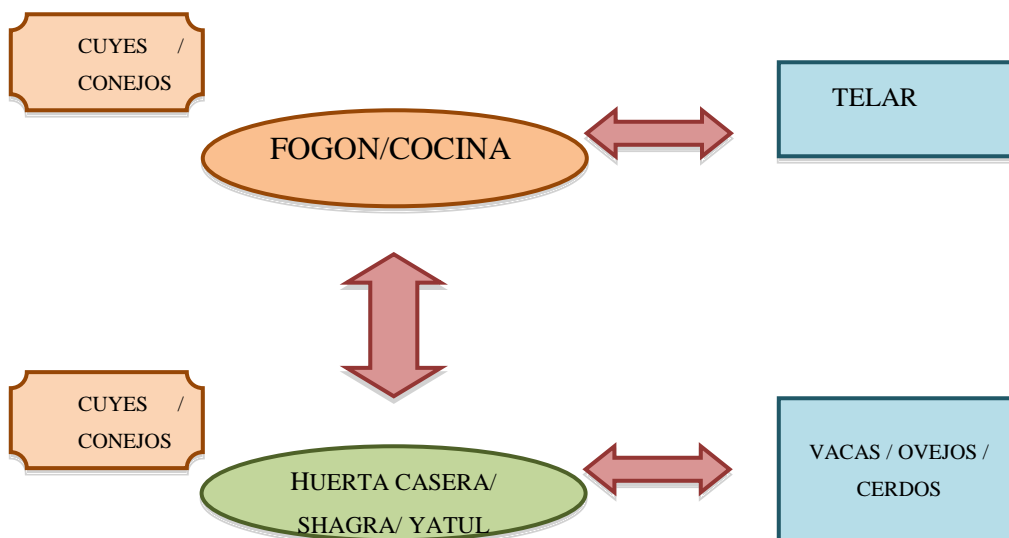
En el Suroccidente “llegar” es tomar café y “estar” en un espacio social es preparar el avío para llevar, es parar la jornada de trabajo agrario o de reunión política para tomar café. Tiene la contundencia y la centralidad suficiente para definirlo como una práctica social que articula las cotidianidades y que articula lugares de la vida de la gente.

En las vidas rurales el primer espacio visitado es entonces la cocina. Un espacio que ya amerita una serie de estudios etnográficos específicos, pues las cocinas son centros de reunión que dan unidad a la vida rural. Las cocinas son el lugar de llegada y de permanencia también, en las zonas rurales de Nariño y Cauca tienen un orden y apariencia comunes: suelen ser oscuras, con las paredes marcadas de un negro-marrón con cierta grasa, generado por la constancia del fuego de leña prendido. En un rincón se disponen los fogones que muestran tres diseños: los más rústicos están constituidos por tres piedras grandes, dentro de las cuales se atiza el fuego y sobre las cuales se colocan las ollas, mejor conocidas como *tulpas*; otras disponen pequeñas y bajas paredes de ladrillos o cemento sobre las cuales se colocan algunas varillas de metal para sostener las ollas. Los menos rústicos colocan sobre las paredes o base de cemento una parilla grande con dos o más hornillas de hierro donde se “paran” las ollas. A un lado y afuera de las casas se disponen los leños para prender el fuego. Así se sitúan todos los materiales necesarios para atizar permanentemente la candela, incluso con la ayuda de alguna varilla de metal gruesa o alguna caña hueca, para soplar.

Otros tres elementos constituyen estas cocinas de manera general: el “soberado” o altillo en el techo de las cocinas utilizado para secar y almacenar los granos una vez han sido

cosechados. En algunas casas lo utilizan actualmente como cuarto para guardar utensilios y cosas de diversa índole. Algún rincón cerca del calor producido por el fogón se dispone para la cría de los cuyes, esos pequeños roedores de cría doméstica que alimentan con ciertas hierbas que cultivan en las huertas, y que estarán listos para ser asados en alguna ocasión especial. Y por último, encontramos sillas, pero sobre todo bancas y mesas para que la gente se acomode. Cuelgan las ollas y los cucharones, y arriba del fogón suele estar colgada alguna proteína para darle “gusto” a la sopa. Así también se encuentran los rastrillos, palas y azadones que atestiguan la llegada de los hombres y de las mujeres.

Este espacio merece toda nuestra atención pues constituye un nodo central de las vidas rurales, allí donde se articula lo que se produce y se cría, con lo que se come y se comparte. Su centralidad conduce a proponer el siguiente esquema como un esfuerzo analítico por caracterizar en términos generales las articulaciones que referimos a partir de una central fogón/huerta que constituye “LA CASA”.



En las cartografías sociales realizadas con varias comunidades, esta articulación resultó evidente. Pero sobretodo quedaría muy clara al interrogar a las mujeres de los pueblos indígenas quillacinga de Jenoy y de los pastos, así como a las comunidades campesinas de Samaniego y Ricaurte en el departamento de Nariño, a las mujeres indígenas del resguardo

misak de Guambía, sobre su trabajo y su vida alrededor del tejido; y a la gente de Pureto y las Brisas en el norte del Cauca. Este trabajo se realizó con la elaboración de mapas en cada una de las comunidades participantes, anexamos algunos para ejemplificarlo de mejor manera en el cuadernillo de este capítulo.

Esta relación fundamental en las formas de habitar, se presenta en las comunidades del norte del departamento del Cauca, donde se están elaborando los planes de vida desde el 2012, con el propósito de lograr su reconocimiento como Consejos Comunitarios, de los que hablaremos más adelante. En el municipio de Suárez, las gentes recuerdan las fincas como aquella unidad territorial constituida entre la casa y los cultivos. En un ejercicio en el que se tuvo la oportunidad de participar, tales relaciones fueron trazadas sobre un mapa, hasta ser nombrados por la gente como la “finca tradicional” en la misma articulación que planteamos arriba, con cultivos de tierra templada y caliente.

De aquel “picar y voltear la tierra” se hablará con mayor detalle en los apartados que siguen a continuación.

2.2.2. Trabajar: “voltear la tierra”, minear, tejer y criar



Cuando el armadillo le comprometió en matrimonio, ella empezaba a tejer bien finito y cuando le decía que ya mañana iba a ser el matrimonio entonces doblaba la trama y lo hacía más grueso, por eso es que la colchita donde ella va, por eso es que es finito y la otra es como más grandecita, entonces ése es el significado del animal. Por eso es que nosotros a veces por hacer las cosas más ligero, entonces hacemos lo mismo: queremos que todo sea rápido, empezamos finito y terminamos ya casi grueso. Las mayores enseñaban que uno, el hilado, si empezaba finito tenía que seguir apretando finito, sino, tenía que terminar lo mismo,

porque si uno aflojaba los dedos se le iba más grueso más grueso, y entonces ya quedaba desigual. Los abuelos sabían decir que cuando la mujer misak comienza un trabajo hay que terminarlo conforme lo empezó. Habla de la justicia, habla de la educación (mientras va señalando el cuerpo del armadillo) habla de la medicina, de todo” (mamás parteras del pueblo misak, II Encuentro de Mujeres Tejedoras, valle de Sibundoy, 26 de noviembre de 2011).

Con esta historia-mito recreada por dos mujeres parteras del pueblo misak que habitan en el resguardo de Guambía, se explicita lo que se podría denominar como una ética del trabajo, en este caso expresada desde lo femenino, asociada con la constancia, la precisión y sobre todo, con un hacer constante, con aquel “mantener las manos ocupadas” como un principio de vida. Lo exploramos con base en un mito misak, sin embargo es un principio anclado de forma común en estos mundos rurales, donde “estar con las manos sucias”, “con las uñas llenas de tierra” es apreciado como virtud; habla y describe a su portador, remite al trabajo constante y a la disciplina.

Durante un ejercicio realizado con mujeres de varios pueblos y comunidades del Suroccidente colombiano, ellas mencionaban que “las mujeres trabajamos en ser organizadas en nuestro trabajo, elaborando artesanías (chumbe, fajas, mochilas, collares, pulseras, aretes, anacos, sombreros, ruanas, refajos, bolsos, *jigras*, chales, escaarpines, bufandas), hilando”. En aquella ocasión se lograron enumerar alrededor de cuarenta labores desarrolladas por las mujeres y entre las cuales se incluyen: el cuidado de los niños, la ejecución de curaciones, alimentación, todo tipo de tejidos, el cuidado del esposo, la crianza de animales, los cuidados de la shagra, la huerta o los cultivos, las labores relacionadas con los Cabildos, venden en las plazas de mercado, recogen frutos, cortan leña, barren y asean la casa, acompañan a sus esposos a diversas actividades comunitarias, algunas son maestras o desarrollan otros trabajos locales, educan a los hijos; entre otras labores. Todas aquellas labores se realizan en simultaneidad, sin embargo este trabajo casi nunca es valorado, como las mujeres lo enunciaron en el I Encuentro de Mujeres Tejiendo la Vida (Guambía, 2010).

Un trabajo que termina enunciándose como el conjunto de haceres y oficios femeninos que garantizan “tener muchas cosas sin necesidad de plática.” El trabajo constante es soporte de

cierta autonomía de los núcleos familiares, a su vez garantizada por procesos de enseñanza-aprendizaje intergeneracionales que se van dando en los mismos circuitos de “la casa”, en el sentido anunciado arriba. Por eso el telar forma parte de estos núcleos que articulan los lugares del trabajo de las mujeres.

“Nosotras las mujeres somos las del tejido” –afirmarán otro conjunto de mujeres de los mismos pueblos para trazar un dibujo que para ellas representa su quehacer femenino. Se trata de un árbol en cuyas ramas se establece una relación entre las diversas formas en que las mujeres “unen”, como una suerte de epistemología asociada directamente con el trabajo, así esta palabra parezca a veces extraña a ellas mismas, especialmente para las indígenas: “unimos pensamientos”, “unimos las partes de nuestras vidas”, “somos tejedoras de vida”, “para hacer algo preparando el espacio”. Y en el corazón o raíz del árbol se articulan los dos lugares de la “casa”: fogón, shagra/yatul/huerta casera” (Transcripción de relatorías del trabajo colectivo. II Encuentro de mujeres tejedoras, Valle de Sibundoy, noviembre de 2008).

En los patios de las casas de Suárez se ve a las mujeres trenzándose el cabello, mientras se escucha a alguna de ellas explicar que por ahí llegaron sus antepasados en las rutas de la esclavitud. También se alcanza desde afuera a sentir el olor del sancocho que hierve y hierve, mientras otra de ellas barre la parte delantera de la casa con una escoba de paja dura.

Los hombres también realizarán algunas labores importantes en la “casa”. Algunos desarrollan oficios relacionados con la carpintería, como el padre de mamá Liliana Pechené en Guambía, quien ha fabricado literalmente todos los muebles de la casa. O serán fundamentales con las mujeres en traer la leña y arreglarla para el fogón. Otros, como en Jenoy, aquel pueblo ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Pasto (Nariño), desarrollarán en casa tejidos de los canastos por encargo que luego venderán en la ciudad de Pasto. En Guambía, algunos hombres jóvenes tejerán en las cocinas o entradas de las casas el *tampalguari* o sombrero tradicional en paja toquilla. En el Cid no podemos menos que recordar a Alonsito, con algo más de 70 años, amarrando los animales, trayendo los residuos de comida que reposan en la cocina para darle de comer a la cerdita que tanto

engorda; quien además ordeñará todas las mañanas muy temprano a las vacas para fabricar la cuajada, que venderá a algunos vecinos.

La huerta casera para muchos, el *yatul* para el pueblo misak, la shagra para los pastos, los jenoyes y para algunos campesinos nariñenses, así como la finca tradicional en las zonas negras del Norte del Cauca, son lugares de trabajo fundamentales. Así no sean iguales, si es posible advertir en todas ellas una gramática, unas lógicas, unas prácticas de vida similares. En estos lugares de producción de alimentos las mujeres ocuparán un lugar central, pero también los varones desarrollarán una serie de actividades cotidianas en complementación. Será en estos espacios donde los niños y las niñas aprenderán sobre los cuidados de la siembra, sobre los tiempos de cada producto, sobre las complementariedades entre una planta y otra. Allí aprenderán, como dirán los pastos: “qué quiere crecer al lado de qué”, sabrán que la caca del cuy entreverada con tierra es uno de los mejores abonos, aprenderán como lo vimos en Jenoy que arar con yunta de bueyes alimenta la tierra con el vaho que exhalan los animales; sabrán distinguir las plantas que sirven para sanar el estómago, para calmar el dolor de cabeza, para prevenir el mal de ojo, en fin... sabrán de las relaciones entre los alimentos que se comen y las semillas que se siembran, entre las carnes que se consumen y los animales que se crían. Sabrán que no habrá qué comer si no hay trabajo y “cuido”.

En el *yatul* o huertas caseras en Guambía, ahí es donde sembramos. El *yatul* no es una pequeñita huerta en Guambía, es grande. En el *yatul* se consigue todo lo que se tiene sembrado... ahí es donde sembramos papa, la cebolla, alverja, ulluco. La casa es *yatul*, lo que esté sembrado alrededor de la casa, ahí ya comparte todo. Tiene el respeto de la casa, ahí no más hay. Ahí está todo, telares, fogón. Ahí está el tejido, donde estamos construyendo con los hijos. Como dicen ahora, bien o mal ahí está la mujer. Si no está la mujer tiene apagado la candela, cuando llegan los hijos con hambre no hay quien atiende, lo mismo al esposo. Entonces en ése es que se enfría la cocina. Donde no esté la mujer ahí se apaga todo: la candela y no existe quién esté atendiendo en la cocina (mujer misak, II Encuentro de mujeres tejedoras, Valle de Sibundoy, noviembre de 2011).

Algunas mujeres misak definen a partir de “la casa” el *trabajo* que realizan, en los siguientes términos: “Una mujer está con los hijos y lleva la panela en la *jigra* (mochila tradicional misak), se va con el hijo cargado al trabajo. El hijo se echa en una hamaca para

que estén durmiendo y la mamá se va a recoger leña. Por la tarde vuelve a casa y el hombre carga al hijo y la mujer la leña”. Luego hacen la cena a las siete de la noche. A la mañana siguiente se levantan y hacen *masas* (pan de harina de trigo frito, hecho a mano). “Así, tenemos que trabajar con esposos y enseñar a los hijos” (Transcripción de conversación entre mujeres misak, Jenoy, 2010).

Es la shagra para los pastos, quienes dedican esfuerzos coordinados por mujeres y jóvenes para recuperar estos espacios que hoy se encuentran amenazados ante la expansión de la ganadería lechera en el altiplano de Cumbal. En la actualidad el pueblo de los Pastos, habita tierras del departamento de Nariño, que incluyen a los resguardos indígenas (pastos) de Cumbal, Panam, Chiles, Mayasquer; Guachucal, Colimba y Muellamues; Túquerres, Yascual, Guachavez y Mallama; Cuaspud y Pastas; Ipiiales, Yaramal y San Juan en el altiplano y la vertiente Pacífica. Males y Potosí en el curso del río Guáitara junto con Miraflores, Aldea de María y Sande, y en el vecino país del Ecuador se encuentran en la provincia del Carchi. Son uno de los pueblos indígenas más numerosos de Colombia, con una población estimada de 120.000 habitantes, distribuidos en 48.036 hectáreas, organizados en 21 resguardos (Sánchez y Arango 2004). Con ellos, buscan constituir un territorio binacional para restablecer la continuidad perdida tras el establecimiento de la frontera sur del país.

Shagra llamamos al espacio que hay dentro de la familia para uno dar los diferentes productos, tanto agrícolas como pecuarios. La shagra es un conjunto de todo lo que uno puede armonizar dentro de su territorio (mujer del pueblo de los pastos, II Encuentro de mujeres tejedoras, Valle de Sibundoy, noviembre de 2008).

En el pueblo de los pastos una shagra puede estar constituida por apenas unos 10 o 15 m², o bien incluir una o más hectáreas. Sin embargo, la condición de una shagra es su alta diversificación productiva, debe tener un poco de todo lo que crezca y que junte o articule en un mismo terreno alimentos para humanos con alimentos para conejos y cuyes, con el cultivo de hierbas o plantas medicinales, con algo de comida para el autoconsumo y otro poco para dar, regalar e intercambiar. Incluso dentro de la shagra se pueden también criar conejos y cuyes, poner cerca corrales de gallinas. Así lo comprendí luego de visitar las principales shagras de familias en Jenoy y en territorios pastos. Aunque en Jenoy diferencian entre la huerta casera y la shagra. En sus palabras: “la huerta casera es lo que se

siembra alrededor de la casa, lo demás para nosotros es la shagra”- sostiene una mujer de Jenoy (II Encuentro de Mujeres Tejedoras, valle de Sibundoy, 26 de noviembre de 2011).

Otras son las shagras y yatules de algunos médicos y médicas tradicionales, incluyendo a las parteras. En Guambía visitamos la casa de mamá Agustina, importante partera, quien vive en la casa que le dejó su padre, reconocido médico local. En la parte alta de la vereda de Cacique dentro del resguardo de Guambía se dispone un pequeño camino de a pie muy estrecho y empinado que conduce a una pequeña casa, con una construcción de apenas unos 40 o 50 m², de techo muy bajo, con un yatul pequeño en su margen izquierdo, dedicado completamente al cultivo de plantas medicinales. Hierbas, pequeños arbustos, flores de todos los colores se disponen cuidadosamente, pues cuando llegue la hora del trabajo de parto que debe atender o de la medicina que hay que preparar, allí encontrará todo lo necesario (Diario de campo, Guambía, 2014). También en el guaico que forma parte del territorio de Jenoy en Nariño, se contó con la oportunidad de visitar la shagra medicinal de un médico reconocido. Era clima templado, crecían plátanos y a su lado se disponía una shagra bastante más grande que la de mamá Agustina, con todas las plantas medicinales requeridas, además de algo de maíz y plátano (Diario de campo, Jenoy, 2010).

El espacio de las huertas se irá relacionando con las otras actividades y trabajos que constituyen la casa: “Ahí mismo vienen también los tejidos pues, el anaco (falda), la ruana, el tejido de la jigra” – como afirmará una mamá guambiana (II Encuentro de Mujeres Tejedoras, valle de Sibundoy, 26 de noviembre de 2011).

La comunidad campesina de Samaniego habita un territorio que se extiende a partir de un asentamiento fundado en 1857 entre verdes montañas. Viven en una tierra templada y fértil bañada por abundantes aguas, en cuyas riveras se despliega una importante producción agrícola. El municipio de Samaniego ubicado al centro occidente del departamento de Nariño, recibe las cálidas y húmedas brisas de la cuenca del océano Pacífico. Aunque se trata de un territorio básicamente montañoso, donde se destacan los cerros del Gordo, Inga, La Cruz y Pelado, posee también algunos sectores planos y ondulados.

La vida en Samaniego se desenvuelve entre veredas en pequeñas casas rurales, donde hierve el café listo para recibir a quienes llegan exhaustos de intensas jornadas laborales.

Entre las veredas se encuentran los cultivos de café, frijol, maíz, alverja, plátano y yuca, allí trabajan al jornal hombres y mujeres. Se trata de jornadas de trabajo de 6 o 7 a.m. hasta las 4 p.m. cuando llegan a sus casas a continuar con los trabajos de “la casa”, en el sentido integral que hemos caracterizado. Lo producido, bien sea propio o ajeno participa en los mercados locales de productos, donde llegan locales y foráneos.

Las mujeres de estos municipios con quienes se trabajó, llegan a esa hora de trabajar por un jornal y es cuando pueden realizar algunas reuniones organizativas o cuando inician en ocasiones a la par de los hombres, con las labores de la casa. Entre ellas, es cuando sacan tiempo para trabajar tejiendo, aquellos famosos sombreros de paja toquilla (de producción local).

A nosotras nos toca ir a trabajar donde los que tienen un pedacito más de tierra, porque acá es muy poquita la tierra que tiene cada una y no alcanza para sembrar algo así grande; por eso toca un día jornalear en un lado y si no hay más allí, toca buscar en otro lado. Ahorita, allá en el trabajo, son mil quinientas hectáreas. Nosotros no tenemos tierra, sólo la casa (voces de mujeres de Samaniego-Nariño, Transcripción, Samaniego, 2011).

La finca como lugar donde habitan las familias campesinas y donde se produce y reproduce la vida y los conocimientos locales, es un referente social “para mantener las buenas costumbres y para recuperar y ponerlas nuevamente en práctica, rescatar conocimientos sobre plantas medicinales y semillas, indagar las transformación de las normas de justicia comunitaria, que por años fueron pautas para la convivencia entre vecinos” (voces de mujeres, valle de Sibundoy, 2011).

La dinámica de las shagras, yatules, huertas caseras y fincas está acompañada con el trabajo en cultivos comercializables que cada vez sobrepasan en tiempo y dedicación a las labores asociadas con la producción de alimentos en el campo –tanto para el consumo como para ser intercambiados o vendidos. Tal situación es aún más notable en las comunidades campesinas; sin embargo, la producción lechera en el territorio pasto de Cumbal y en otras zonas de Nariño, deja entrever altillanuras pobladas fundamentalmente por vacas lecheras y por las centrales de acopio de leche en propiedad de las grandes industrias de lácteos a nivel nacional (Alpina, por ejemplo). En tales lugares, las huertas muchas veces están reducidas a

su mínima expresión, o bien, simplemente han dejado de existir. En la vereda el Cid de Guaitarilla las fincas de tierra templada están cubiertas de frijol o maíz, en las partes altas ya hay algo de arveja o chícharo (menos deseado por su bajo precio). Toda esta producción es trabajada con glifosfato y con la utilización de abonos que se consiguen en la cabecera municipal. Es sencillo advertir ya el olor a químico que comienza a invadir a algunas casas de las veredas y más evidente aún, ver las cajas de cartón que un tiempo atrás contenían el “preciado” químico. En algunas comunidades campesinas del Norte Nariño, como en Taminango y San Lorenzo, las producción de café para exportación había implicado en los años noventa, el abandono de la producción de alimentos.

En la memoria de los pobladores de Pureto en Suárez (norte del Cauca) todavía se recuerda cómo la cuenca del río Marilopito era la despensa de productos agrícolas de una vasta zona del alto Cauca. La producción agroalimentaria de la vereda era lo suficientemente variada para cubrir las necesidades de las familias allí asentadas y para generar excedentes importantes para el mercado. Aún así, es sólo con la llegada del café a finales de los cincuenta que empieza a generarse una mayor participación de la vereda en el mercado regional, y cuando se producen ciertos niveles de diferenciación social entre los pobladores.

A finales de los años setenta, un importante proyecto de infraestructura regional tendrá lugar en Suárez: el represamiento del río Cauca y la construcción de la hidroeléctrica de Salvajina por parte de la Corporación Regional del Valle del Cauca (CVC). La construcción de la represa (1979-1985) fue una iniciativa agenciada por el Estado y la empresa privada, con el doble objetivo de generar energía eléctrica para Cali y reducir el caudal del río Cauca para evitar las inundaciones regulares de la zona plana donde se extienden los monocultivos de caña de azúcar, que sostienen la agroindustria del Cauca y Valle del Cauca²⁶.

El proceso de construcción de la represa propició formas de despojo presentes aún en la memoria de los pobladores de los municipios aledaños de Suárez, Morales y Buenos Aires. La distribución diferencial de ventajas y desventajas generadas por el proyecto, hizo recaer

²⁶ El caso de la CVC es paradigmático en Colombia. Tratándose de una entidad estatal, esta corporación desde su fundación y hasta años recientes fue constituida y dirigida por la clase empresarial vallecaucana. Este hecho no es irrelevante si tenemos en cuenta el tipo de proyectos agenciados por la corporación y su frecuente coincidencia con intereses puntuales del sector empresarial. En el caso de la Salvajina es claro que los cañicultores de la zona plana fueron unos de los principales beneficiados con el proyecto.

en la población local el grueso de las segundas, al tiempo que limitó el aprovechamiento de las pocas ventajas generadas (véase: Reygadas, 2008). A los costos de modificación del paisaje, se sumaron los costos sociales y culturales de intervención sobre una población sin posibilidades de negociación reales.

Pero el efecto más contundente lo produjo la bonanza del oro propiciada por la remoción de tierra durante la construcción de la represa. Dicha bonanza generó en menos de tres años una migración masiva de mineros artesanales foráneos hacia la cabecera de Suárez. Mucha gente dejó de cultivar para dedicarse exclusivamente a la extracción del mineral. Sin comida los precios subieron, aumentó el dinero circulante, el comercio y el consumo, y también los conflictos. La zona fue militarizada, y una vez se llena el embalse cientos de personas se quedan sin trabajo ni alternativas de subsistencia. Allí inicia un éxodo masivo hacia la ciudad de Cali.

En la misma zona del Norte del Cauca, como se desprende de lo anterior, resulta importante referir el desempeño de trabajos de minería artesanal, especialmente por parte de poblaciones negras asentadas en los márgenes de los ríos. El municipio de Suárez se ha caracterizado históricamente como zona minera. Desde los primeros asentamientos de gente negra durante la Colonia, la minería de aluvión ha sido junto con la agricultura una de las principales actividades de los pobladores de la zona. Tradicionalmente, el mazamorreo en las orillas del Cauca y sus afluentes se consideraba una manera de complementar la producción familiar dedicada a la agricultura. De igual manera, aunque en menor proporción, los pobladores locales se dedicaban a la minería de filón o de socavón. Esta actividad, sin embargo, fue más reciente y, de acuerdo con algunos viejos, comenzó con la explotación de las minas de Tamboral, la Turbina y Paso Bobo, donde se trabajaba con molinos rústicos.

Estas dinámicas productivas se continúan en una serie aún variada de dinámicas de intercambio y comercialización que es posible documentar desde tiempos precoloniales. “Cuando cosechamos compartimos con nuestros vecinos y familiares. En fechas especiales compartimos la comida y la bebida con los seres queridos” – recuerdan algunas mujeres. “Los intercambios parten de la shagra, anteriormente se presentaba el trueque. Con lo cual se fortalece la alimentación de nuestros pueblos. Permite intercambiar cosas que son de

utilidad. Dar más de lo que se recibe: “*lapayac*” – agrega una mujer del pueblo de los pastos. Hoy en día, la gente lo relata en una secuencia de intercambios entre productos de tierras altas por productos de tierras bajas, productos de la tierra por productos manufacturados. Así lo explican: “Papa por yuca o plátano, leche por panela, mochilas por gallinas, maíz con aretes, anillos, esteras” – al decir de algunas mujeres (II Encuentro de mujeres tejedoras, Valle de Sibundoy, noviembre de 2008). Y se caracteriza que el intercambio es de acuerdo a la condición climática con personas cercanas, aclarando que se intercambian más alimentos que tejidos.

También se logran identificar los calendarios festivos como lugares nodales del intercambio. En el Encuentro realizado con tejedoras en el Valle de Sibundoy, resultó evidente la existencia de varias sucesiones de fiestas de pueblos, que históricamente han dispuesto escenarios de interconexión comercial. En esta zona existen una sucesión de carnavales celebrados entre enero y febrero entre el carnaval que se celebra en Popayán y todos los rincones del Cauca, el Carnaval de Blancos y Negros de Pasto y de todos los municipios aledaños, y el Carnaval del Perdón en el Valle de Sibundoy; verdaderas fiestas carnavalescas, que convocan a diferentes gentes de la región. La semana santa, por ejemplo, se menciona como una ocasión importante para intercambiar en las familias; como ocurre también en las ofrendas de noviembre.

Algunos registros nos sitúan en este tipo de intercambios propios de la “microverticalidad andina” descrita al detalle por John Murra para tiempos pre y poscoloniales (archipiélago vertical). Vale la pena traer a colación algunos hechos importantes. Los campesinos del guaico de Guaitarilla llaman hasta la actualidad “pastos” a quienes vienen de tierra fría a vender o a intercambiar productos como la papa. Tal denominación alude al menos a la memoria de relaciones comerciales de importante profundidad histórica con el pueblo indígena que habita las tierras altas: los pastos. Algunas familias misak que habitan en el resguardo de Guambía de tierra fría y quienes han logrado cierta capacidad económica, tienen algún terreno en clima cafetero, lo cual les permite contar con otro tipo de productos que no pueden cultivar en su “casa”.

Las formas de producción así como las estrategias de comercialización, no sólo se han visto afectadas de forma evidente por la Revolución Verde de los años sesenta, por el TLC que

abarata los costos de las producciones locales, por la introducción de abonos y pesticidas; sino también por los ciclos del narcotráfico en Colombia. El norte del Cauca históricamente ha albergado cultivos de coca. Hasta finales de 1980, el cultivo sirvió para el consumo tradicional de los mambeadores campesinos indígenas, negros y mestizos. Proscrita por las autoridades desde la colonia temprana, la masticación tradicional de la coca, una práctica de origen indígena, se extendía por todo el suroccidente colombiano hasta bien entrado el siglo XX. A finales de la década del 40, era común en esta región el pago de jornales con hojas de coca²⁷. En zonas aisladas como Pureto, la “pesada” o “manotada” de hoja se mantuvo como parte del pago del jornal hasta finales de los ochenta. Y aún hoy en día es posible encontrar mambeadores negros que cosechan la “pajarita”, variedad endógena de coca, para su consumo.

Ahora bien, aunque la coca siempre ha estado, sus variedades, usos y formas de producción han variado en los últimos años. La crisis económica que vivió el país desde mediados de los años noventa, en zonas como Pureto se experimentó dramáticamente. Muchos jóvenes de la vereda debieron salir a buscar trabajo en el Yarí y el Caguán en el Caquetá. Otros se fueron a probar suerte en el alto Naya. Fue allá que los pureteños aprendieron a sembrar y raspar coca. Algo similar ocurre en muchos rincones de Nariño cuando campesinos salen de sus territorios por temporadas a raspar coca en el vecino Putumayo.

La masacre del Alto Naya en 2001 y el levantamiento de la zona de distensión con las FARC en 2002, fueron dos momentos que activaron el retorno a Pureto. Una vez de regreso la gente debe volver a enfrentarse a las plagas y a los bajos precios de los productos tradicionales en el mercado. El *pasador*, la plaga del plátano, acabó prácticamente con el cultivo. La *broca* disminuyó al mínimo la producción de café, y la baja del precio de la caña de azúcar, en pocos años obligó a abandonar la producción de panela. La vida cotidiana de estos campesinos, hasta entonces dedicada a la agricultura de subsistencia y a productos de buena salida como el café, empezaba a demandar más dinero circulante a medida que se hacía menos rentable la producción agrícola. En los meses de verano, el recurso tradicional a la minería artesanal ha sido el complemento a la economía doméstica.

²⁷ Incluso, cuando en 1947 se prohíbe abiertamente esta práctica, serán los latifundistas caucanos los primeros en protestar y desacatarla (Henman, 2011).

Pero sobretodo, la venta del jornal dejó de ser esporádica y se volvió un imperativo para la sobrevivencia.

Con quienes regresaron a inicios de los 2000 también llegan algunos *pastusos* con capital. Estos *llegaderos* empiezan a sembrar coca y a comprar la hoja a buen precio. Entre 2007 y 2009 la producción de hoja de coca se triplicó. En menos de cuatro años toda la vereda se vuelve cocalera. Con precios en ascenso y cosechas cada dos meses²⁸, los pureteños se volcaron al cultivo. Entre 2009 y 2011 el dinero de la producción se hizo visible. La bonanza empezó a generar cambios en la vida cotidiana. Poco a poco se fue acabando lo que quedaba de cultivos de caña, plátano, frijol, café, yuca y pancoger. Sin duda era más fácil viajar hasta Suárez por una buena remesa que dedicar parte del terreno a la siembra de productos que no eran rentables. El cultivo de la coca demandaba también inversiones importantes en abonos y agroquímicos, pero los costos de producción de la coca podían ser cubiertos dada la ganancia obtenida.

La tensión social que se vivía para esa época se intensificó con la intromisión de la guerrilla. Si bien esta zona hace parte de un amplio corredor de las FARC, la presencia guerrillera había sido esporádica. Sin embargo, frente a los desmanes cada vez más recurrentes, la guerrilla intervino restringiendo los horarios de circulación, vetando los establecimientos comerciales y prohibiendo las fiestas.

En 2011 llega una plaga que arrasa con los cultivos de coca. Las matas se van secando antes de tiempo, pierden las hojas y se mueren. Se dice que “la secadera” viene en los abonos e insumos químicos que requiere la hoja, y que es una estrategia del gobierno contra los cultivos ilícitos. La producción de coca cayó el 90% en un poco más de seis meses. Con la crisis de la producción los efectos de la bonanza se hicieron más evidentes: la coca había promovido en pocos años una pérdida sistemática de las relaciones comunitarias y de los espacios de socialización de la vereda. Desaparecieron los mercados. Las iniciativas comunitarias de la Junta de Acción Comunal quedan reducidas a su mínima expresión. Las festividades tradicionales desaparecieron y, con el crecimiento de las iglesias cristianas, las

²⁸ La hoja alcanzó un precio de noventa mil pesos por arroba en 2006.

fiestas y los campeonatos de fútbol simplemente se acabaron. La bonanza coquera puso en evidencia una transición profunda de la vida campesina y el arrasamiento de la vida local.

2.2.3. Recorrer: caminos y trochas entre cercas y predios

En el Suroccidente de Colombia, el territorio está tejido por las redes de fincas, por una trama de caminos que las comunican como trazas que guardan las historias de viejos acontecimientos y de las transformaciones que se han dado con el paso de los años. Así se puede caminar por caminos afirmados con piedras de distintos tamaños cuya constitución remite a los caminos de las bestias, una suerte de alfombra que cubre la calzada. Al lado del camino se difuminan un sin número de senderos, algunos de los cuales conducen a las shagras, otros llevan a las casas y otros más son los atajos para los “caminos de a pie”.

Al lado de los caminos de piedra se pueden encontrar senderos de viejos trazos de carreteras veredales que nunca se terminaron y que con el transcurrir del tiempo fueron utilizados sólo por pequeños tramos recortados. Entre unos y otros pedazos están los trazos de las carreteras construidas en las últimas décadas por donde bajan y suben con parsimonia las chivas, mejor conocidas como carro-escaleras. Esta especie de buses, llenos de colores, sin vidrios y con carrocería de madera, son los encargados de llevar a la gente al mercado o de regresarlos a sus lugares de vivienda; así como transportan a la gente también llevan los productos que han sido recolectados en las cosechas estacionales.

Los caminos trazan también viejos linderos de fincas desaparecidas, huellas de fragmentaciones producidas por los resultados de herencias familiares, así como los nuevos cercos que han sido resultado de las aplicaciones de una reforma agraria a medias. En ellos se pueden distinguir algunas claves, denotadas por sus nombres. Así por ejemplo las Cuatro Esquinas, es un lugar de cruce de caminos en cuatro direcciones, sitios en donde han existido albergues, cafeterías, casas de espera, cosos (para guardar a los animales), sitios de juego de pelota, lugares de recado o paradero de buses. Las orquetas o los partideros descritas en la historia guambiana y de los pastos, sitios donde un camino se bifurca para unir a gentes y articular espacios sociales. Aquí hay historias encontradas, usualmente

lugares de respeto, aquí puede uno encontrarse con la vieja o la viuda, o los cantos del duende, son lugares que representan el nacimiento, analogías de la mujer y el nacimiento.

También están los lugares estratégicamente situados para observar el paisaje y fungir como observatorios de predios y caminos, situados en las partes más altas, en los filos de las montañas. Los nombres alegóricos con los que suelen nombrarse más allá del río Ovejas y más acá del Carchi en el Ecuador resultan fiel testimonio de su importancia territorial: Vista Hermosa, El Diviso o Buena Vista, son referentes del camino. Allí se espera, allí se descansa, desde allí se anuncia una llegada con un grito o un chiflido.

Los cimientos son compañeros de los caminos, usualmente de los caminos de piedra, son pequeños muros o murallas muchas veces levantados con piedras grandes y pequeñas colocadas siguiendo las formas de cada una de ellas para conformar un muro de aproximadamente un metro de alto que siguen el zigzag de los caminos, y van mas allá de ellos como una retícula entre las sementeras. Las sementeras son los campos de cultivo divididos de acuerdo con su utilización agrícola. Entre los cimientos o entreverados con ellos están las *quinchas* nariñenses, que tienen también la función de dividir sementeras. La palabra *quincha* viene del quechua y con ella se designan las secuencias de árboles con los atributos mas variados. Ellas están constituidas por líneas de determinados árboles, con algunas plantas importantes, que sirven como resguardo de leña, o bien cumplen funciones de insecticidas y llaman a los pájaros para evitar que vayan a los cultivos, a la vez sirven como reservorios de agua y dan sombra para el descanso entre las faenas, tomar el café y comer la merienda.

Un buen ejemplo para referir los tantos lugares que se constituyen entre los caminos intrincados y de difícil acceso en el Suroccidente, sea quizá algunas veredas de Suárez, en el norte del Cauca. Llegar a Pureto toma prácticamente un día entero. Allí no hay señal de celular. A pesar de encontrarse a pocos kilómetros de la cabecera municipal, el acceso a la vereda está restringido por el servicio de transporte fluvial que presta una vez al día Empresa de Energía del Pacífico S.A. (EPSA), empresa que administra la represa hidroeléctrica de la Salvajina. Para llegar a Pureto es necesario atravesar el embalse en un planchón (tipo de embarcación en cuya plataforma se transportan grandes cargamentos); un recorrido que toma más de tres horas. Luego hay que internarse en la montaña durante dos

horas por caminos de herradura hasta llegar a la vereda. En el verano, sin embargo, el agua del lago desciende progresivamente hasta hacer imposible la llegada del planchón. Otra forma de acceso es un “domicilio” desde Suárez, que en el lenguaje local equivale a bordear la represa en moto hasta el alto de Senderito, y de allí caminar al menos dos horas a “paso local” para bajar hasta el río y luego montaña arriba hasta la escuela. Esta opción solo se utiliza en casos de extrema urgencia pues equivale a quince veces el costo del viaje en planchón. La última opción es tomar la chiva que va a los corregimientos más cercanos y desde allí caminar, aunque la chiva solo funciona los fines de semana.

Salir de Pureto es igualmente difícil. Entre semana el planchón sólo sale una vez hacia Suárez. De lo contrario hay que salir a pie o a caballo hasta la carretera de la Meseta y tener dinero para allí tomar una moto hasta Mindalá o hasta Suárez. Así las cosas, es fácil reconocer que, en comparación con otras veredas de la región, Pureto tiene enormes dificultades de comunicación y conexión.

Estas tierras, pueblos y comunidades están comunicados por tramos de carreteras articuladas en la gran vía Panamericana y una serie de caminos destapados o bien caminos de a pie que la gente ha ido haciendo “andando” con la peinilla (o machete) en mano, que comunican las veredas. Las paradas obligadas que desde el norte conectan a esta región inician en la ciudad de Cali, se pasa por La María (emblema de la movilización indígena y también campesina del Cauca), siguen al nodo de reparto de Piendamó para subir la montaña, para en la ciudad de Popayán y de allí continúa pasando por Morales, Santa Rosa, hasta llegar a la cabecera de El Bordo hasta llegar al Patía, donde se despliegan los rostros negros cimarrones. Pasando el río Mayo se inician tierras pastusas que llegan al Remolino en tierra caliente, cruzan el río Juanambú para seguir a Chachagui donde está el aeropuerto y conectan con la ciudad de Pasto. Desde allí se emprende camino más al occidente hacia Túquerres, Samaniego y Ricaurte para llegar al Pacífico; o bien se continúa a Ipiales, o a Cumbal, y de allí a Tulcán pasando la frontera con el Ecuador. Estos recorridos son comunes, se transitan día a día, para hacer diligencias y gestiones en Cali, Popayán y Pasto, para mover productos y mercancías entre Tulcán, Ipiales, Piendamó y el entramado de comunidades que constituyen relaciones de compadrazgo, parentesco, intercambio y amistad entre lugareños.

2.2.4. Identificaciones: originarios y venideros, autoridades y comuneros

En las dinámicas del Suroccidente las gentes han ido generando históricamente formas de nombrarse relacionadas con los “marcadores de adscripción” expuestos al principio de este capítulo y que se traducen etnográficamente en tres aspectos centrales: (1) con las historias de ocupación territorial; (2) con adscripciones derivadas de formas de vida; y (3) asociaciones con delimitaciones territoriales, entre ellas, las derivadas de las divisiones político-administrativas. Estas formas de generación de identificaciones se entremezclan y superponen, desplegando formas complejas de generación de fronteras, lo suficientemente arraigadas como para ser posible documentarlas y lo suficientemente flexibles como para estar en disposición de situarse y de ser priorizadas en situaciones específicas.

Una forma de adscripción emergente y reciente en la historia regional es la que se asocia con “lo negro” unido con procesos de defensa territorial que han avanzado sobre su relación con la defensa de unas formas de vida específicas. En ellas, la pregunta por “lo negro”, después de la Ley 70, acude a un argumento histórico que atestigua la antigüedad en la ocupación territorial. Procesos similares se adelantan en el Norte del Cauca y el valle del río Patía. Tal compleja adscripción la quisiera revisar con base en las experiencias organizativas del norte del Cauca, específicamente exploradas en Suárez, donde se avanza en la construcción de planes de vida en cuyo proceso he participado como parte de las gestiones adelantadas por el Centro de Pensamiento Raizal.

La presencia de gente negra en la región del Norte del Cauca se remonta a los siglos XVI y XVII y se debe principalmente a la introducción de mano de obra esclavizada por parte de mineros y hacendados esclavistas. Las primeras referencias sobre la llegada de la gente negra a la vertiente occidental del río data de inicios del siglo XVIII. Se refieren a las solicitudes hechas por algunos esclavistas a la corona española para establecer entables mineros en la zona. A mediados del siglo XIX, cuando se decreta la abolición de la esclavitud, la gente negra dedicada a la minería, la ganadería y la agricultura se convierte en aparcera. Los grandes terratenientes y mineros que ya no podían contar con mano de obra esclava, empezaron a negociar trabajo por derechos de usufructo de la tierra. De esta

modalidad de terrajería se fue pasando poco a poco a una economía más campesina cuando la gente pudo tener mejor acceso a la tierra, mediante la compra o colonizando baldíos.

En esta zona se encuentra Pureto, una pequeña vereda del corregimiento de Agua Clara en el municipio de Suárez. Entre las montañas que se alzan hacia la cordillera occidental desde el río Cauca se extiende la vereda que baja desde el cerro de las Auroras hasta el río Marilopito (afluente del Cauca) y luego vuelve a subir hasta el alto de Senderito, límite con el corregimiento de la Meseta. De acuerdo con los relatos de los mayores de Pureto, esta zona era baldía, y comenzó a ser poblada a principios de la década de 1940 por unas pocas familias negras provenientes del Arenal, a orillas del Cauca, y descendientes de los antiguos esclavos de las haciendas y de los entables mineros que funcionaban en la región. La familia de Rosendo Lucumí fue la primera en llegar a colonizar. Tras ellos, otras seis familias constituidas por los Lucumí, Rodallega y Arboleda, llegaron a desmontar, le compraron tierra a Rosendo o tomaron predios en arriendo. Durante las siguientes dos décadas, estas familias le arrendaron y/o vendieron tierra a campesinos provenientes de municipios vecinos, en su mayoría caucanos y *pastusos*, quienes organizaron sus propias fincas. Las familias se dedicaban al cultivo de pasto, plátano, maíz, yuca, frijol y caña para sacar panela. Así también se empezó a sembrar café (arábigo), y esas cosechas a su vez atrajeron a jornaleros que llegaban de otros municipios. Entre tanto, la parte alta del corregimiento de Agua Clara estaba siendo colonizada por gente nasa que venía huyendo de la violencia bipartidista y del terraje (Testimonios de los mayores de Pureto, 2014).

Hoy en día, Pureto es una vereda poblada por alrededor de ochenta familias campesinas, dedicadas al cultivo de coca, café y unos cuantos productos para el autoconsumo. A pesar de contar con tierra, los campesinos pureteños se enfrentan actualmente a las dificultades que arrastra la caída intempestiva de la producción local de hoja coca y la baja de los precios del café.

A pesar de reconocerse tradicionalmente como una vereda de gente negra, en Pureto conviven indígenas, mestizos, zambos y como dicen localmente *revueltos*. Las definiciones sobre el color son múltiples. “Mulatos (allí) no hay” –suelen decir algunos lugareños. Indagando sobre esa particularidad se advierte que para la gente hablar de “mulato” es despectivo y por lo tanto, no reconocen ese tipo de clasificaciones para sí mismos. No

obstante, en términos de las clasificaciones sociales vigentes entre la población de la vereda, el color o tono de la piel parece no ser un referente significativo. Por supuesto, mucha gente se reconoce abiertamente como negra, como mestiza o como indígena de acuerdo con su ascendencia más que por su color. Otros tantos se desconciertan frente a la pregunta por el color pues no encuentran cómo nombrar un tono producto de la *revoltura*. Lo cierto en cualquier caso es que en la vereda no hay *blancos* (Diario de campo, Pureto, 2014). Lo interesante de este tipo de clasificaciones de carácter más local es el tipo de contraste que generan con otras formas de clasificación que circulan desde el ámbito regional o nacional. En el alto Cauca, la coyuntura propiciada por la legislación diferencial de la Constitución de 1991, ha promovido transformaciones en los referentes identitarios de los pobladores de la región. Pero sobretodo ha trastocado marcadores de diferencia y clasificaciones sociales.

En las tierras del Suroccidente la vida de los nativos pobladores estuvo definida en tiempos coloniales por la centralidad de la Provincia de Popayán, del que será luego el Gran Cauca. De allí deriva la nominación de “indios” como objeto del sistema encomendero que consistía en encargar a un español cierta cantidad de indígenas para evangelizar y éste a cambio recibía tierra y tributo, pues los indígenas se destinaron a trabajar en las haciendas y minas. Durante la República, estos mismos pueblos fueron definidos como indígenas en proceso de desaparición y su historia fue de interés para investigadores del pasado como Paul Rivet y Milciades Chávez entre otros.

Ahora quisiéramos desplazarnos al sur y situarnos en el suroriente del departamento de Nariño, donde habita el pueblo indígena de los pastos. La vitalidad del pueblo de los pastos, que se ha expresado a lo largo de los siglos de diversas maneras, resulta elocuente sobre algunos de los procesos que han vivido pueblos ancestrales en los Andes colombianos. Historias hasta cierto punto comunes que han conducido a comunidades y pueblos a definirse como “pueblos ancestrales” o “pueblos originarios”, emprendiendo labores de articulación a partir del reconocimiento cultural.

En los pastos, la referencia y reconstrucción de un recorrido histórico, territorial, “ancestral” y sagrado ha tenido la capacidad de recrearse y “recriarse”²⁹ en diversos contextos, asumiendo el camino de los mayores, un camino trazado “adelante” por las tramas del churo cósmico, que representa el mundo de abajo, el de los orígenes, de la tierra, de los espíritus, de la creación, de los sueños, del deseo; el mundo de arriba, el del ejercicio relacionado con el aire, el sol, las nubes, el agua, de las realizaciones, de la esperanza, del “nuevo despertar”; y el mundo del medio el justo aquí, que entrelaza el equilibrio y la armonía con el mundo natural. En ese mundo los mayores, Guangas y Chispas, con sus dominios en las tres tulpas y el cerro de Gualcalá respectivamente, se desafiaron en la planada de Guachucal, y allí como serpientes y tigres, metidos en el *chinde* como confín de la pelea, decidieron que no había ganador y que debían unir sus territorios, así se constituyó el Gran Cumbal. “Adelante”³⁰ también las dos perdices, una negra y otra blanca, la una venía del oriente y la otra del occidente. Ellas, representan el equilibrio entre el arriba y el abajo, el adentro y el afuera, el allá y el acá, lo frío y lo caliente, la riqueza y la pobreza, la vida y la muerte. Buscaban el centro del espacio del Pueblo Pastos y el tiempo para crear y recrear el mundo, el territorio para decidir sobre la realidad; también indicarían el ritmo de los cambios. Las perdices apostaron tres veces: las apuestas consistían en juntar las caras, cerrar los ojos, lanzar una escupa o una flor al aire y salir bailando, volteando las caras - cabezas hacia el oriente y hacia el occidente; con un ritmo y una ubicación del cuerpo simétricamente opuestos; es decir, mientras la una volteaba la cara hacia el oriente, la otra lo haría hacia el occidente.

De aquella historia viene el pueblo de los Pastos. Primero conteniendo a los curacas incas, luego resistiendo la invasión española que imponía lanza y cruz delante de sus formas y maneras. Por eso Juan Chiles caminó y escribió para defender los territorios, para establecer la dignidad como pueblo y mantener sus territorios. Los mayores siguieron la senda por él marcada durante la República para evitar la desaparición de los resguardos y

²⁹ “Recriar” es un término local que alude a las labores de cuidado asociados con el crecimiento de la semilla y fundamentalmente con la idea de que no todas las cosas se “crean” (en términos de nacimiento novedoso), sino que deben ser recriadas o renovadas mediante el cuidado.

³⁰ “Los tiempos de adelante” aluden a los tiempos de los abuelos, del tiempo pasado que en los Andes colombianos se sitúa adelante del presente, pues se concibe que estos tiempos son vueltos a caminar en la actualidad, que por lo mismo está “atrás”.

mantener la autoridad de los cabildos: unas veces interpretando leyes, otras demandando, otras movilizándose. Con el mismo impulso, se dieron paso en las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX los procesos de “recuperación del territorio”, que han permitido volver a establecer las formas de vida en la tierra que había sido ocupada. En la actualidad, el pueblo de los pastos continúa con un difícil proceso de articulación de sus comunidades que van hasta el Carchi en el Ecuador, para articularse como un pueblo.

El trasegar de los modos de vida que se imponen en Colombia definen que el pueblo de los Pastos esté ubicado en el sur occidente del departamento de Nariño y en el vecino país del Ecuador, en la provincia del Carchi, como ya lo precisamos con anterioridad. Entre páramos, altiplanos y guaicos siguen recreando su vitalidad, aunque en la antigüedad contaba con un territorio aún más amplio que se extendía desde la hoya alta y media del río Guáitara hasta Ancuyá y Barbacoas. Aunque en el proceso de resistencia se perdió la lengua, se registran nombres toponímicos en su geografía y en los apellidos de las familias, que sostienen una memoria que hoy se busca recuperar, en el entramado de la cosmovisión andina. Esta cosmovisión hoy se sostiene gracias a la permanencia y recreación del mito de origen que se ha relatado, de la ley del orden natural que deriva de él, del territorio ancestral que se busca fortalecer, de la vara de autoridad recreada en el Cabildo, de “la cosmocracia” que sigue viva, así como del desarrollo de los sentidos o el saber de la observación y la vivencia para “pervivir en el tiempo y el espacio”.

El mito de las perdices habla de que el pueblo de los pastos tiene origen en dos pueblos, uno que vino desde la Selva Amazónica y otro de la Costa Pacífica; así como la historia recreada y recordada cuenta que en “los tiempos de adelante” se logró gobernar extensos territorios. A la vez, aquella historia de importante profundidad temporal, ha dejado huellas importantes, cuya ligazón con la historia reciente ha sido reconstituida por los propios procesos de lucha social. Allí adquieren vitalidad petroglifos como la piedra de los Machines, las líneas onduladas de las perdices alrededor del Sol de los Pastos; petroglifos como el de la Aldea de María, el de los monos en Potosí, la piedra de cara en el Sande; así como las vasijas de cerámica, los trabajos en oro, los rastros de lugares de habitación, entre muchas otras cosas.

Rivet y Verneau establecieron los mojones del área que ocupan los Pastos: al norte, hasta el suroeste de la actual ciudad de Pasto; al sur, ocupando todo el valle interandino situado al norte del Chota; al oeste, en contacto con los Barbacoa del río Mira y el Alto Patía; al este, colindando con los Quillacingas y poblaciones amazónicas del Alto Aguairo del Pueblo de los Cofanes. Desde el punto de vista de los hallazgos arqueológicos María Victoria Uribe, en *Etnohistoria de las comunidades andinas prehispánicas del sur de Colombia*, afirma acerca de dos situaciones que no permiten su delimitación precisa por existir dos complejos cerámicos: el Capulí que corresponde a una etnia diferenciada de los Pastos y de los estilos o complejos cerámicos Pñartal y Tuza consideradas Pastos más allá del área legitimada como tal. Asevera que a evidencia arqueológica permite afirmar que lo encontrado en la Provincia del Carchi y el altiplano de Túquerres-Ipiales, formaron parte de la misma área cultural. Entre el curso medio del río Chota y la hoya alta y media del río Guáitara que fue escenario y asiento de una específica evolución cultural; igualmente también que se han encontrado dos extensiones de este grupo más allá de la cordillera hacia el lado del pacífico; uno estaba localizado en la hoya alta de los ríos Mayasquer y Salado, en las faldas occidentales de los volcanes Chiles y Cumbal y otro en el nacimiento del río Guabo, al occidente de los picos Gualcalá y Azufral (Uribe, 1978).

Muchas veces se ha intentado argumentar que quienes se asumen en la actualidad como pastos, guambianos o nasas, no tienen relación con aquellos pueblos que se definen por ellos mismos como “ancestros”. Incluso se ha llegado a decir que en estos territorios ya no había indígenas, como lo hicieron Milciades Chávez y Eduardo Zúñiga en la década de los ochenta.

Tales negaciones producidas por despojos territoriales con una persistencia histórica importante o bien mediante afirmaciones académicas, serán enfrentadas también mediante una lucha de reafirmación con la noción de “pueblos originarios”. Tal enunciación es una práctica política que implica, como en el caso de los pastos la precisión de otros límites territoriales. El Gran Cumbal vuelve a nombrarse y luego se nombran “pastos”; y con el nombre se dibujan los límites del territorio tradicional de los Pastos que limita hacia el sur con los Caranquis, hacia el oriente con los Cofanes, hacia el sur con los Quillacingas y Abades y hacia el occidente con diversos grupos selváticos generalmente denominados

Barbacoas como los Masteles, Puises, Nulpes, Tangales. Así, los Pastos se identifican como una nación que ocupó y ocupa esta franja transversal del sur de Colombia y norte de Ecuador y que tiene como centro el Nudo de los pastos (Mamián, 2005).

El pueblo misak en el Cauca hará lo propio para enfrentar los despojos causados por la terrajería, como lo ha reconstruido desde su experiencia taita Lorenzo Muelas (Muelas y Urdaneta, 2005) y el Comité de Educación (Dagua, et. al. 1998); dando lugar a un proceso de reconstrucción de la historia y del “pensamiento propio” extraviados en los avatares de las vidas comunes de sus gentes. Por esto hoy, se reafirma lo “misak misak” en el contexto de la vida nacional y las transformaciones de sus vidas locales, en un esfuerzo difícil por articular los aportes de las tecnologías, de otras formas de ver el mundo. “Nosotros tenemos lo propio y sólo apropiamos de lo de afuera y usamos lo de adentro” (Taita Samuel Almendra, Colegio Agropecuario, Guambía, julio 2011)- dirá taita Samuel, dedicado a recuperar la música tradicional misak en el contexto de la “educación propia”. De tal suerte, como lo expondrá con claridad taita Abelino Dagua, líder misak, la definición de las comuidades articuladas como pueblos indígenas permite establecer la unidad para el ejercicio de la autonomía política: “La autonomía es para el pueblo, como originario”. Por lo mismo, reafirma que es necesario “recuperar las formas propias para tener una autoridad más propia. “Natural” quiere decir nativo, que soy árbol de ahí” (Taita Abelino Dagua).

En uno y otro caso, así como en los Nasa del Cauca, los procesos de adscripción sustentados en la reafirmación cultural y en las formas de vivir territorialmente asentadas, dotarán a los espacios cotidianos con una singular fuerza cultural. Allí, el fogón, las tres tulpas, será subrayado como lugar pedagógico y nodo de la vida en comunidad. “Cuando llegamos de la escuela los niños aprenden a hacer *jigra* y ahí se van historiando, haciendo los oficios”, cuenta una mamá misak, complementada por otra, para ubicar al fogón familiar como lugar de enseñanza-aprendizaje: “Aprendemos alrededor del fogón. Allí recibimos el tejido, los consejos del trabajo con la pala, de cómo andar” (Diario de campo, Jenoy, 2010). A la vez, en las tradiciones asociadas con las formas de producir el alimento se encontrarán principios de vida que permiten fortalecer la adscripción como pueblo: “a partir de la shagra –afirma Ligia Valenzuela, lideresa de los pastos- se desarrolla la ley

natural, que rige los momentos de la siembra, de cultivo y de cosecha” (transcripción de conversación, Cumbal, 2011)

Como parte de las mismas adscripciones y de fortalecimiento de lo que se designa como “lo propio”, las mujeres misak serán consideradas por su comunidad como un eje para la pervivencia cultural y el fortalecimiento del pensamiento propio. En esta valoración el acto permanente y continuo del tejido se convierte en una práctica cultural y productiva, sin la cual resulta casi imposible “ser mujer” misak. En tal medida, la referencia al “tejer” femenino alude a un “hacer cotidiano” que nunca para, que se hace caminando, mientras se permanece en una reunión comunitaria, en la cocina y desde muy temprana edad.

A estas formas de adscripción se agregan y superponen otras más que aluden a las diferentes estratigrafías de los territorios habitados en relaciones productivas, culturales y en medio de relaciones políticas. Allí también se inmiscuyen denominaciones relacionadas con las divisiones político-administrativas, para nombrarse “caucanos” en una serie de relaciones políticas y de movilización, aludiendo con ello a una historia doble de despojo y rebeldía. Se despliega la noción de “los pastusos” como forma de adscripción que se refiere al comportamiento regional durante la independencia y que incluye a la gente que habita entre el río Mayo y el Nudo de los Pastos. A la vez, se nombran “los maciseños” que habitan del nodo territorial del Macizo colombiano.

Entre unas y otras se va situando la afirmación de “los campesinos” en términos de defensa territorial y de sentidos de vida asociados con la producción de la tierra, los ciclos de la luna, la gastronomía, las fiestas y festejos, las lógicas de intercambio. Se va urdiendo como identificación, como forma de adscripción aquí y allá, asociada con los procesos organizativos que se exploran en el capítulo 4.

2.2.5. Organizar: la vida entre encuentros, mingas, reuniones y viajes

Es posible decir que la vida organizativa en el Suroccidente gira cotidianamente en torno a dos urgencias, que ya se explorarán al detalle en el capítulo 4: la reivindicación cultural y las defensas territoriales. Lo que nos interesa explorar aquí es cómo se viven

cotidianamente por algunas de las comunidades, cómo el trabajar por ellas, en su defensa, marca también el día a día de las trayectorias locales y regionales.

En las comunidades indígenas organizadas como cabildos, las “reuniones” son un lugar social fundamental. Las reuniones existen en las cabezas de las gentes, así no vayan cotidianamente, no son escenarios ajenos. Las reuniones suelen hacerse en cada lugar en escenarios dispuestos para tal fin. Las casas de los cabildos o las escuelas, quizá algún centro emblemático de la lucha, como La María en Piendamó, centro privilegiado de las reuniones del Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC. Las relaciones sociales organizativas han marcado ya la geografía, constituyen hitos territoriales marcados en la memoria y en las vivencias de los habitantes de estas tierras. Cómo olvidar en el 2007 la sucesión de hombres jóvenes y de algunas mujeres con bastones coronados por las cintas verde/rojo del CRIC, bordeando el filo de montaña donde se sitúa La María. Se estaba en Minga, cientos de personas se reunían allí de los diferentes pueblos indígenas y comunidades campesinas y negras para enfrentar al gobierno de turno que los asediaba.

Si nos movemos a un resguardo en específico se alcanza a entrever un entorno similar:

Son las siete de la mañana y es día de reunión en el cabildo de Guambía. Llegamos como invitados a Santiago, un lugar situado en los predios de la antigua hacienda de Las Mercedes, donde se logra advertir una buena parte de las tierras que constituyen parte medular del resguardo actual. Las ruanas azules de las mujeres y las faldas del mismo tono de los hombres llenan el lugar, se ven algunos niños correr de un lado para el otro. Hay gente muy mayor, adultos y jóvenes, hombres y mujeres. El gran salón de la escuela está repleto de sillas rimax blancas donde ya muchos han logrado tomar su puesto. Las pocas mujeres que hay en el salón ya han sacado sus *puchis*³¹ para hilar o bien usan sus tejidos para escuchar al ritmo de la aguja de *crochet* lo que dicen las autoridades y líderes comunitarios. Es día de reunión del Cabildo y las gentes van para ser atendidas por sus autoridades, pero también van a escuchar informes de gobierno.

El lugar está repleto y comienzan a distribuirse pequeños grupos que van hablando en su idioma, algunos hablan más duro que otros. Poco a poco se van instalando las autoridades del año en la parte de adelante rodeadas por una bandera de Guambía dispuesta a un lado del escenario central. Comienza saludando el

³¹ *Puchi* en namrik significa huso para hilar la lana. El *puchi* es cargado por las mujeres misak, literalmente para todo lugar y lana es envuelta en una tela rosada que cuelga de su brazo y es evidencia de su labor constante.

gobernador y luego siguen hablando de acuerdo a su jerarquía. Toda la reunión es en namrik.

Al fondo del lugar se disponen unos lavaderos y más atrás está la cocina. Al llegar al lugar no puedo menos que sorprenderme por la cantidad de mujeres de diversas edades, algunas de las cuales cargan a sus hijos a la espalda, todas ellas trabajando en la cocina. Unas están adentro y otras afuera reunidas en círculos pelando grandes cantidades de papas a una velocidad realmente asombrosa. Enormes recipientes de plástico verde y azul reciben las papas que ya han sido peladas, para luego ser lavadas en los lavaderos. Otras pelan y parten zanahorias y otras más, hacen lo propio con grandes cantidades de cebolla larga. Dentro de la cocina el ambiente se llena del humo de los tres grandes fogones de leña que se disponen al centro del salón. Cuando llego el fuego ya ha sido encendido y enormes troncos lo alimentan. Las ollas realmente gigantes, ya se han “levantado”, como dicen por ahí. Algunas de las mujeres revuelven con enormes cucharones de madera, lo que será la sopa del almuerzo.

Cuando da aproximadamente la una de la tarde, comienza el episodio de organización más impresionante. Las mujeres se disponen a servir: se ha dispuesto una larga fila por la que van transitando los comensales, cada uno pasa, una mujer sostiene el plato, otra lo llena con la sopa, otra le mete una porción de arroz blanco sustantiva. Otra le da una cuchara, otras dos están sirviendo aguadepanela para acompañar. Con las dos manos ocupadas va saliendo el comensal, quien se demora menos de un minuto en ser atendido. Saliendo del lugar se disponen a sentarse de nuevo en líneas. Algunos comen en silencio, mientras otros van hablando. (Diario de campo, Santiago, Cabildo de Guambía, 2011)

Esta descripción no dibuja una situación excepcional en Guambía. Esto ocurre periódicamente, cuando el cabildo recibe a los comuneros y hace asamblea, de tal suerte que se establecen unos tiempos precisos a la semana, al mes y al año que regulan las actividades de las personas, al menos de aquellos que requieran algo del cabildo. Para el año 2013, la gobernadora de Guambía menciona que el cabildo estaba ese año constituido por 157 personas, a quienes hay que agregar en el caso masculino a todas las esposas o mamas. Esta cifra es importante si se recuerda que durante el año de servicio al cabildo las personas estarán dispuestas literalmente el 100% de su tiempo a las actividades y requerimientos del mismo. Para las mamas significa estar preparadas para cocinar todos los días, por eso, durante ese año cargarán en sus jigras y mochilas un pequeño cuchillito de uso personal, así como el tejido para los momentos de espera y de reunión. Los hombres tendrán que abandonar el trabajo del campo para dedicarse a las reuniones y demás labores asignadas por el Cabildo. Cerca de 300 personas y sus hijos estarán dispuestas en función de las labores organizativas.

Algo similar podría verse en el pueblo de los Pastos, en Cumbal o en otros resguardos, donde también se realizan cotidianamente reuniones coordinadas por las autoridades. La ritualidad asociada con las dinámicas organizativas es aquí también importante. Durante las reuniones encabezadas por las autoridades, éstas ingresan todas con sus bastones de mando. Cuando se sientan a conversar éstos son dispuestos encima de la mesa en línea recta, luego sigue un llamado a lista, luego del cual se inicia la conversa. La palabra circula sin parar, no hay tiempos delimitados para las intervenciones, tampoco suele haber votaciones, sino una serie de reiteraciones a partir de las rondas de palabra que suelen funcionar a la manera de un “consenso”.

En la casa del Cabildo de Cumbal, situada en un extremo del pueblo de anchas calles, una casa de altos techos a la manera de una cancha techada, dispone una tarima para los eventos del Cabildo. En la parte de atrás una especie de gran solar resulta coronado por la disposición de unos fogones de leña para cocinar y poder realizar así las largas jornadas. Durante el proceso de reconstitución de las líneas generales para una educación propia en el que se tuvo la oportunidad de participar (durante los años 2008 y 2009), se realizaron aquí varias reuniones, a las que las gentes suelen llegar caminando o en moto.

Desde lejos se advierten los carros y las motocicletas parqueadas que ya anuncian la reunión. Van llegando las personas, unas se quedan afuera conversando y otras más entran para ubicar alguna silla de plástico dispuesta para tal fin. Es claro que se sientan con los afines. En esta ocasión llegan muchos profesores pastos de las escuelas, algunas autoridades y algunos de los mayores que parece que hace mucho no se les llama a participar. Llegan todos con sus ruanas y sombreros, algunas mujeres van con pañolones, están vestidas para la ocasión. Se alcanza a llenar sólo una tercera parte del enorme salón del cabildo. Mientras ocurre la reunión se pasan unas hojas de asistencia que la gente llena cuidadosamente, al final fue recogida por la secretaria del Cabildo.

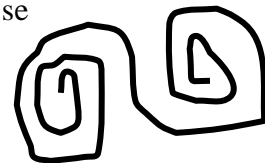
Adelante, en la tarima se disponen dos soles de los pastos inscritos en las paredes con color dorado. Diez sillas de madera (como de comedor) están distribuidas detrás de una gran mesa de madera, también coronada con un escudo: sol de los pastos. Llegan las autoridades y algunos invitados y se organizan en estas sillas, después de colocar los bastones sobre la mesa. Inicia la reunión, luego de que todos los allí presentes han dado su saludo, que por demás está lleno de amabilidad. Hay aquí un claro protocolo: se agradece a veces a Dios, otras veces a la tierra o a la “madre tierra”, se agradece la presencia de los convocados. Uno por uno dan el saludo y dicen alguna frase en relación con el motivo de la reunión, en este caso, es la educación propia. Luego se dice: “se da por iniciada la sesión” y al

final: “se da por terminada la sesión” y todos responden al unísono repitiendo la entrada o el cierre de la reunión.

Afuera en la parte de atrás se encuentra un grupo de seis mujeres cocinando: papas con cáscara, habas y choclos. Otras están preparando grandes cantidades de ají, que será servido para acompañar esta suerte de cocido. Al final, una corta grandes pedazos de queso fresco que también acompañarán el plato del almuerzo. Cuando llega la hora de servir llega la guardia indígena, organizan una enorme fila desde los fogones hasta el salón y se van pasando los platos con cuatro grandes papas, un puñado de habas, un choclo. Van pasando de mano en mano hasta que llega al comensal. Después hacen lo mismo con la colada de quinua y panela que ofrecen para acompañar el plato. Cuando terminan de comer, cada persona se levanta y se dirige a los lavaderos, lavan su plato, pocillo y cuchara. Los colocan en unas canecas que separan cada instrumento y así vuelven a la reunión (Diario de campo, Cumbal, 2010).

En el pueblo de los pastos suelen ser frecuentes este tipo de procedimientos en las reuniones asociadas con las dinámicas del Cabildo. En las reuniones, mejor llamadas por las mujeres como “mingas” sobre el tejido realizadas entre el año 2010 y el 2012, una de las cuales se celebró en el mismo espacio antes mencionado, las mujeres le sumaron una ofrenda compuesta con algunos productos producidos en la zona y otros comprados en el mercado local. Como era una reunión de mujeres no asociada a las ritualidades del cabildo, los bastones no hicieron aparición. Luz Angélica Tarapués, quien para entonces estaba siendo entrenada en la medicina propia, trazó un enorme círculo con productos de la tierra, prendió inciensos y puso a todas las participantes a “danzar” en torno al círculo, con el propósito de propiciar un buen intercambio de ideas y una jornada productiva. Ninguna de las participantes, provenientes de distintas comunidades mostró algún tipo de extrañeza frente a la dinámica.

Entre los pastos, específicamente en Cumbal, la vida organizativa se concreta en el ejercicio de lo que llaman “cosmocracia” como sistema político propio de rotación del poder, con el cual se regula la vida organizativa en este territorio. Éste está dividido en siete partes,



cada una

de las cuales se corresponde con un “turno” de gobierno, de tal suerte que se van rotando la

parcialidad de la cual debe elegirse el gobernador del cabildo. Cada año, los pastos de Cumbal se disponen a elegirlo, sabiendo de antemano a qué parte le corresponde el turno. Esta organización territorializada de rotación del poder, está en sintonía con las nociones de movimiento hacia la izquierda graficado en la forma cómo se desenvuelve el “churo cósmico” del que se hablaba páginas atrás.

Aquella familiaridad con las largas jornadas de trabajo político y social, asociado con la defensa de la cultura y el territorio, también estuvieron presentes en las juntas en las cuales se pudo participar durante el proceso de reconstitución del Cabildo de Jenoy. Entre el 2009 y el 2011 se presentaron una serie innumerable de reuniones (al menos dos por semana), lideradas por taita José como mayor de la comunidad y por taita Aparicio -quien será elegido como gobernador del Cabildo durante muchos años- y acompañadas por el Instituto Andino de Artes Populares. Lo particularmente interesante de anotar aquí, además de la disciplina y progresiva radicalidad con su causa, dentro de la cual se vieron inmiscuidos los que se van enlistando como miembros del Cabildo, es que ellos estaban literalmente aprendiendo o reaprendiendo, con la asesoría directa del vecino pueblo de los Pastos, la ritualidad que “debían” cumplir sus reuniones. Un proceso muy interesante y genuino de verdaderos “ensayos” sobre el comportamiento y las ritualidades asociadas con las nuevas autoridades.

En las primeras reuniones incluso expresaban tal situación, se corregían los unos a los otros, se decían mutuamente cómo tenían que tomar el bastón, cómo se debían ofrecer a Dios las reuniones, cómo se debía llamar lista e incluso, cuáles debían ser los castigos por no cumplir con los deberes básicos de un miembro del Cabildo. Tal suerte de escenificación de la ritualidad asociada con las reuniones de Cabildo, se iría volviendo paulatinamente parte de las formas reproducidas automáticamente, a la vez que se iría también suavizando la radicalidad con respecto al cumplimiento minucioso de cada paso. Finalmente, en 2011, tras un proceso arduo de cuatro años, lograron su reconocimiento como cabildo indígena por parte de la Dirección de Etnias Nacionales del Ministerio del Interior. Con ello, lograron realmente evitar su traslado y dispersión a otros puntos geográficos del departamento. En medio de este proceso se fue constituyendo un grupo de mujeres que por iniciativa propia trabajó por el fortalecimiento de la shagra para la recuperación de la

autonomía y alrededor del tejido como posibilidad de reconocer su importancia como mujeres.

Las reuniones son lugares importantes en las comunidades campesinas organizadas, como en Samaniego. Pero en ellas parece estar más anclada en los itinerarios marcados por las organizaciones, también debido a las exigencias de tiempos por los jornales de deben cumplir. La vida de las mujeres campesinas de Samaniego transcurre entre las fincas, sus labores domésticas, los mercados, los tejidos y los tiempos que sacan para sus labores organizativas. Los escasos ingresos y la falta de autonomía productiva, así como la advertencia de vulneraciones frente a sus vidas como mujeres, las ha llevado a organizarse como mujeres campesinas. Ellas conforman la Asociación de Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida y Paz de Samaniego con otras campesinas del municipio, que buscan defender su vida frente al conflicto armado de la zona, así como generar alternativas productivas que les permitan mayores ingresos.

Las mujeres campesinas de Inzá en Tierradentro llevan más de nueve años en “Junta”, comprendida ésta como un punto de encuentro, un lugar de concentración y de libertad; así como de escape de obligaciones y monotonías, un espacio de trabajo, de trabajo productivo, para seleccionar semillas, de sembrar, de cultivar, de cocinar y de alimentarse limpia y nutritivamente.

Es una “junta” como patrón organizativo, que se hace “recorriendo los caminos, llegando a las veredas para juntarse, para hablar, discutir, conocer, reconocer y organizarse. Organizarse en grupos vereda a vereda hasta llegar a conformar 35 grupos que congregan un gran número de mujeres acompañadas y apoyadas por sus hij@s y compañeros que están en los talleres de formación política; en las huertas. Huertas, llenas de productos variados y cultivados de forma limpia donde además se siembran secretos, se riegan complicidades que se abonan con lágrimas y risas. Huertas como espacios de encuentro de afecto de solidaridad de acompañamiento y ayuda mutua donde se aprende entre todas y todos a reconocer y valorar los saberes. Donde las abuelas y abuelos toman un valor social y cultural preponderante, donde se reconoce sus saberes como la mayor riqueza del territorio (Morales Marín, 2009, p. 2).

En este trabajo realizado con mujeres campesinas en Inzá se describen los intereses que llevaron a las mujeres a implementar la estrategia de soberanía alimentaria, con la cual se dibujan los espacios de su cotidianidad. Allí la huerta adquiere una importancia sustancial:

“en la huerta renace la esperanza que les señala el camino que optaron recorrer con el orgullo que les significa ser “Mujeres Campesinas””. Planteando que a través del trabajo en la huerta se avanzó en un proceso de dignificación de su papel como madres y compañeras. Tal proceso se traduce en ejercicios prácticos de “participación y libertad de decisión política” (*Ibid.*).

Las mingas como forma persistente y común de organización del trabajo colectivo para un fin común, se desatan en el Suroccidente en la vida cotidiana, así como en momentos álgidos de lucha social. La minga, es la forma de trabajo colectivo comunitario que incluye tanto trabajo físico como de pensamiento, a la que asisten autoridades y comuneros. Así se han nombrado como “mingas de pensamiento” a aquel conjunto de reuniones masivas, especialmente en las comunidades y pueblos indígenas. La María, Piendamó, es un sitio emblemático de la lucha social, donde también se dispone en correspondencia una infraestructura para la realización de mingas masivas. Durante el Congreso del CRIC realizado en 2010 fue posible ver cómo llegaban las delegaciones de comuneros y de autoridades de las diferentes partes del departamento, cada una de las cuales elegía un trozo del camino para organizar su campamento: colocar la tulpa, disponer las carpas para dormir, colgar alguna hamaca y organizar los turnos de cocina. A la vez, en la cocina común estaban las mujeres misak, nasa, yanaconas y coconucas, desde primera hora de la mañana preparando las tortillas que serían fritadas para ofrecer a todos con un café caliente. En el gran kiosco se disponen alrededor de 2,000 sillas, las cuales serían rápidamente ocupadas (Diario de campo, La María, 2010).

Las mismas mujeres nombrarán entre sus experiencias organizativas: “Mingas comunitarias, procesos sociales, formando grupos, capacitándonos en autoestima y derecho de las mujeres. Organización de conservación del medio ambiente, retomando las costumbres de nuestros antepasados, en la práctica de lo que nuestros mayores nos enseñan para conservar nuestra cultura e idioma”. (II Encuentro de Mujeres Tejedoras, valle de Sibundoy, 26 de noviembre de 2011) Tal enunciación alude a la cotidianidad dentro de la cual se articulan las dinámicas organizativas en el conjunto de actividades de la gente.

En el proceso de Mujeres tejiendo la vida, desarrollado entre los años 2010 y 2012, las mujeres pastos se articularon a partir de una iniciativa de fortalecimiento de la shagra y del tejido. Los tejidos realizados por las mujeres se hacen utilizando tanto las guangas tradicionales como las agujas de croché. En Cumbal, la cabecera municipal, hay unos talleres más grandes, donde se reúnen y se teje en máquina, mientras que en las veredas prima y se conserva el tejido en la guanga. La lana que algunas trabajan provienen de ovejas gestionadas desde la organización y desde el Cabildo (institución de gobierno autónomo indígena), de manera que se trata de incentivar el trabajo con materiales propios. Además de lo que tejen, y como parte integral del proceso adelantado por las organizaciones de mujeres como la Consejería de la Mujer del pueblos de los Pastos y el Cabildo Menor de Género de Cumbal, realizan pomadas y vinos de carácter medicinal, con plantas de sus propias huertas, que también llevan a la venta.

Desde la cosmovisión de los pueblos indígenas en el Suroccidente se establece un principio de vida, según el cual lo masculino y lo femenino siempre van juntos, son complemento. Sin embargo, hoy las mujeres manifiestan que se olvida muchas veces, por lo cual han iniciado actividades con sus autoridades para rescatar la historia de la mujer Misak y renovar desde aquí sus capacidades y su protagonismo en la vida de su pueblo.

En proceso de lucha por la tierra en Guambía por ejemplo “se pica la tierra donde el patrón dice que no” (mamá Liliana Pechené Muelas, Guambía, 2011)

Los procesos de reivindicación de las mujeres indígenas, aunque no necesariamente encadenados, lograron incluso llevar por primera vez a la gobernación del Cabildo de Guambía a mamá Ascensión Velasco en el periodo 2013-14. En una conversación que se sostuvo con ella, se logró evidenciar una vez más la fortaleza de los procesos organizativos de este pueblo. El resguardo está organizado en 10 zonas y las autoridades que constituían el Cabildo en ese momento sumaba 157 personas. En el resguardo de Guambía hay 16.000 habitantes y 22.000 en todo el pueblo misak a nivel nacional, distribuidos en siete departamentos: Cauca, Huila, Cundinamarca, Caquetá, Meta, valle del Cauca y Putumayo; donde tienen 16 cabildos con sus respectivas autoridades, a los cuales se suman tres asentamientos. A esto llaman *luna chak* o “fogón mayor” para significar la “unidad de bastones” del pueblo misak. El 25% del territorio del resguardo de Guambía, su territorio

más importante, es labrable, el resto son zonas paramunas de reserva (Diario de campo, Sierra Morena, resguardo de Guambía, octubre 2013). Este horizonte organizativo a nivel nacional como pueblo, se suma los diferentes programas del Cabildo, así como las múltiples gestiones que sus autoridades logran adelantar en diversos escenarios.

Las actividades, relacionamientos, conocimientos y habilidades vinculadas con la gestión, ocupan en la actualidad otros tiempos importantes relacionados con la vida organizativa. Quizá sea el pueblo de los pastos quien mayor experiencia ha acumulado en este campo, en relación con las poblaciones con quienes se trabajó; o bien, a través de las organizaciones políticas directamente como veremos más adelante. El pueblo pasto, ha ido consolidando sus procesos de organización y de participación política. En esta década se destaca porque participa en prácticamente todos los niveles de la administración pública: se desempeñan como concejales en más de 10 municipios dentro de sus territorios; son alcaldes municipales (como en el caso de Cumbal); el ingeniero agrícola Javier Cuaical Alpala es el actual secretario de agricultura del Departamento de Nariño; uno de ellos forma parte de la Asamblea Departamental y taita Ramiro Estacio ocupa una curul en el Senado de la República.

Por otra parte, es necesario recordar experiencias organizativas de distinto orden, como la presente en Pureto, donde si bien la población no participó masivamente de la bonanza del oro en Suárez, la construcción de la Salvajina tuvo secuelas considerables. Tal vez la afectación más evidente fue la pérdida de los caminos de herradura que comunicaban la vereda con Suárez, Morales y Buenos Aires. A pesar de que Pureto no colinda directamente con la represa, una vez se llena el embalse la vereda queda aislada y se deben buscar nuevas rutas. De tal suerte, sacar la producción agrícola hacia Suárez, el principal mercado, se convirtió en una odisea. En 1986 la mayoría de los pobladores locales afectados directa o indirectamente por la construcción de Salvajina se unieron en una histórica marcha para solicitarle al gobierno y a la administración medidas de resarcimiento por los daños ocasionados. Gente negra, indígena, mestiza, gentes dedicadas unos a la agricultura, la pesca, otros a la caza y a la minería artesanal se movilizaron conjuntamente en contra de la Salvajina solicitando medidas de compensación como carreteras, puentes, escuelas. Del

pliego de 1986 queda la memoria de los acuerdos incumplidos, pero también la experiencia organizativa y la memoria de resistencia.

El recorrido etnográfico emprendido por las dos regiones permite entrever contrastes y quizá algunas similitudes entre las formas en que la gente construye sus respectivas regiones y participa activamente en la constitución de la nación. Estas formas de habitar, trabajar, significar y organizar para el caso del Magdalena Medio permiten entender cómo a través de su realidad colona, surge paulatinamente un proceso de identidad con la región. Tal proceso que permite reconocerse parte y constructor de región, se expresa en la forma como el “estar en lucha”, se define como poblador. Justamente el poblador no podría entenderse en su enunciado genérico sin comprender estas prácticas cotidianas y estas experiencias de vida, algunas de las cuales se han intentado recorrer. Al mismo tiempo, permite mostrar cómo la diversidad de oficios (agricultor, minero, pescador) está articulada a la dinámica regional; así como los diversos orígenes e identidades forman parte de su posibilidad como región.

En el Suroccidente, la relación entre pueblos, comunidades y veredas permiten dar contenido a la vida campesina, dentro de los procesos de configuración regional. A la vez, posibilita articular esas prácticas cotidianas y experiencias de vida, que en ocasiones aparecen y se desarrollan de manera dispersa. Al mismo tiempo, la comprensión de la configuración regional y la lucha, obligan a formular preguntas en términos de antropología histórica, para encontrar claves para entender este proceso. Lo encontrado tanto en el Magdalena Medio como en el Suroccidente, será lo que exploraremos en los tres capítulos siguientes.

Capítulo 3. Magdalena Medio y Suroccidente colombiano:

La configuración regional como escenario de disputa

La exploración teórica de la conexión entre la lucha y los procesos de configuración regional, atados a las prácticas sociales y a los sentidos identitarios de los pobladores, han orientado el recorrido etnográfico realizado en el capítulo II. Aquel esfuerzo por recorrer corregimientos y caseríos, fincas, playones o islotes que se inundan y emergen de las aguas en determinadas temporadas del año, islas, riveras y minas en el Magdalena Medio, veredas y comunidades, shagras, yatules, huertas, minas y fincas en el Suroccidente, van permitiendo identificar enraizamientos históricos, profundidades culturales, así como potencialidades de lucha y resignificación de las vidas en común. Ahora se propone un nuevo recorrido en el cual se intenta dibujar los escenarios de las vidas regionales en sus configuraciones geográfica, económica y política. Se trata de una propuesta de generación de una urdimbre de economía política, para marcar unas claves de lectura de las configuraciones regionales. Iniciaremos de nuevo, marcando las ubicaciones en distintas escalas y transversalidades³², mostrando relaciones entre el ordenamiento territorial, las disputas y las potencialidades de vida en común.

Iniciemos con un retorno a la República de Colombia que se encuentra situada en la esquina noroccidental de América del Sur, bañada por los Océanos Atlántico y Pacífico (véase Mapa 1). Un territorio nacional que se encuentra dividido en 32 departamentos, siendo estas entidades político-administrativas la base fundamental de la división territorial, las cuales a su vez se dividen en municipios. Los municipios están conformados por unidades más pequeñas dentro de las cuales se desarrollan las distintas experiencias de las vidas comunitarias que señalamos en el recorrido realizado en el capítulo II.

³² Recupero la noción de “transversalidad” propuesta por Rita Laura Segato en su propuesta de análisis teórico de la experiencia territorial contemporánea, en el esfuerzo de no hablar sólo de “escalas” de análisis, sino también de las transversalidades que articulan “lo local”, “lo regional”, “lo nacional” y “lo global” (Segato, 2007, pp. 71-97).

Aquella división político-administrativa regula en buena parte la vida administrativa de cada lugar y delimita los procesos de participación política de sus habitantes. Son el escenario institucional de las relaciones entre la población y el Estado. Sin embargo, tal ordenamiento territorial ha obedecido a los proyectos políticos de los sectores del país que han sido gobierno nacional, en medio más de continuidades que de rupturas. Los mismos que a lo largo de los últimos 190 años han conformado el llamado “establecimiento”. Dicho ordenamiento territorial ha conjugado divisiones político-administrativas con caracterizaciones territoriales “geográfico-económicas”. Unas y otras, sin corresponder necesariamente entre sí, han estado al vaivén de las delimitaciones producidas por el “establecimiento”, sus intereses y las disputas sociales que han suscitado. Con lo cual, se ha signado –como en el conjunto de América Latina- una tensión importante entre los derroteros marcados por los gobiernos centrales que dirigen las políticas del Estado central, las dinámicas concretas de las gentes y las densidades históricas que las constituyen. Es en esta trama de tensiones y fuerzas donde las “regiones” aparecen como configuraciones que desdibujan los linderos de la división político-administrativa, para emerger continuamente como campos de disputa territorial, cultural, política y productiva, con importante profundidad histórica (Fals Borda et. al., 1988).

Las dos regiones que se presentan y exploran en este capítulo aparecen en procesos de configuración diferenciados, pero como partes del mismo campo de tensiones y contradicciones planteado. En estas páginas, se esbozan aquellas configuraciones regionales donde se constituyen y que constituyen las gentes con las que hemos caminado y conversado. Iniciamos más al norte de Colombia realizando un recorrido por el Sur de Bolívar, que se establece como parte de la región del Magdalena Medio y parte también del departamento de Bolívar, en linderos difusos que se irán señalando. También recorreremos los límites aún menos establecidos del Suroccidente de Colombia, que como su nombre lo indica, conduce al extremo sur de este país, que contiene enteramente a los departamentos de Cauca y Nariño, y que abarca también un tanto de las unidades político-administrativas vecinas, dependiendo de la perspectiva que lo nombre y que lo constituya.

3.1. El Magdalena Medio y las vidas de sus pobladores

3.1.1 El Magdalena Medio y la ductilidad regional

Si alguna tierra es propicia para recibir la buena simiente, para que prospere y fructifique la roja semilla de la más pura democracia, es ésta que baña el caudaloso Magdalena y en donde parece que los hombres libres de preocupaciones, de prejuicios, de imposiciones y absolutismos se hubieran dado cita. Aquí la superioridad no es la que imparten los rancios títulos de las caducas aristocracias, sino la que dan los merecimientos auténticos de una vida proba y laboriosa, de las actitudes y conocimientos adquiridos en los ramos del humano saber...” (Mahecha En Vega, 2002. p. 219)

El Magdalena Medio se caracteriza como un espacio estratégico por su situación de corredor geográfico entre la frontera venezolana y el Océano Pacífico, y entre Bogotá, Medellín y la Costa Atlántica (véase Mapa 5). Al mismo tiempo, es un espacio reconocido por su biodiversidad, su riqueza hídrica, biodiversa y porque en sus partes planas y serranías se encuentran importantes reservas petroleras y auríferas de Colombia. También, como paradójico contraste con la cita que inicia este apartado, hace algunas décadas, el Magdalena Medio se asume como uno de los escenarios de mayor agudización del conflicto social y armado que vive Colombia. Por lo uno y por lo otro, es reconocido por la movilización de sectores populares, especialmente de obreros, mineros, pescadores y campesinos.

Debido a su historia y su configuración social, el Magdalena Medio nombra algo más que la simple coordenada del lecho meridiano del río Magdalena en su extenso recorrido de sur a norte por el país, o a un lugar dentro de los departamentos que lo conforman. Para comprender esta afirmación se requiere conocer las relaciones múltiples que se han tejido históricamente, en el marco de la organización político-administrativa y de la división territorial, geográfico-económica, propuesta por el establecimiento colombiano.

En este marco, se designan los “territorios de fronteras” para denominar a las zonas alejadas de los centros políticos, estableciendo una diferencia jerarquizada al interior del

país.³³ En esta división se ha incluido al Magdalena Medio de manera paradójica, dado que por su ubicación geográfica está situado en la zona definida como el “centro del país”; pero al mismo tiempo, desde la definición político-económica del Estado figura como una región de “frontera interna”.³⁴ Desde esta definición ha sido tratado por el Estado con las mismas herramientas jurídicas, económicas y políticas que a los demás territorios definidos de esta manera. Entre ellas están su situación de tutela religiosa, una política de colonización de territorios considerados baldíos, formas económicas de enclave extractivista, manejo discrecional de formas de violencia institucionalizada o paramilitar y un manejo de asentamiento poblacional definido inicialmente por campesinos colonos y luego adquirido por grandes propietarios (Ramírez, 2001, pp. 33-52).

Así el Magdalena Medio ha sido comprendido por el Estado como un territorio baldío y por civilizar, o como un lugar de reserva forestal para conservar. Pero dado su problemático poblamiento, auspiciado en más de una ocasión como lo veremos, por las formas y maneras del establecimiento, o bien, propiciado por episodios de violencia y resistencias; se tiende a asumir y más bien a confundir con un conjunto de territorios y gentes por fuera del amparo del Estado.

La vorágine de su configuración cierra la paradoja antes anotada con la noción de *baldío* y/o salvaje forestal. Es quizás por esto que el mismo nombre de Magdalena Medio se atribuye a una invención militar. En los años sesenta del siglo XX las Fuerzas Armadas asentadas en la base de Palenquero designan como Magdalena Medio a esta zona de intervención militar. Seguramente también por ello, no parece extraño que la única institución que se designa regionalmente bajo ese nombre sea la diócesis con sede en la ciudad de Barrancabermeja (Archila y Bolívar, 2006).³⁵

³³ Desde 1886, “territorios de fronteras” como la Amazonía y la Orinoquía fueron evaluados por el Estado a partir de su potencial económico y por lo tanto, las políticas para su integración significaron la puesta en marcha de estrategias de explotación de sus recursos.

³⁴ Ver: Germán Plata, Mauricio Archila, Alejo Vargas Velásquez, Amparo Murillo Posada, Jacques Aprile-Gnisset, entre otros (Véase: Murillo, Amparo (coord.), 1994; Vargas, 1992; Aprile-Gnisset, 1992).

³⁵ Desde entonces, siguen en cuestión los alcances mismos de la noción de región para denominar a esta porción de tierra y que en trabajos como este se problematiza siguiendo, entre otros, los presupuestos que en su obra *La historia doble de la costa*, Fals Borda (1979) pondría a jugar para la construcción de una de las regiones fronterizas al Magdalena Medio: “la Depresión Momposina”.

Por las razones esbozadas, las características regionales del Magdalena Medio han sido difíciles de determinar. Autoras como Patricia Madariaga (2006) afirman con desconcierto que el Magdalena Medio no corresponde con una sola unidad política, departamento y/o municipio; ni es homogéneo en términos geográficos, económicos o culturales. Producto de tal situación es la permanente porosidad de sus límites. Así, para algunos, el Magdalena Medio es una región ubicada en el centro-oriente de Colombia, constituida en términos político-administrativos por 29 municipios distribuidos en 4 departamentos.³⁶ Esta amplia región comprende una extensión aproximada de 30.177 km² y un número de habitantes estimado de 830.000 habitantes para el año 2005 (correspondientes con el 2% de la población nacional) (DANE,1999). Su centro comercial y financiero es la ciudad de Barrancabermeja, donde se concentra cerca de la cuarta parte del total regional (187.311 habitantes. DANE, 2005). Los demás municipios que la constituyen están aislados geográfica, social y económicamente de las capitales de los departamentos. Casi todo el transporte local se realiza a través del río Magdalena, en embarcaciones con motores fuera de borda, conocidas como “chalupas”³⁷, y en aquellas partes donde el río lo permite se realiza a través de “planchones”³⁸.

Para otros, la región «se encuentra ubicada en el centro de Colombia, entre las cordilleras Oriental y Central, entre el Salto de Honda en el Tolima hasta Río Viejo en Bolívar, a lo largo y ancho del Río Magdalena (368 kilómetros aproximadamente en su curso) (Duque, 1996; Archila y Bolívar, 2006: 40).

³⁶ Se mencionan estas cifras, que son las utilizadas por buena parte de la bibliografía asociada a este trabajo, aunque aún no existe un consenso sobre las divisiones político-administrativas contenidas en la región. Para El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio después del diagnóstico de 1996, donde se establecen 29 municipios, contenidos en los cuatro departamentos de la siguiente manera: (1) departamento de Santander: Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Rionegro, Simacota, Puerto Parra, San Vicente de Chucurí, El Carmen, Betulia, Cimitarra, Landázuri, Bolívar y El Peñón; (2) departamento de Cesar: Aguachica, Gamarra, La Gloria, San Alberto y San Martín; (3) departamento de Bolívar: Morales, Arenal, Regidor, Rioviejo, Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití; y (4) Antioquia: Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó. Para otros investigadores que han trabajado la región, el Magdalena Medio estaría compuesto por 34 municipios ubicados en los departamentos de Santander, Antioquia, Boyacá, Sur de Bolívar y Sur del Cesar, que corresponderían aproximadamente al recorrido del Magdalena entre Puerto Nare y Río Viejo (ver Cadavid, 1996).

³⁷ Embarcación de transporte de aproximadamente 30 pasajeros, con motor fuera de borda.

³⁸ Embarcación de gran calado para transporte de carros, mercancías y pasajeros.

Para Amparo Murillo “El Magdalena Medio como realidad histórica y estructural homogénea no existe, se construye a partir de una dialéctica de continuidades y discontinuidades que expresan heterogeneidad de estructuras (...) son rasgos que perviven históricamente que caracterizan la región: un área periférica de frontera interior y colonización, un territorio donde se ha erigido una sociedad de supervivencia, resistencia y confrontación, un territorio disputado, en el cual convergen diferentes intereses económicos, políticos y sociales” (Murillo, 1994). Por su parte, Amparo Cadavid enfatiza que “en la actualidad el Magdalena Medio como región, es una construcción de planificadores que no tiene límites exactos, identidad, ni autonomía. Sus linderos varían de acuerdo con quien habla de ella y tal vez su único referente es que es una zona de violencia, pero “donde se produce la gasolina con la que se mueve el país” (Cadavid, 1996, s.p.).

Aquel “estar aquí y allá”, como se desprende de la caracterización anterior, la sitúa en una suerte de “liminalidad” o “limbo”, que será fundamental en su constitución como región. Su indeterminación geográfica y político-administrativa, contrasta con una configuración más histórica y social, construida, imaginada, movilizadora e impuesta en la dinámica misma de la lucha social, que la hacen potencialmente posible en prácticas sociales que se consideran “de la región”, que la asumen como su vida.

El Magdalena Medio es uno de esos territorios no integrados a la nación, su configuración se da por fuera de los marcos delimitados por los valores, las tradiciones, las representaciones ideológicas y los principios de regulación de la sociedad colombiana. En contraposición a las representaciones de la sociedad mayor, en la región las relaciones entre los diferentes grupos sociales y las formas de interacción cultural y política se elaboran por fuera del espacio que define extensivamente el poder del Estado (Alonso, 1997, p. 3).

Siguiendo el Plan Integral de Desarrollo y protección de los derechos humanos de 1999: “El proceso de configuración histórica de la región del Magdalena Medio ha tenido diversas etapas de poblamiento; una reciente investigación nos presenta tres momentos importantes: el primero se lleva a cabo en la segunda mitad del siglo XIX, correspondiendo con la ampliación de la frontera cafetera en los santanderes y Antioquía; así como el incremento de exportaciones de añil, quina, tagua, etc (*Ibíd.*, p. 22).

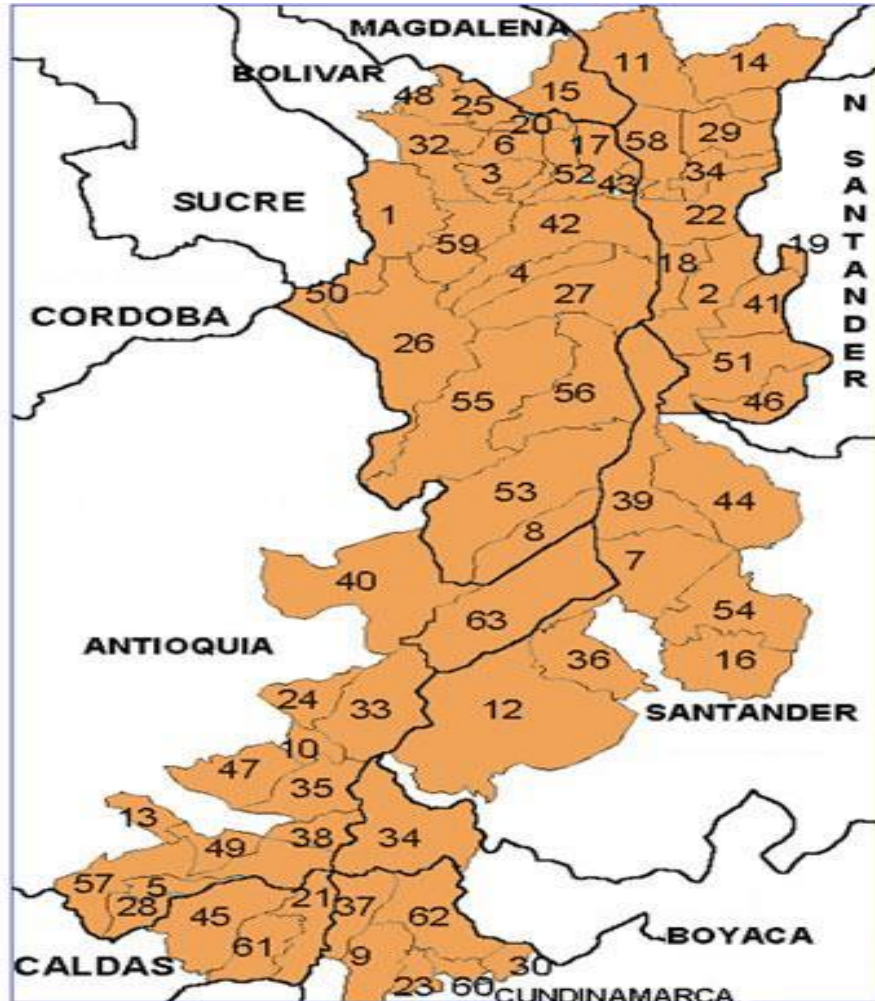
Un segundo momento de poblamiento ocurre con el arribo de las compañías petroleras y los intentos de crear líneas férreas. Paralelamente y como complemento se configuró una economía ganadera y de extracción de recursos como la madera y el oro que se encontraba en aluvión. La configuración regional se incrementó en un tercer momento, con la violencia de los años cincuenta, el territorio fue a partir de entonces el refugio de liberales que huían de la persecución conservadora. La masa poblacional desplazada amplió la frontera de colonización, incrementándose la extracción de maderas, la actividad minera de subsistencia, los cultivos de pan coger, y el oficio de la pesca.

Mapa 5. Ubicación de Magdalena Medio en Colombia



Mapa elaborado por Carlos Alberto Benavides

Mapa 6. El Magdalena Medio Según el Gobierno Colombiano



Fuente: Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH. “Panorama actual del Magdalena Medio”. Bogotá, Vicepresidencia de la República de Colombia, 2001

Municipios: 1. Achí 2. Aguachica 3. Altos del Rosario 4. Arenal 5. Argelia 6. Barranco Loba 7. Barrancabermeja 8. Cantagallo 9. Caparrapí 10. Caracolí 11. Chimichagua 12. Cimitarra 13. Cocorná 14. Curumaní 15. El Banco 16. El Carmen 17. El Peñón 18. Gamarra 19. González 20. Hatillo de Loba 21. La Dorada 22. La Gloria 23. La Palma 24. Maceo 25. Margarita 26. Montecristo 27. Morales 28. Nariño 29. Pailitas 30. Paima 31. Pelaya 32. Pinillos 33. Puerto Berrió 34. Puerto Boyacá 35. Puerto Nare 36. Puerto Parra 37. Puerto Salgar 38. Puerto Triunfo 39. Puerto Wilches 40. Remedios 41. Río de Oro 42. Río Viejo 43. Rugidor 44. Sabana De Torres 45. Samaná 46. S. Alberto 47. S. Carlos 48. S. Fernando 49. S. Francisco 50. S. Jacinto 51. S. Martín 52. S. Martín de Loba 53. S. Pablo 54. S. Vicente de C. 55. S. Rosa del Sur 56. Simití 57. Sonsón 58. Tamalameque 59. Tiquisio 60. Topaipí 61. Victoria 62. Yacopí 63. Yondó.

El Magdalena Medio es una región de trabajadores, cuyas historias parten en muchos casos de los recorridos de la construcción de líneas férreas hacia el Río Magdalena y la instalación de zonas de enclave petrolero desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dichos trabajadores asumieron como propias las gestas relatadas de los Yariguíes, conocidos guerreros que emprendieron luchas de resistencia contra los españoles:

La guerra en la que se vio enfrentada la etnia yariguí, fue una forma de resistencia en defensa del territorio y su identidad cultural, como respuesta al proceso de dominación, intolerancia colonial, imposición y exterminio que se daban los españoles contra la cultura yariguí, sembrando las raíces de la violencia en la región... (Moreno, 2000, 22).

... la sociedad yariguí vivió en un vasto territorio que comprendía desde la margen izquierda del Río Suárez hasta el Río Sogamoso, abarcando así mismo la zona comprendida entre las cuencas bajas de los ríos Opón y Lebrija (*Íbid*, p. 19).

A dicha memoria, se suma la presencia liberta de los cimarrones, esclavos negros que, huyendo de su condición, se adentraron al Magdalena Medio fundando poblaciones como Barranco de Loba y San Martín (en la Depresión Momposina); y los Bogas, trabajadores del transporte fluvial del Río Magdalena (Fals Borda, 1979).

El Magdalena Medio es una región de sobrevivientes. William Restrepo define esta región y sus pobladores como una “búsqueda de autoconstrucción y gestión autónoma y autóctona de espacios de supervivencia participativa pero además defensiva. En su origen convergen los rasgos de sus propias identidades –naturales o construidas –según el caso- con la conciencia de una confrontación frente a un poder socio-estatal con quien no tiene puntos de identidad ni afinidad” (Restrepo, 1992, p. 3) .

El Magdalena Medio es una región de campesinos colonos luchadores.

En Puerto Berrío, Puerto Salgar, San Vicente y con lo que en la historia nacional se conoce como la “insurrección bolchevique”, pensada por el Partido Socialista Revolucionario PSR, como un movimiento armado que a nivel nacional debía integrar las luchas campesinas con las huelgas de los sectores obreros, que en la región, tienen como escenarios el levantamiento campesino del municipio de San Vicente el 28 de julio de 1929 y el de los trabajadores del ferrocarril de Santander en la estación de La Gómez el 27 de julio del mismo año. Son expresiones de resistencia que se vieron reflejadas en las relaciones capital-trabajo asalariado y

campesino sin tierra-terratiente, que dan lugar a las ligas campesinas de puerto Berrío, Puerto Salgar y San Vicente de Chucurí” (Alonso, 1997, p. 72).

Desde la Guerra de los Mil días (1899-1902) a finales del siglo XIX, esta región se constituyó en refugio de liberales radicales como Rafael Uribe Uribe³⁹. En 1948, el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán genera un levantamiento popular nacional, que va a degenerar en un periodo de intensificación de la violencia bipartidista, conocido como la Violencia. Como consecuencia de esos hechos se consolidan las Juntas de Gobierno en Yondó, Puerto Berrío (Antioquia), San Pablo (Bolívar), y Puerto Wilches (Santander), con epicentro en Barrancabermeja. La violación por parte del ejército de la negociación establecida y la acción represiva del ejército y la policía caracterizan el rompimiento de estas Juntas como forma de autogobierno⁴⁰.

El Magdalena Medio es una región de lucha guerrillera. Las guerrillas liberales de Rafael Rangel⁴¹, las guerrillas de autodefensa campesina⁴² impulsadas por dirigentes comunistas

³⁹Rafael Uribe Uribe, dirigente liberal radical, fue representante a la cámara, senador y periodista. Participó en la Guerra de los Mil días en las tropas rebeldes, impulsó la reforma agraria, y fue precursor del derecho laboral y defensor del bienestar social. Promovió un “socialismo de Estado”, y fue el principal líder del liberalismo en los primeros años del siglo XX.

⁴⁰La Junta revolucionaria o del poder popular, fue la respuesta que el pueblo de Barrancabermeja generó frente a la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. Ésta Junta fue fruto del clamor popular, y sus miembros fueron elegidos en asamblea. La Junta estaba constituida por cinco miembros entre los cuales se contaba con abogados, médicos y concejales, que se caracterizaban por ser liberales-gaitanistas o defensores de los obreros petroleros en las huelgas del puerto. Ésta Junta asumió el gobierno una vez el alcalde fue destituido por los pobladores. Tenía la tarea, junto al alcalde y al poder obrero representado en el sindicato de la TROCO y la Shell, de asumir la dirección política general y orientar acciones relacionadas con entrega de armas a brigadas obreras y milicias populares, controlar los servicios públicos y las comunicaciones, decretar la ley seca, aprovisionar de viveres a los habitantes de Barrancabermeja y el dominio y guardia de las embarcaciones por el Magdalena; convirtiéndose así en el centro de un gobierno popular en el Magdalena Medio, especialmente entre Puerto Wilches y Puerto Berrío. Véase: Buenahora, Gonzalo, 1971.

⁴¹Rafael Rangel fue el “alcalde del poder popular”, elegido en asamblea para coordinar la Junta Revolucionaria. Reconocido liberal-gaitanista y miembro del concejo municipal de Barrancabermeja. Cuando se inició la represión en Barrancabermeja (con la entrada del ejército gubernamental el 29 de abril de 1948) Rangel se lanzó a la lucha guerrillera, operando en las zonas rurales de Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí y Puerto Wilches. Se acogió a la amnistía de 1953, y posteriormente se integró al Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) siendo elegido miembro de la cámara de representantes por ese movimiento.

⁴²Las autodefensas campesinas fueron organizaciones de resistencia armada, conformadas principalmente a partir de 1949, e impulsadas por el Partido Comunista (y en menor medida por liberales) para proteger a las comunidades de las agresiones del ejército oficial y de los pájaros y chulavitas. Fueron de orientación comunista, y según las condiciones, evolucionaron a guerrillas móviles o a movimiento agrarista. Se desarrollaron especialmente en el Tolima y en Cundinamarca. (Véase: Pizarro, 1989 y 1991)

como Martín Villa en el Territorio Vázquez, ubicado al occidente de Boyacá; el Ejército de Liberación Nacional, que sería fundado en 1964 en la zona de San Vicente de Chucurí, y la creación del IV Frente de las FARC en 1968, que se consolida en la región del Carare-Opón, en la zona comprendida entre Puerto Boyacá y Cimitarra (Vargas, 1992). “Soportado en un tejido de solidaridades y apoyos regionales, producto de profundos lazos de interpenetración con la memoria histórica de la región, una memoria histórica asociada al rechazo de la presencia traumática del Estado y con la tendencia a apoyar las manifestaciones irregulares y contestatarias” (Vargas, 1989, p. 51-52)

El Magdalena Medio es una región de colonos. A pesar de que las primeras incursiones conquistadoras de estas tierras se iniciaron en 1529 desde Barrancabermeja (Vargas, 1992, p. 28), la hostilidad del clima, la aparente escasez de minerales y la belicosidad de las poblaciones nativas frenaron los intereses tempranos de la colonización. Sería hasta bien entrado el siglo XIX cuando se avanzaría en el proceso de poblamiento, reforzado en la siguiente centuria, aunque de forma lenta y paulatina.

A partir de La Violencia de los años cincuenta, en la región se presentan dos dinámicas migratorias. La primera se caracteriza por ser una migración espontánea, de carácter intensivo e intrarregional, resultado del éxodo de personas que huyen por razones políticas, provenientes principalmente de Tolima, Antioquia, Caldas, Boyacá y Santander, ocupando dos frentes de colonización: uno se sitúa en las riberas de los ríos Carare, Opón, y Minero, en la zona rural de Santander. El otro en las riberas del Cimitarra e Ité, en los límites de Bolívar y Antioquia. La otra dinámica migratoria es dirigida y conformada principalmente por población costeña. Esta migración se genera gracias a una política de adjudicación de tierra baldías y de proyectos de colonización dirigida impulsados por el Estado, que favorecen el latifundio en el bajo Magdalena, en Sucre, Córdoba, Magdalena y Cesar. Esta migración genera el arribo de pobladores al sur de Bolívar y a los municipios de Puerto Wilches y Barrancabermeja, en Santander.

“Tradicionalmente ha sido tierra de colonización y ha figurado a nivel nacional como territorio donde la débil presencia del Estado, su privilegiada ubicación geoestratégica, la riqueza de su suelo y su subsuelo y la pobreza generalizada de sus habitantes, han configurado un escenario donde han tenido asiento las más diversas formas de violencias”

(Sarmiento, 2005, p. 9). Con esta frase, se sintetiza la forma como ha sido abordada esta región desde los estudios sociales y de derechos humanos.

El Magdalena Medio es una región de múltiples organizaciones gremiales y campesinas que desde los años 60 del siglo XX han sido sometidas a una fuerte y sistemática represión por parte del Estado (por ejemplo, el Sindicato Agrario de Provincia, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas, la Liga de campesinos de San Francisco) (Véase: Alonso, 1997). La protesta campesina comenzará a manifestarse y articularse en la región cuando se le da piso jurídico a las Juntas de Acción Comunal (JAC), con la expedición de la Ley 19 de 1958. A partir de este momento, las JAC se constituyen en la forma organizativa por excelencia de los campesinos, ya que intentan vincular las comunidades de colonos y las instituciones sociales con los recursos públicos y los mercados locales.

El Magdalena Medio es una región de enclave, de extractivismo, ganadera y agroindustrial. Es posible señalar que la característica central de los municipios ganaderos del Magdalena Medio, y de los municipios en los cuales se han afincado los cultivos comerciales de palma africana y las grandes posesiones de tierra de los dueños del capital, contrasta con una amplia masa de campesinos sin tierra titulada, trabajadores agrícolas, jornaleros y raspachines (o jornaleros de los cultivos de coca)⁴³. Este modelo de economía latifundista se consolidó rápidamente en la parte sur del Magdalena Medio, teniendo como ejes las poblaciones de Puerto Boyacá (departamento de Boyacá) y Puerto Berrío (departamento de Antioquia). De esta forma, en el Magdalena Medio, desde los años 70 se expresa una división entre el predominio de la ganadería e influencia política y militar del paramilitarismo, y otro sector caracterizado por la existencia de zonas de frontera agrícola interior y las pocas zonas de colonización que aún existen, entre las cuales se encuentra el Valle del Río Cimitarra -en la franja occidental del Río Magdalena- y el sur de Bolívar.

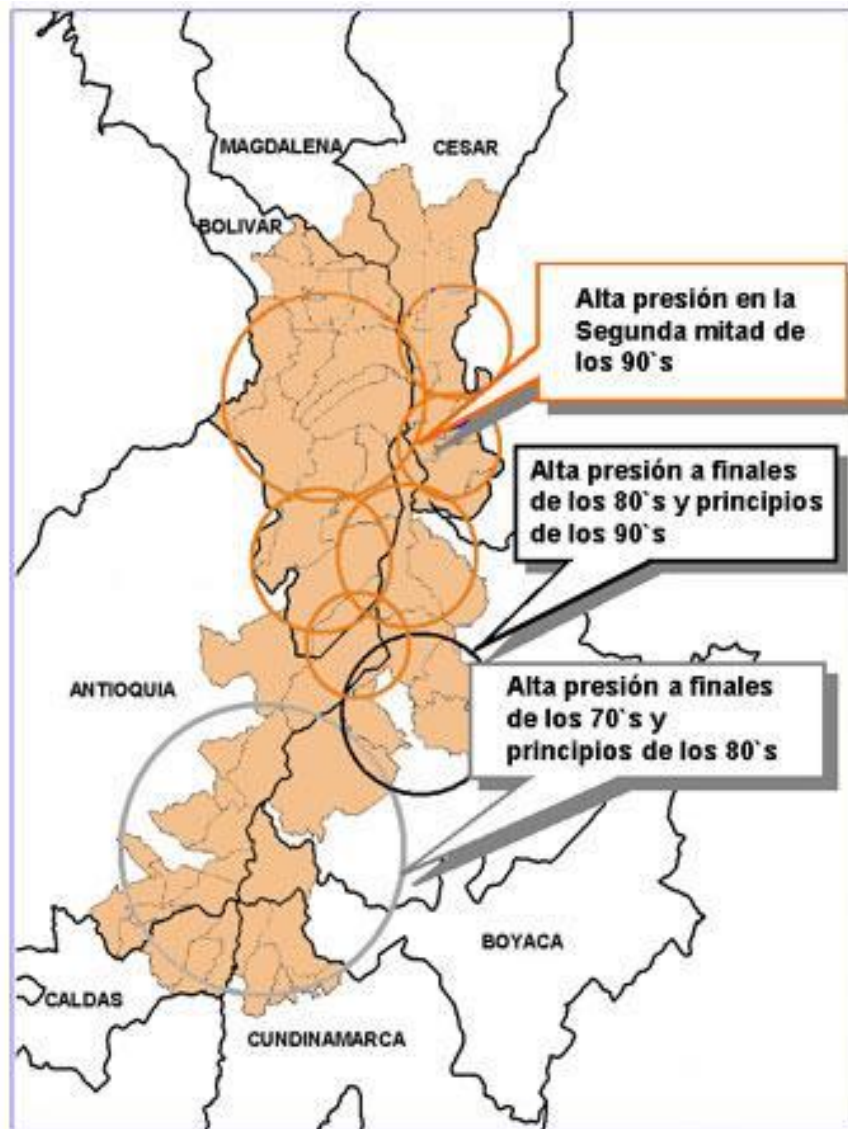
El Magdalena Medio es una región de presencia paramilitar. Hacia la década de 1980 se empieza a presentar el proceso de colonización paramilitar en la región, de migración

⁴³ Los municipios ganaderos de la región son principalmente los ubicados en la zona sur: La Dorada (Caldas) Puerto Boyacá (Boyacá), Puerto Salgar (Cundinamarca) y Puerto Berrío y Puerto Triunfo (Antioquia). Los municipios donde se encuentran cultivos comerciales de palma son especialmente los del sur del Cesar: Aguachica y San Alberto, y Puerto Wilches en Santander.

poblacional y repoblamiento. En este momento, el Magdalena Medio empieza a ser afectado por la descomposición de la economía campesina de subsistencia a causa de la expansión latifundista, la pauperización de los colonos y el desarrollo de la agroindustria. Detrás del paramilitarismo se encuentra un proyecto económico, presionado y patrocinado por los grupos de poder local sobre intereses estratégicos, y tiene como finalidad recuperar, salvaguardar y controlar los espacios en los cuales hay o puede haber inversiones del gran capital, sea éste ganadero, agroindustrial, minero o narcotraficante.

El Magdalena Medio es una región de economía política del narcotráfico desde finales de los años 70. El narcotráfico permitió el fortalecimiento de una reacción armada terrateniente, en asocio con los mandos militares y civiles regionales, un proceso de recomposición de la propiedad rural (Medina, 1990). Gracias a este proceso, el latifundio ganadero llegó a ocupar casi el 60% de la tierra agrícola, generando la descomposición del colono y la expropiación de sus tierras, este proceso se vio acompañado de la destrucción de cosechas, el incendio de casas y asesinatos masivos (Vieco, 1991).

Mapa 8. Presencia Paramilitar en el Magdalena Medio



Fuente: Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH (Vicepresidencia, 2011, p. 67)

La primera contradicción que es necesario resaltar en la disputa regional es la que se da entre la región-vida y los procesos de configuración regional que destacan la división por polígonos extractivistas del territorio, la relación entre polo de desarrollo y funcionalidad para la movilización, así como la que profundiza enclaves petroleros y las formas de división territorial que mantienen relaciones clientelares y autoritarismos paramilitares. La Constitución de 1991 y su legislación complementaria, establecen que las regiones se definen por uniones de departamentos. Esta determinación resulta coherente con el ánimo de descentralización administrativa de la carta magna. Ahora bien, en tal sentido lo que aquí se llama “Región del Magdalena Medio” no se corresponde con la legislación. Aunque el territorio acotado se extiende sobre áreas de cuatro departamentos (Bolívar, Santander, César y Antioquia), no se constituye por la unión de los mismos. Ni siquiera es una unión de municipios puesto que en el caso de los territorios municipales de Rionegro y Simacota, sólo se incluyen sus tierras bajas, las más cercanas al Río Magdalena (véase mapa 9).

La cuenca del Magdalena Medio es una de las depresiones interandinas: este tipo de espacios son de los más intervenidos en Colombia. Ha sido transformada por acción antrópica, predominando las tierras intensamente intervenidas dedicadas fundamentalmente a actividades pecuarias y, en menor proporción, a usos agrícolas con cultivos transitorios intensivos de palma (IGAC, 2002, capítulo 4).

En el Magdalena Medio han intervenido dos lógicas: una centrada en proyectos de grandes recursos y alta tecnología que producen alta rentabilidad pero generan bajo empleo y alto impacto en el ambiente; y otra, enfocada en proyectos que tienen menos recursos, producen menos rentabilidad —principalmente para los grupos empresariales— pero generan mayor empleo y acceso a recursos principalmente para la vida de los campesinos. Ahora, ¿qué tienen en común este tipo de intervenciones? Que están sobre la tierra, usan tecnología y recursos, y regularmente intervienen zonas estratégicas donde históricamente las comunidades han establecido sus poblados. Esto genera grandes problemas frente al territorio. Un elemento que no puede dejarse por fuera es que los conflictos de la región están relacionados también con la forma en la que históricamente se ha hecho colonización y la manera en que los recursos fruto del narcotráfico y el fenómeno del paramilitarismo, se

entrecruzan en las regiones y empiezan a disputar zonas estratégicas en el Magdalena Medio. Esa situación profundiza la expresión crítica del conflicto en la región.

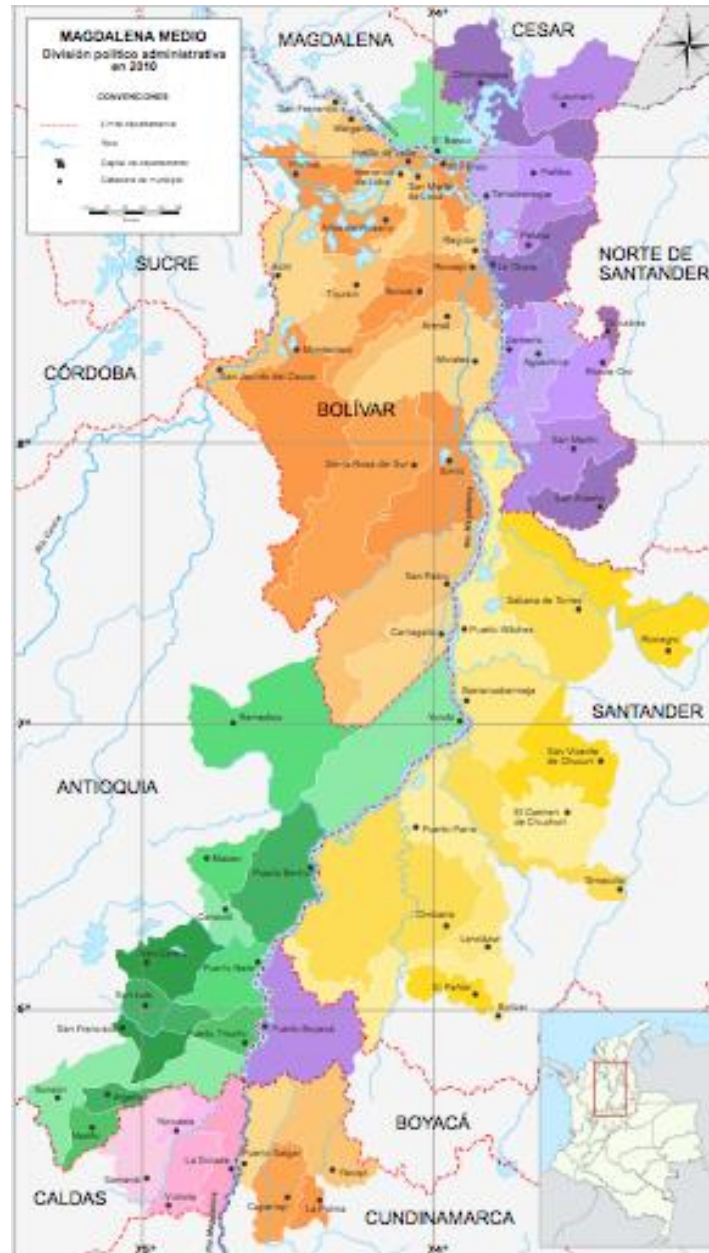
La ganadería es desde hace décadas el patrón de producción que mayores impactos ha causado en la región por su carácter extensivo, por las formas de empleo que genera y porque perpetúa un modelo latifundista que se combina más recientemente con el lavado de activos provenientes del narcotráfico.

También la agro-industria de la palma ha impactando la región. Otros conflictos se relacionan con el uso del sub-suelo: la minería de oro y la explotación de hidrocarburos, que no solamente involucran a los campesinos, sino también a los pescadores. En la región está la reserva de oro más grande de Suramérica, en la Serranía de San Lucas. Otros dos temas de conflicto son la minería de carbón y el proyecto de la hidroeléctrica sobre el Río Sogamoso que se está construyendo en zona de los municipios de San Vicente, Betulia, Zapatoca, Barrancabermeja, Sabana de Torres, Los Santos, Lebrija y Girón; allí también hay un conflicto con comunidades campesinas pues son 6 mil hectáreas las que inunda este proyecto. Son usuales también los conflictos que se generan por obras de infraestructura vial y también en la creación de los puertos multimodales de la región, porque todos tienen en común elementos como tierra, suelo, economía campesina, de pescadores y otros proyectos de asentamientos urbanos sobre la orilla del río Magdalena que también son impactados.

Hacia finales de los años 90 se afirma que en la región del Magdalena Medio está en marcha la ejecución de una inversión cercana a los 20 billones de pesos para los próximos siete años, y que la mayoría de esta inversión está relacionada con explotación minera, obras de infraestructura, agroindustria, plataforma logística del río en Barrancabermeja y los puertos, y también con lo que tiene que ver con proyectos que buscan profundizar el calado del río para la navegación y la conducción del agua que favorece la navegación en la región. En contraste con estas inversiones nuestra discusión es que no existe una intervención concertada, dialogada, construida para que este tipo de proyectos no pongan en riesgo los planes históricos de la comunidad, las poblaciones y las urbanizaciones que se han venido desarrollando por años, y que incluso el mismo Estado colombiano ha apoyado al invertir recursos de cooperación internacional en ellos.

Para comprender cómo se desenvuelven concretamente esas contradicciones se invita a caminar y conversar por el Sur de Bolívar y el valle del río Cimitarra, en donde se desenvuelven dichas contradicciones.

Mapa 9. Subregiones del Magdalena Medio



Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Medio

3.1.2. El Sur de Bolívar

En el Magdalena Medio, región tan incómoda para el orden político-administrativo estatal, y al mismo tiempo tan importante en términos de los recursos que descansan en su suelo, se encuentra el Sur de Bolívar. Y como la región dentro de la cual se encuentra, la comprensión de sus límites es también difusa; puesto que: “la región es un espacio en proceso continuo de construcción; es un escenario de fronteras móviles dentro del cual la delimitación de su territorio está siempre sujeta al quehacer histórico de los actores sociales que allí se expresan” (Madariaga, 2006, p. 39). Y quisiéramos agregar que también es necesaria, más allá de la expresión, la confluencia de los sujetos sociales que intervienen en la configuración regional. Una confluencia que en ningún caso puede ser sólo un dato estadístico, sino que más bien obedece a la expresión de identidades, oposiciones y contradicciones, establecidas por las dinámicas de los deseos, los intereses y las necesidades puestos en disputa y cuestión.

La organización y distribución geo-espacial del Sur de Bolívar está compuesta por dos grandes conjuntos: el valle del Magdalena y las serranías de Santo Domingo y San Lucas. Los dos conjuntos se desplazan paralelamente de sur a norte, aguas abajo hasta la Depresión Momposina, donde el río Magdalena recibe las aguas del río Cauca, y las Serranías se pierden en el horizonte sabanero. El río Magdalena constituye su eje de distribución hídrica a través de las corrientes que vierten sus aguas al río; entre ellas merecen citarse los ríos Cimitarra y Simití, las quebradas de Santo Domingo, el Boque, la Honda, Platanal, San Lucas y Arenal. Entre las diversas cuencas se despliega un sin número de ciénagas como la de San Lorenzo y Simití. El clima predominante en la mayor parte del territorio es el tropical, con temperaturas que oscilan entre los 25° y 35°C para la zona ribereña, y entre 15° y 25 °C para la zona montañosa. Esta última zona, es la parte más lluviosa del departamento, con precipitaciones abundantes de más de 3.000 m.m. Hoy en día se distinguen dos épocas secas denominadas "verano" y "veranillo". La primera va de diciembre a marzo, y la segunda entre los meses de agosto y septiembre. Así mismo, el período de invierno largo va de abril a julio, y el invierno corto de octubre a noviembre (véase mapa 3).

La unidad político-administrativa dentro de la cual se enmarca buena parte del Sur de Bolívar son el actual departamento de Bolívar y el municipio de Yondó del departamento de Antioquia, cuya exploración resulta útil para expresar la arbitrariedad de la división político-administrativa en la que se debate la región. El departamento de Bolívar está localizado oficialmente en la Costa del Caribe colombiana (IGAC, 1977)⁴⁴, cuya capital es Cartagena. En conjunto muestra una forma alargada que en sentido longitudinal alcanza los 440 Km. medidos desde sus puntos más extremos, mientras la parte más angosta apenas llega a 17 Km.⁴⁵ Más allá de su división geográfica en norte, centro y sur, en el departamento se reconocen zonas geoeconómicas diferenciadas como la región déltica magdalenense, los montes de María, las sabanas de Bolívar, la Depresión Momposina, el valle del Magdalena y la serranía de San Lucas (IGAC, 1977, p. 14). Esta última, más una parte del valle del Magdalena es a la que se conoce como Sur de Bolívar, aunque como se ha venido enunciando, el Estado no lo reconoce como una unidad político-administrativa (véase mapa 10).

Aquella situación ha sido vivida por los pobladores del Sur de Bolívar, quienes han tenido múltiples conflictos con la jurisdicción departamental y con su sede política, Cartagena. Su relación con el departamento está limitada por los más de 500 km. que cualquiera de ellos tendría que recorrer para acceder a Cartagena, una distancia que significa un día de carretera o dos navegando por el río Magdalena. Situación similar ocurre entre Yondó y la capital de Antioquia, Medellín. (IGAC, 1977)⁴⁶ Además, su situación geográfica como “sur” se profundiza al estar “separada” del resto del departamento por la confluencia del río Cauca y el Magdalena, que aparecen como una barrera natural que traza una diferenciación y que al mismo tiempo crea un límite entre regiones (véase, mapa 3).

⁴⁴ Se encuentra enmarcada dentro de las siguientes coordenadas geográficas extremas: 7'02' y 10'48' de latitud norte, y 73'45' y 75'43' de longitud oeste de Greenwich. El departamento de Bolívar ocupa una extensión de 26.392 kilómetros cuadrados, que comparada con la superficie total del país representa un 2.3% de la misma.

⁴⁵ Esta particular cartografía es el resultado de la desmembración que ha sufrido desde el año 1857, cuando la hasta entonces Provincia de Cartagena recibe el nombre de Bolívar. Luego, la ley 17 de 1905 decretó la creación del departamento del Atlántico con las provincias de Barranquilla y Sabanalarga que pertenecían a Bolívar. En 1951 le fue segregado el territorio actual de Córdoba y por la ley 47 del 30 de agosto de 1966 se creó el departamento de Sucre.

⁴⁶ El departamento de Bolívar ocupa una extensión de 26.392 kilómetros cuadrados, que comparada con la superficie total del país representa un 2.3% de la misma.

Mapa 10. El Sur de Bolívar en el Magdalena Medio



Mapa elaborado por Carlos Alberto Benavides

El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio⁴⁷ (PDPMM), la ONG con mayor presencia en la región, define el Sur de Bolívar como una subregión del Magdalena Medio, constituida por los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales, Arenal, Río Viejo y Regidor. En total, estos municipios suman una extensión de 9.636 Km² y una población de 120.354 habitantes (DANE, 2005)⁴⁸. En el “Plan de Desarrollo y protección Integral de los Derechos Humanos” (PIDMM) presentado por la Mesa Regional de voceros campesinos del Sur de Bolívar, de la que hablaremos en detalle más adelante, se explicita la necesidad de identificar otros municipios, al mismo tiempo que diferenciar espacios socioeconómicos en la región (PIDMM, 1999, p. 64). Por un lado, se ubican los municipios de Barranco de Loba, Atillo de Loba, San Martín de Loba, San Fernando, Margarita, El Peñón, Pinillos, Montecristo, San Jacinto del Cauca y Achi, cuyo polo es Magangué (departamento de Bolívar). En segundo lugar, están los municipios del Alto del Rosario, Tiquisio, Regidor, Río Viejo, Arenal y Morales, que son polarizados por Aguachica (Cesar). En tercer lugar, se encuentran Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo, Cantagallo polarizados por Aguachica y Barrancabermeja (Santander). Entre estos se destacan a nivel nacional, el eje Bucaramanga-Medellín (véase Mapa 2).

CUADRO 1			
Extensión Territorial y Densidad de Población, Municipios del Sur de Bolívar			
MUNICIPIO	SUPERFICIE (Km2)	POBLACION	DENSIDAD
Simití	2238	18.139	8.11
Morales	1196	13.254	11.08
Arenal	488	7.364	15.09
Río Viejo	814	15.243	18.73
Regidor	667	4.511	6.76
Santa Rosa Sur	1432	26.896	18.78
Cantagallo	1222	7.839	6.41
San Pablo	1579	27.108	17.17
TOTALES	9636	120354	12.48

⁴⁷ El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, constituida en 1995, es una organización no gubernamental cuyos socios fundadores fueron el CINEP, la Diócesis de Bucaramanga, Ecopetrol y el sindicato USO. Fue dirigido durante más de una década por el padre De Roux, uno de los sacerdotes jesuitas más reconocidos por sus labores regionales. El programa cubrió 29 municipios del curso bajo y medio del río Magdalena.

⁴⁸ Por municipio, la información se desglosa de la siguiente manera: Cantagallo: 7839, San Pablo: 27108, Simití: 18139, Santa Rosa del Sur: 26895, Morales: 13254, Arenal: 7364, Río Viejo: 15243 y Regidor: 4511 (DANE, 2005).

Fuente: Los datos correspondientes a superficie son tomados de los respectivos Planes Integrales de Desarrollo de cada uno de los municipios, realizados por las respectivas oficinas de Planeación Municipal, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 123 de 1997. Estos planes corresponden al año de 1998. La población es tomada del Censo de Población y Vivienda, que para tal efecto realizó el DANE en el año de 2005.

Mapa 11. Región del Magdalena Medio según el PIDMM



Mapa elaborado por Carlos Alberto Benavides

La ocupación humana del Sur de Bolívar se remonta hasta antes de la invasión española y ha estado recreada por distintos flujos poblacionales, como ya se ha explorado con la población de los yarigués. Generalmente se afirma el "sincretismo triétnico - indio, negro y blanco- que dio lugar a la conformación de una cultura ribereña" (Arcila, 1994, p. 35), como la base de las características de la población. Inicialmente, guamacoes, luego cimarrones negros y descendientes de españoles, van haciendo de esta región un escenario particular en términos culturales, territoriales, políticos y productivos. Con el trascurrir del tiempo, las dinámicas de asentamiento van dando forma a una cultura ribereña, que en palabras de Orlando Fals Borda, es producto de "la respuesta a los retos que las condiciones tanto geográficas como naturales, económicas y sociales imponen a determinada sociedad, comunidad étnica o pueblo; respuestas posibles que van creando y cimentando modos específicos de vida, pensamiento y práctica, es decir formas de ser, hacer y conocer" (Fals Borda, 1979, p. 25).

Inicialmente, la región estaba poblada por grupos étnicos de "filiación Karib", según Paul Rivet (Archila, 1986). Estos pueblos desarrollaron su cultura en tierras bajas y tropicales extendidas a lo largo del Río Magdalena. Al norte del río Cimitarra se localizaba el grupo indígena guamacoes. Los guamacoes fueron reconocidos por su territorio rico en yacimientos auríferos de la vertiente occidental de la Serranía de San Lucas, situación que les hizo víctimas tempranas de los españoles. Los indígenas guamacoes fueron reducidos y repartidos en encomiendas sin oponer mayor resistencia, y en el año de 1611 fue fundada la ciudad de San Francisco de Nuestra Señora la Antigua de Guamocó, y se inició la explotación del oro con cuadrillas de negros traídos de Zaragoza (hoy Antioquia). Para llegar a Guamocó se podían utilizar dos rutas, el camino de Zaragoza y el de Simití. Este último conducía hasta el pueblo de indios de Simití cerca a las orillas del Río Magdalena. Cerca de allí se fundó San Antonio de Toro, asentamiento de españoles, desde donde se transportaban las mercaderías necesarias para Guamocó, procedentes de Ocaña y Pamplona, en lo que hoy es Santander.

San Antonio de Toro, hoy Simití, fue un importante asentamiento en la Colonia. Recibió el título de Ciudad y poseía una casa de fundición a la que llegaba la mayor parte del oro procedente de las minas de Guamocó y de la Serranía de San Lucas, lugar este último

donde los yacimientos fueron explotados por los jesuitas, con el trabajo de negros e indios. De San Antonio de Toro el oro se embarcaba hacia Cartagena.

Por otra parte, la intensidad de la presencia negra en la región, se explica no sólo por la utilización de mano de obra esclava en las minas de la Serranía de San Lucas, sino también por la boga del río.⁴⁹ Para el desempeño de esta última labor, los esclavos negros fueron introducidos desde fines del siglo XVI y serían ellos mismos quienes constituyeran los asentamientos de los huidos, de dos tipos. Por una parte, están los palenques, lugares donde la población se nucleaba para garantizar su defensa y utilizaba los alrededores del poblado para sembrar los cultivos necesarios para su supervivencia, como fue el caso del palenque de Arenal. Y por otra parte, estaban los pequeños asentamientos de pescadores, distribuidos linealmente a orillas del río.⁵⁰

La presencia de españoles y criollos, quedó limitada a Simití, centro de abastecimiento comercial del Río Magdalena, mientras que los otros asentamientos que se establecieron, bien fueran de indígenas o de esclavos huidos o libertos, ocupan un papel marginal dentro del funcionamiento económico, social y político de la entonces Nueva Granada (Herrera, 2002).

Durante la segunda mitad del Siglo XIX el desarrollo de la navegación a vapor, además de agilizar el transporte comercial, demandó madera como combustible. Esta demanda fomentaría el surgimiento de pequeños asentamientos en las riveras del río, cuyos habitantes se dedicaban al leñateo. A finales del siglo XIX, tuvieron lugar una serie de movimientos migratorios procedentes de las sabanas de Sucre y Bolívar, del Sinú y, en general, del curso bajo del río. Estas migraciones se originaron con la expulsión de campesinos producto de la expansión del latifundio en la Costa Atlántica. También llegaron campesinos de Magdalena y Santander afectados por las continuas guerras civiles que tuvieron lugar allí. Estos migrantes se situaron preferencialmente en las orillas de los ríos y se dedicaron a la pesca, a la agricultura de subsistencia en pequeñas parcelas, al leñateo y a

⁴⁹ La boga del río es aquella actividad consistente en remar. Dada la importancia del río Magdalena como medio de transporte, esta actividad era muy frecuente en aquella época.

⁵⁰ Sobre las formas de asentamiento de población negra esclavizada, véase entre otros: Fals Borda, 1979; Friedemann y Arocha, 1986.

la cacería. También llegaron madereros, migrantes y aventureros, que se dedicaron a comerciar con pieles de “tigre”, caimán, babilla, y a extraer productos naturales de las selvas tales como taguas, caucho y maderas finas que se vendían en Barranquilla. Algunos otros realizaron desmontes en la zona plana, donde establecieron cultivos de pan coger. A pesar de la construcción del ferrocarril, del surgimiento de la gran industria petrolera en sus alrededores (en los años veinte del siglo XX) y de contar con una historia de singular importancia para la economía nacional, el Magdalena Medio y en particular el Sur de Bolívar, continuaron siendo percibidos como un paraje selvático y olvidado, lleno de tierras baldías.

A mediados del Siglo XX, se desarrolla una colonización acelerada resultado de la afluencia de campesinos provenientes de los Santanderes, Antioquia, Tolima, Caldas, Choco, Cundinamarca y Boyacá, que fueron expulsados por la violencia que se vivía en sus lugares de origen⁵¹. Luego de encontrar un sitio donde fincarse, traían frecuentemente a parientes y amigos, y con el tiempo lograban, en palabras de los pobladores de la región, crear asentamientos en los que “la mayoría eran paisanos y trataban de mantener las costumbres traídas” de sus regiones de origen, con todas las restricciones que imponían lo que aquí se encontraba. Pero también los poblados surgían en la confrontación y en “los conflictos por los linderos, aguas, robos, celos o malos entendidos” (Testimonios de pobladores de la región, 1998).

Por su parte, el período conocido en Colombia como "la violencia" en los años cincuenta del siglo XX, caracterizado por la confrontación entre los partidos políticos liberal y conservador, incidió en el incremento de la migración hacia la región y definiría su mapa político por varias décadas. De tal modo, en la actualidad los municipios del norte son considerados conservadores y los municipios del sur, como liberales.⁵² Desde 1960 hasta la

⁵¹ Por ejemplo, el corregimiento de Micoahumado comenzó a poblarse en los años 60 y 70 por refugiados desplazados de las pugnas entre terratenientes y trabajadores por el derecho a la tenencia de la tierra en los departamentos de Antioquia, Santander y Cesar. Adicionalmente, la explotación maderera fue otra fuerte motivación de poblamiento. Los colonos fueron construyendo alrededor sus casas de “baharaque” con techo de palma, y viviendo también de la agricultura, hasta que Micoahumado llegó a convertirse en un espacio poblado que llamaron *La Plaza*. Actualmente cuenta con una población de siete mil habitantes.

⁵² Por ejemplo, los liberales originarios del departamento de Boyacá, de mayoría conservadora, se asentarían en los municipios de San Pablo, Cantagallo y parte de Simití, así como los conservadores originarios del departamento de Santander de mayoría liberal se asentarían en los municipios de Santa Rosa del Sur, Morales

actualidad, la migración ha sido determinada mayoritariamente por las bonanzas económicas.

En general, durante el transcurso del Siglo XX podríamos definir tres grandes períodos migratorios así: (1) antes de 1950, (2) entre 1950 y 1960 y (3) el que se da desde 1960 hasta hoy, que sin ser de presencia masiva, si ha sido continuo y sostenido. La zona de colonización de lo que hoy es el municipio de Santa Rosa del Sur, se presenta como un foco de atracción para lo que hoy son los departamentos de Boyacá y Santander, no tan sólo por su proximidad geográfica, en especial para el segundo, sino también como área que soluciona en parte los problemas de tierras, dado que el departamento de Boyacá, presenta una gran división de la tierra en minifundios, mientras que el departamento de Santander presenta el fenómeno contrario, la existencia de grandes latifundios.

En términos generales, la población inmigrante es principalmente campesina, con experiencia agrícola traída de sus lugares de origen. El descubrimiento de las minas de oro de San Pedro Frío –en plena Serranía de San Lucas–, los proyectos de cooperativas de cultivo de café, frijol y caña, el crecimiento de cultivos de uso ilícito, entre otros, generarían migraciones de hombres y mujeres venidos de todo el territorio nacional. A partir de los años noventa el Sur de Bolívar estará atravesado por un continuo desplazamiento y repoblamiento provocado por la agudización del conflicto militar.

Aquellos conjuntos constituidos por un lado, por el valle del Magdalena y por el otro, por la Serranía de Santo Domingo y la Serranía de San Lucas, también han sido constituidos históricamente por el flujo migratorio y sus procesos de asentamiento. El primero está caracterizado por una población de asentamientos antiguos o de idiosincrasia “costeña” en lenguaje regional, cuyas actividades económicas están directamente influenciadas por el río, por la ganadería extensiva, las formas de trashumancia, adaptadas a las inundaciones periódicas, los cultivos de pan coger y la práctica de la pesca, procesos productivos que hoy son desplazados por el cultivo de palma africana. Entre tanto, la Serranía de San Lucas se caracteriza por un poblamiento de origen preponderantemente andino y por un “dinamismo

y Río Viejo, preferiblemente. Esto se refleja en el comportamiento electoral durante las diferentes elecciones a corporaciones públicas que se han realizado en la zona, durante las últimas tres décadas.

colonizador”, con una elevada explotación de recursos naturales, prácticas mineras artesanales, agricultura campesina, cultivos de uso ilícito y una tendencia a un cambio de uso agrario intensivo.

Para 1996, los municipios que están incluidos en el Sur de Bolívar llegaron a producir aproximadamente el 42% de la producción nacional de oro, especialmente Río Viejo, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Achí, Pinillos, San Pablo y Santa Rosa del Sur.⁵³ En la montaña, se rebuscan la vida 15.000 familias de mineros, ayudadas por sus hijos. Estas familias trabajan el sistema de aluvi6n (sacan el oro de las piedras que lleva el agua), o extraen el oro de las piedras de los socavones a máximo 100 metros bajo tierra que tienen que triturar en rústicos entables.

En un poblado minero puede haber hasta 100 familias asentadas en ranchos de madera, plástico y zinc, incrustados en la montaña al lado de trochas para el paso de las mulas. Su vida gira en torno a la minería y el comercio. Son mineros que han recorrido la mayor parte de los 150 asentamientos mineros de la región. En La Punta, en la carretera a Santa Rosa, se descargan a diario 2 toneladas de cianuro y 300 kilos de mercurio, usados en la purificación del oro. Con estos insumos, un minero logra extraer en una semana aproximadamente 16 gramos de oro, muchos de los cuales “terminan en el mercado negro de Bucaramanga”, como lo afirman los pobladores.

El centro de las relaciones mineras es el casco urbano del municipio de Santa Rosa del Sur, fundado en la segunda mitad del siglo XIX. Santa Rosa es producto de la colonización de la montaña y es reconocida por sus habitantes como “un pueblo progresista”. A pesar de ser un centro comercial importante, que soporta la economía del oro y de la coca, así como un mercado más reducido de granos y maíz, tiene una infraestructura débil. En realidad, sólo hasta cuando el precio del oro asciende en 1990 de US \$35 por onza a US \$300, Santa Rosa llega a convertirse en un centro de comercio importante.

⁵³ A pesar de haber sido un recurso importante desde la segunda mitad de los años 80, su producción se incrementó notablemente a partir de 1990; si bien desde 1997 registra una disminución, sus niveles se mantienen por encima de la producción registrada entre 1984 y 1989. Véase: Minercol, s.a., p. 4.

A partir de 1996, el reclamo de la propiedad de las minas de San Pedro Frío y Paraíso, por parte de una familia de la alta burguesía, los Illera Palacio, fue mostrando la estrecha relación entre ella, las multinacionales interesadas en el mineral (Corona Goldfields S.A subsidiario de Conquistador Mines Ltda.), los Estados Unidos (que han intervenido a través de su embajada)⁵⁴ y el Gobierno colombiano. Desde esta complicidad se han creado los códigos de Minas dando toda suerte de herramientas legales que dejan sin opciones a los pobladores mineros del Sur de Bolívar. Incluso el interés del gobierno de Estados Unidos implicó desde 1999 que triplicara su ayuda militar para garantizar las inversiones en los sectores de minería y energía. La ayuda de Richardson, el secretario de energía de Clinton, se conoce hoy en día como el Plan Colombia (véase: Loingsigh, 2002).

Pero se enfrentaban a un problema: las minas eran explotadas por mineros artesanales reconocidos por la ley en el marco de la reserva minera. Los argumentos esgrimidos por los mineros fueron enfrentados con la arremetida paramilitar. El 28 de marzo de 1997, mataron a 11 mineros en Puerto Coca, municipio de Tiquisio, y siguieron otras tantas incursiones de los paramilitares.⁵⁵ Como pasó también en Micoahumado, donde los paramilitares atacaron e intentaron destruir cualquier propuesta productiva desligada de su modelo, es decir, cualquier proyecto que daba una cierta autonomía a las comunidades. Por su parte, las multinacionales se han empeñado en afirmar que la explotación minera artesanal genera bajo rendimiento y un grave deterioro ambiental (PIDMM, 1999).

Las relaciones económicas en el Sur de Bolívar están marcadas por la explotación petrolera, la ganadería extensiva, la agricultura y la extracción de recursos como la madera y el oro. A su lado, están los cultivos de frijol, caña de azúcar y café, principalmente, a los que se

⁵⁴ En julio de 1998, la embajada de los Estados Unidos envió una carta al Gerente General de Mineralco en la que señala: “En vista del potencial del país en cuanto a depósitos de minerales, y al interés del gobierno colombiano en atraer la inversión extranjera en este sector, le solicitamos información que nos permita preparar monografías de los diferentes minerales, así como un listado de empresas que actualmente están desarrollando operaciones mineras en Colombia” con el fin de ayudar a las empresas norteamericanas. (En , carta de la embajada de los Estados Unidos al Gerente General de Mineralco, julio de 1998, Cfr. Loingsigh, 2002, p. 66)

⁵⁵ Como lo describe Loingsigh (2002, p. 68): “el 25 de abril de 1997, un grupo paramilitar incursionó en el casco urbano de Río Viejo y mataron a Juan Camacho Herrera, presidente del Comité de Mineros de Río Viejo afiliado a la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar (Asoagromisbol): lo decapitaron y jugaron fútbol con su cabeza; luego lo pusieron en un palo mirando hacia la zona minera y les dijeron a los habitantes que ellos venían por las minas y que las iban a entregar a gente que haría una mejor explotación de éstas y un uso más racional de ese recurso. En esa incursión fueron asesinadas 29 personas más”.

suman los cultivos de pan coger y la pesca (Alonso, 1997). En la región predominan las explotaciones medias y los latifundios hasta menos de 2.500 has.⁵⁶ Jurídicamente, la tenencia de la tierra se establece como “tierras en propiedad” y “en colonato”. Las primeras son aquellas que tienen un título legal, mientras las segundas son las tierras explotadas por los colonos, considerados como los productores que explotan la tierra sin ser propietarios ni pagar arriendo.⁵⁷

Las tierras “en propiedad” son generalmente explotadas a través del sistema de arrendamiento. El tipo dominante de tenencia son las “propiedades medias” destinadas fundamentalmente a cultivos estacionales de autoconsumo y comerciales. En las propiedades grandes y medias se desarrolla la ganadería extensiva.

Los asentamientos de la Serranía de San Lucas han surgido como caseríos que rápidamente han crecido y se han multiplicado, convirtiéndose en corregimientos y luego en municipios. Este es el caso de Santa Rosa del Sur, que adquirió una sede administrativa propia, al segregarse del municipio de Simití, o de Cantagallo, al separarse de San Pablo. En general, los cascos urbanos, son los centros de mercadeo local y concentran la mayoría de los servicios y el equipamiento institucional.

Uno de los factores claves identificado como obstáculo para la integración económica es la falta de infraestructura vial. Casi todo el transporte local se realiza a través del río Magdalena, en embarcaciones como las mencionadas “chalupas” y “planchones”. Los

⁵⁶ Considerándose como propiedades pequeñas aquellas que van de 1 a 20 has., medias de 20 a 50 has., grandes de 50 a 200 has., latifundios de 200 hasta 2.500 has.

⁵⁷ “La Ley 2 de 1959 creó la Zona de Reserva Forestal que originariamente incluía algunos territorios de Antioquia, Santander, Cesar y Bolívar. El objetivo básico de la ley era proteger los nacimientos de agua, reglamentar la colonización, evitar la erosión de tierras y racionalizar la producción o consumo de energía. Sin embargo, con el paso del tiempo algunas áreas han sido sustraídas de esta zona, especialmente en Santander y Cesar; no así en los actuales municipios del Sur de Bolívar. En San Pablo, la única sustracción de territorio a dicha reserva se dio mediante Resolución 129 de 1968 (S28); precisamente el año en que fue erigido como municipio...”

De acuerdo con información oficial, el 99,54% del territorio de San Pablo hace parte de la Zona de Reserva Especial del Río Magdalena. El área total de esta reserva asciende a 2'155.591 hectáreas, de la cual la parte correspondiente a los 15 municipios del Sur de Bolívar es de 1'132.427 has., que representa el 52,5% del área total (ver tabla 1). Sin embargo, el hecho más evidente en esta zona es la colonización y el poblamiento humano. Según la Gobernación de Bolívar, hoy en día, apenas el 21,27% (225.000 has.) del territorio de 7 de estos municipios está cubierto de bosque primario; en cambio el área dedicada a pastos, rastrojos y cultivos (lícitos e ilícitos) representa el 48,49% del total (Datos tomados de: URPA – Bolívar. Tomado de Plante Sur de Bolívar. Cfr. Gutiérrez Lemus, 2004, p. 15 y 13)

grandes flujos de mercancías circulan por el río, en dirección de los mayores centros económicos. Aunque en los últimos años se han construido y arreglado algunos tramos viales, el caballo y la mula siguen siendo insustituibles en vastos sectores del territorio. Los cascos urbanos locales tienen que servirse directamente de Barrancabermeja y Aguachica en términos regionales, abastecidos por ciudades como Bucaramanga (departamento de Santander) y Medellín (departamento de Antioquia), para obtener los productos manufacturados o para vender algunos de sus productos agropecuarios.

Para 1998 el 16% de la población derivaba su sustento del jornal, un 15% obtenía su ingreso de la actividad pesquera, un 12% eran comerciantes, un 28% vivían de la actividad agrícola, un 5% eran considerados asalariados, principalmente empleados públicos, un 15% se dedicaba a actividades ganaderas de pequeña y mediana extensión, y un 11% a actividades varias, entre ellas la construcción y los servicios (PIDMM, 1999).

No se sabe exactamente la fecha en que los cultivos ilegales y el narcotráfico llegaron a la región. Sin embargo, según un poblador sitúa tal origen en relación con el auge que tuvo la marihuana en la Costa Atlántica, a mediados de los años ochenta; cuando menciona que “pudo haber llegado a la región en 1985, asentándose por los lados del corregimiento de Monterrey en el municipio de Simití y el corregimiento de Mico Ahumado en el municipio de Morales, de allí se extendió a toda la región” (Testimonio de un poblador, 1998). Inicialmente se sembró marihuana, y hacia los años noventa se empezó a cultivar la hoja de coca. Así mismo, estos corregimientos fueron generando la infraestructura adecuada para su comercialización. A finales de la década de los noventa, se incorporaron pequeños laboratorios caseros que hacían muy rentable la siembra. Para percibir el impacto de la economía del narcotráfico en la vida de la gente, vale la pena mencionar que en época de cosecha se paga a los jornaleros el doble de lo que representa un jornal agropecuario común. Este hecho va a desestimular paulatinamente la siembra de otros productos, lo que implica que familias enteras se dediquen a la actividad del "raspado" de hoja de coca, y en época de cosecha, se convierte en una de las actividades más importantes en la región.

A semejanza del conjunto del Magdalena Medio, el Sur de Bolívar se caracteriza como una formación económica fragmentada y desarticulada “en la que coexisten una economía exportadora, agroindustrial, agropecuaria, minera y de colonización” (PIDMM, 1999, s.p.).

Durante la década de los 90 emergió con mayor contundencia un conflicto entre el modelo latifundista ganadero y agroindustrial y extractivista, frente a la pequeña propiedad y la economía campesina, la pesca y minería artesanal. Esta tendencia, relacionada con los intereses del modelo de apertura económica, sigue los parámetros del modelo de acumulación económica del país: “La concentración de la propiedad de la tierra en manos.... latifundistas ya no tiene como fin la producción agropecuaria, sino la mera especulación con el precio de la tierra, que se espera irá al alza gracias a los proyectos de inversión transnacional o estatal” (Mondragón, 2003, s.p.).

Tanto las migraciones y los asentamientos, como la tenencia de la tierra y las relaciones de trabajo, marcan una serie de características de la población, entre las que señalamos: la precariedad de servicios públicos, las dificultades de producción y circulación de productos agrícolas, la institucionalidad clientelista del estado, las contradicciones entre grandes concentraciones de tierra y colonos; así como la construcción de formas de control económico desde intereses foráneos, preocupados por la explotación de los recursos naturales y la regulación social a través de distintas formas de relación político-militar.

3.1.3. El Valle del Río Cimitarra

El Valle del Río Cimitarra, como parte del Magdalena Medio, puede comprenderse como extensión bisagra entre del Sur de Bolívar y el nordeste antioqueño (véase Mapa 12). El Río Cimitarra nace de la unión de los ríos Tamar e Ité, en el nordeste antioqueño, y desemboca en el Río Magdalena, en la zona del Sur de Bolívar. El Valle del Río Cimitarra ha sido poblado básicamente por procesos de colonización, provenientes de Puerto Berrío (Antioquia) y Puerto Boyacá (Boyacá), también encontramos gente proveniente de Urabá. Una primera oleada migratoria se presentó en la década de 1950, en la época de “La Violencia”, por el desplazamiento que generó la guerra en el campo y la posterior huida de los perseguidos. Posteriormente, el Valle del Río Cimitarra se consolidó como una zona de “campesinos que huyen”, pero que colonizan y construyen su nuevo hábitat. Las características socioeconómicas siguen los patrones del Magdalena medio y el sur de

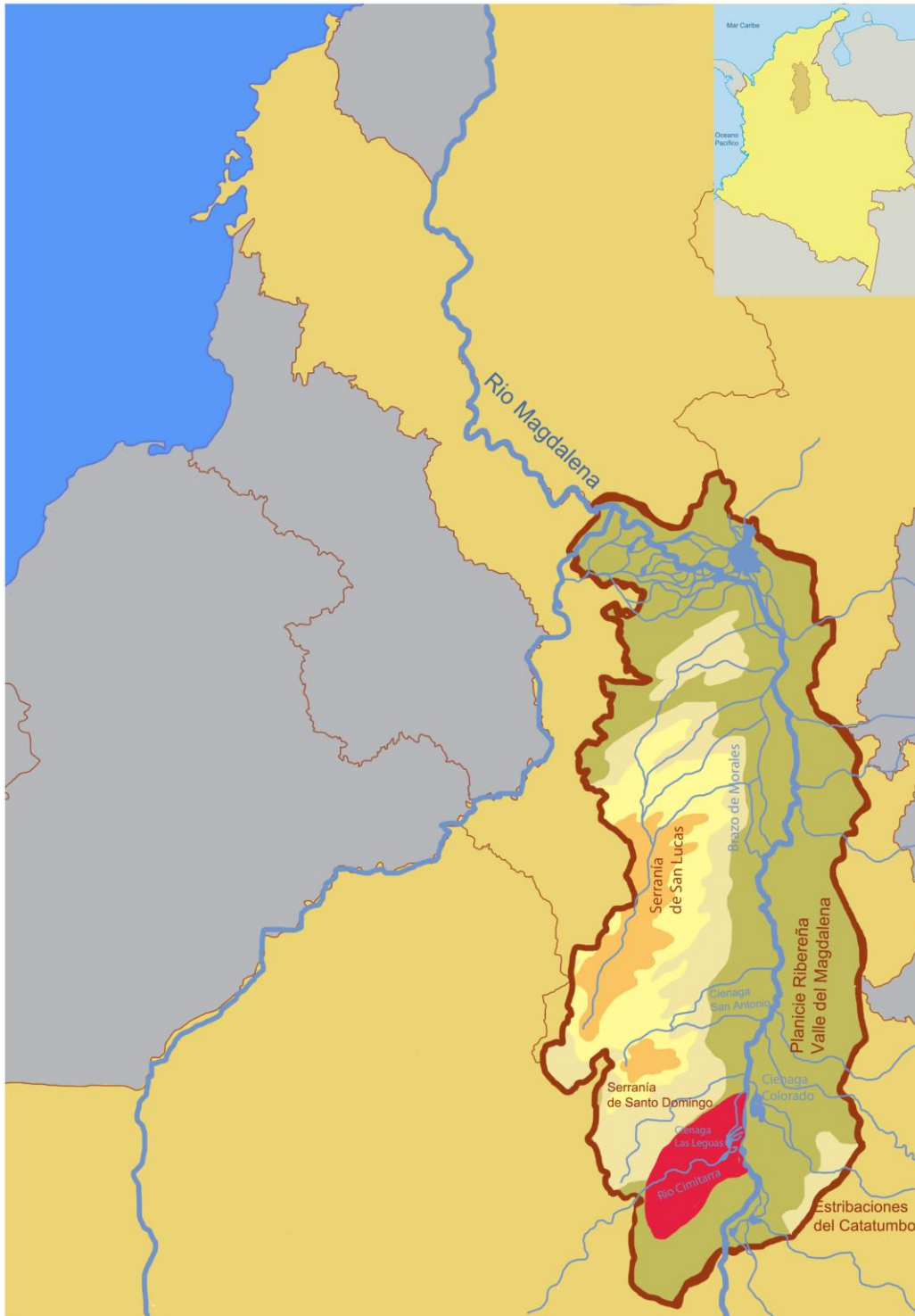
Bolívar, así como la insistencia de sus pobladores en cambiar sus condiciones⁵⁸. Barrancabermeja es el lugar común de estos habitantes y es referente central de su vida productiva (intercambio comercial), social (encuentro con familiares que viven en esta ciudad), y en sitio de satisfacción de necesidades básicas (de salud, en el hospital regional San Rafael, y de educación en colegios de bachillerato, inexistentes en la zona del Río Cimitarra).

Una carga de maíz que se produce aquí en Yanacué no vale la pena sacarla a San Pablo, ya que la única forma de llevarla es en mula y se gasta unos dos días hasta la punta, que es lugar donde hay carretera. De allí la baja uno en camioneta por trochas muy malas hasta San Pablo donde se la vende uno, ahí no le paga a uno ni lo que vale producirla. Y dicen que en Bucaramanga está muy barato el maíz, ya que el gobierno los tiene muy mal. Entonces, ¿qué hace uno para vivir? Pues sembrar coca, que esa sí la pagan bien y se la compran a uno aquí mismito, sin tener que ir a ninguna parte. De vez en cuando viene el ejército a joder, pero uno se aguanta y no dice nada. Ellos saben que es lo único que uno puede hacer (conversación con un habitante de Yanacué, 1999).

Con estas palabras, un líder de la Vereda de Yanacué, describe la situación económica de los campesinos y el tránsito que los ha llevado al cultivo de la hoja de coca. Como también lo sostiene una maestra de la región: “La gente en esas fincas sin saber leer y escribir. Lo peor de todo, es que los padres están de acuerdo [en que sus hijos cultiven coca], porque ya un niño de 10 años debe empezar a valerse por sí mismo, porque la pobreza por aquí es muy grande y sin posibilidades de empleo” (conversación con un habitante de Yanacué, 1999).

⁵⁸ En este sentido se han desarrollado proyectos de infraestructura como el acueducto veredal, aprovechando la cantidad de nacimientos de agua con que cuenta la región; el proyecto de vivienda, que tiene una importante participación de la madera como materia prima pues es un producto abundante en la zona, y la escuela de Puerto Matilde, que fue elaborada para remplazar la anterior, pues presentaba condiciones deplorables. Esta escuela está dotada de comedor y de ayudas audiovisuales. Estos proyectos, como es normal dentro de los estándares de las agencias de cooperación y las organizaciones no gubernamentales, tiene un gran componente de autofinanciación, que en la mayoría de los casos se ve reflejado en la mano de obra y algunas materias primas. (véase: Becerra, 2004)

Mapa 12. Valle del Río Cimitarra



Mapa elaborado por Carlos Alberto Benavides

“Un cultivo de legítima sobrevivencia”, así describen los campesinos del Sur de Bolívar al cultivo de coca. El problema concreto es la no-rentabilidad de los productos agrícolas tradicionales, que han dejado de representar beneficios económicos y, por ende, no ofrecen la posibilidad de generar excedentes para su posterior acumulación. Con el fin de romper el círculo vicioso en que se ha convertido la pobreza, los cultivos de coca se convierten en la alternativa inmediata para subsistir en la región. Así mismo es frecuente encontrar otros argumentos que señalan la carencia de créditos para el fomento de la actividad agrícola, la falta de asistencia técnica, así como los altos costos de los fletes.

Quienes hacen parte de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), de quienes se hablará con detenimiento en el capítulo 4, reconocen como prioridad entender estas articulaciones económicas, conscientes de que la base económica dominante en la región ha descansado en las actividades primarias, las llamadas “economías ilícitas”⁵⁹ y las economías de enclave⁶⁰. Paralelo a los conflictos por la exportación de las riquezas auríferas, la tenencia de la tierra, la agresión paraestatal, el atropello que sufre la débil economía campesina y la poca ayuda del Estado en esta materia, se ha desarrollado la autogestión y los modelos alternativos de desarrollo. Éstos tienen como prioridad una economía basada en la regulación de la tenencia de la tierra, en su uso, en el respeto a la biodiversidad, a los bosques nativos y selvas vírgenes, en la comercialización justa y equitativa de productos, sin intermediarios foráneos, en el respeto a la vida y dignidad de los campesinos.

La estructuración de una propuesta para implementar un modelo alternativo económico ha pasado por varias etapas, y ha tenido discusiones profundas. El cooperativismo fue el

⁵⁹ Las “economías ilícitas” son formas productivas que han sido ilegalizadas por el Estado, pero que hacen parte de la producción económica local, regional y nacional. Es decir, el escenario de ésta problemática adquiere un carácter social. En el Magdalena Medio, las principales “economías ilícitas” son los cultivos de coca y el hurto de gasolina.

⁶⁰ Explotación económica vinculada al mercado mundial y localizada en un país subdesarrollado, sin integración de ninguna clase con la economía del país receptor. Suelen ser actividades primarias o secundarias de multinacionales, orientadas a la exportación e intensivas en capital. Desconectadas de su entorno económico local, en el mejor de los casos se limitan a no obstaculizar el desarrollo del país, aunque lo normal es la situación contraria: daños al medio ambiente y ocupación de los suelos más fértiles, además de no tomar medidas preventivas ni correctoras, y en ambos casos las rentas que retiene el país receptor se limitan a las derivadas de los salarios.

primer elemento de la organización campesina en la región, la formación de *cooperativas*, que en la periodización de la historia de la ACVC abarca desde 1982 hasta 1992.

Inició como una propuesta económica de intercambio comercial y de eliminación de intermediarios para consolidarse como una forma de relación social, pensado en un sistema de cooperativas, pero desafortunadamente el proceso fue señalado de complicidad con la insurgencia armada por parte de las fuerzas armadas y de los paramilitares, y los terratenientes vieron en esta propuesta una amenaza contra su forma de comercialización:

Muchos ganaderos empezaron a encender alertas respecto a que no concebían que la economía de la zona fuera movida por los campesinos, pues esto les impedía enriquecerse “a costa” de ellos. Ésta posición era contraria a la de quienes afirmaban que de todas maneras el beneficio era para todos los habitantes de la región, incluidos los ganaderos, pues los precios de los productos eran efectivamente más reducidos en las tiendas comunitarias. Y hubo una división al interior del sector ganadero. Primó entonces el criterio de los primeros y se tomó la determinación de acabar con las cooperativas, empezando por la que estaba ubicada en Puerto Nuevo Ité, sitio conocido hoy en día como “La cooperativa”. Sabían que de este modo desarticulaban la organización campesina, y además acababan con los ingresos y el modo de vida de éstos: ...porque aquí se pensó un día que empezando con una pequeña cooperativa, unas tiendas comunitarias, que llegaron a convertirse en unas cooperativas, conformadas legalmente, tuvieran que desaparecer.....salir adelante los proyectos sanos de la región campesina del valle del río Cimitarra.... sí llegaron a funcionar tres tiendas, muy buenas, tres cooperativas, una en Puerto Nuevo, otra en Puerto Matilde y otra en Puerto Machete....las cooperativas fueron arruinadas, esto era por lo que allí se traía, se distribuía y se vendía era para la guerrilla. No, eso no es cierto. La guerrilla con cooperativas o sin cooperativas ellas se recorren todo lo largo y ancho del país y si aquí las limitan para traer una libra de arroz por otra parte no. Ese fue un pretexto para dejarnos a nosotros aquí bloqueados y para empezarnos el bloqueo; el bloqueo en el nordeste antioqueño, el bloqueo por el lado de Barranca, el bloqueo por toda parte, por el lado de San Pablo. Lo cierto es sí que se acabaron las cooperativas y la gente para conseguir una libra de arroz le cuesta mil pesos y en ese entonces aquí la conseguía por 500, 600 pesos, el mismo precio de Barranca. Porque no era una cooperativa para volverse rica la Asociación Campesina sino para ayudar al campesinado, los que estamos aquí. La gente ya no iba a mercar a Barranca ni a Yondó sino que aquí mismo compraban porque les salía igual, quizá más económico; lo que se iban a gastar en transporte, pasajes, viáticos, dormida, comida, se lo ahorran para echar otras 4, 5 libras más de arroz o 4, 5 libras más de panela. Pero, desgraciadamente, lo cruel de esta situación que se ha vivido en el Magdalena Medio y el asedio del paramilitarismo, que se ensañaron sobre esta región, todo eso se ha acabado...” (Entrevista a Carlos Martínez, líder campesino de la Junta de Acción Comunal de Puerto Matilde. Puerto Matilde, Valle del Río Cimitarra, 2004, realizada por Silvia Becerra)

La historia de este periodo fue de constante saqueo, quema, construcción y reconstrucción de cooperativas, incluso tiempo después se lanza la propuesta de volver las cooperativas móviles. La idea de las cooperativas no fue eliminada del todo, aún se hacen esfuerzos por estas tiendas para el intercambio, pero sobre todo se ha grabado en la gente la idea de un comercio justo, de cooperativas sin ánimo de lucro, del rechazo al intermediario que permite la especulación de los precios.

Luego de este atentado contra la economía campesina y contra los procesos organizativos, siguió la arremetida contra los pocos pequeños propietarios. La modalidad fue la compra de tierras obligados a lógica de “me vende o le compro a la viuda”, que era la frase que se utilizaba para obligarlos a vender a precios irrisibles o a desplazarlos impunemente. De allí en adelante, los campesinos emprendieron la lucha por la consolidación de un proyecto que defendiera la seguridad alimentaria y que fuera un beneficio social para todos.

Frente a la imposibilidad de continuar este proceso y sumado a los problemas estructurales de la región, a la aguda crisis de la economía campesina y al agotamiento progresivo de la madera como forma de sobre vivencia, como parte de la economía extractiva de la región, se presenta el auge en la zona de la siembra de cultivos de uso ilícito.

Además el Valle del río Cimitarra, presenta iguales características a otros sitios donde se siembra la mata de coca, un área marginal, de elevado valor ecológico, de difícil acceso e intervención del Estado, refugio de poblaciones rurales expulsadas del interior de la frontera agraria, con explotación de recursos estratégicos.

El campesino tiene claro que el problema en ese sentido es un problema de rentabilidad, y evidencia el momento de la apertura económica en los noventa como un punto de quiebre para las economías campesinas. A continuación se citan dos entrevistas en las cuales queda clara esta posición.

Nosotros no estamos de acuerdo con esto (los cultivos de coca) pero es una realidad a la cual no podemos taparnos los ojos; nosotros no podemos decirle al campesino: no cultive coca; y no podemos decirle porque es que no tenemos la manera de decirle: hermano deje de cultivar coca y póngase a hacer esto” (Entrevista a Víctor, Barrancabermeja, 2004, realizada por Silvia Becerra).

...Los cambios que se han dado (en la agricultura de la zona) ...por las últimas décadas tiene que ver mucho con el abandono de los campos, el abandono ha llegado a tal punto que los que cultivaban el café, que es el producto nacional me han dicho personas de que muchos tumbaron los cafetales y sembraron coca que porque les era más beneficioso y así sucesivamente, algunos productos que eran parte del sostén de la economía del campesinado, como el algodón, el café, hoy no le son rentables a nadie y que esos motivos son los que no le han ayudado a este país lo que llaman el libre comercio... toda esa zona cundiboyacense y Nariño han sido un gran potencial para la papa que es un tubérculo que ya no le es rentable cultivarla...Estamos convencidos que no sólo de la coca se vive, porque la coca ha sido una alternativa para la gente que no ha podido salir adelante y han creído que, de pronto, cultivando en pequeña cantidad, porque aquí no hay coqueros en grande que tengan territorio, por decir algo de varias decenas de hectáreas cultivadas en coca, no, aquí hay cultivos pero son pequeños, lo que se llaman cultivos artesanales; la gente no está haciendo eso por aumentar el problema de lo que es lo ilícito, lo que es la coca sino que no hay otra forma de sobrevivir” (Entrevista a Carlos Martínez, Puerto Matilde, Valle del Río Cimitarra, 2004, realizada por Silvia Becerra).

Además de sufrir la crisis del agro colombiano, intentando sobrevivir con el cultivo de la coca, los campesinos de la región debieron afrontar la forma como el Estado colombiano asumió esta situación. Se presentaron propuestas de sustitución de cultivos que fueron rechazadas y el Estado se limitó sólo a denunciar, a establecer nexos de los campesinos cultivadores de coca con el narcotráfico y con las guerrillas que operan en la zona y a desarrollar campañas de fumigación que generaron perjuicios de todo tipo para los campesinos.

...hemos hecho propuestas de sustitución de cultivos de uso ilícito de coca porque en la región sólo hay coca y a nadie le interesa la sustitución, ni al estado ni a las gentes de cooperación ni a ningunos otros estados. Yo he estado en Europa y he estado en Estados Unidos llevando esa propuesta y a nadie le interesa, al mismo gobierno colombiano se la hemos hecho en varias oportunidades...” (Entrevista a Miguel Cifuentes, ACVC, Yondó, 2004, entrevista realizada por Silvia Becerra)

Es que deberían darle oportunidad al campesinado de salir adelante con proyectos, ayudas del gobierno pero aquí nadie se interesa por eso, aquí únicamente se interesan por decir de que estamos en un problema de narcoterrorismo pero no miran nunca que es un problema social que tiene sus raíces hace años ... Eso sí es cosa de mirar porque eso no lo tiene el que siembra una mata de coca ni el que la procesa hasta volverla pasta. No, yo creo que la plata no la tiene ni ese narcotraficante, ese está cultivando y vende eso, sabe que es ilícito pero que es un medio de subsistir porque no hay otra alternativa que dé

garantías. (Entrevista a Carlos Martínez, Puerto Matilde, ACVC, 2004, realizada por Silvia Becerra).

Las fumigaciones como mecanismo para acabar con los cultivos de coca en la región no han dado los resultados esperados. No sólo no hay resultados óptimos en términos cuantitativos de la disminución de las hectáreas sembradas, sino que esta política ha terminado por dar más argumentos a los pobladores para declarar al Estado como su opositor. Esta situación se evidencia en el hecho de que no sólo los priva de salud y de servicios públicos como acueducto, sino que además genera situaciones de insalubridad, que dejan como resultado enfermedades y el daño a las fuentes de agua y animales domésticos.

Las fumigaciones afectan la economía campesina, pues la agricultura es la principal fuente de sus ingresos. Se afectan los cultivos de pancoger agudizando la crisis alimentaria que generaron los bloqueos alimentarios que ejercieron los paramilitares en la región. El glifosato en los campesinos ha generado brotes, fiebre, vómito, diarrea, dolor de cabeza, tos y estos síntomas no pueden ser tratados sino en los hospitales de Barrancabermeja y Yondó, pero la mayoría de los campesinos no tiene recursos para movilizarse (Entrevista con César Jerez, Barrancabermeja, 2003). El medio ambiente es afectado por la aspersion en bosques, pastos, rastrojo (el relevo de cultivos) y la tierras con cultivos de pancoger, ya que en esta tierra la recuperación se demora de 3 a 5 años, en cambio en zonas de cultivo ilícito la recuperación es casi inmediata.

La relación que se ha generado entre la guerrilla que hace presencia en la zona y los cultivos de coca, sigue los mismos parámetros que en el resto del país. La guerrilla se apodera de excedentes económicos que recauda de esta forma de economía, básicamente con el *gramaje* o impuesto del 10% de la venta de la base o pasta de coca a intermediarios que llegan a la región.

Pero esta problemática va más allá de lo económico, pues también se relaciona con la población campesina que cultiva la coca, a la cual le establece ciertos parámetros de regulación. En primer lugar, exige que acompañe estos cultivos con los de pancoger. Segundo, limita la extensión de cada cultivo de coca (aproximadamente de tres hectáreas). También prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en esta región y, en general,

establece un control que se orienta al mantenimiento de esta economía como una actividad de sostenimiento de la población campesina:

Aquí, en un tiempo, las guerrillas se opusieron a la siembra de coca y se opusieron de tal manera que no dejaban, y arrancaban los semilleros y esto y esto; pero la gente, la gran mayoría, vio que de qué otra cosa iban a subsistir y sembraron coca y eso la guerrilla no pudo controlar ese problema. Los paramilitares también tienen, pero ellos ya surgen cuando ya hay coca, aparte de eso tienen allá el control de los insumos y de los mercados y de la comercialización” (Entrevista con Luis Carlos Ariza, ACVC, Barrancabermeja, 2004, entrevista realizada por Silvia Becerra).

3.2. El Suroccidente : Entre departamentos, pueblos, resguardos y veredas

3.2.1. El Suroccidente andino y del sur: entre nudos y macizos

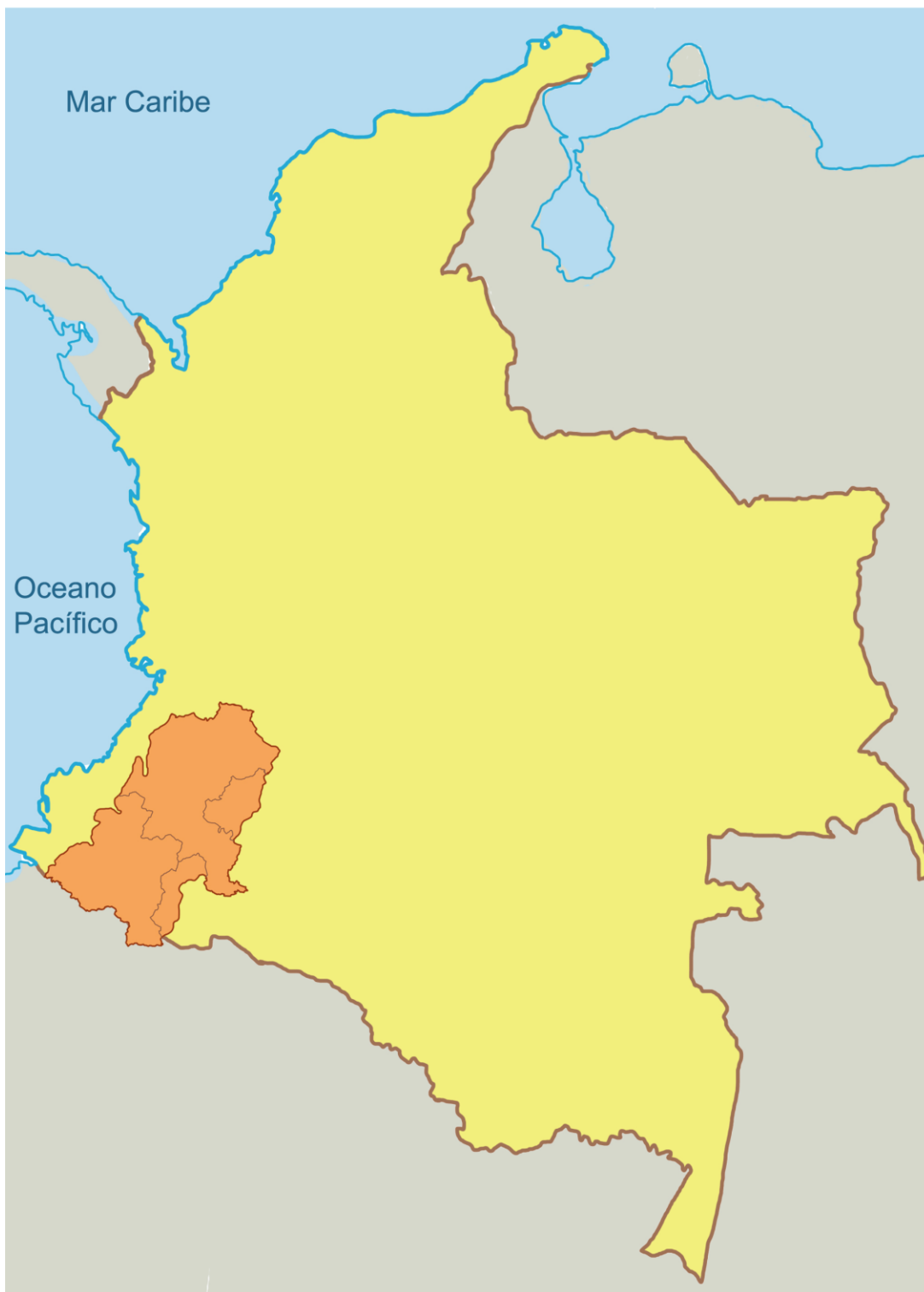
La región del Suroccidente se erige como primigenia y liminal: el mundo andino se estremera y de la cordillera que emerge desde la Patagonia, entre volcanes y punas, paralela al Pacífico, sufre una trifurcación. El Suroccidente está marcado por dicha división, desde la sinuosidad del recorrido de los ríos Chota (Ecuador) y Guáitara (Colombia). Este último hará de lindero inicial entre las cordilleras Occidental y Central, marcando los mundos de abajo y de arriba del Nudo de la Guaca o de los Pastos. Abarca la intrincada red de lagunas en donde nacen los ríos Magdalena y Cauca que recorren el país de sur a norte, el río Patía hacia el occidente, y los ríos Caquetá y Putumayo que descienden hacia el oriente para encontrarse con el Amazonas. Más al norte, el río Ovejas y una diversidad de cuencas irrumpen en la meseta y marcan la división entre las cordilleras Central y Occidental, confluyendo con el parteaguas de las cuencas del río Magdalena que dividen la cordillera Central de la Oriental (véase mapa 13 y 4).

De este intrincado mundo, dos nudos montañosos, el Nudo de los Pastos y el Macizo Colombiano, que se desatan en ramales serranos y cauces vertiginosos, se hace ecóndita, perdida, olvidada, temida y minimizada la región del Suroccidente con sus distintos

nombres y límites⁶¹. Su situación paradójica se urde en el sino de pertenecer, sin sentirse del todo, al estado-nación colombiano. Es final desde la mirada del centro del país, pues allí se marca la frontera con el Ecuador; pero el Suroccidente no lo comprende en su integralidad. Desde arriba o desde abajo se constituye en límite, aunque tiene que desenvolverse en unas relaciones paradójicas. Sus extensiones han cambiado como sus nombres: el más recurrente desde la Conquista es el Gran Cauca. Pero su protagonismo colonial y republicano quedó reducido con la crisis del modelo hacendatario, y su capacidad de comunicación panamazónica, de la que hablaremos enseguida, fue cortada por el cincel de los caminos reales. Su ironía estriba desde entonces en su ponderado lugar geoestratégico que sin embargo, como lo expresan sus gentes, es un “eterno postergado”.

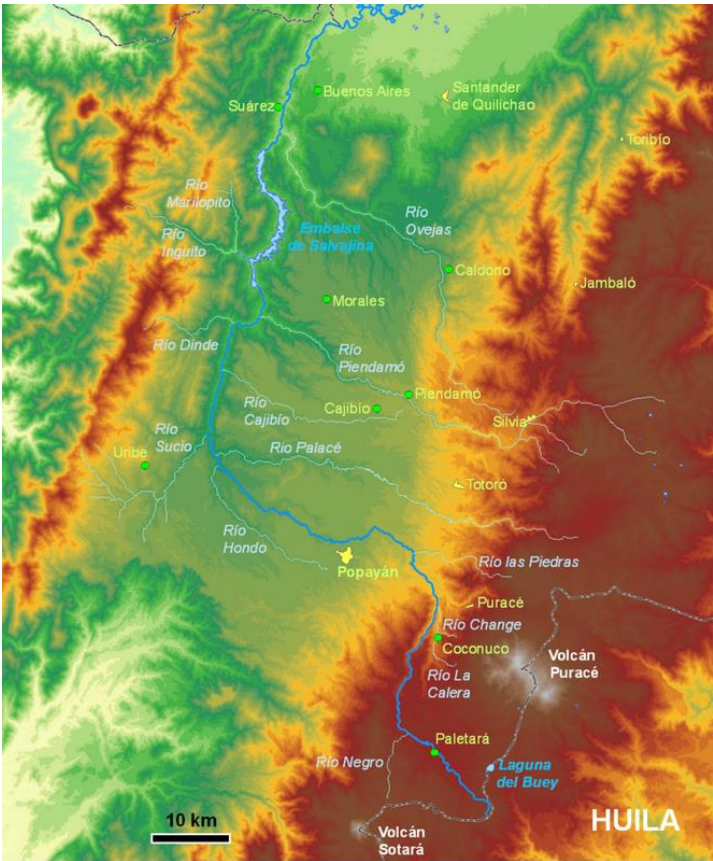
⁶¹ El establecimiento de las fronteras regionales, para delimitar esta zona del país ha ido transformándose a través del tiempo.

Mapa 13. Ubicación del Suroccidente Colombiano

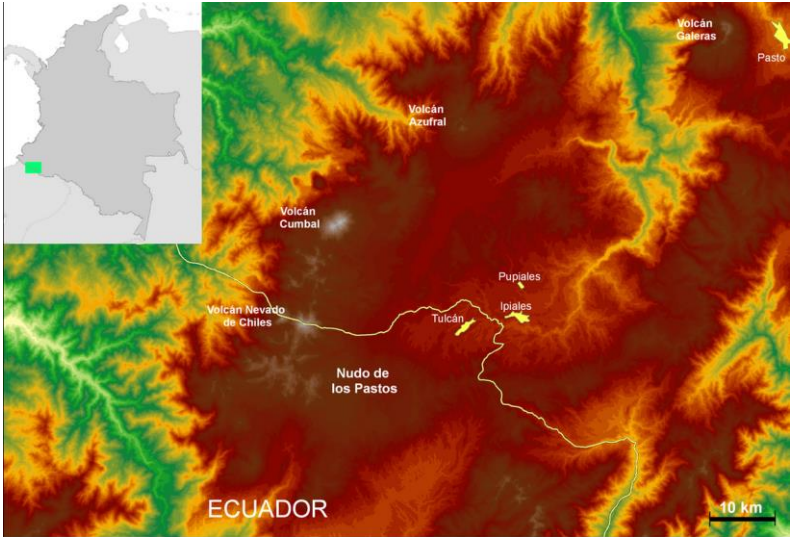


Mapa elaborado por Francisco Saade y Carlos Alberto Benavides

Mapa 14. Macizo Colombiano o Nudo de Almaguer



Mapa 15. Nudo de los Pastos o Nudo de la Huaca



Existen diversas formas de nombrar y por lo tanto, de delimitar al Sur Occidente Colombiano. La denominación es en sí misma descriptiva, se formula en clave de lugar geográfico, con referencia a un centro. Algunos lo denominan simplemente “Sur”, aludiendo al extremo sur de este país. Este es el caso de los estudios del CINEP y de la propuesta de “mancomunidad departamental” esgrimida por los gobernadores elegidos en el 2002. La expresión del “Suroccidente” se adopta a partir de un relato geográfico - ambiental que implica un enfoque de polo de desarrollo regional centrado en la influencia de la ciudad industrial de Cali, capital del departamento del Valle, sobre una extensa área rural de vocación prioritariamente agrícola para la producción de alimentos. Esta orientación georeferencial, también alude a su ubicación al sur-occidente con respecto a Bogotá, la capital del país.

Otra forma de definir los contornos es la denominación de “surcolombianidad”, en la cual se entrelaza una orientación cardinal, esta vez frente al mapa nacional, y tácitamente se nombra una identidad, una situación, una condición. Pero en una y otra siguen latentes los contornos, el “desde dónde” se inicia y el “hasta dónde” llega, para desde aquella frontera indagarse por “quiénes la constituyen” y “quiénes la denominan”.

Como se ha afirmado, también aquí resulta necesario diferenciar distintas acepciones del término “región” en la discusión sobre su concepción como un enfoque, como un método o como una propuesta. Desde una lectura paisajística, el Suroccidente comienza en la cuenca del Río Ovejas, al norte del departamento del Cauca, cuyo rumbo va de oriente a occidente; luego, siguiendo los contornos de la estribación de la cordillera oriental en formación, justo por la cuenca de norte a sur del Río Magdalena, hasta el Páramo de las Papas, lugar sobresaliente del Macizo Colombiano; luego sigue las estribaciones del Macizo y el Nudo de la Guaca o de los Pastos y el contorno del Piedemonte Amazónico hasta la frontera entre Colombia y Ecuador; desde allí siguiendo la cuenca del Río Guaítara hasta su nacimiento en el volcán Chiles; para seguir de sur a norte al Piedemonte Pacífico de la cordillera occidental hasta los farallones de la ciudad de Cali.

En términos político-administrativos se dice que pertenecen al Suroccidente colombiano los departamentos del sur del Huila, sur del Valle, Cauca, Nariño y Alto Putumayo (mapa 16).

Pero dichos linderos son flexibles en la práctica y de nuevo, los límites de la división político-administrativa resultan insuficientes, se ensanchan y angostan siguiendo los intereses políticos, los proyectos económicos, las propuestas sociales, las coincidencias y diferencias culturales, las maneras de nombrar el territorio.

El Macizo puede ser comprendido a través de las poblaciones de los diferentes municipios que lo habitan y comparten elementos culturales, así como problemáticas y hechos históricos que hacen que el vínculo entre algunos sea particularmente acentuado, al punto de que se reconozcan como pobladores de un mismo territorio. Es el caso del Sur del Cauca y Norte de Nariño, como se destaca en el mapa 16.

Mapa 16. El Suroccidente Colombiano



Mapa elaborado por Carlos Alberto Benavides

Cuadro No. 2: Municipios del Macizo colombiano por departamentos					
Tolima	Cauca	Huila	Caquetá	Putumayo	Nariño
Chaparral	Miranda	Santa María	San José de fragua	Mocoa	Taminango
RioBblanco	Corinto	Teruel	Belen de Andaqués	San Francisco	La Unión
Planadas	Caloto	Iquirá		Sibundoy	Colón
	Toribío	Nataga		Colón	San Pablo
	Jambaló	La Plata		Santiago	La cruz
	Caldono	Pital			Belén
	Silvia	Tarqui			San Bernardo
	Páez	La Argentina			San Pedro
	Totoro	Saladoblanco			Arboleda
	Inza	Oporapa			El Tablón
	Popayan	Isnos			Buesaco
	Timbío	San Agustín			
	Sotará	Pitalito			
	Puracé	Palestina			
	Rosas	Acevedo			
	La Sierra	Suaza			
	San Sebastian				
	Almaguer				
	Bolivar				
	Mercaderes				
	Patia (Bordo)				
	Florencia				
	Santa Rosa				
	la Vega				
	Piendamó				
	Piamonte				

Como se ha argumentado, el Suroccidente de Colombia como región no coincide con unos límites determinados, como se ha anunciado, se alarga y se encoge dependiendo de la perspectiva analítica o política desde la cual se nombre. Sin embargo, es posible advertir que comúnmente se circunscribe a los departamentos del Cauca y Nariño y a algunos municipios de departamentos limítrofes. Tanto en el departamento del Cauca como en el de Nariño se distinguen tres subregiones geográfico-naturales: la llanura pacífica, las estribaciones andinas y la vertiente amazónica. La llanura del Pacífico muestra altas temperaturas, abundantes lluvias y una copiosa vegetación que se extiende hasta las

estribaciones de la cordillera occidental. Esta zona, representa en el caso de Nariño, el 52% del departamento y el 21% de su población, la mayoría de ella afrodescendiente.

El departamento del Cauca, actualmente con una superficie de 29.308 km² y una población de 1.182.022 (DANE, 2005), tiene una historia tan larga como la presencia de la conquista española, e incluso para algunos pueblos indígenas como el Misak, el nombre ya era utilizado en épocas prehispánicas para definir y delimitar el territorio. Cuenta mama Liliana Pechené Muelas, que el nombre “Kauka ya era común para nuestros ancestros, así se denominaba el gran territorio que va del valle y los piedemontes de las cordilleras bien al norte, y bien al sur hasta donde nacen los grandes ríos de Colombia, el Magdalena, el Cauca, el Patía, el Caquetá, allá en los páramos, en el Macizo, donde están las lagunas, el origen” (conversación con mama Liliana Pechené, Guambía, 2010).

Para el año de 1537, los conquistadores se toman la ciudad del cacique Payán y le dan “nombre” a su actual capital, la ciudad de Popayán. Se trata de una de las “fundaciones” más antiguas del país (incluyendo a Bogotá, Cartagena y Santa Marta). Su actual constitución departamental es el resultado de un proceso de recorte territorial, que disminuiría su área de más de 630.000 km², cubriendo los actuales departamentos de Nariño, Chocó, Valle, Amazonía y parte de Antioquia. Este gran territorio o Gran Cauca⁶² fue en su momento lo que hoy denominamos, con sus más y con sus menos, Suroccidente. (véase Mapa 17). Aún así, en su actual delimitación se constituye en una zona rica con más de un millón de hectáreas de bosques, 150 kilómetros de costa sobre el Pacífico, tres regiones naturales, prácticamente todos los pisos térmicos como ha sido descrito, la existencia de tres valles y la riqueza hídrica que ha sido detallada.

En términos político-administrativos, el departamento está constituido por 42 municipios, organizados por el Estado en seis subregiones: norte, centro, Pacífico, oriente, sur y macizo. Oriente, macizo y bota, como se desglosa en el siguiente mapa.

⁶² En términos oficiales se denominó como el Estado Soberano del Cauca, que correspondía desde 1857 hasta 1886, con una división político-administrativa de la organización federal de Colombia como Estados Unidos de Colombia. Su considerable extensión hizo que coloquialmente se denominara como "Gran Cauca", denotando al estado más grande y rico de la Unión.

Mapa 17. El Gran Cauca (el antiguo Estado Soberano del Cauca)



El Cauca se caracteriza por ser en el macizo, una de las zonas rurales en Colombia con mayor población indígena después de la Guajira, y en el norte y occidente, una de las zonas con mayor población afrodescendiente. Su importante población indígena habita en su territorio en 83 resguardos, que han permitido la reproducción material y cultural de seis pueblos: Nasa, Yanaconas, Coconucos, Totoroes, Misak y Eperara-Siapidara. Para el año 2001, la población indígena en el departamento del Cauca sumaba 190.069 habitantes, que representaban el 24,20% de la población (Arango y Sánchez (1997 - 1998). A esta importante presencia indígena, se suma la población negra afrocolombiana, que en las zonas rurales habita en fincas tradicionales y consejos comunitarios, fundamentalmente en el valle interandino del Patía, el valle geográfico del río Cauca y la zona costera.

El departamento del Cauca posee una importante riqueza hídrica, articulada en el Macizo colombiano, donde nace el río Magdalena. Está constituido por cinco grandes cuencas: Alto Cauca (se constituye a partir del río Cauca y sus afluentes)⁶³, Pacífico (por los ríos Guapi,

⁶³ Está cuenca se constituye a partir del río Cauca y sus afluentes, los ríos Palo, Guengué, Negro, Teta, Desbaratado, Quilichao, Mondomo, Ovejas, Pescador, Robles, Piedras, Sucio, Palacé, Cofre, Honda, Cajibío, Piendamó, Tunia, Molino, Timbío y Blanco.

Timbiquí, Saija y Micay), Alto Magdalena cuyas aguas terminan en el río Páez⁶⁴, Patía constituida por el río del mismo nombre y sus afluentes (Guachinoco, Ismita, Bojoleo, El Guaba, Sambingo y Mayo) y la cuenca del Caquetá.⁶⁵ En esta diversidad de valles, cuencas, mesetas, páramos, que van desde el macizo y se despliegan por las cordilleras de sur a norte o se precipitan al Pacífico, se ha generado un proceso social que pone de manifiesto la vida territorial, cultural, productiva y política que allí se desenvuelve.

El departamento del Cauca participa en un 1,4% en el PIB nacional y con una tasa de crecimiento anual de 5.0% y una contribución al crecimiento económico nacional de apenas el 0,07%. (DANE, 2013, pp. 3-7) Su economía está basada principalmente en la producción agrícola, especialmente de fique⁶⁶, caña de azúcar, café, papa, maíz, yuca, frijol, tomate, mora y espárragos; la cual se complementa con la ganadería, los derivados lácteos y la piscicultura en la media y alta montaña, concentrada en los cultivos de trucha. Adicionalmente en el Pacífico se encuentra una de las más grandes reservas forestales del país. Sobresalen los recursos mineros del Norte del Cauca, en la región del río Naya, donde se encuentran importantes reservas de oro, y en la Bota caucana se encuentran yacimientos petrolíferos.

A pesar de sus importantes recursos, la gran mayoría de los suelos se encuentran clasificados con fertilidades “bajas” o “muy bajas”. Las tierras fértiles se encuentran en la parte norte y en su mayoría tienen uso agrícola y pecuario. El 36,41% son suelos que se deberían destinar a la “conservación” y un 25,11% adicional son adecuados para la “producción y protección forestal”. A pesar de su riqueza, es posible afirmar que el departamento tiene dificultades productivas, agravadas por su deficiente infraestructura (Vergara, 2007, p. 10).

Según las subregiones administrativas descritas tenemos que la parte norte tiene vocación agrícola y de pastos, la parte centro vocación agrícola, el Pacífico vocación agroforestal

⁶⁴ A este río confluyen los ríos San Vicente, Moras, Ullucos, Negro y Negro de Narvárez, y las quebradas Tóez, Símbola, Salado, Gualcar, Gallo, Macana, Honda y Totumo.

⁶⁵ A la cual confluyen los ríos Cusiyaco, Cascabelito, Verdeyaco, Mandiyaco, Fragua, Cascabel, Curiaco y Pacayaco.

⁶⁶ Especie de fanerógama nativa (fibra vegetal) nativa de los Andes de Ecuador, Colombia y Venezuela utilizada para hacer cuerdas, sacos, entre otros.

prioritariamente, al igual que la parte oriente, la sur y el macizo. Oriente, macizo y bota son tierras que en su mayoría tienen poca vocación comercial y poca fertilidad para uso agrícola, tienen prioritariamente vocación de conservación. Un mapa nos remite también que un 49,15% del departamento ha sido intervenido por proyectos productivos y un 50,85% de sus tierras no lo han sido, presentando los primeros problemas de uso, pues son también las tierras con una alta densidad demográfica (*Ibíd.*).

El Cauca posee prácticamente todos los pisos térmicos, diversas fertilidades y vocaciones en el uso del suelo. Algunas tierras son más fértiles que otras. Es el caso del Norte del Cauca que cuenta con las tierras más fértiles, por lo general con usos agrícolas o pecuarios. Según el informe de economía regional que hace el CEER (Comité de Estudios Económicos Regionales) la mayoría de los municipios del departamento del Cauca presentan una mala utilización del suelo, específicamente en términos de su sobreutilización en el minifundio y subutilización en los latifundios. En estas zonas se concentran el 68% del total de propietarios, el 65% de los predios y el 54% de todas las hectáreas con conflictos de uso (Vergara, 2007, p. 6).

Las restricciones de fertilidad de suelos, de disponibilidad de infraestructura y la actual situación de conflicto, suponen retos importantes hacia el futuro de un departamento que mantiene gran parte de su población en las áreas rurales, y cuya situación de pobreza está atada en gran medida al sector agropecuario, en especial, cuando la fertilidad influye en el uso que se le da al suelo y, por esa vía, en los ingresos que se generan de él.

La riqueza de recursos, en los cuales se incluyen desde la importante riqueza hídrica, hasta los deseados minerales, han hecho que tanto el Cauca como el departamento de Nariño sean centro de importantes intereses económicos, la mayoría de los cuales estarán cimentados en las antiguas estructuras coloniales encomienda/hacienda; o bien en las incursiones de sectores económicos emparentados con la agroindustria, principalmente cañera para el Cauca, y los puertos secos. En contraste con su riqueza agroambiental, el Cauca se constituye en el segundo con una distribución más desigual de tierras:

De los cerca de 1,2 millones de habitantes del Cauca, 21% son indígenas y 22% son afrodescendientes, los cuales son propietarios del 30% de las tierras del departamento ... Se puede decir entonces, que la situación actual de los recursos del

Cauca está caracterizada por cuatro factores: concentración de la propiedad, concepción del uso según identidad étnica, conflicto debido al modo de explotación y la presión debido a la pobreza (Vergara, 2007, p. 6-7)

En la parte andina la actividad agropecuaria puede tener registros que pasan los miles de años. En la actualidad, se encuentra una mayoría del área que la constituye intervenida. Las tierras que se encuentran intensamente transformadas están dedicadas sobretodo a actividades agropecuarias, y también se destinan a pastos dedicadas a la actividad pecuaria para la producción de leche y carne (IGAC, 2002, cap. 4).

Más al sur, está el departamento de Nariño, constituido como tal en 1904, con una superficie 33.268 km² y una población de 1.498.234 habitantes, de acuerdo con los datos aportados en el último Censo (DANE 2005). Presenta una densidad poblacional de 45.03 hab/km², distribuidos en 64 municipios y 230 corregimientos (véase mapa 16). Está dividido en 62 municipios, en 26 de los cuales se encuentra población indígena y afrocolombianas: 14% son indígenas y 25,7% son afrocolombianos. Este un departamento que muestra una dinámica poblacional fluida por ser un territorio de frontera con el Ecuador. Vale la pena subrayar que las ciudades más importantes del departamento, Pasto e Ipiales, se sitúan por carretera más cerca de Quito (Ecuador) que de Cali. Nariño también es un departamento reconocido por su importante presencia indígena y campesina. Según el censo de 2005, el 10,8% de su población total era indígena y el 18,8% afrodescendiente (DANE, 2005). Los pueblos de los pastos, ingas y quillacingas se organizan territorialmente en resguardos situados en la parte andina del departamento.

El departamento de Nariño se encuentra atravesado por el río Patía de oriente a occidente y en él vierten sus aguas el río Mayo, el Juananbú, el río Guaítara y el río Pascual. Entre sus ríos de conforma un relieve que se caracteriza por grandes profundidades, estribaciones de diversas pendientes, mesetas y terrazas, marcadas por la historia de los ríos y altiplanos al borde de volcanes y nevados. Esto hace que sus alturas en la parte Andina, oscilen entre los 200 y 4.900 m.s.n.m. En su configuración andina, Nariño también se caracteriza por su aislamiento con respecto al resto de Colombia. Todavía se recuerdan historias del viaje de Pasto a Bogotá, pasando por caminos peligrosos de páramo, selvas, ríos caudalosos, con los cuales se ilustra esta constitución. Incluso, se prefería dar la vuelta por Barranquilla vía al mar y tomar el río Magdalena para llegar a Bogotá. Ser un departamento limítrofe con el

Ecuador, es otra de sus características importantes, con el cual comparte 250 km. Entre la provincia de El Carchi, cuyo límite geográfico es el río Chota al sur y Nariño, se generan características comunes en términos geográficos, culturales y económicos.

En el periodo 1990-2004, la economía nariñense presentó un mayor dinamismo que la economía colombiana en su conjunto, con una participación del PIB dentro del agregado nacional, que mostró un leve crecimiento, al pasar del 1,6% a 1,9%; al igual que el Cauca, que se incrementó de 1,5% a 1,7% (Viloria, 2007, p. 38). Su economía está basada en la producción agrícola, cuyo principal renglón es la papa, que se produce en los altiplanos de Pasto y Túquerres. Es de desatacar que 90.000 familias se dedican al cultivo del tubérculo. También, es visible una producción lechera que ha incrementado su participación del 25% al 45% del PIB entre 1980 y 1990, en detrimento de productos como el trigo y la cebada, que han disminuido en las últimas décadas. También se encuentran cultivos periódicos como el frijol y el maíz, así como el café de variedades especiales.

Es de resaltar que en Nariño predomina la propiedad minifundista, con cultivos transitorios como permanentes (con 211.000 hectáreas sembradas): 80% de sus predios son menores de 5 hectáreas y ocupan el 32,4% de la superficie total; mientras el 20% de los predios, representan el 67,6% de la superficie. Con el pasar del tiempo, la connotada vocación agrícola del departamento ha ido variando, en relación con los planes de desarrollo de los gobiernos departamentales. Entre 1990 y 2001 el sector agrícola de Nariño disminuyó de manera importante su área cultivada: de 152.000 a 90.000 hectáreas (con afectación del trigo y la cebada, sus cultivos históricos, e incrementando los cultivos ilícitos). En el 2005 el área cultivada se había aumentado a 180.000 ha., con cultivos destacados de papa, caña panelera, cacao, palma y maíz (*Ibíd.*, p. 50).

Se trata de departamentos que muestran niveles altos de desigualdad social. En el departamento del Cauca, resulta visible en su desigual reparto de tierras. También es posible, verlo en las cifras aportadas por el último censo, según las cuales el porcentaje de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas en el departamento del Cauca es del 24% en las cabeceras municipales y del 61,6% en el resto (promedian un índice de 46.62%, lo cual es 1.67 veces más alto con respecto al promedio nacional (DANE, 2005) y en Nariño

del 26 en cabeceras municipales y de 59% en el resto del departamento; con un promedio nacional del 19,6 en las cabeceras y 53,4 en el resto del país.⁶⁷

Varios de los imaginarios sociales del Suroccidente colombiano se encuentran relacionados con distintos momentos de movilización, como epicentro importante del conflicto armado, como despensa de alimentos de proveniencia agrícola, por la extracción de recursos y de marcada tradición “indígena–campesina”. En tal entramado de tensiones y conflictos, sus pobladores diversos se han nombrado y sus lugares de vida se han reivindicado como territorios. A continuación se exploran estas dinámicas en dos ejemplos que se consideran logran describir la complejidad de su configuración: la vida campesina en el Nudo y el Macizo y el norte del Cauca.

3.2.2. Al sur: la vida campesina, la explosión de la diversidad y los monocultivos

La cordillera andina con los nudos de Los Pastos y Almaguer, que hace de eje latitudinal y la estructuración panamazónica (Pacífico, Andes y Amazonas) que hace de eje longitudinal, constituyen dos sentidos articulados de configuración regional. Tales ejes de articulación, se exponen como “entramado cósmico espacio-temporal” por parte del pueblo de los Pastos y los renovados cabildos quillacingas que se refundan en los alrededores de la ciudad de Pasto. Se trata de la interrelación vital de diferentes potencialidades que es posible categorizar como intersección de factores ecogeográficos, bióticos, socioculturales, económicos y políticos. También se desdobra en el ámbito étnico-cultural como comunidad de la naturaleza, la comunidad humana y comunidad de los espíritus tutelares, como ha sido trabajado por el Instituto Andino de Artes Populares de la Universidad de Nariño. Una articulación también construida históricamente y cimentada con las tradiciones vivas de sus pueblos.

Pocos lugares evidencian la interacción conflictiva pero recíproca de diferentes fuerzas naturales y culturales que condicionan comportamientos humanos singulares en lo social, en lo económico, en lo político, y, por supuesto, en el procesamiento histórico.

⁶⁷ Información que corresponde con la “Población en hogares con NBI. Departamentos” (DANE, 2005)

Culturalmente ha sido el encuentro, cruce y crisol de diversas civilizaciones andinas, amazónicas y pacíficas, de antigua y nueva raigambre americana. De ahí la semántica de *Nudo de Huaca y de los Pastos o Macizo colombiano* con la cual se inició este recorrido por el Suroccidente.

En los nudos andinos y sus intersticios se fue haciendo un territorio que estuvo signado por la suerte colonial de diversos pueblos indígenas, por la vida en las villas fundadas por los españoles, las experiencias de las gentes venidas de la península sin más objetivo que tener parcelas para cultivar; así como de esclavizados provenientes de África, signados por la explotación de minas y por los servicios que prestaban en las casas de encomenderos. Con esta traza colonial se fueron armando un tejido de haciendas con linderos difusos, los resguardos indígenas enclavados en las montañas y unas dinámicas furtivas de “libres de todos los colores” en los guaicos y los valles cálidos del Patía; así como las continuas llegadas de la gente de Barbacoas por las rutas del Pacífico o bien de los provenientes del Valle de Sibundoy, quienes venían por las rutas de la Amazonía.

Un continuo de encomienda/ hacienda/ latifundio, entreverado con resguardos, minas y minifundios, fueron dando forma a mecanismos de posesión entre las cuencas y los guaicos; y las zonas de habitación de poblaciones esclavizadas y libres. Desde la Colonia, la vida de las gentes se fue urdiendo con una economía al ritmo de las haciendas, de parcelas campesinas y de las explotaciones mineras de río y socavón; así como de la encomienda indígena; mientras se expandía la agricultura comercial, como sucedió en el norte del Cauca.

En el siglo XX se daría paso a un proceso de industrialización tardío, que marcaría el rumbo de parques industriales y zonas francas, en medio de un notable proceso de urbanización en la zona conurbana de Cali. Su población estaría enmarcada en un proceso de proletarización, tanto a nivel urbano como rural, que daría paso a su vez a la formación de una clase media. Lo anterior, en medio de la continuidad de los procesos de resistencia indígena y campesina, particularmente concentrado, por un lado, en el eje constituido entre Popayán, Buga, Caloto, Corinto, Miranda y Florida; y por otro en Quilichao, Naya y el Pacífico, pasando por Buenos Aires, Timba y Jamundí.

La economía de la región estaría definida por: (1) un modelo agroexportador, enfrentado por los procesos de recuperación de haciendas en la cordillera; (2) el desarrollo de industrias intensivas en capital, parcialmente orientadas al mercado interno y en casi todos los casos, con una inversión local de sus utilidades precaria a nivel regional (Almario, 2005, p. 17).

Tales características marcan una región que enfrenta posibilidades y planificaciones de desarrollo endógeno y formas exógenas como los enclaves extractivistas y los polos de desarrollo; al mismo tiempo, se van redefiniendo lógicas de configuración regional, que utilizando la teoría del desarrollo regional podrían definirse como “perdedoras y ganadoras” que generan divisiones y desigualdades. Así, por ejemplo, las zonas de la parte plana, conocida como valle geográfico del río Cauca en el norte, han logrado incentivar una economía boyante que conjuga inversión de un empresariado que tiene como sede Cali, polo de desarrollo parte de la llamada cuadricefalia urbana colombiana junto con Bogotá, Medellín y Barranquilla, formas de explotación agroindustrial como la caña, inversión integral en infraestructura vial, servicios y cubrimiento institucional, un control territorial que en diversas ocasiones ha contado con apoyo de grupos paramilitares. Es la zona de la región en donde la vida campesina está más desdibujada, y existe un creciente y precario mundo proletario, sobre todo de descendientes de las antiguas fincas tradicionales afro, así como de desplazados económicos del pacífico colombiano (Taussig, 1990). Un mundo de corteros de caña, prestadoras de servicios, que caracterizan la liminalidad entre ser obrero y campesino, un tránsito entre “competencias y oportunidades”. En esta zona plana se encuentran dos municipios con una historia de movilización importante: Villarrica y Puerto Tejada (Aprile, 1994). Estos son municipios hechos por el mundo afro, su historia es la historia republicana de la liberación de esclavos. En las montañas de la cordillera están Corinto y Caloto, mundo de la hacienda y los resguardos indígenas; en la cordillera occidental Buenos Aires y Suárez, un mundo de colonización afro e indígena y entre ellos Santander de Quilichao, como una bisagra intercultural y geográfica.

El otro valle en el sur es el valle del Patía. En el mundo patiano corre la historia de resistencias de pueblos indígenas que fueron exterminados y desplazados, de un territorio inhóspito de refugio de esclavos cimarrones y sus palenques, de la ocupación de grandes

haciendas ganaderas de las familias payanesas. El Patía en la historia del suroccidente está marcado por gentes insumisas, guerrillas negras, asaltantes de caminos, un mundo caliente y malsano, con una economía precaria e inestable, una suerte de retaguardia (Zuluaga, 1984).

Las laderas, la media montaña, las cuencas y los altiplanos están habitadas por campesinos veredales y resguardos indígenas de cultivos transitorios como maíz y frijol, permanentes como el café y, en diversos lugares, de coca. La vida campesina florece en estos territorios, y aquí es donde la configuración regional y la lucha se entremezclan con gran vitalidad. Esta zona del Suroccidente corre longitudinalmente, siguiendo la orientación cordillerana andina entre el Nudo de los Pastos y el Macizo Colombiano. Allí se constituyen entornos comunitarios que están conformados por la espesa relación entre cuencas hidrográficas, la tensión orográfica producida por la trifurcación andina, las depresiones tectónicas de los valles y sus consecuentes detritos aluviales, desde las mesetas o las meándricas terrazas de los guaicos. La configuración regional pasa por las prácticas y enunciados relacionados con la vida a través de la presencia de seres naturales, humanos y espirituales que la hacen y la van haciendo (Mamian, 2005). Seres que se conjugan entre las neblinas, los páramos y las lluvias (Dagua et. al., 1998), seres que habitan y nombran lagunas, cerros, peñascos (Zambrano, 1993). Seres que se nombran distantes y discontinuos entre poblados, sementeras y montes. La interpelación de esos seres, de sus articulaciones y conflictos configuran los territorios que se hacen “en veces” territorio. Dicha singularidad es producto de articulaciones, confluencias, encuentros y conflictos, contradicciones, violencias, etc. hecho que se manifiesta en expresiones como “ser aparentes”⁶⁸, y en fenómenos como las vírgenes remanecidas⁶⁹ y sus combates (como entre la virgen de las Lajas y la virgen de Párraga⁷⁰), o el encuentro entre la lluvia del guaico y el páramo de las alturas (Dagua et. al.,

⁶⁸ Expresión popular del Suroccidente que refiere a la habilidad para desarrollar con propiedad alguna acción o poseer algún valor.

⁶⁹ Las vírgenes remanecidas aluden al “sentido de pertenecer al territorio, de fundarse en un sitio, de organizarse un espacio en el Macizo colombiano, así como los relatos de las apariciones marcan un tiempo histórico, el contacto y el inicio de otra época en la historia de estas comunidades” (Zambrano, 1993, capítulo 3).

⁷⁰ Así lo ha manifestado en conversaciones múltiples el director del Instituto Andino de Artes Populares de la Universidad de Nariño, Dumer Mamián, en su trayectoria de investigación y solidaridad en Nariño.

1998), o entre vecinos de veredas y corregimientos o asambleas, encuentros de organizaciones y pueblos (Novoa, 2009).

Las dinámicas productivas de las comunidades están relacionadas sobre todo por la relación de la vida campesina soportada por redes familiares que tejen familias nucleares y extensiones de compadres, vecinos, ayudas mutuas, mingas⁷¹ hasta constitución de resguardos indígenas⁷² y formas de aparcería y peonaje. La vida campesina se sostiene en sementeras de poca extensión, su característica es el llamado minifundio. Incluso allí donde la propiedad es comunitaria, como en los resguardos indígenas, la posesión de la tierra hace que el minifundio sea la Unidad Productiva Familiar. Según la caracterización de la economía campesina en Colombia, la presencia de unidades campesinas en el Cauca es del 96% y en Nariño, del 94%; de las cuales, el 95% de la superficie se dedica a cultivos transitorios, el 65% con cultivos permanentes, el 29% pastos, el 32% bosques y el 16% pecuarios”. (ILSA, s.a., p. 95).

Dadas las características climáticas y geográficas, los cultivos son de distintas “alturas”: de “arriba y abajo”, de lo “caliente y lo frío”, principio productivo extendido y conocido en los andes como “microverticalidad”, cuestión productiva que puede datarse desde antes de la invasión castellana.⁷³ A dicha microverticalidad está relacionada la posibilidad de que haya suelos productivos en un clima estable a lo largo de los años, definidos por épocas de lluvia y de “verano” o de “sol”.

La vida campesina está relacionada con una frugal vida de intercambio, más recientemente de relaciones comerciales. Así por ejemplo, entre la altiplanicie de Túquerres e Ipiales en el departamento de Nariño -territorio poblado principalmente por indígenas Pastos-, y los guaicos o zonas templadas atravesadas por el río Guáitara -pobladas principalmente por campesinos veredales-, se han establecido históricamente mecanismos sociales para

⁷¹ Minga es la palabra con la cual se denota una forma de trabajo comunitario hacia un fin común desde tiempos prehispánicos.

⁷² Vuelvo a recordar en este punto que los resguardo es una institución de división espacial, nacida en la Colonia, que le aseguraba tierra colectiva a determinadas comunidades indígenas. En la actualidad es la base de las entidades territoriales indígenas (reconocidas constitucionalmente), desde la cual reivindican su autonomía.

⁷³ La “microverticalidad” ha sido ampliamente documentada desde su actualidad y profundidad histórica en los Andes por John Murra (véase por ejemplo: Murra, 1975)

garantizar dicho intercambio. A lo largo del tiempo, la vida comunitaria estableció las visitas de los “amigos”, como un hecho de singular importancia: desde que iniciaban la “bajada los indígenas anunciaban sus productos: cebolla, papa, quesos, y la gente se acercaba para cambiarlos por panela, frijol, plátano, yuca” -sostiene un campesino de la vereda El Cid de Guaitarilla, Nariño⁷⁴. Hoy, en diversos lugares del Suroccidente se siguen promoviendo dichos intercambios y son parte de una memoria que permite recrear prácticas y formas de relación comunitaria.

Por su parte, las actividades comerciales se sostienen alrededor de las plazas de los cascos urbanos de los municipios que en distintos días de la semana se ven abarrotadas de productos provenientes de distintas veredas y otros de “afuera” que, como sostienen los habitantes y visitantes “en los últimos años van creciendo”. Por ejemplo, la vida comunitaria en el municipio de Silvia, Cauca, se estructura alrededor del día martes, cuando llegan de las diferentes zonas del resguardo de Guambía y otras partes de la región las gentes con sus productos. A esto se suma la actividad comercial definida por cada producto en cada fecha, así por ejemplo: el frijol abunda en enero y junio, el maíz en marzo y octubre o la arveja en julio y el café en febrero y marzo. Este calendario de abundancia regula y afirma la vida campesina.

En los últimos años se han presentado cambios notables en el uso y la propiedad del suelo en la región, en buena medida, por las transacciones en el mercado de tierras entre “ganadores” y “perdedores”, estos últimos generalmente campesinos. Pero también, por procesos de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005), que en el país se han desarrollado por la aplicación de formas de coacción y de violencia sobre las tierras, de manera más notable en la parte de ladera y en la zona del Pacífico y la Amazonía. Su persistencia ha hecho de la región un “laboratorio del conflicto social”: no sólo su economía se ha visto transformada, sino el conjunto de la sociedad, con manifestaciones dominadas por la violencia y por el conflicto armado entre diversos factores; y al mismo tiempo, por formas de reivindicación y participación “sociales”.

⁷⁴ Expresión común de zonas campesinas e indígenas, para referirse a este tipo de mecanismos sociales de intercambio (Guaitarilla, marzo de 2011).

Finalmente, en los límites del Suroccidente se encuentra el corredor y piedemonte hacia el pacífico al occidente, y el piedemonte amazónico hacia el oriente. Las dos son zonas selváticas, la primera habitada por poblaciones negras, algunas de las cuales se han organizado en concejos comunitarios y diversos caseríos y fincas de colonos donde hoy las plantaciones de coca sobresalen. El segundo hacia el Amazonas está habitado por poblaciones indígenas y frentes de colonización en proceso. El tránsito transversal desde el Pacífico hacia el Amazonas pasando por los Andes conforma esa singularidad regional que ha sido denominada como Panamazonía (Pacífico, Andes, Amazonía). La reivindicación de esta singularidad regional tiene varias acepciones. Una física: en el Suroccidente colombiano cerca de la frontera con el Ecuador la distancia entre el océano Pacífico y la selva amazónica no tiene más de 120 Km, distancia más corta entre estos dos mundos naturales y culturales, lo que permitió sobre todo en épocas prehispánicas un nutrido tránsito de poblaciones, saberes, tecnologías. Dicha transversalidad se fue desvaneciendo en el transcurso de la vida colonial y republicana más interesada en la longitudinalidad andina y en las cuencas y sus valles interiores, sobre todo por la lógica extractivista del oro, así como en la producción agrícola, sobre todo de los altiplanos que se centraba en mercados ubicados en las fundaciones españolas.

Desde hace tres décadas se ha recalcado nuevamente la importancia, por un lado, de las relaciones entre pueblos establecidas por las movilizaciones indígenas; por otra parte, por las conexiones viales que trazan nuevas carreteras para sacar productos de la Amazonía al Pacífico, y por los corredores de desplazamiento del cultivo y tráfico de coca que sigue dicha orientación. Se destaca que la panamazonía viene siendo centro de atención para ordenamientos territoriales que no tienen como patrón el mundo andino, lo que antropólogos como Jaime Arocha han nombrado como andinocentrismo.

Es posible advertir la configuración de formas diversas de habitar el Suroccidente, referidas a constituciones y reivindicaciones particulares de tipo étnico (como en el caso de indígenas y comunidades negras); en medio de relaciones y diferenciaciones con poblaciones que se comprenden a sí mismas como mestizas. Sobre unas y otras se despliegan una serie de estudios que intentan describir los caracteres específicos de cada una de ellas. Sin embargo, en términos de las formas de producción predomina la

campesina. Es por esto pertinente revisar las características de este tipo de vida social, con sus diversidades y comunes; así como su reproducción, que implica el uso y fertilidad de los suelos, así como la capacidad productiva de los mismos, a fin de establecer las condiciones bajo las cuales las poblaciones producen sus condiciones básicas de existencia, pasando por sus usos territoriales, sentidos culturales y formas de organización y legitimidad.

3.2.3. El norte del Cauca como límite regional: modelo de desarrollo regional y procesos de modernización en el siglo XX

Actualmente, el caso del valle geográfico del Cauca es representativo de la constitución y consolidación de un modelo de desarrollo regional considerado exitoso por el gobierno y el empresariado nacional, dados los altos márgenes de riqueza producida y la sostenibilidad alcanzada en el tiempo. Este modelo tiene su principal asiento en la agroindustria azucarera en los últimos sesenta años. Sin embargo vale preguntarse: ¿qué factores influyeron en ese proceso?, ¿cómo logra consolidarse en el norte del Cauca un modelo de desarrollo proveniente del exterior? y ¿cómo han vivido, asumido, adoptado y confrontado los pobladores locales dicho modelo?

Si bien el cultivo de caña de azúcar ha estado presente desde la Colonia, cuando las grandes haciendas que abastecían las minas producían panela, melaza y aguardiente, es sólo hasta comienzos del siglo XX que la producción de caña de azúcar comienza a incrementarse, gracias a la convergencia de varios factores que permitieron el desarrollo y posterior consolidación de la agroindustria: condiciones de carácter físico del valle del río Cauca y su ubicación estratégica, condiciones históricas ligadas a la propiedad de la tierra, al tipo de población, a la formas de producción; coyunturas socio-políticas que favorecieron la implementación de proyectos de modernización, los pesos específicos de los poderes político y económico regional, entre otras variables, ponen en evidencia la complejidad de los procesos que convergen en el éxito de este proyecto económico y en el afianzamiento del modelo de desarrollo regional que se encarna en la producción industrial. Vanegas y

Rojas (2011) identifican al menos seis factores que han permitido la sostenibilidad del modelo a pesar del enorme costo de desigualdad sobre el que se asienta.

Sin duda las condiciones físicas y geográficas del valle del río Cauca son un primer factor a tener en cuenta: a diferencia de otras regiones en el mundo, el cultivo de caña aquí es permanente durante todo del año gracias a sus condiciones climáticas y a su irrigación por varios ríos tributarios. Teniendo en cuenta que entre 1920 y 1930 ya se dan las condiciones internas de infraestructura básica para la configuración de la agroindustria (Rojas, 1985), principalmente con la finalización en 1915 del ferrocarril entre Cali y Popayán y la posterior construcción de la autopista Panamericana en la década del sesenta, la conectividad y el transporte estaban garantizados. Los desbordamientos del Cauca que anegaban el valle fueron controlados por los ingenios a través de jarillones y, posteriormente, con la construcción de la represa de la Salvajina a mediados de la década del ochenta, se redujo el cauce y los riesgos de inundación en la zona plana. Por su parte, la cercanía con el puerto de Buenaventura ha sido clave para reducir los costos de salida del azúcar hacia el exterior.

Desde finales de la década de 1920 las recomendaciones de la Misión Chardon (misión de consultoría económica norteamericana) posicionan el cultivo de caña de azúcar en el valle del Cauca como el producto con mayor potencial económico para la región. A pesar de que el cultivo en el norte del Cauca comenzó su proceso de tecnificación desde los años treinta, en trapiches como Arados y Córcega, es con la conversión de estos últimos en ingenios dedicados exclusivamente a la producción agrícola comercial que se transforma formal y rápidamente la vocación del suelo en la zona plana. Treinta años más tarde, por la coyuntura propiciada por la Revolución cubana en 1959, el mercado norteamericano se abre al azúcar colombiana. Los principales ingenios se ven abocados a incrementar la producción ampliando sus áreas de cultivo, lo que de acuerdo con algunos autores se consigue a través de diferentes estrategias de compra y arrendamiento de tierras de medianos y pequeños propietarios. A partir de los años setenta el alza del precio internacional del azúcar intensificará el proceso de ampliación de los ingenios. Esta presión sobre las pequeñas y medianas propiedades generará un rápido cambio en la producción agrícola, donde se reemplazarán cultivos de algodón, soya, maíz y millo, y la ganadería

bovina, equina y porcina por el cultivo de caña⁷⁵. Las modalidades de ampliación del cultivo de caña, sus causas y consecuencias, serán objeto de distintas teorizaciones por parte de los pobladores locales, hasta aparecer como la consolidación de la que llaman: “mancha verde”.

A través de la Revolución Verde, se consolidan procesos de modernización del sector, se impulsa la tecnificación de la producción agrícola, se crea el modelo de crédito a través de la Caja de Crédito Agrario, entre otras. Aclarando que políticas como la Revolución Verde también estuvieron orientadas a confrontar los procesos organizativos campesinos, que iban ganando terreno en diversas regiones del país a través de la ANUC y otras instancias de movilización social de los sectores pobres.

En la rápida consolidación de la agroindustria de la caña⁷⁶ sin duda intervinieron factores de orden económico-político tanto como factores de carácter histórico que bien vale la pena recordar. En el norte del Cauca la estructura desigual de propiedad de la tierra ha sido una constante histórica al menos desde el siglo XVIII. Las haciendas esclavistas que prosperaron durante la Colonia dieron paso, desde finales del XIX, a grandes propiedades dedicadas a la producción agrícola y a la ganadería, alternadas con pequeñas parcelas campesinas de gente negra, mulata y de todos los colores, descendientes de los antiguos esclavos que habitaban las haciendas. Esa estructura de grandes propiedades va a mantenerse como una constante a lo largo del siglo XX. Se va constituyendo una estructura desigual que facilitará la rápida cooptación de las pequeñas propiedades a través de la compra y el arriendo de la tierra, pero también a través de modalidades más complejas y de largo aliento de despojo del campesinado negro que poco a poco va siendo cercado por la caña. La absorción de las pequeñas propiedades y la consecuente concentración de la propiedad de la tierra para el cultivo responden a un modelo que hace incompatible la producción campesina con la economía de plantación (Rojas, 1985, p. 32).

⁷⁵ De acuerdo con la información de la misma CVC (1994, 1996), entre 1957 y 1986 hubo una reducción del 66% de los bosques del Valle (actualmente solo existe el 3% de la cobertura de la vegetación original, que corresponde a bosque seco tropical).

⁷⁶ De acuerdo con Mondragón citado por Vanegas y Rojas (2012), entre 1950 y 1974 la producción de azúcar aumenta un 275% (Vanegas y Rojas, 2012:19).

Pero además, las actividades económicas ligadas a la producción de azúcar han tenido a su favor el acceso permanente a mano de obra barata, sobretodo de campesinos sin tierra, negros y mestizos locales y otros que han ido llegando en distintas oleadas desde la costa pacífica y sur del país en busca de trabajo (Hurtado, 2004). En buena medida, la sostenibilidad de la agroindustria de la caña se debe por un lado a las estrategias utilizadas por el empresariado azucarero (sobre todo a partir de los años ochenta) para controlar el conflicto laboral – control ejercido a partir de la vigilancia de los procesos de vinculación laboral de los trabajadores del sector y de las iniciativas de sindicalización al interior de los ingenios. A través de estrategias de contratación indirecta, como las Cooperativas de Trabajo Asociado, los ingenios obtienen condiciones de contratación favorables a ellos. En las últimas décadas, bajo el discurso de la “tecnificación inminente” la industria azucarera se ha permitido reducir al mínimo las responsabilidades patronales y las políticas de tercerización laboral han dejado ver sus consecuencias, como lo demuestran investigaciones como las de Mario Alejandro Pérez y Paula Álvarez (Pérez et al., 2009) sobre la deuda laboral del sector cañicultor. De acuerdo con estos autores para 2008 el valor que los corteros transfirieron a los cañicultores, es decir, el monto ahorrado por los últimos a través de la contratación por medio de CTAs, y en comparación con lo que deberían haber pagado con la contratación directa, fue de \$46 mil millones de pesos (*Ibíd.*, p. 53).

Por otro lado, la persecución judicial a los sindicatos y la conformación de sindicatos patronales han sido dos estrategias de los industriales del sector para controlar los conflictos generados con los trabajadores. Frente a las demandas de estos últimos por la reivindicación de derechos salariales y prestaciones sociales, los ingenios han tenido respuestas diferentes. El último caso fue el paro de corteros de caña en 2008, donde se consiguió la contratación directa en algunos ingenios, mientras que en otros, en particular los que están en el departamento del Cauca (La Cabaña e Incauca), los empleados que participaron en la huelga fueron despedidos. Sin duda, a lo largo de los últimos treinta años ninguna de las estrategias de control sobre la mano de obra hubiera sido posible sin la permisividad de los diferentes gobiernos regionales y nacionales con las políticas laborales de las CTAs y los ingenios. En este sentido, las formas de trabajo establecidas por la economía del azúcar ponen sobre la mesa la pregunta por el carácter racializado de las

relaciones de producción que han hecho posible la consolidación del modelo de desarrollo empresarial en el norte del Cauca.

Sin duda, el papel del empresariado caleño ha sido central en este proceso. La producción industrial de azúcar dio lugar a la conformación de un gremio cohesionado con alta injerencia en la política económica nacional y la planeación del desarrollo regional. Un ejemplo en este sentido es la creación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, entidad fundada en 1954 por un grupo de empresarios e industriales, que se constituyó en la herramienta institucional para agenciar el plan de desarrollo económico regional, formulado en 1953 por la recién creada Comisión de Planeación Departamental (Escobar, 1998, p. 174). Amparada por el gremio empresarial y financiada por el Banco Mundial, la CVC tuvo a su cargo cumplir con las recomendaciones de inversión en infraestructura establecidas por la Misión Lilienthal, consultoría norteamericana en temas de planificación económica. Desde esta perspectiva, la primera fase de gestión de la CVC se orientó a la construcción de las hidroeléctricas de Anchicayá, Calima y Salvajina. Es así como se retoma a mediados de los setenta el proyecto de canalización y desviación del Cauca y la construcción de la represa en la parte alta de Suárez, Buenos Aires y Morales. La construcción de esta hidroeléctrica en los ochenta no sólo tuvo como objetivo la generación de energía, también el control de las inundaciones que afectaban la zona plana dedicada al cultivo de caña, contribuyendo así a la productividad de los ingenios.

Adicionalmente, el peso del empresariado vallecaucano en la política regional y sobretodo nacional le ha permitido configurar una legislación favorable a través de la cual se ha hecho posible la sostenibilidad del modelo de desarrollo empresarial para la región, a través de importantes incentivos directos e indirectos al sector, así como la reciente producción de combustibles vegetales, la producción industrial a través de parques y zonas francas (conocida como Ley Páez) y la conformación de *clusters* (Pérez y Álvarez, 2009). De acuerdo con Silva Colmenares en 1977 de los veinte ingenios existentes, doce pertenecían a cuatro familias que tenían control del 76,3% del mercado azucarero: Caicedo (30%), Eder (24%), Cabal (17,8%) y Garcés (4,5%) (Silva, 1977). Hoy en día es uno de los principales sectores económicos del país, con más de 100 empresas relacionadas, en renglones como la

energía, papel, sucroquímica, azúcar, mieles, abonos orgánicos, alimentos, bebidas, alcoholes, licores y otras.

Como lo demuestran Pérez y Álvarez (2009), la conversión reciente del cultivo de caña para la producción de etanol (combustible vegetal) se ha favorecido a través de subsidios e incentivos económicos diversos por parte del gobierno nacional, al menos desde el año 2000. Entre otros, se mencionan la Ley 693 de 2001 que impone el uso de un porcentaje de alcohol carburante mezclado con la gasolina para los vehículos que circulan en las ciudades. Así mismo históricamente el sector se ha beneficiado de precios internos superiores del azúcar, con respecto a los del mercado internacional, lo que constituye un subsidio cubierto por los mismos consumidores. Pero además, el Estado también está subsidiando la producción de etanol a través de un precio de sustentación interno superior al internacional y por medio de la exoneración de impuestos establecida en la Ley 788 de 2002 (*Ibíd.*, p. 22).

A partir de la década del noventa, este modelo de desarrollo regional cobra un nuevo impulso con la implementación de la Ley 218 de 1995 o Ley Páez. Como mecanismo de reactivación económica regional después de la devastación causada por el desbordamiento del río Páez⁷⁷ en 1994, esta ley establece la conformación de grandes parques industriales en la zona plana del norte del departamento del Cauca. A cambio de contratar mano de obra local, las industrias allí asentadas reciben importantes exenciones tributarias a la vez que se espera que generen recursos para los municipios donde están instaladas. Se construyen así grandes parques industriales que acogen a empresas como Familia, Propal, Peldar, etc. Quince años después de la puesta en funcionamiento de los parques industriales y de aproximadamente siete zonas francas, los resultados no parecen ser los esperados. Pese a que la ley propuso incentivar la contratación de mano de obra local, la supuesta ausencia de trabajadores calificados en la zona hace que los principales cargos técnicos y medios (y, por supuesto, altos) de las empresas, sean ocupados por empleados provenientes de Cali. Aún así, el estudio de Julio Cesar Alonso y Ana María Lotero (2008) consideran que, con respecto al resto de municipios del departamento, en el norte del Cauca los salarios se han

⁷⁷ Hay que tener en cuenta sin embargo que la catástrofe del río Páez en Belalcazar tiene lugar del otro lado de la cordillera a más de 500 kilómetros de distancia de donde se van crear los parques industriales.

democratizado. A lo que se añade la afirmación de que la implementación de la Ley Páez no ha tenido ningún tipo de costo ambiental.⁷⁸

No obstante, la percepción del impacto de este modelo entre los pobladores es muy distinta. Los habitantes de los municipios de la zona plana, en particular aquellos ubicados directamente en la zona de influencia de los parques, como Guachené, consideran que el trabajo generado por las empresas asentadas allí como Familia y Propal, siempre ha sido escaso. Así mismo, se considera que sólo se tiene en cuenta la gente de la zona para trabajos no calificados de bajo ingreso y para empleos temporales que no superan los tres meses. Otras investigaciones han permitido establecer que más que una suerte de “tendencia a la igualdad en los salarios promedio”, lo que se ha generado de la mano con la Ley Páez es la estandarización de salarios bajos, llegando a estar en gran medida por debajo del salario mínimo mensual. De manera que lo que se fortalece evidentemente es un empleo temporal, precario, subcontratado y racializado en el caso de las comunidades negras y particularmente de las mujeres de la zona plana. Y en el caso de la zona montañosa y de comunidades indígenas, negras y mestizas, por la tendencia al debilitamiento de la economía campesina que subsiste (Urrea, 2010). Por su parte, los beneficios tributarios esperados por parte de los municipios han sido mínimos, comparados no sólo con las expectativas generadas sino con las inversiones de adecuación hechas por éstos en los primeros diez años de vigencia de la Ley (Vanegas y Rojas, 2011, p. 24) Adicionalmente, el impacto ambiental ha sido notorio sobre todo con respecto al uso de agua, y la desviación, aprovechamiento y contaminación de ríos y acequias por parte de los parques y los ingenios. De manera que, mientras los costos de contaminación y del uso de recursos se socializan, los beneficios derivados del proceso productivo son privatizados. De acuerdo con la investigación de Pérez y Álvarez la deuda ambiental del sector con la sociedad (teniendo en cuenta tres tipos de externalidades generadas: el uso de agua, la contaminación de agua y la contaminación del aire por quemas de caña) podría estimarse actualmente en alrededor de 20 millones de dólares.

⁷⁸ Esta afirmación, según los autores, se hace sobre la base de modelos estadísticos estimados a partir de los datos proporcionados por la CVC sobre contaminación en los ríos Cauca y Palo. Sin embargo, llama la atención que varias estaciones de monitoreo contempladas no están en la zona de influencia directa de los parques industriales y que las que sí lo están (estación río Palo) demuestren niveles de contaminación por encima de los permitidos, como el mismo estudio lo afirma.

Desde esta perspectiva queda claro que el modelo de producción de riqueza generado por la agroindustria azucarera y diversificado a través de la producción industrial de alcohol carburante, papel, alimentos, químicos, etc. ha sido posible con un enorme costo de desigualdad y exclusión, que ha recaído principalmente sobre los pobladores locales y aquellos que han llegado en las últimas décadas en busca de trabajo. Ahora bien, un reciente recurso puesto en marcha por el empresariado para fortalecer la sostenibilidad del modelo de desarrollo regional es la responsabilidad social empresarial RSE. Como lo señalan Vanegas y Rojas, la introducción del tercer sector al modelo de desarrollo regional se fundamenta en la idea de una redistribución de las ganancias de las empresas y de sus beneficios entre las poblaciones locales. La RSE agenciada desde ONG, fundaciones, corporaciones y otras figuras se ha constituido en épocas recientes en un modelo de intervención social de carácter privado, que busca propiciar la llegada de nuevas empresas, legitimar las ya existentes y promover a pequeña escala el modelo de desarrollo empresarial entre la población local, a través de diferentes tipos de proyectos y capacitaciones dirigidos prioritariamente a la empresarización del campesinado y la generación de competitividad en la producción.

Si bien, los resultados de la RSE pueden ser medidos en diferentes ángulos y en distintas escalas, lo cierto es que se trata de un modelo que no ejerce ningún tipo de cuestionamiento al modelo de generación de riqueza establecido, a pesar de los costos históricos ambientales y de exclusión social. De hecho, nos quedan algunas preguntas sobre los indicadores que se han planteado desde los gobiernos y la academia para medir los impactos buscados por las políticas de RSE: ¿de qué manera los referentes que se utilizan, tales como los Objetivos del Milenio, permiten evidenciar dicha búsqueda de redistribución de las ganancias entre las poblaciones intervenidas y las empresas fortalecidas?, y finalmente, ¿cómo se acuerdan y ejecutan los procesos de intervención de la mano con las comunidades? Aunque son preguntas que no abordamos en este documento, las consideramos significativas en un posible engranaje descriptivo y explicativo de lo que son las ideas de modernización en clave de políticas públicas, la representación de los pobladores locales, y los procesos que la materializan y así mismo de los tipos de relaciones tejidas con la empresa privada.

Suárez hace parte de los municipios de la vertiente oriental de la cordillera occidental. Aunque desde la colonia hay evidencias de poblamiento negro dedicado a la agricultura y a la minería artesanal, es sólo hasta el siglo XIX que se inicia un proceso progresivo de colonización campesina de todos los colores, proveniente de la zona plana y de la vertiente de la cordillera central. Estas migraciones se intensifican gracias a procesos de modernización como la construcción del ferrocarril de Cali a Popayán en la década de 1920 y la minería desde principios del siglo XX. Posteriores proyectos de modernización como la construcción de la represa de la Salvajina y la intensificación de la explotación minera, así como el conflicto armado, incidirán en la configuración demográfica de esta zona donde actualmente conviven poblaciones afrodescendientes, indígenas y mestizas.

Al igual que Guachené, Suárez es un municipio reciente del norte del Cauca. Hace parte de los municipios de la parte alta ubicados en la vertiente de la cordillera occidental. A pesar de ser hasta 1989 un corregimiento de Buenos Aires, Suárez como poblado nace de la mano de un proyecto de modernización. La llegada del ferrocarril que conecta a Cali con Popayán en 1920 lleva a la inauguración de la estación Suárez, realizada por el presidente de la época Marco Fidel Suárez, y a la fundación del corregimiento con el mismo nombre. El lugar de este relato en la memoria de los pobladores nos permite identificar la eficacia que tienen los proyectos de modernización en la reproducción de hechos considerados “fundacionales” para la comunidad. De manera que, más que un asunto administrativo, lo que da sentido de fundación al municipio es la conexión a través de las vías de comunicación con otras partes del país, es decir el ferrocarril, el cual no sólo movilizaría a la gente, también los recursos valiosos de la zona y posteriormente los intereses privados de terceros extranjeros sobre éstos. Así la importancia del hecho no es como tal la promulgación de la fundación sino los efectos que un proyecto de modernización, como germen inicial, tuvo en la consolidación de un orden social conectado con otros espacios de la región y el país. Es así como los proyectos de infraestructura cobran un papel relevante para la conformación de una idea de modernización y desarrollo más allá de sus efectos a mediano y largo plazo.

Esta zona se ha caracterizado históricamente como zona minera. Desde los primeros asentamientos de gente negra durante la colonia, la minería de aluvión ha sido junto con la

agricultura una de las principales actividades de los pobladores de la zona. Tradicionalmente, el mazamorreo en las orillas del Cauca y sus afluentes se consideraba una manera de complementar la producción familiar dedicada a la agricultura. De igual manera, aunque en menor proporción, los pobladores locales se dedicaban a la minería de filón o de socavón. Esta actividad, sin embargo, fue más reciente y, de acuerdo con algunos viejos, comenzó con la explotación de las minas de Tamboral, la Turbina y Paso Bobo donde se trabajaba con molinos rústicos.

Con la construcción del ferrocarril, en la década del veinte, esta zona del país empezó a articularse a las dinámicas nacionales e internacionales. La llegada de extranjeros interesados en explotar oro incentivó desde fechas muy tempranas la aparición de empresas mineras dedicadas a la minería de filón. Ese es el caso, entre otros, de los hermanos Visoo González, unos de los primeros en solicitar formalmente permisos de explotación en la zona y también, unos de los primeros en apropiarse de una buena franja de tierras y cobrarle arriendo a los campesinos que cultivaban las fincas. Pero es sólo hasta la década del treinta que la explotación minera alcanza una dimensión importante, con la llegada en 1936 de la empresa Asnazú Gold Dredging Limited a explotar las reservas auríferas del Cauca. La compañía de origen canadiense, ubicó dos dragas entre La Balsa y el puente del ferrocarril antes de llegar a Suárez, extrayendo aproximadamente 2.400 toneladas de oro durante los casi treinta años que estuvo en el país. El asentamiento de la multinacional se recuerda como una época próspera, en que no solo se hizo la carretera que comunica a Suárez con Timba, sino que también se construyeron muchas edificaciones y se intensificó el comercio, gracias a la llegada de los “ingenieros”. Una vez la empresa decidió su retiro en 1962, varias de las construcciones fueron donadas a las veredas y corregimientos. Especial mención recibe la pequeña hidroeléctrica construida en el corregimiento de Asnazú y las edificaciones donde actualmente funciona el colegio de este corregimiento. Pero también queda en la memoria cómo en esta época a varios de los campesinos y habitantes de las riberas del río, que no deseaban vender sus tierras, les eran destruidos los cultivos de café, cacao, plátano y banano. Al parecer de esta forma unas cuantas personas lograron apropiarse de al menos 26 kilómetros de tierra. Estos procesos llevaron finalmente a que muchos pobladores locales se desplazaran a zonas más altas en la montaña, espacio

que albergó a oleadas de migrantes que comenzaban a resentir la concentración de la propiedad de la tierra en la zona plana.

Con la presencia de los trabajadores e ingenieros de la empresa se incentivó el comercio en la zona. Además, la apertura de la carretera permitía el abastecimiento de graneros y tiendas que antes debían usar mulas. Los pobladores de Asnazú recuerdan esta época (años cuarenta) como muy próspera, a pesar de los hechos de violencia registrados sobre todo después del 9 de abril que, entre otros, dieron lugar a la inauguración del cementerio. En esa misma década algunos de los “gringos” que trabajaban en las dragas iniciaron sus propias empresas de minería de filón, contratando mano de obra local. Entre otros se recuerda a los hermanos Visoo y a Mister Bonn, unos de los ingenieros gringos que decidieron montar un negocio propio. No es raro entonces que desde fechas tempranas del siglo esta zona haya recibido oleadas de migrantes en busca de tierras y oportunidades en la minería.

Así, hasta los años sesenta, la mayoría de la población local se dedicaba a la agricultura, sobretodo de café, cacao y plátano, complementada con la minería de aluvión y en algunos casos con la minería de socavón, que empezó a ser más productiva con la introducción de molinos Pelton y el uso de dinamita. Es así como a finales de la década del setenta, los mineros de Buenos Aires y Suárez constituyen la Cooperativa de Mineros y consiguen los permisos oficiales para la explotación del mineral y la legalización del uso de explosivos. Es justamente en los años setenta que las cosas empiezan a cambiar. La antigua idea de represar el Cauca es retomada por la CVC que, una vez hechos los estudios, empieza la construcción de la Salvajina en 1977. Hasta ese entonces los pobladores de Suárez (al igual que otros corregimientos como Honduras y Asnazú) habían vivido un reordenamiento en las formas de producción y de trabajo, así como de la relación con la institucionalidad estatal, gracias a las transformaciones incentivadas por los proyectos de modernización y desarrollo agenciados por la empresa privada nacional y extranjera. Pero fue la construcción de la Salvajina el proyecto de modernización que tuvo más impacto para Suárez y Buenos Aires, y la que nos llevará a continuación a comprender un modelo económico, cultural y político regional, fundamentado en buena medida a partir de la consolidación del modelo de desarrollo agenciado por la CVC.

Un primer asunto en esta dirección tiene que ver con el proceso de elaboración y ejecución de la obra. El proyecto de Salvajina tenía como propósito la desviación del río Cauca y su represamiento, la regulación de su caudal y la construcción de una hidroeléctrica que alimentara el departamento del Valle. Aunque los estudios iniciaron en la década de 1950 sólo se dio inicio a las obras a finales de los setenta, cuando comienza la adecuación de vías. Para los pobladores, la expectativa de progreso que se generó en la época contrasta con lo que sucedería después. Actualmente, la mayoría insiste en que durante este tiempo el proyecto nunca fue socializado o consultado con las comunidades afectadas. Asuntos como la ubicación y los medios para construir la represa fueron decididos unilateralmente por la CVC. La primera fase de la construcción se prolongó hasta 1981. Fue para ese entonces que la CVC empezó a comprar fincas pequeñas y medianas en los lugares donde se planeaban construir sedes y vías, y luego en los terrenos que se iban a inundar. La compra de tierras se hizo a precios más bajos de su valor real. Los pobladores recuerdan este hecho como una estrategia ventajosa por parte de la Corporación, que presionaba a vender a campesinos que no contaban ni con recursos ni con competencias para adelantar peleas jurídicas con la institución. Para finales de los setentas en el área del embalse habían más o menos seiscientas parcelas, que oscilaban entre tres y cincuenta hectáreas del lado de Suárez, trescientas cincuenta del lado de Buenos Aires, y alrededor de doscientas setenta por el lado de Morales. Por su parte, la negociación de la CVC con la Cooperativa de Mineros fue mejor recibida, pues además de una indemnización a cada minero, se acordó la reubicación de las minas de Paso Bobo, que serían inundadas, a El Carmen, en la vereda de La Toma. Años después este frente mostró su poco potencial, pero la represa ya estaba llena.

El inicio de las obras tuvo un efecto no calculado. Las retroexcavadoras comenzaron a remover tierra para la construcción de las vías y de edificaciones de máquinas y, con ella, empezaron a aparecer filones y vetas por todas partes. Los pobladores aprovechaban cada uno de estos cortes para lavar oro con la batea. Entonces, entre 1981 y 1983 se dio la bonanza del oro, y así iba llegando gente de las veredas a aprovechar los veneros, luego fueron llegando de los municipios vecinos. Arribó gente de la Toma, Gelima, Honduras, Asnazú, Mindalá, Betulia, San Vicente, Mondomo, Morales, Timba y Piendamó. De manera que poco a poco el pueblo se fue llenando de mineros dispuestos a sacar algo de oro en la abundancia de vetas expuestas y, como recuerda una mujer mayor, había oro para

todos. La gente estaba dispuesta a trabajar de día y de noche, fueran jóvenes, niños o ancianos. Muchos fueron instalando cambuches cerca a los sitios de lavado; ranchos improvisados con hojas de caña brava y plástico se levantaban por todas partes. Pero finalmente la empresa prohibió la entrada de los mineros a los sitios de las obras; no sólo lo prohibió sino que además la zona fue militarizada. La gente recuerda esos momentos con cierta rabia, pues a pesar de reconocer el peligro que representaba esa multitud en zonas donde el suelo era inestable, ellos estaban trabajando. Hubo desalojos violentos como los de la Ataguía y en el Talud. Los soldados del Batallón Pichincha se asentaron en la sede de la CVC, en La Esperanza. La Corporación también contrató seguridad privada para vigilar de día y noche que los mineros no entraran a las zonas de construcción.

Finalmente y ante las protestas de miles de mineros, la CVC negoció los botaderos. La entidad se comprometió a llevar el material en volquetas hasta zonas seguras donde estarían a disposición de la gente. Hay quienes afirman que en el año 1982 entre seis mil y ocho mil personas estaban trabajando en Suárez. Allí llegó gente de Chocó, de Antioquia y de Nariño. De manera que los problemas entre mineros locales y recién llegados no se hicieron esperar, así que fue necesario organizarse internamente por veredas o municipios para repartirse el material. La bonanza del oro incentivó el comercio y el consumo. Pero poca gente podía, ya sin tierra, dedicarse a la agricultura. Así, los precios de estas mercancías se elevaron, mientras que la producción local de café, plátano, arracacha y frijol decayó y así hubo que buscar y traer los productos de otras partes. Finalmente los pobladores de Suárez terminaron importando a su territorio el alimento y recursos que alguna vez les fueron propios. Por su parte, las empresas vinculadas con la construcción iban adquiriendo terreno y aprobación por parte de los pobladores, vinculando los negocios locales a las demandas de la obra (farmacias, estancos, hoteles, venta de madera). De esta forma, no sólo se iba generando confianza en la empresa de construcción, también se iba adelantando la compra directa de títulos a pequeños propietarios de tierra. Sin embargo, quienes al final no quisieron vender fueron desplazados a la fuerza con la inundación de la represa.

Finalmente, el llenado de la represa comenzó en enero de 1984. Para los pobladores el impacto tuvo que ver con la pérdida de zonas especialmente fértiles para los cultivos, de minas ricas en oro y de los caminos que comunicaban las veredas con la cabecera

municipal. Los recorridos que antes tomaban minutos ahora se tardaban horas, pues prácticamente había que rodear la represa para poder llegar al otro lado, y la Corporación nunca construyó el puente prometido. El actual margen derecho del embalse La Salvajina, donde están veredas como Mindalá, quedó prácticamente incomunicado con el otro lado. Las familias que se repartían entre ambos márgenes (por el otro lado se encuentra la Toma) quedaron aisladas. Entonces, con el llenado del embalse y el fin de la bonanza llegó la crisis; ya no había tierra, ni minería, por lo que muchos pobladores debieron desplazarse hacia Cali.

Para la gente de Suárez es claro que la construcción de la represa les partió la vida en dos. A pesar de que algunos aún señalan su importancia para el progreso de la región, la mayoría empezó a desconfiar de esta idea de progreso. La desviación y canalización del Cauca fue, para la gente que vivía del río, un acto de control de la naturaleza sin precedentes. La transformación del paisaje fue fuerte y evidente. En la memoria quedan lugares que ya no existen, como La Peña, donde se formaba el cañón del río. O lugares que quedaron inundados por las aguas de la represa; fincas, caminos y minas como las de Paso Bobo, Charco del Burro y Pata Pata. Otra práctica que quedó atrás con la canalización del río fue la pesca. Previamente a la construcción de esta obra de infraestructura era posible encontrar diversidad de peces para el consumo de los pobladores, la gente cuenta que no sólo los encontraban los pescadores, también los mineros artesanales o las familias que iban al río a recrearse. Por su parte los areneros podían tomar ciertas cantidades de material de arrastre, actividad que ahora es marginal. Y en la zona de la represa era posible cosechar yuca, plátano o café, alimentos que permitían complementar la dieta de las familias. Actualmente este tipo de producción es mínima y la minería ha quedado relegada a unas cuantas minas de filón y al barequeo informal e ilegalizado. La Cooperativa se debilitó e incluso a finales de los noventa muchos mineros prefirieron irse a trabajar a las minas de carbón de San Francisco.

Con la entrada de la Salvajina no sólo se transformaron violentamente las relaciones con el entorno, también se rompieron relaciones familiares y sociales que mantenían vigente la idea de comunidad. La gente mayor se queja de que hoy en día los jóvenes desconocen el árbol genealógico de sus familias. Este desconocimiento también se ve reflejado y a la vez

se nutre con el desplazamiento de miembros de las familias hacia zonas urbanas, generalmente en busca de oportunidades de labores. Finalmente estos desplazamientos y fragmentaciones alimentan el desprendimiento de las tradiciones y prácticas culturales familiares y de la construcción de una comunidad económica, política y cultural de la mano con el espacio y las formas de usar la tierra.

Entonces, nuevamente vemos cómo se pasa de ser campesinos y mineros a asalariados, generalmente engrosando las filas de desempleados en la ciudad, corteros de caña, y empleados de bajo rango de los ingenios y parques industriales ubicados en la zona plana. Por otra parte, en las ciudades a las que se llega (principalmente Cali) los desplazados viven en espacios marginales, algunos conocidos como asentamientos sub-normales, donde predomina el desempleo y la delincuencia. Es el caso del distrito de Aguablanca en Cali, por ejemplo. El caso de Suárez demuestra nuevamente que las formas de despojo y privilegio tienen efectos en distintas escalas, articulando diferentes realidades locales con la escala regional. La ciudad y el campo están inevitablemente relacionados y en cualquiera de los casos, el destierro y desarraigo hace parte de la historia de vida de los pobladores; sobre sus formas de trabajo, sobre sus formas de producción, sobre las prácticas culturales y sobre su capacidad de agencia en la política. Así, podemos encontrar en Cali barrios que llevan el nombre de veredas o corregimientos de la región, a manera de colonias o pequeñas invasiones.

El Suroccidente es un escenario de configuración en disputa. Incluso en su configuración misma “reaparecen”, como lo hacen las vírgenes “remanecidas” dispuestas a “tramar” luchas, vínculos socio-espaciales. Uno de ellos, que desafía el eje longitudinal del Magdalena y los Andes con el que iniciamos este capítulo, es la panamazonía. La singularidad de las distintas zonas, permite entenderlas como configuraciones regionales en continua y conflictiva emergencia. Su dinamismo singular confiere atributos a la configuración y nominación del sur-occidente como región. Un continuo movimiento en tensión, en conflicto, que hace de singularidades regionales escenarios de síntesis de diversas determinaciones. En este sentido no son escalas: local, sub regional, regional. Más bien son formas de definir y nombrar dinámicas históricas desde los tiempos, los espacios y

los espesores sociales. Tiempos, espacios y espesores definidos en conflicto, expresados en emergencias sociales, en recurrentes procesos de movilización, o en la liminalidad propia de las configuraciones definidas por los órdenes hegemónicos y las luchas que contradicen, oponen, diversifican y fluctúan con ellos.

Tanto su diversidad cultural, como la riqueza social y natural de esta región, se ha enfrentado a lo largo de la historia a una serie de dinámicas de vulneración, que en los últimos años tienden a agudizarse. Entre ellas podemos destacar los altos registros de desigualdad social que se traducen en pobreza, dificultad para acceso a la tierra, educación, salud y vivienda (Informe de desarrollo Humano, PNUD; Tierra arrasada REF). Un proceso acentuado por la imposición de modelos productivos que atentan contra la vida campesina y la diversidad social; entre ellos, resaltan los proyectos de explotación minera a gran escala, el control privado del agua y de los páramos, la construcción de megaproyectos hídricos, la deforestación y el incremento de cultivos no dedicados a la producción de alimentos.

A partir de todas las prácticas sociales desarrolladas en las dos regiones recorridas, en medio de las contradicciones que se ha intentado caracterizar es posible referirse a las “comunidades”, cuya existencia depende de las relaciones sociales que se construyen en flujos constantes, reiterando conflictos históricos y actuales. Por ello, las comunidades son las que afirman la existencia o la posibilidad de las regiones. Para el Sur de Bolívar “ser poblador” es ser parte de dichas comunidades para poder expresar el “ser de allí”, el que no se les desconozca, el que no se les desplace. En el Suroccidente, “ser campesino” es hacer parte de las comunidades, bien sea como maciceño, como indígena, como gente negra, como de la Sierra o como del Guaico. Es ser y tener el derecho de vivir como se ha habitado. Por ello, las comunidades son parte de un conjunto mayor, de conexiones diversas de parentesco, vecindades, formas de trabajo, maneras de habitar, que permiten múltiples y permanentes contactos, visitas, emisoras comunitarias, entre otros. Como en la vereda El Cid, donde los campesinos cuentan la manera en que supieron que su emisora era escuchada en las poblaciones vecinas a partir de la “proximidad”: “Nosotros supimos que la emisora nuestra se escuchaba en el otro lado porque dijimos por los micrófonos: si nos

escuchan apaguen y prendan la luz. Así lo hicieron los de Arguello” (Conversación, El Cid – Guaitarilla, Nariño, 2011).

En la medida que las comunidades crean una realidad cultural y sociológicamente diversa, marcada por la interpelación continua entre los pobladores que la conforman, generan redes de relaciones que los integran potencialmente. Dicha integración convergencia y/o articulación, es la base de la construcción social regional y de sus potencias.

Capítulo 4. Comunidades y organizaciones en lucha social por la configuración regional

Después de recorrer los caminos y los lugares, y con ellos proponer las disputas que constituyen la configuración regional a partir de las dimensiones territorial, productiva, política y cultural, este capítulo hace un análisis de los procesos organizativos centrado en los sujetos que participan en la lucha social. La perspectiva que se desarrolla en estas páginas sostiene que la lucha social es constructora y fuerza de las disputas por la configuración regional. En el caso que analizamos esto implica que las formas específicas de vivir en los territorios que constituyen el Magdalena Medio y al Suroccidente dotan de características específicas a las dinámicas de lucha social; así como las experiencias de lucha social son a la vez constituyentes de las formas diversas de vida que allí se desenvuelven. Estas relaciones de mutua determinación se concretan en dos lugares social e históricamente constituidos, que son a la vez los lugares donde se desarrolla este capítulo: las comunidades y las organizaciones.

4.1. El marco de la lucha

En esta primera parte se analizan algunos elementos de orden estructural que han incidido en la configuración regional y en la lucha social. Se hace referencia al camino andado por los procesos de organización y movilización campesina; enseguida se analiza el problema agrario desde una perspectiva normativa y legal; posteriormente se realiza un recuento del conflicto militar y, por último, de las políticas públicas en términos de multiculturalidad y derechos étnicos.

Resaltamos la importancia estructural de la movilización campesina y el problema agrario porque a lo largo de la historia de la formación social colombiana, el movimiento campesino ha sido sujeto de primer orden en los procesos de configuración regional y como

actor en distintos periodos en relación con la política pública, los modelos de acumulación económica, los imaginarios sociales y el ordenamiento territorial. Estas características estructurales no incumben solo a Colombia y no son recientes, diversos trabajos académicos señalan la importancia histórica en distintos países de America Latina de la vida campesina. Jhon H. Coatsworth señala como patrones de rebelión rural entre los siglos XVIII y XIX: 1. Revueltas en que participaron pueblos indios mesoamericanos y andinos; 2. levantamientos contra las haciendas; 3. revueltas en las misiones e incursiones nómadas; 4. revueltas regionales v multiclassistas y “campesinas”; y 5. revueltas con base en los esclavos (Coatsworth, 2004 pag 30-34). Señala también que las revueltas campesinas, se dan en el “contexto de cambios sistémicos que se producen en las estructuras socioeconómicas mundiales o regionales... el desarrollo del capitalismo comercial, la expansión del mercado mundial de productos avícolas durante la revolución industrial y el gran incremento de flujos internacionales de capital en la era de imperialismo...crearon las condiciones estructurales que condujeron a la revuelta rural en los últimos cuatro siglos” (*Ibid*, pag 50 -52). Con lo anterior, muestra cómo fluctuaciones a corto plazo y en escala local y regional se articulan con tendencias económicas de largo plazo y con cambios políticos como las reformas borbónicas y la independencia, así como con los cambios políticos locales; a su vez que éstos se entrelazan con las disputas por las tierras y las demandas sociales.

El conflicto armado se extiende por más de 50 años en Colombia, sus causas y efectos pueden entenderse en sus especificidades desiguales y diferenciadas en los diversos procesos de configuración regional que se han venido dando en la formación social colombiana. Justamente que la configuración regional sea un campo de disputa de la lucha social, demuestra su relación con el conflicto armado.

La relación entre multiculturalidad e interculturalidad hace parte de un continuo de la lucha social en Colombia, con mayor grado de incidencia en algunas regiones, debido a las presencias prehispánicas, por relaciones coloniales y por distintas historias de poblamiento. Actualmente la planeación territorial, poblacional y la política social pasan por asumir el reconocimiento de la pluriethnicidad y multiculturalidad de la nación, mandatado en la Constitución Nacional de 1991. Todo esto también se presenta de manera diferenciada en

las relaciones regionales e incide en la forma como se logran o no articular procesos de lucha social. En esa medida, la relación entre configuración regional y lucha social no se circunscribe únicamente al proceso de movilización campesino y el problema agrario en el país.

4.1.1 La vida campesina: movilización y los órdenes de propiedad y ordenamiento territorial.

La vida campesina forma parte del proceso de construcción de nación en Colombia. Sus diversidades regionales, poblacionales y ambientales conforman el sustrato profundo a partir del cual se traza la historia colonial, independentista y republicana que ha configurado la vida nacional. Analizar el proceso histórico de la vida campesina y sus diversas expresiones, prácticas e identidades, en sus distintas formas y maneras comunitarias da cuenta de los enraizamientos, dinamismos y capacidades de movilización subalterna y popular.

Desde finales de la Colonia se advierte la movilidad de castas y de estamentos sociales, transgredidos por la creciente dinámica de parentesco, la movilidad espacial y los cambios políticos y productivos estimulados por las reformas borbónicas. Tales transformaciones se desarrollaron en los límites de las haciendas de los altiplanos, en los valles y cuencas interandinas, en las sabanas y selvas costeras, y en la altillanura, para ir conformando procesos de poblamiento de donde emergió la vida campesina. Las dinámicas productiva, territorial y política después de la Independencia convirtieron a campesinos y campesinas en protagonistas de muchas de las apuestas y orientaciones sociales que ponen de manifiesto el proceso hasta hoy inconcluso de la construcción nacional; pero también, las capacidades y potencialidades sociales manifiestas de la vida campesina.

Lo anterior se concreta en una serie de procesos históricos entre los cuales no podríamos dejar de mencionar: el poblamiento de la media montaña para la siembra cafetera; la colonización de la frontera agrícola; el establecimiento de despensas alimenticias y manufactureras; el poblamiento continuo de cuencas; y la participación con mano de obra, alimentos, agua y materiales para la transformación de poblados en ciudades y su posterior

abastecimiento. Así mismo, se documenta la activa participación de estas poblaciones en las confrontaciones y en la movilidad social que significaron las guerras civiles.

Al mismo tiempo la vida campesina se constituye en un imaginario social recreado en novelas como *María y Manuela*, entre otras, y en diversas obras de poesía y pintura del xix. Tal imaginario fue construido también en la caracterización realizada por la Comisión Corográfica Nacional, que hizo uno de los primeros inventarios de la vida campesina y de sus manifestaciones, y cuyas huellas quedaron en descripciones, crónicas y acuarelas. Además del anecdotario, compendio de refranes y coplas que van enriqueciendo y transformando identidades y valores de vida. En últimas, hablamos de modos y formas de ser, de estar y de hacer con sus tramas paradójicas e inconstantes a nivel local, regional y nacional, que van dando rostro a la vida e imagen del mundo campesino.

Sin duda, la pregunta decimonónica sobre la nación del “¿quiénes somos?” pasa por la comprensión de los conflictos en los cuales ha participado el campesinado, y las respuestas del estado-nación que en general se han formulado de espaldas a la vida campesina. Esto mismo se ha convertido en una de las bases de la nación inconclusa y en ciernes. Aquel cuestionamiento pasa a reformularse en términos de “¿quiénes podemos ser?” dando inicio a la época de las primeras grandes movilizaciones campesinas a comienzos del siglo XX.

El patrón andino de haciendas y comunidades campesinas, que comparten y disputan tierras, bosques y aguas, que estaban vinculadas por relaciones de vida esenciales para la supervivencia de ambas partes, es enriquecido por rochelas de libres que se despliegan por las sabanas y llanos, por parcelas abiertas en las selvas producto de procesos de colonización, por fincas abiertas en las cuencas interandinas. En todos estos espacios de vida se desplegara la vida campesina, sus luchas y resistencias.

El acaparamiento de tierras y el despojo hacen que campesinos y campesinas se organicen con la intención de defender, ampliar y restablecer sus posesiones. Las movilizaciones agrarias de las primeras décadas del siglo XX crearon distintos tipos de organizaciones para enfrentar a los latifundistas, hacer exigencias referentes al jornal y pedir condiciones dignas de trabajo. Un ejemplo fueron las expresiones organizativas de los campesinos de Córdoba que llegaron a conformar Los Baluartes, experiencias de recuperaciones de tierras y

organización productiva autogestionada. ‘El Baluarte Rojo’ de Lomagrande es tal vez el más reconocido, pero también están los de San Fernando, Canalete y Callejas. Sin duda, los llamados Congresos Obreros serían los encargados de establecer una activa participación de campesinos y campesinas de diversas regiones del país. En dichos congresos, donde participaban artesanos, obreros, intelectuales, empleados públicos e indígenas, se estableció una hoja de ruta para reivindicar a la vida campesina, con distintos nombres. Su momento más importante se vivió en las agitadas manifestaciones, huelgas y paros de finales de la década de los años veinte en el Cauca, Valle, Magdalena, Santander y Cundinamarca. Allí se constituyen las bases para procesos organizativos como las ligas y sindicatos campesinos, que serían actores de primer orden en la formulación, discusión, postulación y crítica a la primera ley de reforma agraria del país, conocida como la ley 200 de 1936.

A partir de 1936 se inicia un nuevo periodo. La irrupción de la ley 200, su debilidad jurídica apuntalada por la debilidad institucional para ser aplicada, y un pronto proceso de contra-reforma iniciado en 1944 sobre la base de nuevos despojos y actos de violencia en distintas regiones del país, dieron lugar a una secuencia de movilizaciones por la defensa de los campesinos. Pero sin duda la violencia política que se inicia a finales de la década del 40 marcará los derroteros de las siguientes décadas. Es así como sobresale la irrupción del campesinado llanero que se expresa en destacamentos guerrilleros liberales y en textos como *El manifiesto por la liberación nacional* o La primera Ley del Llano de 1951. Este texto hace un reconocimiento al papel histórico y cultural del campesinado en Colombia y establece líneas de organización social, regulación política, económica y de defensa de posibles ataques del estado.

Por aquella época también se entrelazan el discurso y las prácticas del proceso de modernización, que se convertirá en una paradoja para la vida campesina. Por un lado, los discursos modernizadores ven en el campesinado la representación de lo social y culturalmente “atrasado”. En tal medida proponen que debe desaparecer paulatinamente para lograr desatar una “modernidad postergada”. Por otro lado, se distingue un discurso bucólico, añorante de la vida campesina, de sus modos y formas locales, de su inocencia y paciencia, exaltando su vocación por la palabra y la laboriosidad. A la par, el campesino se dibuja como sujeto de transformación de la realidad, ya sea como transición a un

proletariado imaginario e imaginado, o como agente de una nueva producción nacional. La confluencia de estos factores y el mantenimiento de una estrategia de despojo, acompañada por una insólita táctica de tierra arrasada, acucia la conformación de guerrillas agrarias y campesinas como las FARC y el EPL, y de guerrillas con bases campesinas como el ELN.

En los años sesenta, se incentivan diversas organizaciones campesinas, algunas estimuladas por la acción social de la iglesia católica, otras por procesos políticos de izquierda y otras por acción gubernamental. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), fundada en 1968 durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), nació como una iniciativa para la reforma agraria que cambiaría la distribución de la propiedad rural. Por parte del gobierno, la creación de la ANUC buscó mantener una fuerza social organizada, controlada, articulada al modelo económico y bajo la supervisión del Estado. Aun así permitió la vinculación laboral de intelectuales orgánicos que alentaron y retroalimentaron las organizaciones de base campesina y de igual forma tradujeron al seno de la ANUC los debates y rupturas ideológicas del campo de la izquierda. Dado el incumplimiento de las expectativas desarrolladas por la institucionalidad agraria creada y por la reacción conocida como el ‘Pacto de Chicoral’, la ANUC se independiza e inicia una actividad a nivel nacional orientada por el mandato agrario de 1971. En dicho mandato se establece la importancia de reconocer a la cultura campesina como dimensión integral de las reformas que necesitaba el campo colombiano. La acción de la ANUC también fue clave para los primeros escenarios de encuentro para la organización de otro tipo de procesos de vida campesina como los indígenas y los negros que tenían sus propias secretarías. En virtud de su capacidad de movilización campesina tomó cerca de 120.000 hectáreas de tierra, cifra nunca superada por todas las leyes agrarias en 200 años, que tiene como hito el 21 de febrero de 1971 cuando se produjo la recuperación de tierras más grande en la historia del país, hecha de manera articulada en más de 7 departamentos.

En la década de 1980 se destacan los procesos de movilización de 1987 y 1988 en distintas regiones del país, que buscaron reivindicar distintos procesos de vida campesina que habían sido golpeados por el conflicto armado enmarcado en la política de guerra sucia y asesinato selectivo a los y las líderes más populares y de izquierda de la ANUC. A esto se sumaba la orientación productiva de la Revolución Verde y las reformas institucionales que

estimulaban una transformación de la política rural hacia la conversión empresarial del campesinado y la explotación de los recursos naturales. A la par se insiste en la importancia de la vida campesina para la producción de alimentos y para los manejos ambientales

Al finalizar el siglo XX, las organizaciones campesinas se encuentran dispersas, atomizadas y golpeadas por la represión paramilitar, el abandono institucional, la literal desaparición del campesinado como sujeto de derecho. Aun así, se recrean formas de articulación nacional como el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y la reglamentación jurídica de las Zonas de Reserva Campesina, entre otras.

Un factor que incide en esta época fue la expansión del narcotráfico y las limitaciones de los campesinos al acceso a la tierra, a la tecnología y al subsidio. En estas condiciones, la única posibilidad de sobrevivir para muchos de ellos fue la producción de cultivos de uso ilícito. En 1996, las organizaciones campesinas vuelven a tener un papel visible por las multitudinarias marchas campesinas cocaleras en contra de las fumigaciones. Gracias a estas movilizaciones se evidenció que el campo fue el principal afectado de las políticas de ajuste y de apertura económica aplicadas por el gobierno de Gaviria (1990-1994) y Samper (1994-1998). Desde esta época, los movimientos campesinos se han venido estructurando a través de organizaciones regionales como la Asociación Campesina de Arauca, la Asociación Campesina del Valle del Río Güéjar, en la Serranía de la Macarena, la Asociación Campesina del Catatumbo y la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), entre otras. Desde allí se reivindican como pobladores y constructores de región, estableciendo planes para la implementación de un ordenamiento social del territorio. Ellas enfatizan de manera novedosa en las identidades culturales, los saberes y manejos agrícolas y ambientales, así como en la importancia de la diversidad de formas de producción y de expresiones comunitarias territoriales que reivindican la autonomía.

Se inicia el nuevo milenio con la vida campesina sumida en una crisis, agudizada fundamentalmente por tres factores: (1) la aplicación acelerada del proceso de apertura económica y los acuerdos de libre comercio; (2) la economía política del narcotráfico y (3) el escalonamiento del conflicto armado interno que ha golpeado en su conjunto a todo el movimiento social colombiano. A pesar del escenario adverso se mantienen en la actualidad las siguientes expresiones organizativas campesinas de carácter nacional:

ANUC, ANUC-UR, ANMUCIC, ACC, CNA, Fensuagro, FANAL, Fenacoa Festracol y Salvación Nacional Agropecuaria (SNA) (Suarez, et.al. 2005). En la actualidad una parte significativa de las organizaciones campesinas están articuladas a cuatro procesos sociales: La Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, Dignidades Agropecuarias y Salvación Agropecuaria.

Entrado el siglo XXI, los gobiernos de derecha que impulsaron las políticas neoliberales que dirigieron el rumbo del país, impusieron un modelo de desarrollo centrado en la inversión extranjera que significó la agudización del irresuelto problema de la tenencia y uso de la tierra. Adicional a esto, el narcotráfico que ya para ese momento había acaparado vastos territorios nacionales mediante desplazamientos forzados y la ocupación de territorios campesinos, además de la cooptación de poblaciones rurales como mano de obra barata asociada al primer eslabón de la cadena ilícita, configuraron un mapa de nuevos ‘dueños de la tierra’, los cuales condujeron a que la lucha campesina por la tierra virara hacia la lucha campesina por su vida. Las políticas de la primera década del siglo XXI se centraron en combatir a las guerrillas, lo que implicó el señalamiento de la lucha campesina de auxiliares por parte del gobierno nacional. En este mismo escenario de conflicto, la expansión de la frontera agrícola se hizo más aguda, y a las poblaciones de las Zonas de Reserva Campesina se les negó la posibilidad de apelar al derecho legal de su permanencia en los territorios ya constituidos y de avanzar en los procesos de legalización de las Zonas de Reserva de hecho.

Las políticas que apuntaban a combatir el problema del narcotráfico se centraron en la erradicación de los cultivos de uso ilícito mediante fumigaciones con glifosato y la militarización de las zonas rurales –entre otras medidas implementadas en el marco del Plan Colombia: No se ha tratado la problemática desde espectros distintos como la opción de producción agrícola sostenible para las familias campesinas, o a través de medidas de control del microtráfico. En el período presidencial de Uribe Vélez (2002-2010) se dictó la Ley 975 de 2006 llamada ‘De Justicia y Paz’, que legisló para la impunidad y legalización de vastos sectores del paramilitarismo y que no contempló los requerimientos mínimos que merecen las comunidades víctimas del conflicto armado interno, la mayoría campesinas. En la administración siguiente con Juan Manuel Santos (2011-2015), se adoptan nuevas

medidas que involucran a las poblaciones rurales como lo es la Ley 1448 de 2011 o ‘Ley de víctimas’ y también los Diálogos de Paz, que ponen en el centro del debate la política de restitución de tierras y la Reforma Agraria Integral con enfoque territorial.

Pese a lo anterior, el acaparamiento de tierras por inversión extranjera y los tratados de libre comercio, ahondaron el problema del conflicto armado y el narco-paramilitarismo. Los elevados costos de producción y las imposibilidades de comercio justo perjudicaron gravemente las economías campesinas. Es en este momento en el que se gesta una gran protesta campesina que alcanza su punto máximo en 2013, cuando en distintos lugares del país los campesinos se manifestaron exigiendo: 1. La implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria (fruto de los TLC); 2. El acceso a la propiedad de la tierra (no más extranjerización ni acaparamiento de tierras a manos de grandes empresarios nacionales y extranjeros); 3. El reconocimiento a la territorialidad campesina (figura jurídica de las Zonas de Reserva Campesina reglamentada en la Ley 160 de 1994); 4. La participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera; 5. Que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural; y 6. La inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

4.1.2. Caracterización del problema agrario, de la economía, sus contextos y sus leyes.

Absalón Machado, Marco Palacios y Darío Fajardo son quizá los investigadores contemporáneos que más tiempo y esfuerzos han dedicado a la caracterización del problema agrario en Colombia, sin embargo, es posible advertir una serie importante de investigadores, con quienes se emprende un diálogo en esta tesis, que abordan dicho problema en poblaciones, regiones o con relación a problemas específicos. Hoy se puede decir, sin temor a equivocarse, que en Colombia ellos vuelven a tomar importancia luego de décadas de olvido.

Al revisar la literatura existente y constituir una reflexión alrededor de la historia nacional, se pueden encontrar ciertos hitos y periodizaciones con respecto a la lucha campesina. A

comienzos del siglo XX, más específicamente en la década de 1920, se empiezan a expresar las primeras organizaciones campesinas con una intención marcadamente reivindicativa: mejoras de tierras e independencia como sujeto social y productivo, entre otras demandas. Las comunidades campesinas, vulneradas en su derecho a la tenencia de la tierra, comienzan a organizarse y, junto al movimiento obrero organizado en las nacientes exploraciones petroleras del nororiente del país, exige la redistribución de la tierra y la aprobación de normas jurídicas que permitan el cumplimiento de la reestructuración de la propiedad agraria.

Lo significativamente nuevo de las movilizaciones agrarias que se presentaron a partir de la década de 1920 radica en que de una u otra forma, los enfrentamientos con los monopolizadores de la tierra se formaron con algún grado de organización, encuadrando muchas de las demandas en un plano completamente nuevo donde los campesinos tendrían la iniciativa. Tal es el caso de la exigencia del pago de salarios, de garantizar condiciones dignas de trabajo y vida, entre otras. Además se da la emergencia de nuevas ideologías y formas de organización política debido al auge de fuerzas socialistas, al mismo tiempo que se presenta una recomposición del Partido Liberal.

Los cambios en la década de 1920 habían influido en la situación material e ideológica de los campesinos de las haciendas, a los que ya no se los podía seguir manteniendo como una fuerza de trabajo cautiva y sumisa. En esa década, debido al mismo afán modernizador de las elites, se despertó entre los campesinos la aspiración de trabajar para provecho suyo y adquirir el dominio de la tierra como retorno justo por su trabajo.

Estos sucesos están enmarcados en las transformaciones experimentadas por la agricultura colombiana después de la I Guerra Mundial (1914-1918). En 1918 la población rural era de 4.625.000 habitantes, que equivalía al 79% del total nacional, mientras que la urbana era de 1.231.000 habitantes. Para 1930, la población rural era de 5.419.000 habitantes (76%), y la urbana 1.934.000 (Vega, 2002) El crecimiento de la población rural obedece al aumento de la demanda de alimentos a nivel internacional durante la primera posguerra mundial, hecho que produce un incremento en las exportaciones y una crisis en la producción interna. El dinero en el país aumenta por las exportaciones y se inician las construcciones de obras de infraestructura para la modernización del país. El auge en la construcción de obras públicas

y la ampliación de la planta industrial o el montaje de nuevas industrias, requirieron gran cantidad de fuerza de trabajo, demanda que la población existente en las ciudades no estaba en capacidad de satisfacer. En las ciudades se estaba constituyendo un mercado de trabajo de tipo salarial que resultaba atrayente para muchos campesinos. La diferenciación salarial y la organización de un mercado laboral fueron claves para la migración campo-ciudad, la cual devino en una escasa mano de obra para las haciendas (LeGrand,1988).

Acontecimientos como la gran depresión y la caída de los precios internacionales del café en 1929 produjeron desempleo y pauperización de las condiciones de vida en las haciendas. En este contexto, empezaron a florecer las luchas agrarias, principalmente en Sumapaz, Viotá y la región del Tequendama (situadas en el altiplano cundiboyanese en el centro del país) y en Córdoba (al norte, en la Costa Atlántica). La primera iniciativa de organización campesina aparece entonces en 1930, durante la presidencia liberal de Enrique Olaya Herrera, la cual logra impulsar la “Ley de tierras”. Esta Ley se convierte en la primera tentativa de reforma agraria, plasmada en la Ley 200 de 1936, basada en la extinción de dominio determinada por la no explotación económica de la tierra. Esta ley, forzada por un movimiento de colonos campesinos, hizo surgir la disciplina del derecho agrario, creó la jurisdicción agraria y estableció jueces especializados para los conflictos de tierra.

De tal manera, durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) y ante la agudización de los conflictos agrarios y la presión campesina por la tierra, el gobierno promovió aquella legislación sobre los problemas agrarios. La norma era un programa de reforma agraria para sanear los títulos de la propiedad rural, aplicar el principio de la explotación económica como fundamento del derecho de propiedad sobre la tierra, impulsar el desarrollo económico, y lograr una producción agrícola que permitiera alimentar al país. Se decretó así la extinción o pérdida de dominio, o derecho de propiedad, en caso de permanecer los predios abandonados por más de diez años, tratando de transformar el latifundio improductivo en empresa capitalista (LeGrand, 1988)⁷⁹.

⁷⁹ Este plazo sería extendido posteriormente, hasta converger con los procesos políticos y sociales que hicieron que las tensiones existentes en el país incubaran la explosión social que se daría en 1948 (el 9 de abril, cuando asesinaron al líder popular del liberalismo Jorge Eliécer Gaitán).

Los efectos inmediatos de la Ley fueron altamente regresivos. Causaron una operación gigantesca de adjudicación de baldíos a terratenientes reafirmando la subutilización de la tierra. Al considerar como explotación económica la ganadería extensiva, sin reglamentarla, ésta transformaría las tierras agrícolas en ganaderas, generando con ello el consiguiente desalojo masivo de aparceros y colonos. La violenta reacción terrateniente a la Ley 200 terminó en la expulsión masiva de los arrendatarios y aparceros, al tiempo que los campesinos sin tierra se lanzaron a poblar las tierras inhabitadas, para demostrar explotación económica y pedir la adjudicación de esas tierras como baldías.

Los grandes propietarios frustraron la tentativa de modernización agraria y desarticularon la organización campesina buscando obstaculizar la posibilidad de modificar la estructura rural que pretendía la Ley 200. Por esta razón, se impone la Ley 100 de 1944, conocida como “Ley de aparcería”, que limitaba los alcances de la Ley 200 y abandonaba la anterior idea de reforma.

La Ley de Aparcería declaró el retorno a los contratos de aparcería, dada su conveniencia pública, así como la interrupción de la independencia mercantil de los arrendatarios y aparceros, al prohibirles la siembra de cultivos permanentes en sus parcelas. También disminuyó la acción de extinción de dominio, al ampliar a quince años el plazo antes previsto por la Ley 200 (de diez) para la reversión del estado con respecto a las propiedades. También suprimió los jueces encargados de atender los conflictos agrarios. Con esta ley, también se reconoció la tierra como factor de renta y se justificó la ausencia del propietario, con lo cual se permitía su explotación mediante contratos agrarios y se descartaba la posibilidad de que la expropiación pudiera acudir a sistemas distintos del avalúo comercial. De tal manera, se establecían las obligaciones de los aparceros con respecto a la explotación personal.

Bajo estas condiciones de propiedad de la tierra, en las décadas de 1920 a 1950 se empieza a desarrollar la agricultura comercial en el país (Palacios, 2008). Paralela a ésta, surge una economía campesina, principalmente dirigida a una producción de consumo local. Para este momento, se pretendía desde el Estado alcanzar un proceso de acumulación privilegiando al sector industrial que dependía básicamente de una oferta abundante y barata de alimentos y materias primas agropecuarias. Sin embargo, la estructura de tenencia de la tierra que

caracterizaba al sector agropecuario, dificultaba el despegue de la industria nacional, dada la alta concentración de la propiedad agraria y la permanencia de relaciones de producción tradicionales.

Con el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán en 1948, se inicia la llamada época de “La Violencia”. Grandes migraciones del campo a las nacientes ciudades hacen evidente un cambio en el régimen de la tenencia de la tierra y el incremento de mano de obra barata en las urbes. Es en ese contexto de problemática rural en el que nacen las primeras guerrillas de autodefensa, con una orientación liberal y comunista, según la influencia política. Con la dictadura de Rojas Pinilla (1953-1957), se realizan las primeras desmovilizaciones de combatientes. Luego de la Operación Marquetalia en 1964, y la agresión contra el movimiento campesino del Sur del Tolima y de otras regiones⁸⁰ los campesinos “alzados en armas” inician un proceso de colonización que sentaría las bases para la consolidación del movimiento agrarista del que nacerían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Molano, 1999; Pizarro, 1987).

El decreto 290 de 1957 establecía la tributación de la tierra, lo cual implicaba clasificar todas las tierras del país y controlar su uso. Ante la ola de violencia vivida en 1940, y ante el masivo lanzamiento de colonos y la persecución política partidista, durante el gobierno de Alberto Lleras Restrepo se expide la Ley 135 de 1961, como un proyecto de reforma agraria que pretendía redistribuir la tierra. A través de esta ley, se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, que escasamente cumplió con su función de entregar algunas tierras y convertirse en mecanismo de pacificación de zonas de extrema violencia, como el Tolima.

A partir de 1958 se abrió en Colombia el periodo conocido como el Frente Nacional: la coalición política y electoral entre los líderes de los partidos liberal y conservador que ganó las elecciones y gobernó hasta 1974. Con él se cerraba el ciclo de “violencia bipartidista” que había azotado al país. Algunas guerrillas liberales se desmovilizarían, aunque también

⁸⁰ Este proceso es claramente expuesto en: Alfredo Molano. “Trochas y fusiles”. Bogotá, El Áncora, 1999; y Eduardo Pizarro. “Orígenes del movimiento armado comunista en Colombia”. En: Análisis Político N. 7. Mayo-agosto de 1989. Bogotá, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.

se crearían otros frentes de guerra a causa de las inconformidades y de los ánimos libertarios que recorrían toda América Latina. En el Frente Nacional, la política agraria sería enfrentada con la idea de llevar a cabo una reforma agraria que cambiara la distribución de la propiedad, siempre y cuando el campesinado se organizara y presionara su ejecución; tal política iniciaría con la Ley 135 de 1961 y sería reforzada con el decreto 755 de 1967. “El objetivo central del gobierno al impulsar la organización de los campesinos, era formar empresarios del campo preparándolos para que usaran (de ahí la palabra usuario) los servicios de crédito y asistencia técnica a través de “empresas comunitarias” o de parcelaciones individuales bajo la tutela del INCORA (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria)” (Velasco, 2006, p. 3).

Para ello, desde el gobierno y con recursos públicos, tal como se había hecho desde sus orígenes con la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, fue promovida en los municipios del país la “asociaciones de usuarios campesinos”. Tal cuerpo de asociaciones se agrupó en la definitiva Asociación Nacional de Usuarios Campesinos⁸¹. La ANUC elevó la lucha campesina por la tierra al orden nacional y a niveles organizativos antes inexistentes, pues a pesar de ser convocada y organizada inicialmente desde el Gobierno Nacional, rápidamente un sector mayoritario en su interior lograría tomar fuerza y cobrar autonomía.

Esta iniciativa gubernamental desbordó al gobierno y en los años 70's se configura un formidable movimiento campesino bajo la conducción ideológica de la izquierda radical: “*Tierra para el que la trabaja*” o “*Tierra sin patronos*” fueron las consignas con que una masiva recuperación de tierras tuvo lugar en varias regiones del país, sobre todo en los departamentos de la costa atlántica y en el Cauca, el departamento andino del sur-occidente, con la mayor población indígena (*Ibíd.*)

Los “usuarios campesinos” adquirieron su propia dinámica y poder, y reivindicaron su carácter gremial, lo que les permitió asumirse con independencia ante los partidos políticos tradicionales. Durante el periodo que va de 1968 a 1970, y en virtud de la organización y participación campesina, el INCORA obtuvo sus mayores realizaciones en materia de adquisición y expropiación de tierras. En muchas zonas del país, incluyendo las aquí

⁸¹ Con el decreto 755 de 1967, se determinó un registro de los campesinos usuarios de los servicios estatales relacionados con la agricultura y se promovieron las agremiaciones campesinas.

estudiadas se hicieron repartos de tierras, y en la memoria de muchos “los tiempos del Incora” suelen invocarse para dibujar lo que pareció consolidarse como un proceso de recuperación de la tierra. Este proceso fue acelerado por la expedición de la Ley 1 de 1968, con la cual se enfatizaba en la afectación de los predios explotados de manera adecuada, así como la entrega de la tierra a los aparceros que la estuviesen trabajando.

Este proceso de bloqueo a cualquier posibilidad de Reforma Agraria se consolidó y fortaleció con un acuerdo entre los sectores más tradicionales y poderosos del país, sellado en el “Pacto de Chicoral”, a través de la Ley 4 de 1973, durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Este pacto fue un acuerdo político entre las elites liberal y conservadora, abanderado por los sectores terratenientes para desmontar los aspectos positivos de la Ley 135. El Pacto de Chicoral inició el abandono de la idea de reformar la estructura de tenencia agraria, llevándola a una simple cuestión de comercialización de tierras. Esta Ley fue conocida como una “telaraña jurídica”, ya que estableció cuatro factores para calificar los predios: explotación, alojamiento higiénico, contribución a la educación gratuita y conservación de recursos naturales. También exigió mínimos de productividad e indicó factores de eficiencia, que dificultaron las adquisiciones e hicieron prácticamente imposible la expropiación de tierras.

Como estrategia complementaria, fue necesario promover desde el gobierno la división del movimiento campesino. El resultado fue la ruptura de la ANUC, con la aparición de la ANUC línea Armenia, apoyada por el presidente Misael Pastrana, y la ANUC línea Sincelejo, que representaba al movimiento campesino con intenciones de independencia y que sería protagónica en la tentativa de hacer una reforma agraria de facto, haciendo de las tomas de tierra su principal herramienta⁸².

La primera evidencia de la división, fundada en discrepancias de tiempos atrás, se hace manifiesta el 8 de junio de 1971; con la conmemoración del día del campesino en Lourdes, Norte de Santander. El grupo de Leonel Aguirre y Carlos Ancizar Rico, propugna por una reforma agraria que tenga como premisa una posición de presión de

⁸² Esta ruptura dividió a la ANUC en dos corrientes: la ANUC-Línea Armenia, con carácter progubernamental y activismo moderado; y la ANUC-Línea Sincelejo, que agrupaba a un amplio sector que se distanció de las políticas gubernamentales en materia agraria. Esta corriente tuvo su momento de mayor auge entre 1971 y 1972, cuando lideró un gran proceso de movilización social campesina y llevó a cabo numerosas tomas de tierras, en especial en los departamentos de Córdoba y Sucre, en la Costa Atlántica.

la organización al INCORA, exige mayor representación campesina en los organismos directivos de la política agraria del Estado y sólo acepta la invasión de tierras en caso extremo como mecanismo de demostración de unidad y fuerza (...) los otros miembros del Comité Ejecutivo, por el contrario, representan un sector que promueve una actitud según la cual debe efectuarse tomas de tierra sin esperar que el gobierno logre mejorar los sistemas de adquisición de la misma. De otra parte plantea la necesidad de cambios políticos importantes que permitan una democracia con auténtica representación popular, pide la nacionalización del crédito y de las importaciones, la explotación comunal de tierras adquiridas e insiste en que para la revolución agraria es indispensable la alianza de la ANUC con otros sectores populares del país. (Escobar, 1994, p. 24)

A partir del gobierno de Alfonso López Michelsen, en 1975, la legislación agraria se orientó hacia la adquisición de tierras por parte del INCORA, la regulación de las colonizaciones y los programas remediales encaminados a resolver los problemas generados por la desordenada ocupación de las fronteras agrícolas.

El movimiento campesino, al igual que los demás sectores sociales, se sintió fortalecido por la magnitud del primer Paro Cívico Nacional de septiembre de 1977, que dio cuenta del inconformismo reinante hacia la clase política del país y de la diversidad de procesos que se gestaban para combatir esa clase política. (Alape, 1980) (Medina, 1984)

Un acelerado proceso de concentración de la tierra en manos de los más grandes productores ha ocurrido en Colombia de la mitad de la década de 1980 en adelante. A la vez se han reducido en forma dramática las áreas sembradas. La ampliación de grandes propiedades dedicadas a la ganadería extensiva es una verdadera relativización del país, fenómeno que se acrecentó con la presencia del narcotráfico, ya que la compra de tierras se consolida como un negocio en sí mismo, y el precio pagado por las fincas no está determinado por su productividad agropecuaria, sino por las posibilidades de valorización del predio.

La década de 1990, de ajuste estructural y apertura económica, presenta una crisis generalizada en todos los sectores sociales, y se desdibuja especialmente la estructura productiva agropecuaria del país. Después de varios años de precaria reforma agraria en Colombia, encontramos que la tierra se encuentra más concentrada que nunca, a lo que se agrega la carencia de tecnología apropiada y viable económicamente para los campesinos, la falta de acceso a la infraestructura económica y la baja cobertura de servicios públicos.

Como afirma Darío Fajardo, la crisis semipermanente del agro se manifiesta entre otros hechos en la reducción de áreas de producción, (en 1997, 3.1 millones de hectáreas sembradas, y en 1990, 3.8 millones), pérdidas en empleo agrícola (119.600 empleos menos en la misma época), mayores importaciones agrícolas con un crecimiento anual de 26.8 %. En 1990 se importaba un 15.5 % del PIB y en 1997 aumentó a 42.7%. Un producto como el algodón pasó de producir 130 mil toneladas en 1975 a 4.707 en 1996 y 427 en 1997. En el año 2000 el país importaba 6 millones de toneladas de alimentos, ocho veces más que hace una década. En Colombia el mal uso de los suelos se refleja en las siguientes cifras: de 9 hectáreas aptas para agricultura se siembran 5, y de 19 hectáreas aptas para ganadería se utilizan 40, lo que es un uso no favorable a la agricultura. La disminución del empleo rural y la caída de ingresos en los hogares rurales (ganancia o salario) se tradujo en un incremento de la población bajo la línea de pobreza, la cual entre 1991 y 1995 pasó del 65% al 72%. (Fajardo, 2002, p. 23)

La expansión del narcotráfico y de las distintas actividades asociadas se enmarcan dentro de la tendencia recesiva de los precios de los exportables de origen agrícola debido a la cual los pequeños y medianos productores, en especial campesinos, limitados en el acceso a las tierras y a la tecnología de más elevada productividad y carentes de subsidios, que han tenido que competir con exportaciones agrícolas de los países centrales con malos resultados. En esas condiciones la única posibilidad de reducir pérdidas ha sido incorporar la producción de cultivos de uso ilícito.

Las vinculaciones entre monopolio de propiedad territorial, la ampliación del conflicto armado y la profundización de la crisis agraria son innegables. La ocupación de los espacios nacionales ha resultado de las formas de apropiación privada de los espacios y de las políticas de concesiones del Estado desde el siglo XIX, pues entregó extensos territorios en concesiones a particulares por necesidad de construir algunas vías de comunicación... Esta enajenación del territorio por parte del propio Estado y su asignación a particulares no estabilizan asentamientos” (Fajardo, 2002, p. 39)

El mantenimiento de una inflexible estructura agraria ha generado un constante desplazamiento de población que ha incidido directamente en la configuración regional del país. El proceso de colonización conduce a la sistemática eliminación de bosques y reservas. La exclusión y represión exacerbaban el conflicto social al concentrar las posibilidades de producción. El poder que permite el control territorial termina cambiando la vocación de los suelos, disminuyendo la capacidad alimentaria nacional.

Las características de desarrollo histórico, económico y político en Colombia denotan cómo la ocupación del territorio no se ha planeado a través de un proyecto estratégico de largo alcance relacionado con la realidad regional, lo que ha generado importantes condiciones de violencia. Elementos como la exclusión y la fragmentación social, frente a los cuales se plantea de manera insistente la participación y descentralización como rutas para alcanzar la democratización y la equidad para las regiones y comunidades, motivan la formulación de proyectos o estrategias de ordenamiento que permitan alcanzar un equilibrio territorial.

Además la frontera agrícola no ha sido delineada a partir de la estructuración y planeación del mercado interno. Por el contrario, ha sido históricamente la incidencia de las exportaciones: quina, añil, tabaco, café, caucho, tagua, petróleo y “cultivos ilícitos”, la dinamizadora de esta frontera.

Sin embargo, en 1996 las organizaciones campesinas vuelven a tener un papel importante en la historia del movimiento social en Colombia, por las multitudinarias marchas campesinas cocaleras en contra de las fumigaciones, las cuales revitalizaron el movimiento campesino y mostraron una gran capacidad de movilización y de protesta (Ramírez, 2001)⁸³. Gracias a estas jornadas, se recordó la tradición y vocación agrícola de nuestro país, así como la gran deuda que se tiene con este sector frente a sus demandas. Además, se evidenció que el campo fue el principal afectado de las políticas de ajuste y de apertura económica aplicadas por los dos anteriores gobiernos: Gaviria, 1990-1994, y Samper, 1994-1998.

En el texto “Campesinado y protesta social en Colombia” (Prada, 2000) se estudia el proceso en el que el campesinado se estructura como sujeto social, tomando como referencia el fenómeno de la modernización del campo y de las economías campesinas como economías abiertas en proceso de cambio. “El campesinado de hoy es diferente como sujeto social, demanda su reconocimiento como tal, con necesidad de acceder a recursos para desarrollar sus capacidades” (Prada, 2000, p. 15). Estas características le ayudan a

⁸³ Sobre las marchas campesinas del sur del país, puede consultarse: María Clemencia Ramírez (2001). Las marchas campesinas de 1996 se presentan por la aplicación masiva de controles a la comercialización de insumos para el procesamiento de la hoja de coca, el contraste entre control y manejo corrupto de algunas autoridades sobre éstas, por las realizaciones de fumigaciones y por la escasa atención del Estado y el incremento de la llamada guerra contrainsurgente.

enfrentar los cambios estructurales del mundo. Otra característica importante es que el campesino reclama el control de la tierra y su rol como productor para enfrentar modelos de crecimiento y tecnologías que no lo consideran sujeto de desarrollo. Defiende su tradición de productor y sujeto social.

4.1.3. Conflicto político - militar

Las trazas de conflictos militares y el despliegue de diversas violencias asociadas a ellos son recurrentes en la configuración regional del Sur de Bolívar. Su centralidad es tal, que comunidades y pobladores han guardando una memoria inscrita en las marcas del conflicto armado en le territorio. "Allí es donde quería colgar su hamaca Carlos Castaño"-afirma un poblador, acto seguido se erige el dedo índice y el gesto en la mirada apunta al cerro conocido como la Teta de San Lucas. Las huellas que va dejando la guerra también están en los lugares que no se ven, pero están en la memoria silenciosa de la gente. Muchas de las paredes de las casas fueron hechas de barro y entre ese barro se escondieron armas de la gente que desconfiaba de los pactos realizados en los años cincuenta. Por allí se desplazó la última comisión guerrillera sobreviviente de la operación Anorí⁸⁴. Aquí se tendieron los colchones sobre los cuales dispararon los guerrilleros en la toma de Santa Rosa, aquí desembarcaron los paramilitares cuando se dirigían a Cerro de Burgos.

También se cuentan las historias asociadas con la producción como parte y desencadenante del conflicto armado -: "Aquí creció la marihuana siguiendo órdenes de los guajiros"- recuerdan unos, -"la coca fue botín de guerra del bloque paramilitar Bolívar"- dirán otros, o -"la madera fue prohibida por tal comandante"- . Entre unas y otras actividades, fueron creciendo las desconfianzas entre los pobladores. La misma desconfianza que fracturó familias, desplazó veredas, desplegó egoísmos: compadres se dejaron de hablar, las fiestas "ya no eran las mismas". Parecía como si la gente hubiera perdido el orgullo de sentirse poblador." "Las juntas fueron amenazadas, los líderes tuvieron que salir, las organizaciones se tuvieron que esconder. Por la guerra continua tuvimos que movilizarnos de otras

maneras, nuestra organización resiste a la guerra, los alcaldes se inclinaron a los paramilitares, aquí todo se maneja por clientelas de políticos que sólo vemos en elecciones”

Los pobladores fueron afectados y/o involucrados por la violencia socio-política y el conflicto armado liberal - conservador de las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo XX; y por la problemática extraordinaria del conflicto armado interno desarrollado entre el Estado, los grupos paramilitares y la insurgencia guerrillera en la primera mitad de la década de los sesenta hasta la actualidad.

Por medios coercitivos o persuasivos, las sociedades comunal, trabajadora, cívica, inversionista y administradora de economías de enclave, han tenido una relación directa e indirecta en el desarrollo del conflicto armado, por distintas razones. La expansión, intensidad y escalamiento del conflicto armado llevó la guerra a la cotidianidad del mundo rural y urbano, conduciendo al desarrollo de un proceso cíclico de estructuración y/o desestructuración del conjunto de procesos y organizaciones territoriales y constructos sociales de apuestas comunitarias y democráticas en la región del Sur de Bolívar y en Barrancabermeja.

La espiral de la guerra involucró a la población civil y a sus procesos civiles de manera generalizada, muchas veces parecida a una guerra civil. Las partes del conflicto armado lograron establecer simpatías, converger y construir imaginarios, involucrarse directa e indirectamente en el desarrollo de confrontaciones políticas, económicas e ideológicas; constituirse como base social, establecer correlaciones de fuerza e intentos de gobernanza totalitaria.

La población y el conjunto de actores institucionales, políticos, económicos, sociales, culturales, académicos, comunitarios y territoriales, sufrieron la degradación de la intensificación y escalamiento de las acciones de guerra; como efecto degradado de las guerras prolongadas. El desarrollo de violaciones graves, masivas y manifiestas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, confinaron a los procesos comunitarios y territoriales a padecer la condición de sobrevivencia.

Esta situación propició que la sociedad no armada se constituyera como un tercer actor, lo cual llevó a la región y los actores a plantear e implementar acciones de humanización, tales como las coordinadas de mapas de minados (Mico Ahumado), la no conversión de las comunidades en teatro de operaciones armadas y la abstención de tratar a la población civil como trofeo de guerra (comunidades de la India, en la región del Carare); el acompañamiento a los diálogos y acuerdos de paz (finales de los 80s y principio de los noventas); la consulta popular por la paz (Aguachica, sur del Cesar); la asamblea por la paz (Barrancabermeja); la constitución de un tejido social de paz (Magdalena Medio y Nororiente colombiano); la difusión y construcción de políticas públicas sobre paz y derechos humanos (Barrancabermeja); el posicionamiento del tema de la paz en la agenda pública de las instituciones, la sociedad civil, la región y el territorio (Interpaz en Barrancabermeja); la constitución reciente de frentes por la paz (Yondó y Barrancabermeja) y, desde luego, la construcción de propuestas civiles y alternativas propias del entramado político y social de la región sobre el particular, entre otros tantos.

La línea del tiempo de los acontecimientos protagonizados por los procesos, organizaciones y comunidades regionales –desarrollados en medio de la problemática extraordinaria del conflicto armado– y el desarrollo del proyecto de nación y región a partir del territorio, corroboran las acciones permanentes de la sociedad civil.

4.1.4. Políticas multiculturales y derechos étnicos

Entre la década de 1980 y 1990 varias naciones latinoamericanas ratificaron el Convenio 169 de la OIT⁸⁵ y se comprometieron a adaptar la legislación nacional a los marcos

⁸⁵ Básicamente el Convenio 169 de la OIT plantea el reconocimiento de los derechos étnicos en dos cuerpos de disposiciones. El primero se refiere a los derechos individuales, entre los cuales presentan la posibilidad de gozar de libertades y derechos fundamentales, ejercicio y goce de los derechos ciudadanos, la toma en cuenta de las características culturales y socioeconómicas de aquellos sujetos que incurran en conductas antisociales, prohibición de la esclavitud, garantía de una contratación justa en cargos públicos y privados y el derecho a la formación profesional. El segundo se refiere a los derechos colectivos de las comunidades, entre los cuales se encuentran el derecho a la conservación de su patrimonio físico y cultural, a mejorar sus condiciones de vida y recibir cooperación para este fin, a la participación y decisión de su propio futuro, a la cooperación del

establecidos por el convenio, fundamentados en el reconocimiento de derechos a pueblos indígenas y tribales dentro de los estados nacionales. De esta manera doce países latinoamericanos, en el lapso de menos de diez años, reforman sus constituciones a fin de reconocer la composición pluriétnica y multicultural de sus naciones, dejando atrás la anterior concepción homogeneizante del estado-nación. En Colombia, la constitución de 1991 retoma esta iniciativa introduciendo al país en la lógica del reconocimiento multiculturalista. Este hecho significó que poblaciones marginadas o excluidas dentro de los procesos de construcción nacional, como el caso de las poblaciones indígenas y negras, fueran incluidas a la vez que algunos derechos especiales les fueron otorgados.

Un elemento a resaltar de este giro multicultural es que en el contexto de afirmación de la diversidad cultural de los países de la región se observó una dinámica de visibilización política creciente de las poblaciones negras e indígenas. Hay que señalar que lo que se podría llamar el “modelo indígena” de politización se constituyó en punto de referencia importante para estas nuevas dinámicas de reconocimiento para los grupos negros (ley 70 de 1993). Se trató de aprender de las experiencias exitosas de luchas indígenas que lograron el reconocimiento de derechos en varios países de la región poniendo en el centro de su discurso su diferencia cultural, articulándolo con las exigencias de derechos territoriales y otras reivindicaciones sociales y políticas, teniendo como argumento central el definirse ahora como grupos étnicos.

Algunos de los aspectos más relevantes de este giro multicultural fueron la transformación de la concepción de estas poblaciones a través del lente étnico, una sola concepción de sus territorios (bajo dos modelos paradigmáticos: la reserva indígena y el palenque negro), la necesidad de una juridicidad especial y la exigencia de inventarse o de adaptar al lenguaje estatal las formas organizativas étnicas. Visto de esta manera, podría decirse que es sólo a finales de la década de 1980 que los estudios y procesos de movilización de poblaciones negras se transforman de manera significativa, haciéndose más visibles de la mano de los procesos de movilización social y de la etnización de estas poblaciones bajo el marco otorgado por las constituciones multiculturales.

estado en la protección de su vida, su cultura y del medio ambiente de sus territorios, a la conservación de sus tradiciones e instituciones, a la demanda y obtención de justicia, a la tierra.

Un elemento a tener en consideración es que el reconocimiento otorgado, si bien ha significado una ganancia, también ha acarreado la generación de tensiones étnicas y sociales debido a la puesta en marcha de diversos tipos de legislación. Estas en su gran mayoría otorgan derechos de carácter étnico sobre el gobierno y la administración de territorios colectivos a algunas poblaciones (en su gran mayoría poblaciones indígenas y negras que responden a los modelos etnicistas), marginando a otras poblaciones que no se definen étnicamente (como poblaciones campesinas, mestizas o poblaciones negras que habitan en contextos urbanos). Esta situación ha tendido a manifestarse tanto por las vías del conflicto, como en la competencia por recursos, liderazgos y territorialidades comunes y fronterizas en diferentes lugares. De manera paradójica, el reconocimiento multicultural a la par que reconocía ciertas formas de colectividad y asociación humana, marginó otros sujetos y colectividades igualmente presentes en las formaciones sociales latinoamericanas. Dichos enfrentamientos pueden enmarcarse como conflictos inter-étnicos en la competencia por los derechos y los privilegios emanados de la nueva juridicidad. Sin embargo, en el marco de una legalidad que atraviesa y define los usos de la etnicidad, parece conveniente adicionar a la categoría interétnica una segunda clasificación, entre conflictos jurídicamente simétricos, si ambas colectividades son beneficiarias del reconocimiento multicultural, y conflictos híbridos o cultural y jurídicamente asimétricos (entre sujetos definidos o recreados bajo la matriz étnica) y aquellos sujetos que no se definen ni son reconocidos como sujetos étnicos y que más bien forman parte de una configuración mestiza (Losonczy 2002: 235).

Ahora, para el caso colombiano, la constitución política de 1991 reconoció las poblaciones indígenas, negras, gitanas rom y raizales como expresiones de la diversidad de la nación. Como era de esperarse, teniendo en cuenta la influencia de las organizaciones y movilizaciones indígenas en la nueva constitución colombiana, este reconocimiento etnicista se configuró bajo el modelo andino de las poblaciones indígenas. Para las poblaciones negras, la adaptación de dicho modelo se realizó utilizando como referencia los casos de las poblaciones negras del Pacífico reconocidas bajo el modelo de comunidad, así como el caso de Palenque de San Basilio en el Caribe continental. Estos casos permitieron acomodar el reconocimiento de las poblaciones negras de un modo equiparable al de las poblaciones indígenas, alejando el reconocimiento de los centros urbanos y situándolo en

las márgenes del estado nación. En todo caso el reconocimiento multicultural para las comunidades negras en Colombia se plasmaría en el Artículo Transitorio 55 y luego en la Ley 70 de 1993, permitiendo a un número considerable de comunidades negras acceder a la titulación de territorios colectivos en contextos rurales.

4.2. “Pobladores” construyendo “comunidades”, “comunidades” construyendo región

En esta parte analizaremos como las configuraciones específicas de nivel regional inciden en las formas organizativas que se configuran en cada espacio. Se analizará desde la comunidad como lugar social, para luego identificar en la segunda parte las particularidades del Magdalena medio y del suroccidente colombiano.

4.2.1. La comunidad como lugar social

La “comunidad” desde Weber alude al proceso de comunalización, inserto en su teoría de la acción social; o bien, desde la antropología, podría remitir a la unidad básica de análisis para los estudios de la cultura y los procesos sociales; desde las experiencias etnográficas es posible entenderla en términos generales como la “vida en común” de un conjunto articulado de personas, atados históricamente y con vínculos cotidianos, con relaciones parentales más o menos directas dependiendo del caso. En las elaboraciones teóricas sobre la etnicidad, la comunidad es asumida como una suerte de unidad práctica donde se realiza la etnicidad. Este último concepto, por cierto, está fuertemente inserto en una discusión que cuestiona su naturalización y problematiza dos vínculos que de cierta manera la determinan: (1) su relación con los procesos de racialización y (2) sus vínculos con los procesos de movilización social y política (Camus, 2006; Balslev y Gutiérrez, 2008).

El concepto de “comunidad” ha sido trabajado desde distintas perspectivas teóricas. La comunidad puede entenderse desde su definición sociológica weberiana, o desde su capacidad de crear lazos sociales. Para los propósitos de esta tesis, siguiendo lo conversado

y caminado, las “comunidades” son una expresión en movimiento, que desde los límites de una perspectiva social, pueden denominarse “espacio local”; o desde una visión político-administrativa para Colombia, se llamaría “corregimiento” o “vereda”. Pero no se quedan allí, las “comunidades” hacen alusión a la voz de la gente, a la unidad organizativa de vecinos, en las que confluyen las diversas relaciones de construcción de “identidad próxima” y de posibilidades de diversidad en lo común. En tal medida, las comunidades no las conforma un gremio o sector social determinado.

Victor Turner al referirse al papel del ritual en la estructura social, expande el término de “liminalidad” como un “tiempo y lugar de alejamiento de los procedimientos normales de la acción social, que puede contemplarse como un periodo de revisión exhaustivo de los axiomas y valores centrales de la cultura en que se produce (Turner, 1988, 171). La liminalidad denota una fase de particular ambigüedad cultural en la que los participantes del ritual adquirirán una condición homogenizante e igualitarismo, que hace posible el desarrollo de interacciones humanas distintas al de la sociedad “como sistema estructurado, diferenciado y a menudo jerárquico de posiciones..que separan a los hombres en términos de mas o menos (ibid 103). Esta forma diferenciada de interacción social la denomina “communitas” , modalidad de relación en el ámbito de la vida en común, que promueve un momento de comunión entre los integrantes y componen el grupo social.

Por lo anterior, esta “identidad próxima” no está exenta de conflictos y de contradicciones. La comunidad no es una identidad próxima como sujeto connotado, sino como habitante denotado de un lugar, con un propósito organizativo definido en términos de reivindicación próxima, de necesidad, de interés o de deseo, que se expresa en sus ritualidades, unas de las cuales son las formas como se expresan y denominan las luchas concretadas en las movilizaciones la movilización como expresión ritual de la communitas, plantea que la proximidad no necesariamente es geográfica.

La noción de comunidades va adquiriendo valor como “relación de sujetos múltiples y comunes” a lo largo de las movilizaciones, que se asumen como procesos de lucha; convirtiéndose en sujetos “pobladores”, como connotación colectiva en movimiento. “En cada vereda una junta. En cada corregimiento una asociación. En cada municipio un movimiento”- afirmará Henry Montenegro, líder de los procesos de lucha del Sur de

Bolívar en los años noventa. La noción plural del nombre va ganando relevancia en la medida en que la movilización por la región se hace más evidente. No se puede hablar de un lugar específico, de un corregimiento específico o de un conjunto de corregimientos y veredas en la escala de un municipio, porque las “comunidades” trascienden sus límites, pues se entenderán más a la manera de “lugar social de vida”. Pero tampoco se puede hablar de la singularidad de una “comunidad” cuando las exigencias y los motores de las mismas se combinan y transforman.

En Colombia, la invocación de las comunidades está, hasta cierto punto, relacionada con las juntas de Acción Comunal. Aclaro que estas juntas son una forma institucionalizada de las comunidades. Aunque estas últimas no se reducen a ellas, han incentivado la organización comunitaria y lograron darle una vía para su existencia. En 1957, entrelazando la necesidad de estimular una mayor participación de la población en el conjunto de apuestas desarrollistas, y al mismo tiempo promover una mayor vigilancia social, se impulsa oficialmente la creación de Juntas de Acción Comunal. Una forma de organización local cuyos miembros eligen en asamblea una dirección que es propiamente “la junta” y cuya función es velar por los intereses comunes de la localidad que representan. Al poco tiempo de su fundación, éstas comienzan a proliferar en los diversos rincones del país, a nivel urbano y rural.

Dichas juntas desde su nacimiento acarrearán en su interior orientaciones contrarias. Por un lado, hacen parte de la cadena clientelista promovida por los partidos tradicionales –Liberal y Conservador- que les permite mantener un caudal electoral cautivo, por medio de: (1) prebendas (en su mayoría presupuesto, puestos, etc., privilegios); (2) prestigios, expresados en la promoción de liderazgos locales y la posibilidad de avanzar en los circuitos de dirección de los partidos; y (3) control de la movilidad social, por medio del manejo de cupos y garantías en educación, salud, servicios públicos o vivienda. Por otro lado, las juntas promueven un escenario de encuentro, reflexión permanente de los problemas más sentidos de la población, incitan a formas de organización para reclamos diferenciados de los circuitos clásicos del poder, y son permeadas por procesos que irrumpen la vida social, acuciando debates ideológicos y políticos contrarios al régimen. Esta doble cara de las Juntas de Acción Comunal (en adelante JAC), por una parte como mecanismo de

instrumentalización de líderes por parte del estado y, por otra, como escenario de organización y conspiración social, ha permanecido en su historia. En ellas las experiencias de vida, que hemos relatado en el capítulo 2, logran construir significaciones en tanto aprendizajes prácticos, formas de hacer y estar.

También existen espacios de decisión como las asambleas y talleres en donde las comunidades, construyen evocaciones, memorias e historias que logran poner en cuestión dimensiones natural-geográficas como el río o la serranía, lo que fue y se anhela recuperar. Incluso estas evocaciones parten de orígenes narrados y representados de maneras disímiles y contradictorias en contextos más amplios y lejanos. Un ejemplo de ello, en el Magdalena Medio es que la cultura ribereña asume una identidad “costeña”, pero sin estar en la costa del mar. Pero más allá esta misma identidad hace confluír lo “costeño” con orígenes y tradiciones boyacenses (del interior) y con vitalidades bolivarenses. Se trata así de un tejido de confluencias culturales que hace que se pierden las fronteras administrativas y políticas. En contraste, vemos cómo el estado recurre a multiplicar jurisdicciones político administrativas como intentando capturar las diversidades: siete municipios han aparecido en los últimos 20 años en el Sur de Bolívar y 4 en el Cauca.

Algunas veces, al interior de las comunidades se da una suerte de metabolismo de las diferencias culturales que las interculturalizan al definirse por ejemplo como maciceño o poblador. De allí que la “región” se convierte en adscripción identitaria con significaciones diferentes dependiendo de los contextos de los cuales emana su carácter, que puede ser veredal, intermunicipal, inter departamental. Otras están atadas a una suerte de “linaje” común que se remonta a cuestiones como los palenques en el siglo XVII de Arenal o Norosí, o al pasado colonial de Simití, o la avanzada progresista de Santa Rosa y San Pablo, o la capacidad de conformar un nueva adscripción para las regalías como Cantagallo, en el Magdalena Medio. En el suroccidente. Las identidades o identificaciones con la región encuentran sus referentes en la participación en las guerras de independencia del XIX, la resistencia étnico y popular en el Cauca, o los movimientos cívicos, o la resistencia contra los terratenientes en Nariño. Un ir y venir del grupo al territorio como adscripciones en continuo juego.

4.2.2. Los pobladores

La configuración regional está atravesada por distintas dimensiones (la dinámica territorial, las formas productivas, las construcciones culturales, las relaciones de poder) y por diversos procesos, relacionados con las diásporas, las bonanzas y enclaves económicos, las formas de producción agraria y pesquera, el conflicto político-militar y las formas organizativas. La perspectiva de análisis de esta tesis intenta comprender que las interrelaciones entre dinámicas y procesos están marcadas por la vitalidad constituyente ejercida por las diversas poblaciones a partir de la movilización social.

En el ir y venir de quienes pueblan la región, los recorridos y migraciones internas, las prácticas productivas, las formas de participación y de organizarse, la cotidianidad familiar, la vida fiestera y las formas de habitar, así como de ordenar y usar el territorio, van definiendo y haciendo comunidad como resultado de entramados históricos y de urgencias actuales. Estas prácticas, en el Magdalena Medio, “marcan y generan un imaginario regional compartido [...] Una comunidad imaginada y emocional circunscrita por la serranía de San Lucas y el río Magdalena el enfrentamiento a similares procesos de vulnerabilidad social”. (Plan Integral de Desarrollo y Defensa de los derechos Humanos del Magdalena Medio, 1999, p. 164).

Yo llegué al Sur de Bolívar en 1971 de Caldas —narra don Gabriel—. En el Sur de Bolívar habían muy pocos habitantes. Ahí por San Pablo, Simití, estaban empezando a colonizar, en partes (...) en partes porque en otras ya había gente del 48 al 50. Porque esto, estas colonizaciones nacen del 48 para acá, a causa del desplazamiento de la población del Magdalena Medio, del Valle del Cauca, de muchas partes donde desplazaron con la violencia política, que es lo mismo que está ocurriendo hoy en día, y donde también habían unos intereses económicos. Y empezamos a construir las juntas de acción comunal porque no había nada en esta región; ahí no había nada de infraestructura.⁸⁶

Este “construir” del que habla Don Gabriel, líder reconocido de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, va dando lugar a la noción de “comunidades”, que empieza a acompañarse con adjetivos como “marginadas” y “excluidas” con respecto a las políticas de distribución de riqueza, de propiedad sobre la tierra y de participación política, orientadas

⁸⁶ Reconstrucción de una conversación con don Gabriel, líder de Fedegromisbol, Bogotá, junio de 2008.

por el Estado. Desde esta caracterización negativa, en las movilizaciones emergen otras que se muestran como potencia social: “Los excluidos y marginados primero, (quienes) están llevando a cabo procesos de revaloración y reconstrucción de su identidad con derecho a sentirse diferentes y orgullosos de sus diferencias, segundo, adelantan la apropiación de una cosmovisión distinta a la que impone el pensamiento desarrollista, criticando su aplicación mecánica y las consecuencias que provoca”. (Plan Integral de Desarrollo y Defensa de los derechos Humanos del Magdalena Medio, 1999, p. 164).

Para los pueblos indígenas y campesinos del Suroccidente la lucha les permite reencontrarse con sus raíces, con los mayores, con los tiempos de adelante, para entender cómo se era y qué se ha perdido, pero también, para asumir los nuevos retos de lo que podemos y quieren ser, como lo reafirman dirigentes de la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) en La María (Cauca):

las comunidades siempre han existido, lo que ha pasado es que quieren sacarnos, así ha sido desde hace 500 años. Se niega nuestra pervivencia, se niegan nuestras costumbres (...) por eso tampoco reconocemos la independencia, porque ese proceso no reconoció nuestras comunidades, nos quiso poner a todos iguales (...) las comunidades nos dicen -: “nosotros no queremos ser así”.⁸⁷

Unos y otros en el momento de estar en la marcha, en el paro, en el bloqueo o en el éxodo, expresan su interés en regresar a su tierra, pues no quieren sólo unas mejores condiciones de vida en abstracto, sino que ellas deben realizarse en los lugares donde viven las comunidades. Las comunidades se movilizan y cuando enfrentan experiencias de desplazamiento forzado, a causa del conflicto armado que vive el país, sueñan y buscan “volver”: “Nosotros queremos volver a nuestras tierras por nuestros padres y los viejos que vivieron allí, porque son nuestras tierras las que por años hemos trabajado, porque somos campesinos y estamos enseñados al campo y si nosotros nos vamos quién lo va a sembrar”.⁸⁸

De hecho, la resistencia frente al desplazamiento como único horizonte en los años noventa, resultó para los líderes y comunidades del Sur de Bolívar convertido en una

⁸⁷ Conversatorio, La María-Piendamó, julio de 2010.

⁸⁸ Expresión de un poblador Sur de Bolívar, Barranca, 1998.

advertencia de malestar. Frente a su imagen la vida en sus comunidades resultó claramente beneficiada y alimentó el convencimiento y la capacidad de riesgo para seguir luchando por permanecer en sus territorios. En una fructífera conversación reciente con Teófilo Acuña de la Mesa de Interlocución del Suroccidente, el arraigo comunitario resultó bastante clarificado: “Llegamos a Bogotá y vimos gente viviendo debajo de los puentes y dijimos -: “esta no puede ser nuestra vida”. Fuimos a Barranca y nos gustó toda esa riqueza petrolera, pero nos espantó que existiera tanta pobreza al mismo tiempo. Y nos pusimos a pensar -: “Nosotros somos hijos o nietos de gente que ha tenido que desplazarse. Salir corriendo. Pues ya no más” (Reconstrucción de conversación con Teófilo Acuña, marzo de 2015).

En el sur de Bolívar, Micoahumado, corregimiento ubicado en el municipio de Morales, es una de las más emblemáticas poblaciones constructora de “comunidad”. El 60% de sus 6.000 habitantes trabajan en aparcería y son escasas las personas que tienen escrituras y títulos de las tierras en donde han trabajado durante años. Desde los años 70 se fueron creando cooperativas de café, fríjol y panela que se consolidaron en la siguiente década, y se establecieron algunas huertas familiares, con el propósito de “*aprender a aprovechar los recursos de aquí mismo*”.⁸⁹ Con el café, la panela y el fríjol se obtuvieron excedentes y se consolidó la economía campesina del lugar. Esta situación cambió cuando los precios de los productos bajaron y las comunidades tuvieron que reemplazar sus cultivos y, en algunos casos, sembrar marihuana y luego coca, hasta llegar a depender de la compra de alimentos foráneos. La situación se tornó más crítica con las fumigaciones.⁹⁰

El proceso de Micoahumado, como los de las minas que rodean la Teta de San Lucas o en Canelos (corregimientos del municipio de Santa Rosa), son ejemplos concretos de la forma como campesinos y mineros van buscando formas de organización propias, capaces de

⁸⁹ Desde tiempo atrás, en la región de Micoahumado han abundado las cosechas de fríjol y café, por ello se fundó hace más de quince años aproximadamente la empresa asociativa *Café Micoahumado y Asopromic* (Asociación de productores de Micoahumado). “Actualmente, en el desarrollo de este proceso soberano, hay dos motoazadas para facilitar medios de producción a las familias más pobres, para transformar el terreno y hacerlo más productivo; se trata de contar con condiciones y herramientas para producir mejor”. (*Documento de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado*, 2003).

⁹⁰ Por ejemplo, el balance presentado en Micoahumado, después de su fumigación con glifosato fue de 25 hectáreas de coca efectivamente afectadas y 300 hes. dañadas de cultivos de pancoger. Esto desestabilizó a la población campesina y generó su desplazamiento (Reyes, Alejandro, 1998, “Regionalización de los conflictos agrarios y la violencia política en Colombia”: Sarmiento A., Libardo, *Municipios y regiones de Colombia. Una mirada desde la sociedad civil*, Bogotá, Fundación Social.)

solucionar sus problemas locales desde la dinámica comunitaria. En las minas, organizarse para el aprovechamiento del oro, implicó la creación de una red solidaria entre los mineros, los arrieros que traían los insumos y algunos campesinos que cultivaban los alimentos. Esta relación construyó una forma de hacer “comunidad” desde la cooperación. Otro es el caso de Canelos, donde la explotación desmesurada de la madera dio lugar a un proceso de regulación por parte de los pobladores. Desde aquí se generaron inversiones colectivas para cultivar caña de azúcar, con la idea de mantener un equilibrio con el monte.

Desde los años 90, la movilización social regional se presenta en un momento en que la tendencia homogeneizante de la “aldea global” se confronta con otra realidad: la explosión de diversas formas de expresar la diversidad, dada la amplia gama de identidades desde las cuales los distintos actores sociales se convocan. En el análisis de la emergencia de las reivindicaciones colectivas y de las diversas formas de identidad que se trazan en ellas, recobra valor explicativo la categoría de “la lucha social” como expresión de lo común.

Retomando lo anterior, entendemos que la articulación que emerge y se constituye en “la lucha” es una expresión política que parte no sólo del proceso de “latencia”, sino como “potencia”. Un proceso de construcción de sentidos de vida que se va gestando en la interrelación de las comunidades y que emerge, en un segundo momento, al recurrir a la construcción de pliegos y programas para posicionarse como sujetos políticos en disputa en escalas distintas: local, regional y nacional. En las marchas, paros, tomas y éxodos, los pobladores regionales fortalecen los vínculos comunitarios que proporcionan las bases para proyectar una visión estratégica de lo regional frente al Estado.

El establecimiento de mesas de negociación con el Estado será inicialmente el reconocimiento de los pobladores como sujeto social y manifestará la intención por trascender la noción de ciudadanía en tanto constructo jurídico de derechos y deberes civiles individuales. La lucha social de los pobladores sustenta una propuesta política que reclama, no sólo una serie de demandas y la manifestación de denuncias frente al Estado, sino que interpela su transformación. No hablamos del paso de “lo social” a “lo político” sino de la emergencia de “lo político” como dimensión de “lo social”. Este proceso se fortalece en la medida en que, por un lado, el Estado incumple las negociaciones y reproduce un imaginario criminalizador sobre las regiones y sus pobladores; y por el otro,

con la conformación de redes y organizaciones nacionales en las que son protagonistas los pobladores regionales. Desde esta lectura serán descritos distintos episodios de movilización que se constituyen como prácticas de lucha por la construcción social regional, expresadas a través de la reafirmación de “vida digna”.

Estos procesos locales defendidos desde la movilización de los campesinos, arrieros y mineros van dibujando los gestos de un proceso de construcción territorial desde la conformación y fortalecimiento de sus “comunidades”. Como afirma Mondragón (2001) para el caso colombiano, el derecho a la tierra: “desde el punto de vista de la comunidad rural no es solamente el derecho a un lote o parcela sino a un territorio, que incluye el medio ambiente, los ecosistemas y las relaciones políticas y culturales con el espacio. Este derecho nace de la existencia misma de las comunidades rurales para las cuales la tierra es el espacio para la subsistencia física, social y cultural”.

4.3. Las organizaciones

4.3.1. Federación Agrominera del Sur de Bolívar –FEDEAGROMISBOL

Cuando Humberto de Jesús Ruiz, de 67 años, recibió la orden de legalizar la mina de donde él y sus antepasados han extraído oro en forma artesanal por más de un siglo, estiró los brazos y repasó sus callosas manos sobre la tierra: "Debe ser un invento del gobierno para quitarnos nuestra mina", pensó (Semana, 2005). La Federación Agrominera del Sur de Bolívar nació a mediados de los años 90 con el nombre de Asociación Agrominera del Sur de Bolívar, cuando los mineros, los productores de café y los agricultores en general, decidieron asociarse para juntos enfrentar la crisis agropecuaria. Luego fue denominada Fedegromisbol y desde allí hasta la fecha, juega un papel central en las luchas de los pobladores de la región para reclamar la satisfacción de sus necesidades básicas y el respeto a los derechos fundamentales de los pobladores. Reúne a 3500 campesinos y mineros que

trabajan en la zona y ha encabezado las denuncias y las movilizaciones que exigen respeto a sus derechos mineros.⁹¹

En el Sur de Bolívar, la serranía de San Lucas tiene también el color del oro. En esta zona de fuerte explotación minera artesanal, la vida de las comunidades campesino-mineras ha enfrentado una serie de relaciones adversas con la explotación mafiosa de las minas y con la comercialización formal (que le arrebató las regalías), al tiempo que debe enfrentar las múltiples reformas de legislación minera del Estado.

En los últimos 30 años, estos mineros artesanales también han soportado los rigores de la guerra que para ellos significa una lucha por el “control de estas tierras y sus riquezas”. El conflicto en los municipios mineros se hace evidente en la confrontación entre los intereses de estas comunidades y de quienes desean explotar a gran escala el oro de la Serranía. De cara a la crisis agropecuaria que ha afectado al país y frente a los ataques de los sectores interesados en la explotación extensiva de sus recursos, los mineros se unen a los productores de café y a otros agricultores en general, para fundar a mediados de los años 90 la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar, que con los años se llamaría Federación Agrominera del Sur de Bolívar. La Federación comienza reclamando mayores garantías para la producción y mercadeo de los productos de sus asociados, hasta llegar a defender la satisfacción de las necesidades básicas y el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades. De esta manera, más allá de los intereses gremiales, Fedeagromisbol se consolida como una organización regional y se erige en nombre de las “comunidades”.

El espacio social minero se convierte en una especie de atractor para pensar y plantear problemas que están más allá del espacio social local en donde se constituyen las comunidades. Se va dando un proceso en el que los pobladores empiezan a construir referentes hacia una identidad mayor. Estos referentes comienzan a situarse en lo que primero se llamarán Comités de Integración de la Serranía de San Lucas, con cuya organización pretenden fortalecer las formas de vida y las relaciones con el territorio más allá de las comunidades, dándole importancia al manejo de las cuencas de los ríos, a las redes que tejen circuitos económicos y también empezando a construir una vocería

⁹¹ Documentos de presentación de Fedeagromisbol. Federación Agrominera del Sur de Bolívar, 2005-2010.

colectiva. A partir de aquí se articulan en una serie de organizaciones, entre las cuales Fedegromisbol es la más importante. Desde este instrumento los “pobladores del Sur de Bolívar” se erigirán como un sujeto político.

Las configuración regional como expresión de la lucha social “se van dando” al calor de las movilizaciones sociales, en el marco de la formación social colombiana: en sus pliegos, proyectos, planes y programas los pobladores se constituyen en sujetos sociales en movimiento que se manifiestan a partir de sentidos de vida, afirmaciones políticas, definiciones territoriales, defensas de la producción, etc. que alientan las iniciativas organizativas.

La lucha como expresión y emergencia de sujetos sociales en movimiento históricamente recreada, busca trascender la convergencia de actores sociales, así como la discusión entre antiguos y nuevos movimientos sociales. Así, en la lucha se articulan las reivindicaciones campesinas y medioambientales, las cívicas y las feministas, las que se refieren a reivindicaciones de participación frente al Estado, así como las que se articulan con referencia a la construcción de identidades. Siguiendo los trayectos de la lucha social, las marchas (grandes movilizaciones que buscan generar impacto regional y nacional) ponen en cuestión la forma como diversas identidades se relacionan en un campo de contradicción definido en la propuesta organizativa y la forma como se desarrollan las negociaciones. La reivindicación no es única, y desde su pluralidad expresa un sentir social que se proyecta políticamente en tanto se reivindica desde lo marginal, lo subordinado y lo popular.

En este proceso organizativo que va de las “comunidades” a los “espacios humanitarios”, se desprende un discurso y una práctica centrados en la “autonomía”. Hacemos referencia a una potencia que hace parte, por un lado, de un proceso de configuración regional en el que se han afirmado unas formas de producción que defienden en tanto campesinos y mineros; y por el otro, de una construcción discursiva que adquiere su fisonomía en un contexto de guerra y que va más allá de la interpelación a las instituciones del Estado. Estas formas de organización hacen parte del proceso de movilización en el que se constituyen como “sujetos políticos”; y lejos de implicar su sustracción del conflicto militar hacen posible su posicionamiento político-territorial dentro del mismo, como “comunidades en resistencia”. En las comunidades en resistencia, se evidencia un elemento de articulación con la acción

política, en el sentido de un deseo por establecer un nuevo “orden de vida” (Neveu, 2002). Pero siguiendo a Múnera, vamos un poco más allá, para encontrarnos con “el proyecto de vida digna” de las comunidades, cuya profundidad política se explica con la noción de “la lucha social.

La conjunción entre autonomía y resistencia les permite también generar una serie de relaciones a nivel nacional e internacional. Las primeras las establecen a través de dos vías: (1) por medio de la soberanía e independencia, como correlato nacional de esa autonomía local y (2) a través de su articulación en Red, que les permite posicionarse junto a otros sectores sociales de otras regiones para realizar una crítica al proyecto de Estado relacionado con los megaproyectos y la apertura económica. Desde aquí hacen un llamado a organizaciones internacionales para solidarizarse y generar una movilización que trascienda las fronteras de Colombia. Una estrategia internacional con varios propósitos: realizar una denuncia por la situación de los derechos humanos y, como parte de la “identidad performativa” campesina que referimos, convertirse en los portavoces de propuestas alter mundistas que combinan lo ambiental con la seguridad alimentaria (Leff, 1998). Este llamado internacional y la situación de negociación en la que se encuentran los pobladores, nos acercan a las definiciones que se están construyendo en la actualidad sobre la noción de campesino como sujeto cosmopolita.⁹²

El proceso histórico de configuración regional en el Sur de Bolívar evidencia la presencia de fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas que trazan, a su vez, las tensiones y los conflictos presentes en diferentes momentos de su historia. Para quienes reivindican, desde la movilización social, al Sur de Bolívar como parte de la región del Magdalena Medio, la confrontación aparece entre su deseo de constituirse como los constructores de un proyecto

⁹² “En el caso colombiano es imposible construir una idea sobre el campesinado sin tener presentes las tendencias de la producción agropecuaria, los procesos políticos, el rol de la violencia y la presencia de múltiples actores en el campo. A partir de estos factores se caracterizó al campesinado colombiano como:

- Un sujeto social dueño de un acervo impresionante de capacidades, que le permiten disputar su permanencia en los procesos productivos.
- Un sujeto multiactivo desde el punto de vista de su actividad económica.
- Un sujeto participativo en relación con la reivindicación y exigibilidad de sus derechos ciudadanos.
- Un sujeto cosmopolita en su acción social y política, dados los procesos de negociación que ha debido adelantar con los otros actores rurales para lograr su reproducción social y el enriquecimiento de sus identidades » (Salgado, Carlos y Prada, Esmeralda, 2000, *Campesinado y protesta social en Colombia 1980-1995*, Bogotá: CINEP, p. 30).

regional teniendo como horizonte la “vida digna” de los pobladores y las comunidades, frente a los intereses que defienden modelos de desarrollo basados en la agroexportación, la explotación extensiva, el cultivo y la comercialización de coca. Al entender de las “comunidades”, son las instituciones del Estado a quienes no les interesaría el afianzamiento de un sentido de pertenencia e identidad regional. Son ellas, las que seguirían reproduciendo la desarticulación físico-espacial del territorio, al carecer de vías de comunicación y servicios básicos. Son ellas quienes evitarían la conformación de mercados internos y de redes técnico-económicas. Y son ellas las que estarían promoviendo la salida militarista, consolidada en el proyecto paramilitar. Para las comunidades, todos estos hechos en conjunto evidencian la intención del Estado colombiano hacia la desintegración regional.

Así describe territorialmente a la región don Gabriel, vocero del Sur de Bolívar:

Los intereses económicos en el Sur de Bolívar son muchos. Es un territorio que hídricamente es muy rico, hay muy buenas aguas; forestalmente hay un territorio que son maderables, las tierras son muy fértiles, hay minas de oro, hay petróleo, hay intereses de cultivar la palma africana. Y uno va viendo que al paso que van reprimiendo a la población, que al paso que van sacando gente, van quedando las tierras de otras personas y también van avanzando los proyectos, los megaproyectos [...] que piden concesión al Estado [de] unos territorios que han sido de los mineros.⁹³

4.3.2. La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra ACVC

Gilberto Guerra, coordinador general de la ACVC, durante entrevista realizada por Silvia Becerra en la vereda Puerto Matilde, Valle del Río Cimitarra, Magdalena Medio, en septiembre de 2004, describe una periodización en donde se evidencia el camino de gestación y fortalecimiento que consolida el proceso para la creación de la Asociación Campesina del valle del río Cimitarra:

Una primera fase ha sido denominada como “cooperativismo”, desde la década de 1980 hasta 1992, caracterizada por la confianza de la población hacia los líderes campesinos,

⁹³ Testimonio recopilado en el video documental “Sur de Bolívar”, 2005.

quienes manejaban los recursos de toda la comunidad. Las relaciones económicas entre las diferentes comunidades de Yondó y Remedios estaban basadas en el trueque y el intercambio. Se cambiaba oro y madera (principales recursos de la región), por productos agrícolas que allí no se cultivaban.

La *cooperativa* era vista no simplemente como una estructura física, era la propuesta del cooperativismo como forma de organización social que, basada en unas relaciones económicas de cooperación, estructuraba un tejido social. Era una forma de concebir un modelo económico, fuera de intermediarios que permitieran la especulación, y un modelo de relaciones sociales donde primara la equidad y la solidaridad.

La primera experiencia para la consolidación de esta propuesta fue la formación de *tiendas comunitarias o cooperativas*. Éstas eran coordinadas por un consejo administrativo de cooperativas y tenían un administrador a cargo en cada sede. Este periodo fue de gran auge. Se llegaron a formar varias *tiendas*. Inclusive algunos ganaderos de la zona adquirían allí productos, pues era más económico que comprarlos en los municipios más cercanos. Todas las relaciones comerciales estaban mediadas por las cooperativas:

...en aquella época, formaron una estructura orgánica que se llamó la cooperativa, y esa cooperativa era la organización que movía a los campesinos en torno a un proyecto social en el marco de la reforma agraria, la entrega de tierras, parcelas, se llaman parcelas, eh, había un comité de tierras que se encargaba de todo esto y organizar a la gente para hacer los frentes, las escuelas, las casetas comunales y todo eso (...) y tenían un nivel organizativo y político que les permitía avanzar en el nivel organizativo; esa cooperativa creció mucho, tuvo varias sedes en Yondó, en Remedios, y hacía una comercialización directa, en doble vía, porque traía los productos directamente de Medellín y Bogotá y los colocaba al mismo precio que estaban en Medellín y en Bogotá, con esas lejanías y compraba la madera y el oro y los demás productos que salieran con un precio sostenido, de manera que no había explotación; es decir, no había intermediación ni en los productos que entraban y salían de la región por lo tanto los campesinos tenían unos excedentes que les permitían un nivel de vida, pues, alto de alguna manera (entrevista a líder de la ACVC, 2004).

Un momento que abarca el periodo 1993-1996, es cuando se hizo una evaluación del periodo anterior y se observó que se había adquirido fortaleza económica y organizativa, pero que la comunidad “estaba sola”. Empezó entonces un proceso que se planteó la necesidad de

primero que todo pronunciarnos, así no nos escucharan, pero sentar un precedente de que no estábamos de acuerdo en las decisiones que habían tomado los ganaderos y sobretodo con relación a los derechos humanos; entonces empezamos a armar como unos documentales que tenían que ver con nombres de ganaderos comprometidos en asesinatos (*Ibíd.*)

Luego de esto, los campesinos del Valle del Río Cimitarra iniciaron un proceso de reorganización y de sobrevivencia para aguantar la ofensiva militar y las nuevas dinámicas económicas que se estaban generando (Becerra, 2004).

También se desarrolló un proceso de articulación con otras dinámicas sociales organizativas del Magdalena Medio, principalmente con los trabajos asociativos del Sur de Bolívar, en especial con los campesinos y mineros de Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo. Fueron momentos de preparación para las jornadas de movilización que vendrían. Allí, los campesinos ganaron experiencia en procesos organizativos y en el crecimiento de su asociación.

4.3.3. Campesinos: familias campesinas, maciceños y pueblos

Las comunidades que habitan el Macizo Colombiano iniciaron a partir de la década de 1980 un interesante proceso de organización y movilización social y política, como respuesta a su hastío ante el olvido, la marginalidad y la pobreza, y con el propósito de generar reflexiones sobre el papel de los diversos sectores y actores sociales, en particular de las comunidades organizadas, en la planificación del desarrollo territorial y en la construcción de alianzas y arreglos institucionales.

Estas dinámicas van más allá de la afirmación etnográfica de experiencias comunes y particulares. En el entramado de la caracterización de estos dos casos, como pueblos, y no sólo desde las parcialidades y cabildos, se han configurado dispositivos claves en los

procesos de autonomía. En primer lugar, han desarrollado una reinterpretación histórica (“los tiempos de adelante”) sobre su ser como pueblo en el marco de la nación colombiana, para definirse como “pueblo originario” en el contexto del estado. En segundo lugar, han desarrollado una serie de mecanismos que les permiten jugar, combinando varias lógicas, con distintos actores -sean estos del orden económico o político, nacional o internacional- generando en todos ellos, una dinámica de toma de decisiones colectivas. En tercer lugar, han desarrollado procesos de articulación entre pueblos: primero, como pueblos misak y del Gran Cumbal, y luego, en el entramado caucano-valluno-huilense, los misak recrean relaciones con los nasa y la población afrocolombiana; mientras, los pastos hacen lo propio en el eje panamazónico (Pacífico, Andes y Amazonía) con un carácter binacional de articulación con el Ecuador. Con estas experiencias, la noción local de los cabildos, asume características regionales, que ponen a jugar otras potencialidades de decisión económica y política. Y en cuarto lugar, se encuentra el desenvolvimiento político a nivel nacional, como se ha señalado para los guambianos y pastos con su participación como AICO en el Senado de la República, así como en las comisiones de definición de política pública y en distintos escenarios internacionales.

Esta dinámica tiene dos características interesantes. Primero, hoy se juegan la experiencia y la expectativa de tres generaciones: los viejos luchadores de la recuperación de tierra y del rescate del pensamiento propio; una generación intermedia hija del proceso de la Constitución del 91, entrenada en la negociación política y diestra en el manejo de proyectos; y una generación de nuevos líderes, que han crecido entre la desconfianza de los abuelos y las dinámicas de sus padres. Esta última, está construyendo una serie de propuestas, en las cuales combinan la noción de autonomía desde una perspectiva culturalista y política, con la utilización de las herramientas técnicas y políticas de la sociedad nacional y de la globalización. Esta generación, más radical que la de sus padres y más abierta que la de sus abuelos, va abriendo nuevas formas de defender y asumir la autonomía. Y segundo, la experiencia frente al conflicto armado, en la cual ha destacado la autonomía como herramienta de protección, permite contar con una experiencia cierta de organización y negociación desde los propios postulados (derecho mayor, ley de origen) frente a agentes externos. Esta experiencia otorga un carácter concreto a la autonomía.

En toda esta experiencia se pone en claro que la autonomía para los pueblos indígenas va más allá del reconocimiento de la existencia y de la normatividad para la protección cultural, porque su sentido profundo busca evitar la integración que ha equiparado la organicidad y vida indígena a la sociedad nacional: resguardo igual a municipio, autoridad tradicional igual a autoridad político-administrativa. La reivindicación de la autonomía permite leer cómo se van conformando una serie de prácticas articuladas a partir de los recursos y cuya eficacia depende de la capacidad de gestión de las organizaciones. Entre la cofinanciación y el circuito regulado por las leyes, se define un complejo entramado de relaciones, alimentado por la estructura organizativa de los pueblos indígenas, con sus instancias de especialización y sus asociaciones. Un espacio donde se cuenta, cada vez más, con profesionales indígenas capacitados para la elaboración y desarrollo de proyectos. Allí se van estableciendo una serie de espacios de negociación alrededor de los recursos de transferencias, que hacen posible su funcionamiento.

Estos espacios de negociación están atravesados por la dinámica interna de las comunidades que se desarrolla también en medio de una serie de tensiones, entre las cuales encontramos la sucesión de autoridades para la elección anual del Cabildo, los cambios de las juntas directivas de las asociaciones y las alianzas regionales y nacionales. Los resguardos deben renovar sus autoridades cada año y tomar posesión en el mes de enero. En el Gran Cumbal, por ejemplo, se sigue el esquema rotativo ancestral entre las veredas que lo componen, hasta dar la vuelta completa. De tal manera, que cada año una de estas veredas establece 3 candidatos, quienes serán sometidos a votación. En otros resguardos, como el de Túquerres, se realizan verdaderas campañas políticas y la situación ha llegado a tal punto que su gobernador lleva más de 10 años en el cargo. Los guambianos, por su parte, reeligieron durante este año como gobernador a taita Lorenzo Muelas, pero esta situación no se produce a menudo.

Este cambio de las autoridades, muchas veces también sujeta a prácticas ajenas, presenta un problema de falta de continuidad en los proyectos y el amaño clientelista de quienes se postergan indefinidamente en los cargos; a todo esto se suma el cambio de directrices de

los gobiernos municipales cada cuatrienio. Ante este asunto, un grupo de exgobernadores de cabildos del pueblo de los pastos, cree que la solución está, a nivel ejecutivo, en la conformación de un “Consejo de Mayores” en cada uno de los resguardos (Taller en Cumbal, 12 y 13 de junio de 2008).⁹⁴ El pueblo guambiano tiene el mismo problema, descrito de otra manera. Para los misak, el reconocimiento constitucional de 1991 y la euforia asociativa que de allí surgió, como un esfuerzo por constituir una institucionalidad de control inmediato con capacidad de percibir recursos, ha favorecido las rivalidades y la división interna. Por tal razón, han organizado a “Nunathaak”, como coordinación entre cabildos, cuya especificidad está en que no tendrá personería jurídica y por lo tanto no podrá percibir recursos (*Taita* Lorenzo Muelas, entrevista, mayo de 2008; taller en Guambia, 7 y 8 de agosto de 2008)

Al problema de la continuidad se agrega una relación conflictiva con los programas sociales y de apoyo del orden nacional, manejados por intereses particulares y en contravía del marco legal que los funda. Es el caso concreto del SISBEN, que tanto en Guambía como en el territorio de los pastos ha sido utilizado por funcionarios públicos y por políticos locales para dividir a los resguardos. La utilización de recursos como el del “rumor”, que amenaza con que las personas registradas en los censos indígenas no pueden ser beneficiarias del programa, ha implicado la disminución de los censos en los resguardos. Ante este problema, la mayor parte de los cabildos pastos, por ejemplo, se han visto abocados a cofinanciar los carnets del SISBEN para solucionar una queja constante de la población y demostrar que la norma no los excluye. Frente a este tipo de problemas, los líderes declaran a estos programas asistencialistas como los enemigos del proceso en búsqueda de la autonomía. Son estos programas, a la par del control político ejercido por las prácticas bipartidistas que están volviendo a ejercer su poder sobre los pueblos indígenas, los que han fragmentado y vuelto dependientes a las comunidades, contrariando su lucha por la autonomía (taller en Cumbal, 12 y 13 junio de 2008). De allí mismo se desprende otro problema: partes importantes de estos recursos han sido invertidos en la cofinanciación de asuntos que son competencia de otras instancias político-administrativas.

⁹⁴ Una propuesta, sustentada en una noción de “Autoridad” que alude, no a la posesión de un cargo institucional, sino a toda una experiencia de vida (por eso son mayores) de “actuar con justicia”, de “ser sabio” y “tener la palabra”.

Es el caso concreto de la común inversión para la cofinanciación del arreglo de carreteras, que son obligación del departamento o del municipio.

Una experiencia de gobernabilidad en el campo de la salud, que se sale de aquel marco problemático, es la propuesta y desarrollo del Hospital Mamá Dominga en Guambía. A lo largo de 10 años, ha logrado un nivel de desempeño que incluso ha sido asumido por algunos mestizos de Silvia. En él, la coordinación no se hace como “servicio” de salud sino como un “sistema” que pone en relación a las prácticas de la medicina tradicional con los planes epidemiológicos. Al mismo tiempo articula los rubros para seguridad alimentaria con los problemas de asentamientos y los problemas de saneamiento básico. Todos ellos son asumidos integralmente (conversación con el director del Hospital Mamá Dominga, taita Jairo Tunubalá, abril 2008 y taita Lorenzo Muelas, mayo de 2008).

La capacidad para desarrollar la gobernabilidad de las problemáticas económicas es el resultado de esta compleja trama interna de los pueblos. A diferencia de la autonomía, las experiencias de gobernabilidad aún no se encuentran en una discusión como ‘pueblo’, siguen dependiendo de las características particulares de la configuración de las negociaciones de cada cabildo. Esto significa que varían dependiendo del lugar y la coyuntura en la que se desarrolle. Están sujetas al lugar, porque las relaciones de gobernabilidad se establecen aún dependiendo de las autoridades de cada resguardo, del alcalde del municipio y de las relaciones que se tengan con los diversos niveles que están incluidos en el proceso de las transferencias. Así, por ejemplo, al mismo tiempo un resguardo pasto como el de Guachucal ha hecho hincapié en la compra de tierras, mientras el de Chiles en la infraestructura y la construcción de las IPS, y el de Cumbal en la educación, sin que ello signifique que los otros resguardos no tengan como prioridad los tres rubros. Y están sujetas a las coyunturas, de acuerdo con los momentos y las relaciones políticas y prácticas entre las autoridades y las instancias del estado elegidas periódicamente, sujetas a las contingencias de su pertenencia étnica y/o partidaria.

Estas contingencias de lugar y coyuntura, como situaciones que determinan posibilidades concretas de gobernabilidad, dificultan la definición precisa de modelos para el manejo de

transferencias en Colombia, tanto a nivel de pueblos, como de regiones. Lo que hemos podido observar es que las prácticas son similares cuando ciertas condiciones están dadas. Por ejemplo, cuando se cuenta con: (1) un alcalde indígena del mismo grupo que está en el Cabildo: esta situación permite una discusión con base en los planes de vida y una reflexión comunitaria amplia en la priorización de necesidades con posibilidades efectivas de implementarse; (2) si estas variables cambian, aunque se den las jornadas internas de reflexión comunitaria, las posibilidades de gestión y ejecución dependen del relacionamiento político de las autoridades indígenas; (3) cuando en el mismo caso anterior, lo que se transforma son las pautas de priorización, dependiendo de los grupos de presión al interior del resguardo. Este amplio marco de juego, apunta hacia la existencia de una matriz de posibilidades en el manejo de las transferencias que combina prácticas dependiendo de determinadas variables. Pero esta gama de posibilidades se reduce, como lo hemos mostrado, porque son las directrices institucionales a nivel nacional y municipal las que se constituyen en las variables determinantes para la relación y la negociación frente a las prácticas propias de los cabildos y resguardos.

Para los gobernadores entrevistados y organizaciones como el CRIC, esta reducción en las posibilidades de negociación cambiaría si se desarrollaran pautas de manejo de autonomía como pueblos, que permitieran una utilización de los recursos siguiendo planes globales de gestión. Pero esto sólo es posible con la existencia de las entidades territoriales indígenas, ETIS. Esta autonomía no significaría que no puedan existir controles en los municipios y a nivel nacional, lo que implica que estas relaciones se establezcan “de autoridad a autoridad” y no por medio de mecanismos de regulación homogéneos y atravesados por urgencias exógenas a la vida de los pueblos.

4.3.4. Procesos organizativos de mujeres en el Suroccidente

En la dinámica organizativa del Suroccidente, concretamente en los pueblos indígenas misak, de los pastos y quillacingas de Jenoy, se han abierto procesos organizativos de mujeres, en medio de las vidas organizativas de las comunidades, como parte de los procesos de “unificación” de las comunidades que constituyen a cada pueblo. Tales

procesos, que confluyeron en la iniciativa bautizada como “Mujeres tejiendo la Vida” entre el 2009 y el 2012, mostró entre otras dos búsquedas de las mujeres con intenciones y también temores frente a su organización como mujeres: (1) la búsqueda de reconocimiento frente a su trabajo y sus saberes, recogidos en tal iniciativa alrededor de la labor del tejido tan arraigado en estos pueblos; (2) el esfuerzo, tantas veces truncado y con tan complicada recepción por parte de sus comunidades, de expresar las exclusiones y humillaciones que viven como mujeres.

Quizá el pueblo que más ha logrado trabajar en este sentido es el pueblo de los pastos. Allí se logró identificar primero a la Consejería de la Mujer Indígena, que luego se denominó la Consejería de la Mujer del Pueblo de los Pastos anclada en el Plan Estratégico Binacional. La Consejería surge en el año 2006 como una iniciativa femenina del pueblo de los pastos, con el propósito de formarse como mujeres Consejeras de la Comunidad. Propósito anclado en el principio político de la centralidad de la “autoridad propia” en las formas de gobierno autónomas.

Somos 66 mujeres reunidas en los 21 resguardos pastos (3 por cada uno). Desde nuestra fundación hemos desarrollado un proyecto de fortalecimiento de los valores comunitarios alrededor del tejido, actividad que ha acompañado nuestra cotidianidad desde el principio de los tiempos. Hoy, la Consejería en ánimo de continuar y proyectar nuestra labor, planteamos nuevas formas de crecimiento y fortalecimiento, para constituirnos en tejedoras, no sólo de mochilas, tapetes, ruanas y otros artículos, sino también como tejedoras de saberes y tejedoras de comunidad, teniendo como principio fundamental el respeto por nuestra Pacha Mama y proponiéndonos mantener nuestro pensamiento propio, fortaleciendo nuestra identidad como pueblo y por consiguiente nuestra cultura” (documento constitutivo de la Consejería, 2006, inédito)

De esta manera, la Consejería de la Mujer Indígena estableció tres ejes de trabajo que son los siguientes: autoridad, trabajo e identidad cultural, con los que pretende viabilizar uno de sus propósitos: “formular, ejecutar y fortalecer proyectos de investigación-acción, que permitan generar procesos de reflexión recíprocos, tendientes a construir propuestas participativas y autónomas de desarrollo integral al interior de la comunidad de los pastos” (entrevista con Ligia Valenzuela, Cumbal, 2010). La Consejería va perdiendo fuerza entre otras razones por las dificultades de encontrarse en tan amplio territorio sin contar con un

presupuesto propio; al tiempo que se presentan problemas en la articulación del conjunto de comunidades que constituyen al pueblo de los Pastos. Así mismo, la centralidad de la participación de las mujeres de Cumbal causa malestar en otras de las allí representadas. En la actualidad, es el Cabildo Menor de Género de Cumbal el que recogerá el acumulado organizativo de las mujeres de la Consejería, pero ahora, ya no centrado en el pueblo de los pastos, sino en el resguardo específico de Cumbal.

La necesidad de generar espacios de mujeres para mujeres desde al menos dos intencionalidades se constituye a partir de presiones que se ejercen sobre las mujeres que participan de una u otra forma en los procesos políticos de sus comunidades. Por un lado, la existencia actual del machismo como traza de la vida cotidiana doméstica y pública, frente al cual resulta necesario generar lazos de solidaridad de género, así como un mecanismo concreto de educación de las mujeres. La Consejería de la Mujeres del Pueblo de los Pastos se organiza para rescatar la “autoridad de las mujeres” y el Cabildo Menor de Género es la única organización de mujeres en los pueblos con quienes se trabajó que reivindica directamente una posición de “género”. Valga aclarar que para hacerlo tuvo que supeditarla a la autoridad del “Cabildo Mayor”, compuesto mayoritariamente por hombres.

La dificultad para lograrlo en medio de las prevenciones de los hombres, sus esposos y las comunidades en general, les llevarán a usar al menos dos estrategias tácitas de reivindicación de su capacidad activa como mujeres en las vidas de sus pueblos: (a) la formación técnica y universitaria y (b) el cumplimiento paulatino de funciones comunitarias, más allá del acompañamiento en los cargos comunitarios de sus maridos.

En el caso del pueblo misak esta dificultad ha sido suprema. Liliana Pechené Muelas, importante líder joven de su pueblo, con algo más de 30 años, hija de una familia de “luchadoras”, tuvo que estudiar derecho y generar relaciones políticas externas para ir ganando espacios. En la actualidad es la representante de su pueblo en los dos principales Autos de la Corte Constitucional que garantizan derechos de los pueblos indígenas: el Auto 004 para la formulación de proyectos que garanticen la pervivencia de su pueblo y el Auto 092 para la defensa de las mujeres en el contexto del conflicto armado.

Las mujeres del pueblo quillacinga de Jenoy formaron un grupo de mujeres como parte del

Cabildo reconocido por el Ministerio del Interior, pero con autonomía, que osciló entre 10 y 15 mujeres. Ellas lograron trabajar durante algo más de cuatro años en torno a sus saberes y trabajos como mujeres. El tejido y el cultivo de la shagra les posibilitaron reunirse una vez a la semana. Incluso lograron alquilar una casita para reunirse y continuar con su trabajo. Finalmente, las reticencias de sus esposos frente al tiempo que les arrebataba a sus mujeres de las funciones del hogar, así como algunas riñas internas, han reducido al grupo a apenas 3 o 4 mujeres. Actualmente siguen trabajando en torno a la medicina tradicional.

Por otro lado, la organización de las mujeres se vuelve importante en el espacio de la gestión y el manejo de recursos dentro de las comunidades. La posibilidad de lograr desde aquí cierto grado de independencia económica, a partir de la puesta en marcha de proyectos productivos o bien a partir de la generación de una personería jurídica que permita la gestión y el manejo propio de ayudas y apoyos económicos, son algunos de los caminos recorridos por grupos de mujeres de estos pueblos. Las mujeres de Jenoy llegaron a vender sus productos y a constituir un pequeño fondo común que les permitió participar en actividades, ferias y encuentros. El Cabildo Menor de Género ha gestionado recursos, así como logrado la asignación de una casa dotada con máquinas de coser.

En unos y otros casos, la búsqueda de autonomía en las mujeres sale a relucir. Pero en el caso de las mujeres indígenas, éstas se preocupan por insistir en que aquella no afecta sus tradiciones y que se supedita a las “autoridades tradicionales”. Con las mujeres campesinas de Samaniego o las mujeres negras del norte del Cauca la situación cambia. Las primeras enfatizan en que son independientes, devengan jornales en sus trabajos. Enfatizan en que su problema tiene más que ver con la comercialización de sus productos, así como con los bajos precios que les ofrecen los intermediarios y frente a los cuales no cuentan con alternativas (Encuentro de Mujeres Tejiendo la vida, Sibundoy, noviembre de 2011). Ellas están organizadas como “mujeres campesinas” al lado de otras compañeras de otros municipios, asociadas con largas tradiciones de lucha por la tierra.

Las mujeres afro de Suárez, Cauca, que participaron ocasionalmente en algunos encuentros con las tejedoras, señalan dos asuntos importantes y distintos a los detectados hasta el momento. Por una parte, la necesidad de organizarse como mujeres y la importancia de enunciarlo directamente. Esto, en medio de una serie de bromas sexuales frente a sus

compañeros y maridos, que les permiten posicionarse como sujetos femeninos con mucha fuerza. Por otra parte, las consecuencias de la guerra del conflicto armado sobre ellas como mujeres y la necesidad de denunciarlo y de hacer algo al respecto, pues están afectadas directamente (Encuentro de Mujeres tejiendo la vida, Guambía, 2011).

Con este breve recorrido por las experiencias organizativas de las mujeres con quienes se pudo caminar y conversar se quiere enfatizar en el panorama amplio y diverso de situaciones y, por tanto, de necesidades específicas de las mujeres.

4.3.5. Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA

El CIMA tiene una presencia activa en 12 municipios del Cauca y en 7 de Nariño. Paradójicamente, con la riqueza ambiental, social y cultural conviven una serie de problemas y conflictos coyunturales y estructurales que se han agudizado con el tiempo. Entre los problemas más sentidos, los habitantes del Macizo señalan la concentración de las tierras productivas en manos de unas pocas manos y la pobreza de las mayorías campesinas que no tienen tierra, la inexistencia de infraestructura vial, las diversas crisis del sector agropecuario, el creciente deterioro de los recursos naturales, la presencia en su territorio de diferentes actores armados y la siembra de cultivos de usos ilícitos y la permanente violación de los derechos humanos. Además, la deficiente prestación y acceso a servicios públicos, de salud y educación, la deteriorada y en casos inexistente infraestructura de vías, una presencia del Estado que no responde adecuadamente a esta problemática y una clase política que no representa los intereses de las comunidades ni promueve su participación.

Con tales preocupaciones, el CIMA ha desarrollado una dinámica que ha trascendido de la protesta y el reclamo a generar procesos de construcción social de alternativas sustentadas en lo que los *maciceños* consideran su mayor potencial: las riquezas culturales y naturales (el medio natural y el hombre, la cultura, la vida). Esta actitud y empeño los ha llevado a participar en instancias de gobierno a nivel municipal, departamental y nacional; a construir crecientes niveles de participación de las comunidades en los proyectos generados; y en

gestionar una serie de planes y proyectos destinados a la solución de los problemas que afligen a esta zona.

El proceso de organización del CIMA se plantea como discusión frente a las concepciones geográficas y de apreciación de recursos productivos que ha dominado durante tanto tiempo sobre lo regional. En la voz de uno de sus fundadores:

Anteriormente y hasta antes de las Movilización Regional de 1991 y de las diversas jornadas locales de las y los maciceños, cuando se hablaba del Macizo Colombiano, se referían a la riqueza hídrica, los páramos, las lagunas, los cerros y montañas, los ríos Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía. Después de las Marchas se evidenció que al Macizo Colombiano además de esa variedad territorial, también lo constituyen la diversidad humana y cultural. Allí vivimos comunidades indígenas, negras y campesinas con nuestras historias, culturas, problemas y sueños de bienestar con reconocimiento y dignidad (Entrevista con Víctor y César Díaz, líderes fundadores del CIMA, Cali, septiembre de 2011)..

En tal medida, la región del Macizo se delimita a partir de una concepción territorial, es decir, desde “el uso cotidiano” del espacio por parte de sus habitantes para hacerlo propio. En los principios que orientan el qué-hacer del CIMA, es clara esta visión:

Tenemos una identidad cultural expresada en mitos, costumbres, música, danza, pensamiento y realidad que determina nuestra forma de vida y nuestro modo de ser. Tenemos una identidad territorial que es nuestra forma de relacionarnos con el medio, la tierra y la naturaleza. Somos una identidad regional sin límites municipales ni departamentos que nos dividan. Somos pueblos maciceños con nuestro hábitat natural, en el cual nacemos, vivimos y morimos. Es regresar a los orígenes, pero no un retorno a un pasado precolombino, eso sería ingenuo en este mundo de la modernidad es reconocer nuestras raíces porque no podemos existir sin ellas, así como un árbol no puede vivir sin sus raíces, lo que decimos es que bebamos de nuestras esencias. Nuestros orígenes están inmersos en una montaña de creencias y practicas de una comunidad allí asentada.

En el Macizo Colombiano, territorio diverso geográfico, ambiental, cultural y socialmente, desde mediados de los ochenta, las y los CIMA sembramos Vida Digna, Integración Regional y Desarrollo Propio. Somos comunidades, líderes y lideresas, especialmente, campesin@s que vivimos en localidades y municipios del Sur del Cauca y del Norte de Nariño (Documento *II Asamblea del movimiento social del Macizo Colombiano*. Galindez (Patía) del 12 al 15 de noviembre de 2011. Popayán: CIMA, INDEPAZ, p. 15).

Quienes hacen parte del CIMA lo caracterizan como una “organización y/o movimiento social regional campesino, popular, pluralista y democrático”, cuya historia organizativa

parte del encuentro e integración de las comunidades, de la capacidad para asumir decisiones regionales frente al incumplimiento de los acuerdos firmados en marchas y movilizaciones. Su germen organizativo son los cabildos populares.

Al estar sus bases afirmadas en organizaciones campesinas, se han opuesto a los criterios de la llamada “Nueva Ruralidad”, que afirma la inviabilidad del campesinado desde la lógica del mercado, de la agro-exportación, de la productividad y de la rentabilidad. Por ello su afirmación organizativa defiende la economía campesina, el comunitarismo y asociativismo rural, el fortalecimiento de los mercados internos, la producción diversificada y el intercambio solidario. Sus declaraciones expresan propuestas en forma de mandatos y planes de vida en los cuales se reivindica a los campesinos y campesinas como sujetos de derechos, con territorialidades, jurisdicciones, formas de participación y expresiones culturales propias.

En el Norte de Nariño, en los municipios de San Lorenzo y Taminango, los campesinos organizados como Fundecima desarrollan una metodología de educación-organización que han bautizado como “de campesino a campesino”. Se trata de una estrategia permanente para recuperar semillas y fortalecer sus saberes, en la cual un campesino le “pasa” semillas a otro y le cuenta cómo las ha cultivado y cuidado. La relación interpersonal busca antes que nada reconocer que los campesinos “saben” y fomentar la producción de alimentos de autoconsumo y de consumo local, cuya base es justamente la comunidad; la cual, en el sentir de los lugareños, está constituida por fincas agroalimentarias⁹⁵. FUNDECIMA fue instituida legalmente en 1994, con un trabajo coordinado desarrollado a través de comisiones, establecidas a su vez, de acuerdo con los “programas” en ejecución. Se establecen los siguientes “Equipos de Áreas”: (1) productivo (o de economía campesina), (2) ambiental (estos dos primeros se integran en 1997), (3) educación (que establecen los primeros colegios agropecuarios), (4) cultura, (5) salud, (6) derechos humanos e (7) infraestructura (cuyo desarrollo institucional se inicia en 1998).

⁹⁵ Así fue explicitado en el proceso de elaboración de los planes de vida en el cual se tuvo la oportunidad de participar como asesor. También se pudo observar esta estrategia directamente en algunas de las fincas (Diarios de campo San Lorenzo y Taminango, 2009)

Con el propósito de otorgar coherencia a los Programas de Fundecima y en un diálogo con los procesos indígenas de la región, se establece la necesidad de realizar “Planes de Vida”, el primero de los cuales se realiza en Timbío en 1996 y cuya planeación continúa hasta el día de hoy.

Con tales propuestas y recorridos, el proceso del CIMA busca articularse con otras dinámicas colectivas como los resguardos indígenas y los Consejos Comunitarios Negros. Lo anterior teniendo en cuenta que el papel fundamental del CIMA a través de la lucha ha sido “la articulación social, territorial y gracias a la tenacidad de la gente, hoy el Macizo es reconocido en todos sus ámbitos, hemos aportado a la construcción de identidad con el territorio, al ser maciceño y a la construcción de región desde el Macizo y el Suroccidente”.⁹⁶ La dinámica de las “comunidades” ha permitido afirmar la autonomía como consenso y la integración como estrategia de participación, buscando respuestas y soluciones a las problemáticas regionales. Estas últimas se conciben como la ampliación de la relación del movimiento con otros sectores del Suroccidente y el nudo de los Andes.

Del 20 al 26 de agosto de 1991 se lleva a cabo la movilización de más 30.000 personas de los municipios del Macizo, fundamentalmente los del sur del Cauca, conocido como el “Paro de Rosas”. La acción más importante es el bloqueo de la vía Panamericana, causando un impacto que trasciende a nivel nacional.

Esta movilización, además de replantear el alcance de las propuestas conjugando lo municipal con lo regional, da paso a un hecho fundamental dentro del proceso, en términos de formular la necesidad de crear una organización que diera cuenta de lo que se denomina “la integración de los municipios del Macizo como región”. Este sería concretado en tanto escenario de fortalecimiento del movimiento de integración del macizo, llamado para entonces “Mimacizo” (Testimonio de las directivas del CIMA en el Taller de San Lorenzo, junio de 2008). De esta manera se constituye “el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA)”.

⁹⁶ Documento *II Asamblea del movimiento social del Macizo Colombiano*. Galindez (patía) del 12 al 15 de noviembre de 2011. Popayán: CIMA, INDEPAZ, p. 12.

El proceso de movilización regional incursiona a la vez en la elección popular de alcaldes, establecida en Colombia en 1986, con el establecimiento de candidaturas en Almaguer, Rosas, Sierra y Vega, además de la realización de algunas alianzas que les permiten fortalecerse desde las dinámicas electorales. Esta participación dará algunas garantías institucionales para la movilización de Rosas.

En la Asamblea que le dará vida al CIMA, realizada entre el 16 al 19 de agosto de 1993 en Almaguer, se establecieron las bases para lograr una propuesta regional bajo cuatro criterios, que articulan la configuración cultural del Macizo con la movilización social y la articulación de los pueblos:

- La integración local y regional
- La realización del primer encuentro cultural del Macizo
- La elaboración de un periódico regional
- La organización de un paro cívico regional de los municipios del macizo.⁹⁷

En esta primera Asamblea se evaluaron los procesos de organización del CIMA como una “experiencia amplia, democrática, pluralista y pluriétnica, que se propone como expresión regional la búsqueda de bienestar para todos, por medio de la organización comunitaria y la participación política”.

La movilización ha permitido la construcción y delineamiento de cuatro ejes: identidad, derechos humanos, agua y vida digna. Sin embargo, no se llega a ellos a través de medidas de hecho y los voceros logran unos acuerdos con el Gobierno Nacional. En Timbío se realiza una asamblea de líderes de los municipios y es ahí cuando se gesta la integración con los municipios del norte de Nariño.

Además de consolidarse la organización de las comunidades a través de los encuentros y asambleas y el establecimiento de comités, con ello el CIMA se va constituyendo como sujeto social y político de los habitantes de los municipios, que se denominan a sí mismos como “maciceños”. Sobre todo cuando se hace una revisión al incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos establecidos en movilizaciones anteriores y se evalúa la situación

⁹⁷ Así se establece tanto en la memoria de sus protagonistas, recopilada en el trabajo de campo realizado entre el 2008 y el 2010, como en las conversaciones de preparación de la segunda asamblea del CIMA, que se llevará a cabo en febrero de 2011.

y las condiciones de las población que siguen siendo vulneradas, además de la violencia y la violación de los derechos humanos.

Al calor de este proceso se fue dando forma a un Plan de integración de las culturas del Macizo, desarrollado a partir de 1999 con las siguientes estrategias. Por un lado, la promulgación de un plan de desarrollo educativo del Macizo, denominado PLademaco, un plan de desarrollo agrario del Macizo y del sur llamado Plademasur y una estrategia macro de defensa de la vida. Sobre estas bases se desarrolla la gran movilización de 1999, que sin duda se convierte en un hito de la movilización social a nivel regional y nacional.

4.3.6. Pueblos Misak y Pastos

Los guambianos o misak y los pastos tienen un alto nivel de organización interna y buena parte de sus territorios recuperados. Durante la Asamblea Constituyente sus líderes lograron encontrar un tribuna nacional para continuar su lucha, en la cual ocupó un lugar protagónico el líder misak, *Taita* Lorenzo Muelas, quien llegó a posicionarse como senador de la República. A partir de este momento el pueblo misak inició un proceso de participación política amplia, hasta posicionarse en prácticamente todas las instancias de decisión política formal del estado colombiano. Mencionamos el caso emblemático del también exsenador taita Floro Tunubalá, quien llegó a ser gobernador del departamento del Cauca en el 2001.

El pueblo misak está distribuido en 5 resguardos constituidos legalmente, con una población de 20.782 personas (el 3% de la población indígena nacional), y habita una extensión de 18.521 hectáreas.⁹⁸ Están distribuidos en el departamento del Cauca, en los municipios de Silvia, Jambaló, Totoró, Caldon y Toribío, con una concentración mayor en Silvia; y con algunos asentamientos en La Plata, Huila. Su territorio crece en la parte occidental de la cordillera central, a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en una

⁹⁸ Están distribuidos en: (1) 4 resguardos del municipio de Silva: Guambía, Pitayó, Quinchayá y Quizgó; (2) en los municipios de Caldon y Jambaló, donde algunos guambianos viven entre una mayoría de paez; (3) en 2 resguardos del municipio de Popayán: Poblazón y Quintana; y en el municipio Totoró, existen 2 resguardos: (a) Novirao y (b) Polindara.

región bañada por los ríos Piendamó, Cauca, Manchay, Mi Chambe, Agua Blanca y Cacique, donde se levantan los páramos de Las Delicias, Moras y Alto de Guamacas. Es un pueblo fundamentalmente agrícola, con el cultivo diversificado en yatul (tipo de huerta misak), complementado con algunos productos para la venta. Con el tiempo han ido ascendiendo su actividad económica hacia el páramo y descendiendo también hacia las zonas cálidas, de donde habían sido despojados por la extensión de la hacienda.

En términos organizativos, funcionan con 14 Cabildos (5 con tierras de resguardo y los 9 restantes se encuentran en distintas zonas rurales y urbanas en donde no hay resguardos, entre ellos se encuentran el de Cali y el de La Plata-Huila). En ellos, la máxima autoridad es el gobernador, al que le siguen: un gobernador suplente, un secretario, un tesorero y un fiscal, a los que se suman un capitán por cada corregimiento y un alguacil por cada vereda. Esta última representación hace que el número de miembros del cabildo tienda a ir en aumento, a medida que la población va creciendo y creando nuevos asentamientos. En su interior se constituyen comités de trabajo, por áreas específicas, entre ellas están la de Desarrollo Agropecuario, Educación y Cultura, Comunicación y Justicia. Cada una de estas comisiones tiene un responsable elegido por el cabildo cada año (entrevista con Jeremías Tunubalá y Didier Chirimuscai, excabildantes 2006-2007, 15 de junio de 2008).

Con esta base organizativa, el pueblo guambiano busca desarrollar El “Plan Integral de Vida del Pueblo Guambiano” (1994) construido sobre 5 ejes, entrelazados entre sí, en una integralidad acorde con la concepción del mundo y de la vida del pueblo misak. Este Plan incluye: i) recuperación de la Autoridad y la Autonomía Propias: para “enfrentar las alianzas de los cabildantes con políticos corruptos de la región y reafirmar la autoridad del Cabildo”; ii) recuperar la Justicia: que significa “clarificar los deberes y derechos de los comuneros para que la balanza no se descompense”; así como la reglamentación y “Reestructuración del Cabildo” para iniciar un proceso de “descentralización administrativa y presupuestal del Cabildo en cada una de las zonas de alcalde”; iii) recuperar la Cultura y Pensamiento Propios: para el rescate de los conocimientos sobre los distintos aspectos de su vida y garantizar la supervivencia; iv) recuperar los Espacios Vitales del Medio Ambiente: para buscar la armonía con la naturaleza; y v) reconstrucción Económica y Social: Regular el fenómeno de acumulación capitalista al interior del Resguardo (Plan de Vida, 1994: 205-

211; Acosta, 2003). Como parte de los desarrollos del Plan de vida, recientemente fue publicada sólo para circulación interna, la “Ley Misak”; y se realizan una serie de mingas para sanear el agua como un proceso de movilización frente al proyecto de Ley de Aguas, que para los misak busca dar en concesión las principales reservas de agua de la región.

Todo este andamiaje organizativo está sostenido en las autoridades del pueblo Misak, el Consejo de Mayores, conformado por todos los exgobernadores del Cabildo. El Consejo, como su nombre lo indica, dota a la vida del pueblo guambiano de perspectiva histórica y funge como el referente ético de las tomas de decisión del Cabildo. Cabe aclarar que las decisiones del día a día no dependen de esta instancia, sino directamente del gobernador y de los demás cabildantes.

El pueblo pasto ha ido consolidando sus procesos de organización y de participación política. En la actualidad se destaca porque participa en prácticamente todos los niveles de la administración pública: se desempeñan como concejales en más de 10 municipios dentro de sus territorios; son alcaldes municipales (como en el caso de Cumbal); el ingeniero agrícola Javier Cuaical Alpala es el actual secretario de agricultura del Departamento de Nariño; uno de ellos forma parte de la Asamblea Departamental y taita Ramiro Estacio ocupa una curul en el Senado de la República.

El pueblo de los pastos está organizado en 21 resguardos, con una población total de 95.205 habitantes distribuidos en 48.036 hectáreas,⁹⁹ en el departamento de Nariño y el norte del Ecuador. Habitan en la región que forma parte de la unidad geográfica del Macizo Colombiano-Nudo de los Pastos, hasta la provincia del Carchi, en el Ecuador (Plan Binacional, 2008). Su territorio se encuentra demarcado por ríos y lagunas y por los volcanes Chiles, Cumbal y Azufra. Sostienen una importante explotación lechera y desarrollan cultivos en los que se mezcla la especialización productiva con la shagra familiar (similar a una huerta) y con el manejo de la micro-verticalidad andina.

⁹⁹ Los resguardos son, sobre el altiplano de Túquerres e Ipiales: Cumbal, Panam, Chiles, Mayasquer, Guachucal, Colimba, Mallamues, Túquerres, Yascual, Cuaspud, Pastas, Ipiales, Yaramal y San Juan. Por el curso del río Guáitara: Males y Potosí. Por la cordillera occidental: Miraflores, Aldea de María y Sande. Los resguardos Pastos están ubicados principalmente en los municipios de Ipiales, Córdoba, Tuquerres, Aldana, Mallama, Santacruz, Potosí, Guachucal, Carlosama, Cumbal y la Provincia del Carchi en Ecuador.

Los pastos se organizan en 21 Cabildos, máxima instancia de decisión colectiva constituida por las autoridades de cada resguardo y elegida cada año. A éstos le siguen diversos tipos de asociaciones. Entre ellas se destacan, por un lado, la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Nudo de los Pastos Shaquiñan, que busca articular a las autoridades y en la cual confluyen los principales líderes de la movilización por la recuperación del territorio para desarrollar proyectos bajo una perspectiva marcada de defensa cultural. Con este propósito, han constituido un equipo técnico conformado por jóvenes profesionales, encargado de la planeación y ejecución de proyectos en áreas específicas, en el marco del Plan Estratégico Binacional. En este momento, adelantan en cofinanciación con Veterinarios del Mundo un diagnóstico sobre las condiciones de producción para trabajar una alternativa que avance sobre la soberanía alimentaria y la producción orgánica para la exportación; también adelantan un proyecto de gobernabilidad entre el pueblo de los pastos y el “Proyecto Gualcalá” para la realización de los planes de vida de los resguardos (conversación con Omar Chirán de Shaquiñan, mayo 8 de 2008; y con taita Efren Tarapuez, abril de 2008).

Por otro lado, resalta la Asociación de Cabildos, como otro esfuerzo en el cual confluyen, quienes trabajan con la Escuela de Derecho Propio dirigida por Martín Tenganá, y otro grupo que trabaja en proyectos productivos como el de la producción y comercialización de la quinua, sobre la recuperación de la shagra cofinanciado con la OIM y uno más de educación propia cofinanciado con la Gobernación de Nariño (conversaciones con los responsables de las coordinaciones de la Mujer, de Educación y Producción de los Pastos, entre marzo y mayo de 2008). Hay que resaltar que entre estas dos asociaciones no existe ninguna relación periódica, ni mucho menos la coordinación para la realización de proyectos comunes.

Por último, se encuentran las distintas consejerías, que dependen directamente de las asambleas de cabildos del pueblo de los Pastos. Se trata de una serie de entidades encargadas de organizar a la población de los diversos cabildos a partir de ejes temáticos. Entre ellas se destacan la Consejería de la Mujer y la Consejería de Educación. La primera está conformada por 66 mujeres (3 por resguardo), está en un momento de reorganización interna y de búsqueda de recursos de cofinanciación para la realización de proyectos con

una perspectiva de género, porque no ha sido una prioridad en las asignaciones presupuestales de los cabildos (entrevista con Ligia, coordinadora de la C. de la Mujer, 16 de julio 2008). La segunda, está constituida por un grupo de maestros pastos que fluctúa dependiendo de los proyectos en ejecución. En la actualidad, han concluido en cofinanciación con la Asociación de Cabildos, la etapa de diagnóstico y de elaboración del Programa Educativo Comunitario. Incluso, desarrollan un proyecto de educación propia con dineros de transferencias, y tienen que gestionar con la cooperación internacional, la OIM, el dinero para la recuperación de la shagra desde las escuelas (entrevista con José Elías, coordinador de la C. de Educación, 25 de mayo y 12 de junio de 2008).

Este alto nivel de organización interna, de incidencia política en instancias locales y regionales de poder, así como su participación en redes de organización política a nivel nacional o internacional, han aumentado su capacidad de formular y gestionar iniciativas. Una buena muestra es la elaboración y posterior reconocimiento por el CONPES (máxima autoridad asesora de planeación para el desarrollo económico y social) del “Plan Estratégico Binacional para el fortalecimiento natural, ambiental y cultural del Nudo de los Pastos”, gracias a las gestiones realizadas por el entonces senador de la República *Taita* Efrén Tarapué. Actualmente, el Plan está respaldado por la Gobernación de Nariño y uno de sus proyectos está cofinanciado por USAID, a través de la gestión y ejecución de la Asociación Shaquiñan.

4.3.7. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC

El cric nace el 24 de febrero de 1971 y es quizá la única organización social surgida en episodios de movilización y que reivindica su quehacer desde una plataforma de lucha. Su organización básica está constituida por cabildos y sus respectivos resguardos y se plantea heredera de las resistencias indígenas a la invasión española, siguiendo los pasos de la Gaitana, Juan Tama, Manuel Quintín lame. Su estrategia inicial estuvo en darle la vuelta a la ley 89 de 1890, la cual buscaba acelerar los procesos de asimilación de los pueblos indígenas a partir del tutelaje de la iglesia católica. En dicha ley se contempla la existencia de los cabildos como formas de autoridad y la legalidad de las tierras de resguardo surgidas

en títulos coloniales. Ambas cosas se convertirían en el eje de la defensa territorial y cultural indígena durante todo el siglo XX, y permitirán que la lucha se despliegue tanto en debates jurídicos como en episodios de movilización y acciones colectivas que combinan acciones violentas.

La forma de plantear sus propósitos está consignada en nueve puntos conocidos como “Plataforma de lucha”, la cual busca reivindicar, al decir de una cartilla sacada por la organización, “nuestras luchas de ayer y de hoy (Cartilla n 1, 3 edición Popayán cric).

Los puntos 1 y 9 de la plataforma del CRIC se adecúan a las nuevas situaciones de la lucha indígena y quedan de la siguiente manera:

1. Recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas.
2. Ampliar los resguardos.
3. Fortalecer los cabildos Indígenas.
4. No pagar terraje.
5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación.
6. Defender la Historia, la lengua y las costumbres indígenas.
7. Formar profesores indígenas...”
8. Fortalecer las empresas económicas y comunitarias.
9. Recuperar, Defender y Proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
10. Defensa de la Familia.

La “Plataforma de lucha” se aprobó en la segunda asamblea de esta organización, la cual se realizó en la Susana Tacueyó, el 6 de septiembre de este mismo año, donde acudieron delegados de Paniquitá, Poblazón, Puracé. Tiempo después y conforme los congresos de la organización fueron desarrollándose, se sumaron otros tres puntos al programa de lucha del CRIC: 1.Fortalecer las organizaciones económicas, 2. Proteger los recursos naturales y, 3.Proteger la familia promoviendo la participación de todos sus miembros[4].

Desde el nacimiento de la organización se han constituido y fortalecido 89 resguardos, más de 111 cabildos y se conformó la guardia indígena como protectora de los territorios. El

avance organizativo ha permitido que los pueblos originarios se revitalicen y trabajen en la conformación de sistemas propios, que sean respetados y entendidos por el gobierno y el pueblo colombiano, como alternativas posibles y diversas a las formas de vidas dominantes, y no como un problema y obstáculo.

Los sistemas en salud, comunicación, autoridad ambiental territorial indígena y educación, son parte fundamental de las bases del plan de vida de la organización y de cada uno de los pueblos que la componen Nasa, Kokonuco, Emperara Siapidara, Yanacona, Totoró, Inga y Guambiano. Por lo tanto no era extraño que las principales reivindicaciones tuvieran que ver con la posesión y el trabajo de la tierra: recuperación de las tierras de los resguardos y el no pago de terraje. Estos fueron dos de los puntos de la “plataforma de lucha” y marcarían las movilizaciones de esta organización en los años siguientes.

Para avanzar en el logro de estas reivindicaciones primarias se emplearon formulas y pautas de acción de otros sectores populares, pues sus demandas no diferían mucho de aquellas de los campesinos excluidos de la tierra y de aquellas de sectores obreros que, como los corteros y trabajadores de los ingenios de caña de azúcar, sufrían una exagerada explotación de su mano de obra. Se trataba de crecer, de “unir hombros” (como decían los comunicados de la época), de añadir amigos, de acumular un adecuado caudal de fuerzas que les permitiera conquistar algunos espacios políticos

La respuesta del estado y los terratenientes a las primeras recuperaciones de tierra no se hizo esperar. Ante el hecho de que las autoridades publicas estaban aliadas con los terratenientes y gamonales, estas luchas indígenas por la tierra adquirieron el carácter de insurrección y como tal fueron reprimidas por el gobierno. Muchas fueron las detenciones y también las muertes. Todos los que han trabajado con los pueblos indígenas saben de la tenacidad de estas luchas pioneras, que se enfrentaron a un mundo de incomprensiones y mares de indiferencia de la sociedad colombiana. Un ejemplo es la oposición y lucha contra la Ley 89 de 1890 porque ésta, en sus disposiciones generales, los catalogaba como “salvajes” y a sus comunidades como “sociedades incipientes”.

Si nos preguntaran cuál sería el inicio del pensamiento político del CRIC, su ‘punto cero’, no vacilaríamos en afirmar que fueron los debates, las reflexiones e investigaciones que se

realizaron sobre tópicos como autoridad propia, identidad cultural, rasgos propios que caracterizaban sus luchas y, por supuesto, la forma de construir una plataforma ética y jurídica que sustentara la legitimidad y justeza de sus luchas, que evidenciara que las acciones que llevaban a cabo estaban fundamentadas en la ley.

Habían pasado solo cinco años de la más conocida masacre de indígenas Guahibos por colonos blancos en Planas (Llanos orientales), que en primera instancia habían resultado libres en tanto argumentaron que ellos habían sido educados y habían crecido en el convencimiento de que los indios no eran hombres (“racionales”).

Por el contrario, concluyeron que los cabildos eran sus autoridades legítimas, sólo que “estaban equivocadas y representaban en ese momento los intereses de gamonales, de politiqueros, de terratenientes y de la iglesia”. De esta reflexión surgió la directriz política de que, aunque era preferible marchar con los cabildos, la lucha no daba espera y se debía seguir adelante aún en contra de estas autoridades. De esta reflexión se derivó también la consigna de que había que recuperar los cabildos apartándolos de estas influencias externas y negativas con el fin de que asumieran el papel histórico que les correspondía: respaldar, orientar y, aún más, ponerse al frente de sus luchas.

En estas decisiones tomadas por estos pioneros de las luchas indígenas encontramos el germen de la ‘autonomía’ política y organizativa que, años más tarde se manifestaría de forma más explícita para impedir que sus luchas fueran coartadas o subordinadas por otros procesos políticos. Ya para esa época habían surgido dentro del movimiento popular (fundamentalmente del campesino) varias organizaciones políticas que pretendían ser, cada cual a su estilo, talante e ideología, la vanguardia exclusiva de los procesos revolucionarios.

Frente a la Ley 89 de 1890, las reflexiones fueron similares. El hecho de ser considerados salvajes les daba unos derechos sobre las tierras de sus resguardos. Estas tierras, según esta ley, eran imprescriptibles, inalienables e inembargables, lo que proporcionaba el fundamento legal para su recuperación. El mismo concepto de ‘recuperación’ surge del hecho de que los indígenas, de acuerdo con la ley, no perdían el derecho de propiedad sobre las tierras de sus resguardos así estuvieran ocupadas por extraños los años que fueran. No se estaba invadiendo propiedad ajena sino que se estaba recuperando lo que era propio.

En los años posteriores esta ley se convirtió en la columna vertebral de las recuperaciones de tierra, y fue de tal manera defendida por las organizaciones que hubo una insubordinación indígena a nivel nacional cuando -en 1981- el gobierno de Julio César Turbay Ayala intentó derogarla para restarle legalidad a las luchas por la tierra, que ya para esa época se habían ampliado a otras zonas indígenas del país.

Juan Tama le solicitaba al monarca español que le garantizara las tierras al pueblo nasa pues siendo un rey justo podía meter en cintura a sus vasallos y controlar sus fechorías en esta parte del mundo. Manuel Quintín Lame le solicitaba al gobierno en Bogotá que controlara los atropellos a sus hermanos indígenas que cometían los gobiernos locales, aliados con los gamonales de la región. Existen cuantiosas cartas de estos líderes indígenas exhortando al rey de España o al presidente de Colombia para que intervinieran a favor de sus más “humildes servidores”, los indios.

4.3.8. Procesos Organizativos en el norte del Cauca

El norte del Cauca se caracteriza por ser una región de amplia tradición organizativa y de procesos de movilización social. En este sentido nos encontramos con los procesos de movilización y autonomías indígenas que desde hace unos 40 años han convertido a las organizaciones indígenas en actores con una gran capacidad de movilización (Vasco, 2002; Rappaport, 2000; Sandt, 2007). Se resalta la presencia del CRIC (Consejo Regional indígena del Cauca) y particularmente de la ACIN (Asociación de Cabildos indígenas del norte del Cauca).

Para el caso de las comunidades negras vale la pena remarcar el liderazgo construido por la constitución de numerosos consejos comunitarios en el pacífico (Restrepo, 2005). Para la región interandina se han constituido aproximadamente 48 Consejos Comunitarios que se reúnen alrededor de ACONC. Esta agrupación nace en el municipio de Suárez gracias a la gestión de la Fundación Cultural Afrocolombiana, después de varios informes sobre violación de derechos humanos. Es así como se inicia el trabajo en Suárez y Buenos Aires, ampliándose la participación de Guachené, como parte de la zona rural del municipio de

Caloto, y sumándose también Santander de Quilichao. En el contexto de las organizaciones de comunidades negras también hace presencia Amunorca como la asociación de municipios del norte (Padilla, Caloto, Santander, Corinto, Suarez, Buenos Aires, Miranda, Puerto Tejada, Guachené y Villa Rica) (ODR, 2011).

Por último es importante mencionar que frente a la explotación derivada de las Cooperativas de trabajo asociado de los ingenios los Corteros han venido organizándose como movimientos sociales (Movimiento de los Corteros), así como dando paso a iniciativas de organización sindical en un contexto de desregulación salarial (Movimiento 14 de Septiembre). Estos movimientos, a pesar de su diversidad étnica (mestizos, indígenas y comunidades negras), tienen en común el interés por constituirse en referencias organizativas, aspirando a mantener una autonomía en sus territorios, por encima de las políticas gubernamentales y las influencias de los actores armados (Rincón, 2008).

En contraposición nos encontramos con el caso de las poblaciones campesinas que se enfrentan a su debilitamiento progresivo como producto del desplazamiento forzado y su invisibilidad estatal (Fajardo, 2000; IKV Pax Christi, 2009).

4.4. Organizaciones y procesos campesinos nacionales

En esta tercera parte consideraremos algunas de las plataformas campesinas nacionales actuales más importantes en las que han convergido procesos regionales y locales del campesinado colombiano. Abordaremos, de manera breve, su gestación y desarrollo histórico, señalando los procesos de lucha de los que dichas plataformas provienen; desatacaremos algunas de sus características organizativas y estratégicas y hablaremos de los sujetos políticos que las conforman y en ellas son representados, así como de las reivindicaciones que los agrupan. Nos centraremos en la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo, Coordinación Nacional Agraria, Dignidad Agropecuaria y Dignidades gremiales.

A lo largo de esta tesis, hemos apreciado y enfatizado la porosidad y el dinamismo de lo regional como unos de sus rasgos esenciales. Además, hemos señalado que, contrario a la perspectiva predominante en la interpretación de las regiones desde el poder central – “desde arriba”–, que las entiende como unidades geográfico-económicas, hemos visto que lo regional, desde la perspectiva de sus pobladores –“desde abajo”–, es entendido primordialmente en términos de lo territorial y lo social. Estos dos aspectos, son ejes fundamentales en el análisis de la articulación de los procesos locales y regionales dentro de confluencias nacionales de las que emergen las plataformas en las que nos detendremos a continuación.

La Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo, MIA, nace por iniciativa de Fensuagro y de los sectores agrarios del movimiento ANZORC y la Marcha Patriótica, los cuales convocan a más sectores y organizaciones de carácter nacional y local con el fin de construir un pliego de exigencias políticas y sectoriales. Desde el año 2010, diversos sectores sociales del país se han venido juntando alrededor del movimiento social y político Marcha Patriótica. Los sectores agrarios allí reunidos en su mayoría hacen parte de la Federación Sindical Unitaria Agraria, la cual desde hace más de 30 años ha recogido las reivindicaciones del campesinado colono. El sector de Fensuagro se ha venido gestando en los espacios locales y regionales en procesos organizativos campesinos que se basan en el posicionamiento de líderes y en la construcción de asociaciones de trabajadores campesinos desde una visión del problema agrario con una perspectiva de clases.

De esta forma Fensuagro ha podido constituirse como un escenario que representa a los pequeños propietarios colonos, a campesinos que ejercen usufructo de la tierra (pero sin propiedad formalizada) y a trabajadores jornaleros sin tierra. De la misma manera, en cabeza de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), busca reivindicarse el cumplimiento de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la constitución de las Zonas de Reserva Campesina como una figura jurídica que legitima la organización colectiva de los territorios campesinos y sirve al mismo tiempo como protección de sus territorios frente a los procesos de acaparamiento de la tierra y daño ambiental.

El tipo de población mayoritaria en esta organización es el campesinado colono que está emparentado con la caracterización de Agricultura familiar de subsistencia, ya que vive en

condiciones precarias, con bajo acceso a tierras (muchas veces de manera informal) y su vinculación con el mercado es precaria o casi nula. En el caso colombiano la ubicación geográfica de esta forma de campesinado está fuertemente asociada con las áreas de colonización, con los pequeños mercados locales y hace presencia en los valles interandinos en los departamentos como Huila, Cauca y Antioquia, y una mayor presencia en el piedemonte de la cordillera oriental en departamentos como Caquetá, Putumayo, la región del Magdalena Medio y en la zona del Sumapaz.

Por otra parte, el Coordinador Nacional Agrario, CNA, está compuesto por organizaciones locales y regionales de campesinos pequeños propietarios, productores de alimentos, agro mineros, pequeños ganaderos y cafeteros, caracterizados en Agricultura Familiar en Transición y Agricultura Familiar de Subsistencia. El CNA nace de procesos regionales agrarios que se dieron entre 1997 y 1998, que vienen de experiencias de lucha como el paro de los pequeños y medianos cafeteros, que sobre todo tuvieron incidencia en el departamento del Tolima, valles interandinos y en las zonas de ladera de las cordilleras Central y Occidental, y en áreas al margen de los enclaves petroleros del Magdalena Medio, Arauca y Norte de Santander.

Recoge también las luchas del éxodo campesino del Magdalena Medio, dentro de las que sobresale la Federación Agro-minera del Sur del Bolívar FEDEAGROMISBOL. Se suman campesinos pequeños propietarios de Cauca y Nariño, entre los que resaltan los asociados al Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA y el Comité de Integración del Galeras CIGA. El campesinado que compone el CNA es productor de alimentos, minero artesanal y cafetero, en su gran mayoría. Los campesinos organizados en el CNA han hecho parte de procesos de movilización durante las décadas de 1990 y 2000. A lo largo de estos procesos el CNA ha firmado acuerdos y compromisos con el gobierno.

El CNA hace parte del proceso del ‘Congreso de los Pueblos’, plataforma organizativa que nace a partir de los procesos de movilización originados por la Minga de Resistencia Social implementada a lo largo del 2008, y que ha venido planteando una apuesta programática de largo aliento que pretende que los procesos y organizaciones sociales propongan “mandatos” para transformar la inequidad e injusticia del país expresada en leyes.

Por otra parte se organizaron: Dignidad Agropecuaria y las Dignidades gremiales. El paro cafetero de febrero del año 2013 estuvo marcado por una división dentro de los productores de café del país. Por un lado, se daba una negociación entre viejos conocidos como lo son las directivas de la Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno nacional, mientras que de la otra orilla se realizaba otra negociación bastante atropellada y profunda, liderada por quienes dirigían los bloqueos y las protestas campesinas, organizados en el movimiento de Dignidad Cafetera. Esta última es uno de los procesos organizativos gremiales que vienen del proceso nacional de Salvación Agropecuaria, el cual desde la década de 1990 ha venido liderando a los medianos productores nacionales en la lucha por condiciones justas de comercio y mercado. De la misma manera Dignidad Agropecuaria se ha manifestado abiertamente contra los procesos de apertura económica y libre comercio; esta misma expresión se ha transformado en Dignidad Agropecuaria. De este modo el proceso ha conseguido agrupar a los medianos propietarios cafeteros, así como también a los productores de papa, cebolla, panela, arroz, leche y a un sector de medianos mineros.

Dignidad Agropecuaria definió realizar un proceso de negociación gremial, creando así mesas locales y gremiales de negociación y acuerdos con el Gobierno nacional; de la misma manera generó pliegos para los productores de tierra fría y tierra cálida, que pueden resumirse en términos generales como la exigencia de las salvaguardas de sus productos de las aperturas económicas indiscriminadas al comercio internacional, lo cual significa en la práctica que productos como la papa, la panela, el café, la leche y el arroz queden por fuera de las condiciones que plantean los TLC. Por otro lado para aquellos productos que no sean salvaguardados piden subsidios e incentivos económicos para la producción y rebajas en los precios de los insumos agrícolas, de forma tal que puedan competir con los precios de los alimentos que se importan, ya que éstos, por los subsidios de los países donde son producidos, llegan a precios muy bajos.

El tipo de campesino y productor agrario que representa este sector está relacionado con la categoría de Agricultura Familiar Consolidada, ya que tienen un nivel de integración a las condiciones económicas, acceso a la tierra e infraestructura para producir mercancías y poder de relacionarse con el mercado en los ámbitos local, regional y nacional. Gracias a estas condiciones, el nivel de agremiación y organización está dado prioritariamente desde

los alimentos y mercancías que producen, incluso algunos de los sectores agrarios representados por las Dignidades son la expresión de clúster o ramales de la producción rural afectados por la apertura económica. Tiene una presencia importante en el departamento de Boyacá y norte de Cundinamarca, a partir de la agremiación de los productores de papa (agrupados en Dignidad Papera) y los productores de cebolla y lecheros. En el departamento del Huila hacen presencia agremiando a los productores medianos y pequeños de arroz (agrupados en Dignidad Arrocería). Los productores medianos de soya y caña azucarera y panelera, que hacen presencia en varios municipios del Valle del Cauca, también hacen parte de esta organización. Y por último, los pequeños y medianos productores de café que hacen presencia en los departamentos de Antioquia y Risaralda.

Estas organizaciones muestran que los campesinos y campesinas se configuran en procesos dinámicos, que incluyen contextos como las tecnificaciones en la producción, las transformaciones en las relaciones de poder, las reconfiguraciones territoriales y la presencia de diferentes actores que inciden de forma condicionante. De tal suerte, se generan cambios culturales que se desarrollan generación tras generación.

En este capítulo he explorado la relación entre el proceso de Formación Colombiana, la vida campesina y la configuración regional. Para ello he descrito los procesos de organización y movilización campesina, las estructuras y la legislación agraria, las relaciones de interculturalidad y multiculturalidad y el conflicto armado. Dichos procesos me permiten caracterizar la constitución de sujetos colectivos, comunidades y pobladores, y las formas organizativas a partir de las cuales realizan sus potencialidades como constructores sociales de región. Los sujetos colectivos se constituyen y constituyen la emergencia de luchas sociales que definen, a su vez, el campo de disputa que se produce cuando distintos sentidos sociales, prácticas productivas, usos territoriales y formas organizativas entran en conflicto y contradicción. Para caracterizar el dinamismo del campo de disputa por la configuración regional, es fundamental dar cuenta de los episodios de movilización social en donde se expresan las propuestas, los efectos, las negociaciones, las posibilidades y limitaciones de la lucha social, que es la problemática que abordamos en el siguiente capítulo.

Capítulo 5. Tiempos, espacios y espesores de la lucha social

En este capítulo presento la dinámica de la lucha social en proceso de configuración regional, tomando como eje la relación entre coyuntura y episodios de movilización social. Para ello hemos adelantado tres perspectivas de reflexión: los tiempos, los espacios y el espesor social. Los tiempos: el punto de partida de esta tesis es la coincidencia en los tiempos de la movilización que se evidencian en tres momentos. Tanto en el Magdalena medio, como en el Sur occidente hay un proceso de emergencia de organización y movilización que se inicia a mediados de la década de los 80, con la puesta en marcha de procesos reivindicativos en términos desarrollistas y de integración ciudadana. En este primer momento hay dos factores que son importantes.

Por un lado, el proceso de descentralización desarrollado por el Estado, y por otro, el auge de los movimientos cívicos, que convocan a crear nuevos escenarios de participación y de relación local con la institucionalidad. Junto a este último proceso se debe señalar una suerte de consolidación de formas organizativas que se fueron creando desde las movilizaciones campesinas de la década anterior (los setenta), experiencias de pedagogía popular, el papel de la iglesia católica, nuevas formas de trabajo comunitario desarrolladas en el marco del conflicto armado, y el auge de metodologías de trabajo académico como la investigación acción participativa y la solidaridad. Esta relación hace que se desenvuelva un ambiente que permite elaborar repertorios y estrategias de exigibilidad, así como una creciente conciencia y sensibilidad sobre el papel que deben cumplir comunidades y liderazgos. Dicho período se extiende hasta mediados de la década de los 90, en donde los distintos episodios de movilización logran establecer pliegos de exigencias (escuelas, vías, centros de salud, etc.), así como una suerte de plataforma de reivindicación de derechos de ciudadanía que logra integrar reclamos sectoriales y de clase, asumiendo un enfoque regional.

En medio de este primer momento se desarrolla el proceso constituyente que elabora la Constitución de 1991. Durante los años 80, sobre todo, se generan movilizaciones locales y

municipales. Expedida la constitución –periodo en el que se da una intensa discusión sobre posibles propuestas de ordenamiento territorial, en cabeza del sociólogo Orlando Fals Borda- se desarrollan otra tipo de convergencias, que señalan los límites de lo municipal. Si bien el repertorio desarrollista e integracionista permanece, el escenario empieza a transformarse en la relación comunidad-región, lo que permite la confluencia de diversos sectores que enfatizan el carácter regional de sus propuestas y la exigencia de ser incorporados a la ciudadanía. Con este repertorio se organizan marchas que irrumpen en el escenario nacional con reclamos que se definen regionales, y se producen mesas de negociación en donde se incorpora dicho reconocimiento y exigibilidad.

Un segundo momento se da a mediados de la década del noventa cuando se están desarrollado negociaciones entre procesos regionales y el Estado. Cuando irrumpen con inusitada fuerza los intereses de multinacionales, de empresas nacionales y la avanzada del paramilitarismo sobre los territorios y poblaciones. Aquí no sólo se trata de entender la presión social, como recrudecimiento de la guerra interna, sino que la estrategia de despojo hace que el espacio y el territorio cobren una significación distinta. Defender el territorio, evitar su ocupación, es fundamental para defender la vida. No sólo se trata de tener la tierra, u otro medio de producción sino de orientar sus usos. No sólo se trata de extraer recursos, para generar valor y riqueza, se trata de su redistribución y su reinversión.

La estrategia de defensa se hace integral, dejando la centralidad de la reivindicación desarrollista y ciudadana, y pasando a un plano, que los distintos líderes enuncian como político. Defender la vida significa quedarse, mantenerse, resistir y al mismo tiempo buscar apoyos, alianzas, hacer notar que no se está solo. Dicho periodo transcurrió hasta mediados de la década del 2000. Aquí es fundamental hacer distinción con lo sucedido con los pueblos indígenas del suroccidente, que logran mantener un proceso de negociación y de producción de política pública en medio de la agudización conflicto, haciendo evidente un marco que se asume por fuera del marco desarrollista y ciudadano, desde la elaboración de los llamados planes de vida y la construcción de autonomía.

Un tercer momento se inicia cuando hay un retoño, un nuevo momento de negociación con el Estado, la movilización 2004 alrededor del referendo contra el TLC. Al mismo tiempo que se desenvuelven varios escenarios de convergencia nacional, el más importante la

Minga Social y Comunitaria y hoy, la Cumbre Agraria y Popular. Aquí lo regional se despliega con nuevas posibilidades y retos, y el proceso transcurrido permite tener mayor capacidad de integrar la relación entre estructura organización y movilización social y el proceso regional, que se expresa en enunciados como “solos no podemos”. Pero también sucede lo contrario. La capacidad de movilización y los retos diferenciales llevan a procesos de fragmentación donde el peso de lo regional disminuye. Este momento todavía no puede definirse como tal, aquí se pueden señalar varias preguntas que se hacen y se les están haciendo a las comunidades y organizaciones, como lo veremos en las páginas finales de este texto. En estos tres periodos se puede comprender cómo se va dando la emergencia de una potencia social que busca constituir lo regional y, al mismo tiempo, cómo su capacidad de configuración social se ve interpelada y cuestionada por conflictos de intereses organizativos y territoriales.

De allí que la segunda perspectiva es el espacio. Como lo hemos anotado en los capítulos anteriores, la región es una hipótesis en construcción, una suerte de espacialidad maleable, en donde se señalan o trazan distintas orientaciones. La vocación minera, petrolera, agroindustrial e infraestructural del Magdalena medio, la convierte en una región con un alto potencial económico -desde la versión estatal. Así, se reconfiguran escenarios locales y municipales para disponerse a garantizar la inversión que permita mayor competitividad en dichos renglones. Una región que debe mantener su capacidad productiva pero cuyo polos de desarrollo están por fuera de ella: las ciudades de Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Bogotá, para el caso Magdalena medio. En el Sur occidente la caracterización como región biodiversa, fuente hídrica, riqueza minera hace algo similar, siendo Cali el polo de desarrollo y el atractor urbano que articula y desarticula los procesos regionales.

Desde la movilización se cuestionan dicha funcionalidad y espacialidad de distintas maneras. Lo fundamental es hacer territorio, quedarse, pervivir en el tiempo y el espacio, este es el efecto-testimonio de la lucha social por la configuración regional. Dicha lucha marca espacios en cada episodio de movilización que se expresa en formas de hacer que van desde la asociatividad de pequeños mineros y agricultores, hasta las creación de zonas de reserva campesina, consejos comunitarios o zonas agroalimentarias, ampliación y creación de resguardos o formas de mancomunidad veredal por medio de asociaciones

campesinas y de productores, redes de fincas, corredores ambientales, entre otras. Aquí se traza una tensión entre orientaciones y realizaciones de propuestas de ordenamiento territorial en donde se debate la espacialidad, los usos, las formas de habitar, trabajar, recorrer y articular lo regional.

La tercera perspectiva de reflexión son los espesores sociales: la relación entre experiencias cotidianas, formación regional, modelos de acumulación y el tejido de modos de producción en la escala de la formación social nacional y sus articulaciones con el capital a nivel global. Una suerte de espesores (Osorio, 2009) que se combinan con los tiempos y los espacios, definiendo tensiones que se caracterizan como resistencias, indignaciones, transformaciones que se manifiestan en la lucha local y regional, y sus articulaciones con las propuestas que se manifiestan a nivel latinoamericano y alter-mundial. En cuanto a los cambios en las relaciones establecidas entre los pueblos indígenas y los estados nacionales a partir de las reformas constitucionales y legislativas: “ambos espacios –el jurídico y el político- constituyen ahora campos contenciosos en los que se dirimen los conflictos y las ancestrales tensiones sociales entre unos y otros, sin embargo a pesar de estos cambios, (...) los grupos dominantes tienden a aferrarse al clásico modelo del estado nacional unitario y culturalmente homogéneo” (Rodolfo Stavenhagen En: Balslev y Gutiérrez 2008, p. 389).

Mostrando como “hoy con la globalización ya no es posible pensar en reconstituir el mundo –y mucho menos el Estado- como un mosaico de comunidades culturales auto contenidas, aunque a veces el discurso indígena- y el de muchas minorías también- parece orientarse por esta vía. La actual dinámica multicultural en el mundo conduce a lo que los observadores definen como “nuevas culturas híbridas” o el nuevo “cosmopolitismo” de abajo, que pretende disputarle la hegemonía al cosmopolitismo consumista neoliberal de arriba. (Rodolfo Stavenhagen En: Balslev y Gutiérrez 2008, pp. 394 -395). Desde otra perspectiva, Eric Van Young anota :

... uno tendería a comentar que la fuerte tendencia al regionalismo en la historia mexicana (y también en muchos otros países en desarrollo), y la regionalidad concomitante sobre-desarrollada –si pudiéramos llamarla así-, son frecuentemente síntomas de economías desarticuladas. Casi del mismo modo, la falta de una estructura de clases fuerte y su típico reemplazo por castas, estratos u otras estructuras marcadamente segmentadas, pueden ser vistos como un síntoma de articulación social débil. Considerada desde esta perspectiva, buena parte de la

experiencia histórica mexicana ha sido una lucha por reemplazar la definición regional de sociedad por una definición de clases, a pesar que teóricamente los dos conceptos no son mutuamente excluyentes.”¹⁰⁰ (Van Young, 1991: 262).

Dicha trama de espesores que combina lo regional con las diversas escalas que lo componen y lo definen mas allá de lo geográfico, así como sus relaciones con otros procesos en los que se realiza la lucha de clases sociales, permite entender cómo se trazan las configuraciones regionales desde varias perspectivas en las que juegan identidades, diferencias y contradicciones, y desde allí cómo se combinan de diversas maneras, logrando establecer pulsos y ritmos puntuales a las movilizaciones.

5.1. Lucha social y vitalidad local. Las marchas de 1985 a 1994

El año de 1985 marca la memoria de los pobladores del Sur de Bolívar. En esa fecha marcharán hacia Cartagena, capital del Departamento de Bolívar, para denunciar la carencia total de servicios públicos en sus comunidades. Tras la marcha se firman los acuerdos y el gobierno se compromete a construir carreteras, redes eléctricas, acueductos y alcantarillados y a invertir en escuelas y centros de salud. Esta marcha es el primer episodio que expresa, a viva voz de sus protagonistas, el proceso de movilización social que se va dando en el Sur Bolívar. El seguimiento de lo definido en las mesas de negociación en la capital departamental, estuvo acompañado por otras marchas hacia las principales cabeceras municipales de la región: San Pablo (1987), Simití (1988), Morales (1989) y Pinillos (1990).

Las reivindicaciones que se presentan frente al gobierno departamental y los funcionarios municipales son producto del reconocimiento interno de la población de una serie de necesidades sociales de las comunidades. Este reconocimiento local permite a los participantes en las marchas identificar que las problemáticas de cada comunidad tienen elementos en común con otras. Pero puntualmente cada una va a presentar un pliego: un

¹⁰⁰ Van Young, Eric. 1991. “Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas y teóricas” en Pedro Perez Herrero (comp.) *Región e historia en México 1700 1850. Métodos de análisis regional*, México d.f., Instituto Mora/ Universidad Autónoma Metropolitana.

puente, un tramo de carretera, una escuela, etc. En palabras de don Gabriel, dirigente de la región:

En 1985 hicimos una primera marcha, cuando fuimos a Cartagena 8.300 campesinos ya por asociaciones de juntas de acción comunal y de campesinos y mineros, donde se hicieron unos acuerdos con el Estado colombiano, con la Gobernación y con las alcaldías, donde muy poco de esto se cumplió. Ahí empezaron marchas municipales siguiendo los acuerdos y también al mismo tiempo nos íbamos organizando nosotros, íbamos construyendo muchas cosas desde la comunidad, como eran las escuelitas, como eran los puestos de salud, mucha cosa, carretera, caminos que fuimos construyendo desde la organización social. (Entrevista con don Gabriel, 2000. Barrancabermeja)

El reconocimiento territorial de las comunidades y su consecuente reconocimiento “en común” se alimenta con el aumento de la agitación política interna. Dicha agitación es desatada por tres factores que hacen parte de la formación social colombiana. El primero parte de la descentralización político-administrativa fomentada desde el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1988) e implementada en 1986 y a partir de la cual se legisla la elección popular de alcaldes. El segundo está determinado por la incidencia de organizaciones gremiales con presencia en la región como la ANUC y de expresiones políticas de izquierda como la Unión Patriótica y A Luchar. El tercero tiene como base la presencia de organizaciones guerrilleras. Estos tres factores se relacionan con los procesos de configuración regional que se están dando en la región. Entre ellos, la creación de nuevos municipios que abren espacios de participación, la definición del territorio como zona roja por parte de las fuerzas militares y la ejecución de una serie de estudios prospectivos para cuantificar las riquezas naturales y la capacidad productiva de la Serranía. Todo esto en su conjunto va a estimular que las elites latifundistas de la Costa Atlántica y los narcotraficantes que buscan comprar tierra para “lavar dinero”, se interesen por determinados espacios del Sur de Bolívar. También se incrementará el interés de las elites políticas departamentales en busca de votos. La causa común entre grandes propietarios de tierras, elites políticas y la labor desempeñada por las fuerzas militares, logran darle una dimensión regional al Sur de Bolívar desde “arriba y afuera”.

Para impulsar esta construcción, a partir de la marchas de la década de los 80, se constituye, por un lado, el discurso que afirma que el Estado no ha hecho presencia y ha olvidado a la gente del Sur de Bolívar; por lo cual los pobladores exigen la presencia de instituciones

más allá de las fuerzas militares. Por otro lado, buscan acceder a los lugares de control municipal por medio de movimientos cívicos. Estos movimientos ganan las elecciones de las alcaldías de San Pablo y Simití, aunque no logran sostenerse por más de un período frente a la competencia electoral de los partidos tradicionales. Como parte del proceso, entre 1990 y 1994 se convocan una serie de espacios de discusión como las asambleas comunitarias y municipales, y los “foros regionales por la paz”, en donde se denuncian las precarias condiciones de atención del Sur de Bolívar, la mala administración política y se controvierte la presencia de la fuerza pública dados sus objetivos antisubversivos:

Estas movilizaciones, identificadas por parte del estamento como manifestaciones de la insurgencia, ya en ese entonces con fuerte arraigo en la zona, traería como consecuencia la estigmatización de la región como foco insurgente y, por lo tanto, la respuesta del Estado sería marcada fundamentalmente a través de acciones de contra-insurgencia, que implicarían la militarización de la zona. Gran parte de los acuerdos firmados en el año 1.985 no se cumplen, generando nuevamente el descontento generalizado en la población, incumplimiento aunado a una creciente corrupción política que despilfarraba los pocos recursos destinados a la región (Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio, 1999, denuncia).

Desde mediados de la década de los 80 inicia también el proceso organizativo del Macizo colombiano. Sus primeras expresiones de lucha se dan en los municipios del Sur del Cauca: la Sierra, Almaguer, Timbío, Sotará, Santa Rosa, San Sebastián, Balboa, Patía, Rosas y Mercaderes. En una serie de reuniones entre campesinos y docentes veredales se manifiestan las condiciones de pobreza y abandono del Macizo, en contraste con sus capacidades productivas, riquezas hídricas y su importancia como escenario histórico. Los problemas más destacados por sus impulsores fueron: la salud, la vivienda y la falta de tierras y recursos para las actividades campesinas.¹⁰¹ Entre las acciones desarrolladas, emanadas de este primer diagnóstico, se destacaron la toma de alcaldías y las vías (CIMA Nariño, noviembre de 2008).

Sobre estas bases, la organización social se fue fortaleciendo y tomando expresiones políticas que generan mayor identidad (Solano, A. 2001). La dinámica de movilización centrada en reuniones y acciones veredales, corregimentales y municipales, activan la lucha por mejorar las condiciones de vida de los pobladores de los municipios, y alcanza una serie de acuerdos firmados con el Estado. En dicha dinámica de movilización se logran establecer las primeras mesas de negociación, en las cuales se logran algunos acuerdos, que sintetizamos en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 3: Luchas sociales en la década de los 80		
Mes-Año	Municipio	Acuerdo
dic-85	Bolívar	Acuerdos de Bolívar
may-86	Sucre (Bolívar)	Acuerdos de Sucre
nov-87	Santa Rosa	Acuerdos de Guachicono
nov-87	Almaguer	Acuerdos de la Vega

La Marcha campesina de la Bota Caucana en 1987 se realiza aprovechando el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) que favorece la convocatoria de dirigentes de la ANUC y de campesinos cultivadores de café. Algunos de estos acuerdos son incumplidos y como respuesta se organizan dos paros cívicos en octubre de 1988, uno en Bolívar y otro en Argelia. Paralelamente también en Popayán y Corinto se generan acciones para reclamar servicios y denunciar la fumigación con glifosato. En 1989 se lleva a cabo la toma de Almaguer donde los campesinos ocupan la cabecera municipal con el fin de vincular al proceso a la administración municipal, profesores, estudiantes y a otras instituciones. De aquí en adelante la “Coordinadora Campesina” sería la encargada de convocar a la población mediante los cabildos populares, con el fin de avanzar en la creación y consolidación del Movimiento Social de Integración del Macizo Colombiano, que es la base para la constitución del “Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA)” en 1993 (Conversaciones con César, Director de Fundecima. 2010).

Como es evidente en el tipo de acuerdos logrados a finales de la década de 1980, esta primera etapa de luchas sociales en los municipios del sur del Cauca se presenta de forma desarticulada, pero al mismo tiempo se va creando un ambiente de movilización y organización entre los campesinos y otros trabajadores de los diferentes municipios que va

sentando las bases de gestación de un proceso, cuya dinámica ya no se despliega de forma independiente, sino que se presenta bajo un marco integrador tanto en sus demandas como en las protestas. En medio de este proceso de movilización se convoca a una asamblea nacional constituyente, que en 1991 promulga la constitución de 1991.

La Constitución de 1991 reforma la que había regido al país desde 1886 y activa dos apuestas fundamentales: (1) la promulgación de la base garantista de la Constitución, estableciendo las obligaciones del Estado con una serie de derechos sociales fundamentales, entre ellos el reconocimiento de la nación como pluriétnica y multicultural; y (2) la definición del orden de descentralización y la redefinición del ordenamiento territorial del país, buscando generar formas de autonomía regional, municipal y la organización de territorios étnicos (Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios para la población afrocolombiana).

Del 20 al 26 de agosto de 1991 se lleva a cabo la movilización de más de 30.000 personas de los municipios del Macizo, conocido como el “Paro de Rosas”. La acción más importante es el bloqueo de la vía Panamericana, causando un impacto que trasciende a nivel nacional. En dichas jornadas aparece la urgencia de organizarse con el propósito de “asumir la defensa de derechos civiles y políticos”. La primera forma que asume esta urgencia será la conformación de cabildos y audiencias “por la vida” (Conversación con Víctor C., vocero del CIMA, La María, Piendamó, mayo de 2008). Se argumenta la necesidad de considerar “las condiciones de vida regionales” trascendiendo las reivindicaciones del orden municipal. Las formas organizativas que promueven y desarrollan la movilización se centran en asambleas y cabildos que empiezan a nombrarse como “maciceños” (Testimonio de los participantes en la Escuela Agroambiental, Mercaderes en febrero de 2008). Además de replantear el alcance de las propuestas conjugando lo municipal con lo regional, se generara un proceso para “la integración de los municipios del Macizo como región” con lo cual se define la necesidad de participar en las elecciones locales. Éste sería concretado en el fortalecimiento del movimiento de integración del macizo, llamado “Mimacizo” (Testimonio de las directivas del CIMA en el Taller de San Lorenzo, junio de 2008).

De esta manera se estableció para exigir el cumplimiento de los acuerdos y como estrategia para comenzar a ser reconocidos en la región, así como para difundir a nivel regional y nacional e internacional los problemas del macizo y hacer un llamado sobre las potencialidades y problemáticas sociales y ambientales de la región (Conversación con Jesús López, líder del CIMA, Popayán, mayo de 2008).

5.2. Las luchas sociales y la emergencia de lo regional 1994-1998

La “Gran marcha del 1996” se ha convertido en un hito de la lucha de los pobladores del Magdalena Medio. Miles de pobladores marcharon hacia los cascos urbanos de los distintos municipios, formando una concentración central en San Pablo. A la marcha del Sur de Bolívar se sumó la marcha de campesinos del valle del río Cimitarra. Esta articulación le dio a la marcha una caracterización regional, como marcha del Magdalena Medio. Como resultado, el 29 de septiembre se firman en San Pablo los acuerdos entre una comisión del Gobierno nacional y departamental y una comisión de “representantes de los campesinos y mineros marchistas del Sur de Bolívar y el valle del río Cimitarra”. En los acuerdos el gobierno se compromete a proporcionar las garantías económicas, de educación, salud, infraestructura, servicios públicos y derechos humanos. Por su parte, los voceros y campesinos marchistas se comprometen a desactivar las movilizaciones y concentraciones campesinas para retornar a sus tierras. Este acuerdo fue firmado por el entonces presidente de la República, Ernesto Samper Pizano (Documento Gubernamental, Acuerdos de 1996)

Si las marchas y los foros anteriores pusieron sobre la mesa las cartas de los diferentes sujetos que hacen presencia en la región, la marcha de 1996 pone en primer plano la “disputa sobre la región”. Entre ellas se destaca la noción de región defendida por el Estado desde lo geográfico-económico como su eje rector que enfatiza el papel de la activación del mercado del oro. Desde esta definición se subraya la conformación de un eje del sur al norte de la región, siguiendo las sierras de Santo Domingo y San Lucas, que a su vez conforman otro eje de relaciones que se intentan potenciar regionalmente tanto al oriente como al occidente. Con el oriente para abastecerse de productos básicos para la alimentación, con el occidente como puente de comercialización del oro con Antioquia y

Córdoba. Este proceso de configuración se articula con la implementación de un modelo de diferenciación de la propiedad de la tierra entre la “parte baja” y la “parte alta”. En la primera se auspicia la concentración de grandes extensiones para la ganadería y la plantación de palma africana, que desplazan, si no físicamente, sí productiva y comercialmente, a las cooperativas de producción campesina. En la segunda, se inicia una disputa por la propiedad de los territorios mineros entre las concesiones a la pequeña minería producto del establecimiento de la zona como reserva minera, las demandas por parte de una familia de Cartagena sobre la propiedad de su territorio y el establecimiento de prospecciones mineras en manos de compañías de explotación aurífera de Canadá, Inglaterra y Sudáfrica.

Por otra parte, la movilización social de los pobladores, que ha ido definiendo una serie de prácticas productivas, territoriales y culturales, pone en juego una concepción regional desde lo “socio-territorial”, que se expresa políticamente contraria a una definición que se limite a “lo geográfico-económico”. Para los pobladores el cumplimiento de sus reivindicaciones implica la titulación de tierras, la ampliación de los créditos agrícolas, el reconocimiento de la población campesina y minera, las formas de participación e incidencia directa en el gobierno local. Por esto los pliegos y exigencias presentados en las marchas se constituyen en la expresión de una fuerza que va construyendo, discursivamente y en la práctica, otro sentido a la configuración regional: “desde abajo”.

Ahora no sólo se pide la presencia del gobierno departamental, como sucedió en la Marcha de 1985, sino la presencia del Estado a través de instituciones como la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Aún más, como lo recuerda Henry Montenegro, “en 1996 se dan las marchas coqueras al mismo tiempo que se originan las amenazas a la población y el Sur de Bolívar se solidariza con estas causas con esta marcha” (Entrevista con Henry Montenegro, vocero de la Marcha de 1996, Barrancabermeja, octubre de 1998). Con estos hechos se muestra cómo se van dando las articulaciones ya no sólo regionales,

sino también las solidaridades con otros movimientos regionales del país, que dibujan su carácter como movimiento popular de cara a la política nacional.¹⁰²

En este campo de tensiones que delinear la configuración territorial del Magdalena Medio, las partes se comprometen “a respetar el marco de planificación señalado por los planes de desarrollo departamentales y las normas de descentralización, a esto se agregó la necesidad de estructurar un proyecto de ordenamiento territorial como medida de fondo para corregir las desigualdades espaciales en distribución de recursos de desarrollo”. En ese sentido, se buscó posicionar a los municipios, los cuales debían elaborar los diseños técnicos y formular en cada situación la metodología correspondiente.¹⁰³ El punto crítico estaba en la relación entre la capacidad técnica, de gestión y financiera, y el grado de compromiso político de algunos gobiernos municipales para abordar los pormenores de los proyectos. Esto significó en la práctica la restricción de la participación de las comunidades a la delegación de representantes en la Comisión de Seguimiento a los Convenios, en la que participaron, además, la Consejería Presidencial para la Costa Atlántica, las gobernaciones y las alcaldías. El resultado fue el acotamiento del seguimiento por parte de los pobladores que quedó en manos de los alcaldes municipales y sus funcionarios. Esta situación conduce a los pobladores a movilizarse una vez más, tomándose la catedral de Cartagena en octubre de 1997.

Los pobladores no restringen su actividad a lo pactado con el gobierno nacional. Durante estos años se organizan para generar condiciones propias para “construir región”. Entre los procesos mas sobresalientes está, el proceso de consolidación de asociaciones de mineros y campesinos, la restructuración de cooperativas, el impulso a empresas comunitarias y municipales, como la “empresa vial del sur de Bolívar” (Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio. 1999. p. 20), la activación de procesos de formación interna, la consolidación de determinados productos como el frijol, el arroz, la panela, para generar excedentes. Con ello la dinámica regional cobra una dimensión

¹⁰² Estos elementos se ponen en relación en el proceso de articulación definido por Múnera, pero también nos remiten a los tres fenómenos que caracterizan a los movimientos sociales en la actualidad, siguiendo a Offe. Estos serían: (1) el aumento de las ideologías y actitudes “participativas”; (2) el uso creciente de formas no institucionales de participación política; y (3) las exigencias políticas y los conflictos políticos relacionados con temas que solían ser considerados como temas morales o económicos (Offe, 1988, p. 164).

distinta, justamente, se trata del paso de reclamos de derechos ciudadanos, hacia propuestas en donde se asume ser poblador. Entendiendo que el primero los define como sujetos de derechos y lo segundo les permite ser sujetos de poder.

Al incumplimiento se sumó la incursión paramilitar de diciembre de 1996 y la crisis política generada por las elecciones a las alcaldías de 1997, que significaron la suspensión del trámite normal de los proyectos. Todo esto condujo a que en aquel año el mismo Gobierno Nacional reconociera haber incumplido en un noventa por ciento los acuerdos de las marchas campesinas del Valle del Cimitarra y del Sur de Bolívar. Así, la Gran Marcha del Magdalena Medio culmina con una negociación incumplida por el Estado, quien termina delegando para tal tarea a las instituciones y autoridades departamentales y municipales. En los meses siguientes a la marcha las comunidades del Sur de Bolívar denunciaron “una cadena de actos de terror contra la población por parte de las fuerzas armadas y grupos paramilitares del Estado colombiano” (Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio. 1999. p. 28).

Las problemáticas que tuvieron expresión durante las marchas de 1996 fueron muy similares tanto en el Sur de Bolívar como en el Valle del Río Cimitarra. En el primer caso, el futuro de la minería artesanal, el crédito productivo a los pequeños campesinos y la titulación de tierras fueron los temas que ocuparon los primeros lugares. En el segundo caso, se hizo especial énfasis en la ejecución de un plan de desarrollo agropecuario; la dotación de hospitales y puestos de salud con los medios y recursos, médicos, financieros y de infraestructura necesarios para atender a la población más pobre; la ampliación de la cobertura de los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; la realización de programas sociales para ancianos; el fortalecimiento de la educación Básica y Media Técnica y la capacitación de dirigentes comunales y funcionarios públicos en asuntos públicos o de desarrollo empresarial. (Véase: Anexo Metodológico. Documento. Marchas Campesinas. 1996).¹⁰⁴

¹⁰⁴ En este documento se presenta minuciosamente el contenido y los alcances de los Acuerdos de las marchas de 1996.

Los mineros pedían la legalización de sus propiedades, la dotación de maquinaria y la capacitación en asuntos técnicos y empresariales a través del Sena y con asesoría de entidades o instituciones como Mineralco, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), la Gobernación de Bolívar, el Ministerio de Agricultura, Ecopetrol y las Alcaldías locales. En lo esencial el gran objetivo de este sector social y económico era contar con el apoyo institucional para dar un salto tecnológico, ambiental y empresarial en la explotación de oro.

Los campesinos pedían ampliar el monto de cartera destinado por la Caja Agraria a los pequeños productores y clarificar la posesión de las tierras a través de la aplicación de algunos mecanismos previstos en la Ley 160 de 1994. En educación la preocupación central fue integrar el nivel medio al contexto económico y cultural de la zona a través del impulso de programas de enseñanza y formación técnica en temas agropecuarios, pesqueros, mineros y ambientales¹⁰⁵. También establecer vínculos más estrechos entre la educación media y la superior con un sistema de becas y facilidades de crédito para el acceso de estudiantes pobres a los establecimientos universitarios públicos de las principales ciudades de la región.

El plan de desarrollo agropecuario que se pedía debía ser cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, el DRI y los gobiernos municipales. Los campesinos recibirían del programa de Desarrollo Rural Integral (DRI) la capacitación técnica necesaria para este propósito. Una vez realizado el plan, los proyectos resultantes serían financiados por diferentes entidades y el Ministerio de Agricultura cumpliría las funciones de coordinador. Por su parte, el INCORA adelantaría el trabajo de titulación de tierras apoyado en los gobiernos y las organizaciones locales.

Para poner en práctica los compromisos mencionados, las partes del acuerdo se comprometían a respetar el marco de planificación señalado por los Planes de Desarrollo Departamentales y las normas de descentralización. A esto se agregó la necesidad de

¹⁰⁵ En un sentido más amplio, la Consejería para la Costa Atlántica, el Ministerio del Medio Ambiente y la Gobernación de Bolívar se comprometieron a concertar con las comunidades del Sur del Departamento y las ONG un programa ambiental.

estructurar un proyecto de ordenamiento territorial como medida de fondo para corregir las desigualdades espaciales en distribución de recursos de desarrollo.

Entre otras cosas, lo anterior significaba que para acceder a los recursos de cofinanciación y ejecutar los proyectos derivados de los acuerdos, los municipios deberían elaborar diseños técnicos y formular, en cada situación, la metodología correspondiente. Así por ejemplo, en saneamiento básico, la responsabilidad de las obras correspondía a los gobiernos locales; mientras que el departamento limitaba sus funciones a identificar, formular, inscribir, tramitar y seguir el proceso a que diera lugar cada proyecto hasta su aprobación. El punto crítico en este proceso parecía estar en la capacidad técnica, de gestión y financiera o el grado de compromiso político de algunos gobiernos municipales para abordar los pormenores de los proyectos.

La participación comunitaria en el mismo proceso se vio restringida a la delegación de representantes en la Comisión de Seguimiento a los Convenios. En esta Comisión participaban, además, la Consejería Presidencial para la Costa Atlántica, las Gobernaciones y las Alcaldías. La forma de operación asumida por esta instancia y la cabida que en ella tuvo la veeduría comunitaria fueron quienes anunciaron el incumplimiento de los acuerdo y éste se constituyó como una de las causas más importantes del éxodo en 1998.

Con todo, el motivo central de las movilizaciones populares de 1996 fue el respeto y protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En aquella oportunidad se cuestionó y rechazó la estigmatización de que son víctimas los campesinos y sectores populares de la Región¹⁰⁶ y se hizo pública la forma como eran violados aquellos principios universales.

En este punto la principal petición giró alrededor de hacer un llamado a las fuerzas en conflicto para lograr un acuerdo en el respeto a la población civil¹⁰⁷. Además, adelantar un proceso general de educación sobre los principios del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Para cumplir estos propósitos los marchistas creían necesario

¹⁰⁶ Con frecuencia se les señala como “subversivos”. Por esta razón pidieron prudencia a los medios de comunicación en la información que suministraban la marcha y sus líderes.

¹⁰⁷ Por ejemplo que terminaran las amenazas contra alcaldes, personeros, concejales y líderes comunitarios.

incrementar la presencia de algunas instituciones del Estado (Procuraduría, Fiscalía y Defensoría de Pueblo). Como asuntos inmediatos se solicitó la persecución y desmantelamiento de los grupos paramilitares, el desmonte de las cooperativas de seguridad (CONVIVIR) y la búsqueda de salidas políticas al conflicto armado; las garantías de seguridad y de trabajo para las organizaciones sociales y de protección a los derechos humanos; el respeto a la iniciativa de construir un movimiento regional por la paz y la realización de diálogos regionales entre las Fuerzas Revolucionarias y el Gobierno

A pesar de las medidas que sobre este particular adoptó el Estado en los meses que siguieron a las marchas de 1996, la ofensiva paramilitar en el Magdalena Medio no se detuvo. En diciembre de 1996 y abril de 1997 ocurren la masacre en Yondó y la incursión a Río Viejo dando origen a una situación terrorífica que no termina, por el contrario aumenta, para estos hombres, mujeres y niños. La incursión paramilitar de diciembre de 1996 y la crisis política de Yondó luego de las elecciones de octubre de 1997, significaron la suspensión del trámite normal de los proyectos.

En el primer acuerdo de 1996 (firmado en San Pablo, el 29 de septiembre) se llegó a los siguientes puntos: se debe asegurar la implementación de un plan de acción social, agropecuario, minero y condiciones de producción, en los términos que se detallan en el documento y en el trabajo de las diferentes comisiones creadas en este mismo acuerdo.

Las comisiones creadas, con los acuerdos establecidos, fueron:

- Comisión de garantías económicas: estableció un acuerdo con la Caja Agraria para aumentar la cantidad y el monto de préstamos, así como hacer que el título de propiedad del INCORA fuera garantía para solicitar el préstamo. Solicitó que se creara una oficina del INCORA en el Sur de Bolívar para impulsar la titulación de baldíos, y que se establecieran convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, para capacitación en agricultura y minería. Por último, se le solicitó al Ministerio de Minas y Energía el otorgamiento de licencia para la explotación minera por parte de las asociaciones existentes en la región.
- Comisión de educación y salud: solicitó becas para estudios universitarios y tecnológicos para jóvenes de la zona. Acordó que el gobierno departamental de

Bolívar debería asumir el 50% de la carga administrativa de los colegios (que antes estaban en los municipios). Así mismo, se demandaron un cupo preferencial del Fondo de Inversión Social para la región, y remodelación y dotación para los puestos de salud. También pidió la construcción de un hospital regional para el Sur de Bolívar.

- Comisión de infraestructura y servicios públicos: acordó la instalación de teléfonos públicos monederos, y la capacitación para su mantenimiento, electrificación de corregimientos y veredas, financiamiento de acueducto y alcantarillado para corregimientos y veredas, y la construcción de vivienda rural, a través de programas de vivienda social para construcción y remodelación.
- Comisión de Derechos Humanos: en primer lugar, demandó la no estigmatización de los marchantes. También pidió la creación de una comisión de Fiscalía, Procuraduría y Defensoría para investigar a los paramilitares. Reivindicó la necesidad de una salida política al conflicto armado, del apoyo a diálogos regionales, y la protección y divulgación de los derechos humanos.
- Comisión de seguimiento: se conformó para verificar el cumplimiento del acuerdo, con participantes de la Consejería presidencial para la Costa Atlántica, la Gobernación de Bolívar, las alcaldías, y representantes de la marcha. Se definió la realización de una reunión cada cuatro meses.

Esta experiencia del trabajo por Comisiones y de las conversaciones sectoriales sirvió para que todos los campesinos aportaran a la discusión, teniendo en cuenta lo que más trabajaban en su cotidianidad y lo que más hubieran discutido en sus JAC. La experiencia fue base para la segunda acta de compromiso, derivada de la movilización hacia Barrancabermeja de parte de los campesinos del Valle del Río Cimitarra, y su posterior negociación, el 27 de octubre de 1996. Las motivaciones y resultados fueron similares.

Los compromisos adquiridos en esta segunda marcha se pueden sintetizar en dos grandes ejes:

- En términos de orden público, derechos humanos y convivencia ciudadana: promoción de la constitución de un movimiento regional por la paz en el

Magdalena Medio. El gobierno nacional debía aplicar normas y estrategias para la erradicación del paramilitarismo y superar los problemas de impunidad. Se conformaría una Comisión interinstitucional para denunciar, verificar, publicar y velar por el resto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH).

- Frente al sector agropecuario: se acordó la financiación de la realización del Plan integral de desarrollo agropecuario, y los programas de adquisición de tierras, vivienda, salud y educación, desarrollo empresarial, con el fin de alcanzar el bienestar de la comunidad campesina, con un perfil y filosofía de empresa comunitaria o cooperativa, cuyos integrantes serían pequeños agricultores y parceleros.

En términos de infraestructura: se acordó la construcción de la hidroeléctrica en el río Tamar, así como inversión social en salud, acueducto y alcantarillado. También se demandaron garantías para el retorno y la seguridad de los marchantes.

A pesar de que las actas fueron firmadas por el gobierno nacional, éstas se caracterizaron por su incumplimiento. El comité de seguimiento conformado en la primera marcha envió una carta al presidente Ernesto Samper para evidenciar su disgusto con la situación y su firme decisión de seguir con una actitud digna frente a la situación, que se fue agudizado para la comunidad, pues cada día empeoraba más:

... quedan en libertad de cumplir o de seguir burlándonos, quedan en libertad de seguir mintiendo o de ser serios y responsables con la paz a la que le viven construyendo trampas. Quedan en libertad de hacer una historia menos vergonzosa que la que hasta ahora han estado falseando con la simulación. Queda pues claro que los esfuerzos que dejaremos de gastar detrás de la honestidad de muchos funcionarios serán ahora esfuerzos aplicados para que las comunidades nos preparemos a ser “espejo” de las gestiones gubernamentales: nos cumplen a los colombianos de esta región y tendrán nuestro aplauso, o siguen en su actitud dilatoria, evasiva e irrespetuosa y así igual las comunidades sabrán actuar en concordancia...” (Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de la Marcha de 1996. Octubre 1997).

Como garantía de la realización de los Acuerdos reafirmados y como escenario de participación comunitaria se constituyó un Comité de Control y Seguimiento a los Compromisos. En éste participarían cinco delegados de los campesinos, un representante de

la Diócesis de Barrancabermeja, un funcionario de la procuraduría Provincial, otro funcionario de la Defensoría del Pueblo, un delegado del Ministerio del Interior y dos integrantes del Movimiento Regional por la Paz del Magdalena Medio.

En consecuencia, la evaluación realizada por los voceros campesinos sobre el estado de los acuerdos de la Marcha, identificó los siguientes factores de incumplimiento:

- No hubo apropiación presupuestal. Se hizo el compromiso sin bases reales, por ejemplo en vías y electrificación, (compromisos 117, 139 y 126, entre otros, del Sur de Bolívar).
- Se apropiaron recursos pero no se ejecutaron. (compromiso 127).
- Se apropiaron los recursos, se ejecutaron pero se cambió el objetivo inicial del acuerdo y los beneficiarios, (proyecto agroganadero de Yondó).
- Se apropiaron recursos, hubo transferencia de éstos pero no se han ejecutado porque los municipios argumentan no tener recursos para cofinanciación (construcción de viviendas de interés social de Yondó y Remedios).
- Se asignaron recursos pero no se sabe qué pasó porque nunca aparecieron (sector salud, compromiso 68).
- Se hicieron compromisos para crear ordenanzas y proyectos de ley de la República que viabilizaran la inversión de los acuerdos, éstos no se cumplieron, ejemplo de ello son las plazas docentes, la vía de Barranco de Loba, etc.
- No se cumplieron los acuerdos con respecto a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH). Se han incrementado los índices de violación de los derechos humanos a consecuencia de las acciones de los paramilitares y de las Fuerzas Armadas (FF AA).
- Se ejecutaron obras sin ninguna relación con la realización de los objetivos finales de los acuerdos, ejemplo la supuesta reforestación del Sur de Bolívar.

- En minería se lograron unos acuerdos, pero después se formularon proyectos de ley que desconocían estos compromisos y perjudican a las organizaciones mineras.

Caben algunas consideraciones adicionales al tema del incumplimiento de los acuerdos. Como fue dicho, para el desarrollo de los compromisos los campesinos, los pobladores y el gobierno acordaron que se involucraría a entidades estatales (Programa Desarrollo Rural Integral (DRI), Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), Empresa Colombiana de Petróleo (ECOPETROL), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Salud (MINSALUD), entre otras), los gobiernos departamentales, las alcaldías y las organizaciones civiles. Con este procedimiento muchos proyectos se ataron a modelos de cofinanciación que requerían el aporte concertado de recursos de los distintos niveles territoriales en un periodo que se caracterizaría por crisis financiera, la poca capacidad técnica y el endeudamiento de municipios y departamentos.

5.3. Defender la vida: de sujeto de derechos a sujeto de poder

En julio de 1998 diez mil personas se movilizan hasta Barrancabermeja, San Pablo, Morales y Bogotá. Esta vez, utilizando la figura del “Éxodo”, se denuncia el “incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado en materia de inversión social y de protección de los derechos humanos”; y se presenta un “programa de vida digna” para el Sur de Bolívar (Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio, 1998). Durante 103 días ocuparon instituciones públicas del puerto petrolero, escuelas de los municipios, el polideportivo de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y los alrededores de la sede de la Embajada de los Estados Unidos en la capital del país. El 4 de octubre de 1998, el recién electo gobierno de Andrés Pastrana firmó otro acuerdo, señalado como uno de los más ambiciosos en términos de lucha contra el paramilitarismo, protección de los Derechos Humanos e Inversión Social. Sin embargo:

Miles de pobladores desplazados desde los corregimientos de Buena Señá y Santa Helena, Micoahumado, Mina Azul y Norosí, hacia las cabeceras de Puerto Rico (Tiquisio), Barranco de Loba, Río Viejo y Morales. Un cálculo preliminar fijó el número de desplazados en 12.500 personas.

A su paso los paramilitares destruyeron el corregimiento Pueblito Mejía e incineraron casas y construcciones públicas en Mina Estrella, Buena Señá, Micoahumado, Arenal, Puerto Rico, Colorado, Norosí y La Rufina. En la primera de estas localidades degollaron dos niños entre 3 y 5 años de edad. En total fueron destruidas 689 viviendas y 2 alcaldías (Arenal y Tiquisio).

Innumerables hurtos y saqueos en los lugares donde alcanzaron a llegar los paramilitares.

Cerca de 38 personas asesinadas entre las que se encuentran 8 niños. Con lo anterior vemos que el horror paramilitar se incrementó después del éxodo, así por ejemplo, el veinte (20) de Noviembre del 98, en un foro campesino del MM llevado a cabo para la elaboración del presente plan, se presentó la denuncia del asesinato de 63 marchantes del éxodo; como siempre la población señaló la participación y complicidad de las FF AA en la mayoría de los asesinatos. En los días en que dábamos por terminado este documento (Enero 1999), fueron masacrados 17 habitantes de la cabecera municipal de San Pablo; ejército, policía y armada fluvial no actuaron. (Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio, 1999).

Esta vez la movilización tuvo un reconocimiento nacional. Gracias al despliegue informativo de varios medios de comunicación, el episodio será reconocido como el “Éxodo campesino del Magdalena Medio”. En el transcurso del éxodo se cambiaron las líneas generales del discurso de los voceros de los pobladores del Sur de Bolívar. Este discurso ya no se basa sólo en una serie de demandas y denuncias al gobierno, sino en la exigencia de “condiciones para la vida digna” (Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio. 1998). Para los voceros, el establecimiento de estas condiciones obliga al Estado a cambiar su accionar en la región. Pero no para convocarlo desde una perspectiva paternalista, sino para que desde una disposición emancipatoria “transforme” las bases mismas de su orientación modernizante. Justamente su búsqueda de acuerdos con el gobierno de turno, no impide a los campesinos y mineros denunciar “el comportamiento histórico del Estado”, que trasciende los cuatrenios presidenciales.

Más allá de las denuncias de los malos manejos de las administraciones locales y de los funcionarios departamentales estatales, los mineros y campesinos se interrogan por las relaciones que han configurado a la región desde la dinámica auspiciada por la política estatal. Desde aquí señalan con sospecha la relación entre las multinacionales del oro, los proyectos agroindustriales de palma, las disposiciones legales como el Código de Minas y la incursión del paramilitarismo. Una de las diferencias entre los acontecimientos de 1996,

las anteriores marchas y el Exodo de 1998, la encontramos en los términos de los acuerdos firmados por las partes, ya que en 1996 se estableció que el cumplimiento de los compromisos sería ejecutado por los gobiernos e instituciones políticas locales y departamentales. Por el contrario, el movimiento de 1998, convocó al Estado y pactó los compromisos directamente con el Gobierno Nacional.

En ese sentido, los voceros del éxodo no sólo exigen el cumplimiento de una serie de responsabilidades constitucionales al Estado, sino que buscan posicionarse como “interlocutores políticos” frente al mismo. En el núcleo de esta “disputa política” se exige, en primer lugar, que el Estado asuma de forma legal y militar la confrontación con las fuerzas paramilitares y genere las condiciones para establecer una negociación política con las fuerzas insurgentes. En segundo lugar, se busca el reconocimiento del sujeto colectivo regional: las comunidades, los pobladores, las organizaciones y los voceros del Sur de Bolívar. Un reconocimiento que, por una parte, no sólo implica su definición como habitantes de localidades vulnerables, sino como proponentes de otra forma de hacer y definir lo político en la configuración de la región; y por otra parte, buscan reconocer su capacidad colectiva para diseñar e implementar un ordenamiento territorial en la región.

Para hacer esto posible, antes que presentar un pliego de peticiones o una serie de reivindicaciones sectoriales, los pobladores deciden construir un plan de desarrollo para los 25 municipios de la macro región del Magdalena Medio que participaron en el Éxodo, 16 de los cuales hacen parte del Sur de Bolívar. Este es el llamado “Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio” (de aquí en adelante PIDMM). Esta propuesta surge de los acuerdos que suscribieron representantes del éxodo con el gobierno de Andrés Pastrana que concluyó con su firma el 4 de octubre de 1998. Aquí se fortalece la Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio, donde los voceros consolidan un espacio para reconocer el trayecto recorrido y construir un relato sobre sí mismos y sobre la forma como han establecido su *illusio*:

Desde hace más de dos décadas los pobladores de la región se han organizado en acciones comunales, en comités mineros, de mujeres, de tenderos y en las asociaciones campesinas que han buscado darle firmeza al tejido social, a miles de mujeres y hombres, originarios de estos territorios y de quienes han llegado de otras tierras producto del desplazamiento. A través de muchas manifestaciones de

lucha social, marchas, éxodos, tomas masivas de instituciones y otras, han planteado al Estado las reivindicaciones sociales, económicas y políticas que han sido reiteradas en cada protesta y movilización de los sureños. Toda esta historia de lucha hoy está condensada en un programa de desarrollo elaborado desde y con las comunidades que se llama Plan de Desarrollo y de Protección Integral de los Derechos Humanos Integrales. Aún así, la oferta del Estado a las demandas de los pobladores de la región, plasmadas en multitudines acuerdos, ha sido la agresión sistemática con los asesinatos individuales y masivos (masacres), desplazamientos, quemas de bienes, cultivos, caseríos y de poblados enteros, cerco alimenticio a la población y otras prácticas destructivas llevadas a cabo por el ejército y las bandas paramilitares. (PIDMM, 1999, s.p.).

El PIDMM, presentado por la Mesa, se diseña y formula por los dirigentes locales y voceros del éxodo reunidos en la Mesa y un equipo técnico. Se trata de un Plan que se construye recogiendo el proceso de movilización social, bajo los siguientes principios políticos: el derecho a la vida, la defensa del territorio, el respeto y cumplimiento de derechos civiles, sociales, culturales y económicos, y el reconocimiento político de los voceros de las comunidades. Sobre todo se contempla que “al interrumpirse violentamente procesos o al no permitir su normal desarrollo, se deja a las gentes de la región sin facultades para dimensionar su realidad y sin oportunidades de imaginar y soñar una mejor” (PIDMM, 1999, s.p.).

El Plan se diseña a partir de la evaluación de las condiciones políticas, los derechos humanos, la regionalización existente, así como la economía, educación, cultura, comunicación, medio ambiente y salud. Bajo la premisa del fortalecimiento de las organizaciones sociales autónomas, se busca, primero, que los pobladores tengan una herramienta de planificación e inversión a corto, mediano y largo plazo, que construya un proceso de auto-sustentabilidad. Desde allí se busca implantar los pilares fundamentales para una configuración regional construida desde y por las comunidades. Por último, se pretende establecer una bitácora para que el Estado se comprometa a “pagar la deuda histórica con la región”.

De alguna manera, el PIDMM recoge los tres momentos descritos desde la movilización de los pobladores, con perspectivas y alcances locales y regionales, de cara a un posicionamiento político frente a lo nacional. Bajo las premisas de la integración regional, el desarrollo rural y el fortalecimiento de la autonomía, en el contexto de la lucha por los

derechos humanos, se diseñan los programas que sintetizamos en 8 campos de acción en el siguiente cuadro:

Cuadro 4. Tipos de programas propuestos en el PIDMM	
Campos de acción	Tipo de Programas propuestos
(1) Producción	Recuperación y adecuación de tierras Reactivación de la economía campesina Ampliación de la base productiva Capacitación comunitaria Programa financiero Desarrollo minero Fomento actividades comunitarias urbanas Desarrollo de actividades económicas regionales Reforma agraria integral Desarrollo rural
(2) Infraestructura	Infraestructura de servicios públicos básicos Infraestructura y planificación Integración vial Programa de integración física Electrificación y telefonía rural Programa de vivienda rural y urbana
(3) Ambiental	Educación y socialización de la educación ambiental Saneamiento básico Programa de manejo integral de riesgos
(4) Organizativo	Programa de organización y educación Promoción de organización social Generación de espacios comunitarios
(5) Educación, comunicación y cultura	Sistema de información para la educación en la región Apoyo a la educación no formal Promoción de la educación informal Programa de fomento cultural
(6) Salud	Fortalecimiento del sistema de seguridad social en salud Participación comunitaria para la salud
(7) Derechos Humanos	Programa de defensa de los Derechos Humanos
(8) Territorial	Programa de ordenamiento territorial y manejo integral de cuencas
Fuente: PIDMM, “Programa de inversiones 1999-2002”, 1999	

En palabras del PIDMM: “El Plan Integral nace de los acuerdos para garantizar la vida, la protección de los DD HH y llevar a cabo la inversión social. En esta perspectiva su objetivo

central fue establecer una serie de condiciones que otorgaran seguridad a la población de los veinticinco municipios del éxodo. El término seguridad debe entenderse en un sentido amplio, significa protección a la vida y garantías al ejercicio de los derechos ciudadanos; inversión social; estabilidad y condiciones de desarrollo a los procesos productivos en la agricultura, en la pesca y en la minería artesanal; respeto por las tradiciones y las identidades comunitarias y reconocimiento institucional de la posesión de estas tierras a los campesinos, mineros y pescadores” (PIDMM, 1999, s.p).

Concretamente, los ejes que orientaron el Plan Integral durante su definición inicial, fueron:

1. El Fortalecimiento y consolidación de los sectores productivos de los campesinos, pescadores y mineros y, en general, el estímulo al empleo productivo de las comunidades populares urbanas o rurales.
2. El fortalecimiento del sector educativo formal y no formal acorde con las necesidades de las comunidades de las zonas del Sur de Bolívar, Valle del Río Cimitarra y comunidades populares urbanas.
3. El desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de campesinos, mineros pescadores y comunidades populares de Barrancabermeja para la planeación, gestión, ejecución y control del PIDMM.
4. El fortalecimiento a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos existentes en el Magdalena Medio.
5. El desarrollo de la estructura vial terciaria para facilitar y consolidar los procesos productivos y de comercialización que se adelanten en el Plan y que sean de beneficio para las comunidades.
6. La recuperación y protección del medio ambiente.
7. Las inversiones en salud, saneamiento y otros servicios básicos prioritarios para las comunidades.
8. El Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con la normatividad vigente, debe otorgar las licencias de exploración y explotación del subsuelo. Además el Estado debe facilitar los recursos e instrumentos legales a la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar (ASOAGROMISBOL) para desarrollar un proyecto de gran minería.
9. La definición de las Zonas de Reserva Campesina a criterio de la Mesa del Magdalena Medio.

10. Los proyectos objeto de este Plan Integral debían ser ambientalmente sostenibles y de impacto sobre el desarrollo económico y social del territorio.

Así mismo, se acordó incluir aspectos nuevos para facilitar la construcción y ejecución del PIDMM. En este punto fue importante aclarar que una de las fuentes presupuestales para el mismo debía ser el Fondo para la Paz. Se estableció que la Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio, sería la instancia de coordinación y orientación en la planeación, ejecución, seguimiento y control del PIDMM.

En atención al fracaso de los mecanismos e instancias tradicionales de seguimiento y control, se plantea la necesidad de inscribir el proceso de inversión social en un marco de garantías y protección integral de los derechos humanos; esto supone crear nuevos mecanismos e instancias que trasciendan las anteriores y estén rodeados de actos administrativos para cumplir sus funciones.

Para poner en práctica el PIDMM el Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se comprometió a garantizar los recursos necesarios para el primer cuatrienio.

La revisión de los programas permite entrever los contenidos de un proyecto de vida que se articula regionalmente en torno al eje territorio-poder, desde la concepción de un proyecto productivo autónomo y autosustentable hasta la concepción de un “Programa de ordenamiento territorial y manejo integral de cuencas”, cuya columna vertebral se asienta sobre la organización comunitaria y regional. Desde aquí, los pobladores del Sur de Bolívar se presentan como un sujeto social con capacidad de definir, por medio de su organización, un derrotero político que trasciende la caracterización que usualmente se hace de las “zonas de frontera”, de las que se afirma que adolecen de posibilidades y capacidades productivas y culturales. Por esto es entendible que se asuman como “campesinos” para situarse en el desarrollo de la formación social colombiana como sujetos históricos, y no sólo como pequeños productores o empleados agrícolas, hacia donde buscan situarlos los proyectos del Estado y de las empresas agroindustriales. En palabras del PIDMM:

El Éxodo campesino surgió como producto del incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado, en materia de inversión social y de protección de los derechos humanos. Los acontecimientos del 16 de mayo en Barrancabermeja, y las

protestas urbanas y el éxodo expresan la ilegitimidad del estado en la región. Se prioriza la defensa de la vida, en razón a la arremetida paramilitar en la región, con la complicidad, por acción u omisión, de las Fuerzas Armadas (FF AA) se constata que el Estado no hace nada para superar la impunidad y deja indefensa a la sociedad civil, quien soporta el peso del conflicto armado” (PIDMM, 1999, s.p.)

Afirma posteriormente el PIDMM:

se pueden extraer por lo menos dos elementos fundamentales de las movilizaciones originadas durante los últimos años en el Magdalena Medio: el anhelo de paz y la búsqueda de alternativas de desarrollo. Ambos han quedado plasmados en los diferentes documentos de acuerdo o compromisos entre marchantes y gobierno. Además hacen referencia a fenómenos que se han ido moldeando a lo largo de la historia de este territorio. Se puede observar, por ejemplo, el bajo nivel de articulación en el que conviven sistemas tradicionales de producción campesina o ganadera, algunas empresas Agroindustriales y los complejos petroleros (PIDMM, 1999, s.p.).

A pesar de toda la importancia económica y social del petróleo,¹⁰⁸ el Estado no ha sabido utilizar buena parte de las utilidades generadas por este recurso para hacer frente a las necesidades de la población más pobre de la región. En este mismo sentido tampoco ha sido más eficiente el desempeño de los gobiernos departamentales y locales. Todo lo anterior ha contribuido de manera determinante para edificar un panorama económico regional con pocas posibilidades de desarrollo productivo y competitivo. La transformación de la economía de enclave y extractiva hacia la modernización del aparato productivo y su infraestructura (proyectos energéticos, agroindustria, comunicación y transporte, industria petroquímica, etc.) observada durante los últimos años, en algunos lugares del Magdalena Medio, no parece ofrecer una alternativa digna para la mayoría de los habitantes dado que se ha logrado con el impulso de esquemas políticos autoritarios y ha ocasionado, no pocas veces, graves lesiones al medio ambiente y a las comunidades (Sarmiento y Moreno. 1990).

De allí que la situación obligue a resaltar la defensa de la vida como la forma de consolidar la transformación regional, con las siguientes palabras:

¹⁰⁸ El petróleo genera la mayoría de los empleos estables o las posibilidades de inversión en capital social en todo el Magdalena Medio. (Véase: De Roux, Francisco. 1996)

No es casual que la violencia se ensañe con los líderes populares y persiga o desarticule las organizaciones civiles en los municipios del Sur de Bolívar, en las Comunas de Barrancabermeja o en el Valle del Río Cimitarra. Ellas suelen representar un acumulado histórico y cultural para los habitantes, por esto mismo, han sido objetivo de la agresión criminal de los paramilitares, quienes justifican su proceder con el argumento de que son el apoyo o la manifestación de grupos guerrilleros. Las diversas “justificaciones ideológicas” para involucrar a las organizaciones sociales en el conflicto armado, esconden la estrategia contrainsurgente pensada y desarrollada por las FF AA, se trata de destruir la base social de inmensos territorios, con la “ilusión” de destruir el movimiento armado que confronta al Estado.” (PIDMM, 1999, s.p.)

El nombrar la movilización como un éxodo, permite expresar la urgencia humanitaria de la región, no sólo se trata de un proceso de exigibilidad, y de construcción de acuerdos sobre la inversión institucional. Se trata sobre todo de una alerta social, que enuncia una potencia en proceso, “no vamos a desplazarnos de la región” y la experiencia del éxodo tanto en Barrancabermeja, le da mayor impulso a dicha potencia manifiesta “se imagina que nos desplazemos y nos vengamos a Bogotá y nos toque vivir como viven los pobres aquí debajo de los puentes”, no nos vamos a ir de nuestro territorio, allá producimos riqueza, que tal si venimos a Barranca que con todo y su petróleo, no cambia la vida de la gente”, pero también hay una expresión que nace de los recorridos históricos “venimos de generaciones que se han desplazado, o por las guerras, o por la falta de oportunidades, nosotros ya no nos vamos a desplazar mas, aquí nos quedamos.” Dichos enunciados no eran menores si como lo hemos resaltado se han vivido “una serie de incursiones paraestatales a municipios del Sur de Bolívar y el Valle del Río Cimitarra. Desde diciembre de 1996, poco después de finalizadas las marchas, los paramilitares iniciaron una ofensiva sobre este territorio que amenaza con recrudecer la guerra de una manera desconocida hasta ahora. La que se incrementó en el segundo semestre del 98”. (*Ibíd.*)

La otra realidad es que la economía de la región está cambiando, “nos quieren sacar porque nuestros territorios son ricos, no quieren que estemos aquí para hacer ellos lo que quieran”, el despojo se anuncia como una realidad que viene arrasando el territorio “Otra razón que pesó mucho en la decisión de la movilización fue la prevención sobre el tipo de inversiones que piensan poner en marcha algunas empresas multinacionales en la región. Se habla de megaproyectos para la extracción del oro en la Serranía de San Lucas, del descubrimiento

de grandes yacimientos de petróleo en Bolívar, de las grandes haciendas para la cría de búfalos en las tierras bajas e inundables de Yondó y Cantagallo, de la construcción de una gran transversal sobre la depresión momposina y del interés de los grupos paramilitares por controlar el comercio de la coca en la región para enriquecerse e intensificar la guerra contra el movimiento popular”. El temor a la muerte y el deseo de recuperar sus propiedades es un factor determinante en la movilización de las comunidades. (*Ibíd.*)

Estas dos condiciones ponen un escenario distinto a los procesos organizativos. Para defender la vida no basta con exigir desarrollo, presencia del Estado y Derechos como ciudadanos. Es fundamental construir y trabajar por una propuesta propia, que involucre una transformación institucional, territorial, productiva, cultural y política. Esta realidad se soporta sobre un proceso que ya hemos enunciado: el paso de sujetos de derechos a sujetos de poder, de ciudadanos a pobladores. “Otra de las razones del éxodo para la preservación de la vida, es el convencimiento de los sectores populares, de la validez y vigencia de los acuerdos incumplidos; la necesidad de replantear y reorientar la visión de los mismos. Fundamentalmente, como se dijo, se quiere que las comunidades tengan la participación suficiente para ser protagonistas en el proceso de planeación, formulación, ejecución, control y veeduría.” Y sobre todo construir la propuesta desde las mismas comunidades, ser las elaboradoras, las evaluadoras, las ejecutoras, para planear “la vida con dignidad” (*Ibíd.*).

Desde mediados de la década de los noventa, en el Macizo se establece un trabajo coordinado desarrollado a través de comisiones, constituidas a su vez de acuerdo con los “programas” en ejecución. Se establecen los siguientes “Equipos de Áreas”: (1) productivo (o de economía campesina), (2) ambiental (estos dos primeros se integran en 1997), (3) educación (que establecen los primeros colegios agropecuarios), (4) cultura, (5) salud, (6) derechos humanos, y (7) infraestructura (cuyo desarrollo institucional se inicia en 1998). Con el propósito de otorgar coherencia a los Programas y en diálogo con los procesos indígenas de la región, se establece la necesidad de realizar “Planes de Vida”¹⁰⁹, el primero de los cuales se realiza en Timbío en 1996 y cuya planeación continúa hasta el día de hoy.

¹⁰⁹ La figura del plan de vida nace a partir de la experiencia de las comunidades indígenas que se organizan para proponer –desde su autonomía– formas de planeación que parten de la relación entre las nociones de Cultura y Territorio, con la intención de confrontar los Planes de Desarrollo institucionales que ponen su énfasis en los aspectos económicos. Esa forma de planeación propia ha sido asumida también por algunas comunidades campesinas y afrocolombianas.

Durante estos años el CIMA se convierte en interlocutor de diversas instituciones estatales, lo cual le permite concretar convenios institucionales para la recuperación, conservación y manejo Medio Ambiental del Macizo.

En 1996 se presenta una nueva movilización en Timbío con la “declaración en Asamblea Permanente” y la definición de 26 delegados y voceros en la negociación con el gobierno. En esta movilización se establecen una suerte de lineamientos de movilización en cuatro ejes: identidad, derechos humanos, agua y vida digna. Sin embargo, no se llega a acciones de hecho y los voceros logran unos acuerdos con el Gobierno Nacional. En Timbío se realiza una asamblea de líderes de los municipios y es ahí cuando se gesta la integración con los municipios del norte de Nariño.

Además de consolidarse la organización de las comunidades a través de los encuentros, asambleas y el establecimiento de comités, el “ser maciceño” se va constituyendo como sujeto social y político. Al calor de este proceso se fue dando forma a un “Plan de integración de las culturas del Macizo”, desarrollado a partir de 1999 con las siguientes estrategias. Por un lado, la promulgación de un plan de desarrollo educativo del Macizo, denominado Plademaco, un plan de desarrollo agrario del Macizo y del sur llamado Plademasur y una estrategia macro de defensa de la vida. Sobre estas bases se desarrolla la gran movilización de 1999, que sin duda se convierte en un hito de la movilización social a nivel regional y nacional.

Ésta se desarrolla a través de la organización del paro de 1999, que se hace posible en la confluencia de varios acontecimientos: por un lado, indígenas y campesinos revisan acuerdos incumplidos firmados en años anteriores, mineros de la región revisan acuerdos de tierras y créditos, y Agropenca (organización de pequeños campesinos) también reclama adquisición de nuevas tierras. Por otro lado, los indígenas del Comité Regional Indígena del Cauca (CRIC) se habían tomado la vía Panamericana para demandar al Ministerio del Interior por incumplir al declarar la emergencia económica social y cultural en los resguardos. Además se denuncian las diversas formas de violencia que se efectúan en la región.

Al concluir que los acuerdos de los paros anteriores no estaban siendo cumplidos, se convoca, a través de los líderes municipales, a campesinos, trabajadores, profesores, estudiantes de 26 municipios del Cauca y de 12 de Nariño. Se acuerda que el día del paro será el 1 de noviembre de 1999. Efectivamente este día más de 10.000 marchantes se toman e instalan en la vía Panamericana durante 26 días, específicamente entre el Bordo, Mercaderes y el Cairo.

Durante los 26 días de paro se presentaron varios hechos importantes que van dando forma al movimiento. Se sumaron y apoyaron el paro indígenas de la zona centro del departamento, haciendo presencia más de 7.0000 indígenas del resguardo Puracé y nasas (paeces) del resguardo La María; campesinos ocuparon alcaldías en Almaguer y Bolívar. Sin embargo, después de varios días no se llega a negociaciones y la marcha es denunciada por el Gobierno, diciendo que está infiltrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En el Paro de 1999 se denuncia la situación de los pueblos y habitantes del Cauca, argumentando que es un producto histórico de la política nacional. Algunas de las condiciones en las cuales se encontraba la población del Cauca que se encuentran en las cifras y los indicadores de pobreza medidos a través de los índices de: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Línea de Pobreza (LP), Calidad de Vida (CV) presentados en el capítulo 3.¹¹⁰

El ambiente para el paro de 1999 era propicio; se crea un pliego de peticiones bajo una concepción de desarrollo regional para negociar con el gobierno sobre los siguientes puntos:

¹¹⁰ En el análisis hecho por Luz Ángela Herrera sobre el CIMA se presenta la situación de los municipios donde se inicia el proceso de movilización. En relación con los servicios públicos, el departamento cuenta con 190.428 viviendas, de las cuales el 68% tiene servicio de energía, el 35% cuenta con alcantarillado, el 57% con acueducto y cerca del 56% de la población consume agua que no cumple con las condiciones requeridas por las normas de sanidad.

En diciembre de 1998 en términos de la salud, el Hospital Universitario San José, el cual atiende a más de 200 usuarios de cuatro departamentos, soporta un déficit de presupuesto de 27.000 millones de pesos. En el tema de la educación, los índices de analfabetismo ascienden al 38% en la zona rural, en la zona urbana el 82% de la población sabe leer y escribir pero no puede acceder a un cupo escolar; por otro lado, se requiere 250.000 millones de pesos para pagar los salarios de más de 9000 profesores y crear cupos escolares (Herrera L. 2003).

- Reforma Agraria: se concentra en dos aspectos, la condonación de la deuda por tierras adquiridas mediante el INCORA y la legalización de títulos.
- Derechos sociales: apertura de programas de vivienda rural y urbana, subsidio de vivienda rural para los municipios movilizados, ampliación de 100% del régimen subsidiado de salud; asignación de recursos para el hospital San José de Popayán, se exige que los educadores con cargo a municipio y departamento que queden bajo la responsabilidad de la nación; la construcción, ampliación y dotación de centros educativos.
- Servicios públicos: electrificación, saneamiento básico: construcción de acueductos, alcantarillado, sistemas de manejo integral de residuos sólidos, lagunas de oxidación, biogestores y mataderos.
- Derechos humanos: garantías para comunidades y líderes movilizados, respeto y veeduría internacional y creación de una escuela permanente de derechos humanos.
- Medio ambiente: expedición de una ley de páramos e inversión social y económica, por ser reserva de la biosfera; protección a la biodiversidad y el ecoturismo, acceso al certificado de incentivo forestal.

En estas movilizaciones se han activado distintas formas de lucha para defender y proyectar la vida: La valoración de la economía campesina y la producción de alimentos, la organización de bancos o despensas de semillas propias, la reactivación de formas solidarias de trabajo, el desarrollo de procesos agroambientales, el fortalecimiento de proyectos de educación y de salud desde sus propias organizaciones entre otros. Dentro de estas propuestas se hace evidente también la importancia de actividades conocidas comúnmente como artesanales y que se articulan con los productos de la tierra, en tres dimensiones: como actividades productivas que permiten diversificar las prácticas de producción y la elaboración de objetos necesarios para la vida social y productiva, como procesos pedagógicos al ser transmisores de simbologías y sentidos sociales; y como formas de articulación social, dadas las posibilidades compartir experiencias, formas, usos y materiales, mostrando cómo el trabajo de este tipo de artesanos y artesanas no sólo se circunscribe a la elaboración de objetos sino que manifiestan lógicas y patrones de entender el mundo, el territorio y la cultura.

5.4. Defender la vida: No estamos solos, 1999-2005.

En algún taller sobre la elaboración de proyectos del PIDMM, al final, cuando la noche caía, una de las lideresas se me acercó y me pregunto por qué tenía cara de aburrido. “Aburrido no, preocupado. - ¿Por qué? - Porque con lo del terremoto de Armenia, con el dispositivo de fumigaciones, con el avance paramilitar, quizá todo esto no pueda hacerse. - Por eso no se preocupe, lo que estamos haciendo aquí es protegiendo una semilla, lo que hemos sembrado durante todos estos años y décadas de lucha, esto es como cuando uno prepara la buena semilla. Quizá toque guardarla, para cultivarla cuando sea propicio, o sembrarla, bien adentro de las organizaciones para en su momento cultivarla. Porque vamos a retoñar, nos vamos a quedar y todo esto es nuestro testimonio de lucha”.

Durante los años siguientes al éxodo y la elaboración del PIDMM, las cosas fueron muy difíciles en el Magdalena Medio. Fácilmente se podría afirmar que la movilización dejó de existir y la lucha cesó. Pero todo lo contrario. Como me lo dijo aquella noche aquella mujer, la gente siguió luchando. La movilización siguió en una nueva e inédita forma de hacerlo: “nos movilizamos para adentro”. Primero buscaron legitimarse legalmente organizándose como “zonas de reserva campesina”, “zona de reserva minera”, o desde procesos de desarrollo como “zonas de desarrollo integral” y proyectos de producción propia. En algunos lugares toman la decisión de constituir sus territorios en “espacios humanitarios”, con el acompañamiento del Plan De Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), para seguir negociando con el Estado desde un espacio neutral. En palabras de Teófilo Acuña, líder de Fedeagromisbol:

A partir del 98 el Gobierno no cumple con los acuerdos que se hacen, antes la represión con la región se torna mucho mas fuerte [...] Entonces, dijimos, vamos a resistir y empezamos a construir esa resistencia desde las mismas formas organizativas que tenemos en la región desde hace muchos años. Esa resistencia primera de no salir pero tampoco dejarnos matar: cuando habían los operativos correr para la selva, luego retornar nuevamente a nuestros caseríos a construir nuevamente las casitas. Entonces también nos llevó a que no era resistir por resistir, sino que era hacer una resistencia también como una propuesta de un plan de vida, de un proyecto de desarrollo integral para la región: una propuesta de

autonomía, una propuesta también desde nuestra propia gestión y muy soberana. Y es cuando empezamos a hablar de los proyectos, unos proyectos. Y estamos hablando de seguridad agroalimentaria, el proyectito minero, estamos hablando de la educación, de la salud... (Entrevista con Teófilo Acuña, presidente de la Fedegromisbol, Barrancabermeja, 2005).

El análisis de Tilly (2000) sobre la politización de los movimientos sociales y su reticencia a delegar el poder en los procesos de construcción del Estado y el desarrollo del capitalismo, parece encontrar eco en las propuestas construidas por los pobladores del Sur de Bolívar. Para reivindicarse en “resistencia” y desde la “autonomía” organizan de manera generalizada los “*espacios campesinos humanitarios*”, que como en Micoahumado se entienden como un “proceso de construcción de soberanía popular y autonomía civil, recuperar la palabra como estrategia para resolver los conflictos y trabajar por el desarrollo y la paz digna de la región.” (Asamblea de Micoahumado, 2002).¹¹¹

La confrontación aguda con los paramilitares, define una estrategia distinta a la neutralidad, para lo cual se establecen como “comunidades en resistencia por la vida” con el propósito inicial de defenderse y mantenerse en sus tierras. Estas comunidades se agrupan por caseríos, corregimientos y veredas para llevar a cabo un proyecto de vida digna cuyos principios tienen un espíritu común con el PIDMM de 1999. (Comunidades en Resistencia, 2000). Aquí parece establecerse un juego en el que se retorna al estado de “latencia”, disminuyendo la capacidad de potencia social ganado en las formulaciones de planes y programas para exigir que “se ponga fin al cerco alimenticio que está tendido sobre la región y sus pobladores, para que podamos tener acceso a unas mínimas condiciones de sobrevivencia e intercambio comercial”. Esto se conjuga con la “emergencia” concretada como expresión política, para explicitar al mismo tiempo que:

No somos ajenos ni estamos a espaldas del conflicto social porque somos parte de un pueblo que ha luchado por la tierra, el crédito, una política de inversión educativa, por tener los derechos a la expresión política, a ser culturalmente lo que significa la diversidad poblacional, a ser parte importante en la administración de

¹¹¹ En diciembre de 2002 se fundó el *Proceso Soberano Comunitario por la vida, la justicia y la paz de Micoahumado* y el 14 de marzo de 2003 se conformó la *Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado*. Esta asamblea cuenta con la participación de “las 9 comunidades veredales y sectores urbanos y sociales de La Plaza, transportadores, maestros, estudiantes, jóvenes y gremios comerciantes; que ha sido el fruto de la concertación de sus pobladores. La asamblea se ha organizado en 7 comisiones de trabajo: diálogo, proyectos, comunicación; conciliación, veeduría, salud, medio ambiente, animación y la comisión sociocultural” (Asamblea de Micoahumado, 2002).

los recursos naturales. No estamos alzados en guerra, estamos organizados en resistencia por la vida. (Comunidades en Resistencia, 2000).

Las comunidades en resistencia del Sur de Bolívar hacen parte, con otras comunidades de otras regiones, de la Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia.¹¹² En pos de esta Red se van generando lazos de solidaridad y denuncia frente a las situaciones que están viviendo las comunidades. Su constitución también implicó una reflexión sobre la “judicialización”, percibida como un mecanismo para atacarlas. La estrategia ha sido la de generar alternativas desde “el rompimiento con la justicia” que implica una labor de alianzas a nivel internacional, nacional y al interior de las comunidades. Desde aquí, la Red afirma que su lucha es por la transformación del Estado y se presenta desde su “posición anticapitalista” para fomentar otro tipo de economía que reconozca y fortalezca a las comunidades campesinas y mineras, y a los pequeños productores.

Así fue que el 14 de marzo de 2002, cuando se agudizaron los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares en el Sur de Bolívar, los habitantes de Micoahumado le hicieron un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones sociales para que los rodearan. Es en este momento que nace la Asamblea Popular Constituyente, que desde entonces defiende el derecho a la vida y a la permanencia en el territorio, y ejerce autonomía y soberanía como sociedad civil en medio del conflicto. E incluso, ya desde 2001, esta comunidad iniciaba el Proceso Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz.

“La defensa por la vida y la permanencia en el territorio fue lo que nos movió. La mujer fue la que más impulsó los diálogos con los grupos, de hecho integraron las comisiones que fueron a hablar con los actores violentos”, aseguró Arisolina Rodríguez, una de las lideresas de esta iniciativa. (Entrevista, 2014).

De esta manera, la fuerza del diálogo se constituyó en la mejor arma de los civiles. Para Arisolina es una “fuerza humana muy grande que debe tenerse en cuenta en los diálogos de paz de La Habana y en las demandas sociales para construir una paz sostenible. A pesar de

¹¹² Este grupo de comunidades iniciales son: Asociación del Valle del Río Cimitarra, San José de Apartadó, Sur de Bolívar, los U´was, ACIN, Procesos de comunidades negras, Asociación Campesina de Arauca, Dabeiba, La Nupa, Alto y Bajo Naya, Dabeiba.

la violencia de la región, nos hemos mantenido en el territorio y la resistencia campesina está en el proceso de la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar. Entre todos hemos llegado a construir tranquilidad, convivencia y arraigo en el territorio”, agregó.

Para Álvaro Villarraga, Director Técnico de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica y quien formó parte de las organizaciones sociales que rodearon esta iniciativa, “se trata de un caso en el que la palabra fue respetada por tratarse de una acción colectiva. A través del diálogo pobladores y grupos armados llegaron a acuerdos como la no incursión en el casco urbano, en las fincas; frenar atropellos a la población civil y conseguir la primera experiencia de desminado humanitario”. (Entrevista, 2014).

Por su parte Neila Hernández, quien acompaña este proceso desde hace siete años, destacó la importancia que desde la Asamblea Popular Constituyente la población de Micoahumado se haya organizado en procesos comunitarios y productivos en estos 13 años, toda vez que “esta región padece el abandono y la inversión social es una deuda histórica. La pujanza de la gente logró detener la guerra, promover espacios de incidencia y proyectos para la inclusión social frente a la pobreza”. (Entrevista, 2014).

En efecto, Micoahumado representa un caso emblemático de resistencia civil a la guerra y de logro de demandas humanitarias que llevaron al ELN a desminar este territorio, acción que convocó el apoyo de organizaciones sociales nacionales e internacionales. A la vez que los pobladores consolidaron el proceso que se inició con la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado, organización que mantiene continuidad e iniciativa a través de los años bajo el lema: Proceso Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado.

Frente a las amenazas a los líderes y la militarización de la región, las “comunidades en resistencia” han ido generando espacios de encuentro. Entre ellos, se realizó el Encuentro Regional de Mujeres del Sur de Bolívar a partir de la organización de los comités de Mujeres Agrominera del Sur de Bolívar.

Nuestro objetivo más general es el de fortalecer el arraigo al territorio, saliendo del aislamiento en que nos encontramos dentro de nuestra propia sociedad,

constituyendo comités o asociaciones de mujeres en cada mina y a la vez participando más activamente en los espacios organizativos de nuestros asentamientos. Pretendemos aportar para garantizar la seguridad alimentaria, la salud y la educación en las comunidades. (Encuentro en San Pedro, Santa Rosa del Sur, 2004).

Saben que la movilización es la principal herramienta que tienen en sus manos y que esta actividad va más allá de caminar, es un recorrido que los fortalece sobre todo organizativamente. La metodología para hacer marchas es la misma: se reúne a la población, los líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) comentan la idea de la movilización, las motivaciones todos la viven y las conocen, se pregunta si alguien no está de acuerdo, se discute, se aprueba en asamblea y empieza el proceso de planeación. Una vez en la ciudad, unos van a hablar a colegios, a iglesias, los líderes hablan con las autoridades, se evalúa cada jornada y todos aportan.

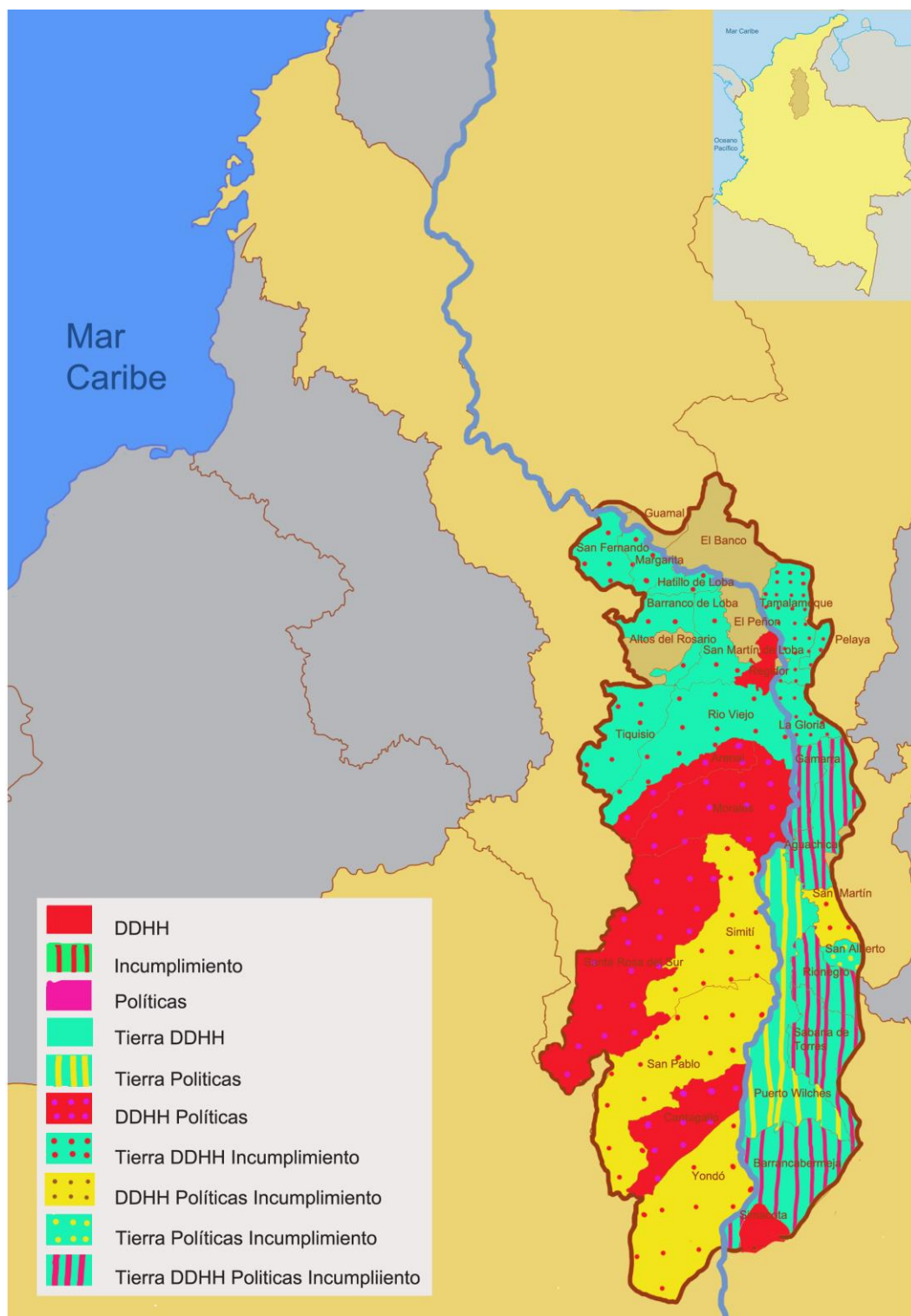
A raíz de las experiencias comunes y del crecimiento como sujetos agentes de cambio ha nacido también la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC). Este proceso organizativo es reconocido y defendido por sus miembros por sus logros, especialmente por haber evidenciado la capacidad que tiene cada integrante de aportar en ese proceso.

La ACVC tiene como principio fundamental dar herramientas concretas de poder a los campesinos. Es por eso que ha desarrollado un esquema organizativo que permite la toma de decisiones de una manera democrática a través de las asambleas dirigidas por las diferentes Juntas de Acción Comunal. En estas asambleas, son discutidas todas las problemáticas y las posibles soluciones que se puedan implementar. Esta manera de actuar se basa principalmente en la denuncia de que en el estado actual de cosas la democracia representativa no está llenando las expectativas de quienes ni están ni quieren estar insertados en el sistema político-económico actual de nuestro país, sino que desean estructurar una propuesta alternativa de contrapoder que refleje ante todo prácticas reales de participación activa de la población en la toma e implementación de las decisiones colectivas, pues conocen que la práctica por excelencia de los sistemas democráticos –las elecciones, el voto- es algo que no funciona para todos igual, ya que en la cotidianidad se

encuentran con casos que dan cuenta de que el proceso electoral es cada vez más una manera de legitimar prácticas aberrantes a nombre de la democracia.

Cuadro 5. Síntesis analítica de los episodios del movimiento social al movimiento popular, Sur de Bolívar, 1985 – 1998					
<i>Episodio</i>	<i>Tipo de movilización (alcances)</i>	<i>Demanda</i>	<i>Negociación</i>	<i>Contexto de Negociación</i>	<i>Desarrollo de negociaciones</i>
Marcha de 1985	Desde las comunidades (local – municipios)	Servicios públicos Reclamo de ciudadanía	Proveer servicios públicos	Inicio de descentralización político-administrativa Inicio de contrarreforma agraria	Incumple el Gobierno Mayor participación de pobladores en entidades con movimiento cívico
Gran Marcha del Sur de Bolívar de 1996	Desde la región del Sur de Bolívar (Regional - San Pablo)	Derechos Humanos Derecho Internacional Humanitario Inversión sostenida en créditos agrícolas Inversión social	Ejecución de Proyectos a través de las entidades municipales	Agudización de conflicto político-militar Financiación de proyectos de explotación minera y agroindustrial a mayor escala	Acciones paramilitares y se criminaliza la protesta Pobladores construyen Fedegromisbol
Éxodo de 1998	Desde la región y la macroregión (Magdalena Medio y Bogotá)	Creación de plan institucional legal y militar contra el paramilitarismo A Apoyo al Plan de desarrollo propuesto desde las comunidades	Financiar el Plan Crear una Ley que condene acciones paramilitares Conformar un bloque de búsqueda Financiar apoyado en PDPMM la construcción del Plan	Incursión decidida de paramilitarismo en la región Intensifican operativos militares Se presentan demandas de apoyo a empresas mineras Intensifican cultivos de palma africana. Gobierno habla de pequeños productores	Expansión del poder militar en la región Inicia proceso de diferenciación entre la población del Sur de Bolívar Se crea la “Mesa Regional de Trabajo Permanente por la Paz del Magdalena Medio” Se hace el “Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio”

Mapa 18. Motivos de lucha del Magdalena Medio



Mapa elaborado por Carlos Alberto Benavides Mora

Entre 1999 – año de realización del Primer Paro Cívico del Suroccidente Colombiano–, y el 2004, el proceso de movilización en el suroccidente se concentra en fortalecer el proceso de participación comunitaria, de articulación entre organizaciones, movimientos y pueblos y de establecer con mayor contundencia el vínculo organizativo entre los departamentos de Nariño y Cauca, y de ellos con los departamentos del Huila y el Putumayo. A la par, se trata de cinco años de movilización e interlocución-negociación.

La “construcción social de región” del Macizo Colombiano, en el contexto de configuración regional del suroccidente vivida y protagonizada desde la movilización se consolida desde “la organización de un paro cívico regional”, que de alguna manera sintetiza esta etapa con la realización del Paro Nacional de 1999, para enfrentar el Plan Nacional de Desarrollo presentado por Andrés Pastrana presidente de Colombia en el periodo 1998-2002. Sin embargo, esta movilización tenía características que anteriormente aún no estaban consolidadas. Una de ellos es el nivel de “integración” que había ganado la lucha social a nivel regional. Después de 26 días de bloquear la Vía Panamericana (eje central de articulación regional) y de una serie de acontecimientos ocurridos en el transcurso de estos días, el gobierno reconoce la movilización y se entablan unas mesas de negociación.

Durante los siguiente años los procesos de negociación se concentran en exigir el cumplimiento de los Acuerdos y la promoción de la participación de las comunidades, buscando elevar la capacidad de gobierno de las comunidades sobre sus problemas. Por ejemplo, se diseña y ejecuta el Plan Regional del Macizo Colombiano y se busca incidir desde allí en instancias de decisión públicas.

Esto en medio de la agudización del conflicto armado y el incremento de la militarización, a lo cual se suma el ingreso a la zona de empresas trasnacionales y el incremento de las fumigaciones. Estos tres fenómenos implican a su vez el incremento notable de la violación a los derechos humanos, del desplazamiento, el incremento de la pobreza, el reposicionamiento de los políticos tradicionales, así como la cooptación de organizaciones comunitarias a través de las políticas institucionales y por supuesto el incremento de la intervención de ongs nacionales y extranjeras.

Esta situación crítica hará que los procesos organizativos se movilen con audiencias públicas por la vida. Una respuesta común, que se traducirá, desde el 2000, en el inicio de un proceso de “unidad entre el Movimiento Social y la Surcolombianidad” con el evento en el Resguardo de la María Piendamó contra el plan Colombia. Así mismo, se participa en la elección de Floro Tunubalá a la Gobernación del Departamento del Cauca y se inicia la organización de las “Mujeres Maciceñas” y de los “Jóvenes Maciceños”. La lucha de las mujeres maciceñas se concentrará en la defensa de sus derechos de género y en la defensa práctica de la soberanía alimentaria; mientras la organización de los jóvenes se centra en la objeción de conciencia y en la no militarización, a través del fortalecimiento de expresiones artísticas.

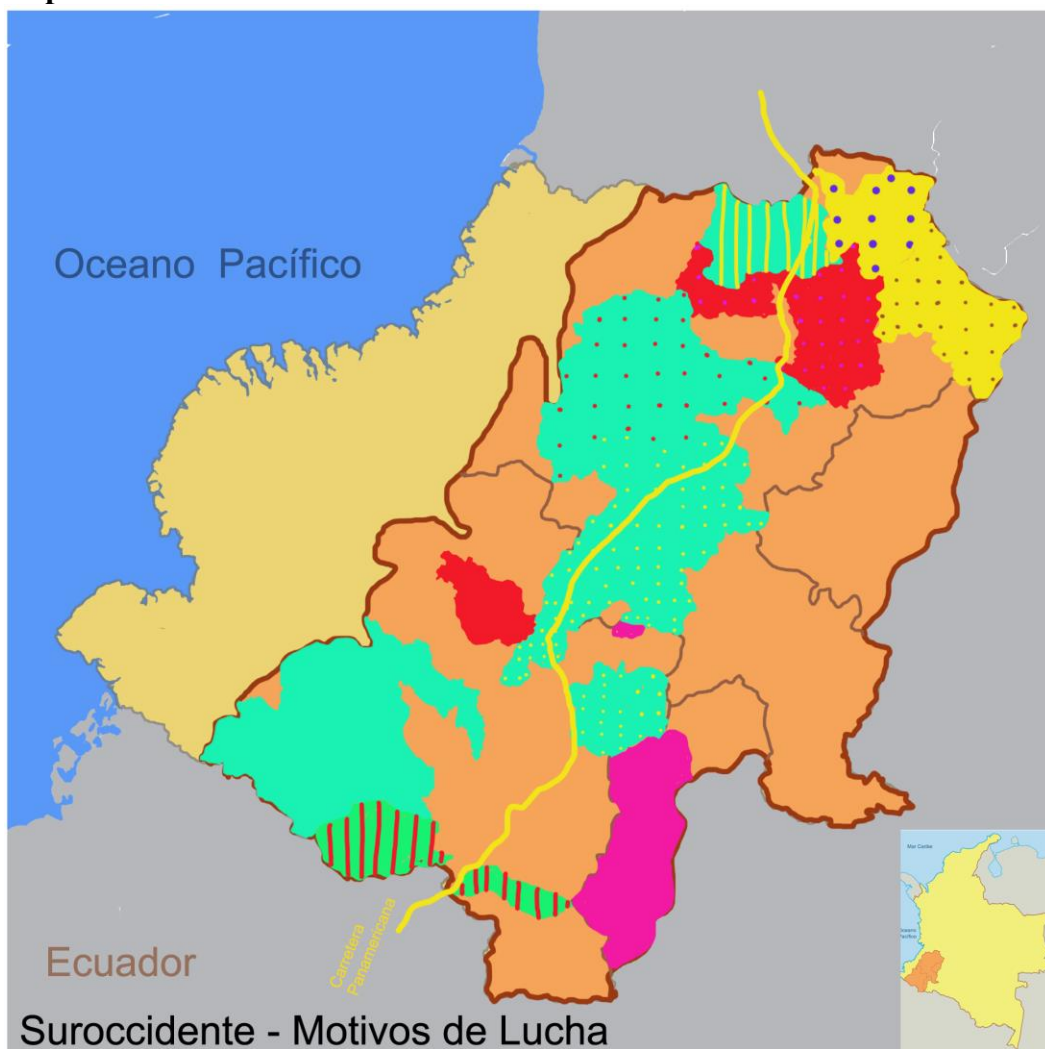
A partir del 2004, se fortalece sus esfuerzos en la alianza con otras organizaciones o procesos sociales, tanto a nivel del Suroccidente como a nivel nacional. Lo anterior resulta posible a través de una lucha que trasciende reivindicaciones particulares y se dirige hacia problemas estratégicos, entre los cuales adquieren especial protagonismo la ofensiva de las transnacionales, las leyes de despojo, el incremento de la guerra para despojar y despoblar territorios, los tratados de libre comercio.

Cuadro 6. Tabla analítica del Suroccidente Colombiano

FECHA	EVENTO
Diciembre de 1985	Paro de Bolívar y Acuerdos de Bolívar.
Mayo de 1986	Paro de Sucre y Acuerdos de Sucre.
Noviembre de 1987	Marcha de Santa Rosa y San Sebastián - Bota Caucana, Detenida en Guachicono, Primera movilización Regional, que logra Los Acuerdos de Guachicono,
Noviembre 1987	Marcha de Almaguer, en solidaridad con la marcha de la Bota Caucana. Es detenida en la Vega. Acuerdos Vega Octubre 1 .998 II paro de Bolívar por incumplimiento de acuerdos.
Noviembre de 1988	Caravana de Almaguer a Popayán.
Abril de 1990	I cabildo popular de Almaguer.
1 y 2 de noviembre de 1.990	II cabildo popular de Almaguer.
28 de noviembre 1989	Toma de la cabecera municipal de Almaguer por los campesinos. Se crea la Coordinadora Campesina.
31 de marzo de 1991	Nace el Cima en Sucre
7 de abril de 1991	Gobierno responde con la masacre de los Uvos
20 de agosto de 1991	I paro cívico regional del Macizo en Rosas: 9 días 20 mil campesinos en la Carretera Panamericana.
1992	Primera experiencia electoral. Se ganan 3 alcaldías.

1 y 2 de agosto de 1993	Primer “Cabildo por la vida y la esperanza del Macizo” en los Uvos.
15-19 agosto de 1993	Primera asamblea del Macizo colombiano en Almaguer. Se acuerdan mandatos organizativos, territoriales, de vida digna e integración, y se conforma FUNDECIMA.
15 - 18 de septiembre de 1994	Primer encuentro Cultural del Macizo en Lerma
Diciembre 21 al 23 de 1995	Primera toma artística de Popayán por el Macizo
15 de agosto a finales de septiembre de 1996	Segunda Movilización Regional del Macizo y Sur del Cauca. Se concerta con el gobierno y surgen Los Acuerdos en Popayán
30 de mayo de 1997	II Cabildo por la Vida y la Esperanza en Altamira la Vega
17 de octubre de 1997	Primera cumbre del Macizo Colombiano en Timbío
Diciembre 1997	Asamblea de líderes en Timbío. Se decide empezar a gestar la Integración con el Suroccidente Colombiano.
18 y 19 de enero de 1999	II Cumbre del Macizo en Pitadito, con presencia del Ministerio del Medio Ambiente y de autoridades Nacionales y Departamentales.
14 y 15 de abril de 1999	III cabildo por la vida y la esperanza en Almaguer
16 y 17 de abril de 1999	III cumbre del macizo en Almaguer. Con presencia del Ministerio del Medio Ambiente y autoridades Nacionales y Departamentales
1 al 26 de noviembre de 1999	Primer Paro Cívico del Suroccidente Colombiano. 30 mil campesinos del Macizo Cauca y Nariño, el magisterio en Galindez Pílon. 15.000 campesinos y maestros en el Cairo Cajibío.
Fuente: Elaborado a partir de <i>II Asamblea del movimiento social del Macizo Colombiano. Popayán</i> : CIMA. P. 5-6 y conversaciones con miembros del movimiento.	

Mapa 19. Motivos de lucha en el Suroccidente colombiano



- DDHH
- Tierra Incumplimiento
- DDHH incumplimiento megaproyectos
- Tierra DDHH
- Tierra Incumplimiento conflictos entre comunidades megaproyectos
- DDHH Incumplimiento tierras conflictos entre comunidades
- Tierra DDHH Incumplimiento
- DDHH Tierras conflictos tierras entre comunidades
- Tierra Producción Incumplimiento
- Tierra DDHH Políticas Incumplimiento
- DDHH incumplimiento Derechos tierras Conflictos de tierra entre comunidades

Mapa elaborado por Carlos Alberto Benavides

5.5. Sujetos campesinos, vida campesina, derechos humanos e interculturalidad: Propuestas regionales y articulaciones sociales.

Don Gabriel, mira a lo lejos, ha hecho una pausa, a un largo relato, sobre la lucha en el sur de Bolívar, ha contado con orgullo como hizo su finca “en la humareda” allá en Simití, haciendo sentir en sus ojos lo bueno que era para cultivar, ha contado, con la voz altiva y entrecortada como le mataron a su hijo los paramilitares, ha vuelto con sonrisa pronunciada a relatar el paso por los planchones, la llegada de la gente de los caseríos y corregimientos a congregarse, a descrito con todo el sarcasmo los ofuscados y acalorados rostros de los negociadores del gobierno al llegar a San Pablo, a recordado la fortaleza que le dio sentir el apoyo de la gente en España, Francia, Alemania, en distintos espacios como los Tribunales Internacionales de Opinión, se ha emberracado hablando sobre “la mamadera de gallo” del gobierno de Uribe para cumplir con los acuerdos, nos ha mostrado como ha aprendido que toca hacer esto con mas gente, con mas regiones. Todo esto una noche en Popayan, lejos de las vegas del Río Magdalena a la altura de Simití, justo en el lugar en donde la cordillera central se introduce con fuerza a la geografía colombiana hasta terminar allá, donde esta su finca, a miles de kilómetros en la Serranía de San Lucas. Don Gabriel como muchos y muchas vive la vida de un luchador, con la intensidad de un sobreviviente, cada día cuenta, y toca hacerlo con toda la vitalidad. El como muchos otros lideres y lideresas del Magdalena medio y el suroccidente colombiano, con los que hemos caminado y conversado afirman que, después de todo este trasegar, la ganancia social se establece ya no en términos de los acuerdos con el gobierno, sino en términos de la novedosa perspectiva de vida organizativa que se abre para la población que participó en la movilizaciones: una “visión de integración regional” comienza a existir ahora en las misma gente. Ésta es para sus protagonistas la lógica que debe primar en la lucha, la propuesta que deben alimentar y fortalecer para que realmente se construya una sociedad con condiciones dignas de vida, donde los proyectos políticos, sociales, culturales y territoriales sean propuestos, gestionados y hechos por y desde la población. Por lo tanto, detrás de todo ese proceso de movilizaciones, marchas y protestas, lo que emerge en el Macizo, en el Cauca y en Nariño, en el sur de Bolívar en el Valle del río cimitarra es la fuerza de esa palabra aprendida con los maciceños: *la construcción social de región*.

En el Sur de Bolívar, el enunciado correspondiente es “por la vida digna y la permanencia en el territorio”, en la voz de los pobladores del Sur de Bolívar, con la cual “hemos podido permanecer, resistir, reconstruir tejido social, construir y proponer alternativas a la problemática que se vive en la región”, afirma Milena Quiroz, lideresa del proceso. Su área de influencia se centra en las partes rurales, y regionalmente en el trabajo de La Federación Agrominera del Sur De Bolívar y sus 60 organizaciones locales pertenecientes a 16 municipios, organizados en 6 zonas.

En la actualidad, la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar es reconocida como espacio legítimo de interlocución, de acuerdo al artículo 5 del decreto 870 del 8 de mayo de 2014, y la mesa con la Comisión de Paz y DDHH del Congreso de la República para las audiencias y los debates de control político. La Comisión de Interlocución continúa el proceso de movilización y negociación de los pobladores del Sur de Bolívar: desde sus orígenes, Fedeagromisbol, proceso base de la Comisión de Interlocución, ha venido desarrollando acciones colectivas de carácter integral que han permitido, entre otros aspectos, el fortalecimiento de la organización y la movilización de las comunidades. Así mismo, ha liderado la denuncia frente a la exclusión y a la pobreza a la cual han sido sometidas las comunidades, las constantes violaciones a los derechos humanos que sobre ellas se cometen y la impunidad que cobija a sus responsables. También ha defendido los derechos de los pequeños mineros que históricamente han habitado la región y que ahora se ven amenazados de ser expulsados masivamente de sus territorios ante la concesión de áreas mineras a multinacionales. A las acciones desarrolladas, como la Caravana Internacional por el Sur de Bolívar en agosto del año 2001, con presencia internacional de 12 países y más de 60 internacionalistas; el Tribunal Internacional de Opinión en París (Francia) en el año 2003, logró realizar un examen de dichos crímenes perpetrados por los grupos paramilitares entre el 1o de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2002, y fallarlos en un juicio ético y político. Tal ejercicio de denuncia ha sido continuado en el Tribunal Permanente de los Pueblos realizado en el 2007, así como en diversas audiencias, movilizaciones, asambleas y foros en la región, durante los últimos años.

Los procesos de movilización han tenido desenlaces fatales para algunos de sus líderes. En uno de los múltiples recorridos el principal vocero del éxodo campesino de 1998, Edgar Quiroga, mientras socializaba el PIDMM, fue retenido en noviembre de 1999 por militares y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Alejandro Uribe Chacón fue asesinado el 19 de septiembre de 2006 en Santa Rosa y posteriormente presentado como guerrillero muerto en combate, luego de haber sido señalado como opositor de la entrada de la multinacional Anglo Gold Ashanti. Hoy los dos casos siguen en la impunidad.

En este contexto regional en el que Fedegromisbol ha desarrollado su labor de defensa de los derechos humanos y ha ejercido oposición a la minería a cielo abierto y a la presencia de las multinacionales, la vida de sus miembros está en riesgo permanente por amenazas constantes, asesinatos de varios de sus líderes y detenciones ilegales y arbitrarias. La situación de inminente riesgo, dio origen a la adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que instó al Estado Colombiano a proteger la vida e integridad física de sus miembros.

Fedegromisbol hace parte hoy de los distintos procesos para el fortalecimiento y articulación regional, nacional e internacional, como son: el Congreso de los Pueblos, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, el Coordinador Nacional Agrario, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia. Fedegromisbol es una organización activa que realiza publicaciones de materiales como periódicos, cartillas sobre minería, elementos pedagógicos, módulos de formación temáticos. Además crearon una emisora comunitaria para difundir sus propuestas en el Sur de Bolívar, buscando concientizar a la población sobre los derechos de los niños y las niñas, la vida en el territorio y los derechos de las mujeres.

Continuar dicho proceso de movilización y negociación por medio de la Comisión de Interlocución ha servido para establecer mayores capacidades de exigibilidad en la región y ha presionado permanentemente al Estado a cumplir con los acuerdos suscritos, firmados y olvidados por el gobierno nacional. La Comisión de Interlocución, creada en el 2005, es un espacio de coordinación regional que ha permitido el encuentro de distintos procesos organizativos regionales. Fue constituida con el objeto de relacionarse formalmente con el

Estado para darle salidas a los problemas comunes del Sur de Bolívar; promover la defensa y el derecho al territorio desde las expectativas de las comunidades; hacer respetar los derechos de la comunidad; fortalecer las alianzas con otras organizaciones; facilitar la coordinación del trabajo regional; propiciar y construir la protección y defensa de los derechos humanos (Documento de Constitución de la Comisión, 2005). En sus años 10 de vida, las comunidades reiteradamente han presentado sus propuestas de vida y las propuestas de solución a las problemáticas que afectan a la región desde su propia visión sobre el territorio; en ese mismo sentido, dicha mesa ha impulsado y dinamizado la constitución de consejos comunitarios de comunidades negras, como por ejemplo: “El Consejo Comunitario de Comunidades Negras Resistencia Cimarrona Casimira Olave Arrincón Amela”, del municipio de Arenal.

Desde allí, también se han ido implementando nuevas formas autónomas de economía alternativa y de soberanía alimentaria, a partir de la formación de microempresas de pequeños mineros, de transportes, de maquinarias y la puesta en marcha de granjas integrales de producción alimentaria, incluyendo la transformación de la producción campesina. En el ámbito educativo, han construido propuestas y desarrollado importantes experiencias de educación que han logrado beneficiar a muchos niños y jóvenes en la región.

Uno de los efectos más importantes de este proceso de movilización social y su relación con la configuración regional en el Sur de Bolívar es la afirmación contundente realizada por los pobladores de su “riqueza”, queriendo con ello enfatizar en que ella está relacionada con su capacidad de trabajo y con las riquezas naturales, como lo son los minerales, fuentes hídricas, diversidad de flora y fauna. Para ellos el problema no es de pobreza ni de abandono, sino de garantías integrales para su trabajo y capacidades concretas para la reinversión y distribución de las riquezas producidas y naturales (conversación con miembros de la Mesa de Interlocución, febrero de 2015).

No obstante, uno de los aportes más importantes que el trabajo de Fedegromisbol y de la Mesa de Interlocución ha dejado al país, ha sido la histórica denuncia que ha venido adelantando durante muchos años a nivel nacional e internacional sobre la presencia de las transnacionales mineras en Colombia y de los impactos que la minería a cielo abierto trae

sobre el medio ambiente, la vida social y cultural, así como la vulneración que su presencia ha implicado sobre los derechos humanos de las comunidades que habitan aquellos territorios donde hay intereses de las empresas multinacionales para explotar los recursos naturales. Como ha sido analizado, desde la década del noventa se ha denunciado la presencia de estos intereses mineros en la región y para el año 2003 se tenía documentado un número importante de casos en los cuales habían sido asesinados y torturados varios de sus líderes, denunciando cómo paralelamente se le abría paso a la llegada de las multinacionales que habían resultado favorecidas con el nuevo Código de Minas.

Se estableció una agenda que contempla, entre otros: el derecho a la vida y el territorio; Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; Paz y Acuerdos Humanitarios; Desarrollo e Inversión Social. Pero las amenazas no cesan, varios municipios del sur de Bolívar enfrentan una grave situación de riesgo por presencia de paramilitares autodenominados autodefensas Gaitanistas, o urabeños o rastrojos. La presencia paramilitar en el sur de Bolívar se ha hecho notoria y pública. Igualmente no hay día en que los pobladores de la región y líderes de las diferentes organizaciones comunitarias no informen, no denuncien lugares, actuaciones o simples paseos por las calles de reconocidos paramilitares. Esta información es conocida por los pobladores del municipio, sin embargo ni la Policía ni el Ejército han hecho nada para capturar estas personas (Revista Semana, 2012). Frente a todas estas situaciones la comisión sigue convocando a la movilización, a generar dinámicas organizativas locales y regionales, a mantenernos en lucha, discutir la situación regional y generar compromisos estatales, en función de mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en la región.

Teófilo Acuña, vocero de la Comisión de Interlocución y vocero de la Cumbre Agraria Nacional afirma que el carácter de una lucha regional que no cesa:

Estamos reunidos para exigir el respeto a la vida. Luchamos por no ser despojados de nuestro territorio. También pedimos que se convoque de manera urgente la mesa de interlocución... Hemos insistido ante el Gobierno Nacional para que retomemos la mesa de interlocución. Allí veníamos planteando nuestros proyectos de vida y nuestras propuestas de permanencia en el territorio. Queremos que se retome ese espacio que fue suspendido unilateralmente por el gobierno anterior (Entrevista con Teófilo Acuña, 2009).

Los campesinos también protestan por lo que ellos consideran “absoluta indiferencia de las autoridades” ante el daño que están generando las máquinas retroexcavadoras a las fuentes de agua, humedales y ciénagas. Con esto, sientan su voz de protesta ante la presencia de las multinacionales, que están explotando las minas de oro en la región. En una u otra movilización participan habitantes de Santa Rosa, Morales, Montecristo, Norosí, Simití, San Pablo, Río Viejo y Arenal, a veces más a veces menos municipios, que se van nombrando y reconociendo más desde sus organizaciones y exigencias. Todos esperan lo mismo, que se cumpla lo incumplido:

que se cumpla lo que el pasado 15 de julio se acordó en una reunión con el programa de derechos humanos de la vicepresidencia, cuando se dijo que se iba a retomar la mesa. Desde enero del 2009, el gobierno anterior suspendió de manera unilateral el funcionamiento de la mesa de interlocución, instalada de común acuerdo entre las comunidades y el gobierno desde el año 2005. A pesar de que desde esa fecha las comunidades representadas por la Comisión de Interlocución hemos insistido en la urgente necesidad de retomar la dinámica de la mesa, tanto el gobierno anterior como el actual, del que usted hace parte, se han negado a dar una respuesta concreta sobre las propuestas de fechas y lugar que por diferentes medios les hemos presentado (Documento de denuncia, 2009).

También se refieren a los asesinatos que se han cometido en la región –según ellos– por parte de los paramilitares: “Hoy nos hemos movilizadо nuevamente para exigir una respuesta clara e inmediata a nuestra propuesta de convocar la mesa de interlocución del sur de Bolívar y así poder reiniciar las discusiones sobre nuestra problemática y las alternativas de solución”, repiten los manifestantes.

En 23 febrero de 2009 la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar presenta un derecho de petición a los ministros de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y al de Minas y Energía, solicitando el acceso “a toda la información necesaria que nos permita interlocutar en igualdad de condiciones con el gobierno nacional en la Mesa de vida y Territorio, que por acuerdo mutuo se instaló y comenzó a funcionar entre la Comisión de interlocución y el gobierno nacional”. Tal petición la realizan de manera explícita sobre: (1) los recursos mineros: “inventario de recursos naturales Minero-energéticos, Hídricos y biodiversidad e Hidrocarburos (no renovables) entre otros, y renovables, tiene el gobierno nacional identificados (detallar por cada uno)”. Lo mismo solicitan para los recursos mineros, “hidrocarburos y elementos asociados identificados”. (2) Así mismo, solicitan el

“inventario tiene el gobierno nacional sobre el número exacto de hectáreas dedicadas al cultivo de palma aceitera en cada uno de los municipios”. Así como el “inventario de cada uno de los proyectos que tiene el gobierno nacional de cultivos que están dedicados a la producción de agrocombustibles”. (3) Solicitan datos sobre la política ambiental en términos de “cuántas hectáreas están incluidas en Zonas de Reserva Forestal”. (4) Solicitan información detallada sobre la forma como se está desplegando la política agraria del estado en la región, en los siguientes términos: “sobre el levantamiento de la declaratoria de zona de reserva campesina en los municipios de Yondó, Cantagallo, San Pablo y Simití”, sobre “la definición y determinación del uso y destinación del suelo, en cada uno de los municipios”. (5) Otro cuerpo de solicitudes está relacionado con los inventarios para la extracción de recursos de: “flora, fauna, fuentes hídricas, bosques, y otros recursos relacionados con la biodiversidad”. (6) Las inversiones de infraestructura en la región también son motivos de petición. Se solicita “listado completo de cada uno de los proyectos de infraestructura que se adelantan en la actualidad” y “de los que tiene previsto ejecutar el gobierno nacional entre 2009 y 2019”. (7) Allí también se vuelve sobre el problema de los acuerdos incumplidos, frente a lo acordado en el éxodo campesino realizado durante 1998 (Derecho de petición, 23 febrero de 2009)

El derecho de petición sintetizado vuelve sobre los mismos ejes de los procesos de movilización del Magdalena Medio, sobre los ejes trabajados en los talleres de cartografía social, recorridos y asambleas desde los años noventa, y en los mismos renglones de los acuerdos incumplidos. Las comunidades agromineras y pobladores de las regiones Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar en el 2013 expresan sus motivaciones de lucha permanente en términos del despojo sistemático al que han sido sometidas: “Nuestra movilización está motivada por el despojo del territorio que afrontamos los pobladores del Sur de Bolívar y Centro y Sur del Cesar, ya que debido a la implementación y ejecución de diferentes megaproyectos mineros, agroindustriales y de infraestructura, nosotros campesinos, pescadores, pequeños mineros, comerciantes y pobladores en general estamos siendo despojados de nuestro territorio y estamos perdiendo nuestros medios de trabajo y de sustento para nuestras familias” (Comunicado, 2013).

Frente a la persistencia del despojo en beneficio de empresas multinacionales los

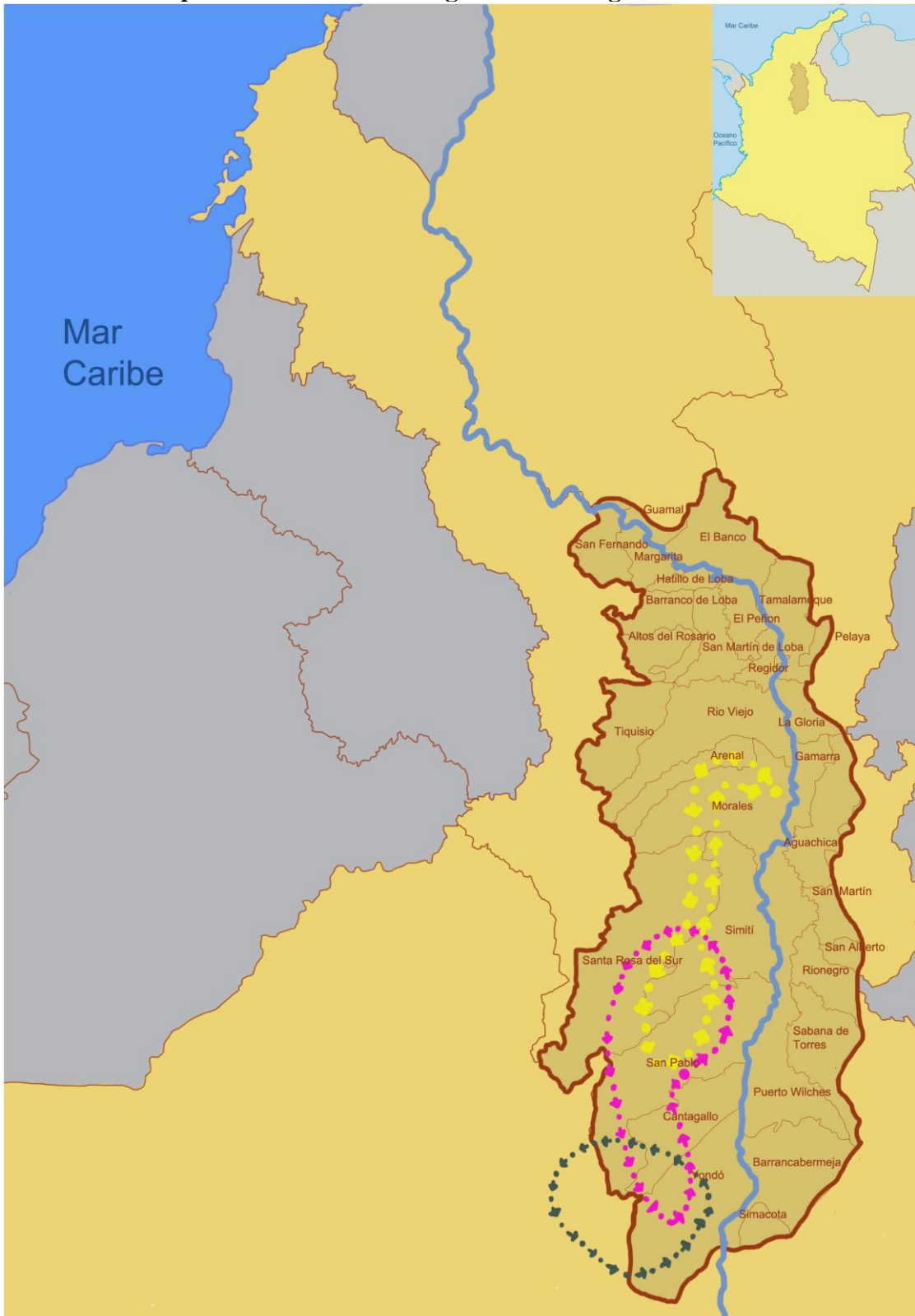
pobladores regionales organizados exigen la “salida de las empresas nacionales, multinacionales y transnacionales mineras y de agroindustria que desarrollan proyectos a gran escala de exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables de la región”. Así como “suspender de manera inmediata todo lo actuado unilateralmente por las autoridades nacionales relacionado con la definición de zonas de protección ambiental, sean zonas de reserva forestal, zonas temporales de recursos naturales o parques naturales nacionales”. Se exige reparación integral por parte del gobierno nacional: al daño ambiental causado por los megaproyectos, a la población de la región y sus organizaciones por la comisión de violaciones de derechos humanos y “crímenes de lesa humanidad”. Y de manera fundamental, exigen que “el gobierno nacional defina, junto con las comunidades agromineras, una política de reconocimiento, promoción y defensa de la pequeña minería, diferenciándola y protegiéndola de la minería a gran escala” (Conversaciones en las mesas de negociación septiembre de 2013).

Mapa 20. Movilización en el Magdalena Medio



Mapa elaborado por Carlos Alberto Benavides

Mapa 21. Recorridos de la gente en el Magdalena Medio



Mapa elaborado por Carlos Alberto Benavides

En el Suroccidente, durante toda la década del 2000 la movilización indígena y negra ha estado trazada por la defensa territorial, los derechos culturales reconocidos en la constitución de 1991, los acuerdos incumplidos y frente los efectos del conflicto armado. Se destaca la movilización en 2005 para evitar el trasvase del río Ovejas, a la represa de la Salvajina, los procesos de movilización para el reconocimiento de Consejos Comunitarios interandinos -dado que la ley 70, solo reconoce dichos organismos en el litoral pacífico-, los procesos de liberación de la madre tierra desarrollados por el pueblo Naza, especialmente por la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (acin), los procesos de movilización para presentar el Segundo Manifiesto del pueblo Misak, para reafirmar su autonomía, cultura y lucha.

Inocencio Ramos líder naza de procesos educativos de Tierradentro argumenta que la movilización parte de "mostrar esa alegría por el trabajo" y señala que la interculturalidad puede ser entendida como problema pedagógico para generar "entendimiento"...generar la "diversidad epistémica". Pero dicha posibilidad tiene dificultades manifiestas: "como hacer una educación intercultural en medio de proyectos de desarrollo que se aplican en los territorios que no admiten que los pueblos conciban que minerales son seres vivos y que por tanto no se puede ejercer sobre ellos una extracción." Por ello la Interculturalidad debe ser asumida como "reto para negociar el poder".

La Liberación de la madre tierra busca ir más allá de la noción de recuperación de tierra de los años 70. Feliciano Valencia líder de la acin que ejerció la consejería mayor del CRIC, en uno de los períodos de mayor movilización del suroccidente entre 2007 y 2009, afirma "nosotros que somos hijos de la tierra, vamos a liberar a la madre tierra que es la vida.... Por eso los dh deben partir de la madre que es la base de la vida. Nosotros los hijos originarios de la madre tierra, estamos luchando por la tierra plana, luchar por recuperar el valle: recuperar la madre tierra. Inocencio agrega, "Allí se integra también una ética de vida relacionada como cuidado de la madre tierra. También es asumir la pregunta sobre o que produzco de lo que como: que como, que produzco y que puedo sustituir de lo que soy dependiente. Esto hace parte de la liberación de la madre tierra, dejando de consumir lo que me hace daño....Lo que me hace depender, me esclaviza y lo que me esclaviza, me quita la dignidad. En otras palabras, nuestros cuerpos son territorio. "

Para los líderes naza tanto la interculturalidad como la liberación de la madre tierra necesitan convocar y sumar “solos no podemos” es necesario “caminar la palabra”. Para que esto sea posible, para que todos encontremos es necesario compartir y participar en la lucha, respetando la autonomía "La autonomía se construye frentiando". Eso se gana “no con el discurso sino con la capacidad de presión”. Habla de construir nación en Venezuela, Bolivia, Ecuador... Re bien están pensando la refundación del estado La autonomía es “nuestra capacidad como organizaciones indígenas de hacer valer nuestra palabra y nuestros derechos, que nuestra palabra sea realmente válida.”

En todo esta dinámica se expresan con contundencia y cobra sentido lo expresado por distintos liderazgos con los que se ha compartido este caminar y conversar:

Alix Morales, líder de uno de los procesos campesinos y comité de mujeres más importantes del Cauca, la asociación campesina e Inza: “más que una obligación que se nos reconozca, es un deber luchar. ¿Cómo hacemos para bajarnos de esas jerarquías de poder? ... La democracia se construye desde la casa, desde la cama, desde donde me gusta que me toque. Nosotras vemos las cosas chiquitas, lo que pasa al vecino y por ahí, vamos avanzando. En el Cauca estamos peleando por tierras donde no hay tierras. Aquí existe entre nosotros el cambio de mano, el mismo patrón de Minga, por ello no trabajamos por bancos de Semillas, sino por Dispensas populares de semillas. Para nosotros era muy importante hacer más cercana la utopía de la vida digna, por eso trabajamos por el buen vivir.”

Lisifrey Ararat, líder del consejo comunitario de la toma, uno de los conejos de la asociación de consejos del norte del Cauca, cuya lucha se ha centrado en la defensa de los territorios negros y la pequeña minería: “ para reivindicar el carácter de lucha por la Nación: nosotros fuimos traídos como mano de obra, nosotros hemos ayudado a construir este país (reivindicando un carácter étnico) y denuncia el despojo “desde 1851 hasta 1868 a nuestro pueblo le tocó que trabajar para comprar las minas, después de las dieron a las multinacionales y dicen que nosotros somos los ilegales”. Hasta antes de 1985 – 1990, la lucha con el Gobierno era cuerpo a cuerpo hasta detener la desviación del Río, ahí adquirimos derechos con la Ley 70/1993, ahí era constituirnos como Consejo Comunitario, que tuviéramos ese alcance como pueblo propio. Ahí ya tenían que consultar. Después apareció el fenómeno paramilitar, mataron a indígenas, negros, sucedió la masacre del Naya,

nos llenaron de miedo. Para luchar contra los paramilitares, tuvimos que hacer frente común con los indígenas y pudimos hundir por segunda vez, la desviación del río Ovejas. Después las mujeres marcharon a Bogotá y se tomaron el Ministerio del Interior. Nosotros qué mal le hacemos a Bogotá? Uno está allá contento sacando su orito, manda los hijos a estudiar... pero desde Bogotá, viene a quitárnoslo La vida es el buen vivir. Uno hace lo que quiere, se mueve como quiere; que a a nosotros el Estado no nos de nada pero que no nos quite lo que hemos ganado. Sin territorio cómo soy comunidad y sin comunidad, cómo seré pueblo? Pero en Cali, a dónde voy a coger esa batea a coger oro? Vamos a luchar para permanecer en ese territorio de la Toma, para esto es clave el relacionamiento con indígenas, con otros concejos comunitarios, con campesinos. “Resistir, no es aguantar”- dirá Lizifrey Ararat del Consejo Comunitario de La Toma (Conversación, 2015).

Mapa 22. Movilización en el Suroccidente Colombiano



Mapa elaborado por Carlos Alberto Benavides

5.6. Minga Social y Comunitaria: en busca de una articulación nacional para las luchas

Una Minga se hace cuando hay un trabajo grande para hacer y cuando sabemos que “solos no podemos”, que necesitamos de la creatividad y el apoyo de otros y que su participación también sea parte de lo que se está haciendo, lo que se hace es definición y creación colectiva. (Conversación con Feliciano Valencia, 2007). La noción de minga surge de una expresión de la lengua *quichua*

entendiendo la Minga como un trabajo colectivo, trabajo en pos de un bien que es social, que no es material salvo la comida, la bebida, la vida en conjunto; como una fiesta que implica convidar, que implica albergar, que implica trabajar la tierra en colectivo, que implica construir la casa. Todas estas son bellas metáforas para un proyecto de vida en colectivo, que debieran, en consecuencia, ser leídas justamente con un concepto programático que ha perdido una simbología y que urge recuperar, y que también habla de este proyecto colectivo como una forma abierta de resistencia. (Paramo, C. 2015, p. 38).

La Minga de Resistencia Social y Comunitaria retoma esa noción profundamente arraigada en la manera de construcción de vida social y política de los pueblos indígenas de suroccidente, pero entendiendo también que ese mismo carácter se encuentra en nociones y lógicas de construcción en muchas regiones del país y que de alguna manera, “hacer minga” ha sido un método de hacer la movilización social regional en muchos rincones del país. En distintos momentos y tiempos, en 518 años de resistencia la gente se ha encontrado desde la diversidad y posibilidades para expresar sus voces, actuar y construir teniendo como clave el “solos no podemos”. Es por esto que en la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, confluyen voluntades colectivas diversas, porque Minga es una forma de trabajar juntos, de encontrarse para construir y proponer.

La Minga de Resistencia Social y Comunitaria nace de distintos procesos de movilizaciones regionales hijos de la década del 1990 en Colombia; de los Consejos Campesinos, los Encuentros Populares y el Parlamento Indígena y Popular de los primeros años de nuestra década. Desde allí, empieza a conversar, caminar, construir una forma de política que nace

desde lo social, lo que las comunidades han vivido y luchado en sus zonas y territorios, convocando la construcción de ejes comunes de trabajo y reivindicación y reconociendo los acumulados diversos de distintas experiencias de trabajo social y político .

De éste modo, la Minga se convierte en referente de movilización social en la década de 2000, proponiéndose “enriquecer la propuesta de autonomía de los pueblos y articular la vitalidad de las clases y sectores” (Centro de Pensamiento Latinoamericano RAIZAL, 2010). La Minga de Resistencia Social y Comunitaria se gesta en el Suroccidente de Colombia en el año 2004, por toda la situación de violencia vivida y la negación de los Derechos expresada entre otras, en las movilizaciones regionales retomadas más arriba en éste capítulo. En el 2004 se hizo la “Minga por la Vida, la Justicia, la Alegría, la Autonomía y la Libertad de los Pueblos”, impulsada por el Consejo Nacional Indígena del Cauca (CRIC) y en la que convergieron diversas organizaciones sociales de Suroccidente, como un proceso de confluencia para juntar pasos y propuestas. Los pueblos indígenas llegaron caminando a la ciudad de Cali, en un recorrido de más de 50 kilómetros. Durante varios días, 20.000 indígenas, campesinos y organizaciones sociales reunidos en el “Cumbre de Pueblos y Movimientos Sociales” tejieron pensamiento y entregaron al país y al mundo las conclusiones de sus mesas de trabajo (Derechos Humanos, Reformas Políticas, ALCA y TLC, Construcción del proceso – Mecanismos y estrategias de resistencia y soberanía), que culminó con la promulgación del “Mandato Indígena y Popular”, el 18 de Septiembre del 2004 en Cali.

Luego, como parte del mismo impulso de dar lugar a espacios de confluencia y movilización regional general, en el 2006 se organiza la “Cumbre de Organizaciones Sociales”. De todas las veredas, corregimientos y municipios del Suroccidente, y otras regiones salieron indígenas, campesinos, estudiantes, afrodescendientes, miembros de organizaciones sociales, entre otros, a una gran movilización que fue duramente reprimida por las Fuerzas Armadas (FF AA). A esto siguió en el año 2007 la propuesta y realización del “Parlamento Indígena y Popular”, ya en una clave de empezar a explorar posibilidades de legislación social, y revisando para ello los resultados y logros de las últimas movilizaciones regionales de Suroccidente. Hay que decir que a diferencia de otros

momentos, las movilizaciones de la década de los 2000 dan un giro, el Estado y la interlocución y exigencias a éste no constituyen la centralidad y la razón de ser del *movilizarse*; el encuentro, hermanamiento y aprendizaje mutuo entre dinámicas sociales locales y regionales cobra una importancia mayor y al lado de las reivindicaciones de los que se exige a la institucionalidad, la protagonista es la búsqueda de lógicas autónomas de fortalecimiento de los propios procesos desde la articulación y el avance colectivo para mandatarse a sí mismas.

En ese sentido, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria se mandata desde un conjunto de organizaciones y procesos sociales que se han encontrado en los escenarios ya mencionados; surge como iniciativa de movilización, encuentro, protesta y convocatoria, todo al tiempo, conjugado en “caminar la palabra” que implica un método de hacer y pensar en y desde la lucha. Que el mismo ejercicio de movilización es un espacio para la discusión y concreción de las propuestas y que quienes confluyen en el *hacer* son quienes construyen el *pensar*.

Entendida como un proceso hecho de acciones y hechos concretos, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria genera un acto de movilización contundente en Noviembre 2008, llegando a Bogotá 15.000 personas, muchas de las cuales habían salido de los resguardos indígenas del Cauca, otros sumándose en Cali, otros en cada uno de los municipios y ciudades por los que ésta marcha transitó hasta su llegada a la capital del país. Por el camino y en los días de debates en Bogotá, se mostró la necesidad de concretar y sintetizar los ejes y puntos básicos de la movilización social: de esa forma fueron cobrando sentido e intención lo que se llamó los “cinco puntos”:

- La tierra, el territorio y la soberanía: como la base del tejido, las raíces, de lo que se es, de la memoria que da sentido al presente. Si alguno de estos tres elementos falta, el tejido de las raíces y lo que se es, estará incompleto (Conversación con Feliciano Valencia, 2008). La Tierra como madre y también como factor fundamental sin el cual no es posible la vida digna. En Colombia el problema de concentración de la propiedad de la tierra y el despojo como mecanismo de acumulación, marcan profundas brechas y

ponen el problema de la tierra en un lugar central para la superación de las desigualdades. El territorio entendido más allá de la tierra que provee alimento, como el lugar en el que se construye comunidad, que se recorre y conoce. Soberanía, como “poder decidir sobre lo nuestro, lo que nos pertenece”. En la Minga de Resistencia Social y Comunitaria se dice que es necesario recuperar la tierra para construir el territorio; la “Liberación de la Madre Tierra” emerge como estrategia colectiva de decisión y acción justa para que la tierra sea para lo que debe ser, también dando por entendido que el custodio que el Estado y los terratenientes le han dado es inadecuado y nocivo para ella misma y que hay una relación profunda entre la gente que la trabaja, la reclama y se constituye en uno solo con ella, haciendo territorio, más allá de la idea de la propiedad.

- Vida y Derechos: desde la Minga se reconoce el contexto del conflicto social, político y armado en el que está sumido el país, y se plantea que el derecho a la vida no está garantizado. Se reconoce también la importancia de la construcción de paz con condiciones de vida digna.
- Modelo Económico y Legislación del Despojo: La Minga identifica una legislación oficial injusta, hecha para favorecer el despojo y la acumulación de unos pocos que han puesto el sistema a funcionar solamente para ellos. La legislación social y popular se hace necesaria justamente porque la existente no permite la vida para los pueblos.
- Acuerdos Incumplidos: es un punto que se incorpora para evidenciar el incumplimiento del Estado colombiano frente a los acuerdos construidos a partir de las exigencias de las comunidades, ganados en movilización. Acordar ha sido para la institucionalidad solamente un mecanismo de desestimulación de la movilización, más no un compromiso real. Para el año 2008, solamente los pueblos indígenas contabilizan 23 acuerdos incumplidos.
- Agenda de los Pueblos: Para toda organización, pueblo o sector social organizado es importante contar con una agenda que muestre la ruta a seguir para lograr sus objetivos.

Esta agenda es el resultado del trabajo colectivo que va marcando los tiempos en los cuales se van a realizar las acciones. La construcción de una agenda común y nacional es importante para la construcción en minga, porque permite establecer articulaciones y juntar esfuerzos. Es reflejo del carácter mismo de la Minga.

Para desarrollar el proceso de articulación nacional, contruyendo una “agenda de organización y movilización para la vida digna” desde la minga se propone convocar un congreso de los pueblos, un escenario para construir y articular mandatos, para legislar desde las iniciativas desarrolladas en las movilizaciones y para generar un esceanrio coun de luchas. El congreso de los pueblos tuvo su sesión inagural en ctubre de 2010, luego en 2011 se convoco congreso de tierras, terriotrios y soberanias y en el 2013 se realizo el congreso de paz, en todas estas sesiones se ha logrado construir la base de una seire de mandatos y articular procesos de movilización nacional, los mas importantes las movilizaciones agrrias de agosto de 2013 y mayo de 2014 en donde junto a organizacioes commo dignidades agropecuarias, la marcha patriotica, el procesos de comunidades negras, la organización nacional indigena de colombia, se volvio a poner en el centro de las preocupaciones nacionales el problema agrario y la vida campsina. Todas estas organizaciones y moviminetos, exeptuando las dignidades agropecuaroas, en marzo del 2014 creron la Cumbre Agraria Etnica y Popuar, que se ha convertido en una plataforma y forma organizativa de carácter nacional, reconocida por el gobierno y que ha logrado por medio de 9 puntos instalr una mesa de negociación, que despues de decadas de desconocimieto y persecución tiene las posbiidades de convertirse en referente para una politica rurtral y regional que reconozca los sujetos movilizados ya como pobladores y comunidadds regionales, como campesinos, como pueblos, desde las necesidades de implentar politica publica campsina, pero tambien desde el reconociieto de las diversidades culturales y las distintas posibilidades de interculturalidad que se expresan en la formación nacional colombiana.

En síntesis, en este capítulo sobre los campos de la configuración regional que están en disputa en los episodios de movilización social, he señalado como la lucha social se despliega en dos sentidos: 1. La formulación y construcción como sujetos de derecho y reconocimiento social y 2. La construcción y la potencialidad como de sujetos de poder como pobladores. Se trata de un proceso complejo y diverso. Inicialmente reclaman una serie de derechos como “ciudadanos”, exigiendo una mayor presencia del Estado y un mayor nivel de participación (1985-1994). Luego, resalta su afirmación de sus intereses de “clase” como trabajadores y campesinos, demandando: infraestructura vial, redes de mercado, créditos para la inversión y respaldo para mejorar la salud y la educación (1996 y 1998); luego sobre la defensa de la vida y el territorio desde una propuesta regional (1999-2005); después de procesos de autonomía local y regional, y sus articulaciones nacionales con otros procesos de movilización regional (2005-2014). Al tiempo que se va haciendo dicha construcción, formulación y potencialidad como sujetos, se hace lo propio en términos de configuración regional. La configuración regional es articuladora social, comprendiendo que su reconocimiento parte de ser pobladores y comunidades de la región, como espacio social que los integra y en el cual han construido una serie de relaciones que son las que le dan sentidos y significados al “Proyecto de Vida Digna”.

De esta forma caracterizamos la relación entre lucha social y la configuración regional desde cuatro perspectivas: como una serie de prácticas de reconocimiento como pobladores y comunidades en movilización, como la constitución de sujetos políticos que se constituyen en la acción y organización colectiva, como la reivindicación de sentidos y usos que reivindican la “identidad diferencia” y como propulsores de procesos productivos que sin situarlos en una categoría gremial específica los reivindica como trabajadores. De esta forma la lucha social no se limite a las acciones colectivas, sino que engloba una serie de prácticas sociales en las cuales se constituye un pensamiento sobre la configuración regional. De esta manera también, la configuración regional, no se entiende solo como un ordenamiento territorial, o la definición de límites geográficos y productivos, sino como una práctica articulada al trasegar constante de relaciones entre pobladores, naturaleza, poder y capital; lo regional se define como una práctica y pensamiento que “va dándose” en la movilización social y esta se convierte al mismo tiempo en la “potencia social” de su configuración. La lucha social y su expresión en episodios de movilización social devienen

de las singularidades del proceso de configuración regional y su relación como parte de la formación social colombiana, en procesos regionales concretos.

Conclusiones

Construcción de nación: luchas y vitalidades regionales

I

A lo largo de esta tesis he explorado las relaciones que se tejen entre globalización, nación y región desde la perspectiva, los saberes y las prácticas de la gente que ha participado en distintos episodios de movilización, protesta y acción social para disputarse la configuración regional de sus lugares y prácticas de vida, en particular el Magdalena Medio y el Sur Occidente de Colombia. Dicha exploración la he denominado “caminar y conversar” como método de indagación etnográfica, sustentando que “estando y haciendo” en la vida de la gente desde nuestra condición de sujetos constructores de conocimiento antropológico, es posible generar un espacio de reflexión y debate productivo en términos epistémicos. A dicha producción epistémica la denomino, retomando todo un legado latinoamericano al respecto, “pensamiento propio” y en términos etnográficos, “pensamiento situado”.

Dicha relación pasa por una conjunto de tensiones, conflictos y contradicciones expresadas en movilizaciones, pliegos, plataformas, programas, relatorías, talleres, asambleas, mingas, trabajos colectivos, negociaciones, planes, proyectos de inversión y política pública, que denomino “luchas sociales”. Así como llamo “configuración regional” al conjunto de articulaciones sociales, espaciales y temporales que tejen dimensiones políticas, culturales, territoriales y productivas; que relacionan a más de un solo lugar, localidad, experiencia, pueblo, clase o sector. Por ello en los distintos capítulos argumento que la configuración regional es un proceso que involucra distintas dimensiones articuladas y tejidas unas con otras, y que al estar atravesadas por la potencialidad de distintas formas de lucha, las concibo como “región vida”. La “región vida” entendida como un “estar dándose” entre “potencialidades” expresadas en la lucha social en tanto “luchas por el reconocimiento y el poder”, y la formas espaciales y temporales hechas posibles, configuración y ordenamiento, regional.

La potencia social es la expresión de las capacidades y posibilidades de la lucha social, dicha potencia expresa lo latente, lo que puede ser, lo que se va dando, lo liminal que se

desenvuelve en la lucha social. La configuración regional es un campo de disputa de la lucha social, muestra la capacidad y la posibilidad de definir –territorial, cultural, productiva y políticamente- en relación a formas y modos de ordenar y planear socialmente la vida con sus diversidades y conflictos internos, frente a economías políticas, hegemonías, homogenizaciones y polígonos territoriales definidos por empresas privadas, instituciones del Estado, Ong`s; con notable incidencia y singularidad del conflicto armado en Colombia.

“Región vida” y “lucha social” son nociones que permiten relacionar teoría y metodología. Son conceptos-método, porque ellos sobresalen como nociones que sintetizan conversaciones y caminadas, en los dos procesos de configuración regional. Ellos mismos son producto de la exploración. De aquí otra conclusión necesaria: lo que se dice y se afirma en el texto, si bien es responsabilidad de quien escribe, difícilmente podría pensarse como un producto individual; caminar y conversar en procesos de lucha, señala necesariamente una disponibilidad colectiva. Antes de enunciarlo en el texto lo aprendí, y en los escenarios donde pude aprenderlo, también lo sugerí. De allí que esta tesis contribuya a recrear formas de pensar y hacer la antropología, como una relación de sujetos comprometidos con darle mayor capacidad a las potencialidades de la lucha. Sin que ello signifique una militancia y solidaridad en términos clásicos de la antropología latinoamericana. Nuestra condición como sujetos no es la representación intelectual de las luchas que podemos compartir, es el campo de nuestras propias búsquedas colectivas, en donde pueden encontrarse articulaciones posibles, pero también conflictos y desencuentros entre unas luchas y otras. No es una actitud reflexiva desde la antropología, en la cual se busque asumirse en el lugar y la posición que se tiene como investigador, como lo sugieren algunas aproximaciones postmodernas; por el contrario, pienso que se está construyendo el campo desde el cual se pondrán en evidencia las posibilidades reflexivas (campo definido por la historia colonial, señorial, homogenizadora y autoritaria donde actuamos). Lo suficientemente lejos de las responsabilidades de las antropologías producidas en los clásicos centros europeos o del hemisferio norte de América; sigo pensando un camino trazado por preguntas que imaginan la posibilidad de un conocimiento situado en las luchas emancipatorias, heterogéneas pero comunes, latinoamericanas, inspirado en Bonfil Batalla.

Como es un trabajo realizado en distintos tiempos y momentos, en el ir y venir por distintas lugares y localidades, la relación entre configuración regional y lucha social es imagen mosaico, va haciéndose y reorganizándose, una suerte de vivencia barroca, que al decir de Bolívar Echevarría (2005 y 2008), corresponde con las formas y modos que ponen de manifiesto la ambigüedad, la frugalidad, la creatividad, la multiplicidad; también, una suerte de genealogía del pensamiento y la imaginación que se expande en las asambleas y largos recorridos en movilización que permiten asir en su expresividad diversos “núcleos duros” al decir de Alfredo López Austin (1995 y 2001), que son recreados en las disputas y tensiones.

Durante el desarrollo de la investigación, se documentaron diversos espacios de decisión social, que incluyen: mingas sobre producción y organización, asambleas de educación propia, asambleas sobre planes regionales, asambleas en el marco del Parlamento Indígena y Popular, la Minga Social, el Congreso de los Pueblos, sesiones de cabildos y consejos comunitarios, talleres de cartografía social, jornadas de siembra y cosecha, asesorías en mesas de negociación, tulpas - alegoría a las tres piedras que conforman un fogón de leña- de pensamiento para elaborar mandatos, los pasos para elaborar un censo para ser reconocidos como cabildo, o la formulación de las bases de plan de buen vivir para la conformación de un consejo comunitario; así como diversos recorridos, unos por el interior de las regiones, otros en los episodios de movilización. A esto se suman entrevistas semiestructuradas, realizadas a dirigentes, voceras, responsables de proyectos y programas, comuneras y vecinos de lugares y funcionarios públicos de los niveles local y nacional. A partir de este conversar y caminar y la reflexión presentada aquí, quiero señalar diversas rutas de exploración desde donde es posible plantear algunas conclusiones, así como abrir caminos y conversadas:

1. La interculturalidad: una lucha que se desarrolla en la movilización y en la política pública. Al final de la década de los 60 un informe periodístico alertaba sobre la masacre de la Rubiera, en los llanos orientales colombianos. Se denunciaba una cacería deportiva cuyas presas eran los indígenas tunebos y se anunciaba con alarma la pervivencia del mundo indígena. Durante las dos décadas siguientes, las movilizaciones, las recuperaciones

de tierra, los actos simbólicos, los talleres y las escuelas de pensamiento propio, se convirtieron en la forma como, desde distintas perspectivas, los diversos pueblos indígenas fueron recreando su vida y movilizándose para transformar las relaciones con la sociedad nacional y el Estado colombiano. Todo indica que en torno a la cuestión indígena y la interculturalidad se ha producido, en Colombia y en otros países de América Latina, un cambio de época, una transformación profunda en la que las luchas de la gente han sido un factor decisivo

Dichos procesos de movilización, para el caso del Suroccidente colombiano se desplegaron en la recuperación de la tierra que bajo el enunciado « recuperar la tierra para recuperarlo todo » señalaba la necesidad de regresar a las tierras despojadas en los siglos y décadas precedentes, para, a partir de allí, recuperar unidos, la cultura, la autonomía y el territorio. En dicha movilización se destacaron el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Movimiento de Autoridades Indígenas del Cauca (AISO). Estas dos dinámicas, hijas y desprendidas del proceso de lucha campesina de la Asociación Nacional Usuarios Campesinos (ANUC), trazarán una reflexión en la cual lo regional es enunciado como forma organizativa y como propuesta territorial. Su contenido indígena pone de manifiesto la diversidad y la interculturalidad que hace presencia en el Suroccidente y que aún reclama lugar en proceso de configuración regional. Pero allí mismo, cobra sentido la noción de lucha, pues en sus planteamientos, manifiestos y proclamas, dicha expresión sintetiza sus propósitos, tanto de reconocimiento como de poder. No puede pensarse la configuración del Suroccidente sin que se piense en las diversas trayectorias históricas de sus habitantes, en las formas cómo han emprendido resistencias y propuestas.

En la Constitución de 1991, la lucha indígena logra un reconocimiento histórico que ha desenvuelto diversas dinámicas. Al reconocimiento pluriétnico y multicultural de la nación, se suma el reconocimiento de territorios y autoridades. Entre los efectos más importantes están los recursos de transferencias a los resguardos indígenas del situado fiscal de la nación, así como una prolífica producción de política pública en las distintas ramas del poder del Estado, desde el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Contraloría y la Procuraduría. Hasta el punto en que es posible decir que no existe institución del Estado que no esté interpelada por los pueblos indígenas.

Estos dos momentos de la lucha indígena : (1) la lucha por la tierra para recuperarlo todo, que hace emerger al indígena como sujeto de poder y (2) el logro constitucional que lo afirma como sujeto de reconocimiento, trazan una paradoja frente a la configuración regional. De un lado, la lucha indígena en el Suroccidente contiene la potencia de lo regional, lo enuncia y lo lucha, hace evidente su posibilidad y necesidad; pero el reconocimiento étnico y cultural lo circunscribe al desarrollo jurídico de su afirmación, generando una encapsulamiento que lo retrotrae de la construcción interétnica. Esto, porque el marco de la política pública, en clave de reconocimiento, reduce su potencialidad al sujeto étnico mismo, dejando en ciernes enunciados en la lucha como: « esto no es sólo para nosotros sino para ustedes también » y « sólo no podemos », con los cuales AISO y el CRIC convocaron en su momento a la articulación en la lucha regional y nacional. Dicha paradoja ha sido evidente en propuestas como la Minga Social y Comunitaria, que logró entre 2008 y 2010 llamar a nivel regional y nacional a un proceso de movilización alrededor de cinco puntos de lucha, dentro de los cuales se destacan: « los acuerdos incumplidos » en las movilizaciones regionales anteriores. Asumiendo como centro de reflexión el resguardo de La María, se logró establecer una ruta de movilización pluriétnica y regional que interpeló la noción de patria, seguridad e inversión extractivista del gobierno de Álvaro Uribe. Pero dicha potencia no logró desplegarse en toda su propuesta, debido a una serie de conflictos por la tierra entre comunidades indígenas, entre algunas de ellas y Consejos Comunitarios negros, y con territorios veredales de familias campesinas y sobre todo a conflictos surgidos por las orientaciones políticas en disputa al interior de la región. Dichos conflictos nacidos del histórico problema de tierra en la región y por posicionamientos políticos que emergen del contexto del conflicto armado, no fue tratado desde planteamientos de armonización y diálogo establecidos en reuniones como la de Perico Negro (cuando en 1995 se pactó una forma de resolver problemas territoriales entre campesinos, negros e indígenas (Escobar 2010, p. 70), sino que abrió el camino para que algunos las denominaran “conflictos interétnicos”. Tal denominación hace de la potencia de la interculturalidad para asumir la diversidad de la configuración regional, un obstáculo para su concreción. Un ejemplo de como una potencia social es reducida por la premura con que se asumen los conflictos, situación que incluso ha llevado a algunos activistas y asesores a reclamar “territorios interétnicos”, haciendo caso omiso de una certeza

sociológica y antropológica; que el Suroccidente mismo en su integralidad es un territorio intercultural.

Dicha relación intercultural ha tenido una historia distinta en el Magdalena Medio. Como lo hemos mostrado, el Magdalena Medio es producto de diversos procesos de movilización y desplazamiento, una suerte de aglomeración en donde se entreveran distintas procedencias, distintas etnias, distintos sentidos y prácticas sociales y culturales. Aún así, en el proceso de configuración regional se hacen evidentes singularidades interculturales. Los pescadores del Magdalena Medio, asumen una vida anfibia, siguiendo subidas y mitacas, y pese a que los márgenes de la pesca cada vez se reducen más, continúan su deambular por ciénagas, brazos y el río, tienen una forma de habitar y trabajar, desde donde reivindican su vida ribereña culturalmente.

De la misma manera, las diversas procedencias regionales y departamentales se organizan de determinadas formas, la gente andina tiende a vivir en las estribaciones de la serranía, la gente que viene de las Sabanas, en la partes planas y valles. Incluso existe aún cierta adscripción espacial a partir de las rutas asumidas por los “militantes” de uno u otro partido político, que terminan asumiéndose más que como herencias políticas, como procedencias culturales. También existe un proceso renaciente de reivindicación afro, que se ha desplegado en términos de crear consejos comunitarios de comunidades negras, o recrear la historia de palenques afro, o reivindicaciones culturales desde las demarcadas zonas de reserva campesina como la del río Cimitarra. Dicha diversidad intercultural en movilización, interrelación y encuentro, ha potenciado un proceso de reconocimiento interno; antes que un reconocimiento jurídico a nivel nacional, su potencia se recrea en la configuración regional y a logrado establecer una suerte de marcos de relación entre las distintas formas de orientación política, que si bien protagonizan conflictos, no recurren a repertorios culturales para describirlos y asumirlos.

El reto de las luchas por la configuración regional es buscar relaciones interculturales que partan de una dialéctica que permita el reconocimiento de la diversidad y de lo común. Lo común se expresa como potencia de la lucha y como necesidad de la configuración regional, justamente porque enuncia incompletud, antes que unidad, porque denota la potencia de los del común, porque establece articulaciones múltiples, más que pactos de

dirigentes. Justamente cuando se habla de la fuerza de las luchas sociales, la gente recuerda los momentos de llegada de los indígenas del Suroccidente a Puerto Tejada, conocido municipio de población negra del norte del Cauca en la primera marcha de autoridades indígenas, o rememoran cuando entre indígenas, negros y campesinos evitaron el trasvase del río Ovejas a la represa de la Salvajina; o cuando se inició la marcha de la Minga Social y se van uniendo comunidades de los distintos territorios, o cuando en las marchas, bloqueos y mesas regionales se establecieron programas y plataformas conjuntas.

2. Sujetos de lucha, configuración regional y la vida campesina. Como lo afirmé en el capítulo 4, la vida campesina sintetiza una multiplicidad de prácticas, saberes, imaginarios y usos en los contextos rurales y de vida en el campo. Entre sus características se resaltan: sus diversidades regionales, poblacionales y prácticas sostenibles y ambientales, que conforman el sustrato profundo a partir del cual diversas poblaciones reafirman sus modos de hacer, estar y asumir la vida. La vida campesina es una conjunción de lo común entre pueblos indígenas, comunidades negras y familias campesinas veredales, que viven en el campo, pero también es la forma como se proponen relaciones con la vida urbana a partir de asumir conciencia y afectividad y solidaridad en lucha, al reconocer la importancia de la defensa de bienes comunes como el agua, a la necesidad de producir alimentos de forma soberana. Durante los últimos años el país ha asistido a una emergencia de procesos de lucha social, cuyos protagonistas se definen y buscan reconocimiento como campesinos, al mismo tiempo en escenarios de negociación del conflicto armado, como el que se está desarrollando entre las FARC y el estado colombiano en La Habana. En estas negociaciones vale la pena recordar que el primer punto llama la atención sobre el problema agrario y de tierras en el país, puntualizando que los campesinos han sido víctimas del mismo y señalando la necesidad de proveer políticas que logren respaldar su vida y defender sus territorios.

Después de dos décadas en las cuales prácticamente la palabra campesino desapareció de la política pública y dejó de ser utilizada en la academia, la reivindicación del sujeto político aparece con fuerza inusitada. Llama la atención sobre el papel que ha cumplido el proceso de construcción nacional desde la Independencia y, al mismo tiempo, muestra cómo una

serie de procesos como las divisiones político-administrativas, la política pública, los procesos de modernización, industrialización y urbanización le han dado la espalda, dejando un amplio margen para la instauración de un conflicto armado por más de 50 años. Pero el marco y el repertorio de las movilizaciones campesinas ha cambiado en las últimas décadas, de la lucha por la tierra y la ciudadanía se ha pasado a propuestas políticas que es posible sintetizar en tres bloques temáticos: (1) el territorio, la protección del agua, la biodiversidad; (2) los derechos económicos, políticos, culturales y sociales; y (3) las formas y modos de trabajo relacionados con la producción, la autonomía y la soberanía alimentaria. La relación entre lugar, localidad y región se han convertido en la forma de organizar y definir dichas propuestas, permitiendo un referente espacial que articula planes y propuestas, así como referirse a evaluaciones de contexto o la ubicación de determinadas mesas de negociación. Así, los campesinos se han convertido en sujetos de primer orden en los episodios de movilización y hoy establecen como prioridad su reconocimiento como sujetos culturales y políticos. Pero justamente en el proceso de configuración regional, al analizar programas, propuestas de mesas y proyectos, cuando de vida del campo, producción y relaciones con el agua, y biodiversidad se trata, lo que se afirma es la vida campesina compartida con los otros sujetos en lucha, con la gente negra e indígena.

La vida campesina se enfrenta así a una fragmentación producida por los discursos multiculturales, pero se articula en las propuestas de configuración regional, volviéndose explícita en los momentos de enfrentar los dos motores del desarrollo regional propuestos desde el estado y el mercado: el extractivismo y la agroindustria. El proceso de urbanización y modernización buscó mostrar al campesino como lo retrasado, como lo subdesarrollado, pero a pesar del desbalance demográfico entre campo y ciudad, es posible decir que en los últimos 50 años, el peso de los campesinos no ha disminuido demográficamente, y que en las regiones recorridas, su relación demográfica sigue siendo inversa al promedio nacional. De allí que el envite al que se enfrentan y desde donde luchan los campesinos por su reconocimiento como sujetos de derechos y como sujetos de poder, articule diversidades étnicas y diferentes posiciones y condiciones de clase, desde donde pueden asumir la vida campesina como un modo y forma común. La vida campesina cobraría así un valor descriptivo de las potencialidades de pobladores, comunidades,

clases y pueblos, así como una capacidad propositiva que enfrenta a el extractivismo, la agroindustria, el latifundio, los megaproyectos en la disputa por la configuración regional.

3. Sobre el ordenamiento territorial. Una de las características expuestas para caracterizar los episodios de movilización regional, fue su carácter intersectorial e interclasista. En dichos episodios son protagonistas profesores, obreros, campesinos, mineros, pescadores, transportadores. Todos ellos reivindican su pertenencia regional y en ese sentido se asumen constructores de la configuración regional. Como lo caractericé en el capítulo 2, las formas de recorrer, habitar, trabajar, configuran la base de la movilización, y a partir de allí se definen como comunidades, pobladores, maciceños, entre otras denominaciones. Todas ellas hacen alusión a lo múltiple y a lo común. El referente de dicha pertenencia asumida, es el reclamo por un ordenamiento territorial, que vaya más allá de las divisiones político-administrativas, de los polígonos geográfico-económicos y del establecimiento de zonas o espacios de planeación institucional.

Las bases de dicho ordenamiento social del territorio parten de asumir las configuraciones regionales como proceso de vida y lucha, como región-vida, con capacidad de articular: (1) la defensa de los territorios, asumidos como los lugares habitados y trabajados históricamente, como los espacios que se entrelazan a partir de recorridos colectivos, como los escenarios donde se recrean valores de usos y bienes comunes tales como la producción de alimentos, el agua (que podría denominarse acuatorios), la pesca, la minería artesanal, los lugares donde existe la relación con los mayores. (2) Visibilizar y recrear propuestas culturales que denotan la pertenencia y la identidad-contradicción en términos de ser constructor, ser de allí y ser originario, que logran dar singularidad y particularidad frente a las amenazas sentidas; también posibilitan dar importancia a determinadas prácticas que ponen en evidencia lo común, como las fiestas, los festivales, los encuentros, las mingas, que fortalecen la lucha. (3) La relación con el trabajo, desde donde la principal reivindicación es la vida campesina -como la hemos caracterizado antes- y también las formas de asumir y organizar la infraestructura, el comercio, la soberanía alimentaria, los límites de la extracción de la pequeña minería y la pesca. Aparecen allí también las valoraciones sobre la riqueza producida en la región, asumiendo formas de economía

política distintas a los modelos de acumulación extractivista y agroindustrial. Para lograr establecer una propuesta de ordenamiento territorial a partir del proceso de configuración regional es necesario establecer una planificación económica que conjugue una cuantiosa inversión social y propuestas de valor agregado¹¹³. (4) Las formas de autonomía y legitimidad reivindicando las organizaciones como la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar y el Centro y Sur del Cesar o el Comité de Integración del Macizo Colombiano, o formas territoriales como las zonas de reserva campesina, los resguardos indígenas, los consejos comunitarios de comunidades negras, los territorios agroalimentarios. La articulación de estas cuatro dimensiones ha permitido construir propuestas de ordenamiento tomando como referente el territorio luchado en tanto recorrido, imaginado y cartografiado; y se expresa en los episodios de movilización por medio de planes y programas, en donde se establece sus límites y posibilidades.

El ordenamiento social del territorio propuesto en los episodios de movilización se asume como una propuesta política que propone una nueva concepción de la construcción nacional, a partir de nuevas formas de configuración regional, que significan reconocimientos. Uno de éstos es el de “poblador” en tanto actor político, que no sólo reivindica ser portador de derechos de reconocimiento y ciudadanía, sino que se enuncia como sujeto de poder y presupone un ordenamiento que transforma activamente relaciones de poder, modelos de acumulación económica y valoraciones poblacionales a partir de su diversidad.

Las propuestas de ordenamiento social del territorio con base a procesos de configuración regional tienen como horizonte crear o aumentar la capacidad y autonomía de las organizaciones y comunidades para orientar, planificar, gestionar, ejecutar y hacer seguimiento de los procesos que implican su vida. En otras palabras, pasa por un proceso integral de participación, y en ese sentido la pretensión de una nueva comprensión de la democracia. De allí que, para quienes participan activamente en los episodios de

¹¹³ En el plan integral de desarrollo y protección integral de los derechos humanos se establece que: los productores no controlan sino una pequeña parte del circuito económico; su participación es pequeña en el valor agregado total. Por ejemplo un campesino participa en un 10 por ciento del total del valor agregado; mientras los comerciantes pueden intervenir en un 40 o 50% y los demás agentes (incluidos los financieros) en el restante 40%. (patrones de distribución social del producto aplicado básicamente a la economía campesina).

movilización, la lucha social resulte ser el método y la forma de asumir la vida, en tanto expresa la capacidad política, esto es, de interlocución, confrontación y negociación frente al Estado y la creación de una institucionalidad regional a partir de sus organizaciones y comunidades.

La lucha al ser fuente de propuesta de ordenamiento social es constructora de cultura política, establecida como poder subalterno frente a las hegemonías que instituyen configuraciones regionales, que desplazan y despojan a los pobladores. Este aspecto organizativo y político lo encontramos en las comunidades y sectores movilizados en reclamo de sus intereses, necesidades y deseos, asumiéndose como sujetos de derechos y de poder. Dicha capacidad se hace evidente en la construcción de conocimiento desde la dinámica de lucha y en la forma como se organiza en planes, programas y proyectos las propuestas de configuración regional.

4. Las movilizaciones nacionales que demarcan luchas desde repertorios regionales.

Este ha sido el camino asumido por La Minga Nacional por la Resistencia Social y Comunitaria, el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Organizacional Nacional Indígena de Colombia, el Coordinador Nacional Agrario, el Proceso de Comunidades Negras, la Mesa de Interlocución Agraria y el proceso que las articula a nivel nacional a todas ellas: la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Cada uno y entre todos han generado diversas acciones de configuración regional a resaltar: las “acciones de liberación de la Madre Tierra para el cumplimiento de los pactos en los que se comprometió el gobierno en 1993”, en 7 municipios del Cauca y 2 del Huila (Aída Quilcue, Consejera Mayor del CRIC, entrevista febrero de 2008); o las movilizaciones rituales para la defensa del territorio en la Sierra Nevada de Santa Marta, para enfrentar a las explotaciones de carbón y de minería a cielo abierto, intentando también tomar los puertos (Faustino, coordinador de proyectos del pueblo Arwaco, enero de 2009). O bien, los referendos contra los tratados de libre comercio, o diversos bloqueos, paros, movilizaciones y tomas, encontrando en la defensa del territorio, en el trabajo, en “las mañas” (como denominan muchos campesinos sus saberes para vivir y permanecer en sus territorios) y en la autoridad propia, referentes que aluden a las condiciones regionales.

Finalmente, se ha mostrado: primero, cómo la lucha social y la configuración regional se relacionan; y segundo, la forma como pobladores y comunidades asumen la importancia de ser sujetos de reconocimiento social y ser sujetos de poder como producto del “estar dándose” en la práctica y los enunciados de dicha relación. A su vez, se ha subrayado cómo los pobladores en movilización constituidos en “potencia social” hacen parte de una dinámica en la que “se resiste al olvido” (Suhner, 2002). De las marchas a las mesas de negociación, del Tribunal Internacional de Opinión a las audiencias públicas, se ha trasegado por diversos caminos que reiteran una dinámica de configuración regional en la cual los pobladores son protagonistas y no actores pasivos de un repertorio de ordenamiento territorial impuesto. En todo este proceso, han recreado su propio repertorio social; al mismo tiempo que han propiciado cambios en las percepciones y propuestas que se construyen desde los otros sujetos que participan en la configuración regional.

El proceso social de construcción de reconocimiento social y de sujetos de poder de los pobladores, es un proceso complejo y diverso. Como vimos fluye de la reivindicación de de “ciudadanía y desarrollo”, exigiendo una mayor presencia del Estado y un mayor nivel de participación (1985-1994). Hacia el enunciado de intereses, necesidades y deseos de “clase” como trabajadores y campesinos, demandando: infraestructura vial, redes de mercado, créditos para la inversión y respaldo para mejorar la salud y la educación (1996 y 1998); luego, a partir de la definición de propuestas de carácter político se afirma la defensa de la vida y el territorio desde una propuesta regional (1999-2005); destacando la autonomía local y regional, y sus articulaciones nacionales con otros procesos de movilización regional (2005-2014). Teniendo en cuenta este flujo y proceso, con sus discontinuidades y fragmentaciones, es posible aseverar que la dinámica de lucha social no se limita a la emergencia de movimientos sociales y a acciones colectivas. La lucha social atraviesa los espacios productivos, las expresiones culturales, las construcciones territoriales y los ejercicios políticos. De esta forma la “potencia social” se va haciendo evidente en diversos impactos sobre la vida regional (sean resultados o frustraciones, proyectos desarrollados o retrocesos de indicadores sociales).

Constituirse como sujetos políticos, no es sólo la postulación y la exigencia de reconocimiento, va mas allá, en el sentido de comprenderse posibles, un “estar dándose” de

capacidades y competencias sociales que se ponen a jugar en un escenario, que por un lado los ha invisibilizado, instrumentalizado y cosificado. Por otro lado, ha implicado reinventarse en escenarios de agudización del conflicto social y armado en la región que pone en una situación de vulnerabilidad a la población, lo que hace que muchas propuestas de la movilización estén encaminadas a “la defensa de la vida”. Defender la vida es defender el territorio y las distintas comunidades que lo habitan.

En este continuo situamos la centralidad de la relación entre ejercicio de poder y construcción de territorio. La noción territorial les ha permitido ir mas allá de lo productivo, para hacerle el quite a su vinculación como “cultivadores de coca” y “mineros arrasadores del medio ambiente”. Así mismo, la definición territorial ha permitido potenciar un ordenamiento territorial, en el cual el problema de propiedad de la tierra y de las minas está determinado por los usos y significados de quienes han trabajado en ellas.

A su vez, el reconocimiento del “poder propio” les ha permitido convocar a diversas identidades, articulando expresiones culturales como parte de la definición de “su ser”. La articulación política producto del proceso de movilización ha generado una forma de definir la región, que evita una noción homogénea. Al contrario, muestra cómo la relación entre identidad y diferencia permite definir el entramado cultural regional, sin que ello signifique oposiciones y contradicciones. Al contrario, los pobladores han señalado que las contradicciones son fruto del enfrentamiento a un modelo económico y político que les desconoce e intenta eliminarlos.

Se debe destacar que los procesos productivos son un elemento determinante de las propuestas de configuración regional para los pobladores. La reivindicación de sus formas de reproducción material, la vida campesina, las actividades mineras y pesqueras principalmente, pero no las únicas, junto a la enunciación de la pobreza y precariedad infraestructural han sido propulsores de su dinámica de movilización. Pero más allá de una reivindicación romántica o paternalista se destaca la permanente búsqueda de consensos y propuestas. Para los liderazgos de las distintas organizaciones y movilizaciones con las que hemos caminado y conversado, el objetivo es ser reconocidos como parte de los constructores del espacio social y natural de la región, como estrategia para adquirir la titularidad de sus territorios y su reconocimiento como sujetos políticos. Pero estos

consensos son parciales y limitados. Pueden ser incorporados a estrategias desplegadas desde el multiculturalismo institucional, que termina por reafirmar un camino similar al enunciado en la mencionada “doble protección”, al medio ambiente y a la cultura indígena.

II

Esta tesis la he escrito como un ensayo que busca reivindicar, desde dos contextos regionales en disputa, la capacidad creadora y creativa de la gente para producir y reproducir condiciones, lo que desde su propia experticia se define como “vida digna”. Justo cuando se ha pregonado el fin de las ideologías, cuando se han afirmado los valores del individualismo, la competencia y la eficiencia, en Latinoamérica hemos asistido a la emergencia de múltiples formas de expresar dicha capacidad creadora y creativa, que enuncia las potencialidades de la vida de comunidades y pobladores, de la vida campesina en su comprensión ampliada, para reivindicar, defender y gozar los bienes comunes, el buen vivir y la vida sabrosa. Lejos de ser programas predefinidos o apuestas ideológicas predeterminadas, ellos y ellas se han desenvuelto en los avatares de comprender que “la vida es lucha”; que se va haciendo, se va viviendo, se realiza en formas plurales de asumir el tiempo y el espacio, la historia y la memoria, las expectativas y los sueños. Asumir una perspectiva antropológica, en concordancia con dicha capacidad y potencialidad creativa y creadora, hace de nuestro oficio (Sánchez Parga, 2005) un trabajo que tiene la posibilidad de problematizar, buscar críticamente y poner en evidencia mundos posibles, desde el entramado de vitalidades, experiencias y saberes de la gente, en sus formas organizativas y modos de movilización.

Caminar y conversar es el estilo que asumo para desempeñar el oficio antropológico. Entendiendo su desempeño como una forma de hacer y crear posibilidades etnográficas de larga duración, capaces de asumir los contrastes y los cambios tanto de los contextos de vida con los cuales nos relacionamos, como de nosotros mismos. Fui aprendiendo a hacerlo en la literalidad de los términos, tanto en las movilizaciones como en los momentos de intensificación de desplazamientos, la única forma de entablar relación era caminando y conversando, en muchos momentos, corriendo y gritando. También lo aprendí cuando entendí que era el método que expresaba la pedagogía de “los mayores” en las comunidades indígenas y negras, “para conocer el territorio hay que recorrerlo”, hay

que “pedir permiso para que el territorio hable”. Lo aprendí marchando en las calles de Pasto, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, cuando se decía que la lucha popular se va caminado de las calles a las veredas, comunicando el campo y la ciudad. Lo aprendí cuando se volvió método de la Minga Social y Comunitaria, expresando: “vamos a caminar la palabra por el país”, lo aprendí recordando las invitaciones de mi madre a ir a caminar para despejar la cabeza y gozar de los verdes y las montañas, lo aprendí en las jornadas de asambleas donde se nos invitaba a viajar con el pensamiento y la imaginación tanto hacia el futuro como al pasado, o en los talleres de cartografías y poligrafías, donde los trazos en mapas y objetos justamente relataban lugares andados y hablados. Así el caminar y conversar, no sólo invita a sumergirnos o azuzar nuestra capacidad interpretadora, o considerar las formas polifónicas, o sugerir nuevas versiones textuales, sino a trabajar con la paciencia de un artesano en el desentrañamiento de relaciones que se tejen en diversos momentos y lugares, mostrando la sinergia entre la pluralidad y lo común, a descubrirnos a nosotros mismos, allí donde pesamos encontrar la otredad, a sugerir posibles sentidos y significados al comprender las incompletudes, a afirmar relaciones entre núcleos duros y capacidades contextuales, a ligar sujetos colectivos constituidos como tales por su entramados naturales, territoriales, comunitarios, a situarnos como sujetos de lucha.

En varios lugares, nuevos fantasmas recorren el mundo, la indignación y la rebeldía aparecen renovadas frente a un sistema depredador, despojador y enajenante. En ellas la necesidad de respetar la palabra, de dar la palabra, de asumir la palabra, de hacer visible la palabra de los mas, de los ignorados, de las silenciadas se multiplica, no como método, ni principio epistémico, sino como acción, movilización y lucha. En este contexto la antropología tiene mucho que dar por su capacidad etnográfica de escuchar y aprender a moverse en contextos distintos, para lograr que los espectros que se mueven con los ritmos diversos de la relación lugar-globalización puedan contar sus vitalidades preñadas de posibilidad. No hablamos de lo que fue y no regresará, de lo que es y ya no será, o de cómo integrar, asimilar, educar y regular la diferencia desde la ontología de la otredad, sino de lo que podemos ser desde lo que estamos viviendo, desde lo que hacemos y donde estamos en sinergias e inclusiones poliformes y plurales. Sin temer a los conflictos y con la capacidad

de asumir las luchas que se desprenden de un mundo que sigue reproduciéndose por medio de contradicciones.

La capacidad creativa de la gente, la posibilidad de conversar y caminar como método de construir conocimiento en común y la necesidad de asumir un contexto de luchas y contradicciones que se mueve en escalas y transversalidades diversas, nos remite a preguntarnos sobre los tiempos y los espacios. En la introducción de esta tesis afirmo que el concepto materialista histórico de formación social, permite asumir la escala y el nodo que relaciona configuraciones regionales y luchas sociales. La formación social nos sitúa históricamente. Nos remite a la espacialidad y temporalidad donde ejercemos nuestra praxis concreta. La formación social sigue teniendo un carácter determinantemente nacional, de allí que como lo ha demostrado la experiencia latinoamericana reciente, la nación siga siendo referente, contenedor y escenario privilegiado de producción y reproducción del sistema y sus bifurcaciones y transformaciones. Pero la cuestión nacional, no se puede entender sólo como una escala que suma territorio, población y formas institucionales. La cuestión nacional pasa por la realización del lugar. La comprensión Nación-lugar es un vehículo histórico que muestra contornos flexibles, trazas que aparecen con lógicas renovadas; es un escenario en donde se realizan cultural, territorial, productiva y políticamente personas, colectivos, comunidades, clases y pueblos; es una red de relaciones que logran sintetizar en sus mutuas convergencias los mecanismos y dispositivos que ordenan y regulan la hegemonía, a su vez, como los contrapoderes y contradicciones que la cuestionan. Así la relación nación-lugar sintetiza los espesores en donde son posibles las disputas por la configuración regional (entendida como un entramado de lugares en la dinámica nacional), así como el campo donde se estructuran las luchas sociales, produciendo los patrones que se mueven en escalas y transversalidades desde lo local a lo global.

BIBLIOGRAFIA

- Agnew, John y Duncan, James (eds.) (1989) *The power of place: Bringing together geographical and sociological imaginations*. Boston: Unwin Hyman.
- Alape (1980) *Un día de septiembre, testimonio sobre el paro cívico de 1977*. Bogotá: Ediciones Armadillo.
- Almario García, Oscar (1972) “El papel de la historia regional en el análisis de las formaciones sociales” En *Ideología y sociedad*, No. 12, 1972, pag 75 -85.
- (2005) *La invención del suroccidente colombiano*. Tomos 1 y 2. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.
- Alonso, Manuel Alberto (1997) *Conflicto Armado y configuración regional*. Medellín: Instituto de Estudios Políticos - Universidad de Antioquia.
- Alonso W. 1972 (1964), “Teoría de la Localización” En: L. Needleman (Comp.), *Análisis Regional*, Madrid: Tecnos.
- Alonso, Julio Cesar y Lotero, Ana María (2008) *10 años de la ley páez*. Cali: Icesi
- Anderson, Benedict (1993) *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Aprile, Jacques (1994) *Los pueblos negros caucanos y la fundación de Puerto Tejada*. Cali: Gobernación del Valle del Cauca
- (1992). *La ciudad colombiana. Siglo XIX y siglo XX*. Bogotá: Biblioteca Banco Popular.
- Arango, Raul y Sánchez Henríque (1997-1998) *Los pueblos Indígenas de Colombia*. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, TM Editores.
- Arcila, María Teresa (1994) *La cultura en el Magdalena Medio en un mundo que se mueve como el río*, ICAN – Colcultura – PNR - Gente Nueva, Bogotá.
- (1986) *Aquí nadie es forastero, Testimonios sobre la Formación de una Cultura Radical: Barrancabermeja 1920 - 1950*, Bogotá, CINEP.
- et. al. (2002) *25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000*, Bogotá, CINEP.

- y Bolívar, Ingrid, et. al. (2006) *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio 1990-2001*, Bogotá, Conciencias – Cinep.
- (2005) *Idas y venidas. Vueltas y Revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958-1990*. Bogotá: ICANH, CINEP.
- Ardila, Gerardo (ed.) (2003) *Territorio y sociedad: el caso del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- (2006) “Cultura y desarrollo territorial” (inédito) Presentado en: Bogotá en el IDCT en el Diplomado de Gestión de Procesos Culturales y de Gestión de lo Público.
- Arenas Obregón, Martha (1999) "Cerrando Fronteras; Historias Contadas del Magdalena Medio" En *Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio*. Colección Redes No. 2, Barrancabermeja - Colombia.
- (1999) “Cerrando fronteras. Historias contadas del Magdalena Medio. Barrancabermeja: PDPMM.
- Arias Venegas, Julio Andrés; Bolívar Ramírez, Ingrid Johanna; Ruiz Serna, Daniel; De la Luz Vásquez, María (2006). *Identidades culturales y formación del Estado en Colombia: colonización, naturaleza y cultura*. Bogotá: CESO. Uniandes.
- Asamblea de Micoahumado. (2002). *Comunicado*. Manuscrito. Micoahumado, Bolivar.
- Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACVC (2000) *Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Plan de desarrollo sostenible (Resumen ejecutivo)*”. Barrancabermeja
- Balslev Clausen, Helene y Gutiérrez Martínezz, Daniel (2008) *Revisitando la etnicidad: miradas cruzadas en torno a la diversidad*. Sonora: El Colegio de Sonora, El Colegio Mexiquense y Siglo XXI Editores.
- Bayona Sarmiento, Manuel (2005) “Nuevas dinámicas de la guerra en el Sur de Bolívar colombiano”. Trabajo de grado para optar el título de magíster en Estudios Políticos. Bogotá: Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana.
- Becerra, Silvia (2005) “Convicción, esperanza y trabajo. La experiencia de una comunidad en reistencia: el caso de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra”. Tesis de Maestría en Ciencias Políticas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Behar, Olg (1985) "Las Guerras de la Paz" Planeta Colombiana Editorial S.A. Santa fe de Bogotá D.C. – Colombia.
- Benavides Mora, Carlos Alberto (2006) “Movimientos Sociales y Construcción Regional en Colombia : Territorio y poder en las movilizaciones del Sur de Bolívar (Marcha

- 1996, Exodo 1998, TIO 2003)”. Tesis de maestría, Master2 – IHEAL (Paris III).
- et. al. (2010) “Descentralización, autonomía, transferencias y gobierno propio en Colombia” En Christian Gros y Jean Foyer (eds.) *¿Desarrollo con identidad? Gobernanza económica indígena. Siete casos de estudio*. París: FLACSO Ecuador, IFEA, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Pp. 185-234.
- Benko, Georges y Alain Lipietz (1994) *Las Regiones que ganan*. Valencia: Edicions Alfons El Magnámin.
- Boisier, Sergio (1993), “Desarrollo regional endógeno en Chile. ¿ Utopía o necesidad ?”. En *Ambiente y Desarrollo*, Vol. IX, No. 2, Santiago de Chile: CIPMA
- (1997), “El vuelo de una cometa. Una metáfora para una teoría del desarrollo territorial” En *Revista Eure*, N° 69, Santiago de Chile: P.U.C/I.E.U.
- Bolívar, Ingrid (2006) "Identidades Culturales y formación del estado en Colombia, colonización, naturaleza y cultura" Bogotá: Corcas Editores v. 1.
- Bonilla, Víctor Daniel 2006 (1969) *Siervos de Dios y amos de indios. El Estado y la misión capuchina en el Putumayo*. Cali: Universidad del Cauca.
- Bourdieu, Pierre (1997) *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, Barcelona, Anagrama.
- Buenahora, Gonzalo (1971) La comuna de Barranca, Bogotá, Gráficas Leipzig, p. 35.
- Bushnell, David (1996) *Colombia. Una Nación a pesar de sí misma*. Bogotá: Ed. Planeta.
- Cadavid, Amparo (1995) *Comunicación: desde las regiones construyendo una nación*, Bogotá, Universidad Javeriana.
- (1996) *El Magdalena Medio: una región que se construye por el río. Diagnostico propositivo*, Bogotá, PDPMM.
- Caicedo y Restrepo (2012) “Pensamiento propio. Documento de síntesis Seminario Permanente de RaizAL” (documento inédito). Bogotá: Centro de Pensamiento Latinoamericano RaizAL.
- Camus, Manuela (comp..) (2006) *Las ideas detrás de la etnicidad*. Colección ¿Por qué estamos como estamos?. Guatemala: CIRMA
- Cardoso Fernando H. y Faletto, Enzo (1969) *Dependencia y Desarrollo en América Latina*. México: Siglo XXI.
- Castells, Manuel (1995) *La ciudad informacional. Tecnologías de la información, reestructuración económica y el proceso urbano regional*. Madrid: Alianza Editorial.

----- (2001) *La era de la información. Vol. II: El poder de la Identidad*. México: Siglo XXI.

Cataño, Gonzalo (1987) *Ciencia y compromiso. En torno a la obra de Orlando Fals Borda*. Bogotá: Asociación Colombiana de Sociología.

Caviedes, Mauricio (2002) “Solidarios frente a colaboradores: antropología y movimiento indígena en el Cauca en las décadas de 1970 y 1980”. Bogotá: Revista Colombiana de Antropología, vol. 38, enero-diciembre, pp. 237-260.

[Centro Nacional de Memoria Histórica; Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación \(Colombia\)](#) (2014) *Putumayo: la vorágine de las chucherías*. Bogotá: Imprenta Nacional.

Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) *Basta Ya. Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Imprenta Nacional.

Centro de Pensamiento Latinoamericano RAIZAL (2010). Cartilla Minga 2010. Ed. RAIZAL. Bogotá. Colombia

CIMA Nariño, noviembre de 2008 (2008) *Taller del Plan de Vida de San Lorenzo*. San Lorenzo.

Coatsworth, John H. (2004) “Patrones de rebelión rural en América latina: México en una perspectiva comparada” En Friedrich Katz (comp.). *Reuelta,, rebeión y revolución*. México: Ediciones ERA.

Colmenares, Germán (1973) *Historia económica y social de Colombia, 1537-1719*. Cali: Universidad del Valle.

Comaroff, Jean. Comaroff, John L. (2013). *Teoría desde el sur. O cómo los países centrales evolucionan hacia África*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de la Marcha de 1996. (Octubre 1997) *Documento central del evento: “Evaluación de la marcha a San Pablo”*. Carta dirigida a Ernesto Samper. San Pablo, Bolívar, Colombia.

Comunidades en resistencia. (2000). *Comunicado*. Manuscrito. Micoahumado, Bolivar.

De Roux Francisco J. (1996). *El petróleo en el Magdalena Medio*. Programa de Desarrollo y Paz. Barrancabermeja, Santander, Colombia.

Contraloría General de la República (1997) "Informe anual al Congreso de la República" Santa fe de Bogotá D.C. - Colombia

Cubides, Fernando y Domínguez, Camilo (1999) *Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territorialesk*, Bogotá, CES – Ministerio del Interior.

- Dagua Hurtado, Abelino. Aranda, Misael. Vasco Uribe, Luis Guillermo (1998) *Guambianos: Los hijos del aroiris y del agua*. Bogotá: CEREC, Editorial Los Cuatro Elementos, Fundación Alejandro Ángel Escobar, Fondo Promoción de la Cultura.
- Dalton, Rusell y Kuechler, Manfred (1992) *Los nuevos movimientos sociales un reto al orden político*. Valencia: Ediciones Alfons el Magnanim – Instituto Valenciano de Estudios e Investigación.
- DANE (1995) "Censo Agropecuario" Bogotá : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
- (2013) “Cuentas Departamentales – Producto Interno Bruto Año 2012 (Cifras Preliminares)”, 16 de octubre de 2013. Boletín de Prensa, Bogotá: DANE.
- De Roux, Francisco José (1999) “El Magdalena Medio en el centro del conflicto y de la esperanza”: *Controversia*, No. 174, Bogotá, CINEP (junio).
- De Sousa Santos, Boaventura (1998) *La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación*, Bogotá, ILSA.
- Devia, Carlos Alfonso (2003) *Valle del Río Cimitarra. Hacia una propuesta de manejo sostenible del bosque*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana/IDEADE-DET
- Díaz Arenas, Pedro Agustín (1993) "La Constitución Política Colombiana (1991), Proceso, estructuras y contexto" Editorial Temis S.A. Santa fe de Bogotá, Colombia.
- Downs, Richard (1999) Poder Militar y guerra ambigua: El reto de Colombia en el siglo XXI. En "Revista Análisis Político" No, 36 Enero - Abril Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Santa fe de Bogota D.C. - Colombia
- Dumoulin, David (2005) Les « terres indiennes pour la conservation » : Un dispositif-cle du neo-indigenisme international, (manuscrito)
- Duque Rojas, Ubencil. (1996). *Aproximación a la realidad del Magdalena Medio*. Barrancabermeja: Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
- Dussel, Enrique (1996) *Filosofía de la liberación*. Bogotá: Nueva América.
- (2009) *Política de la liberación. Arquitectónica*. Madrid: Editorial Trotta. V. I y II.
- Echeverría, Bolívar (2008). “El Ethos barroco y los indios”. En *Revista de Filosofía Sophia*. Quito. No. 2.
- (2005) *La modernidad de lo Barroco*. Primera reimpresión. México: ERA.

- Eisinger, Peter K. (1973) "The conditions of protest behavior in american cities" En *The American Political Science Review*. V. 67, No. 1, pp. 11-28.
- Escobar, Arturo (1997a) "Política Cultural y Biodiversidad: Estado, Capital y Movimientos Sociales en el Pacífico Colombiano". En María V. Uribe y Eduardo Restrepo, (eds.): *Antropología en la Modernidad*. Bogotá: ICAN. pp. 173-206.
- (1997b) "El Proceso Organizativo de Comunidades Negras en el Pacífico Sur Colombiano". *Ecología Política*. No. 14, pp. 47-64.
- (1999) *El final del salvaje*, ICANH, Bogotá.
- (2001) *Política cultural y cultura política*, ICANH - Taurus, Bogotá.
- (2000) *Beyond the Search for a Paradigm? Post-development and Beyond*. Development 43(4): 11-14. Roma: Society for International Development.
- (2008) *Territories of Difference: Place, Movements, Life, Redes*. Durham: Duke University Press.
- (2010a). *Una minga para el post desarrollo: Lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales*. Bogotá: Ediciones desde abajo.
- (2010b). *Territorios de diferencia. Lugar, movimientos, vida, redes*. Bogotá: Envión Editores.
- Fajardo, Darío (2002) *Para Sembrar la Paz Hay que aflojar la Tierra*. Bogota: Universidad Nacional De Colombia.
- "La colonización de la Macarena en la historia de la frontera agraria" En: Alfredo Molano et. al. Yo le digo una de las cosas... la colonización de la reserva de la Macarena. Bogotá: Corporación Araracuara – Fondo FEN.
- (2002) *Tierra, poder político y reformas agraria y rural*. Bogota : ILSA.
- Fals Borda, Orlando (1961) *Campesinos de los Andes*. Bogotá: Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia.
- (1979) *Historia Doble de la Costa*. Bogotá: Carlos Valencia Editores.
- (1980) *Fundamentos de la cultura anfibia. Partes A y B de Historia doble de la costa*. Tomo 1. Bogotá: Carlos Valencia Editores. p: 16-72
- (1981) *Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual*. Bogotá: Carlos Valencia Editores.

- et al (1988) *La insurgencia de las provincias. Hacia un nuevo ordenamiento territorial para Colombia*. Bogotá: Instituto de estudios políticos y relaciones internacionales, Universidad Nacional /Siglo XXI. 236p.
- (1993) “El reordenamiento territorial: itinerario de una idea”: *Análisis Político*, No. 2 (septiembre – diciembre), pp. 97 – 105.
- (1999) “Guía práctica del ordenamiento territorial en Colombia: contribución para la solución de conflictos”: *Análisis Político*, No. 36 (enero - abril), pp. 85-104.
- (2008) *La Subversión en Colombia: cambio social en la historia*. Bogotá: FICA – CEPA
- (2008) Orígenes universales y retos actuales de la IAP (Investigación- Acción Participativa). *Peripecias*. Recuperado el 14 de agosto de 2011 de <http://www.peripecias.com/mundo/598FalsBordaOrigenesRetosIAP.html>.
- Fernández, Carlos; Durán, Mauricio; Sarmiento, Fernando (2004) “Movilizaciones por la paz en Colombia 1978 – 2002” EN Controversia. V. 1, CINEP, pp. 18-23. Grueso, Rosero, Escobar 1998, p. 205).
- Friedemann, Nina S. de y Jaime Arocha (1986) De sol a sol. Génesis, transformaciones y presencia de los negros en Colombia. Bogotá: Planeta.
- Funes, Patricia (2006) *Salvar la nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos*. Buenos Aires: Prometeo.
- Furtado, Celso (1964) *Desarrollo y Subdesarrollo*. Buenos Aires: Eudeba.
- García Canclini, Néstor (2004) *Diferentes, Desiguales y Desconectados. Mapas de la Interculturalidad*. Barcelona: Gedisa.
- García, Clara Inés (2007). “Enfoque sobre “región”. Elementos para una discusión”. Documento temático presentado a 2o Seminario interno ODECOFI. Octubre 8 y 9 de 2007. Observatorio para el Desarrollo, la Convivencia y el Fortalecimiento Institucional. Documento en línea: <http://bibliotecadigital.icesi.edu.co>
- García Nossa, Antonio (1978) *Geografía Económica de Caldas*. Bogotá: Publicaciones del Banco de la República.
- (1978) *La estructura del atraso en América Latina. Hacia una teoría latinoamericana del desarrollo económico*, Bogotá.
- s.f., *COLOMBIA: Esquema de una República Señorial*, Bogotá, Ediciones Cruz del Sur.
- Gellner, Ernest (1985) *Naciones y nacionalismos*, Madrid, Alianza.

- Giddens, Anthony (1985) *The Nation-state and violence*. University of California Press
- González, Fernán E. et. al. (2003) *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la formación del estado*, Bogotá, CINEP.
- (2006) “Conflicto armado, movilización social y construcción de región en el Magdalena Medio” En varios autores, *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio*, Bogotá: Colciencias, CINEP. pp. 509-577.
- ; Restrepo, Jorge A.; Sánchez Díaz, Luis Carlos; Vargas, Andrés R.; Vásquez, Teófilo (2011) *Una hija guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el sur de Colombia*. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. CINEP. Colciencias. Odecofi. Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional en regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado. CERAC.
- González Casanova, Pablo (2004) *Las nuevas ciencias y las humanidades. De la Academia a la Política*. Barcelona: Anthropolos.
- Grimson, Alejandro (2011) *Los límites de la cultura. Crítica a las teorías de la identidad*. Buenos Aires: siglo XXI Editores.
- Gros, Christian (2000) *Políticas de la etnicidad: identidad, estado y modernidad*, ICANH, Bogotá.
- Guber, Rosana (2001) *La etnografía: Método, campo y reflexividad*. Bogotá: Norma.
- Gutiérrez, Omar (2004a) “La oposición regional a las negociaciones con el ELN”: *Análisis Político*, No. 52, Bogotá, IEPRI (septiembre – diciembre), pp. 34-50.
- (2004b) “Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San Pablo (Sur de Bolívar)”: *Revista Controversia* (nueva época), No. 183, Bogotá, CINEP.
- Gutiérrez Lemus (2004) “Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San Pablo (Sur de Bolívar)”: *Revista Controversia* (nueva época) Número 183. Bogotá: CINEP.
 Disponible en
http://www.kus.uu.se/pdf/publications/Colombia/Deplazamiento_tenencia_en_San_Pablo.pdf
- Guillén Martínez, F. (1979) *El poder político en Colombia*, Bogotá: Punta de Lanza.
- Gutiérrez Martínez, Daniel y Balslev, Helene (2008). *Revisitar la etnicidad: miradas cruzadas en torno a la diversidad*. México: Siglo XXI: El Colegio Mexiquense: El Colegio de Sonora.

- Gutiérrez de Pineda, Virginia (1968) *La familia en Colombia: trasfondo histórico*, Bogotá: Universidad Nacional. Facultad de Sociología.
- (1963) *Familia y cultura en Colombia: tipologías, funciones y dinámica de la familia, manifestaciones múltiples a través del mosaico cultural y sus estructuras sociales*. Bogotá: Tercer Mundo.
- (1975) *Familia y Cultura en Colombia*. Bogotá: Intituto Colombiano de Cultura.
- Guhl, Ernesto (1963) *Indios y Blancos en la Guajira Estudio Socio Económico*. Bogotá: Editorial Tercer Mundo.
- Harvey (2005) *El “nuevo” imperialismo : acumulación por desposesión*. Buenos Aires: CLACSO.
- Havens, Eugene y Romieux, Michelle (1966) *Barrancabermeja Conflictos Sociales Entorno a un centreo Petrolero*. Bogotá : Ediciones Tercer Mundo y Facultad de Sociología, Sección de Investigación Social, Universidad Nacional de Colombia.
- Herrera, Luz Ángela (2003). *Región, Desarrollo y Acción Colectiva. Movimiento de Integración del Macizo Colombiano*. Bogotá: CINEP.
- Herrera, Martha (2002) *Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y los Andes Centrales neogranadinos. Siglo XVIII*. Bogotá: Icanh
- Hirshman, Albert (1958), *The Strategy of Economic Development*, New Haven: Yale University Press.
- Hobsbawm, Eric (2000) *Naciones y nacionalismos desde 1780*. Barcelona: Crítica
- IGAC (1977) "Aspectos Geográficos del Departamento de Bolívar", Santa fe de Bogotá - Colombia.
- (2002) *Zonificación de los Conflictos de Uso de las Tierras del País*. Bogotá: IGAC.
- IGAC (2005)
- ILSA (s.a.) “Caracterización de la economía campesina en Colombia”. Disponible en: <http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/otras/tlc/cap3.pdf>
- Isard, Walter (1956), *Localization and Space Economy: A General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land Use, Trade and Urban Structure*. Cambridge: MIT Press.
- Jerez, Cesar (2003) *El Plan Colombia en el Magdalena Medio. Fumigaciones, abortos y gallinas muertas*. Agencia Prensa Rural. <http://www.prensarural.org/>

- Krugman, Paul (1991) "Increasing Returns and Economic Geography". En *Journal of Political Economy*, vol. 99, no. 3.
- Leal, Francisco y Zamosc, León (eds) (1990) *Al filo del caos. Crisis Política en la Colombia de los años 80*, Bogotá: Tercer Mundo Editores - Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.
- Leff, Enrique (1998) *Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder*, México, S. XXI.
- (2002) *La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable*, manuscrit
- Levi, Giovanni (1993) "Sobre Microhistoria": *Formas de hacer historia*, Madrid, Alianza.
- Lipietz, Alain (1979) *El capital y su espacio*. México: Editorial Siglo XXI.
- Loingsigh, Gearóid Ó (2002) *La estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio de Colombia*, material inédito.
- (2011). *Una mirada desde el sur. Huellas de lucha y resistencia*. Bogotá: Coordinación Nacional Agrario. CNA.
- Londoño, Rocío (1994) *Una visión de las organizaciones populares en Colombia*, Bogotá, Fundación Social Viva la Ciudadanía.
- López Austin, Alfredo (1995) Tras un método de estudio comparativo entre las cosmovisiones mesoamericana y andina a partir de sus mitologías. En *Antrop.*, No. 32, pp. 209-240.
- (2001). "El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana". En Broda, Johanna y Báez-Jorge, Félix, *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México*. México: Fondo de Cultura Económica.
- López Michelsen, Alfonso (1985) "Discurso en el lanzamiento del libro: Constituciones de la Primera República Liberal" En *Obras completas*, Tomo III, Cámara de Representantes, 29 de agosto de 1985. Santa fe de Bogotá D.C. - Colombia
- Lucas Robert E., Jr. (2002) "Lectures on Economic Growth". Harvard: Harvard University Press.
- Madariaga, Patricia. (2006a). "Región, Actores y Conflicto: Los episodios". En: *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio* (pp. 37-84). Bogotá. Colciencias y CINEP.

- (2006b) *Matan y matan y uno sigue ahí. Control paramilitar y vida cotidiana en un pueblo en Urabá*. Bogotá: Colección Prometeo. Uniandes.
- Mamián Guzmán, Dumer. S.a. *La región y la historia del siglo XIX en el contexto de los Andes*. (Inédito). Texto aportado por el autor.
- (2005) *Danza del tiempo y el espacio en los Andes del Sur de Colombia*, Pasto, Universidad de Nariño.
- Manrique Reyes, Alfredo (2011). *La desean tramitación como instrumento de fortalecimiento del Estado social del derecho*. Bogotá: Procuraduría General de la Nación. Instituto de Estudios del Ministerio Público-IEMP.
- Marx, Carlos, s.f., *Introducción general a la crítica de la economía política*, Bogotá: La Chispa.
- McAdam, Doug; Tarrow, Sidney, y Tilly, Charles (2005) *Dinámica de la contienda política*. Barcelona: Editorial Hacer.
- Medina, Medófilo (1984) *La protesta urbana en Colombia en el siglo XX*. Bogotá: Ediciones Aurora.
- Medina Gallego, Carlos; Flórez Cañas, Fabiola (2013). *Memorias Indómitas. Colonización, minería y resistencia social en las regiones del sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Instituto de Investigaciones Jurídico Sociales Gerardo Molina (UNIJS).
- Medina Gallego, Carlos y Hernández Riveros, Luis Humberto (2013). *Comunidades y territorios en resistencia. Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste de Antioqueño*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Instituto de Investigaciones Jurídico sociales Gerardo Molina (UNIJS).
- Melo, Jorge O. (1992a) *Predecir el Pasado: Ensayos de Historia de Colombia*. Bogotá: Fundacion Simon y Lola Gubbereck.
- Melo, Jorge Orlando (1992b) “Etnia, región y nación: El fluctuante discurso de la identidad” (notas para un debate)” Disponible en: http://www.jorgeorlandomelo.com/etnia_nacion.htm
- Melucci, Alberto (1985). “The Symbolic Challenge of Contemporary Movements” En *Social Research: An International Quarterly* . Vol. 52. No. 4, pp.789-816.
- (1994), “¿Qué hay de nuevo en los “nuevos movimientos sociales”?” En E. Laraña y J. Gusfield (ed.) *Los nuevos movimientos sociales. De la Ideología a la identidad*. Madrid: CIS.

- (1999) *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, México, El Colegio de México.
- Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio (1998). *Documento Plataforma de Movilización*. Barrancabermeja, Santander
- (1999a). *Plan de Desarrollo y de Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio*. Barrancabermeja, Santander.
- (1999b). *Comunicado*. Manuscrito. Barrancabermeja, Santander.
- Molano, Alfredo (2009) *En Medio del Magdalena Medio*. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular.
- Molina Portuguese, Andrés Leonardo (2004) “La zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra: un ejercicio inconcluso de participación ciudadana y manejo colectivo del territorio” En Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de geografía. Disponible en: <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/27179/36734>
- Moncayo Jiménez, Edgar (s.a.1) “Modelos de desarrollo regional: teorías y factores determinantes”: Bogotá: Sociedad Colombiana de Geografía. En www.sogeocol.com.co
- (s.a.2) “Nuevas teorías y enfoques conceptuales sobre del desarrollo regional: ¿hacia un nuevo paradigma? En www.economiainstitucional.com
- (2000) “La Comunidad Andina frente a la globalización: elementos para una respuesta concertada”. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, La globalización y las nuevas corrientes integracionistas (Seminario Internacional, Cartagena de Indias, 13 y 14 de abril de 2001). Bogotá: Fondo Editorial Cancillería San Carlos y CAF.
- (2001) “Evolución de los paradigmas y modelos interpretativos del desarrollo territorial”, Serie Gestión Pública 13, Santiago de Chile, CEPAL.
- (2002a) *Nuevos enfoques teóricos, evolución de las políticas regionales e impacto territorial de la globalización*, Santiago de Chile, ILPES – Naciones Unidas – CEPAL.
- (2002b) *Nuevos enfoques de política regional en América Latina: El caso de Colombia en perspectiva histórica Las políticas regionales: Un enfoque por generacione*”, Cuadernos de Economía, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Estudios Económicos.
- Mondragón, Héctor (2001) “Plan Colombia: Gasolina al Fuego”. Disponible en: www5.gratisweb.com/ciclocrisis**

- (2003) “Quien quiere dominar los territorio”: *Revista Semillas*, No. 19, Grupo Semillas (<http://www.semillas.org.co/revistas.htm>).
- Montenegro, Ernesto (1997) *De ciénagas y montañas: un estudio antropológico del Sur de Bolívar*, tesis de grado, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- Montañez Gómez, Gustavo y Delgado Mahecha, Ovidio (1998). “Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional”. En *Cuadernos de Geografía*, Revista del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Vol. VII No. 1-2 .
- Morales Marín, Alix. (2009) “Mujeres campesinas, soberanía alimentaria e incidencia política – Colombia: ¿un proceso de resistencia alterglobal o una opción de vida?”, (manuscrito inédito)
- Moreno, Leonardo (2000) *Espacio político, territorio y guerra entre los yarigües según fuentes etnohistóricas de los siglos XVI y XVIII*. Barrancabermeja: Universidad Cooperativa de Colombia.
- Mouffe, Chantal y Laclau, Ernesto (1987) *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Madrid: Siglo XXI.
- Muelas, Lorenzo (1998) “Acceso a los recursos de la biodiversidad y pueblos indígenas”: Flores, Margarita, *Diversidad biológica y cultural*, Bogotá, ILSA.
- y Urdaneta Franco, Martha (2005) *La fuerza de la gente. Juntando recuerdos sobre la terrajería en Guambía-Colombia*. Bogotá: ICANH.
- Múnera, Alfonso (1998) *El fracaso de la Nación. Región, clase y raza en el caribe Colombiano: 1717 -1810*. Bogotá: Banco de la Republica, El Ancora Editores.
- Múnera Ruiz, Leopoldo (1988). *Rupturas y continuidades (poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988)*. Bogotá: IEPRI, CBREC, Universidad Nacional.
- (1993) “De los movimientos sociales al movimiento popular” En *Historia Crítica*. Enero-Junio , pp. 55-80.
- Municipio de Santa Rosa del Sur (1997) "Plan Integral de Desarrollo del Municipio de Santa Rosa del Sur, Departamento de Bolívar" Acuerdo Municipal No. 024 del 25 de Febrero de 1.997. Santa Rosa del Sur - Bolívar – Colombia
- Murra, John (1975) *Formaciones económicas y políticas del mundo andino*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Murillo, Amparo (1994). *Un mundo que se mueve como el río. Historia regional del Magdalena Medio*. Bogotá: ICAN.

- Myrdal, Gunnar 1964 (1957) *Economic Theory and Underdeveloped Regions* (La teoría económica y los países subdesarrollados, México: Fondo de Cultura Económica).
- Neveu, Eric (2002) *Sociologie des mouvements sociaux*, 3 ed., Paris, La Decouverte.
- Novoa, Edgar (2009) *Trayectorias Geopolíticas en Colombia. Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño. Movimiento Popular Los Inconformes. Comité de Integración del Macizo Colombiano*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Oberschall Anthony (1973), *Social conflict and social movements*, Englewood Cliffs-New Jersey, Prentice Hall Inc.
- Observatorio de la Violencia (1996) "Informe de Paz No. 4, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Santa fe de Bogotá - Colombia
- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2001) Vicepresidencia de la República. Panorama actual del Magdalena Medio. Bogotá
- Offe, Claus (1988) "Los movimientos sociales cuestionan los límites de la política institucional": *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*, Madrid, Sistema.
- Olson, Mancur (1992) *La lógica de la acción colectiva. Bienes públicos y la teoría de grupos*. México: Limusa-Noriega Ed.
- Olzak, Susan (2006) *The global dynamics of racial and ethnic mobilization*. Standford: Standford University Press.
- Oslender, Uldrich (1999) "Espacio e identidad en el Pacífico colombiano" En: J. Camacho y E. Restrepo (ed.) *De montes, ríos y ciudades. Territorios e identidades de la gente negra en Colombia*. Bogotá: ICAN.
- (2004) "Construyendo contrapoderes a las nuevas guerras neoeconómicas: caminos hacia una globalización de la resistencia" En *Revista de Humanidades Tabula Rasa*. No. 2, pp. 59-78.
- Ospina, William (2001) *America Mestiza: El País del Futuro*. Bogota: Santillana
- Palacios, Marco y Safford, Franck (2002) *Colombia: país fragmentado, sociedad dividida*. Bogotá: Editorial Norma.
- Páramo, Carlos (2015) *Minga, minca*. En: *Cuadernos de RAIZAL: A propósito de la Minga Social y Comunitaria, descifrando un pensamiento común*. Ed. RAIZAL. Bogotá. (p. 34 – 40).
- Pécaut, Daniel (1987a) *Acerca de La Violencia de los años cincuenta*. Cali: Boletín Socioeconómico. No. 17, pp. 33-48.

- (1987b). *Orden y violencia: Colombia. 1930-1954*. Bogotá.
- (1997) “Presente, pasado y futuro de la Violencia”: *Revista Análisis Político*, No. 30, Bogotá, IEPRI-Universidad Nacional de Colombia.
- (2001) *Guerra contra la sociedad*, Bogotá, Editorial Espasa Hoy.
- Pérez, Mario Alejandro y Álvarez, Paula (2009) *Deuda social y ambiental del negocio de la caña de azúcar en Colombia. Responsabilidad social empresarial y subsidios implícitos en la industria cañera. Análisis en el contexto del conflicto corteros-empresarios*. Bogotá: Semillas, Swissaid, Appleton Foundation, SSPN.
- PDPMM (1996) “Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio“. Barrancabermeja.
- PIDMM (1999) “Plan de Desarrollo y protección Integral de los Derechos Humanos”. Mesa Regional Permanente de Trabajo de Paz del Magdalena medio. Barrancabermeja.
- Pizarro Leongómez, Eduardo (1989), “Los orígenes del movimiento armado comunista en Colombia: 1949- 1966”, *Revista Análisis Político*, mayo- agosto.
- (1991) *Las FARC de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*, Bogotá: Tercer Mundo Editores, IEPRI.
- Quijano, Aníbal (2000) “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En : Edgardo Lander (comp.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Ramírez, María Clemencia (2001) *Entre el estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo*, [Bogotá : Instituto Colombiano de Antropología e Historia](#), [Colciencias](#).
- Rappaport, Joanne (2000) *La Política de la Memoria. Interpretación Indígena de la Historia en los Andes Colombianos*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca-Serie Estudios Sociales.
- (2005) *Cumbe Renaciente. Una historia etnográfica Andina*. Bogotá: ICANH.
- (2008) *Utopías Interculturales. Intelectuales públicos, experimentos con la cultura y pluralismo étnico en Colombia*. Bogotá: Universidad del Rosario y Universidad del Cauca.
- y Ramos, Pacho (2005) “Una historia colaborativa: retos para el diálogo indígena-académico” En *Historia Crítica*, No. 29, enero-junio de 2005, pp. 39-62.
- Riechmann, Jorge y Fernández Buey, Francisco (1994) *Redes que dan libertad: Introducción a los nuevos movimientos sociales*. Barcelona: Paidós.

- Restrepo, Eduardo (2007) "Identidades: Planteamientos teóricos y sugerencias para su estudio": *Janwa Pana*, No. 5, julio, pp. 24-35.
- Restrepo Riaza, William. (1992). *La violencia: un problema histórico de cultura y civilización política*. *Estudios Políticos*, 1, pp. 77-90.
- Revista semana (2012). *Acción urgente en riesgo pobladores del Sur de Bolívar*. Tomado de <http://www.semana.com/nacion/campesinos-del-sur-bolivar-movilizan-para-exigir-atencion-del-gobierno/163806-3.aspx>
- Reyes Posada, Alejandro. (1998) "Regionalización de los conflictos agrarios y la violencia política en Colombia": Sarmiento A., Libardo, *Municipios y regiones de Colombia. Una mirada desde la sociedad civil*, Bogotá, Fundación Social.
- (2009) *Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia*. Bogotá: Grupo editorial Norma.
- Reygadas Robles Robles, Luis.(2008) *La apropiación: Destejiendo las redes de la desigualdad*. Barcelona. Anthropos.
- Rodríguez Pico, Clara Rocío (2001) *Memorias del conversatorio región y autonomía*, Bogotá, FESCOL.
- Rojas, José María (1985) *Sociedad y economía en el Valle del Cauca: empresarios y tecnología en la formación del sector azucarero en Colombia 1860-1980*. Bogotá: Universidad del Valle- Biblioteca del Banco Popular.
- Romero, Mauricio (2003) *Paramilitares y autodefensas, 1982-2003*, Bogotá, IEPRI – Planeta.
- Romer Paul (1994) "The origins of endogenous growth". En *Journal of Economics Perspectives*. V. 8, No. 1.
- Rostow, W.W. (1962) *The Process of Economic Growth*. Segunda edición. Nueva York: Norton New York.
- Saade, Marta (2009) "El mestizo no es color. Ciencia y política pública mestizófilas (México 1920-1940)". Tesis doctoral en Historia y Etnohistoria. México: ENAH (inédito).
- Salgado, Carlos (2001) *Los campesinos imaginados*. Cuadernos Tierra y Justicia No. 6, Bogotá, Planeta Paz.
- y Prada, Esmeralda (2000) *Campesinado y protesta social en Colombia 1980-1995*, Bogotá, CINEP.

- Salguero Cubides, Jorge (2006) "Enfoques sobre algunas teorías referentes al desarrollo regional. Conferencia Estatutaria para posesionarse como Miembro de Número de la Sociedad Geográfica de Colombia". Bogotá: Sociedad Geográfica de Colombia. Academia de Ciencias Geográficas. En www.sogeocol.edu.co
- Samper, Jose (1861) *Ensayo sobre la revolución en las repúblicas colombianas*. París
- Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo (comp.) (1991) *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, Bogotá, CEREC.
- Sánchez Parga, José (2005) *El Oficio del Antropólogo Crítica de la Razón (Inter) Cultural*. Quito: Centro Andino de Acción Popular.
- Santos, Milton (1986) "Espacio y método" En *Revista Geocrítica*. Año XII, No. 65. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- (2000) *La naturaleza del espacio*. Barcelona: Editorial Arie..
- Sarmiento, Libardo y Moreno, Carlos (1990). *Narcotráfico y sector agropecuario en Colombia*. Revista de la Contraloría General de la República No. 226-227. Bogotá.
- Secretaría del Interior - Gobernación de Bolívar (1997) "Informe de la situación de Orden Público en el Sur del Departamento de Bolívar al Señor Gobernador Dr. Miguel Navas Meissen.". Cartagena de Indias - Colombia.
- Segato, Laura (2007) *La Nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de política de identidad*. Buenos Aires: Prometeo.
- Silva Colmenares, Julio (1977) *Los Verdaderos dueños del país. Oligarquía y monopolios en Colombia*. Bogotá: Fondo Editorial Suramérica.
- Smelser, Neil (1989) *Teoría del comportamiento colectivo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Solano, A. (2001). *Trayectoria de los Movimientos Sociales en Nariño período 1994-2000* (Tesis de Grado). Universidad de Nariño, Pasto, Colombia.
- Stern, Steve (ed.) (1999) *Los senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad, 1980-1995*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
- Suhner, Stephan (2002) *Resistiendo al olvido: Tendencias recientes del movimiento social y de las organizaciones campesinas en Colombia*, Bogotá, Taurus.
- Tamayo Acosta, Juan (1990) "La Teología de la Liberación" Ediciones de Cultura Hispánica. Madrid - España.
- Tarrow, Sidney (2004) *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.

- (2009) *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Segunda edición. Madrid: Alianza ensayo.
- Taussig, Michel (1990) *El diablo y el fetichismo de la mercancía. Parte II: las plantaciones del Valle del Cauca en Colombia*. Buenos Aires: Nueva Imagen. P. 61-18
- (2012) *Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje. Un estudio sobre el terror y la curación*. Popayán: Universidad del Cauca.
- Téllez Sánchez, Rafael Alcides (2011) *Dinámicas espaciales de la globalización y mutaciones regionales del desarrollo*. Equidad Desarrollo, julio-diciembre de 2011, pp. 87-108.
- Tilly, Charles (1978) *From Mobilization to Revolution*, New Jersey, Prentice-Hall.
- (1984) “Les origines du répertoire de l’action collective contemporaine en France et en Grande-Bretagne”, *Vingtième Siècle. Revue d’Histoire.*, No. 4, pp. 89-108.
- (2000) *Las desigualdades persistentes*. Ed. Manantial. Buenos Aires, Argentina.
- (2005) *Identities, boundaries & social ties*. Boulder, CO/Londres: Paradigm Publishers.
- Tirado Mejía, Alvaro (director científico y académico) (1989) *Nueva Historia de Colombia*. Bogotá: Editorial Planeta. Ocho tomos.
- Touraine, Alain (1973) *Production de la société*, Paris, Seuir.
- (1984) *Le retour de l’acteur*. Paris : Fayard.
- (1991) *Los movimientos sociales*, Buenos Aires: Almageesto.
- (1981) *The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- (1997) *¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes*. Madrid: PPC Editorial.
- y Fahrad Khosrokhavar (2000) *La recherche de soi*. Paris: Dialogue sur le Sujet Fayard
- (2005) *Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy*. Barcelona: Paidós.
- Trouillot, Michel-Rolph (2011). *Transformaciones globales. La Antropología y el mundo moderno*. Bogotá: Universidad del Cauca. CESO- Universidad de los Andes.
- Turner, Victor Witter (1988) *El proceso ritual. Estructura y antiestructura*. Madrid: Taurus Alfaguara

- (2005) *La selva de los símbolos: aspectos del ritual Ndembu*, Madrid: Siglo XXI
- Uribe, María Teresa (1988) “Determinantes sociales, políticos y culturales de la planificación de la región Rionegro-Nare. Medellín, CENICS- Universidad de Antioquia- CORNARE.
- Uribe, María Victoria (s.a.) *Etnohistoria de las comunidades andinas prehispánicas del sur de Colombia*.
- Urrea, Fernando; Guzmán, Alvaro; Hernandez, Jorge; Luna, Mario y Castillo, Luis Carlos (2010) *Etnicidad, Acción colectiva y resistencia: el norte del Cauca y el sur del Valle a comienzos del siglo XXI*. Cali: Universidad del Valle. p. 117-122.
- Ulloa, Astrid (2004) *La construcción del nativo ecológico*. Bogotá: ICANH-Colciencias.
- Vanegas, Gildardo y Rojas, Axel (2011) *Territorios negros en el norte del Cauca. Contexto político-organizativo*. Bogotá: OTE- Observatorio de Territorios Étnicos, Universidad Javeriana.
- Van Young, Eric (1991). *Haciendo historia regional, consideraciones metodológicas y teóricas*. San Diego: University of California.
- Vargas Velasquez, Alejo (1989) "Tres momentos de la violencia política en san Vicente del Chuchurí". Bogotá: Análisis Político ISSN: 0121-4705 ed: Editorial Uniliblos v.N. 8
- (2000) El Conflicto Armado Colombiano Hoy y sus Perspectivas Estudios y Documentos No. 42." Colombia, violencias, conflicto armado y democracia". Quetzaltenango: Ediciones Unesco/Muni-k'at
- Vasco, Luis Guillermo; Aranda, Misael y Dagua, Abelino (1998) *Guambianos: hijos del aroiris y del agua*. Bogotá: CEREC.
- (2001) *Entre selva y páramo*. Bogotá: ICANH.
- Vega, Renan (2002) *Gente Muy Rebelde*. Bogotá: Ediciones Pensamiento Critico. T.2 Indígenas, Campesinos y Protestas Agrarias.
- Velasco, Alvaro (1997) *La Cartografía Social*, Bogotá, Fundación Minga.
- (2006) Colombia: comunidades indígenas y negras raizales contra la guerra” Fundeminga (inédito).
- Vélez Ramírez, Humberto y Atehortua Cruz, Adolfo (1993) "Militares, Guerrilleros y Autoridad Civil, El caso del palacio de justicia" Universidad del Valle, Universidad Javeriana, Cali - Colombia.

- Vergara Gamarra, Jose R. (2007) *La economía del departamento del Cauca: concentración de tierras y pobreza*. Cartagena: Banco de la República. Centro de Estudios Económicos Reionales CEER. No. 95
- Vieco, Juan José (1991). *El proceso de colonización en Colombia durante el último decenio*. Bogotá: Conferencia Episcopal de Colombia.
- Virrarreal Moreno, Carlos A (2002) *Territorialidad, Administración y Poder en el Suroccidente Colombiano: Caso Pasto*: FINCIC.
- Von Thunen, Johann Heinrich (1829) *El Estado Aislado en relación con la agricultura y la economía nacional*. Paris.
- Wallerstein, Immanuel (1996) *Abrir las Ciencias Sociales*. Madrid: Siglo XXI Editores.
- Warman, Arturo (1972) *Los campesinos. Hijos dilectos del régimen*, México, Nuestro Tiempo.
- Wolf, Eric (1970) *Los campesinos*, Barcelona, Labor.
- Wright, Susan (1998) "La politización de la cultura": *Anthropology Today*, v. 14, No. 1, febrero de 1998, pp.
- Zambrano, Carlos Vladimir (1993) *Hombres de páramo y montaña*. Bogotá: ICAN – COLCULTURA.
- (2001) "Conflictos por la hegemonía regional. Un análisis del movimiento social y étnico del Macizo Colombiano" . En: Colombia *ISBN: ed: , v.1 , p.260 - 285 1*
- (2011) "La diversidad cultural, los derechos culturales y la gestión ciudadana" En *Virajes*. No. 13, enero-diciembre, pp. 183-201.
- Zuluaga, Francisco (1984) *Guerrilla y sociedad en el Patía*. Cali: Universidad del Valle.
- (1993) *Guerrilla y sociedad en el Patía. Una relación entre clientelismo político y la insurgencia social*. Cali: Facultad de Humanidades, Universidad del Valle.

Tabla de Mapas

Mapa 1. Ubicación de Colombia en América del Sur	72
Mapa 2. Ubicación de las regiones del Magdalena Medio y el Suroccidente Colombiano	72
Mapa 3. Relieve e Hidrografía del Magdalena Medio	94
Mapa 4. Relieve e Hidrografía del Suroccidente Colombiano	123
Mapa 5. Ubicación de Magdalena Medio en Colombia	170
Mapa 6. El Magdalena Medio Según el Gobierno Colombiano	171
Mapa 7. Región del Magdalena Medio según el PDPMM	172
Mapa 8. Presencia Paramilitar en el Magdalena	178
Mapa 9. Subregiones del Magdalena Medio	181
Mapa 10. El Sur de Bolívar en el Magdalena Medio	184
Mapa 11. Región del Magdalena Medio según el PIDMM	186
Mapa 12. Valle del Río Cimitarra	197
Mapa 13. Ubicación del Suroccidente Colombiano	205
Mapa 14. Macizo Colombiano o Nudo de Almaguer	206
Mapa 15. Nudo de los Pastos o Nudo de la Huaca	206
Mapa 16. El Suroccidente de Colombia	209
Mapa 17. El Gran Cauca (el antiguo Estado Soberano del Cauca)	212
Mapa 18. Motivos de lucha del Magdalena Medio	345
Mapa 19. Motivos de lucha en el Suroccidente de Colombia	350
Mapa 20. Movilización en el Magdalena Medio	359
Mapa 21. Recorridos de la gente en el Magdalena Medio	360
Mapa 22. Movilización en el Suroccidente Colombiano	364

Tabla de Cuadros

Cuadro 1 Extensión Territorial y Densidad de Población, Municipios del Sur de Bolívar	185
Cuadro 2. Municipios del Macizo colombiano por departamentos	210
Cuadro 3. Luchas sociales en la década de los 80	313
Cuadro 4. Tipos de programas propuestos en el PIDMM	329
Cuadro 5. Síntesis analítica de los episodios del movimiento social al movimiento popular, Sur de Bolívar, 1985 – 1998	344
Cuadro 6. Tabla analítica del Suroccidente Colombiano	347

